REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Febrero 26 de 2024: Al despacho el proceso contra **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0074 del 26 de enero de 2024 a la fecha NO se ha recibido respuesta alguna por parte de las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, ni del señor director y asesor jurídico del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio Meta, respecto a lo solicitado por el Juzgado Penal del Circuito de Villavicencio Meta en oficio No. 1061 respecto a que se mantenga privada de la libertad en prisión domiciliaria a la condenada, la cual purgará en la Calle 5 No. 14-57 Madrid Cundinamarca, 3112303665 y de igual manera, respecto a la documentación que establece el art. 471 del C.P.P., para resolver la libertad condicional invocada por la interna a través de apoderada judicial.

Una vez, analizadas las diligencias este Juzgado emitirá pronunciamiento sobre la posible libertad por pena cumplida en aras de no vulnerar los derechos constitucionales que le asisten a la condenada. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Febrero veintiséis (26) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0063

CUI:	**50006630014820198011 6**
NI:	**2024-0019**
Sentenciado:	**IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES**
Identificación:	**C.C. No. 1.001.588.563**
Sitio de Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA – INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2024** **DECRETA REHABILITACION DE PENAS ACCESORIAS.**

1.- OBJETO A DECIDIR

Procede el despacho a pronunciarse sobre el cumplimiento de la pena impuesta a **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563, quien se encuentra en prisión domiciliaria en la Calle 5 No. 14-57 de Madrid Cundinamarca, vigilada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – regional central.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 12 de octubre de 2019 y preacuerdo aprobado, el Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta con funciones de conocimiento mediante sentencia condenatoria del 28 de marzo de 2022, CONDENO a **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** a la pena principal de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISION Y MULTA DE DOS (2) SMLMV** como autora responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO** y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y la prohibición de acudir a centros carcelarios por el término de 5 años. NO impuso condena al pago de daños y perjuicios. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, art. 63, 38B del C.P. y Ley 750 de 2002, por ausencia de los requisitos objetivos y subjetivos. En vista que la condenada goza de la detención domiciliaria desde el 13 de octubre de 2019, sin informes de incumplimiento a dicha medida, CONCEDIÓ la prisión domiciliaria artículo 38G del C.P., previa suscripción de la diligencia de compromiso y caución de un (1) smlmv, debiendo purgar en la calle 5 14-57 en Madrid Cundinamarca, mismo sitio en donde ha purgado la mayor parte de su condena, por lo que se dispuso que se expidiera la respectiva orden de encarcelación dirigida al establecimiento carcelario que vigila su reclusión. La sentencia condenatoria cobró ejecutoria el 28 de marzo de 2022.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal Meta, mediante audiencias concentradas celebradas el 13 de octubre de 2019, **impuso medida de aseguramiento a la imputada consistente en detención preventiva en el Lugar de residencia – art. 307 literal A numeral 2º, en la Calle 12 D No. 44-86 barrio San Antonio de Villavicencio. Libró Boleta de Detención y Boleta de Traslado a Domicilio oficio SAP No. 289 ante el señor director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio Meta (firma recibido del 13/10/19 y recibido del Dg Villa Q Lucas del 16/10/19)**

Se emitió el oficio No. 1061 ante el señor director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario notificaciones@inpec.gov.co Facatativá Cundinamarca, en el cual se comunica que:

*"mediante sentencia No. 063 de fecha veintiocho (28) de marzo de 2022, concedió a **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **1,001,58,563 de Mecocli, Antioquia** la prisión domiciliaria conforme la ley 599 de 2000 artículo 38G del C.P.*

*Por lo tanto, le solicito mantener privada de la libertad por cuenta de ese centro carcelario en domiciliaria, la cual purgará en la **Calle 5 No. 14-57 Madrid, Cundinamarca, 311230 3665.***

Se emitió el oficio No. 999 del 10 de junio de 2022, el oficio dirigido al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad – reparto – Facatativá Cundinamarca, a través del cual se comunica lo decidido en sentencia condenatoria, indicándose que, *"el condenado actualmente se encuentra en Calle 5 14.57 Madrid Cundinamarca quedando a disposición. **Se deja constancia que hasta la fecha no han allegado la caución, por consiguiente, no se ha firmado la diligencia de compromiso**".*

Este Juzgado recibió el expediente el día 14 de junio de 2022 procedente del Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta y a través de auto de sustanciación No. 1085 del 21 de

noviembre de 2022 dispuso que sería el caso avocar por competencia el conocimiento del asunto de no ser porque la condenada no dio cumplimiento con lo ordenado en sentencia condenatoria, como quiera que no suscribió diligencia de compromiso, ni prestó caución prendaria y **no se encuentra a disposición de ningún establecimiento carcelario del país**, por lo que, **se remitió el expediente digitalizado al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Acacias Meta – reparto – por competencia**.

Luego se recibe el expediente el día 27 de marzo de 2023 procedente del Centro de Servicios Administrativos de Acacias Meta y se observa que el homólogo 2º, mediante D.C. No. 003-2023 comisionó al Juzgado Penal Municipal de Madrid Cundinamarca, con el fin notificar el auto No. 0287 de fecha 13 de febrero de 2023, recibir caución y suscribir diligencia de compromiso para materializar la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P., concedida por el fallador a la condenada, quien descuenta pena en prisión domiciliaria en la calle 5 No. 14-57 en Madrid Cundinamarca.

Por lo tanto, el Juzgado Penal Municipal de Madrid Cundinamarca, ordenó dicho trámite mediante auto del 21 de marzo de 2023, por lo que la sentenciada prestó caución de UN (1) SMLMV mediante póliza judicial 17-53-101012844 del 24 de marzo de 2023 y suscribió diligencia de compromiso el 27 de marzo de 2023.

Una vez revisado minuciosamente el proceso **NO SE EXPIDIÓ BOLETA DE ENCARCELACIÓN y realizada la consulta en el aplicativo PPL INPEC LA CONDENADA NO REGISTRA A CARGO DE NINGUN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DEL PAIS**.

Por lo anterior, a través del auto de sustanciación No. 0487 del 27 de abril de 2023 este Juzgado, realizó nuevamente la devolución del expediente digitalizado al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Acacias Meta – reparto -, **con el fin de que se realicen los respectivos trámites de reseña y traslado de la infractora ante el INPEC competente**.

El homólogo 2º de Acacias Meta, mediante auto del 18 de mayo de 2023, dispuso no avocar conocimiento del proceso en razón a que *"obra el oficio 1061 del 10 de junio de 2022, expedido por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta, para la reclusión domiciliaria concedida en sentencia condenatoria dirigida al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Facatativá y Cundinamarca, en las constancias de envío por correo electrónico aparece que la aludida misiva fue remitida al e-mail del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio Meta, para su trámite",* como también se indicó en dicho auto que la condenada cumple pena en el lugar de residencia ubicada en la calle 5 número 14 – 57 en Madrid Cundinamarca, motivo por el cual, ordena la remisión del expediente por competencia a esta agencia judicial, advirtiéndose que obra la solicitud de libertad condicional pendiente por resolver.

Una vez, se verifica minuciosamente cada uno de los archivos que conforma el expediente, **NO se halló la boleta de encarcelación a través de la cual se ordene el traslado de la condenada al domicilio ubicado en la calle 5 No. 14-57 en Madrid Cundinamarca, como tampoco la condenada se encuentra a cargo de ningún establecimiento carcelario a nivel nacional.**

Por consiguiente, PREVIO A AVOCAR CONOCIMIENTO del presente asunto, este Juzgado, a través de auto de sustanciación No. 0884 del 1 de septiembre de 2023 dispuso oficiar al señor Director y asesor jurídico del EPMSC VILLAVICENCIO, con el fin de que informen respecto a los trámites correspondientes respecto a la reclusión de la condenada en prisión domiciliaria – art. 38G del C.P. – sustituto penal otorgado por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta en sentencia del 28 de marzo de 2022, ordenándose que la sentenciada purgue la pena de prisión en el inmueble ubicado en la Calle 5 No. 14-57 en Madrid Cundinamarca y se solicitó que expidiera una certificación en la que se aclare desde

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

que fecha inició la condenada el descuento de la pena de prisión impuesta en prisión domiciliaria.

También, se ordenó oficiar al Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta, con el fin de que allegue la Boleta de Encarcelación de Prisión Domiciliaria, por la cual se ordenó el traslado de la condenada **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563, hacia el domicilio ubicado en la Calle 5 No. 14- 57 en Madrid Cundinamarca para el cumplimiento de la pena impuesta, lo cual fue dispuesto en sentencia condenatoria del 28 de marzo de 2022 y así mismo informe ante cual Centro Carcelario fue reseñada y legalizada la prenombrada.

En efecto, se recibe a través del correo institucional el 12 de septiembre de 2023 procedente de la Oficina Jurídica Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad Carcelario de Villavicencio (tramites.villavo@inpec.gov.co), el oficio 131.CPMSVILL AJUR-3113 mediante el cual el señor director del mencionado penal informa:

*"Que verificado el aplicativo SISIPEC II – Sistematización integral del Sistema Penitenciario y Carcelario del INPEC, la PPL **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1001588863, N.U 1067872 con fecha de captura 10/12/2019; por el delito de TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO, con número de proceso n50006630014820198011600N, se encuentra a disposición del **JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUAMAL-META** y registra BAJA POR FUGA desde la fecha 16/9/2020; noticia criminal **N°500016300131202080O** (…)".*

Adjunta: Formato Único de Noticia Criminal FPJ-2- de fecha 04/09/2020, Denuncia Fuga de Presos Art. 448 C.P., en el cual se indica: *"(…) el Dragoneante Camilo Gaitán Beltrán, funcionario encargado de las detenciones y prisiones domiciliaria con vigilancia electrónica del EPMSCVILL, le paso revista los días 23/07/2020, 27/07/2020 y 10/08/2020 en la residencia asignada para cumplir con la medida impuesta, encontrando que el señor GUTIERREZ AVILEZ IRIS DEL CARMEN, no se encontraba en el domicilio asignado para cumplir con su prisión domiciliaria desconociéndose su paradero actual (…)".*

Se recibe a través del correo institucional el 23 de enero de 2024, el memorial suscrito por la apoderada judicial de la condenada – Dra. Mayra Luz Flórez Bermúdez, quien reitera la solicitud de libertad condicional art. 64 C.P., a su prohijada quien se encuentra actualmente cumpliendo pena en PRISION DOMICILIARIA en la Calle 5 No. 14-57 barrio Serrezuela en Madrid Cundinamarca. Adjunta: Consulta registro SISBEN de la condenada, recibo de servicio público, certificación de residencia expedida por la JAC barrio Serrezuela en Madrid Cundinamarca, oficio de fecha 22 de septiembre de 2008 expedido por acción social, Registro Civil de Nacimiento de Wilmar Conde Gutiérrez, Marlon Ordoñez Gutiérrez, Mayerly Ordoñez Gutiérrez, Acta declaración Extrajuicio rendidas ante Notaría de los señores Rafael María Rivera Bertel y Ernestina López Santana.

Dentro de la documentación aportada, NO SE ADJUNTO PODER, sin embargo, obra en la documentación que reposa en el expediente la solicitud de libertad condicional de fecha 17 de enero de 2023 y PODER especial, amplio y suficiente, otorgado por la sentenciada **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563 a la Dra. Mayra Luz Flórez Bermúdez identificada con C.C. No. 1.116.777.182 de Arauca y T.P. No. 256.949 del C.S.J., para que asuma su defensa técnica dentro del asunto en referencia.

Este Juzgado a través del auto de sustanciación No. 0074 del 26 de enero de 2024, avocó por competencia el conocimiento del asunto y respecto a lo informado por las directivas de la CPMS VILLAVICENCIO en oficio 131.CPMSVILL AJUR-3113 mediante el cual el señor director del mencionado penal informó de las transgresiones cometidas por la interna los días 23/07/2020, 27/07/2020 y 10/08/2020, lo que dio lugar a que se instaurara en su contra denuncia por FUGA DE PRESOS, por lo que esta agencia judicial se abstuvo de correr el traslado del art. 477 del C.P.P., a la condenada, como quiera que el Juzgado Penal del

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Circuito de Acacias Meta con funciones de conocimiento en sentencia condenatoria del 28 de marzo de 2022 indicó: "… En vista que la condenada goza de la detención domiciliaria desde el 13 de octubre de 2019, sin informes de incumplimiento a dicha medida, CONCEDIÓ la prisión domiciliaria artículo 38G del C.P…", y así mismo comunicó a través de oficio No. 1061 al señor director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Facatativá Cundinamarca notificaciones@inpec.gov.co , lo dispuesto en el fallo referido y solicitó: "mantener privada de la libertad por cuenta de ese centro carcelario en domiciliaria, la cual purgará en la Calle 5 No. 14-57 Madrid, Cundinamarca, 311230 3665.

Por lo anterior, se ordenó oficiar la Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – y al señor director y asesor jurídico de la CPMS VILLAVICENCIO META, con el fin de reiterar los solicitado por el Juzgado Penal del Circuito de Villavicencio Meta en oficio No. 1061 respecto a que se mantenga privada de la libertad en prisión domiciliaria a la condenada IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES identificada con C.C. No. 1.001.588.563, la cual purgará en la Calle 5 No. 14-57 Madrid, Cundinamarca, 311230 3665.

Aunado a lo anterior, se requirió que se efectuaran los trámites correspondientes a la reclusión en prisión domiciliaria de la prenombrada y así mismo remita de manera inmediata la cartilla biográfica de la interna y la documentación prevista en el art. 471 del C.P.P. y resolver la posible libertad condicional invocada por la condenada a través de apoderada judicial.

En la presente oportunidad procede este despacho a pronunciarse sobre la posible libertad por pena cumplida en aras de no vulnerar derechos constitucionales que le asisten al condenado

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de libertad condicional impetrada por la condenada conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgado pena bajo el sustituto de prisión domiciliaria en la Calle 5 No. 14-57 en Madrid Cundinamarca vigilada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – regional central, conforme los Acuerdos

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

Conforme a los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2019, **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** fue investigada y condenada bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2. Sobre la Prisión Domiciliaria

En el presente caso objeto de estudio, se tiene que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0074 del 26 de enero de 2024 a la fecha NO se ha recibido respuesta alguna por parte de las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, ni del señor director y asesor jurídico del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio Meta, respecto a lo solicitado por el Juzgado Penal del Circuito de Villavicencio Meta en oficio No. 1061 respecto a que se mantenga privada de la libertad en prisión domiciliaria a la condenada, la cual purgará en la Calle 5 No. 14-57 Madrid Cundinamarca, 3112303665 y de igual manera, respecto a la documentación que establece el art. 471 del C.P.P., para resolver la libertad condicional invocada por la interna a través de apoderada judicial.

Por consiguiente, no se tiene la información de los trámites correspondientes a la reclusión en prisión domiciliaria de la condenada, reseña y visitas periódicas en el lugar de residencia ubicado en la Calle 5 No. 14-57 en Madrid Cundinamarca.

Por lo tanto, se tiene que desde que el Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta con funciones de conocimiento mediante sentencia condenatoria del 28 de marzo de 2022, CONCEDIÓ la prisión domiciliaria artículo 38G del C.P., el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, NO ha realizado control alguno, ni las visitas al domicilio que fijo la condenada, se itera, en la Calle 5 No. 14-57 en Madrid Cundinamarca.

Sin embargo, este Juzgado nota con preocupación la situación que se está presentando con los domiciliarios, no solo en los municipios a los que se les vigila la pena (Circuito de Funza, Villeta y Facatativá) sino a nivel nacional, en la que no existe un control de vigilancia de parte de los funcionarios del INPEC, debido a diferentes situaciones, como el personal, la ubicación, la congestión vehicular, el presupuesto, ahora el COVID 19 etc., que han generado una vigilancia deficiente. A pesar del escaso personal con que contamos (asistente social, asistente administrativo, secretaria y sustanciador) no se pudo ordenar la visita debido a las normas de salubridad impuestas por la OMS, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura. Complementa lo anterior que de parte del INPEC están cerrando las cárceles a nivel departamental creando una congestión sobre la vigilancia de los implicados que se encuentren con este mecanismo sustitutivo como se presentó recientemente con la Cárcel de Zipaquirá y Funza cuya responsabilidad recae en las de Bogotá, o actualmente en la de Villeta ya que son un volumen alto de personas que se encuentran con este mecanismo sustitutivo.

Al respecto se trae a colación reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que señaló:

*"…**2.4.** Las premisas normativas antes mencionadas, así como los antecedentes particulares del caso sometido a consideración de la Corte, permiten deducir las siguientes reglas:*

i) El estatus jurídico de detenido lo adquiere el procesado en virtud de la respectiva orden judicial, una vez la misma se materialice, lo que se aviene a lo dispuesto en el art. 15

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

de la Constitución Política sobre la reserva judicial para la afectación de la libertad. Esa condición no varía por el hecho de que la privación de la libertad se materialice en su domicilio o en un centro carcelario. La condición de detenido o privado de la libertad se mantiene hasta que la autoridad competente disponga lo contrario, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley.

ii) Por tanto, si a una persona privada de la libertad en su domicilio se le atribuye el incumplimiento de las obligaciones que debe cumplir para mantener ese beneficio, se abre la posibilidad del cambio de sitio de reclusión, sin que ello implique que su situación jurídica – de detenido – varíe automáticamente, pues ello solo puede ocurrir por dos razones: (a) que un juez disponga su libertad, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley; o (b) que se demuestre que el detenido domiciliariamente se sustrajo al régimen de privación de la libertad.

iii) Además, la condición de detenido y la privación de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria no están supeditadas a la realización de las correspondientes visitas de control a cargo del INPEC, porque aquellas son labores de «apoyo» encaminadas a garantizar el cumplimiento de la condena en el domicilio[4]. (…)

Más adelante complemento:

"…Además, como se dijo en páginas precedentes, las trasgresiones al régimen de la prisión domiciliaria imponen la inminente privación de la libertad en centro carcelario, pero de no disponerse ésta, habrá de entenderse que el condenado continúa purgando la condena en el domicilio fijado, siempre que no se acredite su evasión del mismo…"[5]

En consecuencia, este Juzgado procederá a emitir pronunciamiento sobre la posible libertad por pena cumplida de la condenada.

4.3. Sobre la Libertad por pena cumplida

Conforme a las pruebas allegadas dentro del expediente, la condenada **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** fue capturada el **12 de octubre de 2019** hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **53 meses y 8 días de la pena impuesta**

La sentenciada NO cuenta con redenciones de pena reconocidas.

Así las cosas, encuentra este Despacho que la interna hasta la fecha acumula un total de **53 meses y 8 días,** lo que significa que cumple la pena impuesta de **54 MESES DE PRISIÓN** el próximo **19 DE MARZO DE 2024.**

En efecto, se tiene que, del cumplimiento físico de la pena principal de **54 meses de prisión**, impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta con funciones de conocimiento mediante sentencia condenatoria del 28 de marzo de 2022, **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** cumple la pena de prisión impuesta a partir del día **19 DE MARZO DE 2024**, fecha desde la cual se concederá la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.

Acorde con lo anterior y de conformidad con lo normado en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) la Secretaría del Despacho oficiará a las entidades a las que se les comunicó la sentencia y se cancelarán las órdenes de captura que en su contra pudiesen existir por cuenta del presente asunto, rindiendo los informes de ley.

---

4 CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 38C. CONTROL DE LA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad **con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario** (Inpec).
El Inpec deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le **informará al Despacho Judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena**.

5 CSJ T Radicación N° 106432 (03-09-19) M.P. Dra Patricia Salazar Cuellar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva **pero sólo a partir del 19 de marzo de 2024**

Ahora bien, en lo que respecta a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563. En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.

En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las presentes diligencias al Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta con funciones de conocimiento, para su archivo definitivo.

La libertad se hará efectiva para ante las directivas del INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – regional central - **pero sólo a partir del 19 DE MARZO DE 2024, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDA POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERA DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

4.4. Sobre la notificación de la condenada y apoderada judicial.

Teniendo en cuenta que **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 5 No. 14- 57 en Madrid Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión a la sentenciada a través del correo electrónico mayerlygutierrez072@gmail.com

Se ordena por la secretaría del Juzgado, **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión a la Dra. Mayra Luz Flórez Bermúdez – apoderada judicial de la sentenciada, a través del correo electrónico mayraf6@hotmail.com / mayralf62@hotmail.com

Por la Secretaría del Juzgado, líbrese la **BOLETA DE LIBERTAD** a favor de **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563, **pero solo a partir del 19 de marzo de 2024** y ante las directivas del **INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – regional central -, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDA POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERA DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[6], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[7]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores

---

[6] Ibídem.
[7] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[8]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER que la condenada **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563, acumula físicamente un total de **53 meses y 8 días**, motivo por el cual cumple a partir del **19 DE MARZO DE 2024** con el total de la pena de **54 meses de prisión** impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta con funciones de conocimiento mediante sentencia condenatoria del 28 de marzo de 2022,

SEGUNDO. - CONCEDER a IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES, LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, **pero solo a partir del 19 DE MARZO DE 2024**, conforme a lo consignado en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

CUARTO. - Ahora bien, en lo que respecta a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** identificada con C.C. No. 1.001.588.563, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

[8] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

QUINTO. - Teniendo en cuenta que **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 5 No. 14- 57 en Madrid Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión a la sentenciada a través del correo electrónico mayerlygutierrez072@gmail.com

SEXTO.- Se ordena por la secretaría del Juzgado, **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión a la Dra. Mayra Luz Flórez Bermúdez – apoderada judicial de la sentenciada, a través del correo electrónico mayraf6@hotmail.com / mayralf62@hotmail.com

SEPTIMO. - ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra la referida sentenciada, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES**, en razón de este proceso.

OCTAVO. - En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las presentes diligencias al Juzgado Penal del Circuito de Acacias Meta con funciones de conocimiento, para su archivo definitivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y de Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

BOLETA DE LIBERTAD No. 0019

FECHA	**VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE 2024**

Señor Director: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – Regional Central-.**
Sírvase poner en libertad a: **IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES.-**
Cédula de Ciudadanía No**. 1.000.588.563 EXPEDIDA EN NECOCLI ANTIOQUIA.-**
Lugar de nacimiento: **ACACIAS META.-**
Fecha de Nacimiento: **22 DE MAYO DE 1986. -**
Delitos: **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO.-**
Estado Civil: **N/A. -**
Profesión u oficio: **N/A. -**
Nombres de los padres: **CARLOS GUTIERREZ Y EDID AVILES.-**
Nombre del conyugue: **N/A.-**
Motivo de libertad: **LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2024.-**
CUI: **50006630014820198011 6 -.**
Número Interno: **2024-0019.-**
Autoridades que conocieron: **CUI 50006630014820198011 6 – FISCALIA 28 SECCIONAL DELEGADA, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUAMAL META CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS, JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACIAS META CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, JUZGADO 2º EPMS ACACIAS META Y ESTE ESTRADO JUDICIAL 2024-0019.-**
OBSERVACIONES: ESTA LIBERTAD SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2024, SIEMPRE Y CUANDO LA SENTENCIADA IRIS DEL CARMEN GUTIERREZ AVILES, NO SEA REQUERIDA POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN. –

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 8 de 2024: Al despacho el proceso contra **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** identificado con C.C. 80.278.297 informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 097 del 7 de febrero de 2024, se emite por parte del Asistente Social el Informe de Asistencia Social de la Valoración de fecha 26 de febrero de 2024, practicada para verificar aspectos habitacionales, la seguridad del entorno social y familiar, para resolver la solicitud de Prisión Domiciliaria artículo 38 G del C.P., invocada por el condenado. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo Ocho (8) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0068

ACUMULADO CUI.	**258756000409201900169 - 683076000142201400969**
Número Interno:	**2021-0013**
Sentenciado:	**ARNULFO FERNANDEZ RUIZ**
Delito:	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA – HOMICIDIO SIMPLE**
Reclusión:	**CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VILLETA CUNDINAMARCA**
Solicitud:	**Solicitud Prisión Domiciliaria – artículo 38G del C.P.**
Decisión:	**NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA - artículo 38G del C.P. (no acredita arraigo)**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a pronunciarse respecto a la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria dispuesta en el artículo 38G del C.P., elevada por el condenado **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** identificado con C.C. 80.278.297, quien actualmente se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Radicado CUI 68307600014220140096 9 / 2023-0151

Por hechos ocurridos el **13 de mayo de 2014 y agosto de 2018** y allanamiento a cargos, el Juzgado 1º Penal Municipal con funciones mixtas de Girón, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2022, **CONDENÓ** a **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** a la pena de **TRES (3) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN**, como autor responsable del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA**, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de pena principal de prisión. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 15 de diciembre de 2022.

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias mediante auto de sustanciación No. 0474 del 21 de abril de 2023 y solicitó ante el señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, que una vez cesen los motivos por los cuales el condenado se encuentra descontando pena en ese centro carcelario, se deje a disposición por el presente asunto.

Radicado CUI 25875600040920190016 9 / 2021-0013

Por hechos ocurridos **desde el 20 de noviembre de 2019** y preacuerdo aprobado el Juzgado Penal del Circuito de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia del 29 de julio de 2020, CONDENÓ a **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** a la pena principal de **CIENTO DIEZ (110) MESES DE PRISIÓN** como autor responsable del delito de **HOMICIDIO SIMPLE**, y a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal de prisión. NEGÓ al infractor la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria del artículo 38 y 38B del C.P., así como la prisión domiciliaria del Decreto Ley 546 de 2020. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 29 de julio de 2020.

ARNULFO FERNANDEZ RUIZ descuenta pena dentro del presente asunto desde el día **20 de noviembre de 2019**[1]

Este Juzgado AVOCÓ el conocimiento del asunto por auto de sustanciación No. 0473 del 14 de enero de 2021 y durante el curso del proceso ha reconocido redención de pena en un total de **12 meses y 14.75 días** (A.I. 0300 del 12-05-2021 reconoce 5 meses, 12.25 días); (A.I. No. 0011 del 12-01-2022 reconoce 2 meses, 1.5 días); (A.I. No. 0213 del 15-04-2022 reconoce 1 mes, 29 días); (A.I. No. 0563 del 24-10-2022 reconoce 2 meses,1.5 días); (A.I. No. 0070 del 03-02-2023 reconoce 1 mes, 0.5 días).

A través de auto interlocutorio No. 0314 del 26 de junio de 2023, este despacho resolvió acumular jurídicamente las penas impuesta en las sentencias radicado CUI 25875600040920190016 9 y CUI 68307600014220140096 9, asignando como nuevo quantum punitivo **131 meses de prisión y fijó como pena accesoria de inhabilitación**

[1] Boleta No. 09 Encarcelación – archivo 003 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

para el ejercicio de derechos y funciones públicas el mismo término de la pena principal acumulada.

Esta agencia judicial mediante auto interlocutorio No. 0544 del 4 de diciembre de 2023, reconoció al condenado redención de pena de 3 meses y 6.5 días y por auto interlocutorio No. 0534 del 5 de diciembre de 2023, improbó el beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas al sentenciado.

Previo a resolver de fondo la solicitud de prisión domiciliaria prevista en el art. 38G del C.P., este Juzgado por auto de sustanciación No. 097 del 7 de febrero de 2024, ordenó al asistente social del Juzgado para que realizara por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, conforme a la declaración extrajuicio ante la Notaría Única de Villeta, arrimada a los documentos en la cual el señor Fernando Luna Alarcón quien dice ser amigo del infractor afirma que está dispuesto a recibirlo en su granja la ilusión ubicada en Villeta Cundinamarca en la Vereda Salitre Blanco y que de ser concedida será el encargado de acogerlo junto a su núcleo familiar.

En esta oportunidad ingresa al despacho para resolver de fondo sobre la solicitud de prisión domiciliaria – art. 38G del C.P., con el Informe de Valoración de Asistencia Social emitido el 26 de febrero de 2024.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1. Competencia

En razón a la fecha de los hechos que dieron origen al proceso que se estudia – **13 de mayo de 2014, agosto de 2018 y 20 de noviembre de 2019** - se tiene que la actuación se

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

surtió de conformidad con el Código Penal –*Ley 599 de 2000* - y el Código de Procedimiento Penal –*Ley 906 de 2004*-, luego la competencia funcional de este juzgado está determinada por los numerales 1º y 5º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004.

Toda vez que condenado se encuentra privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA es competente este juzgado en conocer, vigilar la pena impuesta así como el de decidir sobre las peticiones radicadas por el interno conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

4.2. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA

Con la documentación allegada, se adjunta el memorial suscrito por el condenado **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ**, a través del cual solicita que se conceda el beneficio establecido en la Ley 599 de 2000, adicionada por la Ley 1709 de 2014 art. 38 G.

Se adjunta, el Acta de declaración Extrajuicio rendida ante la Notaría Única del Circulo de Villeta Cundinamarca, el día 10 de enero de 2024 por el señor Fernando Luna Alarcón identificado con C.C. No. 80.354.373 (amigo del condenado), quien manifestó que está dispuesto a recibirlo en su Granja La Ilusión ubicada en Villeta Cundinamarca, en la Vereda Salitre Blanco y se compromete a ver por el condenado económicamente mientras cumple y termina su condena.

Previo a resolver de fondo la solicitud de prisión domiciliaria invocada por el infractor, este Juzgado por auto de sustanciación No. 097 del 7 de febrero de 2024, ordenó al asistente social del Juzgado para que realizara por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en el referido inmueble.

Por consiguiente, se emite el Informe de Valoración de Asistencia Social en fecha 26 de febrero de 2024.

4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.3.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [5].

---

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

[5] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA – HOMICIDIO SIMPLE (acumulados)** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*
>
> ***PARÁGRAFO****. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> *"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.* ***No se concederán****; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión;* ***ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo****, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*
>
> ***Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos*** *contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; …"*

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** como **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA – HOMICIDIO SIMPLE (acumulados)**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." *Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[6]

4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

> ***"****(…)* ***Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*
>
> *Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

> *"(…)* ***Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor****:* ***Artículo 38G.*** *La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(…)"*

[6] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

> ***Artículo 38G****, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.*
>
> ***Parágrafo****. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

> ***"(…) Artículo 23.*** *Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:* ***Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.*** *Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
>
> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)"* ***(Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena acumulada impuesta al condenado, esto es, **131 meses de prisión**, según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponde a **SESENTA Y CINCO (65) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**

ARNULFO FERNANDEZ RUIZ ha estado privado de la libertad **desde el 20 de noviembre de 2019**[7] hasta la fecha, lo que implica el interno ha cumplido físicamente **52 meses y 10 días**

Adicional a la pena física cumplida, el sentenciado cuenta con redenciones de pena de **17 meses y 1.25 días** reconocidas por este Juzgado así:

- Auto interlocutorio No. 0300 del 12-05-2021 reconoce 5 meses, 12.25 días
- Auto interlocutorio No. 0011 del 12-01-2022 reconoce 2 meses, 1.5 días
- Auto interlocutorio No. 0213 del 15-04-2022 reconoce 1 mes, 29 días
- Auto interlocutorio No. 0563 del 24-10-2022 reconoce 2 meses, 1.5 días
- Auto interlocutorio No. 0070 del 03-02-2023 reconoce 1 mes, 0.5 días
- Auto interlocutorio No. 0544 del 04-12-2023 reconoce 3 meses, 6.5 días
- Auto interlocutorio No. 042 del 07-02-2024 reconoce 40 días

De la suma de las anteriores cifras, da como resultado que el interno ha purgado un total de **SESENTA Y NUEVE (69) MESES Y ONCE PUNTO VEINTICINCO (11.25) DÍAS** de la pena de principal impuesta.

[7] Boleta No. 09 Encarcelación – archivo 003 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Al analizar la norma sobre el primer requisito, factor objetivo, se tiene que el condenado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta de **131 meses** por lo que la mitad sería **65 meses y 15 días**, por lo tanto, el condenado **CUMPLE con el factor objetivo**.

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Se observa en el Acta de declaración Extrajuicio rendida ante la Notaría Única del Circulo de Villeta Cundinamarca, el día 10 de enero de 2024 por el señor Fernando Luna Alarcón identificado con C.C. No. 80.354.373 (amigo del condenado), quien manifestó que está dispuesto a recibirlo en su Granja La Ilusión ubicada en Villeta Cundinamarca, en la Vereda Salitre Blanco y se compromete a ver por el condenado económicamente mientras cumple y termina su condena.

Previo a resolver de fondo la solicitud de prisión domiciliaria invocada por el infractor, este Juzgado por auto de sustanciación No. 097 del 7 de febrero de 2024, ordenó al asistente social del Juzgado para que realizara por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en el referido inmueble.

Por lo tanto, se emite el Informe de Valoración de Asistencia Social en fecha 26 de febrero de 2024 en el cual se expone:

“(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

Los días 9 al 19 de febrero de 2024, se estableció diálogo dirigido a llevar a cabo la diligencia de visita domiciliaria -vía remota, número 3124354680. Se trata del número celular del señor FERNANDO LUNA ALARCON, administrador de la Granja La Ilusión, Km. 7 vía Villeta – Útica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Al señor LUNA ALARCON le fue explicada la necesidad de ampliar la información del lugar donde pretendía continuar purgando pena el señor condenado ARNULFO FERNÁNDEZ RUÍZ, señalándole que era requerido profundizar en las condiciones habitacionales concreta de aspectos como alimentación, trabajo y en general, conocer en qué condiciones el señor condenado residiría en ese lugar.

Es así que el señor entrevistado manifestó que él no residiría con el señor condenado, que en la Granja La Ilusión se contaba con espacios adecuados de vida y que el señor condenado trabajaría dentro del lugar para suplir sus necesidades básicas.

Al señor FERNANDO LUNA ALRACÓN se le solicitó poder llevar a cabo una entrevista para contar con información general de la granja, aspectos legales de la empresa, así como establece en donde se instalaría al señor ARNULFO FERNÁNDEZ RUÍZ, cuánto devengaría, sus horarios de trabajo y como sería el tema de la alimentación entre otros aspectos fundamentales.

El señor entrevistado, manifestó en varias oportunidades encontrarse ocupado para atender la diligencia. Así mismo, el aseveró que remitiría documentos actualizados porque enviaron un documento de 2012 que ameritaba su confirmación.

Sin embargo, no se logró posteriormente generar dicha comunicación, el señor LUNA ALARCON no remitió ningún documento que acreditara su calidad dentro de tal proyecto agropecuario, como tampoco respecto a la granja en sí.

Al señor entrevistado se le recordó varias veces que la visita era un requisito para estudiar la posibilidad de concesión de la prisión domiciliaria a favor de ARNULFO FERNANDEZ RUÍZ.

Ante la nula comunicación con la granja, a través de la Oficina Jurídica del CPMS VILLETA, también se solicitó apoyo para que el señor condenado se comunicara con el administrador de la finca y se llevara a cabo la visita domiciliaria.

*Finalmente, no se atendió la visita domiciliaria, puesto que ya no se volvieron a atender las llamadas y después de 10 días de espera se concluyó que en realidad el condenado señor ARNULFO FERNÁNDEZ RUÍZ, por el momento **NO** cuenta con un grupo familiar de acogida que con él se comprometa y que garantice condiciones de vida y bienestar, frente a una eventual prisión domiciliaria (…)".*

Por consiguiente y a pesar de que el condenado aportó la documentación tendiente a probar su arraigo social y familiar, este despacho, no encontró la acreditación del mismo y conforme a lo expuesto en el Informe de Asistencia Social elaborado por el Asistente Social de este Juzgado, no se emitió un concepto por el cual se determine esencialmente y por el cual se haya probado que realmente el condenado **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** cuente con un núcleo familiar, ni un lugar de domicilio permanente y en el que pueda ser recibido para continuar purgando la pena de prisión impuesta en un domicilio, conforme a lo expuesto en el cual se concluyó:

> *"(…) Finalmente, no se atendió la visita domiciliaria, puesto que ya no se volvieron a atender las llamadas y después de 10 días de espera se concluyó que en realidad el condenado señor ARNULFO FERNÁNDEZ RUÍZ, por el momento **NO** cuenta con un grupo familiar de acogida que con él se*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *comprometa y que garantice condiciones de vida y bienestar, frente a una eventual prisión domiciliaria* (…)".

En consecuencia, no se observan los suficientes medios de convicción que permitan dar un sustento y por lo cuales se pruebe que el condenado si cuenta con un arraigo familiar y social.

Ahora bien, la H. Corte Suprema de Justicia ha dicho que se debe entender por tal concepto:

> "Ahora, la Sala[8] ha definido el arraigo como «el establecimiento de una persona de manera permanente en un lugar, con ocasión de sus vínculos sociales, determinados, por ejemplo, por la pertenencia a una familia, a un grupo, a una comunidad, a un trabajo o actividad, así como por la posesión de bienes[9]…».

En otro aparte jurisprudencial dijo:

> "la expresión arraigo, proveniente del latín ad radicare (echar raíces), supone la existencia de un vínculo del procesado con el lugar donde reside, lo cual se acredita con distintos elementos de juicio, entre otros, tener una residencia fija y estable, vivir en ella junto con la familia y estar presto a atender el requerimiento de las autoridades".

Por lo tanto, el condenado **NO cumple con este requisito.**

4.6. CONCLUSIÓN

En ese orden de ideas y en vista de que no se satisfacen los presupuestos previstos en el artículo 38G del C.P., respecto a que no se acreditó el arraigo familiar del condenado, el Despacho negará la sustitución de la pena de prisión formal por la domiciliaria al interno **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ**

En vista de que **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** se encuentra privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por la secretaria del Juzgado **COMISIONAR** a las directivas de dicho penal con el fin de **NOTIFICAR** personalmente al sentenciado el contenido de la presente decisión.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

---

[8] CSJ. SP, 3 feb. 2016, rad 46647

[9] Sala de Casación Penal, M.P. Fernando León Bolaños Palacios, SP18912-2017, Radicación N° 46930, 15 de noviembre 2017.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[10], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la

[10] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[11]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[12]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6.- DECISIÓN

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA,**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER que el interno **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** identificado con C.C. 80.278.297 acumula por tiempo físico descontado y redenciones de pena reconocidas en un total de **69 meses y 11.25 días**

[11] CSJ T **102248**
[12] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SEGUNDO. – NEGAR al condenado **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** identificado con C.C. 80.278.297, la concesión de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión contemplada en el artículo 38G del C.P., por las razones expuestas en este proveído.

TERCERO. - En vista de que **ARNULFO FERNANDEZ RUIZ** se encuentra privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por la secretaria del Juzgado **COMISIONAR** a las directivas de dicho penal con el fin de **NOTIFICAR** personalmente al sentenciado el contenido de la presente decisión.

CUARTO. - REMITIR copia del presente auto al director de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, para que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Febrero 29 de 2024: Al despacho el proceso contra **YEISON BAUTISTA ACUÑA** identificado con C.C No. 80.205.938, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0030 del 24 de enero de 2024, se recibe a través del correo institucional el 8 de febrero de 2024 la documentación emitida por las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, para el estudio de la libertad condicional del infractor.

Aunado a lo anterior informo, que se recibe a través del correo institucional informes de novedad suscritos por el director del Centro de Reclusión Penitenciaria y Carcelario Virtual, a pesar de que tenía conocimiento del cambio de domicilio del condenado.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Febrero veintinueve (29) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0069

ACUMULADO CUI:	**11001310401720050015 4** **11001400400320050040 1** **11001310403320050012 1**
NI:	**2018-0068**
Condenado:	**YEISON BAUTISTA ACUÑA**
Identificación:	**80.205.938**
Delito:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO SUCESIVO Y HOMOGÉNEO – HOMICIDIO, FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO – HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO EN CONCURSO HETEROGENO DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL (ACUMULADOS)**
Sitio de Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA (vigilancia electrónica) – COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE BOGOTA D.C. – LA PICOTA –**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL** **SE ABSTIENE DE CORRER TRASLADO ART. 486 DE LA LEY 600 DE 2000**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Procede el despacho dar pronunciamiento a la libertad condicional del sentenciado **YEISON BAUTISTA ACUÑA** identificado con C.C No. 80.205.938, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Calle 17 A No. 17 B – 27 barrio El Sol en Funza Cundinamarca, vigilado por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

- **Sentencia radicado CUI 11001400400320050040 1**

Por hechos ocurridos el 23 de febrero de 2004, el Juzgado 3º Penal Municipal de Descongestión de Bogotá D.C., mediante sentencia del 20 de septiembre de 2006 condenó

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

YEISON BAUTISTA ACUÑA (y otro[1]) a la pena principal de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISION** como coautor responsable de delito de **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO SUCESIVO Y HOMOGÉNEO** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena de prisión. Condenó al infractor a pagar solidariamente la suma de un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) por conceptos de daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y ordenó librar orden de captura. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 4 de octubre de 2006

El homólogo 10º de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso mediante auto del 15 de junio de 2007.

El homólogo 4º de Descongestión de Bogotá D.C. mediante auto del 22 de octubre de 2010, avocó conocimiento del proceso y a través de providencia del 10 de octubre de 2011, dispuso la remisión de copias de la sentencia condenatoria al homólogo 2º de Acacias Meta, para el estudio de la acumulación jurídica de penas.

- **Sentencia radicado CUI 110013104033200500121**

Por hechos ocurridos el 4 de junio de 2003, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá D.C. de Descongestión, mediante sentencia del 17 de octubre de 2006, condenó a **YEISON BAUTISTA ACUÑA** como coautor responsable del delito de **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO EN CONCURSO HETEROGENEO CON PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL** a la pena principal de **SETENTE Y SEIS (76) MESES DE PRISION** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, por un periodo igual al de la pena principal impuesta. Condenó al infractor al pago de daños y perjuicios en la cuantía de cero punto sesenta y dos (0.62) smlmv. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria y ordenó librar orden de captura. Ofició a la fiscalía instructora para que entregue a JENNY CAROLINA REYES BARRERA o a quien autorice el valor de los daños a ella causados ($350.000) del título judicial número A 2266064 por valor de $475.000 pesos, el saldo de dicho documento y el contentivo en el título número A 3379612 se entregará al denunciante o a quien él autorice, quedando pendiente $250.000 pesos que recibirá una vez el sentenciado pague la indemnización de perjuicios a que es condenado. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 7 de noviembre de 2006.

El homólogo 16 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso mediante auto del 14 de diciembre de 2009, indicándose estar a la espera que las autoridades competentes hagan efectiva la orden de captura No. 0141051 emitida por el juzgado fallador, y por auto del 24 de marzo de 2011, dispuso reiterar la orden de captura.

Por auto del 20 de diciembre de 2011, el homólogo 16 de Bogotá D.C., dispuso remitir las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Acacias Meta, como quiera que dicho despacho ejecutor solicitó copia de la sentencia para el estudio de la acumulación jurídica de penas.

- **Sentencia radicado CUI 110013104017200500154**

Por hechos ocurridos el 18 de julio de 2004, el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 14 de junio de 2005 condenó a **YEISON BAUTISTA ACUÑA** a la pena principal de **DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISION** como autor responsable de los delitos de **HOMICIDIO Y FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO** y a la pena

[1] Robinz Alexandro Camacho Santamaría

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la sanción privativa de la libertad. Condenó al infractor al pago de la suma equivalente a ciento treinta (130) smlmv a favor de quienes tengan derecho con ocasión al deceso de William Gilberto Rodríguez Melo por concepto de perjuicios materiales y morales irrogados con el ilícito. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria y libertad condicional.

El Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala de Decisión Penal, mediante decisión del 12 de octubre de 2005, confirmó el fallo condenatorio, por decisión del 20 de octubre de 2005 emitió ACLARACIÓN DE VOTO.

El homólogo 4º de Villavicencio Meta, a través de providencia del 13 de julio de 2006 avocó conocimiento de las diligencias.

El homólogo 2º de Acacias Meta, por auto del 2 de abril de 2007, reconoció al condenado 46.5 días de redención de pena, mediante auto del 1 de agosto de 2007, negó la redosificación de la rebaja del art. 70 ley 975 de 2005.

Mediante auto del 11 de febrero de 2009, el homólogo 2º de Acacias Meta, negó al condenado la rebaja del art. 70 ley 975 de 2005, a través de proveído de del 24 de febrero de 2009 reconoció 213 días de redención de pena y por auto del 25 de mayo de 2010 reconoció 119.25 días y el 23 de mayo de 2011 reconoció 72 días de redención de pena.

El homólogo 2º de Acacias Meta, mediante auto del 27 de octubre de 2011, resolvió acumular jurídicamente al sentenciado las sentencias **radicado CUI 11001400400320050040 1 – 110013104017200500154**, declarando que la pena acumulada es de **245 meses de prisión** y la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena acumulada.

Mediante providencia del 4 de enero de 2012, el homólogo 2º de Acacias Meta, **resolvió acumular jurídicamente** a favor del sentenciado, las penas acumuladas en auto del 27 de octubre de 2011, es decir, los radicados **CUI 11001400400320050040 1 – 110013104017200500154**, a la pena impuesta por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá radicado **CUI 110013104033200500121, declarando que la pena acumulada es de 300 meses de prisión** y la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena acumulada.

En vista que el condenado quedó a disposición en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota en Bogotá D.C., ordenó la remisión del proceso a los homólogos de Bogotá D.C. – reparto – por competencia.

El homólogo 3º de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso mediante auto del 13 de febrero de 2012 y por auto del 31 de diciembre de 2014, reconoció redención de pena de 4 meses y 16 días.

A través de providencia del 28 de julio de 2015, el homólogo 3º de Bogotá D.C., por auto del 28 de julio de 2015, negó la prisión domiciliaria art. 38 G del C.P., por auto del 5 de junio de 2015, reconoció 1 meses y 23.5 días de redención y mediante decisión del 23 de mayo de 2016, reconoció 99 días.

El homólogo 3º de Bogotá D.C., mediante auto del 25 de mayo de 2016 concedió al infractor la no exigibilidad de los perjuicios por la vía penal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Mediante auto del 26 de mayo de 2016, el homólogo 3º de Bogotá D.C., otorgó al sentenciado la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P., quien en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución prendaria de dos (2) smlmv, mediante póliza 11-53-101000383 del 2 de julio de 2016 y suscribió diligencia de compromiso el 27 de mayo de 2016, fijó el domicilio en la Carrera 6 No. 1-34 casa 185, conjunto la Nueva Santafé barrio Las Cruces en Bogotá D.C.

Por decisión del 27 de octubre de 2016, el homólogo 3º de Bogotá D.C., concedió al condenado el permiso para trabajar en la empresa Charr Plásticos S.A.S., ubicada en la calle 31 sur No. 26 A-31 barrio Libertador de Bogotá D.C., en el cargo de operario.

El homólogo 3º de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de noviembre de 2017 concedió al cambio de domicilio al KILÓMETRO 2 VÍA Siberia Vereda el Cacique del Municipio de Funza Cundinamarca y autorizó el cambio de domicilio laboral, ubicado en el kilómetro 4 Siberia Funza, Parque industrial Galicia Bodega D de Cundinamarca y por auto del 20 de noviembre de 2017, dispuso la remisión del proceso a este estrado judicial.

Conforme la documentación y pruebas allegadas con el expediente **YEISON BAUTISTA ACUÑA** se encuentra purgando pena dentro del presente asunto **desde el 20 de noviembre de 2004**

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso a través del auto de sustanciación No. 0314 del 9 de marzo de 2018 y solicitó ante el señor director y asesor jurídico de COMEB Bogotá D.C. – La Picota -, copia de la cartilla biográfica del interno.

Se recibe a través del correo institucional del día 10 de mayo de 2023, la Resolución Favorable No. 01309 del 13/04/2023, la cartilla biográfica y el certificado de calificación de conducta, emitidos por las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. La Picota, para el estudio de la libertad condicional.

En consecuencia, previo a resolver la libertad condicional, mediante auto de sustanciación No. 0602 del 9 de junio de 2023, este Juzgado corrió el traslado del art. 477 del C.P.P., al condenado para que presente las explicaciones y pruebas que considere pertinentes que justifiquen los motivos por los cuales ha salido de la zona de inclusión o autorizada conforme a los Informes emitidos por el Operador CERVI-ARVIE (oficio 2021EE0077474; oficio 2021IE0096221; oficio 2021IE0116430; oficio 2021IE0171659; oficio 2021IE0207393; oficio 2021IE0216933; oficio 2021IE0222090, oficio 2021IE0236444, oficio 2021IE0246567; oficio 2021I; oficio 2022IE0001340; oficio 2022IE0009688; oficio 2022IE0022913; oficio 2022IE007361; oficio 2022IE0208388; oficio 2022IE0219281; oficio 2022IE0235166; oficio 2022IE0240524; oficio 2022IE0244978; oficio 2022IE0259943; oficio 2022IE0254443; oficio 2023IE0030980; oficio 2023IE0027152; oficio 2023IE0041841; oficio 2023IE0059847)

El condenado **YEISON BAUTISTA ACUÑA** en el escrito de descargos del artículo 477 del C.P.P., manifestó:

"(…) DESDE ESE TIEMPO MI VIDA CAMBIO ME HE RESOCIALIZADO APRENDI A TRABAJAR Y CONFORME UNA FAMILIA, NO ES FACIL CONSEGUIR UN TRABAJO POR LOS ANTECEDENTES PERO GRACIAS A DIOS LO CONSEGUI Y ME HE MANTENIDO CUIDANDO MI TRABAJO YA QUE ES VITAL PARA MI HOGAR, SUCEDE QUE LLEGO LA PANDEMIA Y TODO SE COMPLICO, LA EMPRESA CAMBIO EL LUGAR DE TRABAJO, CERRARON LOS JUZGADOS A RAIZ DE LA SITUACION NO ACTUALICE EL CAMBIO Y DEJE PASAR EL TIEMPO, EJERCI OTRO CARGO EN LA COMPAÑÍA POR LO CUAL ELLOS TRABAJAR COMO EMPRESA ALIADAS A TODAS LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS GRANDES EN COLOMBIA, ENTONCES ESTUVE TRABAJANDO EN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

EL PARQUE INDUSTRIAL CELTA QUE ERA LA SEDE DE LA PLANTA Y ALTERNO A ESTO ME ENVIARON A TRABAJAR EN LAS BODEGAS DE LAS CADENAS DE AHÍ ME TOCO EN CENCOCUD QUE SUS BODEGAS ESTAN EN EL PARQUE INDUSTRIAL EL SOL, LUEGO ME TOCO EN ÉXITO QUE SUS BODEGAS ESTAN EN EL PARQUE INDUSTRIAL LATAM, NO OBSTANTE ME LLAMA EL JEFE Y ME DICE QUE NECESITA DE MI EXPERIENCIA PARA ESTABILIZAR LA OPERACIÓN EN LA CADENA DE ARA, POR LO CUAL ESTOY TRABAJANDO EN EL PARQUE INDUSTRIAL SAN DIEGO QUE ES DONDE ESTOY ACTUALMENTE, EN CADA CADENA HE DURADO LABORANDO 7 U 9 MESES Y UN AÑO EN LAS DIFERENTES, SE QUE HA SIDO MI ERROR NO HABER COMUNICADIO, POR LO CUAL SE HAN GENERADO LA MAYORÍA DE LOS INFORMES, TAMBIEN DE RESALTAR QUE CUANDO SE HAN HECHO LAS VISITAS SIEMPRE HE ESTADO EN MI DOMICILIO, TAMBIÉN EXPLICAR QUE ME PUSIERON UN BRASALETE DE SEGUNDA EL CUAL ESTABA FISURADO Y EL CARGADOR NO RECIBIA BIEN LA CARGA, SE LES EXPLICO Y ME CAMBIARON EL DISPOSITIVO.

YO SE QUE FUE MI ERROR NO HABER ACTUALIADO EL LUGAR DE TRABAJO POR EL CUAL SE HAN GENERADO CASI TODOS LOS REPORTES, PERO QUISIERA QUE SU HONORABLE DESPACHO TUVIERA EN CUENTRA QUE YO NO HE ESTADO DELINQUIENDO AL CONTRARIO LLEVO CINCO AÑOS LABORANDO CON LA COMPAÑÍA DE LA CUAL SE ENVIO UNA CARTA LABORAL EN LA CUAL PUEDEN VALIDAD ESTA INFORMACION

TAMBIEN QUISIERA EXPRESAR QUE ESTUVE 12 AÑOS DETENIDO, PERO DESDE QUE SE OTORGO EL BENEFICIO MI VIDA ES OTRA, APRENDI A TRABAJAR LLEVO 7 AÑOS RESOCIALIZADO, TENGO 2 NIÑA PEQUEÑAS PAGO ARRIENDO Y SUPLO LAS NECESIDADES DE MI HOGAR, YA QUE MI ESPOSA SE ENCUENTRA SIN TRABAJO, SOY EL MOTOR DE ESTE HOGAR SOY UNA BUENA PERSONA QUE LO QUE DESEA ES SACAR A SU FAMILIA ADELANTE, LE RUEGO A SU DESPACHO ME BRINDE LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR ADELANTE CON MI TRABAJO Y MI HOGAR PODER SACAR A MIS HIJAS ADELANTE YA QUE SON MI PRIORIDAD.

DE TODO CORAZON LE RUEGO TENGA EN CUENTA QUE LO UNICO QUE HE HECHO DESDE MI SALIDA ES TRABAJAR Y TRATAR DE SALIR ADELANTE, DIOS ME DIO UNA FAMILIA POR QUE ESTOY LUCHANDO SOLO LE PICO A SU SEÑORIA QUE ME AYUDE A CONTINUAR CON MI VIDA (…)".

Como quiera que el condenado, en el memorial allegado el 28 de febrero, 23 y 24 de mayo de 2023, argumenta que es padre de 2 niñas pequeñas y el responsable de conseguir su sustento y suplir sus necesidades, motivo por el cual consiguió un nuevo empleo e informa el cambio de lugar de trabajo en la **Empresa IFCO SISTEMS COLOMBIA, con horarios rotativos de 8 o 12 horas, y si la operación lo requiere está como op in house con la cadena de alimentos ara y en el cedi del parque industrial San Diego km 2 Vía Siberia Funza bodega 5g** (anexa certificación laboral de la empresa IFCO SYSTEMS COLOMBIA S.A.S), este despacho en el auto de sustanciación No. 0602 del 9 de junio de 2023, ordenó al Asistente Social de este Juzgado realizar la visita socio familiar al interno por el medio más expedito (Kilómetro 2 vía Siberia Vereda el Cacique en Funza Cundinamarca – 3132301667 - 3125313377) y se confirme dicha situación, es decir, si ha estado trabajando, estableciéndose el cargo o labor que desempeña, modalidad de contrato, salario que devenga, el horario laboral y la ruta de movilidad hacia el lugar de trabajo con la hora de salida de su domicilio y llegada al mismo (tiempo de desplazamiento).

En efecto, **se emite el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 16 de junio de 2023, en el cual se indica**:

"(…)" ***RESULTADOS***

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante los días 14, 15 y 16 de junio de 2023, fueron realizadas entrevistas telefónicas al número 3132301667, perteneciente al señor condenado YEISON BAUTISTA ACUÑA, entrevistas con duración de más de una hora.

Atendieron el procedimiento el señor condenado YEISON BAUTISTA ACUÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.205.938 y CÉSAR AUGUSTO ÁLVAREZ GARCÍA, C.C. 1.112.129.956, su jefe inmediato en la empresa IFCO SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

IFCO SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. es una multinacional alemana que tiene sede en Colombia y cuya actividad comercial está referida al suministro de canastillas de exhibición y disposición de productos alimenticios a diferentes cadenas de almacenes.

De acuerdo a lo encontrado en entrevista, el señor condenado viene trabajando en IFCO desde junio de 2019, inicialmente a través de tercerización y en este momento con contrato directo y a término indefinido con la entidad señalada.

El señor condenado YEISON BAUTISTA ACUÑA, tiene 38 años y convive en UL +- 6 años con la señora SANDRA MARYELY LASSO QUINTERO, de 37 años.

YEISON y SANDRA MARYELY son padres de dos hijas de 5 y 2 años, llamadas KEILY VALERIA BAUTISTA LASSO y EMILY BAUTISTA LASSO, respectivamente. Actualmente, ambas menores están vinculadas al Jardín Social La Aurora del municipio de Funza.

Conforme fue solicitado, por parte del grupo familiar de acogida se aportó información completa y verificada, relativa al inmueble de en arrendamiento donde residen hace seis años.

Fue remitido el contrato de arrendamiento de la vivienda que ocupan. Así mismo, recibos de servicios públicos y fotografías del lugar permitieron verificar el estado actual de dicha vivienda y las condiciones de estabilidad y disponibilidad habitacional.

La familia habita el domicilio ubicado en la Vereda el Cacique, Km. 2 vía Siberia, Funza (Cundinamarca) hace más de tres años.

Se trata de una vivienda rural que cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía, agua y alcantarillado. El gas se suministra a través de pipeta.

La familia ha morado en ese lugar desde el momento en que fue autorizado para trasladar su residencia al municipio de Funza.

Ahora, respecto a la relación de pareja del señor condenado, vemos que con su compañera permanente se conocieron hace +- 10 años, relación que fue gestada desde la instancia intramural.

De acuerdo a lo reportado, el señor condenado conoció a quien ahora es su compañera permanente en torno a otro privado de la libertad a quien SANDRA MARYELY visitaba en la antigua sede de la Picota en la ciudad de Bogotá, tratándose de una relación de pareja estable y duradera en el tiempo.

Antes de la prisión domiciliaria concedida por los homólogos de la ciudad de Bogotá, YEISON BAUTISTA ACUÑA permaneció privado de la libertad a nivel intramural 12 años, habiendo transitado por varios establecimientos penitenciarios, considera que su proceso de resocialización fue exitoso.

Al respecto, el señor condenado cursó y culminó el bachillerato al interior del presidio, así como llevo a cabo un proceso reflexivo personal dirigido a pensar un futuro para sí, más allá de una historia familiar inicial atravesada por la separación de sus padres, su temprana vida en calle y varios problemas relacionados con tal experiencia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

YEISON BAUTISTA ACUÑA señala que en su infancia recibió maltrato, sufrió el desafecto y desprotección de sus padres y no tuvo oportunidades educativas, por ser el hermano mayor debió asumir el cuidado de su hermana, quien fue madre durante la adolescencia.

Los hechos delictivos por los que fue condenado YEISON BAUTISTA ACUÑA los relaciona con circunstancias de vida en calle, abuso de SPA, rencillas callejeras y la respuesta a un ataque propinado por un habitante de calle quien, dice él, agredió a su hermana y a él.

Durante la instancia carcelaria ha recibido apoyo intermitente de su familia.

Respecto a sus padres manifestó que su señora madre es MERCEDES ACUÑA quien actualmente reside en Bogotá en el Barrio Policarpa Salavarrieta; años atrás ella estableció nueva unión de pareja con ORLANDO SÁNCHEZ, un conductor de busetas en Bogotá, siendo ambos padres de dos hijos, ambos mayores de edad (CARLOS y JUAN PABLO SÁNCHEZ ACUÑA).

El padre del condenado es el señor FEDERICO BAUTISTA, cuya ocupación es guarda de seguridad, teniendo 64 años y quien también contrajo otra relación de pareja y se separó. Dicho señor actualmente vive solo, reside en el Barrio San Antonio y tuvo otros dos hijos (JAIME y YAHIR BAUTISTA).

Por su parte, la hermana del señor condenado es VIVIANA BAUTISTA, quien hace 10 años aproximadamente reside con su esposo JOHN OBANDO en Lima (Perú). Él es DJ y es conocido como Fox Lima.

El hijo de VIVIANA, sobrino del condenado parenteralmente hablando se llama AXEL STEVEN RAMOS BAUTISTA, tiene 22 años y también vive en la ciudad de Bogotá, trabajando de manera independiente en oficios varios.

Otros miembros de la familia mencionados por el condenado son una tía llamada MARÍA ESTER ACUÑA, quien reside en el Barrio Las Cruces y quien lo acogió cuando le fue concedida la prisión domiciliaria en 2016, antes de su traslado a Funza, lugar a donde fue autorizado a trasladarse en noviembre de 2016, contando también con un permiso para trabajar en una empresa metalmecánica donde laboró hasta 2019.

ASPECTOS LABORALES ACTUALES

El señor condenado trabajó en la empresa donde fue autorizado para laborar por el Señor Juez Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá hasta 2019 pero luego perdió el empleo por recortes de personal.

Es así como desde junio de 2019 YEISON BAUTISTA ACUÑA comenzó a laborar en IFCO SYSTEM.

Inicialmente el contrato se realizó con una empresa temporal, pero el señor condenado se destacó por su laboriosidad y fue integrado a la planta permanente de IFCO, contando con contrato a término indefinido desde el 2 de febrero de 2021, cuando es asignado para desarrollar su labor in house (es decir, directamente en la planta de tratamiento de IFCO).

Respecto a las funciones que cumple el señor condenado su tarea es recibir el inventario, encargado de la recepción de canastillas, clasificación de las mismas, estibar y garantizar su adecuado almacenamiento para labores de limpieza y redistribución, así como principalmente garantizar el movimiento de ingreso y salida de las mismas.

IFCO alquila canastillas a varias cadenas de almacenes como ARA y ÉXITO, las cuales ingresan a la planta para su lavado y desinfección y luego son redistribuidas de acuerdo a pedidos a gran escala que maneja la multinacional, se trata de grandes volúmenes de canastillas.

El horario de trabajo que cumple YEISON BAUTISTA ACUÑA son tres turnos rotativos semanales, así:

1. *6:00 AM a 2:00 PM.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

2. *2:00 PM a 10:00 PM*
3. *10:00 PM a 6:00 AM*

El señor condenado rota semanalmente entre estos tres horarios.

Respecto a la sede de trabajo, también ha sido rotativa.

Inicialmente estuvo trabajando en el Parque Industrial LATAM (peaje Siberia, salida calle 80 Bogotá); posteriormente laboró en el Parque Industrial El Sol (Indexona, vía Funza) y en este momento está ubicado en el Parque Industrial San Diego en el municipio de Funza, planta que está localizada justo frente al domicilio ocupado por el señor condenado.

Toda la información respecto al ámbito laboral, contrato, horarios, funciones y sedes fue confirmada con el señor CESAR AUGUSTO ÁLVAREZ GARCÍA, (cel. 3137866846), coordinador en planta y jefe inmediato del señor condenado.

El señor coordinador de la planta de IFCO SYSTEM con contrato a término indefinido hace +- 4 años.

Menciona el señor coordinador que conoce a YEISON BAUTISTA ACUÑA desde su ingreso a la empresa, hace +- 4 años, aseveró que le consta que el señor condenado ha laborado de manera continua e ininterrumpida en dicha empresa. Así mismo, señaló que las funciones de YEISON BAUTISTA ACUÑA son de alta responsabilidad y que el desempeño laboral observado es alto, caracterizándose por su responsabilidad y compromiso.

El señor coordinador manifestó que el condenado apoya muchísimo en la operación, participa en capacitación y en contingencias es colaborador.

A nivel personal el señor condenado es caracterizado como persona tranquila, responsable y dedicada con su trabajo. Saben que es padre de familia afectuoso, conocen su situación legal y siempre han evidenciado que porta el brazalete de vigilancia electrónica, ha sido sometido a polígrafo y aprobado estudios de seguridad de la empresa, que son frecuentes y regulares.

Se manifestó que YEISON BAUTISTA ACUÑA ha respondido a la confianza brindada en el ámbito laboral, supero fácilmente el período de prueba del contrato a término indefinido. Tiene alto sentido de pertenencia y es la mano derecha de los operarios en planta de IFCO, apoyando a todos los nuevos empleados en el desarrollo y aprendizaje de sus labores.

Se mencionó que en este momento la sede de trabajo es aledaña a la casa donde vive el señor condenado, en el parque industrial San Diego, pero que el contrato con que cuenta el señor condenado le exige desplazarse a las otras plantas (parque industrial latam y parque industrial el sol) cuando sea requerido por necesidad del servicio.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que el condenado devenga UN SALARIO MÍNIMO + todas las prestaciones de ley.

La señora cónyuge del condenado se encuentra desempleada y se dedica al hogar y cuidado de las dos menores hijas de la pareja.

La condición económica encontrada es de clase media baja, contando con recursos apenas suficientes para el cubrimiento de sus necesidades familiares principales.

CONCEPTO

El señor condenado YEISON BAUTISTA ACUÑA, cuenta con un grupo familiar conformado por su compañera permanente y dos hijas de 5 y 2 años. Las relaciones con la familia extensiva, padres y hermanos son distantes, pero están presentes y le han colaborado en la medida de sus posibilidades, recibiendo acompañamiento en la fase intramural de la pena principalmente por su compañera actual.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

YEISON BAUTISTA ACUÑA ha vivido los seis años en el municipio de FUNZA y de acuerdo a lo recabado ha laborado desde 2019 en IFCO SYSTEM y contratado a término indefinido desde febrero de 2021 por dicha multinacional, trabajando en tres turnos rotativos semanales y ha cumplido labores en tres sedes de trabajo.

A nivel laboral el señor condenado fue caracterizado como muy trabajador y responsable. Aspectos personales evaluados lo dejan ver como un padre de familia afectuoso y dedicado, señala haber cursado un proceso de resocialización exitoso y haberse encaminado para un futuro mejor para sí y principalmente para brindar bienestar a sus hijas (…)".

El día 12 de julio de 2023, se reciben a través del correo institucional, los informes de Novedad del PPL emitidos por el señor director de Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual, mediante los cuales informa de las salidas del interno de la zona de inclusión o autorizadas así: • Oficio 90272-CERVI-ARVIE 2023EE0061509 salidas zona de inclusión el 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de abril de 2023 • Oficio 90272-CERVI-ARVIE 2023EE0093953 salidas zona de inclusión el 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo de 2023. • Oficio 90272 – CERVI – ARVIE 2023EE0102139 salidas zona de inclusión el 23, 26, 29, 30 y 31 de mayo de 2023; el 1 de junio de 2023. • Oficio 90272-CERVI-ARVIE 2023EE0105001 salidas zona de inclusión el 2, 4, 5, y 6 de junio de 2023. • Oficio 90272 CERVI-ARVIE-2023EE0087407, por el cual pone en conocimiento de la novedad ocurrida el 11 de mayo de 2023, en cumplimiento a la visita programada y el condenado no se encontró en el lugar de domicilio.

Por consiguiente, esta agencia judicial mediante auto de sustanciación No. 1075 del 14 de noviembre de 2023, dispuso abstenerse de correr el traslado del art. 477 del C.P.P. al interno respecto de los Informes de transgresión allegados el 12 de julio de 2023 y ordenó a asistente social del Juzgado para que realice un segundo informe sobre la visita socio familiar al interno (vía remota) y emita su concepto respecto a las condiciones familiares y habitacionales en las que se encuentra cumpliendo pena en prisión domiciliaria el condenado (kilómetro 2 vía Siberia el Cacique en Funza Cundinamarca). También ordenó requerir con carácter urgente y en el término de la distancia a las Directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, para que allegue los reportes de visitas realizados al interno en el domicilio y la documentación prevista en el art. 471 del C.P.P., ACTUALIZADA, a fin de estudiar la libertad condicional del sentenciado.

Una vez emitido el segundo Informe de Valoración de Asistencia Social de fecha 21 de noviembre de 2023, se pudo establecer que el condenado:

"… desde el 24 de agosto del presente año se presentó un cambio de residencia, habiendo remitido correo electrónico solicitando la autorización de cambio de residencia desde el 7 de septiembre de 2023, afirmó el señor condenado.

De igual modo, desde el 27 de julio del presente año, el señor condenado está trabajando desde otra sede de IFCO, sede ubicada en el Centro Empresarial Interzona Parque Industrial El Sol en Funza (Cundinamarca), novedad que el señor condenado manifiesta haber reportado oportunamente ".

Ahora bien, conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto de sustanciación No. 1075 del 14 de noviembre de 2023, **se emite por parte del Asistente Social el segundo Informe de Valoración de Asistencia Social del 21 de noviembre de 2023**, en el cual se emitió el siguiente **CONCEPTO**:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

"(…) YEISON BAUTISTA ACUÑA ha permanecido en prisión domiciliaria durante los últimos 7 años, habiendo estado privado de la libertad por más de 21 años en total, reporta dicho señor.

Actualmente y a partir del 24 de agosto del presente año, el señor condenado YEISON BAUTISTA ACUÑA y su grupo familiar, conformado por su compañera permanente y dos hijas de 5 y 2 años, residen en la calle 17A No. 17B – 27 Barrio El Sol de Funza (Cundinamarca).

Como aspectos que tuvieron relación con el cambio de domicilio fueron mencionados el mejoramiento de la calidad de vida familiar y por ser un desplazamiento más cercano a la nueva sede de trabajo del señor condenado y del Instituto Pedagógico Especializado donde ingresará la hija mayor del condenado. Dicha menor presenta trastorno de lenguaje que se encuentra en evaluación por profesionales especializados y que, como se indicó de manera precedente, requiere la integración a una institución que le brinde atención adecuada.

A nivel laboral el señor condenado ha continuado adscrito a IFCO, multinacional alemana, donde es evaluado como trabajador altamente competente y responsable. Ha obtenido incentivos extra laborales como empleado del mes y candidato a empleado del año. Dentro del trabajo cumple horarios rotativos y desde julio se requirió cambio en su sede laboral.

YEISON BAUTISTA ACUÑA manifestó que su proyecto de vida post carcelario incluye comprar casa propia a través de crédito hipotecario y continuar avante en la crianza y cuidado de sus hijas, quienes son su motivación diaria y expectativa para pensar el futuro (…)".

En consecuencia, este Juzgado a través de auto interlocutorio No. 0030 del 24 de enero de 2024, resolvió abstenerse de correr el traslado del art. 486 de la Ley 600 de 2000 al condenado, respecto de los informes de Novedad del PPL, suscritos por el señor Director del Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual – CERVI - oficio 90272-CERVI-ARVIE /2023EE0150842, oficio 9027-CERVI-ARVIE- 2023EE0169739, oficio 90272-CERVI-ARVIE/ 2023EE0165726, oficio 90272-CERVI-ARVIE /2023EE0156938, oficio 90272-CERVI-ARVIE /2023EE0142917, oficio 90272-CERVI-ARVIE- 2023EE0139036, oficio 90272-CERVI-ARVIE /2023EE0188635, oficio 90272 - CERVI – ARVIE. 2023EE0194410, oficio 9027-CERVI-DICER- 2023EE0177074, oficio 9027- CERVI-DICER/ 2023EE0186313 salidas el 20, 22, 23, 24, 25 de septiembre de 2023, oficio 90272-CERVI-ARVIE 2023EE0214956, oficio 90272-CERVI-ARVIE 2023EE0181476, oficio 9027-CERVI-ARVIE-2023EE0224129, oficio 90272-CERVI-ARVIE-2023EE0229620, oficio 090272-CERVI-ARVIE- 2023EE0248248, oficio 90272-CERVI-ARVIE 2023EE0231613, oficio 90272-CERVI-ARVIE-2023EE0237641 y autorizó el cambio de domicilio al infractor hacia la Calle 17 A No. 17 B – 27 barrio El Sol en Funza Cundinamarca, por lo que ofició a las directivas del COMEB PICOTA para que realizara el respectivo registro y actualización en el sistema del lugar autorizado al condenado como domicilio (prisión).

También, en el auto interlocutorio No. 0030 del 24 de enero de 2024, se dispuso oficiar a las directivas de COMEB PICOTA y al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual CERVI, con el fin de informar que el condenado **YEISON BAUTISTA ACUÑA** cuenta con permiso para laborar, y tal como se estableció por parte de este Juzgado en el segundo Informe de Valoración de Asistencia Social de fecha 21 de noviembre de 2023, labora en IFCO SYSTEM como operario *in house* (es decir, directamente en la planta), la cual se localiza en la Vereda Platanitos, Parque Industrial El Sol Sector Siberia, en labores de la recepción de canastillas, clasificación de las mismas, estibar y garantizar su adecuado almacenamiento para labores de limpieza y redistribución, también se encarga del inventario y apoya en temas logísticos dentro de la planta y en la inducción y capacitación

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

del personal nuevo. El horario de trabajo que cumple son tres turnos rotativos semanales así: i) de 6.00 am a 2:00 pm; ii) de 2:00 pm a 10:00 pm; iii) de 10:00 pm a 6:00 am y; iv) de 5:00 pm a 5:00 am (dos domingos al mes), el cual rota entre estos tres horarios. Lo anterior para el respectivo control y actualización en el sistema.

De igual manera se dispuso en la mencionada decisión interlocutoria, requerir al señor director y asesor jurídico de COMEB PICOTA, con el fin de que remita la documentación prevista en el artículo 480 de la Ley 600 de 2000 – ACTUALIZADOS -, para el estudio de la libertad condicional del condenado.

En la presente oportunidad ingresan al despacho las diligencias, con la documentación allegada por las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, para el estudio de la libertad condicional.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de libertad condicional del condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgando pena bajo el sustituto de prisión domiciliaria en la Calle 17 A No. 17 B – 27 barrio El Sol en Funza Cundinamarca, vigilado por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

De acuerdo a los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2004, el 4 de junio de 2003 y el 18 de julio de 2004, el infractor fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 600 de 2000.

4.2. Del principio de favorabilidad

Resulta oportuno verificar la aplicación del principio de favorabilidad con base en el tránsito legislativo, -desde la ocurrencia de los hechos- teniendo en cuenta que dicho principio no diferencia, dentro de su aplicación, entre normas de carácter sustantivo y normas procesales.

Sobre éste apasionante tópico, la sentencia C-592 de 2002 de la Corte Constitucional, en un caso de demanda por inconstitucionalidad contra las expresiones *"Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia"* contenida en el inciso final del artículo 6º, *"La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo"* contenida en el numeral 6º del artículo 114 y contra los artículos 127, 291 y 287 de la Ley 906 de 2004 *"por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal";* realiza un despliegue importante respecto de la aplicación del principio de favorabilidad al concurrir en el tiempo normas aplicables a casos particulares.

Así, bajo la ponencia del **Dr, ALVARO TAFUR GALVIS,** la Corte analizó lo siguiente:

> ***…***
> ***"****4.1.5.2.1.2.* ***El principio de favorabilidad, como elemento integrante del debido proceso en materia penal, se encuentra establecido como es sabido en el artículo 29 del Estatuto Superior, en los siguientes términos:***
>
> > ***"En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable."***
>
> *El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ley 74 de 1968, enuncia este principio así:*
>
> > *"Artículo 15-1 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.* ***Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello****."(Subrayas fuera de texto)*
>
> *La Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16/72, lo plasma igualmente en el artículo 9°, así:*
>
> > *"Artículo 9° Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable.* ***Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello****."*
>
> *De acuerdo con estas normas, que como ya se ha visto integran todo el bloque de constitucionalidad, en materia penal, el principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. El carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley.

La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.

Sobre este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales*.*

Al respecto cabe recordar que esta Corporación, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en diferentes ocasiones en las que se ha referido a la concordancia del ***artículo 40 de la Ley 153 de 1887 -que prevé la regla general de aplicación inmediata de la ley procesal- con el artículo 29 constitucional, ha concluido que independientemente del efecto general inmediato de las normas procesales, el principio de favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre normas sustantivas y normas procesales que resulten más benéficas al procesado****.*

El entendimiento del artículo 29 constitucional que ha hecho esta Corporación es en efecto el de que al momento de los hechos que configuran la conducta punible, debe existir un tribunal competente y un procedimiento para juzgar a la persona que ha cometido un delito, pero ello no significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la competencia del juzgamiento quede definida de manera inmodificable.

La Corte en las sentencias C-619 de 2001 y C-200 de 2002 concluyó que en materia de regulación de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución impone claramente como límite la aplicación del principio de favorabilidad penal.

Al respecto la Corte expresó concretamente lo siguiente al analizar el alcance del artículo 40 de la Ley 153 de 1887:

> *"Del análisis efectuado en la Sentencia C-619 de 2001 citada, cuyos considerandos reitera la Corte, es posible concluir que el efecto general inmediato de la ley procesal que consagra el artículo 40 de la ley 153 de 1887 no desconoce la Constitución, pues por aplicarse a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos.*

En lo que se refiere a los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara en establecer que estas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Ahora bien, en la medida en que ha quedado establecido que el respeto del principio de favorabilidad es un presupuesto necesario para la aplicación de la norma y que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

> *ha solicitado precisamente a esta Corporación condicionar su constitucionalidad en este sentido, la Corte estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones:*
>
> ***Como ya se explicó, el principio de favorabilidad rige toda aplicación de la normatividad penal sin que pueda hacerse ninguna diferencia entre normas sustantivas y normas procesales que beneficien al procesado" (Resalta fuera de texto)***

Como vemos, al no haber distinción entre normas sustantivas de las procesales para aplicar por favorabilidad esta o aquella norma, en el presente caso resulta propicio valerse de lo impuesto por el artículo 64 sin las alteraciones que introdujo la ley 890 de 2004, 1453 de 2011 y en la presente oportunidad, con lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014.

4.3. SOBRE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Se reitera, que conforme a los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2004, el 4 de junio de 2003 y el 18 de julio de 2004, **YEISON BAUTISTA ACUÑA** fue investigado y judicializado con el Decreto vigente para aquella época por la ley 599 y 600 de 2000 por lo que por favorabilidad se procederá al estudio de su libertad condicional bajo los requisitos de la mencionada norma.

Y es así, porque de acuerdo al principio de favorabilidad, el funcionario debe determinar de acuerdo a la sucesión de leyes cual es la más benéfica para los intereses del condenado en el momento en que se estudia cualquier petición.

Al efecto, en el presente caso se tiene que, como se anotó en líneas anteriores, los hechos motivo de la presente condena fueron durante los años 2003 y 2004, época ésta en la que estaba vigente con respecto al artículo 64, la Ley 599 de 2000, pero sin las modificaciones dadas por las Leyes 890 de 2004, 1453 de 2011 y 1709 de 2014, sin embargo, al evaluar los requisitos de las normas en comento le es más favorable su análisis sin estas modificaciones.

Cabe resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado Subrogado Penal de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de este funcionario judicial; pues, en primer lugar, tal como se desprende del artículo 64 del C. P. P., el cual establece:

> *"ARTÍCULO 64. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad ~~mayor de tres (3) años~~, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el Juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena.*
>
> *No podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena*
>
> *El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena."*

Vemos que solo exige dos requisitos que son el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena impuesta y su buena conducta en el Establecimiento Penitenciario, además señala que **no podrá negarse por las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta en la dosificación de la pena**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Caso contrario que sucede si se aplica el artículo modificado por la Ley 890 de 2004, - que empezó a regir a partir del 2005 en determinados distritos judiciales art 530 de la Ley 906 de 2004– en la que hay que evaluar, como primera medida la gravedad de la conducta, ampliando el requisito a las 2/3 partes, el buen comportamiento y supeditada al pago de la multa y la reparación a la víctima. Así mismo con la modificación de la Ley 1453 de 2011 conservó los mismos requisitos, pero variando el pago de la multa y los perjuicios mediante garantía personal, prendaria, bancaria o acuerdo de pago y relacionando la exclusión de ciertos delitos.

Por último, con la Ley 1709 de 2014 conservó la evaluación de la conducta, disminuyó nuevamente al cumplimiento de las 3/5 partes, conservó el comportamiento en el Centro penitenciario, adicionó la demostración del arraigo familiar y social y que debe estar supeditada a la reparación de la víctima o al aseguramiento de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago.

Motivo por el cual, se itera, y conforme lo señala la ley, se debe usar necesariamente por principio de favorabilidad[5], la ley que en su momento regía para la época de los hechos o de ahí en adelante la que le favorezca, motivo por el cual este funcionario así lo aplicará.

Por último, en cuanto a las leyes que han prohibido mecanismos sustitutivos o beneficios administrativos excluyendo algunos delitos, encontramos la 733 de 2002 - expedida el 31 de enero de ese mismo año – que en su artículo 11 excluía de beneficios y subrogados a quienes hubiesen cometido delitos de **terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, y conexos**, y no les procedía las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habría lugar a ningún otro **beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo**, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta fuese efectiva, delitos éstos de los cuales no está contemplado dentro de las sentencias proferidas contra **YEISON BAUTISTA ACUÑA** pero que entró en vigencia un tiempo después de los hechos por la que fue condenado.

Luego vino la promulgación de la **ley 1121 de diciembre 29 de 2006** que recopiló básicamente lo señalado en la mencionada 733, que en su artículo 26 excluía de la misma forma beneficios y subrogados en los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos – ley ésta que se encuentra vigente – y que por el principio de favorabilidad no cobijaría al condenado.

Así mismo la **Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006** que en su artículo 199 niega cualquier tipo de beneficio administrativo, mecanismo sustitutivo, preacuerdo, rebajas, etc., a quienes hayan cometido delitos como el homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, contra niños, niñas y adolescentes.

---

[5] "***ARTICULO 6o. LEGALIDAD.*** *Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco.*
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados.
La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.".

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Otra ley que modificó varios artículos del Código Penal fue la **1142 del 28 de junio de 2007** que en su artículo 32 (creó la 68 A) también excluyó beneficios y subrogados a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos o preterintencionales dentro de los cinco (1) años anteriores. Este artículo ha sido modificado con las leyes 1453 que agregó la exclusión de algunos delitos y la 1474 de 2011 que agregó delitos contra la administración pública, entre otros.

Recientemente tenemos la Ley 1709 de 2014 (20 de enero) que en su artículo 32 agregó algunos delitos de exclusión de beneficios y subrogados (art 68 A) pero que conforme a los hechos y por el tan consabido principio de favorabilidad (art 6º del C.P. y del C.P.P.) no se le puede aplicar al estudio del mecanismo invocado.

Lo anterior significa que el legislador únicamente a partir de la promulgación de la Ley 1709 de 2014 (20 de enero) amplió el margen de delitos a los que se les debe excluir de ciertos beneficios administrativos, mecanismos sustitutivos y preacuerdos, entre otros.

4.4. En cuanto al reconocimiento y el factor objetivo del cumplimiento de las 3/5 partes de la pena

Conforme a los documentos y pruebas que obran dentro del expediente, **YEISON BAUTISTA ACUÑA** se encuentra purgando pena dentro del presente asunto **desde el 20 de noviembre de 2004** hasta la fecha, por lo que ha cumplido físicamente **234 meses y 20 días de prisión.**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **24 meses y 19.25 días** reconocidas así:

- JEPMS 2º Acacias Meta, auto del 2 de abril de 2007, reconoce 46.5 días
- JEPMS 2º Acacias Meta, auto del 24 de febrero de 2009, reconoce 213 días
- JEPMS 2º Acacias Meta, auto del 25 de mayo de 2010, reconoce 119.25 días
- JEPMS 2º Acacias Meta, auto del 23 de mayo de 2011, reconoce 72 días
- JEPMS 3º Bogotá D.C., auto del 31 de diciembre de 2014, reconoce 4 meses, 16 días
- JEPMS 3º Bogotá D.C., auto del 5 de junio de 2015, reconoce 1 mes y 23.5 días
- JEPMS 3º Bogotá D.C., auto del 23 de mayo de 2016, reconoce 99 días

En este orden de ideas del tiempo purgado físicamente, se observa que el interno ha cumplido con un total de **259 meses y 9.25 días de la pena impuesta acumulada**.

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA	20 de noviembre de 2004
TIEMPO FÍSICO	234 meses y 20 días
TIEMPO REDIMIDO	24 meses y 19.25 días
TOTAL DESCONTADO	259 meses y 9.25 días
PENA PRINCIPAL	300 meses (acumulación)
3/5 PARTES DE LA PENA	180 meses

Como se expresó, la sentenciado hasta la fecha cumple un total de **259 meses y 9.25 días de la pena impuesta acumulada**, significando ello que **CUMPLE** con el presupuesto objetivo para acceder al beneficio de libertad condicional.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad)[15]*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[6]

4.4.1. Del adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión.

Adicionalmente, y en lo que a la observancia de buena conducta respecta, es del caso mencionar que también se da cumplimiento a tal requisito como quiera que se observa en los documentos emitidos por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, que así lo corroboran, pues se tiene que el grado de calificación de su conducta durante el tiempo que ha permanecido privada de la libertad a cargo de ese reclusorio ha sido evaluado positivamente[7]

En concordancia con el artículo 64 del Código Penal, se deben satisfacer los requisitos del artículo 480 del Código de Procedimiento Penal, por ende, se tiene que a través de **Resolución Número 0220 del 1 de febrero de 2024**, las directivas del COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE BOGOTÁ D.C. – LA PICOTA -, quien vigila la prisión domiciliaria en donde se encuentra purgando pena **YEISON BAUTISTA ACUÑA**, emitió concepto **FAVORABLE**, para efectos de conceder la Libertad Condicional. Se agrega además que durante el tiempo que el sentenciado ha estado en prisión domiciliaria ha mostrado buen comportamiento, ya que consta en la cartilla biográfica no hay anotaciones de sanciones o reportes de novedades de incumplimiento.

[6] T.S. Bogotá Rad 11001-60-00-013-2010-13961-02 (7046) (23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz
[7] Resolución Favorable No. 01309 del 13 de abril de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Como consecuencia del anterior análisis, a juicio del Despacho, el proceso de resocialización del condenado ha dado frutos positivos y de ello se infiere que el solicitante se encuentra en capacidad de regresar al seno de la sociedad, ya que desde que el homólogo 3º de Bogotá D.C., concedió la prisión domiciliaria mediante auto del 26 de mayo de 2016, el condenado laboró en la empresa Charr Plásticos S.A.S., ubicada en la calle 31 sur No. 26 A-31 barrio Libertador de Bogotá D.C., en el cargo de operario y en el kilómetro 4 Siberia Funza, Parque industrial Galicia Bodega D de Cundinamarca y durante el curso tal y como lo ha establecido este Juzgado a través de los informes de valoración de asistencia social, el condenado ha laborado *en la* Empresa IFCO SISTEMS COLOMBIA, y actualmente se encuentra trabajando desde otra sede de IFCO, sede ubicada en el Centro Empresarial Interzona Parque Industrial El Sol en Funza (Cundinamarca).

4.4.2. Del pago de indemnización por daños y perjuicios

En lo que al pago de perjuicios respecta, se tiene:

- El Juzgado 3º Penal Municipal de Descongestión de Bogotá D.C., mediante sentencia del 20 de septiembre de 2006 (radicado CUI 11001400400320050040 1), condenó **YEISON BAUTISTA ACUÑA** a pagar solidariamente la suma de un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) por conceptos de daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible.

- El Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá D.C. de Descongestión, mediante sentencia del 17 de octubre de 2006 (radicado CUI 11001310403320050012 1), condenó al infractor al pago de daños y perjuicios en la cuantía de cero punto sesenta y dos (0.62) smlmv.

- el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 14 de junio de 2005 (radicado CUI 110013104017200500154) condenó a **YEISON BAUTISTA ACUÑA** al pago de la suma equivalente a ciento treinta (130) smlmv a favor de quienes tengan derecho con ocasión al deceso de William Gilberto Rodríguez Melo por concepto de perjuicios materiales y morales irrogados con el ilícito.

Por lo anterior, el homólogo 3º de Bogotá D.C., mediante auto del 25 de mayo de 2016 **concedió al infractor la no exigibilidad de los perjuicios por la vía penal**.

4.4.3. De los Informe de Novedad PPL, emitidos por el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual.

Respecto a los Informes de Novedad PPL, emitidos por el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual, recibidos a través del correo institucional: oficio 90272-CERVI-ARVIE-2024EE0005931 salidas 7, 9, 10, 11, 12 de enero de 2024 / oficio 90272-CERVI-ARVIE /2024EE0001061 salidas 27 28 29 31 de diciembre de 2023, 2, 3 de enero de 2024 / oficio 90272-CERVI-ARVIE-2024EE0008675 salidas el 12, 13, 15, 16 de enero de 2024 / 90272-CERVI-ARVIE. 2023EE0254717 salidas el 21, 22, 23, 24, 26 de diciembre de 2023 / oficio 90272-CERVI-ARVIE-2024EE0002345 salidas el 3, 4, 5, 6 de enero de 2024, oficio 90272-CERVI-ARVIE-2024EE0012630 salidas 16, 17, 18, 19 de enero de 2024 / oficio 90272-CERVI-ARVIE 2024EE0014668 salidas 19, 20, 21, 22, 23 de enero de 2024, este despacho **SE ABSTIENE de correr traslado del art. 486 de la Ley 600 de 2000** al condenado **YEISON BAUTISTA ACUÑA**, como quiera que por auto interlocutorio No. 0030 del 24 de enero de 2024, autorizó el cambio de domicilio hacia la **Calle 17 A No. 17 B – 27 barrio El Sol en Funza Cundinamarca y se estableció que el prenombrado infractor labora en IFCO SYSTEM en la Vereda Platanitos, Parque Industrial El Sol Sector Siberia en 3 turnos rotativos semanales de 6:00 am a 2:00 pm; de 2:00 pm a 10:00 pm; de 10:00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

pm a 6:00 am y de 5:00 pm a 5:00 am dos domingos al mes el cual rota en estos horarios.

Dicha decisión fue notificada el día 25 de enero de 2024 a las 14:12 horas, al señor director y asesor jurídico del COMEB PICOTA y al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual – CERVI – (juridica.epcpicota@inpec.gov.co / dirección.epcpicota@inpec.gov.co / libertades2.epcpicota@inpec.gov.co / libertades.epcpicota@inpec.gov.co / logística.cervi@inpec.gov.co), **para el respectivo control, actualización en el sistema y continuar con el cumplimiento de la condena impuesta.**

5. CONCLUSIÓN.

Así las cosas, verificados y cumplidos como están los requisitos de carácter tanto objetivo como subjetivo, se le reconocerá y otorgará el pluricitado subrogado penal de libertad condicional al sentenciado de marras. Previo al disfrute del beneficio, el condenado deberá suscribir la diligencia de compromiso con las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal, esto es, i) informar todo cambio de residencia, ii) **observar buena conducta**, iii) reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo, iv) comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello, y v) no salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena, para la cual se le señalará el correspondiente periodo de prueba de acuerdo a lo ordenado en el artículo 64 del Código Penal que al respecto expresa:

"…El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena."

De conformidad con lo anterior, como en el caso que nos ocupa el término faltante para cumplir la totalidad de la pena impuesta, esto es, **40 meses y 20.75 días**.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ley dispone que para garantizar las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal (Ley 599 de 2000), debe constituirse la caución prendaria, en el caso particular teniendo en cuenta el tiempo que el sentenciado ha permanecido privado de su libertad, pero aunque el delito cometido es de alto impacto social, el juicio de reproche se circunscribió a la esfera del interés general, encuentra viable éste funcionario imponer como caución prendaria la de **DOS (2) S.M.M.L.V,** que puede prestar mediante póliza judicial o, consignación a la cuenta de títulos judiciales de ésta sede judicial. No obstante, se reitera, deberá suscribir la respectiva diligencia de compromiso.

5.1 Sobre la notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **YEISON BAUTISTA ACUÑA**, se encuentra descontando pena en prisión domiciliaria (Calle 17 A No. 17 B – 27 barrio El Sol en Funza Cundinamarca), se ordena por secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** el contenido de la presente al condenado a través del correo electrónico bautistaacunayeison@gmail.com y así mismo efectúe el pago de la caución equivalente a DOS (2) SMLMV o constituya póliza judicial y diligencie el acta de compromiso.

Realizado lo anterior, este Despacho emitirá la **BOLETA DE LIBERTAD ante las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -**, y a favor de **YEISON BAUTISTA ACUÑA** identificado con C.C No. 80.205.938, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a REMITIR las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. –

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

reparto -, para la respectiva vigilancia de **40 meses y 20.75 días** del periodo de prueba impuesto.

6. OTROS ASUNTOS.

6.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[8], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

---

[8] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[9]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[10]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7. DECISIÓN

Por lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**,

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que **YEISON BAUTISTA ACUÑA** identificado con C.C No. 80.205.938, acumula un total de **259 meses y 9.25 días** por concepto de tiempo físico, más las redenciones de pena reconocidas de la pena acumulada impuesta.

SEGUNDO. – Este despacho **SE ABSTIENE de correr el traslado del art. 486 de la Ley 600 de 2000** al condenado **YEISON BAUTISTA ACUÑA**, respecto de los informes de

[9] CSJ T **102248**
[10] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Novedad del PPL, emitidos por el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual, recibidos a través del correo institucional, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - CONCEDER al condenado **YEISON BAUTISTA ACUÑA** identificado con C.C No. 80.205.938, el beneficio de la **LIBERTAD CONDICIONAL** por las razones expuestas en este proveído, bajo un periodo de prueba de **40 meses y 20.75 días**, por lo cual deberá cancelar la caución impuesta, equivalente a DOS (2) SMLMV, o constituir póliza judicial y suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones señaladas en el artículo 65 del C.P.

CUARTO. - Teniendo en cuenta que **YEISON BAUTISTA ACUÑA**, se encuentra descontando pena en prisión domiciliaria (Calle 17 A No. 17 B – 27 barrio El Sol en Funza Cundinamarca), se ordena por secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** el contenido de la presente al condenado a través del correo electrónico bautistaacunayeison@gmail.com y así mismo efectúe el pago de la caución equivalente a DOS (2) SMLMV o constituya póliza judicial y diligencie el acta de compromiso.

QUINTO. - Realizado lo anterior, este Despacho emitirá la **BOLETA DE LIBERTAD ante las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -**, y a favor de **YEISON BAUTISTA ACUÑA** identificado con C.C No. 80.205.938, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

SEXTO. - REMITIR copia de esta providencia al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

SEPTIMO. - Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a REMITIR las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. – reparto -, para la respectiva vigilancia de **40 meses y 20.75 días** del periodo de prueba impuesto.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

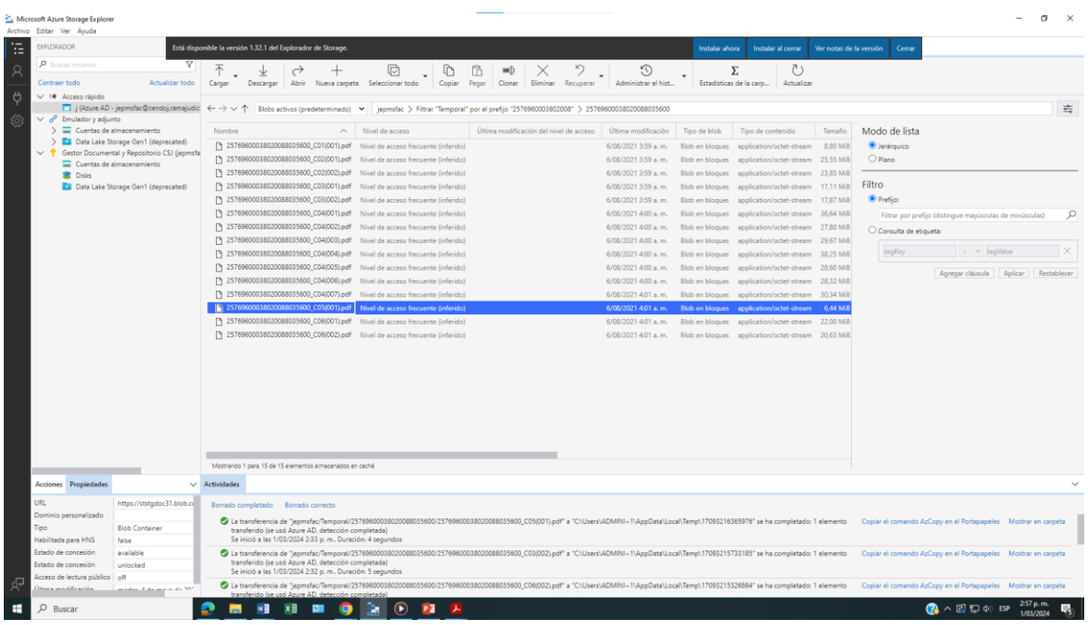
JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Febrero 29 de 2024. Al despacho el proceso contra **JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ,** identificado con C.C No. 1.077.032.989 informando que una vez verificado el estado actual del proceso esta agencia judicial procede a emitir pronunciamiento acerca de la posible extinción de la sanción penal.

Han sido múltiples los requerimientos de los agentes del estado, con solicitudes de libertad condicional, interposición de recursos, acumulación jurídica de penas, redención de pena, aclaración de tiempo de privación de la libertad, prisión domiciliaria, beneficios administrativos, acciones de tutela y hábeas corpus lo que ha generado múltiples entradas y salidas del expediente de Secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (artículo 118 y ss del Código General del Proceso).

De igual manera informo al señor Juez que estamos en la misión de depurar procesos que se encuentran en el AZURE debido a que los físicos, al ser pioneros en la digitalización, fueron enviados a Bogotá sin que a la fecha hayan sido retornados. Se torna difícil el estudio de la situación jurídica debido a que en dicho programa se encuentran las capetas sin los protocolos ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura. SÍRVASE PROVEER



DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Febrero Veintinueve (29) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 072

C.U.I.	**257696000380-2008-80356**
No. Interno:	**2019-00243**
Sentenciado:	**JOSÉ LUIS FARFAN GONZALEZ**
Identificación:	**1.077.032.989**
Delitos:	**HURTO AGRAVADO**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la rehabilitación de las penas accesorias.**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho, a decidir lo que en derecho corresponda acerca de la extinción de la sanción penal y rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a favor de **JOSÉ LUIS FARFAN GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.032.989, una vez recibidos los medios de prueba requeridos para tal efecto.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

JOSÉ LUIS FARFAN GONZALEZ fue condenado mediante sentencia proferida el 19 de febrero de 2010 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tenjo-Cundinamarca a la pena principal de **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISIÓN,** y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal, al ser hallado penalmente responsable del delito de **HURTO AGRAVADO**. Al sentenciado le fue concedida suspensión condicional de la ejecución de la pena, previo pago de caución prendaria y firma de diligencia de compromiso.

Apelada la decisión el Tribunal Superior de Cundinamarca el 14 de julio de 2010 la confirmó. La decisión quedó ejecutoriada el 8 de octubre de 2010.

Conoció del asunto el homólogo en descongestión de este municipio que el 21 de abril de 2014 de abstuvo de revocar y corrió el traslado del artículo 477 del CPP al no haber materializado el subrogado concedido. El 9 de junio de 2014 REVOCÓ y sin embargo el 4 de agosto siguiente repuso la decisión. El condenado asume la suscripción de la diligencia de compromiso y el pago de la caución mediante póliza judicial, prorrogando el periodo de prueba por dos años el 15 de septiembre de 2014 - artículo 65 del C.P -.

El día 30 de noviembre de 2017 el señor procurador 254 Judicial I Penal realiza solicitud ante esta agencia judicial, la cual tiene como fin que se realice el estudio de la posible extinción de la sanción penal, para lo cual es requisito *sine quanom* oficiar a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol para que informe de los antecedentes del sentenciado y poder tomar una decisión de fondo de la relacionada solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Este proceso forma parte de los 707 expedientes que retornaron a este Despacho el día 17 de enero de 2016, por finalización de la vigencia de la medida transitoria del Juzgado 2° Homologo de Descongestión de Facatativa Cundinamarca: conforme el Acuerdo SAA15-10414 del 30 de noviembre de 2015, emanado del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa.

Consultado el expediente digital en el aplicativo AZURE el día de hoy, se encontró la disponibilidad del mismo.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 COMPETENCIA

Conforme a la fecha de los hechos, JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ fue investigado y judicializado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y Ley 906 de 2004.

Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la extinción de la sanción penal, según lo señala el numeral 8 del artículo 38 de la ley 906 de 2004, que indica:

> ***"ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.*** *Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: (…)*
>
> *8.* ***De la extinción de la sanción penal****…"*

4.2 DE LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL

Atendiendo al estado actual del proceso, y observando que el periodo de prueba impuesto al condenado ha vencido, el Despacho entra a estudiar la extinción de la sanción penal a favor de **JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ.**

La suspensión condicional de la ejecución de la pena es un subrogado que consiste, como su nombre lo indica, en suspender la pena a quien acredite los requisitos previamente establecidos en la ley, y su disfrute esta "condicionado" al cumplimiento de unas obligaciones dentro de un periodo de prueba establecido, en busca de prevenir la criminalidad y sustraer del ambiente carcelario a aquellos autores de delitos de penas mínimas, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su resocialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible y es condicional pues el beneficiario está obligado a cumplir con ciertas exigencias de las cuales depende la extinción de la condena y las penas impuestas o la ejecución de la sentencia respectiva.

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

De conformidad con el artículo 67 del Código Penal, la extinción y liberación de la pena se presenta cuando transcurrido el período de prueba lo cumpla, sin que el condenado haya incurrido en ninguna de los eventos en que puede originar su revocación, siempre y cuando el funcionario judicial mediante auto, así lo hubiera decretado.

Reza el artículo 67 del Código Penal:

> *"Artículo 67. Extinción y Liberación. Transcurrido el período de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida, y la liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine".*

Y es así debido a que el período de prueba es el lapso en el cual el condenado está obligado a cumplir las obligaciones impuesta y consignadas en un acta, término en el cual la autoridad judicial debe velar que el condenado cumpla con las reglas de convivencia social.

Aterrizando al caso objeto de estudio, según se dijo en líneas anteriores, al señor **JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ** le fue concedido el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Por otro lado, dentro de las diligencias no aparece noticia criminal alguna que dé cuenta que dicho condenado haya incurrido en la comisión de otro delito y tal afirmación tiene como base el oficio No. 20230598862/ SUBIN- GRAIC -1.9

Al respecto señaló la H. Corte Suprema de Justicia:

> *"…Y es que una vez concedido cualesquiera de los beneficios, esto es, libertad condicional, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria o la vigilancia electrónica, el condenado está obligado a suscribir una diligencia de compromiso, oportunidad en la que se impone unas obligaciones a cumplir en un término concreto, el cual recibe la denominación de período de prueba…"*[3]

Una vez que el señor condenado cumplió con la obligación de firma de diligencia de compromiso el **15 de septiembre de 2014** en vista del cumplimiento del periodo de prueba impuesto de **TREINTA Y DOS (32) MESES,** se confirma que se han reunido los requisitos y a la fecha se ha extinguido la pena, pues dentro de las diligencias no aparece noticia criminal alguna que dé cuenta que el condenado haya incurrido en el incumplimiento de las conductas descritas en el lapso que comprendía del **15 de septiembre de 2014 A 15 de mayo de 2017** y que originaran una posible revocación, y tal afirmación tiene como base en los antecedentes penales del sentenciado, emitidos por la Consultora base de datos Sistema de Información de OCN INTERPOL, mediante oficio No. **20190349174/ SUBIN-GRAIC -1.9.**

Por lo anterior, la única opción jurídica, es **declarar la extinción y liberación de la pena**, porque de conformidad con el precitado artículo 67, la misma no puede proseguirse, operando de esta manera su expiración

4.3. REHABILITACIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS

Este juzgado es competente para decidir de oficio sobre la rehabilitación de las penas accesorias conforme lo señalan los numerales de los artículos 92 (Ley 599 de 2000) 38-8 y 480 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al corresponder los juzgados de los Circuitos penitenciarios de Facatativá – Cundinamarca conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, RAD. 45746 (15-04-15), M.P. Dr Fernando Alberto Castro Caballero

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Atendiendo los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último, dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *"la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas"*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *"el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía".*

Agrega que *"Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.".*

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

> *"**ARTICULO 92. LA REHABILITACION.** La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:*
>
> *1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.*
>
> *2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.*
>
> *En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse Siete (7) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de Siete (7) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.*
>
> *Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse Siete (7) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política."*

Ahora bien, en lo que respecta a la interdicción de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en

el fallo reseñado y a favor de JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ. En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.

Se trae pronunciamiento de la H. Corte Constitucional que refiere sobre este punto:

"La suspensión de derechos políticos como pena accesoria y su rehabilitación

36. Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), una de las penas restrictivas de otros derechos distintos a la pena privativa de la libertad, es la suspensión de derechos políticos.

37. Paralelamente, el inciso 3º del artículo 52 de la misma normativa, dispone que en todos los casos, la pena de prisión "conlleva a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a la que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51".[5]

38. En relación con el cumplimiento de las penas accesorias, el artículo 53 del Código Penal establece que las penas privativas de otros derechos que sean concurrentes con la pena privativa de la libertad, ***se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta****, y el juez oficiosamente, dará la información respectiva de su cumplimiento a la autoridad correspondiente.*

39. Respecto de la rehabilitación de los derechos políticos, el artículo 98 de la Constitución Política dispone que "la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación".

40. El artículo 92 del Código Penal establece que la rehabilitación de derechos políticos cuya suspensión se haya impuesto como una pena accesoria, opera de derecho, una vez haya transcurrido el término impuesto en la sentencia, y basta con que el interesado formule la solicitud correspondiente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad competente.

En el mismo sentido, el artículo 71 del Código Electoral señala que la rehabilitación de los derechos políticos opera ipso iure, cuando se cumple el término por el cual se impuso su pérdida como pena, para ello es necesario que el interesado formule la solicitud pertinente al registrador municipal de su domicilio, acompañada de los documentos correspondientes. De acuerdo con lo señalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el documento que se debe adjuntar corresponde al oficio o sentencia donde se manifieste la ***extinción de la pena****,* ***el cumplimiento de la misma*** *o el texto aclaratorio donde se explique que el solicitante no ha cometido el delito investigado o que en efecto, le han sido restablecidos sus derechos políticos, expedido por el despacho de conocimiento*[6]*. (Negrilla fuera del texto original).*

41. En relación con la rehabilitación de los derechos políticos, la Corte en la ***sentencia C-328 de 2003***[7] *señaló que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Código Penal, la pena accesoria siempre se ase debe aplicar y ejecutar de forma simultánea con la pena principal de prisión. En conclusión, la suspensión de derechos políticos desaparece una vez cumplida la pena principal y en consecuencia, se obtendría la rehabilitación de los derechos políticos.*

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, en particular en las sentencias ***T-218 de 1994***[8] *y* ***C-581 de 2001***[9] *y reiteradas en la* ***C-591 de 2012***[10]*, la interpretación según la cual la pena accesoria desaparece solo cuando se extingue la principal, exceptuando los casos de prescripción de la pena, tiene su origen en el artículo 92 del Código Penal anterior (Decreto Ley 100 de 1980), que establecía lo siguiente: "si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podrá pedirse la*

---

[5] Código Penal, artículo 51: La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º. del artículo 52. Inciso 2º: Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política.

[6] Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, folio 44, cuaderno principal.
[7] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[9] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[10] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos dos años a partir del día en que se haya cumplido la pena". Esta norma se encuentra reproducida en el artículo 92 de la Ley 599 del 2000.
En el mismo sentido, en la ***sentencia T- 585 de 2013***[11]*, al analizar el caso de una persona a la que le fue negada la apertura de una cuenta de ahorros por tener el reporte de la suspensión de sus derechos políticos en la CIFIN S.A., este Tribunal indicó que en ese caso ya se había extinguido la pena accesoria de suspensión de derechos políticos, toda vez que el Juez de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad ya había declarado la extinción de la pena principal y ordenó al banco ponerse en contacto con la accionante para verificar si todavía estaba interesada en abrir la cuenta de ahorros y le advirtió al Juez de Penas y Medidas de Seguridad que enviara a la Registraduría Nacional del Estado Civil una copia del auto interlocutorio que había decretado la extinción de la pena principal, con el fin de que se actualizara el estado de vigencia del documento de identidad de la accionante.*

42. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal y en la jurisprudencia de este Tribunal[12]*, la Sala concluye que: (i) siempre que haya una pena privativa de la libertad, se deberá interponer la pena de suspensión de derechos políticos; (ii) las penas privativas de otros derechos impuestas como accesorias de la pena privativa de la libertad, tales como la suspensión de derechos políticos, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con la pena principal y (iii) la pena de suspensión de derechos desaparece cuando se ha declarado la extinción de la pena principal o cuando ha prescrito." (…)*

"64. En consideración a las normas penales y las reglas jurisprudenciales anteriormente referidas, la Sala observa que la rehabilitación de derechos políticos que han sido suspendidos como parte de una condena accesoria a la pena privativa de la libertad, opera cuando el condenado ha cumplido la pena principal o cuando la accesoria ha prescrito[13]*."*

Por lo tanto, en este momento, este funcionario **RESTABLECERÁ** los derechos jurídicos inhibidos, conforme lo expresado en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

Por último, dado que la ley exige que cuando se haga pronunciamiento sobre la extinción de la sanción penal se debe hacer referencia a la caución prendaria, en el presente caso dicha obligación fue cubierta a través de póliza judicial.

En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría este despacho REMITIR las presentes diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Tenjo Cundinamarca con función de conocimiento para su archivo definitivo.

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá*

[11] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[12] Ver sentencias: T-218 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-581 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería; C-328 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-591 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T- 585 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[13] Ley 599 de 2000, Código Penal, Artículo 89 La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia. La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más 4.300 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO, PONAL y de Cota, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, un Asistente Administrativo, un Secretario y una oficial mayor.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la presente petición.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[14], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[15]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados de la Ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[16]*

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de

[14] Ibídem.
[15] CSJ T **102248**
[16] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Finalmente, desde el mes de noviembre de 2023, el juzgado se encuentra atendiendo en el palacio de justicia de Facatativá, una vez realizada su restauración y puesta en funcionamiento.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ,

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL impuesta dentro de las presentes diligencias a favor de **JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ,** identificado con C.C. No. 1.077.032.989, conforme lo consignado en la parte motiva de este proveído**.**

SEGUNDO. - –DECRETAR LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS impuestas en el fallo reseñado y a favor de **JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ, identificado con C.C. No. 1.077.032.989**, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

TERCERO.: ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo[17] tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004)[18] para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, en razón de este proceso.

CUARTO- En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría este despacho REMITIR las presentes diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Tenjo Cundinamarca con función de conocimiento para su archivo definitivo.

SEXTO. - NOTIFICAR vía electrónica la presente decisión al sentenciado **JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ.**

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PIMILLOS
JUEZ

[17] **ARTÍCULO 166. COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA.** Ejecutoriada la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.

[18] **ARTÍCULO 476. EXTINCIÓN DE LA CONDENA Y DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN.** Cuando se declare la extinción de la condena conforme al Código Penal, se devolverá la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Facatativá, 29 de febrero de 2024

Oficio No. 0373

Señor
JOSÉ LUIS FARFÁN GONZÁLEZ
CARRERA 5 No. 2-70
SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA

C.U.I.	**257696000380-2008-80356**
No. Interno:	**2019-00243**
Sentenciado:	**JOSÉ LUIS FARFAN GONZALEZ**
Identificación:	**1.077.032.989**
Delitos:	**HURTO AGRAVADO**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la rehabilitación de las penas accesorias.**

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le comunico que este Despacho Judicial DECLARÓ LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL y DECRETÓ LA REHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS dentro del proceso de la referencia.

En consecuencia, mediante esta comunicación se realiza la notificación del auto interlocutorio, proferido en la fecha.

Cordialmente,

DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 04 de 2024: Al despacho el proceso contra **JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS** identificado con C.C. No. 1.014.302.542, informando que verificado el expediente se halló que se cometió un acto irregular en el auto interlocutorio No. 0511 del 7 de noviembre de 2023, mediante el cual este Juzgado **revocó** la prisión domiciliaria al condenado, quedando erróneamente anotado en el numeral 2º del resuelve, "**RECONOCER** que el sentenciado **JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS** identificado con C.C. No. 1.014.302.542, tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de **40 meses y 3.5 días** de la pena principal de prisión de **144 meses**. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo cuatro (04) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0073

CUI	**11001600023202000371**
Número Interno	**2023-0255**
Condenado	**JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS**
Delito:	**HURTO CALIFICADO CON VIOLENCIA SOBRE LAS PERSONAS AGRAVADO, TENTADO, NO ATENUADO**
Reclusión:	**ORDEN DE CAPTURA**
Motivo:	**CORRECCIÓN DE ACTO IRREGULAR A.S. No. 0511 DEL 07-11-2023**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Vista la constancia secretarial que antecede se observa que se cometió un acto irregular en el auto interlocutorio No. 0511 del 7 de noviembre de 2023, mediante el cual este Juzgado **revocó** la prisión domiciliaria al condenado, quedando erróneamente anotado en el numeral 2º del resuelve, "**RECONOCER** que el sentenciado **JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS** identificado con C.C. No. 1.014.302.542, tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de **40 meses y 3.5 días** de la pena principal de prisión de **144 meses**", **siendo correcto *"RECONOCER que el sentenciado JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS identificado con C.C. No. 1.014.302.542, tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de 40 meses y 3.5 días de la pena principal de prisión de 50 meses"***, por lo tanto, se procede a la corrección del mismo.

2.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La legislación aplicable al caso es la citada en el Inciso 2º del Artículo 15 de la Ley 600 de 2000, el cual reza:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

"...El Funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales".

Pues bien, en el auto interlocutorio No. No. 0511 del 7 de noviembre de 2023, mediante el cual este Juzgado **revocó** la prisión domiciliaria al condenado, quedó erróneamente anotado en el numeral 2º del resuelve, "**RECONOCER** que el sentenciado **JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS** identificado con C.C. No. 1.014.302.542, tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de **40 meses y 3.5 días** de la pena principal de prisión de **144 meses**", ***siendo correcto "RECONOCER que el sentenciado JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS identificado con C.C. No. 1.014.302.542, tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de 40 meses y 3.5 días de la pena principal de prisión de 50 meses***".

Por tanto, conforme a lo estipulado en el artículo 15 inciso 2º de la Ley 600 de 2000 se procede a decretar la corrección del aludido acto irregular relativo a la pena de prisión impuesta.

3.- DECISIÓN

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA,**

RESUELVE

PRIMERO. - DECRETAR LA CORRECCIÓN DE ACTOS IRREGULARES, conforme a lo estipulado en el artículo 15 inciso 2º de la Ley 600 de 2000, del auto interlocutorio No. No. 0511 del 7 de noviembre de 2023, mediante el cual este Juzgado **revocó** la prisión domiciliaria al condenado, quedando erróneamente anotado en el numeral 2º del resuelve, "**RECONOCER** que el sentenciado **JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS** identificado con C.C. No. 1.014.302.542, tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de **40 meses y 3.5 días** de la pena principal de prisión de **144 meses**", **siendo correcto: *"RECONOCER que el sentenciado JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS identificado con C.C. No. 1.014.302.542, tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de 40 meses y 3.5 días de la pena principal de prisión de 50 meses".***

SEGUNDO. - Por secretaría se ordena **NOTIFICAR** el contenido del presente auto al sentenciado **JHONATHAN STIVEN MORENO VARGAS** a través del correo electrónico milenavargas132@gmail.com / mariaaponte655@gmail.com / carmenyrosa2511@gmail.com

TERCERO. - Por la Secretaria del Juzgado PROCÉDASE a remitir copia de la presente providencia a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, para que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)

Marzo 04 de 2024. Al despacho el proceso contra **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** identificado con C.C. No. 1.070.926.949, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 1140 del 29 de noviembre de 2023 el condenado allegó los descargos del artículo 477 del C.P.P., el día 1 de diciembre de 2023, a través de la oficina de Jurídica CPMS Cartagena.

En vista que en el expediente no obra una dirección electrónica para notificación del condenado, se deja constancia que la oficial mayor de este Juzgado se comunicó el día 1 de marzo de 2024 siendo las 08:30, 10:30 y 16:00 horas y el día 4 de marzo de 2024 siendo las 08:10 horas, a los abonados telefónicos 3007329478 – 3218267973 los cuales responden “sistema correo de voz”, sin embargo, se logró establecer comunicación el día de hoy 4 de marzo de 2024 siendo las 08:50 horas al móvil 3202376217, llamada atendida por la señora ARACELY ESTER MENDOZA MALO – progenitora del condenado -, quien indicó que el día jueves 29 de febrero de 2024 en horas de la mañana recibió llamada del INPEC DE CARTAGENA quienes le dijeron que el interno sería trasladado al INPEC BOGOTA LA MODELO y luego hacia el domicilio VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca, a lo que la señora ARACELY les manifestó que no recibiría al hijo por mal comportamiento y también al encontrarse interna trabajando en una casa de familia, sería una situación difícil de manejar con su propio hijo y un problema para ella misma.

Por lo anterior, la oficial mayor de este Juzgado se comunicó en la fecha a las 09:00 horas, con el área jurídica de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, llamada atendida por el DG. EDWIN CRUZ, quien conformó que el condenado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** se encuentra recluido en celdas primarias en ese establecimiento carcelario en espera a traslado de domicilio, y según lo manifestado por el infractor, solicita cambio de domicilio para que sea trasladado hacia la ciudad de Cartagena.

Una vez verificado el correo institucional, consta que la Oficina de Jurídica CPMS Cartagena, NO informó a este Juzgado sobre el traslado del condenado hacia las instalaciones de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, por lo tanto, el infractor se encuentra purgando pena dentro del presente asunto recluido en el mencionado establecimiento carcelario (celdas primarias). Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo cuatro (04) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0074

CUI:	**25175610800520178027 9**
NI:	**2019-0476**
Condenado:	**BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA**
Identificación:	**C.C. No. 1.070.926.949**
Delito:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Reclusión:	**PRISIÒN DOMICILIARIA – CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. – LA MODELO (recluido en celdas primarias en espera traslado domicilio)**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 9 DE MARZO DE 2024** **DECRETA REHABILITACIÓN DE PENAS ACCESORIAS**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Sería el caso de emitir pronunciamiento sobre la posible revocatoria del sustituto de prisión domiciliaria del sentenciado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** identificado con C.C. No. 1.070.926.949, **quien se encontraba en prisión domiciliaria en la VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca**, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, de no ser porque, actualmente se encuentra recluido en la CPMS BOGOTA LA MODELO – *celdas primarias* -, en espera de ser trasladado al mencionado domicilio, motivo por el cual, y en aras de no vulnerar los derechos constitucionales que le asisten al infractor, este Juzgado procede a resolver la libertad por pena cumplida.

2. ASUNTO.

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos a mediados del año 2017 y preacuerdo aprobado, el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, en sentencia del 21 de enero de 2019 CONDENÓ a **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA (y otro[1])**, a la pena

[1] Juan David Cortes Cao.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

principal de TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISIÓN y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante un periodo igual al de la pena privativa de la libertad, por el delito de **TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.** El juzgado fallador CONCEDIÓ al procesado la prisión domiciliaria por el cumplimiento de la mitad de la pena (art. 38G del CP). El fallo condenatorio cobró ejecutoria en la misma fecha de su emisión, debido a que no se interpuso alguno por parte de los sujetos procesales.

El señor **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** prestó caución mediante póliza CBC-100003898, el 25 de enero de 2019 y suscribió diligencia de compromiso el 28 de enero de 2019, fijó su domicilio en la **VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca.**

Este despacho avocó conocimiento de las diligencias el 24 de julio de 2019 mediante auto de sustanciación No. 1355.

Mediante auto de sustanciación No. 149 de fecha 11 de febrero de 2020, este despacho resolvió abstenerse de pronunciarse de oficio sobre la libertad por pena cumplida a favor del condenado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** al aparecer dentro del programa SISIPEC como sindicado activo en EPMSC de la ciudad de Cartagena.

Por auto de sustanciación No. 0297 del 26 de mayo de 2020, esta agencia judicial dispuso, correr el traslado del artículo 477 de la Ley 906 de 2004, a fin de que presentara las explicaciones que considerara pertinentes sobre la comisión de nuevo delito estando en prisión domiciliaria (CUI 132446001117201901773, delito Fuga de Presos) advirtiéndole sobre la posible revocatoria de la prisión domiciliaria concedida por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca en sentencia del 21 de enero de 2019.

Por lo anterior, se ordenó COMISIONAR a las Directivas de EPMSC de Cartagena Bolívar para la notificación personal de esta decisión al sentenciado, lo cual fue enviado a los correos electrónicos juridica.epccartagena@inpec.gov.co / juridica.epccartagena@inpec.gov.co el día 10 de junio de 2020.

Una vez verificado el correo electrónico dicho Establecimiento Carcelario, no remitió a este Juzgado lo pertinente al trámite de notificación al interno BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA.

Analizadas las diligencias se tiene que el sentenciado dentro del presente asunto ha descontado pena desde el **26 de julio de 2017**, pues se infiere que hasta el día **1 de diciembre de 2019**, fecha en la cual fue capturado por el radicado CUI 132446001117201901773, delito Fuga de Presos, ha cumplido un tiempo de **28 meses y 19 días** de la pena principal de 32 meses impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, en sentencia del 21 de enero de 2019. El sentenciado NO cuenta con redenciones de pena reconocidas.

A través de auto de sustanciación No. 0134 del 28 de enero de 2022, este Juzgado dispuso oficiar al Dg. Rodríguez Jaider Alberto – Jurídica EPMSC Cartagena, con el fin de informar de la situación jurídica del sentenciado, y se solicitó que una vez cesaran los motivos por los cuales se encontraba recluido en ese Establecimiento Carcelario el infractor **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA, fuera trasladado a su domicilio ubicado en la VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca,** dada su condición de privado de la libertad en prisión domiciliaria dentro del presente asunto, mientras se decide sobre la posible REVOCATORIA del sustituto penal otorgado por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, en sentencia del 21 de enero de 2019.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Verificado el correo institucional, NO se recibió la notificación del sentenciado respecto del auto de sustanciación No. 0297 del 26 de mayo de 2020, por el cual se corrió el traslado del art. 477 del C.P.P.

Se recibe a través del correo institucional el día 27 de noviembre de 2023 y el día 29 de noviembre de 2023, la comunicación suscrita por la Dra. Milena Beltrán Pérez – Oficina Jurídica CPMS Cartagena, mediante la cual indica:

"(…) POR MEDIO DEL PRESENTE MUY RESPETUOSAMENTE ME PERMITO SOLICITAR A SU DESPACHO SE INFORME A ESTE CENTRO PENITENCIARIO SI DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA SE ENCUENTRA VIGENTE LA PRISIÓN DOMICILIARIA A FAVOR DEL SEÑOR SANTOS MENDOZA BRAYAN, ESTO POR CUANTO EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 LE LLEGÓ ORDEN DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA ORDENADA POR EL JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS DE ESTA CIUDAD DENTRO DEL CUI 25430600066020190060 0 POR EL DELITO DE FUGA DE PRESOS. (…)".

En efecto, este Juzgado mediante auto de sustanciación No. 1140 del 29 de noviembre de 2023, legalizó la disposición del infractor y solicitó ante la Oficina Jurídica CPMS Cartagena, **la conducción de manera inmediata del infractor a su lugar de domicilio ubicado en la VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca**, lugar donde deberá continuar purgando pena en prisión domiciliaria dada su situación de privado de la libertad dentro del presente asunto y se requirió que informe sobre el trámite de traslado solicitado.

De igual manera, se ordenó correrle el traslado del art. 477 de la Ley 906 de 2004; al condenado para que presentara las explicaciones y pruebas que considere pertinentes sobre la comisión de nuevo delito estando en prisión domiciliaria (CUI 13244600111720190177 3, delito Fuga de Presos) advirtiéndole sobre la posible revocatoria de la prisión domiciliaria concedida por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca en sentencia del 21 de enero de 2019.

El condenado allegó los descargos del artículo 477 del C.P.P., el día 1 de diciembre de 2023, a través de la oficina de Jurídica CPMS Cartagena.

En vista que en el expediente no obra una dirección electrónica para notificación del condenado, se deja constancia que la oficial mayor de este Juzgado se comunicó el día 1 de marzo de 2024 siendo las 08:30, 10:30 y 16:00 horas y el día 4 de marzo de 2024 siendo las 08:10 horas, a los abonados telefónicos 3007329478 – 3218267973 los cuales responden "sistema correo de voz", sin embargo, se logró establecer comunicación el día de hoy 4 de marzo de 2024 siendo las 08:50 horas al móvil 3202376217, llamada atendida por la señora ARACELY ESTER MENDOZA MALO – progenitora del condenado -, quien indicó que el día jueves 29 de febrero de 2024 en horas de la mañana recibió llamada del INPEC DE CARTAGENA quienes le dijeron que el interno sería trasladado al INPEC BOGOTA LA MODELO y luego hacia el domicilio VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca, a lo que la señora ARACELY les manifestó que no recibiría al hijo por mal comportamiento y también al encontrarse interna trabajando en una casa de familia, sería una situación difícil de manejar con su propio hijo y un problema para ella misma.

Por lo anterior, la oficial mayor de este Juzgado se comunicó en la fecha a las 09:00 horas, con el área jurídica de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, llamada atendida por el DG. EDWIN CRUZ, quien conformó que el condenado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** se encuentra recluido en celdas primarias en ese establecimiento carcelario en espera a traslado de domicilio, y según lo manifestado por el infractor, solicita cambio de domicilio para que sea trasladado hacia la ciudad de Cartagena.

Una vez verificado el correo institucional, consta que la Oficina de Jurídica CPMS Cartagena, NO informó a este Juzgado sobre el traslado del condenado hacia las instalaciones de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, por lo tanto, el infractor se encuentra purgando pena dentro del presente asunto recluido en el mencionado establecimiento carcelario (celdas primarias).

En este orden de ideas, ingresan las presentes diligencias para el estudio de la libertad por pena cumplida del infractor.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación*

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

temprana, provisional o temporal, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 Competencia

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos a mediados del año 2017, el señor **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA,** fue investigado y judicializado bajo el imperio de la ley 599 de 2000 y 906 de 2004. Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la domiciliaria, según lo señala el artículo 38 y ss de la ley 906 de 2004.

De igual manera es competente por el factor territorial, como quiera que el condenado se encuentra privado de la libertad bajo prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., en la **VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca** y vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo - correspondiente al Circuito Penitenciario y Carcelario de este juzgado determinado por el Consejo Superior de la Judicatura.

4.2. Sobre la Prisión Domiciliaria

Como quiera que al condenado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, en sentencia del 21 de enero de 2019, le concedió la prisión domiciliaria art. 38G del C.P.-, el condenado transgredió a las obligaciones que impone el artículo 38G del C.P., como quiera que cometió un nuevo delito comisión de nuevo delito estando bajo el sustituto penal (CUI 132446001117201901773, delito Fuga de Presos), siendo capturado el 1 de diciembre de 2019 y recluido en el EPMSC de Cartagena, motivo por el cual este Juzgado mediante auto de sustanciación No. 0297 del 26 de mayo de 2020 y por auto de sustanciación No. 1140

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

del 29 de noviembre de 2023, ordenó correr el traslado del artículo 477 de la Ley 906 de 2004, para que allegara las explicaciones sobre esta transgresión.

El condenado allegó los descargos del artículo 477 del C.P.P., el día 1 de diciembre de 2023, a través de la oficina de Jurídica CPMS Cartagena, en el cual indicó:

"(…) ME DIRIJO MUY RESPETUOSAMENTE A SU HONORABLE DESPACHO CON EL FIN DE EXPLICARLES EL MOTIVO POR EL CUAL ME DIRIJO AL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR YA QUE HAY SE ENCUENTRA MI ARRAIGO FAMILIAR YA QUE ME ENCONTRABA MAL DE DINERO POR LO CUAL TOME EL ATREVIMIENTO DE DIRIGIRME AL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR YA QUE TENGO MI NUCLEO FAMILIAR EL CUAL SE ENCUENTRA MI SEÑORA ABUELA
NOMBRE: NURIS DEL ZOCORRO MAL CHAMORRO
C.C. 33286239
DIRECCION CALLE 35 A CON 45
TELEF: 321544218
DOCTORA LE PIDO MIL DISCULPAS POR NO HABERME PRONUNCIADO A SU HONORALBE DESPACHO YA QUE FUI CAPTURADO EL CUAL 01/12/2019 EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR POR EL CUAL FUI CAPTURADO EN JUNIO DE 2017 HASTA LA FECHA 01/12/2023 EL CUAL ME OTORGO PRISION DOMICILIARIA YA QUE ME ENCONTRABA MAL ECONOMICAMENTE POR ESO TUVE EL ATREVIMIENTO DE TRASLADARME AL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR DONDE ALLA SE ENCUENTRA MI ARRAIFO FAMILIAR COMO LO SOLICITE EN LA PARTE MOTIVA. YA QUE FUI NOTIFICADO POR LIBERTA POR TERMINOS VENCIDOS POR LA PRISION DOMICILIARIA (…)".

En vista que en el expediente no obra una dirección electrónica para notificación del condenado, se deja constancia que la oficial mayor de este Juzgado se comunicó el día 1 de marzo de 2024 siendo las 08:30, 10:30 y 16:00 horas y el día 4 de marzo de 2024 siendo las 08:10 horas, a los abonados telefónicos 3007329478 – 3218267973 los cuales responden "sistema correo de voz", sin embargo, se logró establecer comunicación el día de hoy 4 de marzo de 2024 siendo las 08:50 horas al móvil 3202376217, llamada atendida por la señora ARACELY ESTER MENDOZA MALO – progenitora del condenado -, quien indicó que el día jueves 29 de febrero de 2024 en horas de la mañana recibió llamada del INPEC DE CARTAGENA quienes le dijeron que el interno sería trasladado al INPEC BOGOTA LA MODELO y luego hacia el domicilio VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca, a lo que la señora ARACELY les manifestó que no recibiría al hijo por mal comportamiento y también al encontrarse interna trabajando en una casa de familia, sería una situación difícil de manejar con su propio hijo y un problema para ella misma.

Por lo anterior, la oficial mayor de este Juzgado se comunicó en la fecha a las 09:00 horas, con el área jurídica de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, llamada atendida por el DG. EDWIN CRUZ, quien conformó que el condenado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** se encuentra recluido en celdas primarias en ese establecimiento carcelario en espera a traslado de domicilio, y según lo manifestado por el infractor, solicita cambio de domicilio para que sea trasladado hacia la ciudad de Cartagena.

Una vez verificado el correo institucional, consta que la Oficina de Jurídica CPMS Cartagena, NO informó a este Juzgado sobre el traslado del condenado hacia las instalaciones de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, por lo tanto, el infractor **se encuentra purgando pena dentro del presente asunto recluido en el mencionado establecimiento carcelario (celdas primarias).**

Sin embargo, este Juzgado nota con preocupación la situación que se está presentando con los domiciliarios, no solo en los municipios a los que se les vigila la pena (Circuito de Funza, Villeta y Facatativá) sino a nivel nacional, en la que no existe un control de vigilancia

de parte de los funcionarios del INPEC, debido a diferentes situaciones, como el personal, la ubicación, la congestión vehicular, el presupuesto, ahora el COVID 19 etc., que han generado una vigilancia deficiente. A pesar del escaso personal con que contamos (asistente social, asistente administrativo, secretaria y sustanciador) no se pudo ordenar la visita debido a las normas de salubridad impuestas por la OMS, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura. Complementa lo anterior que de parte del INPEC están cerrando las cárceles a nivel departamental creando una congestión sobre la vigilancia de los implicados que se encuentren con este mecanismo sustitutivo como se presentó recientemente con la Cárcel de Zipaquirá y Funza cuya responsabilidad recae en las de Bogotá, o actualmente en la de Villeta ya que son un volumen alto de personas que se encuentran con este mecanismo sustitutivo.

Al respecto se trae a colación reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que señaló:

*"…**2.4.** Las premisas normativas antes mencionadas, así como los antecedentes particulares del caso sometido a consideración de la Corte, permiten deducir las siguientes reglas:*

i) El estatus jurídico de detenido lo adquiere el procesado en virtud de la respectiva orden judicial, una vez la misma se materialice, lo que se aviene a lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución Política sobre la reserva judicial para la afectación de la libertad. Esa condición no varía por el hecho de que la privación de la libertad se materialice en su domicilio o en un centro carcelario. La condición de detenido o privado de la libertad se mantiene hasta que la autoridad competente disponga lo contrario, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley.

ii) Por tanto, si a una persona privada de la libertad en su domicilio se le atribuye el incumplimiento de las obligaciones que debe cumplir para mantener ese beneficio, se abre la posibilidad del cambio de sitio de reclusión, sin que ello implique que su situación jurídica – de detenido – varíe automáticamente, pues ello solo puede ocurrir por dos razones: (a) que un juez disponga su libertad, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley; o (b) que se demuestre que el detenido domiciliariamente se sustrajo al régimen de privación de la libertad.

iii) Además, la condición de detenido y la privación de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria no están supeditadas a la realización de las correspondientes visitas de control a cargo del INPEC, porque aquellas son labores de «apoyo» encaminadas a garantizar el cumplimiento de la condena en el domicilio[4]. (…)

Más adelante complemento:

"…Además, como se dijo en páginas precedentes, las trasgresiones al régimen de la prisión domiciliaria imponen la inminente privación de la libertad en centro carcelario, pero de no disponerse ésta, habrá de entenderse que el condenado continúa purgando la condena en el domicilio fijado, siempre que no se acredite su evasión del mismo…"[5]

Se itera, sería el caso de emitir pronunciamiento sobre la posible revocatoria del sustituto de prisión domiciliaria del sentenciado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** identificado con C.C. No. 1.070.926.949, **quien se encontraba en prisión domiciliaria en la VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota**

4 CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 38C. CONTROL DE LA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad **con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario** (Inpec).
El Inpec deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le **informará al Despacho Judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena**.
5 CSJ T Radicación N° 106432 (03-09-19) M.P. Dra Patricia Salazar Cuellar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Cundinamarca, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, de no ser porque, actualmente se encuentra recluido en la CPMS BOGOTA LA MODELO – *celdas primarias* -, en espera de ser trasladado al mencionado domicilio, motivo por el cual, y en aras de no vulnerar los derechos constitucionales que le asisten al infractor, este Juzgado procede a resolver la libertad por pena cumplida.

4.3. Sobre la Libertad por pena cumplida

Analizadas las diligencias, se tiene que **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el 26 de julio de 2017 hasta el día 1 de diciembre de 2019** fecha en la cual fue capturado por el radicado CUI 132446001117201901773, delito Fuga de Presos, por lo que ha cumplido un tiempo de **28 meses y 19 días**

Luego, la Dra. Milena Beltrán Pérez – Oficina Jurídica CPMS Cartagena, el día 29 de noviembre de 2023, deja a disposición al interno, ante este Juzgado por lo que a través de auto de sustanciación No. 1140 del 29 de noviembre de 2023 se legalizó la disposición de **BRAYAN ANDRES SANTOS MENDOZA** y solicitó ante esa oficina jurídica, **la conducción de manera inmediata del infractor a su lugar de domicilio ubicado en la VEREDA EL ABRA ALTO DE LA CRUZ FINCA LAS ACACIAS en el municipio de Cota Cundinamarca**, lugar donde deberá continuar purgando pena en prisión domiciliaria dada su situación de privado de la libertad dentro del presente asunto y se requirió que informe sobre el trámite de traslado solicitado.

Una vez verificado el correo institucional, consta que la Oficina de Jurídica CPMS Cartagena, NO informó a este Juzgado sobre el traslado del condenado hacia las instalaciones de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, por lo tanto, el infractor **se encuentra purgando pena dentro del presente asunto recluido en el mencionado establecimiento carcelario (celdas primarias).**

En efecto, se tiene que el condenado **a partir del día 29 de noviembre de 2023 continuó purgando pena de manera intramural, ya que no se materializó el traslado al referenciado domicilio, y se encuentra recluido en la CPMS BOGOTA LA MODELO (celdas primarias).**

Ahora bien, conforme a lo anteriormente expuesto, se tiene que **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** ha purgado pena dentro del presente asunto en dos oportunidades: i) **desde el 26 de julio de 2017 hasta el día 1 de diciembre de 2019** fecha en la cual fue capturado por el radicado CUI 132446001117201901773, delito Fuga de Presos (28 meses y 19 días) y; ii) **desde el 29 de noviembre de 2024** fecha en que fue dejado a disposición por la oficina jurídica CPMS Cartagena hasta el día de hoy (3 meses y 6 días)

Así las cosas, se infiere que el interno hasta la fecha acumula un total de **31 meses y 25 días,** lo que significa que cumple la pena impuesta de **32 MESES DE PRISIÓN** el próximo **9 DE MARZO DE 2024**

En efecto, se tiene que, del cumplimiento físico de la pena principal de **32 meses de prisión**, impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, en sentencia del 21 de enero de 2019, **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** cumple la pena de prisión impuesta a partir del día **9 DE MARZO DE 2024**, fecha desde la cual se concederá la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.

Acorde con lo anterior y de conformidad con lo normado en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) la Secretaría del Despacho oficiará a las entidades a las que se les comunicó la sentencia y se cancelarán las órdenes de captura que en su contra pudiesen existir por cuenta del presente asunto, rindiendo los informes de ley.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Sobre el tiempo en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado (…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[6]

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **BRAYAN ANDRES SANTOS MENDOZA** por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva **pero sólo a partir del 9 de marzo de 2024**

Ahora bien, en lo que respecta a la interdicción de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** identificado con C.C. No. 1.070.926.949. En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.
En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría este despacho REMITIR las presentes diligencias al Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, para su archivo definitivo.

La libertad se hará efectiva para ante las directivas de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C – LA MODELO -, **pero sólo a partir del 9 DE MARZO DE 2024, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD**

[6] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046) (23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERA SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.

4.4. Sobre la Comisión y Notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo – (celdas primarias), se ordena por la secretaría de este Despacho **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al prenombrado el contenido del presente auto.

Por la Secretaría del Juzgado, PROCÉDASE a librar la **BOLETA DE LIBERTAD** a favor de **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** identificado con C.C. No. 1.070.926.949, **pero solo a partir del 9 de marzo de 2024** y ante las directivas de la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. – LA MODELO -, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).
En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.
Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo*

230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[7], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad…"[8]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[9]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6. DECISIÓN

---

[7] Ibídem.
[8] CSJ T **102248**
[9] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ-CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que el sentenciado **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** identificado con C.C. No. 1.070.926.949, hasta la fecha acumula físicamente un total de **31 meses y 25 días**, motivo por el cual cumple a partir del **9 DE MARZO DE 2024** con el total de la pena de **32 meses de prisión** impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, en sentencia del 21 de enero de 2019

SEGUNDO. - CONCEDER a BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA, LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, **pero solo a partir del 9 DE MARZO DE 2024**, conforme a lo consignado en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

CUARTO. – En lo que respecta a la interdicción de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** identificado con C.C. No. 1.070.926.949, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

QUINTO. - Teniendo en cuenta que **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo – (celdas primarias), se ordena por la secretaría de este Despacho **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al prenombrado el contenido del presente auto.

SEXTO. – ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA** en razón de este proceso.

SÉPTIMO. - En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría este despacho REMITIR las presentes diligencias al Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, para su archivo definitivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación**.**

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

BOLETA DE LIBERTAD No. 0021

FECHA	**CUATRO (04) DE MARZO DE 2024**

Señor Director: **CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. – LA MODELO -.**

Sírvase poner en libertad a: **BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA.-**

Cédula de Ciudadanía No. **1.070.926.949 EXPEDIDA EN COTA CUNDINAMARCA.-**

Lugar de nacimiento: **BOGOTA D.C.-**

Fecha de Nacimiento: **1 DE FEBRERO DE 1999.-**

Delitos: **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.-**

Estado Civil: **SOLTERO. -**

Profesión u oficio: **MECANICO DE MOTOS.-**

Nombres de los padres: **ARACELY ESTER MENDOZA MALO Y JOSE NICANOR SANTOS SALINA.-**

Nombre del conyugue: **N/A .-**

Motivo de libertad: **LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 9 DE MARZO DE 2024.-**

CUI: **25175610800520178027 9.-**

Número Interno: **2019-0476.-**

Autoridades que conocieron: **25175610800520178027 9 – FISCALIA URI MADRID CUNDINAMARCA, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS, JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE FUNZA CUNDINAMARCA CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO Y ESTE ESTRADO JUDICIAL 2019-0476.-**

OBSERVACIONES: ESTA LIBERTAD SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DEL 9 DE MARZO DE 2024, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTENCIADO BRAYAN STIVEN SANTOS MENDOZA, NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN. –

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 04 de 2024: Al despacho el proceso contra **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** identificado con C.C. No. 3.159.662, con los documentos emitidos por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, mediante los cuales se solicita el estudio de la libertad condicional y el reconocimiento de redención de pena al infractor, documentación contenida dentro del expediente el cual se recibió el día 21 de febrero de 2024, procedente del CSJ de Villeta Cundinamarca. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo cuatro (04) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0076

CUI	**25875600069820220008O**
Número Interno:	**2024-0038**
Sentenciado:	**ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA**
Delito:	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Sitio de Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL RECONOCE REDENCIÓN TRABAJO, ESTUDIO**

1. MOTIVO DE LA PROVIDENCIA

Procede el despacho a pronunciarse respecto a la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para resolver sobre la libertad condicional y el reconocimiento de redención de pena del interno **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** identificado con C.C. No. 3.159.662, quien descuenta pena en el mencionado penal.

2. CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el

sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 3 de abril de 2022 el Juzgado Penal del Circuito de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia del 13 de octubre de 2023, **CONDENÓ** a **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** como autor del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SIMPLE** a la pena principal de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISION** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63, 38 y 38B del C.P., debiendo cumplir la pena en establecimiento carcelario que señale el INPEC. ABSOLVIÓ al infractor del cargo de ser autor del delito de acceso carnal violento agravado.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, mediante decisión del 8 de febrero de 2024, CONFIRMÓ el fallo condenatorio por el delito de violencia intrafamiliar, el cual cobró ejecutoria el 15 de febrero de 2024

ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 3 de abril de 2022**[1] (el Juzgado Promiscuo Municipal de San Francisco Cundinamarca, en audiencia del 4 de abril de 2022 legalizó la captura del infractor y le medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión – art. 307 literal A numeral 1º del C.P.P.).

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0138 del 27 de febrero de 2024

En la presente oportunidad ingresan las diligencias al despacho, con la documentación emitida por la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y el reconocimiento de redención de pena al sentenciado.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total,*

[1] Carpeta C02 – carpeta expediente allegado Juzgado Promiscuo Municipal San Francisco 15-12-23 – archivo 05 Acta audiencia legalización captura – archivo 12 acta audiencia imposición medida de aseguramiento – archivo 14 Boleta Detención – expediente digitalizado

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos **el 3 de abril de 2022** el sentenciado **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO**. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18559802	Del 3 de mayo al 30 de junio de 2022	CPMS VILLETA – Regional Central	---	240	Sobresaliente	Buena
18711043	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022	CPMS VILLETA – Regional Central	---	366	Sobresaliente	Buena
18893948	Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	---	570	Sobresaliente	Buena
18893948	Del 1 de mayo al 30 de junio de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	216	---	Sobresaliente	Buena
18974620	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	488	---	Sobresaliente	Buena
19066646	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	476	---	Sobresaliente	Buena
19131700	Del 1 de enero al 15 de febrero de 2024	CPMS VILLETA – Regional Central	256	---	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**1436**	**1176**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que:

Las **1436** horas **por concepto de trabajo** al hacer la conversión corresponden a **89.75 días**, es decir, **2 meses y 29.75 días**

Las **1176** horas **por concepto de estudio** corresponden a **98 días**, es decir, **3 meses y 8 días**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **SEIS (6) MESES Y SIETE PUNTO SETENTA Y CINCO (7.75) DÍAS,** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3.- De la Libertad Condicional

Con relación al beneficio de Libertad Condicional, expresa el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, que para su concesión deben cumplirse la totalidad de los requisitos a saber:

> *"**ARTÍCULO 64. Libertad condicional**. El juez, PREVIA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
> 2. *Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
> 3. *Que demuestre arraigo familiar y social.*
>
> *Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.*
>
> *En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.*
>
> *El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario"*[4] (Subrayado y negrilla fuera de texto).

La norma en cita está directamente ligada y supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

> ***Art. 471.-** "El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.*
>
> *Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional."* (Subrayado fuera del texto original) [5]

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"Parágrafo 1°.** En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

---

[4] Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014
[5] Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** delimitó su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma**,** sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP),** NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario, a pesar que los delitos endosados se encuentran como excluidos en la mencionada norma, no los tendrá en cuenta – **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -**, para el mecanismo sustitutivo a estudiar.

4.4. Valoración de la conducta punible.

Dentro de unos hechos constitutivos que infrinjan los derechos de la comunidad, el Estado representado por el ente investigador, en su etapa previa y por los jueces en su juzgamiento, nos llevan a una punibilidad dentro de un proceso penal que finaliza con una absolución o condena de un individuo. Si es ésta última, se impone o suspende una pena privativa de la libertad.

En este ciclo privativo el condenado puede hacer uso de subrogados o mecanismos sustitutivos, como la libertad condicional contemplado en el artículo 64 del C.P. Ésta configura la oportunidad de que la persona que está condenada y se encuentra privada de la libertad - intramural o domiciliariamente - puede cesar dicho estado impuesto en sentencia condenatoria. Para su concesión, el juez, a quien le corresponde por competencia, estudiará los requisitos que exige la norma entre los que se encuentra previamente, la valoración de la conducta, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2014.

Esta valoración inicio en la adición concebida por el legislador como “gravedad de la conducta” en la Ley 890 de 2004 y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad en la sentencia C-194 de 2005, en el que señaló que el juez de Ejecución no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de la evaluación de la procedencia del subrogado penal. Allí dejó claro que el juez no quedaba autorizado para valorar dicha *“gravedad”* ya que lo que la norma señalaba era que se debería tener en cuenta de parte del funcionario era *“la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal”.*

Con la modificación incorporada por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 el legislador condicionó la concesión del beneficio de libertad condicional a la ***“previa valoración de la conducta punible”*** suprimiendo la palabra *“gravedad”* de la disposición anterior, de lo que se ha derivado una diversidad de interpretaciones por parte de los jueces vigilantes, sin embargo, este Despacho se sostiene en el criterio aplicado con antelación en el sentido de hacer tal valoración siempre y cuando sobre el punto se haya pronunciado el juez fallador.

Lo anterior con base en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia **C-757 de 2014** en donde determina una vez más que en las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas para decidir sobre el beneficio de libertad condicional deben tenerse en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez fallador en la sentencia, ya fueran favorables o desfavorables.

Ello significa que el Juez de Ejecución de Penas podrá valorar la conducta de conformidad con el artículo 64 del Código Penal, en la medida en que sobre tal aspecto se haya pronunciado el juzgado fallador o en su defecto la segunda instancia. Del mismo modo indica lo anterior que la redacción del mencionado artículo 64 del C.P., *"no establece qué elementos de conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni establece los parámetros a seguir para asumir las valoraciones que de ella hicieron previamente los jueces penales"*[6]

En efecto, el juez ejecutor se somete a las consideraciones expuestas por el juez que resolvió la situación jurídica del procesado a través de su fallo condenatorio.

Así lo manifestó la H. Corte Suprema de Justicia:

"Respecto a la valoración de la conducta punible, la Corte Constitucional, en sentencia CC C-757-2014, teniendo como referencia la Sentencia CC C-194-2005, determinó, en primer lugar, cuál es la función del juez de ejecución de penas y, de acuerdo a ésta, cuál es la valoración de la conducta punible que debía realizar.

«[E]l juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. […]

[L]os jueces de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario, el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal»[7]*.*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y analizando los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional se tiene que cuando se va a analizar la conducta por parte de los Jueces de Ejecución de Penas, en cualquiera de sus dos interpretaciones, la de la Ley 890 de 2004 "gravedad" y en la modificación de la Ley 1709 de 2014 "conducta", declaradas exequibles en las sentencias arriba relacionadas, C-195-04 y C-757-14, la conclusión dada por el máximo Tribunal Constitucional fue la siguiente:

> *"En los mismos términos,* ***cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal****"*[8]:
> (Resaltado fuera del texto original)

Efectivamente conforme a lo expuesto y dado el análisis e interpretación dada sobre dicho pronunciamiento, no se puede someter nuevamente al condenado con el estudio hecho por el juez fallador en el momento en que dosificó las conductas penales, esto es ni por la censura ni con la "misma óptica en que se produjo la condena". Tampoco puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de dicha evaluación, pero no queda autorizado para valorar la gravedad de la conducta, lo que se debe tener en cuenta por parte del funcionario es la gravedad del comportamiento punible, *calificado y valorado*

[6] CSJ T 107644 (19-11-19)
[7] CSJ T-119389 (30-09-21)
[8] Corte Constitucional, sentencia C-194 de 2005

previamente en la sentencia por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal.

Ello significa que el juez vigilante debe someterse no a la valoración que hizo el de conocimiento en el momento de la dosificación de la pena, que es su motivación para "dosificar" la conducta, o conductas endilgadas al imputado, sino al pronunciamiento en los mecanismos sustitutivos de la pena cuando se pasa a la audiencia del artículo 447 del C.P.P.

Y debe de ser así porque si el funcionario que vigila la pena se sometiera a lo consignado por el juez de conocimiento al momento en que dosifica las conductas, estaríamos frente a una eventual negativa de las solicitudes de los mecanismos sustitutivos solicitados, sobre todo el de la libertad condicional.

Se entiende que en el instante de evaluar la posible libertad del implicado debe hacerse desde la óptica de lo expuesto por el fallador al momento en que se pronuncia, que es obligatorio, en la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria (art 63 y 38 C.P.), audiencia esta indispensable para que se logre a través de los condenados acceder a cualquiera de estos postulados y si el fallador ve que de acuerdo a la situación fáctica se tenga que pronunciar sobre la "gravedad" de conducta, así lo hará, momento éste en que el juez de Ejecución de basa para estudiar la posibilidad de conceder o negar el mecanismo sustitutivo solicitado.

Como se señaló, han existido varias interpretaciones al respecto no solo de parte de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia que enmarcan un criterio y lineamiento para analizar, estudiar y decidir sobre este tópico.

En una decisión del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria[9], se analizó la gravedad de la conducta y la conducta punible basado en el pronunciamiento que se hizo por parte del fallador en el momento procesal de cuantificación de las penas, en el que se hizo un reproche sobre la conducta del implicado, no ocurriendo lo mismo en el momento en que se pronunció ante los mecanismos sustitutivos de la pena.

> *"…:* ***VIII. DE LAS PENAS:***
>
> *VIII.4. Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada superó de modo importante su tope básico, necesaria para configurar el delito, en tanto significó cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos al margen de la ley, con menoscabo de los valores que nutren un Estado democrático; el daño fue significativo, porque se fundió en unas mismas personas las condiciones de agentes de grupos ilegales y del Estado; la seguridad pública sufrió grave deterioro amén su legitimidad; la intensidad del dolo se verificó mayor, dado que inició con la coalición político-paramilitar que condujo a sus elecciones en el Congreso de la República y se extendió durante el ejercicio alternado del cargo cada uno por un año; aunada la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución.*
>
> *VIII.5. Se tiene en cuenta que aunque la concertación con pretensiones políticas del señor (…), con un grupo armado al margen de la ley tuvo las connotaciones antes referenciadas, que motivan el incremento de las penas, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa en su corto tiempo de ejercicio él haya propiciado acciones concretas que redundaran selectivamente en beneficio de esos colectivos criminales, lo que de algún modo informa un retraimiento en el componente lesivo del delito, tanto que el testimonio del propio (…) por momentos asumió el carácter de reclamo, lo que en perspectiva, aunada*

[9] C.S.J Rad 44195 (03-09-14)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

la carencia de antecedentes penales, desaconseja penas superiores a las determinadas; por eso no se le impone el máximo permitido en la ley.

IX. DE LA LIBERTAD:

No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria, por impedirlo un requisito objetivo; en el primer caso porque la ley sólo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y, en el segundo, porque sólo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de la condena sea de 5 años o menos, acorde con lo establecido en los artículos 63-1 y 38 del Código Penal, presupuesto que no se satisface…" [10]

Posterior, en los fallos de la Corte Constitucional C-233-16, T-640-17 y C-265-17 determinó que se debe tener en cuenta, para los jueces de ejecución de penas, que la finalidad constitucional de la pena no está en el castigo del condenado sino en su resocialización como la garantía que nos brinda el artículo 5° de la Ley 65 de 1993, - dignidad humana -[11]. Esto nos lleva a velar por la reinserción social apoyada por la educación que se les brinde en los Centros Carcelarios a los penados en forma intramural o domiciliaria con el fin de humanizar la pena como lo señala el artículo 1° de la C.N[12].

Del mismo modo la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que el Juez de Ejecución de Penas debe tener en cuenta la participación del condenado en las diferentes actividades de readaptación y/o resocialización dentro de los Centros Carcelarios y buscar la reinserción del que ha cometido un error y lo está subsanando.

En reciente exposición, en sede de tutela de parte del mismo órgano de cierre, hace un recuento sobre la *"amplitud de posibilidades hermenéuticas con respecto a la valoración de la conducta punible"* y el guiarse por los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad *"como bien lo es el principio pro homine – también denominado cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos"*, centrándola en lo más favorable al hombre y sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

En dicha providencia advierte que[13]:

***"…i)** No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.*

En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;

***ii)** La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;*

---

[10] Rad 44195 y 33713

[11] **ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.** <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.
Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

[12] **ARTICULO 1o.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

[13] C.S.J Rad T-107644 (19-11-19) M.P. Patricia Salazar Cuéllar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

> ***iii)*** *Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.*
>
> *Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.*
>
> *Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.*
>
> ***iv)*** *El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado…"*

Éste precedente ha sido reiterado en sentencias con radicados 111560 (28-07-20), 113578 (01-12-20); 115313 (23-03-21); 119257 (28-09-21) y 119389 (30-09-21) y en la providencia con radicado 59888 (15-09-21).

Así lo señaló en el Rad 119389:

> *"Tal postura fue ratificada recientemente en proveído CSJ AP4142-2021, 15 sep. 2021, rad. 59888, en los siguientes términos:*
>
> *[…] Tal como lo ha indicado esta Corporación[14], **la concesión de la libertad condicional depende del cumplimiento de todos los requisitos enlistados en el precepto transcrito, pues en su examen, el juez no puede prescindir de ninguna de las condiciones fijadas por el legislador, incluida, la valoración de la conducta, cuyo análisis es preliminar.***
>
> *(…)*
>
> *En línea con dicha interpretación, esta Corporación ha sostenido que:*
>
> *«La mencionada expresión –valoración de la conducta- prevista en el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, va más allá del análisis de la gravedad, extendiéndose a aspectos relacionados con la misma, sin que el juez ejecutor de la pena tenga facultad para soslayar su evaluación, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 del 15 de octubre de 2014»[15].*
> *[…]*
> *Así, es claro que para la concesión de la libertad condicional, resulta imperioso que el juez valore la conducta por la cual se emitió la condena, no obstante, se insiste, **tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad y los antecedentes de orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social**, por lo que en la apreciación de estos factores debe conjugarse el «impacto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes»[16]."[17]*

---

[14] CSJ AP8301-2016, Rad. 49278, CSJ AP5297-2019, entre otros
[15] CSJ AP3558-2015, Rad. 46119
[16] CSJ AHP5065-2021
[17] C.S.J. T-119389

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Ahora complementando lo anterior, en recientes pronunciamientos sobre este punto la H. Corte Suprema de Justicia concretó lo siguiente:

"6.6.2.3 Por último, obligado resulta traer a colación el auto de segunda instancia CSJ AP2977–2022, 12 jul. 2022, rad. 61471, no solo por su cercano proferimiento, sino por identificarse con la temática bajo examen, razón por la cual su trascendente alcance irradia al asunto que concita la presente decisión. En el mencionado proveído, así se discurrió:

> *[e]l análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el*
> *ordenamiento penal, dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991; y al mismo tiempo desvirtuaría toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.*
>
> *La anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C–757 de 2014 (declaró exequible la expresión: «previa valoración de la conducta» del artículo 64 del Códig[o P]enal), en el sentido que al analizar la procedencia de la libertad condicional el [j]uez de [e]jecución de [p]enas deberá:*
>
> > *«establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.»*
>
> *Es así como el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado, pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad, que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor tal como lo estipulan los artículos 6° numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10° numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del [b]loque de [c]onstitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Nacional).*
>
> *30.3 Corolario de ello, un juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad, debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno, sobre aspectos como la escueta gravedad de la conducta (analizada en forma individual); pues si así no fuera, la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva, que en nada contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulan la dignidad del ser humano. (…)*
>
> *30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca, no solamente los aspectos draconianos de las sanciones penales; entre ellos, que el conglomerado se comporte normativamente (prevención general); y que, tras recibir la retribución justa, el condenado no vuelva a delinquir (prevención especial); aunado a tales aspectos, las penas, en especial las restrictivas de la libertad, también se deben encaminar a que el condenado se prepare para la reinserción social, fin este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario y el comportamiento del condenado durante este, sea valorado, analizado, estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.*
>
> *Lo anterior, justamente con el fin de incentivar en el infractor, esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción, asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario, así como para brindar herramientas útiles al penado que le permitan prepararse para retornar a la vida en sociedad cuando recobre la libertad.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

> *30.5 Entenderlo de otra manera, sería tanto como establecer una prohibición generalizada que no ha sido prevista por el legislador para todos aquellos eventos en los que la conducta se evidencie objetivamente grave. (…)*
>
> *30.6 En ese orden de ideas, entender que la gravedad objetiva de la conducta es sinónimo de negación de la libertad condicional, equivaldría a extender los efectos de una prohibición normativa específica, sobre todos los casos que se estimen de notoria gravedad, sin haber sido así previsto en la ley; y tal expansión no es compatible con los derechos fundamentales de los condenados; pues los dejaría sin la expectativa de que su arrepentimiento e interés de cambio sean factores a valorar durante el tratamiento penitenciario, erradicando los incentivos y con ello, el interés en la resocialización, pues lo único que quedaría, es el cumplimiento total de la pena al interior de un establecimiento carcelario* [negrilla original del texto].

6.6.2.4 A las anteriores consideraciones, que en su integridad se ratifican, sólo es dable agregar lo siguiente:

Toda conducta punible es considerada un acto grave contra la sociedad, al punto que el legislador reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas, ella afecta los valores que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas, además del daño privado, el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal, necesarias para la convivencia pacífica.

La condición de grave o leve de una infracción delictiva da lugar a intensos e inacabados debates. Nadie ha de negar que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza –o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva–, implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social, verbigracia, los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida, la integridad personal, la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos, lo que de contera genera unánime rechazo social. Sin embargo, ello no soluciona la problemática a la hora de calificar el injusto.

La praxis judicial enseña que en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad –todas válidas si se quiere–, una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla, pero en el fondo sólo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida las razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que determinado proceder debía ser objeto de represión por el Estado.

La previa valoración del injusto típico introduce a la discusión argumentos de índole subjetivo que en nada contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal. (…)

Importa acotar que la Sala, por obvias razones, no se refiere a aquellas conductas que el propio legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, excluyó del subrogado de la libertad condicional, asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional en sentencia CC C–073–2010, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, «[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones». (…)

Por ello, precisó que «[e]l legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional». (…)

Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible, solo es posible frente a casos en los cuales el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por dicho motivo, como sucede con los previstos en los artículos 26 de la Ley 1121 y 199 de la Ley 1098 de 2006, pues, como se dijo en la decisión CSJ STP15806–2019, 19 nov. 2019, rad. 107644, atrás citada, «no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos»(…)

La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias. (…)

En suma, no es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado de la libertad condicional. Ello sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla de un sentido de retaliación social que, en contravía del respeto por la dignidad humana, cosifica al individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales."[18]*.(subrayado nuestro)*

Vemos que no solo en sede de tutela se presenta un criterio unificado sobre el tema, por lo que este juzgado estimará para los futuros análisis sobre la valoración de la conducta y se tendrá en cuenta no solo el pronunciamiento por parte del juez de conocimiento cuando se refiera a los mecanismos sustitutivos de la misma, sino en el instante en que motiva la dosificación de la misma, o si existe preacuerdo en el análisis de los delitos, del mismo modo en el transcurrir del proceso su comportamiento en el Establecimiento Penitenciario y establecer la necesidad de si el condenado debe continuar con el tratamiento penitenciario ponderándolo con la valoración de la conducta.

Lo anterior, nos lleva a que el juez de ejecución de penas está en la obligación no solo de lo señalado en la parte motiva para la dosificación de la pena impuesta al condenado, sino dilucidar las circunstancias que encierra esa conducta punible junto con la personalidad del infractor- hasta ese momento como sociales, personales, laborales, familiares y su adecuado comportamiento en el Centro Carcelario, su conducta, cursos alcanzados, - puntos que nos lleva a concluir si existe la necesidad de otorgar o no el subrogado invocado o por el contrario requiere de mayor tratamiento penitenciario.

El presente Caso:

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Juzgado Penal del Circuito de Villeta Cundinamarca, no hizo un despliegue con relación a la gravedad de la conducta endilgada al condenado, sino que simplemente se limitó a la dosificación punitiva que por ley le correspondió, sin embargo, indico, respecto a la responsabilidad del acusado, que conforme a las pruebas incorporadas en la audiencia de juicio se estableció que es una persona que comprendía la ilicitud de sus actos, pues conocía que realizaba un hecho que causaba daño a su compañera permanente, con quien compartía una unidad familiar, por lo que debía actuar de otra manera, pero lo ejecutó y la agredió físicamente, causándole serias e importantes lesiones en su humanidad y afectando gravemente el bien jurídico de la familia como célula básica de la sociedad.

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia relacionada entrará este juzgado a analizar como primera medida el no poder tener como razón para la negatoria de la libertad condicional la

[18] CSJ RAD 61616 (27-07-22) M.P. Dr Fabio Ospitia Garzón

sola insinuación de la conducta punible frente a los bienes señalados en el C.P., ya que esto es concurrente con prohibiciones señaladas por el legislador en ciertas leyes.

Del mismo modo dicha valoración no se puede hacer con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales.

El juez que vigila debe valorar de igual manera dentro de la punibilidad lo tenido en cuenta por el fallador, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes. En efecto se debe ajustar con el comportamiento del procesado en el Centro Carcelario con elementos útiles que permitan analizar si el condenado debe continuar cumpliendo la pena intramural o domiciliariamente y su participación en las diferentes actividades que tiene instituidas el INPEC como punto fundamental para su resocialización. Entonces no se debe tener en cuenta únicamente el bien jurídico afectado como única motivación para negar el subrogado invocado, se debe hacer un análisis completo, una carga motivacional que garantiza *la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.*

4.5. Sobre la resocialización de los condenados

Se tiene bien conocido que el Estado tiene unos deberes constitucionales y que le corresponde a través de los distintos poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional) diseñar la Política Criminal, esto en especial al Legislativo (Congreso de la República) que según lo señala el artículo 150 de la Constitución Nacional *"le corresponde hacer las leyes".*

La Política Criminal, se entiende como ***"el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener el orden social y hacerles frente a las conductas que atenten de forma grave contra el mismo y, así, proteger los derechos de los residentes en el territorio nacional y, puntualmente, a las víctimas de los delitos"***. En efecto, esta Política Criminal está enfocada a satisfacer, entre otros asuntos, el restablecimiento de las víctimas logrando la resocialización del autor o partícipe de la conducta penal.

Lo anterior significa que la política criminal del Estado es el de proteger, blindar, asegurar, resguardar a la sociedad optando que las medidas, decisiones y disposiciones guarden armonía con los principios en que se funda, sobre todo en las garantías que reconoce para sus conciudadanos.

El artículo 4° de la Ley 599 de 2000 indica que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Del mismo modo resalta que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión, ello significa que éstos buscan la resocialización del condenado.

El artículo 1º de la misma obra y de la Constitución Nacional señala que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. En efecto, para un Estado Social y Democrático se da la necesidad de prevenir el delito con el fin de asegurar la protección de sus habitantes, defenderlos de aquellos que infrinjan las normas contenidas en las leyes; sin embargo ello no obsta que ese derecho penal se debe encausar en respetar la dignidad del infractor como el de no imponer penas – pena de muerte o cadena perpetua – dándole la oportunidad a cada individuo de tener la capacidad para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse y volver a contribuir a la sociedad.

Ahora aquellas personas que por el andar de la vida cometen un error que los lleve a pagar una pena principal de prisión, el Estado prevé un tratamiento penitenciario cuya finalidad es la reforma y la readaptación del penado a la sociedad, el de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante un examen de personalidad que se logra a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario[19].

El principal objetivo es el preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad y debe realizarse conforme a la dignidad humana, anteriormente mencionada, y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto verificándola a través de los sistemas educativos y culturales de los Establecimientos Penitenciarios.

Se concluye que el tratamiento penitenciario es el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad[20].

Sobre este punto dentro de los innumerables pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, se concluyó:

> *"…(i) durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado…"*

Y en la Sentencia C-294-21 conceptuó:

> *"La resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o técnicas de tratamiento social o clínico que pretenden «cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno».*

En sentencia C-718-15, sobre la finalidad de la pena, indicó:

> *"…Así, en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la pena, no solo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también en el momento de su ejecución.*
>
> *Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[21] que, ella tiene en nuestro sistema jurídico **un fin preventivo**, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; **un fin retributivo**, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, **y un fin resocializador** que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los*

[19] *Ley 65 de 1993, art 10*
[20] *INPEC art 4º Resolución 7302 (23-11-05)*
[21] *Sentencia C-430 de 1996*

> *principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que "sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital". [22]*
>
> ***En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.***
>
> *El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén "orientados hacia **la efectiva resocialización** de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad".[23](Se resalta)…"*

Se suma, lo indicado en los artículos 94, 96 y 97 (Ley 65 de 1993) que estipulan sobre la educación como la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa evaluación de los estudios realizados hay lugar a que sea certificada por la autoridad designada para el efecto, disponiendo que será concedida por el Juez Vigilante, abonando 1 día de reclusión por 2 días de estudio.

Sobre la readaptación de los penados, la Sentencia T-061 de 2009, expresó que "*Las personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito, encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir la pena que les fue impuesta. Dentro de sus funciones, las cárceles se encargan de resocializar al individuo, con el fin de obtener la paz; es decir, permitiendo que el preso pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente productiva, impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles".*

Sobre ese tema esa Corte en Sentencia T-213 de 2011 reiteró lo afirmado en la providencia T-718 de 1999, según la cual: *"la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente".*

Y en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente:

> *"7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional peticionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal*

[22] *Sentencia C-144 de 1997*
[23] *Sentencia C-1404 de 2000*

y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación…[24]

Visto lo anterior, y en lo referente a lo decantando en la jurisprudencia mencionada[25] se tiene que a la fecha el infractor ha cumplido con una pena impuesta de (48 meses) **29 meses y 18.75 días**, superiores al porcentaje exigido por la norma con un 61.7% y vemos en su cartilla biográfica que desde el momento de su ingreso a centro carcelario su comportamiento intramuralmente y la calificación de conducta del interno ha sido en el grado de BUENA del 06/04/2022 hasta el 05/10/2023, y en el certificado de calificación de conducta expedido por las directivas de la CPMS VILLETA se observa BUENA desde el 06/10/2023 hasta el 16/02/2024, de ahí en adelante su rol ha sido óptimo para el sentido de su resocialización.

Del mismo modo vemos que su actuar ha sido destacado en el transcurso de dicho proceso, entonces, al purgar un total de pena física de **23 meses y 11 días**, cuenta con redenciones de pena reconocidas de **6 meses y 7.75 días**, por lo que nos arroja un total de **29 meses y 18.75 días** de la pena impuesta cumpliendo con ello elevar a más de un 61.7%, pues detallase que el condenado **desde el 3 de abril de 2022** siempre ha cumplido su reclusión de manera intramural.

Aunado a ello el comportamiento del infractor ha sido buena y sobre este aspecto a pesar de que nunca lo tacharon por su disciplina, se trae un pronunciamiento sobre este aspecto - CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA - de la Corte Suprema de Justicia:

"…Las anteriores reflexiones sirven para deducir que la valoración de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso, ni de una sola calificación, sino que debe realizarse, en cada caso concreto, de manera ponderada (principio rector, artículo 27, Ley 906 de 2004) y en forma integral, con análisis de la evolución del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusión, con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocialización y, por tanto, si merece ser motivado o incentivado el beneficio.

Al no existir norma específica que determine que una sola calificación de conducta inferior a buena, no conduce indefectiblemente a la negación de los beneficios, se debe aplicar por analogía el inciso final del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, que establece la consecuencia para quien observare mala conducta durante uno de los permisos, esto es, la suspensión de los mismos, pero no su cancelación, ésta se hace efectiva únicamente en caso de reincidencia.

Lo anterior significa que el legislador otorga un margen razonable de tolerancia frente a posibles errores de comportamiento en que puedan incurrir las personas beneficiadas y no impone la extinción del derecho por una sola falla. Si ello se aplica a quienes ya disfrutan del permiso, con mayor razón debe tenerse en cuenta como criterio de ponderación…"[26], fíjese que así hayan tenido en alguna oportunidad alguna calificación regular, no es óbice para la negatoria de alguno de los beneficios, aunque para el presente caso vemos que el infractor ha tenido un comportamiento y conducta buena.

Entonces vemos que **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** cumple, pues como lo decanta la jurisprudencia mencionada, no solamente es hacer alusión al bien jurídico afectado sino tener en cuenta *"**las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras,"*** el tener presente la armonía ***"con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.***

[24] C.S.J. Rad 1376 del 14-07-2020 M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
[25] RAD 107644
[26] C.S.J. T-Rad No. 89.755 del 24-01-2017, M.P. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Sobre la resocialización, señalo en reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Bogotá lo siguiente:

"Así las cosas, se parte de la base de entender consolidada una enmienda o resocialización de la persona que ha cumplido parte de la pena dentro de un establecimiento carcelario y ha observado durante ese tiempo buena conducta, sin que pueda presumirse en su contra o concluirse que no ha sido posible su resocialización o readaptación, pues, contrariamente, según la filosofía que encarnan las medidas de privación de la libertad, se presume que el tiempo de reclusión ha contribuido a la reflexión sobre la conducta por la cual fue condenado y a permitir su readaptación y resocialización hacía el futuro.

En consecuencia, afirmar lo contrario conllevaría a evidenciar argumentativamente la necesidad del absoluto cumplimiento de la pena, bajo el régimen penitenciario, como única vía para satisfacer los fines propósitos de la punibilidad en la legislación colombiana"[27].

4.6. Sobre las Fases del Tratamiento Penitenciario:

Dentro de las fases para el tratamiento penitenciario (art 144 Ley 65 de 1993) que nos señala la norma se tiene que ha cumplido con la clasificación que se establece pasando como primera medida por la fase de alta seguridad (periodo cerrado) en la que el interno accede al sistema de oportunidades en programas educativos y laborales, en periodo cerrado, permitiendo el plan de tratamiento orientándose a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades.

La fase de mediana seguridad en la que se accede de parte del interno a los programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, con medidas de seguridad menos restrictivas. Además, los programas educativos y laborales ofrecidos en esta fase se basan en la intervención individual y grupal, permitiendo la competencia psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal, no formal e informal, vinculándolos en actividades industriales, artesanales, agrícolas etc. Luego sigue la fase mínima en la que el interno se le orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral. Y por último la fase de confianza en la que tiene el tiempo requerido para la libertad condicional.

Según lo anotado por las directivas en la cartilla biográfica, no le figura sanciones disciplinarias, ni intentos de fuga en el tiempo que lleva recluido en la Cárcel tiene una calificación de conducta buena y ejemplar y con base a ese estudio las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta, le expidieron la respectiva resolución favorable para la libertad condicional[28].

Para este funcionario el tratamiento progresivo que ha recibido **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** durante la permanencia en el Centro Carcelario permite vislumbrar que su readaptación ha tenido frutos demostrando que su buena conducta, así como en las redenciones reconocidas por estudio, trabajo y/o enseñanza, y, como se señaló el disfrute y su buen desempeño de su primer contacto con su grupo familiar por lo que se deduce que ha tenido un excelente desempeño permitiendo inferir en este funcionario que ha logrado su resocialización.

4.7. Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

En lo atinente al cumplimiento del factor objetivo, determinado por la Ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes

[27] Tribunal Superior de Bogotá, T-RAD 11001220400020200121100 (21-05-20) M.P. Dr Luis Enrique Bustos Bustos
[28] Resolución No. 019 del 16 de febrero de 2024

de la pena principal de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN**, corresponde a **VEINTIOCHO (28) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS DE PRISION**. Teniendo en cuenta que el solicitante ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el 3 de abril de 2022** hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **23 meses y 11 días** de la pena impuesta.

El sentenciado cuenta con redención de pena de **6 meses y 7.75 días** reconocidas por este Juzgado en el presente auto interlocutorio No. 0076 de la fecha.

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA	3 de abril de 2022
TIEMPO FÍSICO:	23 meses y 11 días
TIEMPO REDIMIDO:	6 meses y 7.75 días
TOTAL DESCONTADO:	29 meses y 18.75 días
PENA PRINCIPAL:	48 meses
3/5 PARTES DE LA PENA	28 meses y 24 días

Así las cosas, al sumar ambos guarismos, el tiempo cumplido efectivo de la pena y el tiempo redimido, tenemos que **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA**, ha cumplido de la pena impuesta un total de **29 meses y 18.75 días de prisión**; tiempo superior a las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **48 meses de prisión** que como se dijo equivalen a **28 meses y 24 días**, razón por la cual el condenado solicitante **cumple** ampliamente con el requisito objetivo que demanda la normatividad.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad)[15]*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[29]

4.8. Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión.

Sea este el momento para resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado beneficio de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de este funcionario judicial, y que se encuentran dispuestos por el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, y por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que imponen la existencia de ciertos documentos emanados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde se certifica el cumplimiento de ciertos requisitos.

En el presente asunto, se emite por parte del director de la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Villeta Cundinamarca -, la Resolución No. 019 del 16 de febrero de 2024 en la cual se emite **CONCEPTO FAVORABLE** sobre las pretensiones del interno en lograr su libertad condicional, motivo por el cual el condenado **CUMPLE** con este requisito contemplado en el citado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal.

Analizada la cartilla biográfica vemos que efectivamente el infractor ha tenido un comportamiento "bueno" dando a entender que ha influido en su personalidad el sentido de la resocialización.

4.9. Del arraigo familiar

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

En el presente caso, verificando como corresponde el mencionado presupuesto –*arraigo familiar y social*- se observa en los documentos aportados por el condenado **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA**, que cuenta con un domicilio ubicado en la **Manzana D CS 16 Urbanización San Cristóbal del municipio de San Francisco Cundinamarca**, conforme se indica en el acta de DECLARACIÓN EXTRAJUICIO rendida ante la Notaría

[29] T.S. Bogotá Rad 11001-60-00-013-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

Única del Círculo de Villeta Cundinamarca, el día 16 de febrero de 2024, por la señora María Helena Herrera López (progenitora del condenado), quien manifiesta que está dispuesta a recibirlo en su casa y se compromete a ver por él económicamente mientras cumple y termina su condena.

Por lo anterior, el condenado **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** cumple con el citado requisito.

4.10. De la reparación a las víctimas

Respecto a la reparación de las víctimas, se tiene que el Juzgado Penal del Circuito de Villeta Cundinamarca, en el acápite - 9.- OTRAS DETERMINACIONES, indicó: *"Las víctimas o perjudicadas directamente o a través de su apoderado podrá dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión solicitar la apertura de incidente de reparación integral".*

Sin embargo, al quedar ejecutoriado el fallo condenatorio hasta el día **15 de febrero de 2024**, se infiere que este trámite se encuentra aún en términos, motivo por el cual la oficial mayor de este Juzgado se comunicó el día de hoy 4 de marzo de 2024, siendo las 15:00 horas al Centro de Servicios Judiciales de Villeta Cundinamarca, en donde le informaron que hasta la fecha NO se ha dado inicio al incidente de reparación integral, como quiera que la víctima NO ha radicado solicitudes al respecto.

Aunado a lo anterior, se observa que, los documentos de solicitud de libertad condicional se adjunta un comprobante de egreso suscrito por la señora Bibiana Uribe – C.C. 1.073.234.807, por la suma de $2.250.000, por concepto de indemnización daños y perjuicios por parte del señor Andrés González.

5. CONCLUSIÓN

Así las cosas, verificados y cumplidos como están los requisitos de carácter tanto objetivo como subjetivo que establece en su contenido original el artículo 64 del Estatuto Penal, se le reconocerá y otorgará el pluricitado subrogado penal de Libertad Condicional al sentenciado de marras. Previo al disfrute del beneficio, el condenado deberá suscribir la diligencia de compromiso con las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal, para la cual se le señalará el correspondiente periodo de prueba de acuerdo a lo ordenado en el artículo 64 del Código Penal que al respecto expresa:

"El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario."

De conformidad con lo anterior, como en el caso que nos ocupa el término faltante para cumplir la totalidad de la pena es de **18 meses y 11.25 días**, a fin de que el proceso de resocialización que le fue impuesto al solicitante cumpla los fines para los cuales se determinó, en aras de que el sentenciado enfoque positivamente su conducta absteniéndose de incurrir en cualquier tipo de delitos. Es de destacar que es un infractor primario, sin embargo, ésta será la oportunidad para que tome entera conciencia de que perciba que la pena responde a la finalidad de la resocialización como garantía de la dignidad humana. De este modo se tiene que los jueces de ejecución de penas velan por la reeducación y la reinserción social de los penados *"como una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, que permite humanizar la pena "*conforme está consignado en el artículo 1º de la Constitución Nacional y 5º de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ley dispone que para garantizar las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal (Ley 599 de 2000), debe constituirse la caución

prendaria, en atención a las condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal sobre **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA**, se fijara caución en el equivalente a **DOS (2) SMLMV**.

La libertad se hará efectiva, ante las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, una vez cancele la caución o constituya la póliza y suscriba la respectiva diligencia de compromiso, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

Finalmente, como el precitado se encuentra purgando pena en CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se **COMISIONA** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA.**

Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del condenado **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** identificado con C.C. No. 3.159.662, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (2 SMLMV), **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a ENCASILLAR el expediente en el respectivo anaquel, para la vigilancia de **18 meses y 11.25 días** del periodo de prueba impuesto.

6.- OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[30], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[31]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[32]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

---

[30] Ibídem.
[31] CSJ T **102248**
[32] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7. DECISIÓN

Por lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**.

RESUELVE:

PRIMERO - RECONOCER a **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** identificado con C.C. No. 3.159.662, redención de pena por trabajo de **2 meses y 29.75 días** y redención de pena por estudio de **3 meses y 8 días**, es decir, que el tiempo total reconocido en el presente proveído es de **SEIS (6) MESES y SIETE PUNTO SETENTA Y CINCO (7.75) DÍAS,** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. - RECONOCER que **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** identificado con C.C. No. 3.159.662, acumula un total de **29 meses y 18.75 días** por concepto de tiempo físico más redenciones reconocidas de la pena impuesta.

TERCERO - CONCEDER al condenado **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** identificado con C.C. No. 3.159.662, el beneficio de la **LIBERTAD CONDICIONAL** por las razones expuestas en este proveído, bajo un periodo de prueba de **18 meses y 11.25 días**, por lo cual deberá cancelar la caución impuesta, equivalente a DOS (2) SMLMV, o constituir póliza judicial y suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones señaladas en el artículo 65 del C.P.

CUARTO. - Como el precitado se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena **COMISIONAR** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA**

QUINTO. - Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del **ANDRES LEONARDO GONZALEZ HERRERA** identificado con C.C. No. 3.159.662, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (2 SMLMV), **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SEXTO – REMITIR copia de esta providencia a la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

SEPTIMO. – Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a ENCASILLAR el expediente en el respectivo anaquel, para la vigilancia de **18 meses y 11.25 días** del periodo de prueba impuesto.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 05 de 2024: Al despacho el proceso contra **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** identificado con C.C. No. 1.007.668.860, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0032 del 25 de enero de 2024, se emite por parte del Asistente Social el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 6 de febrero de 2024, para resolver la solicitud de Prisión Domiciliaria Ley 750 de 2002 y artículo 314-5 del C.P., invocada por el condenado.

Sin embargo, analizada la situación jurídica del infractor, procede este Juzgado a estudiar de oficio la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo cinco (05) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No.0077

CUI:	**25402600039120210006l**
NI:	**2023-0137**
Sentenciado:	**BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO**
Identificación:	**C.C. No. 1.007.668.860**
Delito:	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Reclusión	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
DECISIÓN:	**NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA Ley 750 de 2002, art 314-5 CPP – NO SE ACREDITA condición padre cabeza de familia** **CONCEDE PRISION DOMICILIARIA ART. 38G del C.P.**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a decidir sobre la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria dispuesta en la Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C.P.P., invocada por el condenado **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** identificado con C.C. No. 1.007.668.860, y el estudio de oficio de la prisión domiciliaria art. 38G del C.P., quien actualmente se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 19 de febrero de 2020 y el 2 de febrero de 2021 y allanamiento a cargos, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Vega Cundinamarca mediante sentencia del 14 de marzo de 2023 **CONDENÓ** a **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** a la pena principal de **DOS (2) AÑOS DE PRISION** como autor responsable del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, y la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un término igual al de la pena principal. **NEGÓ** la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y ordenó librar orden de captura.

El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 22 de marzo de 2023 y libró orden de captura No. 3 el 28 de marzo de 2023.

BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO fue capturado el **8 de abril de 2023**.

Este Juzgado a través de auto de sustanciación No. 0444 del 10 de abril de 2023, dispuso avocar conocimiento del proceso, legalizó la captura del condenado y expidió la Boleta de Encarcelación No. 0018 ante el señor director de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca.

Previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria prevista en la Ley 750 de 2002 invocada por el condenado, este despacho a través de auto de sustanciación No. 0016 del 12 de enero de 2024, dispuso requerir al condenado para que aporte la información precisa como: I) declaración extrajudicial rendida ante Notaría de la persona que se comprometa a recibirlo en el domicilio referenciado en caso de concederse el sustituto penal otorgado (datos personales nombre, teléfono, parentesco, etc.) y; II) aclare la dirección del domicilio, toda vez que en el recibo de servicio público no aparece legible. Lo anterior, so pena de rechazo.

Aunado a lo anterior, se solicitó al señor director de la CPMS VILLETA CUNDINAMARCA los certificados TEE, los certificados de calificación de conducta y demás documentos que señala la ley, para el reconocimiento de redención de pena al infractor.

A través de auto interlocutorio No. 0032 del 25 de enero de 2024, este Juzgado reconoció redención de pena de 2 meses y 10.5 días y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C.P.P., invocada por el sentenciado, y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección suministrada VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA EN ALBAN CUNDINAMARCA, en donde reside la señora NOHORA OMAIRA CANO SANABRIA (progenitora del condenado), identificada con C.C. No. 35.533.548 expedida en Facatativá Cundinamarca - Celular 3016834717 – 3001522848 - 3024460209, se ordenó al Asistente Social de este Juzgado, que realice la visita socio-familiar, y nos emita su concepto a la mayor brevedad posible pertinente a las condiciones familiares y habitacionales del condenado y especialmente de la veracidad de su condición de padre cabeza de familia.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la documentación y solicitud allegada por el condenado, para el estudio de la prisión art. 314-5 del C.P.P., y la Ley 750 de 2002, y el Informe de Visita Social de fecha 6 de febrero de 2024 emitido por el Asistente Social de este Juzgado.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria*

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1. Competencia

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2020 y el 2 de febrero de 2021, el sentenciado **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO**, fue investigado y judicializado bajo el imperio de la ley 599 de 2000 (modificada por las Leyes 890 de 2004, 1453 y 1474 de 2011 y 1709 de 2014) y ley 906 de 2004).

De igual forma es competente este funcionario para conocer de la actuación en razón al factor territorial, toda vez que **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, mismo que hace parte del circuito a cargo de este Juzgado de conformidad con el mapa judicial fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme los Acuerdos expedidos en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

4.2. De la solicitud de Prisión Domiciliaria - Ley 750 de 2002.-

Se recibe a través del correo institucional el día 22 de diciembre de 2023, procedente de la oficina jurídica de la CPMS VILLETA CUNDINAMARCA, le memorial suscrito por el condenado quien indica:

"(…) Me dirijo a usted muy cordialmente con el fin de solicitarle mi beneficio de domiciliaria y a la vez que me sea enviada la correspondiente documentación como: mi cartilla biográfica, y buena conducta con PPL de este centro penitenciario.

Ya que en la cual me encontraba ejerciendo como padre cabeza de hogar y buscando sustento de mi querida pareja, y mi hermoso hijo que solo cuenta tan solo con 07 añitos de edad y mi pareja se encuentra en estado de gestación y no cuenta con la ayuda necesaria para suplir sus necesidades y ya que estando con mi beneficio de domiciliaria me encuentro en la capacidad de ejercer el trabajo como ornamentador y oficios varios (…)

Adjunta: Registro Civil de Nacimiento del menor G.S.M., recibo de servicio público energía (dirección no legible), recibo de servicio público acueducto, Historia clínica de atención a gestantes ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA de la señora Yuli Esperanza Amado Rozo, fotocopia cédula ciudadanía señora Yuli Esperanza Amado Rozo, registro

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)
[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

civil nacimiento de la menor S.I.A.A., Historia Clínica de Ecografía Obstétrica ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA señora Yuli Esperanza Amado Rozo.

Verificados los documentos y la solicitud, previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria prevista en la Ley 750 de 2002 invocada por el condenado, este despacho a través de auto de sustanciación No. 0016 del 12 de enero de 2024, dispuso requerir al condenado para que aporte la información precisa como: I) declaración extrajudicial rendida ante Notaría de la persona que se comprometa a recibirlo en el domicilio referenciado en caso de concederse el sustituto penal otorgado (datos personales nombre, teléfono, parentesco, etc.) y; II) aclare la dirección del domicilio, toda vez que en el recibo de servicio público no aparece legible. Lo anterior, so pena de rechazo.

En efecto, se recibe a través del correo institucional el 22 de enero de 2024 la documentación procedente de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y estudio de la prisión domiciliaria LEY 750 DE 2002-, invocada por el sentenciado. Se adjuntan los certificados TEE, certificados de calificación de conducta, fotocopia cédula de ciudadanía de la señora Nohora Omaira Cano Sanabria, declaración extraproceso No 68 rendida ante la Notaría 2ª del Circulo de Facatativá de fecha 15 de enero de 2024 por la señora Nohora Omaira Cano Sanabria (progenitora del condenado), copia documento identificación duplicado del señor Mazorca Suarez José Cedulfo, copia cédula de ciudadanía de la señora Yuli Esperanza Amado Rozo, registro civil de nacimiento de los menores G.S.M.M., y M.I.A.A., recibo de servicio público, documento con los datos de información familiar, cartilla biográfica del interno.

Se observa en la declaración extraproceso No. 68, rendida ante la Notaría 2ª del Circulo de Facatativá de fecha 15 de enero de 2024 por la señora Nohora Omaira Cano Sanabria (progenitora del condenado), quien manifiesta que se hará responsable y está en disposición de apoyarlo en el goce y beneficio en caso de que se le conceda la detención domiciliaria mientras cumple su condena, brindándole techo cuya residencia será en la **VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA DE ALBAN CUNDINAMARCA – Celular 3016834717.**

De igual manera, el condenado aporta el escrito de información familiar e indica los números de contacto de la señora Nohora Omaira Cano Sanabria – 3016834717 – 3001522848 – 3024460209, correo electrónico yuliamado19@gmail.com – residente en Albán Cundinamarca, Vereda Las Marías, Finca La Despensa.

Por lo tanto, este Juzgado a través de auto interlocutorio No. 0032 del 25 de enero de 2024, reconoció redención de pena de 2 meses y 10.5 días y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C.P.P., invocada por el sentenciado, y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección suministrada VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA EN ALBAN CUNDINAMARCA, en donde reside la señora NOHORA OMAIRA CANO SANABRIA (progenitora del condenado), identificada con C.C. No. 35.533.548 expedida en Facatativá Cundinamarca - Celular 3016834717 – 3001522848 - 3024460209, se ordenó al Asistente Social de este Juzgado, que realice la visita socio-familiar, y nos emita su concepto a la mayor brevedad posible pertinente a las condiciones familiares y habitacionales del condenado y especialmente de la veracidad de su condición de padre cabeza de familia.

4.3. Sobre la Ley 750 de 2002, el artículo 314-5 y la Sentencia T-705-13

Al respecto se tiene que en un principio existió una posición de la Corte Suprema de Justicia sobre esta ley en donde por favorabilidad y junto con el artículo 314-5 de la Ley 906 de 2004 estipulaba unos requisitos benignos para los infractores, pero en una decisión del 22 de junio de 2011 varió la misma para sostener que los *"…artículos 314 y 461 del Código de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Procedimiento Penal no eliminaron el estudio de factores personales del procesado para efectos de conceder o no la detención o prisión domiciliaria (debido a la necesidad de realizar un juicio de ponderación con las circunstancias que estructuran el interés superior del menor), e incluso advirtió, en cuanto a la ejecución de la pena privativa de la libertad, que tampoco pueden entenderse derogadas las exigencias tanto objetivas como subjetivas previstas en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002…".[4] *(subrayado del juzgado).*

De acuerdo al aparte jurisprudencial se deben exigir los requisitos tanto objetivos y subjetivos previstos en el artículo 1º de la Ley 750 de 2002.

4.4. Sobre la Prisión Domiciliaria Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C.P.P.

En su memorial el interno manifiesta su deseo de sustituir el mecanismo sustitutivo como padre cabeza de familia.

Señala la Ley 750 de 2002 lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 1o.** La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:*
>
> *Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente.*
>
> *La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos.*
>
> *Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:*
>
> *Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia.*
>
> *Observar buena conducta en general y en particular respecto de las personas a cargo.*
>
> *Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello.*
>
> *Permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la reglamentación del INPEC.*
>
> *El seguimiento y control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez, autoridad competente o tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia con apoyo en el INPEC, organismo que adoptará entre otros un sistema de visitas periódicas a la residencia de la penada para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo.*
>
> ***PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 4 de la Ley 2292 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:>** Las mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 Código Penal o condenadas por otros delitos cuya pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8)*

[4] C.S.J. Rad 41583 del 28-08-13

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

años de prisión, en los cuales se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar y cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, podrán obtener el servicio de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de prisión.

***ARTÍCULO 2o**. La pena principal privativa de la libertad sustituida por la que en esta ley se establece, se hará efectiva en cualquier momento en que la infractora violare alguna de las obligaciones impuestas acorde con esta ley, se evada o incumpla reclusión, fundamentalmente aparezca que continúa desarrollando actividades delictivas, o en el momento en que dejare de tener la calidad de mujer cabeza de familia, o incumpla sus responsabilidades como mujer cabeza de familia y tal hecho sea certificado por autoridad competente salvo que, en estos dos últimos casos, hubiere cumplido con las mencionadas obligaciones durante un lapso de tiempo equivalente a por lo menos las tres quintas (3/5) partes de la condena.*

***ARTÍCULO 3o.** Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la sentencia, se declarará extinguida la sanción, salvo procedencia de otro beneficio que tenga igual o más favorable efecto.*

***ARTÍCULO 4o**. La detención preventiva cuando proceda respecto de una mujer cabeza de familia, será sustituida por la detención domiciliaria en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones consagradas en la presente ley para la pena sustitutiva de prisión domiciliaria.*

***ARTÍCULO 5o**. La mujer cabeza de familia condenada a pena privativa de la libertad o la sustitutiva de prisión domiciliaria podrá desarrollar trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas, orn ato o reforestación y servicios en el perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario de residencia fijado por el juez, según el caso. El tiempo dedicado a tales actividades redimirá la pena en los términos previstos en el código penitenciario y carcelario.*

Para tal efecto, el Director del respectivo centro penitenciario o carcelario o el funcionario judicial competente, según el caso, podrá acordar y fijar con el alcalde municipal, o el local las condiciones de la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.

La mujer dedicada a tales labores deberá pernoctar en los respectivos centros penitenciarios o carcelarios o en el lugar de residencia fijado por el juez según el caso.

***ARTÍCULO 6o.** La aplicación de la presente ley se hará sin perjuicio de los demás beneficios consagrados en las normas penales o penitenciarias y carcelarias aplicables.*

***ARTÍCULO 7o**. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación."*[5] (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al aparte jurisprudencial se exigirán los requisitos tanto objetivos y subjetivos previstos en el artículo 1º de la Ley 750 de 2002, y conforme a la norma en cita, se tiene que podrá serle otorgado el beneficio de prisión domiciliaria al (la) sentenciado (a) que acredite ser padre (madre) cabeza de familia, esto es, no basta el solo hecho de tener hijos menores de edad, sino que se demuestre la dependencia y necesidad por parte de estos últimos de la presencia de su padre (madre)

Por lo tanto, al precisar sobre el concepto de "padre cabeza de familia" y conforme a lo expuesto jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia, se tiene que en sentencia SU 388 de 2005 expresó lo siguiente:

5 Artículo 1°, Ley 750 de 2002, *"Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *"(…) La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable:*
>
> *(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar;*
> *(ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente;*
> *(iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre;*
> *(iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte;*
> *(v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.*
>
> *Así pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia.*
>
> *Además, no puede perderse de vista que el trabajo doméstico, con independencia de quién lo realiza, constituye un valioso apoyo para la familia a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte social. En esa medida, dado que existen otras formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia (…)" Subrayado fuera de texto.*

De conformidad con lo anterior, es claro que no basta la calidad de padre cabeza de familia, para predicar de allí el cumplimiento del requisito al que alude el artículo 1º de la Ley 750 de 2002, adicionalmente se requiere la acreditación de una absoluta desprotección de los menores hijos de los sentenciados o de personas que se encuentren en una manifiesta condición de debilidad en virtud de la privación de la libertad de los mismos.

Posteriormente la Corte Suprema de Justicia en decisión del 13 de noviembre de 2019 SP4945-219 (Rad. No 53863) MP. Patricia Salazar Cuéllar indicó:

> *"6.4. Síntesis de las reglas aplicables a este caso. La prisión domiciliaria para madres o padres cabeza de familia está sometida a las siguientes reglas: (i) el sentido del fallo y la lectura del texto definitivo de la sentencia forman una unidad inescindible; (ii) con el anuncio del sentido del fallo cesa la medida de aseguramiento; (iii) para resolver sobre la libertad del condenado, el juez de conocimiento debe tener en cuenta los fines de la pena y la reglamentación de los subrogados; (iv) cuando sea procedente, el juez de conocimiento debe decidir sobre la viabilidad de la prisión domiciliaria cuando se invoque la calidad de madre o padre cabeza de familia; (y) ello no opera como una modificación de la detención preventiva -que pierde vigencia con el anuncio del sentido del fallo- sino a partir de la ponderación de los fines de la pena y los derechos de los niños u otras personas "incapaces o incapacitadas para trabajar", que estén exclusivamente a cargo del condenado; (vi) el juez debe tener especial cuidado al constatar los presupuestos fácticos y jurídicos establecidos en la Ley 750 de 2002 para la concesión de ese beneficio; y (vii) si ese tema no fue resuelto por el juez de conocimiento o se presentan circunstancias sobrevinientes que reúnan los requisitos previstos en la referida ley, la decisión acerca de la prisión domiciliaria para la madre o el padre cabeza de familia le corresponde al juez de ejecución de penas.*
>
> *(…)*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Lo anterior sin perder de vista lo expuesto por la representante del Ministerio Público en el sentido de que no se avizora que el procesado esté exclusivamente a cargo de sus hijos, pues la madre de estos también tiene la obligación de velar por su manutención y cuidado. Este aspecto en particular ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, entre otras, en la sentencia SU-388 de 2005, que fue invocada por el demandante para sustentar su pretensión. En esa oportunidad, la Corte Constitucional dejó sentado que: [n]o toda mujer14 puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.

Así pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia (…)".

De otra parte, el artículo 314-5 de la Ley 906 de 2004 señala:

*"**ARTÍCULO 314. SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA**. <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos:*

1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado.

2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia.

*3. **<Numeral modificado por el artículo 17 de la Ley 2292 de 2023**. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando a la procesada le falten tres (3) meses o menos para el parto, y hasta los seis (6) meses después del nacimiento.*

4. <Aparte subyarado CONDICIONALMENTE exequible> Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales.

El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital.

***5. <Numeral modificado por el artículo 17 de la Ley 2292 de 2023**. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la procesada fuere mujer cabeza de familia de hijo menor de edad o que sufriere incapacidad permanente, o tenga a un adulto mayor o una persona que no puede valerse por sí misma bajo su cuidado. La persona que haga sus veces podrá acceder a la misma medida. En estos eventos, el juez atenderá especialmente a las necesidades de protección de la unidad familiar y a la garantía de los derechos de las personas que se encuentran bajo su dependencia.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5.*
>
> *En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez.*
> *El control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia estará a cargo del Inpec, el cual realizará un control periódico sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que si se advierten violaciones a las condiciones impuestas por el Juez se puedan adoptar las correspondientes acciones.*
>
> ***PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 5 de la Ley 1944 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>*** *No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos: Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces, tráfico de migrante (C. P. artículo 188); acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C. P. artículo 210); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); hurto calificado (C. P. artículo 240); hurto agravado (C. P. artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); abigeato (C. P. artículo 243); abigeato agravado (C. P. artículo 243-A); estafa agravada (C. P. artículo 247); uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C. P. artículo 291); fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C. P. artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas (C. P. artículo 366); fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (C. P. artículo 367); peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C. P. artículo 397); concusión (C. P. artículo 404); cohecho propio (C. P. artículo 405); cohecho impropio (C. P. artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (C. P. artículo 407); enriquecimiento ilícito (C. P. artículo 412); soborno transnacional (C. P. artículo 433); interés indebido en la celebración de contratos (C. P. artículo 409); contrato sin cumplimiento de requisito legales (C. P. artículo 410); tráfico de influencia (C.P. artículo 411); receptación repetida, continua (C. P. artículo 447, inciso 1o y 3o); receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el concierto para delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C. P. artículo 447, inciso 2o).*

Al respecto se tiene que en un principio existió una posición de la Corte Suprema de Justicia sobre esta ley en donde por favorabilidad y junto con el artículo 314-5 de la Ley 906 de 2004 estipulaba unos requisitos benignos para los infractores, pero en una decisión del 22 de junio de 2011 varió la misma para sostener que los *"…artículos 314 y 461 del Código de Procedimiento Penal no eliminaron el estudio de factores personales del procesado para efectos de conceder o no la detención o prisión domiciliaria (debido a la necesidad de realizar un juicio de ponderación con las circunstancias que estructuran el interés superior del menor), e incluso advirtió, en cuanto a la ejecución de la pena privativa de la libertad, que tampoco pueden entenderse derogadas las exigencias tanto objetivas como subjetivas previstas en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002…".*[6] *(*Subrayado del juzgado*).*

De acuerdo al aparte jurisprudencial no puede este funcionario, como lo pretende el infractor, concentrarse únicamente en la condición de padre cabeza de familia, **sino al**

[6] C.S.J. Rad 41583 del 28-08-13

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

contrario exigir los requisitos tanto objetivos y subjetivos previstos en el artículo 1º de la Ley 750 de 2002.

Así, lo ha expresado recientemente la Corte Suprema de Justicia (Rad 46277 del 31 de mayo de 2017):

> *"Sobre el tema en discusión, es obligado hacer algunas precisiones relacionadas con el instituto de la prisión domiciliaria prevista como sustituta de la pena de prisión intramural en los eventos en que concurre en el procesado la condición de padre cabeza de familia.*
>
> *Ha tenido oportunidad esta Sala de señalar[7], que la comprensión jurisprudencial de las condiciones para acceder a la prisión domiciliaria ha variado en el tiempo. Así, en principio, la Corte consideró suficiente, a partir de la interpretación sistemática de lo dispuesto en la Ley 750 de 2002 y de los artículos 314 y 461 de la Ley 906 de 2004, la acreditación de la condición de padre o madre cabeza de familia, sin necesidad de valorar los antecedentes del interesado ni la naturaleza del delito objeto de condena[8].*
>
> *Sin embargo, posteriormente, recogiendo ese criterio, y bajo el entendido que los artículos 314, numeral 5, y 461 de la Ley 906 de 2004 no derogaron los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 en lo atinente a la figura de la prisión domiciliaria para la persona cabeza de familia, la Sala ha venido sosteniendo de manera pacífica que para su otorgamiento se requiere de la satisfacción concurrente de todas las condiciones previstas en esta norma, a saber: i) que el condenado, hombre o mujer, tenga la condición de padre o madre cabeza de familia; ii) que su desempeño personal, laboral, familiar y social permita inferir que no pondrá en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo; iii) que la condena no haya sido proferida por alguno de los delitos allí referidos y; iv) que la persona no tenga antecedentes penales[9]. Así se precisó:*
>
> *Es decir, el debido respeto al interés superior del menor no implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus derechos. Y dejar como único requisito de la detención o prisión domiciliaria para los padres o madres cabeza de familia la constatación de la simple condición de tal convierte en absoluto el derecho del menor a no estar separado de su familia, y además lo hace en detrimento de unos institutos (la detención preventiva en centro de reclusión y la ejecución de la pena en establecimiento carcelario) que no sólo atienden a principios y valores constitucionales (como la paz, la responsabilidad de los particulares y el acceso a la administración de justicia de todos los asociados), sino que deben ser determinados por las circunstancias personales del agente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos.*
>
> *Ahora, en el presente caso la discusión se ha venido suscitando en torno al cumplimiento o no de la condición de padre cabeza de familia del acusado MUÑOZ MONTILLA en relación con su hija menor de edad.*
>
> *Al respecto, vale traer a colación que el artículo 2° de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008, en alusión expresa a la mujer, pero en conceptualización aplicable a los hombres[10], define:*
>
> *Para los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.*
>
> *Definición sobre la que se precisó por parte de la Corte Constitucional que:*

---

7 CSJ SP-10919-2015, 19 ago de 2015, Rad. No 45853.
8 CSJ SP, 26 jun. 2008, rad. 22.453.
9 CSJ SP, 22 jun. 2011, rad. 35943.
10 Corte Constitucional, sentencia C – 184 de 2003.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *[p]ara tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.*[11]
>
> *De allí que el mismo tribunal constitucional puntualizara que en materia de carga probatoria, corresponde demostrar a quien reclama la condición de padre cabeza de familia:*
>
> *Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea una persona que les brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos. (ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre.*[12]*"*

Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia T – 420 del 30 de junio de 2017, establece*:*

> *"La jurisprudencia constitucional ha sostenido que no toda mujer, por el hecho de ser madre, ostenta la calidad de cabeza de familia, pues para tener tal condición es necesario "(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar".*
>
> *(…)*
>
> *"En primer lugar, esta Corporación ha aclarado que una mujer no deja de ser madre cabeza de familia por el hecho de que las personas a su cargo cumplan la mayoría de edad. Deberá constatarse si las mismas se encuentran imposibilitadas para trabajar, tal como ocurre con los hijos mayores de 18 años, pero menores de 25 que se encuentran estudiando[40]. En ese sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T-283 de 2006[41], señaló:"(…) no puede entender excluidas de la protección prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 a las madres de hijos mayores de 18 años y menores de 25 incapacitados para trabajar por razón de sus estudios. Lo expuesto, toda vez que el derecho de los menores de 25 años, incapacitados para trabajar por razón de los estudios, comporta un avance en materia del reconocimiento de los derechos sociales económicos y culturales de la población, cuya regresión, de presentarse en el Programa de Renovación de la Administración, exigiría una justificación razonable y proporcionada." (Subrayado fuera del texto original)"*

De conformidad con lo anterior, se itera que es claro que no basta la calidad de padre de familia, para predicar de allí el cumplimiento del requisito al que alude el artículo 1° de la Ley 750 de 2002, adicionalmente se requiere la acreditación de una absoluta desprotección de los menores hijos de los sentenciados o de personas que se encuentren en una manifiesta condición de debilidad en virtud de la privación de la libertad de los mismos.

---

[11] Corte Constitucional, sentencia SU – 388 de 2005.
[12] Corte Constitucional, sentencia SU – 389 de 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Ahora bien, conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0032 del 25 de enero de 2024, **se emite por parte del Asistente Social del Juzgado el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 6 de febrero de 2024 en el cual se expone**:

INFORME DEL ASISTENTE SOCIAL

"(…) ***SITUACIÓN ENCONTRADA***

Durante los días 31 de enero y entre el primero y seis de febrero del presente año, fueron realizadas entrevistas telefónicas a los abonados celular 3016834717 (número de la señora madre del condenado) y número 3001522848 (compañera permanente del señor condenado) entrevistas con duración de más de una hora y cuarenta minutos.

Atendieron el procedimiento NORA OMAIRA CANO SANABRIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.533.548 de Facatativá, señora madre del condenado y YULY ESPERANZA AMADO ROZO, compañera permanente del señor condenado.

En primer lugar, se realizó encuadre sobre los fines de la entrevista y la importancia de la exactitud y veracidad de información relativa al grupo familiar del señor condenado BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO, particularmente frente a su condición de padre cabeza de familia.

Conforme fue solicitado, por parte del grupo familiar del condenado se remitió la información relativa al inmueble en donde residen los padres del condenado, NORA OMAIRA CANO SANABRIA y JOSÉ CEDULFO MAZORCA SUÁREZ.

Fue remitida documentación respecto a la vivienda donde residen, tratándose de la ***Finca La Despensa, Vereda Jaba, Albán (Cundinamarca)****. perteneciente al señor Virgilio Nova Hilarion, quien extendió contrato de arrendamiento al señor padre del condenado desde el 9 de septiembre de 2023. Anteriormente a ello, la familia residió por nueve meses en la vereda el trigo del municipio de Guayabal de Síquima.*

Se conoció, no obstante los recientes lugares de habitación, que la familia es oriunda y ha residido a lo largo de la vida, principalmente en el sector Tierra Morada, zona rural entre Facatativá y El Rosal.

La señora entrevistada, NORA OMAIRA CANO SANABRIA, tiene 42 años, y está casada hace +- 18 años con el señor JOSE CEDULFO MAZORCA SUÁREZ (48 años), habiendo convivido en UL cinco años previo a la decisión del matrimonio, teniendo dos hijos:

- *BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO (24), privado de la libertad hace +-10 meses.*
- *NATALIA MAZORCA CANO (22), UL +- 2 años, ama de casa residente en El Rosal.*

De igual modo, se encontró que el condenado tiene un hijo de 8 años, JOHAN ESTEBAN MAZORCA MOLINA, quien reside en Valledupar con su progenitora, TATIANA MOLINA GIRALDO.

También haciendo parte del grupo familiar encontramos a YULI ESPERANZA AMADO ROZO (23), compañera permanente del señor condenado desde hace +- 2 años, de acuerdo a lo referido en entrevista. Esta joven en oriunda de Aguazul (Casanare), pero comenta que vivió casi toda su vida en Saravena (Arauca).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

YULI ESPERANZA AMADO ROZO fue madre por segunda vez muy recientemente, habiendo nacido hace quince días la bebé EMILY LUCIANA, hija en común con BRAYAN ESTEBAN. La recién nacida por ahora fue registrada por su mamá, dado que el padre se encuentra privado de la libertad.

Así mismo, YULI ESPERANZA tiene otra hija, menor de 4 años llamada SAMARA ISABELA ALBARRACÍN AMADO

Desde antes de la privación de la libertad de BRAYAN ESTEBAN, ya YULI ESPERANZA y su hija residían con los padres de él. Anteriormente, en la vereda El Trigo de Guayabal de Síquima, en casas separadas, pero un poco antes de producirse el encarcelamiento y ante en embarazo de YULI ESPERANZA, resolvieron empezar a compartir la vivienda en la Finca La Despensa en Albán (Cundinamarca) donde ahora residen.

YULI ESPERANZA refiere que el padre de su hija mayor nunca ha velado por ella, señala que es la madre de él, es decir la abuela paterna de SAMARA ISABELA quien ha apoyado económicamente a su hija, tratándose de ayudas ocasionales y esporádicas. Al parecer el padre de esta menor, WILSON ALBARRACÍN, residiría en Putumayo, siendo su ocupación desconocida.

Respecto a la convivencia con los padres de BRAYAN ESTEBAN, la joven comenta que en ellos ha encontrado apoyo y afecto para ella y su hija y que los abuelos paternos están felices también con la bebé recién nacida, pues es su primera nieta

Al momento de realizarse la visita domiciliaria YULI ESPERANZA AMADO ROZO se encuentra pasando el período de puerperio en casa de su señora madre y hermano, LUDY ROZO FERNANDEZ, ISAAC AMADO ROZO quienes vive en Mosquera.

Se conoció que su hermano ISAAC es quien provee los medios económicos para su familia, trabaja como operario en la planta PEPSICO y también cursa tercer semestre de ingeniería.

Lo anterior significa, que la compañera permanente del condenado, joven madre de dos menores -una en común con aquel- cuenta con redes de apoyo familiar, tanto con su propia familia de origen, como también ha encontrado con los padres de BRAYAN ESTEBAN, apoyo y solidaridad.

La bebé EMILY LUCIANA nació con bajo peso y fue vinculada al programa Bebé Canguro en el Hospital San Rafael de Facatativá, esta familia tiene cobertura en salud a través de la EPS Nueva EPS, régimen subsidiado, interrogados por la atención recibida, YULI refiere que han sido atendidas adecuadamente y se ha garantizado el acceso a todos los servicios requeridos (pediatría, fisioterapia, psicología y otros).

YULI ESPERANZA manifiesta que le hace falta el apoyo y compañía de su compañero permanente, pero reconoce que no ha estado sola ni se encuentran desprotegidas ella y sus hijas, pues reciben apoyo familiar.

De igual modo, se conoció que YULI ESPERANZA y sus hijas retornarán a Albán junto a los padres del condenado a partir del 22 de febrero, pues SAMARA ISABELA debe retornar a sus estudios. Ella está matriculada en la Escuela Rural Jaba, cerca al lugar donde residen en el sector rural de Albán.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda en la cual el señor condenado pretende vivir, eventualmente, frente a un beneficio de Prisión Domiciliaria, está ubicada en la ***Vereda Jaba, Finca La Despensa, Albán (Cundinamarca)****, residencia perteneciente al estrato DOS.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Se trata de casa lote de aproximadamente 120 mts2, como fue señalado, es propiedad de VIRGILIO NOVA, contando con contrato de arrendamiento vigente.

La vivienda rural es de una planta, cuenta con dos habitaciones, baño, sala-comedor y cocina, contando también con patio de ropas.

La casa cuenta con servicio público domiciliario de energía eléctrica, el agua se suministra a través de acueducto veredal y la familia usa gas en cilindro.

Así mismo, dentro del predio funciona negocio de casas prefabricadas propiedad del padre del señor condenado y tienen un taller de latonería, negocios a través de los cuales está familia obtiene medios de vida.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como adecuadas y positivas, el lugar cuenta con condiciones internas y externas satisfactorias.

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de riesgo bajo,puesto que se trata de un sector rural en el municipio de Albán (Cundinamarca), con acceso y cercanía al casco urbano de dicho municipio.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los ingresos los deriva el señor JOSÉ MAZORCA, de sus negocios propios.

Dicho señor devenga UN SMMLV, debiendo pagar 500 mil en la casa de habitación que ocupa, además de servicios públicos y alimentación, afirmó la entrevistada.

La situación económica que fue observada en el ámbito familiar fue clase media baja, contando con recursos económicos apenas suficientes para el cubrimiento de necesidades del grupo familiar.

Con todo, se observa que las casas prefabricadas es labor en donde también pudo trabajar YULI ESPERANZA hasta el momento que le fue posible. Así mismo, en estas labores se desempeñaba el señor condenado antes de ser privado de la libertad.

La señora compañera permanente del condenado señaló que ha sido independiente y trabajadora desde muy temprana edad, anteriormente trabajaba en un depósito de materiales y hasta antes del parto apoyaba los trabajos que se realizan con los prefabricados.

La familia señaló no recibir subsidios ni estar vinculados a programas sociales, sin embargo, se conoció que YULI ESPERANZA está inscribiéndose al programa de cero a siempre del ICBF, para vincular a sus dos menores hijas.

Como ingresos adicionales se informó que la señora NORA OMAIRA, la mamá del señor condenado, realizaba cría de pollo blanco, teniendo cien pollos, aunque se informó que en este momento ya los habían vendido todos, pero se desea emprender posteriormente dichas labores.

La familia indica bajos ingresos, pero también dio a conocer que, en medio de todo, tratan de colaborarle a su nieto quien se encuentra en Valledupar pues el padre por estar privado de la libertad se ha tenido que sustraer de su obligación alimentaria.

CONCEPTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

El señor condenado BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO cuenta con un grupo familiar conformado por su compañera permanente, la hija de ella y una bebé recién nacida. Así mismo, encontramos los padres del señor condenado, con quienes residen desde antes de él estar privado de la libertad.

La compañera permanente del señor condenado depende económicamente del apoyo familiar que recibe tanto de su familia de origen (madre y hermano) como de los padres de BRAYAN ESTEBAN quienes le han colaborado ampliamente, le brindan apoyo y afecto y también le prodigan cariño a su otra hija, menor de 4 años.

Las familias nuclear y extensiva garantizan cuidado, protección y soporte económico y emocional a esta joven madre y sus hijas.

La familia del señor condenado actualmente está asentada en una zona rural del municipio de Albán (Cundinamarca), siendo oriundos y residentes durante casi toda su vida en el sector Tierra Morada, entre Facatativá y El Rosal.

La situación socio-económica encontrada es de clase media baja, aun cuando su condición de emprendedores por contar con un negocio de casas prefabricadas, como la situación de ruralidad implican que el entorno les ofrece medios de vida y bienestar.

Por parte de la familia de aquel, se expresa solidaridad económica y existencial hacia BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO, tanto ahora que se encuentra privado de la libertad, como durante toda su vida, implicando contar con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y posterior culminación del proceso de resocialización al que fuera sometido (…)".

En este sentido, resulta claro que la señora **YULI ESPERANZA AMADO ROZO** compañera permanente del condenado quien al momento de realizarle la visita domiciliaria se encuentra pasando el periodo de puerperio en casa de su señora madre y hermano en Mosquera Cundinamarca, pues de quien se aduce que se encuentra desprotegida, NO se demuestra dicha condición y conforme a lo indicado en el Informe de Asistencia Social efectuado al grupo familiar del condenado, se evidenció, "**cuenta con redes de apoyo familiar, tanto de su propia familia de origen, como también ha encontrado con los padres de BRAYAN ESTEBAN apoyo y solidaridad"**.

En la entrevista la señora **YULI ESPERANZA AMADO ROZO** compañera permanente del condenado, señaló que el padre de su hija mayor nunca ha velado por ella y es la madre de aquel (abuela paterna - señora SAMARA ISABELA), quien ha apoyado económicamente a su menor hija con ayudas ocasionales y esporádicas, también, manifestó que la convivencia con los padres de BRAYAN ESTEBAN, ha sido de apoyo y afecto para ella y su hija y que los abuelos paternos están felices con la bebé recién nacida, y aunque nació con bajo peso, fue vinculada al programa Bebé Canguro en el Hospital San Rafael de Facatativá, familia que tiene cobertura en salud a través de la EPS Nueva EPS., régimen subsidiado, con atención adecuada y se ha garantizado el acceso a los servicios requeridos, pediatría, fisioterapia, psicología y otros.

Al observarse aspectos de la economía familiar, se estableció que los ingresos los deriva el señor José Mazorca (padre del condenado), y cuentan con recursos propios y suficientes para el cubrimiento del grupo familiar, por lo tanto, la compañera permanente del condenado no presenta una situación de dependencia económica, puesto que **las casas prefabricadas es labor donde pudo trabajar hasta el momento que le fue posible, además, señaló que ha sido independiente y trabajadora desde muy temprana edad**, inclusive indicó, que **anteriormente trabajaba en un depósito de materiales y hasta antes del parto apoyaba los trabajos que se realizan con los prefabricados**, y aunque

no recibe subsidios, ni está vinculada a programas sociales, **está inscribiéndose al programa de cero a siempre del ICBF, para vincular a sus dos menores hijas**.

En efecto, se evidenció que, el sentenciado cuenta con un grupo familiar conformado por su compañera permanente, la hija de ella y una bebé recién nacida, pues se pudo establecer que es una familia que reside con los padres del condenado antes de él estar privado de la libertad, por lo tanto, cuentan con estabilidad habitacional (inmueble ubicado en la Vereda Jaba, Finca La Despensa, Albán Cundinamarca, residencia estrato DOS, condiciones evaluadas como adecuadas y positivas, bajo condiciones internas y externas satisfactorias).

Por consiguiente, la señora **YULI ESPERANZA AMADO ROZO** compañera permanente del infractor, ni la hija de ella, ni la bebé recién nacida, **NO se encuentran en estado de desprotección**, se itera, dado a que NO fueron encontrados factores de riesgo de desprotección o abandono y han pervivido sin contar con el señor condenado en el ámbito familiar, toda vez que la señora YULI ESPERANZA "**depende económicamente del apoyo familiar que recibe tanto de su familia de origen (madre y hermano) como de los padres de BRAYAN ESTEBAN quienes le han colaborado ampliamente, le brindan apoyo y afecto y también le prodigan cariño a su otra hija menor de 4 años"**, contando así con relaciones familiares cercanas y apoyadoras.

Se concluye, que el condenado **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO**, **no se perfila como padre cabeza de hogar, ya que la valoración practicada mostró que NO se encontraron elementos reales que garanticen un verdadero rol de proveedor de dicho hogar**

La jurisprudencia ha sido pacífica en demandar que no solamente por tener hijos menores o discapacitados se tiene la calidad de padre o madre cabeza de familia, se debe tener presente que sus propios hijos, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él y dependan económicamente de quien ostente la calidad de padre o madre.

Igualmente, que no se tenga alternativa económica, es decir, debe tener la exclusividad de la manutención de sus hijos y en el evento de convivir con su esposa éste o ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de tercera edad o su presencia resulte indispensable en la atención de los menores.

Entonces, se itera, que en el Informe de Asistencia Social se estableció que la señora YULI ESPERANZA AMADO ROZO**: "depende económicamente del apoyo familiar que recibe tanto de su familia de origen (madre y hermano) como de los padres de BRAYAN ESTEBAN quienes le ha colaborado ampliamente, le brindan apoyo y afecto y también le prodigan cariño a su otra hija menor de 4 años".**

En consecuencia, el sentenciado **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** no acreditó que su compañera permanente **YULI ESPERANZA AMADO ROZO**, ni la hija de ella, ni la bebé recién nacida, dependieran exclusivamente de él, puesto que no hay suficiente información sobre esta situación ya que no suministró pruebas concluyentes de la obligación y responsabilidad correspondientes, y que ello también obedezca a una incapacidad física, sensorial o mental o que hayan deficiencias sustanciales de ayuda entre los miembros del núcleo familiar, lo que signifique la responsabilidad solitaria del condenado para sostener a su compañera permanente e hijas y sobre todo preste colaboración económica para tal fin.

Sobre la ausencia de pruebas la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia expuso:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

"No es cierto, como lo alega la censora, que el juez de conocimiento está en el deber de practicar pruebas de oficio a fin de establecer si el procesado se encuentra en condición de cabeza de familia para acceder, por esa especialísima vía, a la prisión domiciliaria. No. Además de que ésta procede a solicitud de parte, pues mal podría el juez conocer dicha circunstancia si los interesados no se lo dan a conocer, la lógica adversarial que rige el juicio igualmente aplica en el procedimiento para sentenciar, por lo que la defensa tiene la carga de acreditar los supuestos de hecho de la consecuencia jurídica que reclama"[13]

En síntesis, teniendo en cuenta que la señora **YULI ESPERANZA AMADO ROZO** compañera permanente del infractor, cuenta con relaciones familiares cercanas y apoyadoras (madre, hermano y con los padres del condenado), en este caso NO se satisface la condición de padre cabeza de familia; y respecto del segundo de los presupuestos, esto es, lo relacionado a su desempeño personal, laboral, familiar o social, se tiene que si bien es cierto el infractor actualmente se encuentra recluido en la CPMS Villeta Cundinamarca, y no se puede perder de vista que fue condenado por el delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**; delito del que no puede obviarse la gravedad de la ilicitud juzgada, tal y como se indicó en la sentencia condenatoria, respecto a ser autor de la conducta punible: "***De los elementos descritos en el acápite anterior, resulta palmario que el procesado fue el autor de la conducta investigada y lo hizo a título de dolo. Las labores llevadas a cabo una vez se realizó el ilícito, como lo es el proceso de medida de protección y el llamado de atención por parte de la Policía Nacional, permiten establecer que era de su conocimiento que el maltrato a su pareja no está permitido, pero el acusado por el contrario la siguió vulnerado de forma grave, según las diversas denuncias y manifestaciones realizadas por la víctima, que llevan a concluir que el señor BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO, en pleno uso de sus facultades mentales o psíquicas vulneró de manera grave el bien jurídico de la familia. No se evidencia elemento alguno que permita inferir lo contrario"***, por lo que estima este funcionario que el peticionario debe purgar su pena en establecimiento penitenciario, motivo por el cual se invita al condenado a que siga teniendo el buen comportamiento que hasta ahora ha logrado en esta fase de la sanción penal cumpliendo de esa manera con el principal objetivo que se tiene en cuanto a las funciones y finalidad de la pena cuyo fin fundamental es la resocialización (art 9º Ley 65 de 1993).

El sentido de la resocialización es la reintegración de un individuo a la sociedad una vez ha cumplido con la pena impuesta. Efectivamente se busca el poder acceder a los diferentes mecanismos sustitutivos y beneficios administrativos que ofrece la ley en sus diferentes etapas con el fin de lograr la tan anhelada libertad que poseía antes de cometer el delito endilgado.

Por lo anteriormente expuesto, se Despachará negativamente la solicitud elevada por NO satisfacer los requisitos para su concesión.

En ese orden de ideas y en vista de que no se satisfacen los presupuestos de la Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C. de P.P., el Despacho negará la sustitución de la pena de prisión formal por la domiciliaria al interno **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO**

Ahora bien, procede este Juzgado a pronunciarse de oficio, respecto a la PRISION DOMICILIARIA prevista en el artículo 38G del C.P.

4.5. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.5.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

[13] Radicado No. 55614 del 10 de junio de 2020, MP. Dra. Patricia Salazar Cuellar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [14].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*

[14] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> ***PARÁGRAFO****. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> *"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.* ***No se concederán****; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión;* ***ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo****, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*
>
> *<INCISO 2> Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. …"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** como **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[15]

4.6. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

> ***"****(…)* ***Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*
>
> *Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011.

[15] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica.

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

> ***"(…) Artículo 23.*** *Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:* ***Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.*** *Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
>
> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)"* ***(Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.7. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena impuesta al condenado, esto es, **24 meses de prisión (2 años),** según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **12 meses.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 8 de abril de 2023** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **332 días**, es decir, **11 meses y 2 días.**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **2 meses y 10.5 días** reconocidas por este Juzgado a través de auto interlocutorio No. 0032 del 25 de enero de 2024.

Por lo tanto, el interno en mención, ha cumplido con un total de pena purgada en razón de privación efectiva de su libertad **13 meses y 12.5 días de prisión.**

En efecto, el infractor cumple con el factor objetivo.

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.7.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

El infractor cuenta con un arraigo y domicilio para continuar con el cumplimiento de la pena el cual se ubica en la **VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA EN ALBAN CUNDINAMARCA**, en donde convivirá con su compañera permanente Yuli Esperanza Amado Rozo y su progenitora señora NOHORA OMAIRA CANO SANABRIA (progenitora del condenado), identificada con C.C. No. 35.533.548 expedida en Facatativá Cundinamarca - Celular 3016834717 – 3001522848 - 3024460209, pues manifiesta esta última en el Acta de Declaración Extraproceso 68 de fecha 15 de enero de 2024, rendida ante Notaría 2ª del Círculo de Facatativá Cundinamarca, que lo acogerá, recibirá, se hará responsable y estará dispuesta a apoyarlo en el goce y beneficio en caso de que se le conceda detención domiciliaria mientras cumple su condena, brindándole techo en el mencionado domicilio, y también indica que es una persona trabajadora, responsable, cumplidora de sus deberes y obligaciones, que es quien le colabora en su hogar y no representa un peligro para la sociedad.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que en el Informe de Asistencia Social de fecha 6 de febrero de 2024, se indicó: "***Por parte de la familia de aquel, se expresa solidaridad económica y existencial hacia BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO, tanto ahora que se encuentra privado de la libertad, como durante toda su vida, implicando contar***

con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y posterior culminación del proceso de resocialización al que fuera sometido*".*

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercen un control material del cumplimiento de la condena, pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

> ***ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:*
>
> *1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.*
> *2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.*
> *3. Testimonio de vecinos y allegados.*
> *4. Labores de inteligencia.*
>
> *Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.*
>
> *En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.*

4.7.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

*"**ARTÍCULO 38G. <Ver Notas de Vigencia> <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2014 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>** La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del*

terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2 del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

PARÁGRAFO. Los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.
."

4.7.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada, no aparece que haya sido condenado en perjuicios o se iniciara el incidente de reparación integral, por lo tanto, cumple con este requisito.

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA EN ALBAN CUNDINAMARCA. Celular 3016834717 – 3001522848 – 3024460209**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conlleva. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluido proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA EN ALBAN CUNDINAMARCA. Celular 3016834717 – 3001522848 – 3024460209, a favor de BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO**

5.1. Sobre la Competencia

Debido a que el condenado va a continuar purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en Albán Cundinamarca, por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el presente auto, **PROCEDASE** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

6.- OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena así como el estudio previo para la prisión domiciliaria Ley 750 de 2002.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[16], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[17]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[18]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de

[16] Ibídem.
[17] CSJ T **102248**
[18] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA,**

RESUELVE

PRIMERO. RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** identificado con C.C. No. 1.007.668.860, tiene descontado por pena física, más las redenciones de pena reconocidas, un total de **13 meses y 12.5 días**

SEGUNDO. NEGAR al condenado **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** identificado con C.C. No. 1.007.668.860, la concesión de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión contemplada en el artículo 314-5 del C.P.P., y el artículo 1° de la Ley 750 de 2002, por las razones expuestas en este proveído.

TERCERO. CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** identificado con C.C. No. 1.007.668.860, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

CUARTO. - COMISIONAR al Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO** quien se encuentra recluido en dicho penal.

QUINTO. - Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA EN ALBAN CUNDINAMARCA. Celular 3016834717 – 3001522848 – 3024460209, a favor de BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO**

SEXTO. - DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **VEREDA LA MARIA – FINCA LA DESPENSA EN ALBAN CUNDINAMARCA. Celular 3016834717 –**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

3001522848 – 3024460209, a favor de BRAYAN ESTEBAN MAZORCA CANO bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEPTIMO. - Una vez ejecutoriado el presente auto, **PROCEDASE** por la secretaría del Juzgado a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

OCTAVO. - Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, para que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 05 de 2024. Al despacho el proceso contra **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** identificado con C.C No. 1.072.920.806 informando que conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0033 del 25 de enero de 2024, se emite por parte del Asistente Social el segundo Informe de Valoración de Asistencia Social del 30 de enero de 2024.

Se recibe a través del correo institucional el día 29 de febrero de 2024 el Informe de Novedad PPL - –90272-CERVI-ARVIE- 2024EE0046030, salidas del interno de la zona de inclusión el 13, 28 de enero de 2024; el 3, 6, 9, 10, 15, 21, 22, 24 de febrero de 2024. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo cinco (05) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0078

ACUMULADO CUI:	**252696000691201100328 - 761116000165201501778**
Número Interno	**2023-0008**
Sentenciado:	**RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ**
Identificación:	**1.072.920.806**
Delito:	**HOMICIDIO EN CONCURSO HOMOGENEO CON HOMICIDIO EN TENTATIVA Y HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES – USO DE DOCUMENTO FALSO (ACUMULADOS)**
Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA (vigilancia electrónica) – CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO** **SE ABSTIENE DE CORRER TRASLADO ART. 477 DEL C.P.P.**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a pronunciarse respecto a la solicitud de autorización de cambio de domicilio invocada por el condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** identificado con C.C No. 1.072.920.806, quien se encuentra en prisión domiciliaria (vigilancia electrónica) en la **Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

- **Radicado CUI 761116000165201501778**

Por hechos ocurridos el 3 de octubre de 2015 y aceptación de cargos, el Juzgado 1º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buga Valle, mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, condenó a **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** a la pena principal de **VEINTICUATRO (24) MESES DE PRISION** como cómplice del delito de **USO DE DOCUMENTO FALSO** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la pena principal. Se abstuvo de conceder algún beneficio o subrogado. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 22 de febrero de 2018.

- **Radicado CUI 252696000691201100328**

Por hechos ocurridos el día 2 de julio de 2011 y preacuerdo aprobado, el Juzgado Penal del Circuito de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia del 20 de octubre de 2016, condenó a **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** a la pena principal de **CIENTO OCHENTA (180) MESES DE PRISION**, como autor responsable de delito de **HOMICIDIO EN CONCURSO HOMOGENEO CON HOMICIDIO EN TENTATIVA Y HETEROGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES** y a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas y la privación a la tenencia y porte de armas de fuego por un término igual al de la pena principal. No concedió la suspensión condicional, ni la prisión domiciliaria por expresa prohibición legal. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 20 de octubre de 2016.

RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ ha descontado pena dentro del presente asunto en dos oportunidades: i) los días 3 y 4 de octubre de 2015 y; ii) desde el 21 de abril de 2016

El homólogo 2º de Guaduas Cundinamarca, mediante auto del 1 de septiembre de 2017 avocó conocimiento del proceso.

A través de auto del 20 de septiembre de 2019, el homólogo 2º de Guaduas Cundinamarca reconoció redención de pena de 12 meses y 3 días, mediante providencia del 29 de noviembre de 2019, concedió al infractor la **ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS** y declaró que la pena acumulada es de **192 meses de prisión**, la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad acumulada

Por decisión del 19 de junio de 2020, reconoció redención de pena de 3 meses y 20.5 días, por auto del 4 de diciembre de 2020, negó por expresa prohibición legal la solicitud de beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas, por auto del 4 de diciembre de 2020 reconoció 2 meses y decisión del 25 de marzo de 2022 reconoció 7 meses y 6.5 días.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Mediante auto del 1 de abril de 2022, concedió al condenado la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P. -, y en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución prendaria por el equivalente a UN (1) SMLMV, mediante consignación de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia[1] el 7 de abril de 2022 y suscribió diligencia de compromiso el 13 de abril de 2022[2], fue trasladado con boleta No. 2022-00037[3] al domicilio ubicado en el barrio San Sebastián, Manzana D Casa 1 Piso 3 del municipio de San Francisco Cundinamarca.

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso a través de auto de sustanciación No. 0014 del 10 de enero de 2023, en vista que el condenado allegó las constancias y justificaciones de asistencia y urgencias de servicios médicos dado al estado de salud de su señora esposa quien se encuentra en estado de embarazo, este Juzgado se abstuvo de correr el traslado del art. 477 del C.P.P., respecto a lo comunicado en oficio 2022IE0195278 de fecha 16 de septiembre de 2022, suscrito por el Operador Centro Reclusión Penitenciaria y Carcelario Virtual – Área de Vigilancia Electrónica y el oficio 2022IE0219395 suscrito por el CERVI-ARVIE.

También previo a resolver de fondo la solicitud de permiso de trabajo – contrato de trabajo –, radicada por el condenado el 6 de enero de 2023, se dispuso requerir al sentenciado para que allegara: i) Certificación laboral expedida por el EMPLEADOR, en la cual se especifique el horario laboral y funciones respecto al cargo a desempeñar; además esta certificación deberá contener nombre, copia del documento de identificación, cargo, número de contacto, dirección de residencia, correo electrónico del EMPLEADOR, puesto que es la persona que deberá vigilar y certificar ante este Juzgado el producto y resultado de la labor o actividad que realice el interno en la mencionada empresa, durante el tiempo de permanencia y labor en ésta; II) Ruta de movilidad y medio de transporte hacia el lugar al que habrá de desplazarse de acuerdo a la oferta laboral presentada, con la hora exacta de salida de su domicilio y hora de llegada al mismo y tiempo de desplazamiento entre el lugar de trabajo y su domicilio. Lo anterior, so pena de rechazo.

En vista que el interno fijo su domicilio en el barrio San Sebastián, Manzana D Casa 1 Piso 3 del municipio de San Francisco Cundinamarca y resulta necesario verificar la dirección de arraigo familiar y así mismo el prenombrado cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, SE ORDENO al Asistente Social del Juzgado que realizara por el medio más expedito la visita socio familiar y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones se encuentra conviviendo el sentenciado, la dirección y el entorno social en el referenciado inmueble. Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello.

En efecto, **se emite el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 16 de enero de 2023 en el cual se expone:**

"(…) ***RESULTADOS SITUACIÓN***

ENCONTRADA

Los días 13 y 16 de enero de 2023, fueron realizadas entrevistas telefónicas con una duración de sesenta minutos al abonado de celular, número 3222113419 y 3012913505. Se trata de los números de celular del señor condenado.

[1] Archivo 049 – CARPETA 001 – expediente digitalizado.
[2] Archivo 050 – CARPETA 001 – expediente digitalizado.
[3] Archivo 051 – CARPETA 001 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Atendió la entrevista el señor condenado RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.920.806 de San Francisco (Cundinamarca).

El señor condenado tiene 33 años, es oriundo y ha residido toda su vida en el municipio de San Francisco (Cundinamarca), haciendo parte de un grupo familiar conformado por su señora madre, señora MARÍA AMPARO ORTÍZ quien convive en unión libre hace más de 30 años con el señor JOSE JIMMY HERRERA y dos hermanos (DIANA CAROLINA HERRERA y WILMAR ALEJANDRO FONSECA ORTÍZ.

Se conoció que ni el señor condenado ni sus dos hermanos son producto de la relación de pareja actual de la señora madre. Los tres hermanos tienen diferente progenitor, habiendo sido el señor condenado registrado por un primo de su señora madre y de los otros hermanos uno fue registrados por la pareja actual de la progenitora y el tercero, al parecer, cuenta con el apellido del padre, pero nunca estuvo en relación con aquel.

Así mismo, el señor condenado es padre de dos menores de edad: CAROL (16) y JULIANA (14).

A su hija mayor el señor condenado nunca la registró civilmente, manifestando, no obstante, ser un padre cercano y responsable de sus roles proveedor y afectivo y estar pendiente para tal diligencia que no se había podido realizar porque la menor reside en Yopal (Casanare) con la familia materna.

Respecto a la segunda hija, se reporta que residía con su progenitora en el municipio de San Francisco hasta junio del año pasado, momento en que abandonan dicho lugar y residirían actualmente en Bogotá. Se conoció que dicha joven presentó problemática en el colegio municipal al parecer por uso y expendio de sustancias psicoactivas, razón por la que el caso quedó en manos de la comisaría de dicho municipio.

Actualmente, RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ convive en unión libre con la señora FLOR ESPERANZA IBARRA MOLINA, oriunda de Rosas (Cauca), hace 16 meses, siendo una relación de pareja gestada a través de redes sociales (Facebook).

Ambos esperan una hija que nacerá durante el mes de febrero. Se reporta que ha sido un embarazo de alto riesgo, como situación derivada de una infección de transmisión sexual contraída por la gestante.

Como aspecto relevante sobresale que, dada la privación de la libertad de RODRIGO ALEXANDER, hace al rededor de 5 años, la obligación alimentaria de sus hijas la ha venido cumpliendo la familia del señor condenado, particularmente su padre y su hermana mayor, quienes les envían dinero y propenden por apoyar la manutención

Respecto a los delitos cometidos, el señor condenado reconoce el homicidio y porte ilegal, manifestando que fueron hechos asociados al consumo de alcohol y que el arma que llevaba aquel día fue dada como parte de pago de una moto y que torpemente la portaba consigo sin necesidad alguna, como aspectos que influyeron en haber disparado a dos sujetos en una riña en el municipio de San Francisco en el año 2011. Refiere que disparo para defenderse de un ataque con arma blanca y de unos ataques personales de una persona conflictiva y peligrosa, con antecedentes violentos.

Respecto al proceso de resocialización, si bien el condenado refiere que es un proceso exitoso, observamos que RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ no curso el bachillerato y aun cuando validó algunos grados de secundaria no terminó el ciclo educativo. De igual modo, es una persona que no cuenta con formación para el empleo,

toda su vida laboró en oficios varios y por algún tiempo condujo camiones y se empleó como conductor en una petrolera.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda en la cual el señor condenado reside actualmente y en donde se encuentra purgando la pena impuesta está ubicada en la ***Manzana D Casa 1 piso 1, Barrio San Sebastián, San Francisco (Cundinamarca).***

Se trata de una casa de tres pisos, siendo el primer piso ocupado el señor condenado y su compañera permanente, así como su señora madre y el cónyuge de está. En el primer piso encontramos tres habitaciones, baño, cocina, sala-comedor y patio de ropas.

En el segundo y tercer piso se encuentran dos apartamentos similares, estando arrendados.

El señor condenado salió a prisión domiciliaria al lugar de residencia actual, pero, buscando trabajar en oficios del campo, vivieron dos meses en la Finca La Fortuna, Vereda San Antonio del mismo municipio de San Francisco, pero debido al embarazo de alto riesgo, lo distante del casco urbano para asistir a los controles médicos requeridos y por último dada la prohibición a la gestante de transportarse en motocicleta, debieron retornar al domicilio actual.

La casa cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, gas instalado y parabólica.

Se trata de una vivienda perteneciente al estrato 3 y es una construcción nueva, de menos de 10 años.

Las condiciones de habitabilidad fueron descritas como positivas y adecuadas, el lugar cuenta con buenas condiciones internas y externas.

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de riesgo bajo, puesto que se trata de un sector urbano residencial, en el casco urbano del municipio de San Francisco.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los gastos económicos familiares están siendo cubiertos casi en su totalidad a través del trabajo que realiza el compañero permanente de la señora madre del condenado, quien labora como maestro de construcción y obtiene otros ingresos en el alquiler de formaletas para la fundición de placas y otros apoyos ocasionales de los hermanos.

De igual modo, el señor JOSE JIMMY HERRERA, percibe otros ingresos por el arrendamiento de dos apartamentos del domicilio de su propiedad.

Respecto a la señora madre del condenado se evidenció que dicha señora está en incapacidad de trabajar, pues tiene diagnóstico de artritis degenerativa crónica, permaneciendo postrada en cama dos o tres días por semana.

También por la situación de embarazo de alto riesgo de la señora FLOR ESPERANZA, compañera del condenado, ella no trabaja, recayendo toda la carga económica en el señor JOSE JIMMY HERRERA, esposo de MARÍA AMPARO ORTÍZ, madre del condenado.

Se planteó que obtienen un ingreso mensual de aproximadamente tres millones de pesos, valores con los que cubren los gastos generales del hogar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Respecto a los gastos se encontró que mensualmente dicha familia gasta alrededor de dos millones de pesos en todo lo relativo a la economía familiar: servicios públicos 300 mil pesos, alimentación 800 mil pesos, otros 400 mil pesos.

La situación económica que fue observada en el ámbito familiar es de clase media, contando con recursos económicos apenas suficientes para el cubrimiento de necesidades básicas del grupo familiar.

Así mismo, se encuentra que por la enfermedad de la señora madre del condenado se afrontan otros gastos derivados del tratamiento, copagos y transporte frecuente a Facatativá para ser atendida.

Puesto que en este momento el señor condenado no cuenta con ningún ingreso toda la carga económica recae en el compañero permanente de su señora madre, solicita se estudia la posibilidad de concederle permiso para trabajar en un restaurante que se ubica a pocos metros del parque principal de San Francisco, pues como fue señalado, la enfermedad de la señora madre y el embarazo de alto riesgo son circunstancias que implican altos costos económicos.

CONCEPTO

El señor condenado cuenta con un grupo familiar conformado por su compañera permanente, su señora madre, el compañero permanente de ella y dos hermanos, personas quienes le han brindado apoyo y afecto, así como solidaridad económica, tanto ahora estando privado de la libertad como en otros momentos de la vida.

El señor condenado pertenece a una familia que se observa aunada y estable en el tiempo y que al parecer funciona de manera positiva.

La familia cuenta con recursos económicos de clase media, contando con medios apenas suficientes para cubrir los gastos de la economía familiar, el único proveedor es el compañero permanente de la señora madre del condenado y se afrontan gastos derivados del tratamiento médico crónico de la madre del condenado y el embarazo de alto riesgo de la compañera permanente de RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ.

Respecto al lugar donde reside el grupo familia del señor condenado vive en la casa propiedad, contando con buenas condiciones de habitabilidad.

Se expresa solidaridad económica y existencial hacia RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ, situación que implica contar con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y posterior culminación del proceso de resocialización al que fuera sometido (…)".

Sin embargo, cabe mencionar que el condenado a través de los correos electrónicos descritos en la constancia secretarial de la presente providencia, el día 17 de octubre de 2023, informó que **se encuentra en el domicilio ubicado en la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca, DESDE EL DÍA 13 DE MAYO DE 2023**, indica que ha recibido visita del inpec mensualmente y siempre lo encuentran en el lugar de residencia trabajando, por lo que manifiesta que no puede estar en el anterior domicilio donde residía por problemas con el padrastro quien es propietario de la vivienda y teme porque lo capturen por fuga de presos, conforme a lo manifestado por su progenitora quien recibió una llamada de la estación de policía de San Francisco Cundinamarca, a quien le dijeron que el interno debe permanecer en el domicilio inicial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

A través de auto interlocutorio No. 0033 del 25 de enero de 2024, este Juzgado reconoció al condenado redención de pena de 2 meses y 0.5 días y reconoció 122 meses y 0.5 días cumplidos de la pena impuesta. Negó la libertad condicional por concepto desfavorable y debido a que el interno allego las constancias y justificaciones de asistencia y urgencias de servicios médicos dado al estado de salud de su señora esposa y nacimiento de su menor hija, esta agencia judicial se abstuvo de correr traslado del art. 477 del C.P.P., al infractor RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ, respecto a los informes de novedad PPL, suscritos por el señor director del Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual – Área de Vigilancia Electrónica y el señor Comandante de Vigilancia EPMS Villeta, por los cuales informan salidas del interno de la zona autorizada (oficio 9027-CERVI-ARCU 2020IE0021876, oficio 127-EPMSCVILL-AJUR de fecha 15 de marzo de 2023, oficio 127-EPMSCVILL-AJUR de fecha 23 de mayo de 2023, oficio 0272-CERVI-ARVIE 2023EE0122118, oficio 90272-CERVI-ARVIE-2023EE0177301, oficio 127-CPMSVILL-AJUR, oficio 90272-CERVI-ARVIE- 2023EE0222920, oficio 90272-CERVI-ARVIE/ 2023EE0240234, CERVI- ARCUV 2024EE0001337)

También, previo al estudio de la autorización de cambio de domicilio y autorización de permiso para trabajar invocadas por el condenado, se ordenó al asistente social del Juzgado que realice (vía remota) un informe ACTUALIZADO, sobre el lugar del domicilio en donde está cumpliendo actualmente la pena el condenado, su situación familiar, económica y laboral, la conformación de su núcleo familiar, en el domicilio ubicado en la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca (celular 3222113419) y así mismo se actualice la información y documentos del sitio de trabajo, como el horario, rutas de desplazamiento, dirección, labores, cargo, salario que devenga y tipo de contrato.

En esta oportunidad ingresa al despacho, con el fin de estudiar la autorización de cambio de domicilio, invocada por el sentenciado a la en la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca.

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[4] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

[4] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[5]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

[5] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Este juzgado es competente para decidir sobre la libertad condicional del condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgado pena privado de la libertad en prisión domiciliaria (vigilancia electrónica), en la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca (domicilio NO AUTORIZADO), vigilado por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[6].

De acuerdo a los hechos ocurridos el 3 de octubre de 2015 y el 2 de julio de 2011, **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ**, fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2. De la autorización de cambio de domicilio al condenado y el Informe de Valoración de Asistencia Social de fecha 30 de enero de 2024.

El condenado radica a través del correo electrónico la siguiente documentación:

- 15 y 28 de febrero de 2023 – informa que el 15 de febrero de 2023 cambia de domicilio ya que en donde se encontraba, el inmueble fue vendido, adjunta contrato de promesa compra y venta, recibo de servicio público donde se ubicar para el cumplimiento de la pena impuesta – Calle 2 # 11-68 via Sn Luis en San Francisco Cundinamarca.
- 15 de mayo de 2023 – envía información de domicilio en donde se encuentra, ya que por problemas de convivencia con el padrastro y progenitora, un amigo lo ayudó para trabajar en una finca ubicada en el municipio de La Peña Cundinamarca, para labores de campo y obtener un mínimo vital para la manutención de su menor hija y esposa. Adjunta fotografías
- 18 de mayo de 2023 – solicita se conceda el permiso de trabajo en el nuevo domicilio. Adjunta fotografías
- 23 de mayo de 2023 – informa que el 22 y 23 de mayo de 2023 salió de la finca en donde se encuentra hacia el municipio de La Peña Cundinamarca a llevar a su esposa y menor hija a la agencia de la Flota San fe ya que tenían una cita médica en el municipio de San Francisco Cundinamarca. Adjunta soportes
- 2 y 22 de junio de 2023 – allega fotografías y video de lugar de trabajo y domicilio en donde se encuentra actualmente
- 17 de octubre de 2023 – informa que **se encuentra en el domicilio ubicado en la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca, DESDE EL DÍA 13 DE MAYO DE 2023**, indica que ha recibido visita del inpec mensualmente y siempre lo encuentran en el lugar de residencia trabajando, por lo que manifiesta que no puede estar en el anterior domicilio donde residía por problemas con el padrastro quien propietario de la vivienda y teme porque lo capturen por fuga de presos, conforme a lo manifestado por su progenitora quien recibió una llamada de la estación de policía de San Francisco Cundinamarca, a quien le dijeron que el interno debe permanecer en el domicilio inicial.

Ahora bien, conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0033 del 25 de enero de 2024, **se emite por parte del Asistente Social el segundo Informe de Valoración de Asistencia Social del 30 de enero de 2024 en el cual se expone**:

"(…) ***RESULTADOS***

---

[6] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[6].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SITUACIÓN ENCONTRADA

Los días 26 y 29 de enero del presente año, fueron realizadas entrevistas telefónicas al abonado 3222113419, número del señor condenado, entrevistas con más de una hora de duración.

RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ tiene 34 años y purga pena por 194 meses (acumulada de dos procesos penales con varios delitos). Durante +- 6 purgó pena a nivel intramural y desde el 3 de mayo de 2022 continuó descontando en prisión domiciliaria, otorgada en San Francisco (Cundinamarca), municipio del cual el señor condenado es oriundo y donde ha residido casi toda su vida, junto con su grupo familiar.

Previamente al desarrollo de la visita domiciliaria, se solicitaron los documentos de la vivienda rural que ocupa RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ y su grupo familiar, remitiéndose promesa de compra venta respecto a la Finca La Aguadita, Vereda Lagunas del municipio de La Peña (Cundinamarca), recibo de energía eléctrica y fotografías del lugar de residencia.

A través de la referida documentación se estableció que la propietaria del predio veredal es la señora ANA BELÉN TRIANA, quien en mayo de 2017 celebró acuerdo para su venta con el señor PEDRO CONTRERAS BELLO, padre del condenado, persona quien se encuentra residiendo en ese lugar hace +-6 años.

Así las cosas, en este momento en La Finca La Aguadita residen el señor condenado, su padre, FLOR ESPERANZA IBARRA MOLINA (compañera permanente del señor condenado) y la bebé de 10 meses SAMARA CONTRERAS IBARRA (hija de RODRIGO ALEXANDER y FLOR ESPERANZA).

Se conoció que la bebé ha tenido quebrantos de salud graves desde su nacimiento. Hubo dificultades importantes desde el embarazo, puesto que se presentó sífilis gestacional, situación que llevó a que la menor naciera con una infección muy grave que ha requerido continua asistencia médica.

SAMARA, con apenas 10 meses, presenta bacteria de difícil manejo, sufre de fiebre constante y convulsionó. Se reporta decaimiento y pobre mejoría.

Dicha bebé, hija del señor condenado viene recibiendo atención médica a través de la EPS FAMISANAR (régimen subsidiado), pero dada su gravedad ha sido remitida en varias ocasiones al Hospital San Rafael de Facatativá y al municipio de Villeta, porque en La Peña existe apenas un puesto de salud.

Por lo anterior, indica el señor condenado, ha tenido que realizar desplazamientos fuera del lugar de residencia ha tenido en varias oportunidades.

Al respecto, RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ, señaló contar con todos los soportes de atención médica, certificando su desplazamiento con hora de ingreso y de salida y contando con soportes que justifican la salida, mencionando que ha venido reportando todos esos documentos a INPEC y al juzgado.

Así mismo, a nivel familiar el señor condenado atraviesa fuerte preocupación en relación con su hija mayor (menor de edad de 17 años residente en Yopal, Casanare), quien se fugó de la casa de su mamá, con quien residía y al parecer ahora convive con un joven usuario de SPA y dedicado a la venta de estupefacientes, de acuerdo a lo reportado por el padre.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Lo anterior, rememorando que dicha menor, llamada, KAROL TATIANA RAMÍREZ CRUZ, no cuenta con registro civil por parte del condenado, su progenitor, pero si se realizó prueba de ADN desde tiempo atrás, estando pendiente el cambio de documentos.

La joven anteriormente residía en San Francisco con su mamá y en el entorno cercano de RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ, pero fue expulsada del colegio y derivado el caso a la Comisaría de Familia de dicha localidad, por uso y al parecer venta de SPA en la institución educativa, razón por la cual la señora madre de KAROL TATIANA optó por irse a residir a Yopal, donde el asunto, al parecer, empeoro.

Además de la bebé de 10 meses gravemente enferma y la adolescente anteriormente referida, el señor condenado tiene otra hija de 15 años, quien reside en Medellín con la progenitora.

El complejo panorama familiar, junto con los ingresos infrecuentes y escasos de todo el grupo, puesto que actualmente el único proveedor es el padre del señor condenado, hacen que en este momento RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ se encuentre en un estado emocional bastante afectado con crisis de angustia, episodios depresivos y presentando llanto fácil.

El señor condenado experimenta impotencia y manifestó que por momentos se desespera ante las diferentes situaciones que viene sufriendo.

CONDICIONES HABITACIONALES

Al diálogo sobre el cambio de residencia, dado que RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ residía en domicilio autorizado en la zona rural de San Francisco (Cundinamarca) con su señora madre y el esposo de aquella, el señor condenado refirió que hubo dificultades debido a la situación de dependencia económica de él y su compañera permanente y la familia de acogida presentó desgaste y "se cansó" de colaborarles.

Ante el ofrecimiento del padre del señor condenado para que fueran a residir a La Peña, RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ se trasladó hacia la ***Finca La Aguadita, Vereda Lagunas del municipio de La Peña (Cundinamarca)****, desde el 17 de mayo de 2023*

El condenado asevera haber radicado oportunamente la solicitud de permiso para cambio de residencia, vía e-mail ante el juzgado, así como informó al INPEC en esa oportunidad.

La vivienda en la cual el señor condenado reside actualmente está ubicada en la vereda Lagunas a una distancia considerable del casco urbano de La Peña (Cundinamarca), puesto que requiere transporte por carretera destapada, demorando en moto o carro unos 30 minutos y a píe más de una hora.

La finca tiene una extensión reducida, encontrando proyecto productivo con dos laguitos de pescado (mojarra y cachama), existía cría de pollos, pero fue suspendida porque, dice el condenado, a veces no tenía para comprar el alimento para los pollos.

La vivienda cuenta con dos habitaciones, baño y cocina. Es una construcción reciente que se encuentra en obra gris.

La casa cuenta únicamente con servicio público domiciliario de energía eléctrica. El agua es suministrada mediante acueducto veredal, pero no es potable. Deben recoger agua lluvia y cuando escasea la comunidad pide que a la alcaldía un carro tanque de agua potable para aprovisionamiento.

El condenado señala que se cocina principalmente en estufa de leña, aunque se cuenta con cilindro de gas, pero solo para uso ocasional.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como apenas aceptables, el lugar cuenta con condiciones internas y externas apenas aceptables.

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de riesgo bajo, puesto que se trata de un sector rural, residencia ubicada zona rural del municipio de La Peña (Cundinamarca).

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que el señor condenado no tiene ningún ingreso y que pervive del apoyo familiar que recibe especialmente de su padre.

PEDRO CONTRERAS BELLO, padre del condenado, labora como técnico agrícola, realizando asistencia técnica agropecuaria a diferentes fincas (diseminación, castración, etc.), labora de manera independiente por lo que sus ingresos no son fijos y estables.

La situación económica que fue observada en el ámbito familiar fue de condiciones de pobreza, contando con recursos económicos apenas suficientes para el cubrimiento de necesidades básicas.

La familia paga un promedio mensual de 60 mil pesos por el servicio de energía, costando 100 mil pesos el gas. En cuanto a la alimentación lo resuelven día a día, pues el padre de RODRIGO ALEXANDER provee el mercado y en ocasiones obtienen alimentos de la finca.

El señor condenado manifestó que le habían ofrecido una oferta de trabajo como conductor, pues posee pase de quinta categoría y ha trabajado en ello desde años atrás, pero que no pudo aceptarla porque requerían disponibilidad inmediata en la Alcaldía de Anolaima.

El señor condenado manifestó que se dedica a trabajar dentro de la finca, realizando labores propias del campo como guadañar, limpiar, arreglar cercas. Refiere que también ha trabajado en corte de caña y ha ayudado en la molienda, pero son labores ocasionales.

Al interrogarse por redes de apoyo familiar, RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ manifestó que su familia no cuenta con recursos para ayudarlo, tiene dos hermanos que asumen los gastos de sus propias familias y su señora madre tiene artritis reumatoide degenerativa, lo que le imposibilita trabajar.

Respecto a la familia de la señora FLOR ESPERANZA IBARRA MOLINA, compañera permanente del condenado, fue referido que ella es oriunda y procedente de Rosas (Cauca), la familia sufrió desplazamiento forzado y no cuentan con medios económicos, además de sostener una relación familiar caracterizada por distanciamiento. FLOR ESPERANZA tiene otros dos hijos mayores de edad los cuales están prestando servicio militar, uno en el INPEC y otro en el Ejército en Tuluá (Valle), por lo tanto, no recibe apoyo económico de ninguno de los miembros de su grupo familiar.

CONCEPTO

El señor condenado RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ actualmente reside con su compañera permanente, una hija en común de diez meses, así como con su padre en medio rural, Finca La Aguadita, Vereda Lagunas, en el municipio de La Peña (Cundinamarca), tratándose de propiedad familiar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Fueron manifestados como motivos para el cambio de domicilio problemas económicos en la vivienda en donde residía con su señora madre y su padrastro en San Francisco (Cundinamarca), además que luego de establecer convivencia con su actual compañera permanente, aquella quedó en embarazo, presentando complicaciones desde el embarazo.

En este momento, el señor condenado RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ reporta problemática familiar importante, que tiene que ver con enfermedad de su hija menor y fuga del domicilio de su hija mayor, con 17 años, quien al parecer a su corta edad ya cuenta con historial de uso problemático de SPA y venta de estupefacientes.

De igual modo, el señor condenado no cuenta con ingreso económico fijo ni estable, dependiendo de los aportes que realiza su padre, quien lo recibió con su compañera e hija, desde mayo del año pasado.

El estado de ánimo del condenado se encuentra afectado, presenta crisis de angustia y episodios depresivos, relacionados con la impotencia que le genera su situación personal y familiar actual.

Respecto a las salidas no autorizadas que presenta el señor condenado, aquel refiere deberse a atenciones médicas que ha requerido su bebé, en el Hospital de Facatativá y en Villeta.

Asevera RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTÍZ que viene cumpliendo las obligaciones inherentes a prisión domiciliaria, señala que siempre ha sido encontrado en su lugar de residencia, donde lo han visitado más de 14 veces entre 2023 y lo corrido de este año, siendo 8 de estas visitas del INPEC a su vivienda en La Peña (Cundinamarca) (…)".

Por lo anteriormente expuesto, no encuentra el Despacho alguna razón para denegar la solicitud y **se AUTORIZA el cambio de domicilio**, a la dirección señalada por el interesado, esto es, en la **Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca.**

El artículo 29 A de la Ley 65 de 1993, señala que una vez dispuesta la sustitución intramural por la domiciliaria se debe enviar copia al Director del INPEC quien deberá señalar en su jurisdicción el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y la adopción de las medidas para garantizar el cumplimiento de la pena, entre otras, como las visitas de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia.

Por lo anterior, se oficiará al señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca y al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual – CERVI -, a fin de que se realice el respectivo registro y actualización en el sistema, del lugar autorizado al condenado como domicilio (prisión) ubicado en **Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**, para continuar con el cumplimiento de la condena impuesta.

Ahora bien, analizado lo anterior y respecto al Informe de Novedad PPL –90272-CERVI-ARVIE- 2024EE0046030, allegado a través del correo institucional el día 29 de febrero de 2024, salidas del interno de la zona de inclusión el 13, 28 de enero de 2024; el 3, 6, 9, 10, 15, 21, 22, 24 de febrero de 2024, este despacho **SE ABSTIENE de correr el traslado del art. 477 del C.P.P.,** al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ**, como quiera las diligencias se encontraban al despacho para el estudio del cambio de domicilio (Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca), el cual se autoriza al interno en el presente proveído.

4.4. - Sobre la Notificación al condenado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Teniendo en cuenta que **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria – vigilancia electrónica - (**Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**), se ordena por la secretaría del despacho **COMISIONAR** a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, con el fin de **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión al sentenciado.

De igual manera, se ordena **NOTIFICAR** el contenido del presente auto al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** a través del correo electrónico ac1966066@gmail.com

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

y equidad»[7]*, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[8]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[9]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos

---

[7] Ibídem.
[8] CSJ T **102248**
[9] C.S.J. RAD 97792

físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ-CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – Este despacho **SE ABSTIENE de correr el traslado del art. 477 del C.P.P.,** al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ**, respecto al Informe de Novedad PPL –90272-CERVI-ARVIE- 2024EE0046030, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído

SEGUNDO. - AUTORIZAR el cambio de domicilio al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** identificado con C.C No. 1.072.920.806, **hacia la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**

TERCERO - OFICIAR a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca-, y al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual – CERVI -, a fin de que se realice el respectivo registro y actualización en el sistema, del lugar autorizado al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** identificado con C.C No. 1.072.920.806, como domicilio (prisión) ubicado en la **Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca** para continuar con el cumplimiento de la condena impuesta.

CUARTO. – Teniendo en cuenta que **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria – vigilancia electrónica - (Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca), se ordena por la secretaría del despacho **COMISIONAR** a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, con el fin de **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión al sentenciado.

De igual manera, se ordena **NOTIFICAR** el contenido del presente auto al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** a través del correo electrónico ac1966066@gmail.com

QUINTO. – REMITIR copia del presente proveído a la dirección de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, a fin de que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 5 de marzo de 2024
Oficio No. 0471

Señor
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad
Villeta Cundinamarca
juridica.epcvilleta@inpec.gov.co

URGENTE

ACUMULADO CUI:	**252696000691201100328 - 761116000165201501778**
Número Interno	**2023-0008**
Sentenciado:	**RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ**
Identificación:	**1.072.920.806**
Delito:	**HOMICIDIO EN CONCURSO HOMOGENEO CON HOMICIDIO EN TENTATIVA Y HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES – USO DE DOCUMENTO FALSO (ACUMULADOS)**
Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA (vigilancia electrónica) – CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO** **SE ABSTIENE DE CORRER TRASLADO ART. 477 DEL C.P.P.**

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de la fecha, le comunico que este Despacho dispuso **AUTORIZAR** el cambio de domicilio al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** identificado con C.C No. 1.072.920.806, **hacia la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**

En consecuencia, se ordenó oficiar a esas dependencias a fin de que se realice el respectivo registro y actualización en el sistema, del lugar autorizado al condenado como domicilio (prisión) ubicado en la **hacia la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**, para continuar con el cumplimiento de la condena impuesta.

Se adjunta: Informe de Valoración de Asistencia Social de fecha 30 de enero de 2024

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 5 de marzo de 2024
Oficio No. 0472

URGENTE

Señor
DIRECTOR
CENTRO DE RECLUSION PENITENCIARIO
Y CARCELARIO VIRTUAL – CERVI
Carrera 10 No. 15-22
Bogotá D.C.
logistica.cervi@inpec.gov.co

INFORMA AUTORIZACION CAMBIO DOMICILIO

ACUMULADO CUI:	**252696000691201100328 - 761116000165201501778**
Número Interno	**2023-0008**
Sentenciado:	**RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ**
Identificación:	**1.072.920.806**
Delito:	**HOMICIDIO EN CONCURSO HOMOGENEO CON HOMICIDIO EN TENTATIVA Y HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES – USO DE DOCUMENTO FALSO (ACUMULADOS)**
Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA (vigilancia electrónica) – CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO** **SE ABSTIENE DE CORRER TRASLADO ART. 477 DEL C.P.P.**

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de la fecha, le comunico que este Despacho dispuso **AUTORIZAR** el cambio de domicilio al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** identificado con C.C No. 1.072.920.806, **hacia la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**

En consecuencia, se ordenó oficiar a esas dependencias a fin de que se realice el respectivo registro y actualización en el sistema, del lugar autorizado al condenado como domicilio (prisión) ubicado en la **hacia la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**, para continuar con el cumplimiento de la condena impuesta.

Se adjunta: Informe de Valoración de Asistencia Social de fecha 30 de enero de 2024

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 5 de marzo de 2024
Oficio No. 0473

Señor
RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ
Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas
La Peña Cundinamarca
Celular 3222113419
ac1966066@gmail.com

ACUMULADO CUI:	**252696000691201100328 - 761116000165201501778**
Número Interno	**2023-0008**
Sentenciado:	**RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ**
Identificación:	**1.072.920.806**
Delito:	**HOMICIDIO EN CONCURSO HOMOGENEO CON HOMICIDIO EN TENTATIVA Y HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES – USO DE DOCUMENTO FALSO (ACUMULADOS)**
Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA (vigilancia electrónica) – CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO** **SE ABSTIENE DE CORRER TRASLADO ART. 477 DEL C.P.P.**

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de la fecha, le comunico que este Despacho dispuso **AUTORIZAR** el cambio de domicilio al condenado **RODRIGO ALEXANDER CONTRERAS ORTIZ** identificado con C.C No. 1.072.920.806, **hacia la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**

En consecuencia, se ordenó oficiar al señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca y al director del Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual – CERVI -, fin de que se realice el respectivo registro y actualización en el sistema, del lugar autorizado al condenado como domicilio (prisión) ubicado en la **hacia la Finca La Aguadita de la Vereda Lagunas del municipio de La Peña Cundinamarca**, para continuar con el cumplimiento de la condena impuesta.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)

Marzo 05 de 2024. Al despacho el proceso contra **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0365 del 23 de marzo de 2023 el condenado allegó los descargos del artículo 477 del C.P.P., el día 26 de mayo de 2023 a través de la oficina jurídica de la CPMS Villeta Cundinamarca. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo cinco (05) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0079

CUI:	**25754610800220158193 3**
NI:	**2023-0120**
Condenado:	**MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS**
Identificación:	**C.C. No. 1.023.013.131**
Delito:	**FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES EN CONCURSO HETEROGENEO CON HOMICIO EN GRADO DE TENTATIVA**
Decisión:	**REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38B DEL C.P. (comisión otro delito)**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a pronunciarse en las diligencias seguidas contra **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131, con el fin de estudiar la viabilidad de revocar el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria art. 38B del C.P. -, concedido por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca, en sentencia del 18 de octubre de 2017, quien se encontraba en prisión domiciliaria en la **Calle 31 B sur No. 13B-18 Casa 42 barrio Quintas de Santa Ana de Soacha Cundinamarca** (**actualmente recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, descontando pena dentro del proceso radicado CUI JUZGADO FALLADOR 257546000000202000078 - RADICADO CUI JEPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA 257546000673202000003**)

2. ASUNTO.

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para

implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el **8 de noviembre de 2015** y preacuerdo aprobado el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, CONDENÓ a **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** a la pena principal de **SESENTA (60) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HOMICIDO EN GRADO DE TENTATIVA** y a las penas accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al igual que el porte o tenencia de armas de fuego por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y CONCEDIÓ al condenado la prisión domiciliaria – art. 38B del C.P. El fallo condenatorio cobro ejecutoria el 18 de octubre de 2017.

El condenado en cumplimiento a lo dispuesto en sentencia condenatoria, prestó caución de UN (1) SMLMV mediante póliza judicial 12-41-101015500 del 23 de octubre de 2017 y suscribió diligencia de compromiso el 24 de octubre de 2017, por lo que se libró la orden de traslado Oficio No. 0904 por la cual se solicitó trasladar al interno al lugar de su domicilio ubicado en la Carrera 20 No. 4 A – 40 Quintas de Santa Ana de Soacha.

Obra en el expediente el oficio No. 001075 emitido por el Centro de Servicios Judiciales de Soacha Cundinamarca, mediante el cual se indica que el condenado cumplirá la condena en la Calle 31 B Sur No. 13 B – 18 Casa 42 barrio Quintas de Santa Ana de Soacha Cundinamarca, con la observación: *"ES DE ANOTAR QUE SE ACTUALIZO EL LUGAR DEL DOMICILIO DEL PROCESADO MAHECHA BOLAÑOS POR SOLICITUD DEL MISMO".*

MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS fue capturado dentro del presente asunto el día **8 de marzo de 2017** (el Juzgado 3º Penal Municipal Mixto de Soacha con función de control de garantías en audiencias concentradas legalizó la captura del infractor y le impuso medida de detención preventiva en establecimiento de reclusión – art. 307 Literal A num 1, 308, 310 num 2 y 5, 311, 312, 313 num 2 y 4 del C.P.P. y libró la Boleta de Detención No. 0035.

El homólogo de Fusagasugá con sede en Soacha Cundinamarca, mediante auto del 6 de noviembre de 2019, avocó conocimiento del proceso y advirtió que el sentenciado se encontraba en ese entonces privado de la libertad por cuenta del proceso CUI 25754600039220190085 4 en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano La Picota de Bogotá.

Mediante auto del 13 de marzo de 2023, el homólogo de Fusagasugá Sede en Soacha Cundinamarca, dispuso la remisión del expediente a este Juzgado y comunica que se encuentra pendiente por dar la aplicación del artículo 477 del C.P.P., y estudiar la revocatoria del mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria.

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso mediante auto de sustanciación No. 0365 del 23 de marzo de 2023, solicitó ante el señor director y asesor jurídico de la CPMS VILLETA que una vez cesen los motivos por los cuales el condenado se encuentra descontando pena en ese centro carcelario se deje a disposición dentro del presente asunto y se ordenó correr el traslado de artículo 477 del C.P.P., para que justifique los motivos por los cuales incumplió con las obligaciones impuestas, al momento de ser merecedor del sustituto penal de la prisión domiciliaria – artículo 38 B del C.P., el cual fue otorgado por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca en sentencia del 18 de octubre de 2017. Lo anterior, dado a que se encontraba para ese

entonces privado de la libertad por cuenta del proceso con CUI 257546000392201900854 en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano La Picota de Bogotá D.C.

Conforme a la consulta del registro de ingresos de expedientes de este Juzgado, consta que el sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS cometió un nuevo delito el día 10 de octubre de 2019**, proceso radicado CUI 257546000000202000014 (ruptura 257546000000201900067), dentro del cual el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca emitió sentencia el 26 de febrero de 2020, condenándolo a la pena principal de 48 meses de prisión, como autor responsable del delito de concierto para delinquir.

El infractor allegó los descargos del artículo 477 del C.P.P., el día 26 de mayo de 2023 a través de la oficina jurídica de la CPMS Villeta Cundinamarca.

Por lo tanto, ingresan las presentes diligencias al despacho para el estudio de la posible revocatoria de la prisión domiciliaria.

3.5 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 Competencia

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2015, el señor **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS,** fue investigado y judicializado bajo el imperio de la ley 599 de 2000 y 906 de 2004. Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la domiciliaria, según lo señala el artículo 38 y ss de la ley 906 de 2004.

De igual manera es competente por el factor territorial, como quiera que el condenado se encuentra privado de la libertad por otro proceso en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, correspondiente al Circuito Penitenciario y Carcelario de este juzgado determinado por el Consejo Superior de la Judicatura.

4.2. De los descargos

El condenado allegó los descargos del artículo 477 del C.P.P., el día 26 de mayo de 2023 a través de la oficina jurídica de la CPMS Villeta Cundinamarca., en el cual indicó:

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

"(…) Yo me arrepiento de corazón porque no pude cumplir con el compromiso por temas familiares y obligaciones con mi familia ya que ese tiempo del 2018 al 2020 salgo de la cárcel picota frente a una situación un poco compleja ya que mi pareja sentimental estaba pasando por un momento económico muy difícil ya que mi hija estaba un poco enferma y ellas un poco alcanzadas de dinero, yo opto por salir a trabajar sin pensar que iba a tener problema con mi proceso ya que cumplía en mi casa con la condena impuesta pero frente a la necesidad y la obligación decidí apoyarlas y empezar a trabajar y a salir a la calle a conseguir el sustento para mi hogar, si yo sé que no debí pero insistí pidiendo el permiso de trabajo pero el juez lo único que me respondía era que no me habían enviado el proceso a ejecución y penas y que no podían darme ese tipo de beneficios pero mis obligaciones como padre aún seguían y no podía seguir dejando pasar necesidades a mi familia (…)".

4.3. De la revocatoria

El mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria es un beneficio que consiste como detalla su nombre en que el infractor en lugar de purgar la pena en forma intramural pueda de la misma manera cumplir a lo que ha sido condenado domiciliariamente, rodeado del núcleo familiar y sustrayéndolo del ambiente carcelario "condicionado" al cumplimiento de unas obligaciones, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su socialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible pero condicionada a que el beneficiario cumpla con ciertas exigencias de las cuales depende su cumplimiento.

Al señor **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca, en sentencia del 18 de octubre de 2017, le concedió el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria conforme a lo previsto en el artículo 38B del C.P.

> *"(..)* ***ARTÍCULO 38. LA PRISIÓN DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN****. <Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine.*
>
> *El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia.*
>
> ***PARÁGRAFO****. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión.*

Sobre los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B señala:

> ***ARTÍCULO 38B. REQUISITOS PARA CONCEDER LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
> *(…)*
> *3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.*
> *En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.*
> *4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:*

> *a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;*
> *b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad."*

En efecto al reunir los presupuestos señalados en la norma se le concedió al infractor este mecanismo sustitutivo el cual, no es para que goce de la libertad y esté programando citas, visitas, salidas o estar infringiendo la ley, sino que la prisión domiciliaria como mecanismo alternativo se debe regir bajo las mismas normas y políticas de los Reglamentos internos del INPEC para la intramural.

Impone el artículo 38 B del Código Penal las siguientes obligaciones a los condenados cuando les es concedido el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria "i) *No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial; ii) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia; iii) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; iv) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria; v) Permanecer dentro del domicilio; vi) Observar buen comportamiento familiar y social*

De conformidad con lo anterior, el Código de Procedimiento Penal –*Ley 906 de 2004*- establece que tal revocatoria debe tener lugar previo traslado al sentenciado en donde en aras de garantizar su derecho al debido proceso, le son solicitadas las explicaciones correspondientes. Al respecto expresa la norma:

> *"**ARTÍCULO 477. NEGACIÓN O REVOCATORIA DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.** De existir motivos para negar o revocar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad los pondrá en conocimiento del condenado para dentro del término de tres (3) días presente las explicaciones pertinentes.*
>
> *La decisión se adoptará por auto motivado en los diez (10) días siguientes."*

La Corte Constitucional se refirió sobre el tópico mediante la Sentencia C – 006 de 2003, Magistrado ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en los siguientes términos:

> *"En ejercicio de la potestad de configuración y de diseño de la política criminal, el legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una persona responsable de haber cometido una conducta punible. Para ello, puede definir cuáles conductas son socialmente reprochables y cuáles han dejado de serlo, puede determinar cuándo procede la privación de la libertad y cuándo es necesario imponer sanciones menos gravosas, o también establecer beneficios o subrogados penales cuando a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio dan lugar a la pérdida temporal de la libertad personal, existen*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

> *circunstancias que señalan que es innecesaria la reclusión en un establecimiento carcelario. Es en ejercicio de dicha potestad que el legislador estableció la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esta figura constituye un beneficio que otorga la ley penal a quienes habiendo sido condenados a una pena de prisión no superior a los tres años, cumplan con las condiciones establecidas en ella. Este beneficio no opera de manera automática, pues el juez debe evaluar los antecedentes del condenado y la gravedad de la conducta para determinar si es o no necesaria la ejecución de la condena de privación de la libertad".*

Y añadió:

> *"La revocatoria no constituye una sanción que comporte el desconocimiento del principio de non bis in ídem, pues al condenado no se le impone una sanción adicional por el mismo hecho que originó la condena, ni se agrava el quantum de su condena. La revocatoria de la suspensión de la ejecución condicional de la pena es la consecuencia jurídica prevista por el legislador para el evento de incumplimiento y no tiene por fin sancionar al condenado, sino garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder gozar de dicho beneficio".*

Atendiendo a las disposiciones normativas citadas, este despacho ordenó correr al sentenciado el traslado mencionado por el artículo 477 del Código de Procedimiento Penal (auto No. 0365 del 23 de marzo de 2023) para que se pronunciara en el sentido de informar los motivos por los cuales transgredió, y se evidencia que en lo manifestado a través de su escrito el interno **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** manifiesta "*yo opto por salir a trabajar sin pensar que iba a tener problema con mi proceso ya que cumplía en mi casa con la condena impuesta pero frente a la necesidad y la obligación decidí apoyarlas y empezar a trabajar y a salir a la calle a conseguir el sustento para mi hogar".*

Aterrizando de inmediato al estudio concreto del asunto, se observa una vez analizadas las diligencias, que el señor **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** le fue concedido el sustituto penal de la prisión domiciliaria, por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca.

El condenado aceptó las condiciones que le fueron impuestas con la suscripción de la diligencia de compromiso el día 24 de octubre de 2017, ratificando así su consentimiento a cumplir cabalmente las obligaciones que impone el artículo 38 B del Código Penal.

Una vez se le concedió la prisión domiciliaria en lugar de someterse a las obligaciones impuestas en el acta de compromiso y en las normas y políticas que rigen los reglamentos internos de la Cárceles del INPEC, el señor **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** ha hecho caso omiso infringiendo la ley.

En este proceso no solo se está tratando de la transgresión ocasionada por el condenado al haberse evadido de su domicilio, al tener mala conducta, sino porque **fue capturado el día 10 de octubre de 2019, por hechos del CUI 257546000000202000014, delito CONCIERTO PARA DELINQUIR, dentro del cual fue sentenciado a la pena principal de 48 meses de prisión, por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el 26 de febrero de 2020, a sabiendas que se encontraba purgando pena bajo prisión domiciliaria, y quedando por cumplir la pena en prisión domiciliaria**, quebrantando de esta forma las obligaciones que están estipuladas en el artículo 38 B del C.P.

Lo anterior significa que el señor **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** no acató los reglamentos del INPEC ni tampoco lo consagrado en el artículo 38 B y ss de la Ley 599 de 2000 y artículo 29 A de la Ley 65 de 1993, sobre todo en lo que tiene que ver con las salidas de su residencia sin autorización judicial.

Sobre este punto ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:

> *"…Este comportamiento revela una personalidad carente de escrúpulos frente al delito, cuando debía ser paradigma de rectitud y ejemplo para los demás, lo que permite colegir que la prevención especial y la reinserción social, solo se harán posibles mediante la detención intramural.*
>
> *Y son precisamente la gravedad, naturaleza y modalidades del reato imputado, los que llevan a pronosticar que si pasó por encima de la ley, cuando tenía el deber especial de acatarla, menos la respetará cuando no se desempeñe como juez penal o simple particular y que, por ende, pondrá en peligro a la comunidad, al no estar detenida intramuralmente.*
>
> *De otra parte, desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular gravedad, como el presente, merecen ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un tratamiento benigno llevaría, como lo ha dicho la Sala[3], un mensaje de desequilibrio en la aplicación del Derecho, una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia…"(subrayado nuestro).*

Así, este Despacho considera que el encartado necesita tratamiento penitenciario para que reflexione sobre su proceder y cumpla tanto con las normas de comportamiento legalmente establecidas, como las disposiciones penales que transgredió.

Lo expuesto indica que el sentenciado **INCUMPLIÓ** las obligaciones que impone la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria, por tanto, se estudia la posibilidad de revocar la medida concedida.

Al no estar justificado el incumplimiento de las obligaciones impuestas, y dada esta actitud de franco desacato a la justicia, de persistencia y obstinación por la transgresión y comportamiento rebelde, pese al generoso tratamiento y a las facilidades que se le han reconocido, dejan ver que no está dispuesto a sujetarse a las condiciones que le imprimen su calidad de condenado y por lo mismo le impiden aspirar a que se conserve la vigencia del sustituto conferido, pues se demuestra que el proceso resocializador no está surtiendo el efecto positivo esperado, en torno de la sujeción a los compromisos adquiridos, que son requisito fundamental de las benéficas condiciones reconocidas por la autoridad Judicial, por lo cual se evidencia la necesidad de aplicar tratamiento intramural, y como consecuencia directa, ha de revocarse el sustituto de la prisión domiciliaria concedido.

Así, este Despacho considera que el encartado necesita tratamiento penitenciario para que reflexione sobre su proceder y cumpla tanto con las normas de comportamiento legalmente establecidas, como las disposiciones penales que transgredió.

Por último, como la sanción penal impuesta no ha prescrito, y como quiera que, se reitera, no observó buena conducta, encuentra este servidor que la sanción penal está vigente, razón por la cual es pertinente exigir el cumplimiento de las obligaciones a que se sometió el sentenciado.

En consecuencia, sin ahondar en más consideraciones, este Despacho por encontrar que el sentenciado violó por acción sus obligaciones, se **REVOCARÁ** el sustituto penal concedido

---

[3] Ver auto de 23 de octubre/00, Seg. instancia. Rad. 16997. M. P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.

por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca mediante sentencia del 18 de octubre de 2017

4.4 Sobre el Tiempo del Cumplimiento de la Pena.

Analizadas las diligencias se tiene que el sentenciado ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el día 8 de marzo de 2017 hasta el 10 de octubre de 2019** (fecha en que fue capturado por el radicado CUI 257546000000202000014, delito concierto para delinquir), por lo que cumplió **físicamente 946 días, que equivalen a 31 meses y 16 días.**

El condenado NO cuenta con redenciones de pena reconocidas

Por lo tanto, ha cumplido un tiempo de **TREINTA Y ÚN (31) MESES y DIECISÉIS (16) DÍAS.**

Como fue condenado a la pena principal de prisión de **60 meses**, vemos que le **QUEDA POR CUMPLIR VEINTIOCHO (28) MESES y CATORCE (14) DÍAS de manera intramural.**

Sobre el traslado inmediato del condenado de prisión domiciliaria a intramural en sede de Tutela señaló la Corte Suprema de Justicia:

> *"Por tanto, a pesar de que el auto interlocutorio proferido el del 21 de mayo del año en curso por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta no señala el efecto en que proceden los recursos de reposición y apelación, se entiende que el segundo es en el efecto devolutivo, por lo que disponer el traslado inmediato de la aquí accionante al establecimiento penitenciario no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten…"*[4].

En otra decisión afirmó:

> *"Luego de la revocatoria de la prisión domiciliaria por el incumplimiento de las obligaciones, el art. 29F ibídem de la misma codificación contempla:*
>
> *ARTÍCULO 29F. REVOCATORIA DE LA DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA.* ***El incumplimiento*** *de las obligaciones impuestas* ***dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada*** *del juez competente.*
>
> ***El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida*** *o el funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia,* ***detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez*** *que profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.*
>
> *En consonancia con las disposiciones en cita, en fallo CSJ STP10238 – 2019, advirtió esta misma Sala de Decisión que «disponer el* ***traslado inmediato*** *de la aquí accionante* ***al establecimiento penitenciario*** *no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten».*
>
> *En otras palabras, queda claro que, es deber del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, disponer el traslado perentorio del condenado que incumple las obligaciones adquiridas con el otorgamiento de la prisión domiciliaria, al centro carcelario…"*[5]

[4] CSJ T RAD 105612 del 30 de julio de 2019, M.P. Dr **LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA**
[5] CSJ T RAD 106432 del 3 de septiembre de 2019 M.P . Dra **PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR**

Por lo anteriormente expuesto y en vista que el sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** se encuentra actualmente recluido en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca (proceso radicado CUI JUZGADO FALLADOR 25754600000202000078 - RADICADO CUI JEPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA 25754600067320200003), se ordena por la secretaría del Juzgado, **OFICIAR** al señor director y asesor jurídico de dicho penal, con el fin de solicitar que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra allí purgando pena, se deje a disposición dentro del presente asunto, con el fin de materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **28 meses y 14 días** de manera intramural.

En consecuencia, se ordena LIBRAR la **ORDEN DE CAPTURA** en contra del sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131 y por la secretaria del Juzgado elaborar los oficios dirigidos ante las autoridades correspondientes.

4.5. Sobre la exigibilidad de la Caución

De otra parte, como quiera que el sentenciado violó las obligaciones a que se encontraba sometido en virtud de la prisión domiciliaria, se dispone de conformidad con lo previsto en el artículo 372 del C. P. P., hacer exigible la caución constituida para disfrutar de la prisión domiciliaria, en consecuencia, una vez en firme esta decisión, se informara al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo.

4.6. Sobre la Comisión y Notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca (por otro proceso), se ordena por la secretaría de este Juzgado **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los

Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[6], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad…"[7]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[8]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por

---

[6] Ibídem.
[7] CSJ T **102248**
[8] C.S.J. RAD 97792

traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ-CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que el sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131 tiene descontado por pena física un total de **31 MESES y 16 DÍAS** de la pena principal de prisión de **60 meses.**

SEGUNDO. - REVOCAR al interno **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131 el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca, en sentencia del 18 de octubre de 2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente auto, en consecuencia, el condenado deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **28 meses y 14 días** de manera intramural.

TERCERO. - En vista que el sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** se encuentra actualmente recluido en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca (proceso radicado CUI JUZGADO FALLADOR 25754600000202000078 - RADICADO CUI JEPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA 25754600067320200003) , se ordena por la secretaría del Juzgado, **OFICIAR** al señor director y asesor jurídico de dicho penal, con el fin de solicitar que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra allí purgando pena, se deje a disposición dentro del presente asunto, con el fin de materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **28 meses y 14 días** de manera intramural.

CUARTO. - Se ordena LIBRAR la **ORDEN DE CAPTURA** en contra del sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131 y por la secretaria del Juzgado elaborar los oficios dirigidos ante las autoridades correspondientes.

QUINTO. - Teniendo en cuenta que **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca (por otro proceso), se ordena por la secretaría de este Juzgado **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SEXTO. - Por la Secretaria del Juzgado **PROCÉDASE** a remitir copia de la presente providencia a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca. para que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación**.**

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 5 de marzo de 2024
Oficio No. 0489
(este oficio NO sustituye boleta de detención o encarcelación)

Señor:
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
Villeta Cundinamarca
juridica.epcvilleta@inpec.gov.co

URGENTE - MATERIALIZAR EL TIEMPO QUE LE RESTA POR CUMPLIR DE LA PENA

CUI:	**25754610800220158193 3**
NI:	**2023-0120**
Condenado:	**MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS**
Identificación:	**C.C. No. 1.023.013.131**
Delito:	**FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES EN CONCURSO HETEROGENEO CON HOMICIO EN GRADO DE TENTATIVA**
Decisión:	**REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38B DEL C.P. (comisión otro delito)**

Cordial saludo:

De conformidad con lo ordenado en auto de la fecha emitido por el suscrito y en vista que el sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131 se encuentra actualmente recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca a disposición de otra autoridad judicial (proceso radicado CUI JUZGADO FALLADOR 257546000000202000078 - RADICADO CUI JEPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA 257546000673202000003), se le solicita a esa dirección que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra allí purgando pena el prenombrado, se deje a disposición dentro del presente asunto, con el fin de materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **28 meses y 14 días** de manera intramural.

Lo anterior, toda vez que mediante auto interlocutorio No. 0079 del 5 de marzo de 2024, este Juzgado resolvió **REVOCAR** la prisión domiciliaria que le había sido otorgada por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca en sentencia del 18 de octubre de 2017.

Se adjunta copia de auto interlocutorio No. 0079

Atentamente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 5 de marzo de 2024
Oficio No. 0490

Señores Jefe Grupo de Capturas
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - SIJIN
Avenida El Dorado No. 75 - 25
Bogotá D.C.

ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **LIBRAR ORDEN DE CAPTURA**, en contra de **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131 a quien este Juzgado **REVOCÓ** el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca, mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, quien deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **28 meses y 14 días** de manera intramural.

MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS fue condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, a la pena principal de **SESENTA (60) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HOMICIDO EN GRADO DE TENTATIVA** y a las penas accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al igual que el porte o tenencia de armas de fuego por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y CONCEDIÓ al condenado la prisión domiciliaria – art. 38B del C.P. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 18 de octubre de 2017.

El proceso se identifica con el **radicado CUI 25754610800220158193 3** y este despacho le asignó el Número Interno 2023-0120, por lo tanto, una vez sea capturado, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	**MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS**
Identificación No.	C.C. No. 1.023.013.131 expedida en Bogotá D.C.
Fecha de Nacimiento	16 de mayo de 1996
Lugar de Nacimiento	El Peñón Cundinamarca
Escolaridad	N/A
Ocupación	N/A
Nombre Padres	Luis Mahecha y Elena Bolaños
Estado Civil	Unión Marital de hecho con Carol Liseth Soto
Dirección	Casa 31 B Sur No. 13 B – 18 Casa 42 Barrio Quintas de Santa Ana Soacha Cundinamarca
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género masculino; estatura 1.65 mts, piel trigueña, contextura delgada, cabello de mediana cantidad y castaño, de frente mediana, ojos medianos y castaños, cejas arqueadas y medianas, orejas mediana y de lóbulos adheridos, mentón cuadrado y dividido, de escaso vigota y cuello medio.
Señales particulares	Tatuaje estrellas en la nuca y otro en la espalda con el nombre de Elena y Miller

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 5 de marzo de 2024
Oficio No. 0491

Señor
IT JORGE ALEXANDER MONTERO DUQUE
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - SIJIN
Carrera 58 No. 9 – 43 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **LIBRAR ORDEN DE CAPTURA**, en contra de **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131 a quien este Juzgado **REVOCÓ** el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca, mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, quien deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **28 meses y 14 días** de manera intramural.

MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS fue condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, a la pena principal de **SESENTA (60) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HOMICIDO EN GRADO DE TENTATIVA** y a las penas accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al igual que el porte o tenencia de armas de fuego por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y CONCEDIÓ al condenado la prisión domiciliaria – art. 38B del C.P. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 18 de octubre de 2017.

El proceso se identifica con el **radicado CUI 25754610800220158193 3** y este despacho le asignó el Número Interno 2023-0120, por lo tanto, una vez sea capturado, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	**MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS**
Identificación No.	C.C. No. 1.023.013.131 expedida en Bogotá D.C.
Fecha de Nacimiento	16 de mayo de 1996
Lugar de Nacimiento	El Peñón Cundinamarca
Escolaridad	N/A
Ocupación	N/A
Nombre Padres	Luis Mahecha y Elena Bolaños
Estado Civil	Unión Marital de hecho con Carol Liseth Soto
Dirección	Casa 31 B Sur No. 1 B – 18 Casa 42 Barrio Quintas de Santa Ana Soacha Cundinamarca
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género masculino; estatura 1.65 mts, piel trigueña, contextura delgada, cabello de mediana cantidad y castaño, de frente mediana, ojos medianos y castaños, cejas arqueadas y medianas, orejas mediana y de lóbulos adheridos, mentón cuadrado y dividido, de escaso vigota y cuello medio.
Señales particulares	Tatuaje estrella en la nuca y otro en la espalda con el nombre de Elena y Miller

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

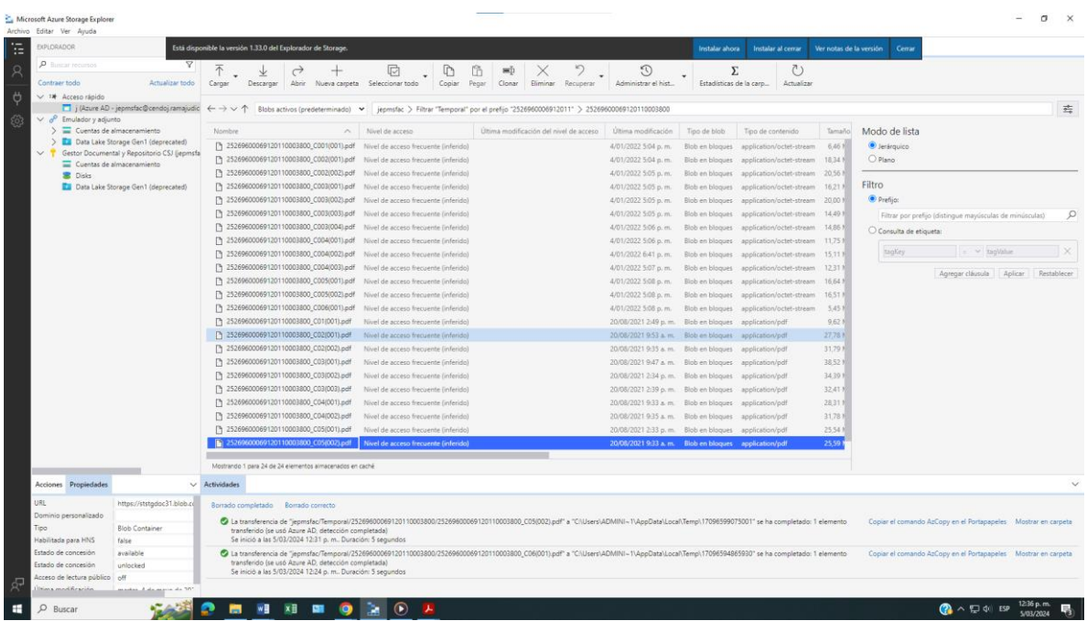
JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 4 de 2024. Al despacho el proceso contra **JHON ALEXANDER SANCHEZ FUENTES,** identificado con C.C No. 1.070.958.780 informando que una vez verificado el estado actual del proceso esta agencia judicial procede a emitir pronunciamiento acerca de la posible extinción de la sanción penal.

Han sido múltiples los requerimientos de los agentes del estado, con solicitudes de libertad condicional, interposición de recursos, acumulación jurídica de penas, redención de pena, aclaración de tiempo de privación de la libertad, prisión domiciliaria, beneficios administrativos, acciones de tutela y hábeas corpus lo que ha generado múltiples entradas y salidas del expediente de Secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (artículo 118 y ss del Código General del Proceso).

De igual manera informo al señor Juez que estamos en la misión de depurar procesos que se encuentran en el AZURE debido a que los físicos, al ser pioneros en la digitalización, fueron enviados a Bogotá sin que a la fecha hayan sido retornados. Se torna difícil el estudio de la situación jurídica debido a que en dicho programa se encuentran las capetas sin los protocolos ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura. SÍRVASE PROVEER



DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

NNP

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo Cuatro (4) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0080

C.U.I.	**252696000691201100038**
No. Interno:	**2019-0017**
Sentenciado:	**JHON ALEXANDER SANCHEZ FUENTES**
Identificación:	**1.070.958.780**
Delitos:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la rehabilitación de las penas accesorias.**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho, a decidir lo que en derecho corresponda acerca de la extinción de la sanción penal y rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a favor de **JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES, identificado con C.C No. 1.070.958.780**, una vez recibidos los medios de prueba requeridos para tal efecto.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

El Juzgado 2 Penal Municipal de Facatativa en sentencia del 30 de marzo de 2011, condenó a JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES a la pena principal de 9 meses de prisión, y accesoria para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el delito de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO. Le concedió la suspensión de la ejecución de la pena por un periodo de dos (2) años previa cancelación de caución juratoria y diligencia de compromiso conforme lo señala el artículo 65 C.P.

Conoció del asunto el homólogo en descongestión de este municipio que el 16 de mayo de 2014 avocó, se abstuvo de revocar y corrió el traslado del artículo 477 del CPP al no haber materializado el subrogado concedido. El 10 de septiembre de 2014 REVOCÓ y una vez materializada la captura el 29 de diciembre siguiente legalizó y restableció el subrogado.

El condenado asume la suscripción de la diligencia de compromiso prorrogando el periodo de prueba por dos años el 29 de diciembre de 2014 - artículo 65 del C.P -.

Este proceso forma parte de los 707 expedientes que retornaron a este Despacho el día 17 de enero de 2016, por finalización de la vigencia de la medida transitoria del Juzgado 2° Homologo de Descongestión de Facatativa Cundinamarca: conforme el PSAA15-10296 del 15 de febrero de 2015, emanado del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa.

El día 30 de marzo de 2017 el señor procurador 254 Judicial I Penal realiza solicitud ante esta agencia judicial, la cual tiene como fin que se realice el estudio de la posible extinción de la sanción penal, para lo cual es requisito *sine quanom* oficiar a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol para que informe de los antecedentes del sentenciado y

poder tomar una decisión de fondo de la relacionada solicitud. Este juzgado avoca y solicita antecedentes del infractor el 8 de enero de 2019.

Consultado el expediente digital en el aplicativo AZURE el día de hoy, se encontró la disponibilidad del mismo.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

---

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 COMPETENCIA

Conforme a la fecha de los hechos, JHON ALEXANDER SÁNCHEZ CIFUENTES fue investigado y judicializado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y Ley 906 de 2004.

Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la extinción de la sanción penal, según lo señala el numeral 8 del artículo 38 de la ley 906 de 2004, que indica:

> ***"ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.*** *Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: (…)*
>
> *8.* ***De la extinción de la sanción penal****…"*

4.2. EXTINCIÓN DE LA PENA PARA LOS PROCESADOS BENEFICIADOS CON LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA

A la luz del artículo 67 del Código Penal, cuando quiera que el condenado ha sido beneficiado **con los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad**, esto es, **suspensión condicional de la ejecución de la pena** o **Libertad Condicional**, cumplido a cabalidad las obligaciones impuestas **y transcurrido el periodo de prueba**, la condena quedará extinguida y la liberación ha de entenderse como definitiva.

Analizado dicho artículo se tiene que se presentan varias eventualidades por las cuales se puede extinguir la condena a las personas que se les ha concedido dichos subrogados que cumplan las obligaciones impuestas en el artículo 65 C.P.:

1. Informar todo cambio de residencia
2. Observar buena conducta
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo
4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.

4.2.1. El Pago de la Caución

La caución consiste en el depósito de dinero o la constitución de una póliza de garantía, en cuantía que ordene el funcionario, al condenado para que pueda disfrutar de los mecanismos sustitutivos de la pena.

Dicha caución se impone con el ánimo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas durante el transcurso del proceso. Ello significa la manifestación de la voluntad del implicado en cumplir con los deberes impuestos en la sentencia condenatoria y garantizar el pago de los perjuicios.

Ahora, en materia penal se tiene que una de las finalidades es asegurar la comparecencia al proceso del sujeto investigado, y otra, cuando está condenado, es el tener el cumplimiento de ciertos deberes dentro de un periodo, que al finalizar, le otorgaría la extinción de la pena impuesta.

En efecto, en el momento de emitir la condena por parte del funcionario de conocimiento tiene que pronunciarse necesariamente – obligatoriamente – en dos aspectos fundamentales, el primero con respecto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el otro como lo es la prisión domiciliaria. Ello con el fin de darle la oportunidad al condenado, si reúne los requisitos estipulados para cada uno de los pronunciamientos, de poder disfrutar ya sea de una libertad – que se suspende según el periodo de prueba ordenado – y el otro de cumplir la pena en su domicilio, en lugar de purgarla intramuralmente.

Con respecto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tenemos que la misma de desarrolla, si reúne una serie de requisitos estipulados en el artículo 63 del C.P., como *"1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años"* y *"2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena".* Lo anterior quiere decir que el condenado, si acepta esta proposición del Estado, de que le *"SUSPENDAN"* la ejecución de la pena que le impuso el juez, debe como primera medida cancelar la caución ordenada y firmar la diligencia de compromiso donde se relacionan las obligaciones del artículo 65 del C.P.

4.2.2. Diligencia de Compromiso

Nótese que esta diligencia o acta es un requisito que está estipulado en la ley sobre todo en las concesiones de prisión domiciliaria - vigilancia electrónica (art 38 A-derogado), el compromiso del pago de la multa impuesta conforme lo señala el inciso 2º del numeral 6º del artículo 39 ibídem, y los incisos 2º art 341, 3º art 353, artículos 366, 368, 377, 380, 414, 475 y 478 de la Ley 600 de 2000. Sin embargo, por costumbre se utiliza para la concesión de los mecanismos sustitutivos como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional. De lo anterior si dado caso en que el condenado no pueda firmar el acta de compromiso, el artículo 65 C.P. es claro en manifestar que las obligaciones impuestas (numerales 1º al 5º) se garantizarán mediante caución.

Efectivamente, para dicho reconocimiento con el pago de la caución impuesta es suficiente para el cumplimiento de las obligaciones que se imponen en el articulado mencionado o de lo contrario y conforme lo señala el artículo 66 ibídem, se procede a su revocatoria.

Así se refirió la Corte Constitucional[3]:

"En efecto la previsión normativa del artículo 65 del Código Penal solo tiene sentido completo cuando se toma en conjunto con lo dispuesto en los artículos 63 y 64 del Código Penal que definen la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional, respectivamente; en el artículo 66, que establece las consecuencias para el incumplimiento de las obligaciones que la norma acusada contempla, y en el artículo 67

[3] Corte Constitucional Sentencia C-331-02

que regula la extinción de la condena cuando el período de prueba haya transcurrido sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo 65…".

4.2.3. El Observar Buena Conducta

Este ítem fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-371-02, en el entendido que *"se traduce en deberes jurídicos cuyo incumplimiento acarrea las sanciones que en cada caso hayan sido previstas por el ordenamiento. No se trata, pues, de una decisión subjetiva del operador jurídico, a partir de su propia apreciación sobre lo que debe entenderse por buena conducta, sino que, en cada caso, es necesario acreditar las infracciones a los deberes jurídicos que puedan considerarse como manifestaciones de mala conducta, situación que impone una valoración objetiva, a partir del propio ordenamiento".*

4.2.4. La Reparación de Daños y/o Cancelación de Perjuicios

Como lo decanta la ley, la conducta punible origina obligación de reparar unos daños materiales y morales causados con ocasión de infringirla. Efectivamente el delito que se origina como un hecho típico, genera de manera simultánea un daño que afecta el patrimonio de una persona cuyo derecho, que tiene la víctima o el perjudicado, lo habilita para reclamar los perjuicios ocasionados por el delito.

Sin embargo, en lo que respecta al incidente de reparación integral, mecanismo creado por la ley con el fin de reparar el daño ocasionado por el delito, la Corte Suprema de Justicia así lo señaló en varios pronunciamientos como el radicado No 34145 del 13 de abril de 2011.

Entonces conforme a la ley y la jurisprudencia el propósito del incidente de reparación integral previsto en la Ley 906 de 2004 (art 102) es el definir la ocurrencia de un daño, y su valor pecuniario, más no su fuente, *por cuanto en la sentencia ya se declaró la comisión del delito y la responsabilidad en cabeza del procesado, quien a su vez ostenta la condición de demandando en el incidente, puesto que la propia ley sustancial impone al penalmente responsable la obligación de indemnizar*.

4.2.5. Cumplimiento de la Sentencia

El infractor conforme a la sentencia proferida en su contra, deberá cumplir con las órdenes impartidas en la misma.

4.3. LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN

Atendiendo al estado actual del proceso, y observando que el periodo de prueba impuesto al condenado ha vencido, el Despacho entra a estudiar la extinción de la sanción penal a favor de **JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES.**

La suspensión condicional de la ejecución de la pena es un subrogado que consiste, como su nombre lo indica, en suspender la pena a quien acredite los requisitos previamente establecidos en la ley, y su disfrute esta "condicionado" al cumplimiento de unas obligaciones dentro de un periodo de prueba establecido, en busca de prevenir la criminalidad y sustraer del ambiente carcelario a aquellos autores de delitos de penas mínimas, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su resocialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible y es condicional pues el beneficiario está obligado a cumplir con ciertas exigencias de las cuales depende la extinción de la condena y las penas impuestas o la ejecución de la sentencia respectiva.

La pretensión punitiva del Estado, admite para las penas, diversas causas de extinción que se encuentran catalogadas en la ley como i) la extinción de la acción penal y ii) extinción de la pena. Sin embargo, estos fenómenos están sometidos a un tratamiento diverso, cuyas causas el legislador estipuló y se encuentran consagradas en el estatuto penal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En lo que a la extinción de la pena respecta, corresponde traer a colación el tenor literal del artículo 67 del Código Penal - Extinción y liberación - que textualmente expresa:

"Art. 67.- *Transcurrido el período de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida, y la liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine."* [4]

De conformidad con los artículos 88 y 89 del Código Penal de la Ley 599 de 2000 se tiene que la extinción de la acción penal goza de diferentes causas que la originan y en el momento de presentarse produce dicha extinción.

Reza el artículo 88 del C.P:

"ARTICULO 88. EXTINCION DE LA SANCION PENAL. Son causas de extinción de la sanción penal:

1. La muerte del condenado.
2. El indulto.
3. La amnistía impropia.
4. **La prescripción**.
5. La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias.
6. La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley.
7. Las demás que señale la ley.".

A su turno el artículo 89 del mismo estatuto estipula que la pena privativa de la libertad prescribe en el término fijado en la sentencia o también en el que falte por ejecutar con un mínimo de 5 años y para los demás casos prescribe en 5 años.

"ARTICULO 89. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL. La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.".

Conforme se ha señalado en diferentes pronunciamientos por parte de los Altos Tribunales la prescripción de la pena se consolida, no solamente por el transcurso del tiempo, sino en el mismo tiempo, el abandono por parte del titular del derecho que deja de ejercerlo, motivo que lleva a la extinción.

Sin embargo, dentro del ordenamiento se consagra la posibilidad de interrumpir el término prescriptivo si se desarrolla el acto que reivindique el mismo.

En un pronunciamiento de la H. Corte Constitucional señaló lo siguiente:

"La prescripción es la cesación de la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el periodo de tiempo fijado por la ley, opera tanto para la acción como para la pena. En la prescripción de la pena el Estado renuncia a su potestad represiva por el transcurso del tiempo, anulando de esta manera el interés de hacer efectiva una condena o sanción legalmente impuesta". [5]

Según lo expuesto en lo que tiene que ver con la prescripción de la pena se manejan bajo la esencia de que el condenado se encuentre gozando de la libertad, pero existen varias posibilidades por las cuales puede interrumpir dicho goce, entre ellas las consagradas en el artículo 65 del C.P.

---

[4] Artículo 67 Código Penal, Ley 599 de 2000.
[5] Sentencia C-997 de octubre 12 de 2004 M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Efectivamente, estas situaciones extraordinarias en las que el plazo de prescripción comienza a correr en otro momento, se dan como por ejemplo en la revocatoria de la ejecución condicional, de la libertad condicional, cuando infringe la ley en dicho periodo o no cancela los perjuicios o simplemente no cancela la caución impuesta para el disfrute del beneficio.

Estos otros momentos en que se interrumpe la pena son los que se lleva a que se haga una nueva evaluación con respecto a la regla inicial y que son parte de la prescripción de la sanción penal.

Existen varios eventos en que se pueda dar esas prescripciones y que son interrumpidas durante el periodo otorgado.

1. Si al condenado se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mismo en forma renuente no cancela la caución impuesta ni firma la diligencia de compromiso, significa que no está de acuerdo con la oportunidad que le está brindando el Estado en disfrutar de esa "libertad". Si pasa ello y el infractor – 90 días después de ejecutoria de la sentencia – no comparece, dará pie a que se le revoque el subrogado y a partir de allí, de la ejecutoria de la sentencia, empieza el término de prescripción de la sanción privativa fijado en el fallo condenatorio, sin ser menor de cinco años.
2. Si al condenado se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mismo acepta dicha prebenda cancelando la caución impuesta y firmando el acta de compromiso, significa que está obligado a cumplir con lo señalado en el artículo 65 C.P.; sin embargo, para el presente caso, como su nombre lo indica, se "suspende" la ejecución de la pena y en consecuencia, el término prescriptivo de la misma, empezará una vez se termine el periodo de prueba impuesto.
3. Si el beneficiado cumple, dentro del periodo de prueba, con las obligaciones impuestas en el artículo 65 C.P. el Estado procederá a extinguir la pena conforme lo señala la ley.
4. Si el condenado está purgando pena impuesta y se le concede libertad condicional, una vez cancelada la caución y firmada el acta de compromiso, empezará el término prescriptivo- del tiempo que falte por ejecutar sin ser menor de cinco años - finalizado el periodo de prueba.
5. Si el condenado no cumple alguno de los requisitos consagrados en el artículo 65 C.P., sobre todo el de conducta o la reparación de los daños, el Estado se verá en la obligación de revocar el subrogado otorgado en pos de proteger los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.
6. Sin embargo, todo trámite de revocatoria está supeditado a lo consagrado en la ley respectando las reglas del debido proceso, derecho de defensa y contradicción.

Sumado a lo anterior, el artículo 90 consagra que el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma:

> ***"ARTICULO 90. INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.*** *El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.*

4.4. SOBRE EL PRESENTE CASO

Aterrizando al caso objeto de estudio, como se dijo en líneas anteriores, al señor **JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES** le fue concedido la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de DOS (2) AÑOS la cual fue revocada pero restablecida el 29 de diciembre de 2014 y suscribió diligencia de compromiso ese mismo día periodo de prueba que feneció el 29 de diciembre de 2016.

De otro lado, como es de público conocimiento, los beneficiados con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, o bien con la libertad condicional, deben someterse al periodo de prueba que para el caso fije el Juez fallador o ejecutor según el caso, y ello

conforme a los preceptos que dictan los artículos 63 y 64 del Codificado penal; empero, si durante dicho periodo de prueba incumplieren alguna de las obligaciones de que trata el artículo 65 ibídem, el termino prescriptivo cuenta a partir del momento de su vencimiento por el lapso de 5 años y es durante ese espacio de tiempo que el Estado puede hacer exigible el cumplimiento de la condena si a ello hay lugar. Una vez fenecido, no queda otra opción jurídica que decretar su prescripción.

Al respecto señaló la H. Corte Suprema de Justicia:

> *"…Y es que una vez concedido cualesquiera de los beneficios, esto es, libertad condicional, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria o la vigilancia electrónica, el condenado está obligado a suscribir una diligencia de compromiso, oportunidad en la que se impone unas obligaciones a cumplir en un término concreto, el cual recibe la denominación de período de prueba…"*[6]

Una vez **JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES** cumplió con la obligación de pago de caución juratoria el 29 de diciembre de 2014, así como firmó la diligencia de compromiso el y en vista del cumplimiento del periodo de prueba de **VEINTICUATRO (24) MESES,** se confirma que se han reunido los requisitos y a la fecha se ha extinguido la pena, pues dentro de las diligencias no aparece noticia criminal alguna que dé cuenta que el condenado haya incurrido en el incumplimiento de las conductas descritas en el lapso que comprendía del 29 de diciembre de 2014 al 29 de diciembre de 2016 y que originaran una posible revocación..

Así las cosas, para este Despacho no existe duda alguna de que la pena impuesta al sentenciado está más que vencida y bajo estas condiciones es procedente **declara la extinción de la sanción penal** por la causal de **prescripción**, porque de conformidad con el artículo 89 del Código Penal la misma no puede proseguirse, pues la prescripción es una causal para su fenecimiento.

A pesar de que este juzgado sufrió varios percances y situaciones que obligaron a su cierre como el traslado de sede a partir del 7 de diciembre de 2020 y una vez instalados debido a la situación política del País, dicha sede a partir del 3 de mayo de 2021 se dispuso el cierre extraordinario y la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios, así como al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada, estuvo atento a los requerimientos tanto del condenado como de la víctima.

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá*

[6] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, RAD. 45746 (15-04-15), M.P. Dr Fernando Alberto Castro Caballero

modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más 4.300 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO, PONAL y de Cota, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, un Asistente Administrativo, un Secretario y una oficial mayor.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la presente petición.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[7], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[8]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados de la Ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[9]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de

---

[7] Ibídem.
[8] CSJ T **102248**
[9] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Finalmente, desde el mes de noviembre de 2023, el juzgado se encuentra atendiendo en el palacio de justicia de Facatativá, una vez realizada su restauración y puesta en funcionamiento.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ,

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL impuesta dentro de las presentes diligencias a favor de **JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES,** identificado con C.C. No. 1.070.958.780, conforme lo consignado en la parte motiva de este proveído**.**

SEGUNDO. - –DECRETAR LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS impuestas en el fallo reseñado y a favor de JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

TERCERO.: ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo[10] tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004)[11] para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, en razón de este proceso.

CUARTO- En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría este despacho REMITIR las presentes diligencias al Centro de servicios judiciales de este municipio para su archivo definitivo.

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

[10] **ARTÍCULO 166. COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA.** Ejecutoriada la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.

[11] **ARTÍCULO 476. EXTINCIÓN DE LA CONDENA Y DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN.** Cuando se declare la extinción de la condena conforme al Código Penal, se devolverá la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Facatativá, 4 de marzo de 2024

Oficio No. 0487

Señor
JHON ALEXANDER SÁNCHEZ FUENTES
Calle 6 No 1E-35 MANABLANCA SECTOR 2
Facatativa, CUNDINAMARCA

C.U.I.	**25269600069120110038**
No. Interno:	**2019-0017**
Sentenciado:	**JHON ALEXANDER SANCHEZ FUENTES**
Identificación:	**1.070.958.780**
Delitos:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la rehabilitación de las penas accesorias.**

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le comunico que este Despacho Judicial DECLARÓ LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL y DECRETÓ LA REHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS dentro del proceso de la referencia.

En consecuencia, mediante esta comunicación se realiza la notificación del auto interlocutorio, proferido en la fecha.

Cordialmente,

DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 06 de 2024: Al despacho el proceso contra **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** identificado con C.C. No. 1.007.524.005, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0064 del 27 de febrero de 2024, se recibe a través del correo institucional el 29 de febrero de 2024, los documentos emitidos por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo seis (06) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0082

CUI	**25875600069820220020 2**
Número Interno:	**2024-0014**
Sentenciado:	**MIGUEL ANGEL VEIRA ROA**
Delito:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Sitio de Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL** **RECONOCE REDENCIÓN TRABAJO**

1. MOTIVO DE LA PROVIDENCIA

Procede el despacho a pronunciarse respecto a la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y el reconocimiento de redención de pena del interno **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** identificado con C.C. No. 1.007.524.005, quien se encuentra recluido en el mencionado penal.

2. CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2022 y allanamiento a cargos, el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Villeta Cundinamarca con función de conocimiento, mediante

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

sentencia del 26 de abril de 2023, **CONDENÓ** a **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** (y otro[1]) como autor del delito de **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO** a la pena principal de **DOS (2) AÑOS, SEIS (6) MESES Y ONCE (11) DIAS DE PRISION** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena debiendo cumplir la pena de prisión impuesta en privación efectiva de la libertad en establecimiento penitenciario y carcelario que determine el INPEC. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 8 de mayo de 2023.

MIGUEL ANGEL VEIRA ROA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 29 de noviembre de 2022**[2] (el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Villeta Cundinamarca en audiencias concentradas ordenó la detención preventiva del infractor en establecimiento carcelario)

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0041 del 18 de enero de 2024, solicitó ante el señor director y asesor jurídico de la CPMS VILLETA, copia de la cartilla biográfica del interno, copia Boleta de Encarcelación, los certificados TEE, los certificados de calificación de conducta y demás documentos que señala la ley, para el reconocimiento de redención de pena, para someter a estudio una posible libertad condicional o prisión domiciliaria – art. 38G del C.P., invocada por el infractor a través de apoderado judicial, y se dispuso requerir al condenado para que aportara: I) informe la dirección del domicilio que pretende fijar como lugar de reclusión en prisión domiciliaria y el recibo de servicio público para corroborar la dirección del inmueble; II) declaración extrajudicial rendida ante Notaría de la persona que se comprometa a recibirlo en el domicilio que se fije como lugar de prisión en caso de concederse el sustituto penal otorgado (datos personales nombre, teléfono, parentesco, etc.)

Una vez recibidos los documentos emitidos por las directivas de la CPMS VILLETA, este despacho a través de auto interlocutorio No. 0064 del 27 de febrero de 2024, reconoció al condenado redención de pena de 3 meses y 21 días, requirió al señor director y asesor jurídico del mencionado penal para que remitiera la documentación prevista en el art. 471 del C.P.P., para el estudio de la libertad condicional del sentenciado, también, requirió al condenado y apoderado judicial para que aportaran: I) información de la dirección del domicilio de arraigo y el recibo de servicio público para corroborar la dirección del inmueble; II) declaración extrajudicial rendida ante Notaría de la persona que se comprometa a recibirlo en el domicilio que se fije como arraigo (datos personales nombre, teléfono, parentesco, etc.).

En la presente oportunidad ingresan las diligencias al despacho, con la documentación emitida por la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y el reconocimiento de redención de pena al sentenciado.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[3] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

[1] Luisa Fernanda Álvarez Morales

[2] Acta de audiencias concentradas – archivo 003 / Boleta de Detención Intramuros No. 001 – archivo 005 – expediente digitalizado

[3] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[4]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

[4] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos **el 29 de noviembre de 2022** el sentenciado **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19137354	Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024	CPMS VILLETA – Regional Central	336	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**336**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **336** horas **por concepto de trabajo** al hacer la conversión corresponden a **VEINTIÚN (21) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3.- De la Libertad Condicional

Con relación al beneficio de Libertad Condicional, expresa el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, que para su concesión deben cumplirse la totalidad de los requisitos a saber:

> *"**ARTÍCULO 64. Libertad condicional**. El juez, PREVIA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
> 2. *Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
> 3. *Que demuestre arraigo familiar y social.*
>
> *Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

> *En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.*
>
> *El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario"*[5] *(*Subrayado y negrilla fuera de texto).

La norma en cita está directamente ligada y supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

> ***Art. 471.-*** *"El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.*
>
> *Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional."* (Subrayado fuera del texto original) [6]

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** delimitó su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma**,** sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP),** NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario, a pesar que los delitos endosados se encuentran como excluidos en la mencionada norma, no los tendrá en cuenta – **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO -**, para el mecanismo sustitutivo a estudiar.

4.4. Valoración de la conducta punible.

Dentro de unos hechos constitutivos que infrinjan los derechos de la comunidad, el Estado representado por el ente investigador, en su etapa previa y por los jueces en su juzgamiento, nos llevan a una punibilidad dentro de un proceso penal que finaliza con una

[5] Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014
[6] Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

absolución o condena de un individuo. Si es ésta última, se impone o suspende una pena privativa de la libertad.

En este ciclo privativo el condenado puede hacer uso de subrogados o mecanismos sustitutivos, como la libertad condicional contemplado en el artículo 64 del C.P. Ésta configura la oportunidad de que la persona que está condenada y se encuentra privada de la libertad - intramural o domiciliariamente - puede cesar dicho estado impuesto en sentencia condenatoria. Para su concesión, el juez, a quien le corresponde por competencia, estudiará los requisitos que exige la norma entre los que se encuentra previamente, la valoración de la conducta, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2014.

Esta valoración inicio en la adición concebida por el legislador como "gravedad de la conducta" en la Ley 890 de 2004 y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad en la sentencia C-194 de 2005, en el que señaló que el juez de Ejecución no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de la evaluación de la procedencia del subrogado penal. Allí dejó claro que el juez no quedaba autorizado para valorar dicha *"gravedad"* ya que lo que la norma señalaba era que se debería tener en cuenta de parte del funcionario era *"la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal".*

Con la modificación incorporada por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 el legislador condicionó la concesión del beneficio de libertad condicional a la ***"previa valoración de la conducta punible"*** suprimiendo la palabra *"gravedad"* de la disposición anterior, de lo que se ha derivado una diversidad de interpretaciones por parte de los jueces vigilantes, sin embargo, este Despacho se sostiene en el criterio aplicado con antelación en el sentido de hacer tal valoración siempre y cuando sobre el punto se haya pronunciado el juez fallador.

Lo anterior con base en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia **C-757 de 2014** en donde determina una vez más que en las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas para decidir sobre el beneficio de libertad condicional deben tenerse en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez fallador en la sentencia, ya fueran favorables o desfavorables.

Ello significa que el Juez de Ejecución de Penas podrá valorar la conducta de conformidad con el artículo 64 del Código Penal, en la medida en que sobre tal aspecto se haya pronunciado el juzgado fallador o en su defecto la segunda instancia. Del mismo modo indica lo anterior que la redacción del mencionado artículo 64 del C.P., *"no establece qué elementos de conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni establece los parámetros a seguir para asumir las valoraciones que de ella hicieron previamente los jueces penales"*[7]

En efecto, el juez ejecutor se somete a las consideraciones expuestas por el juez que resolvió la situación jurídica del procesado a través de su fallo condenatorio.

Así lo manifestó la H. Corte Suprema de Justicia:

"Respecto a la valoración de la conducta punible, la Corte Constitucional, en sentencia CC C-757-2014, teniendo como referencia la Sentencia CC C-194-2005, determinó, en primer lugar, cuál es la función del juez de ejecución de penas y, de acuerdo a ésta, cuál es la valoración de la conducta punible que debía realizar.

«[E]l juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del

[7] CSJ T 107644 (19-11-19)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. […]

[L]os jueces de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario, el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal»[8]*.*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y analizando los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional se tiene que cuando se va a analizar la conducta por parte de los Jueces de Ejecución de Penas, en cualquiera de sus dos interpretaciones, la de la Ley 890 de 2004 "gravedad" y en la modificación de la Ley 1709 de 2014 "conducta", declaradas exequibles en las sentencias arriba relacionadas, C-195-04 y C-757-14, la conclusión dada por el máximo Tribunal Constitucional fue la siguiente:

> *"En los mismos términos,* ***cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal****"*[9]:
> (Resaltado fuera del texto original)

Efectivamente conforme a lo expuesto y dado el análisis e interpretación dada sobre dicho pronunciamiento, no se puede someter nuevamente al condenado con el estudio hecho por el juez fallador en el momento en que dosificó las conductas penales, esto es ni por la censura ni con la "misma óptica en que se produjo la condena". Tampoco puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de dicha evaluación, pero no queda autorizado para valorar la gravedad de la conducta, lo que se debe tener en cuenta por parte del funcionario es la gravedad del comportamiento punible, *calificado y valorado previamente en la sentencia por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal*.

Ello significa que el juez vigilante debe someterse no a la valoración que hizo el de conocimiento en el momento de la dosificación de la pena, que es su motivación para "dosificar" la conducta, o conductas endilgadas al imputado, sino al pronunciamiento en los mecanismos sustitutivos de la pena cuando se pasa a la audiencia del artículo 447 del C.P.P.

Y debe de ser así porque si el funcionario que vigila la pena se sometiera a lo consignado por el juez de conocimiento al momento en que dosifica las conductas, estaríamos frente a una eventual negativa de las solicitudes de los mecanismos sustitutivos solicitados, sobre todo el de la libertad condicional.

Se entiende que en el instante de evaluar la posible libertad del implicado debe hacerse desde la óptica de lo expuesto por el fallador al momento en que se pronuncia, que es obligatorio, en la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria (art 63 y 38 C.P.), audiencia esta indispensable para que se logre a través de los condenados acceder a cualquiera de estos postulados y si el fallador ve que de acuerdo a la situación fáctica se tenga que pronunciar sobre la "gravedad" de conducta, así lo hará, momento éste en que

[8] CSJ T-119389 (30-09-21)
[9] Corte Constitucional, sentencia C-194 de 2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

el juez de Ejecución de basa para estudiar la posibilidad de conceder o negar el mecanismo sustitutivo solicitado.

Como se señaló, han existido varias interpretaciones al respecto no solo de parte de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia que enmarcan un criterio y lineamiento para analizar, estudiar y decidir sobre este tópico.

En una decisión del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria[10], se analizó la gravedad de la conducta y la conducta punible basado en el pronunciamiento que se hizo por parte del fallador en el momento procesal de cuantificación de las penas, en el que se hizo un reproche sobre la conducta del implicado, no ocurriendo lo mismo en el momento en que se pronunció ante los mecanismos sustitutivos de la pena.

> *"…: **VIII. DE LAS PENAS:***
>
> *VIII.4. Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada superó de modo importante su tope básico, necesaria para configurar el delito, en tanto significó cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos al margen de la ley, con menoscabo de los valores que nutren un Estado democrático; el daño fue significativo, porque se fundió en unas mismas personas las condiciones de agentes de grupos ilegales y del Estado; la seguridad pública sufrió grave deterioro amén su legitimidad; la intensidad del dolo se verificó mayor, dado que inició con la coalición político-paramilitar que condujo a sus elecciones en el Congreso de la República y se extendió durante el ejercicio alternado del cargo cada uno por un año; aunada la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución.*
>
> *VIII.5. Se tiene en cuenta que aunque la concertación con pretensiones políticas del señor (…), con un grupo armado al margen de la ley tuvo las connotaciones antes referenciadas, que motivan el incremento de las penas, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa en su corto tiempo de ejercicio él haya propiciado acciones concretas que redundaran selectivamente en beneficio de esos colectivos criminales, lo que de algún modo informa un retraimiento en el componente lesivo del delito, tanto que el testimonio del propio (…) por momentos asumió el carácter de reclamo, lo que en perspectiva, aunada la carencia de antecedentes penales, desaconseja penas superiores a las determinadas; por eso no se le impone el máximo permitido en la ley.*
>
> ***IX. DE LA LIBERTAD:***
>
> *No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria, por impedirlo un requisito objetivo; en el primer caso porque la ley sólo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y, en el segundo, porque sólo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de la condena sea de 5 años o menos, acorde con lo establecido en los artículos 63-1 y 38 del Código Penal, presupuesto que no se satisface…" [11]*

Posterior, en los fallos de la Corte Constitucional C-233-16, T-640-17 y C-265-17 determinó que se debe tener en cuenta, para los jueces de ejecución de penas, que la finalidad constitucional de la pena no está en el castigo del condenado sino en su resocialización como la garantía que nos brinda el artículo 5° de la Ley 65 de 1993, - dignidad humana -[12].

---

[10] C.S.J Rad 44195 (03-09-14)
[11] Rad 44195 y 33713
[12] **ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.** <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Esto nos lleva a velar por la reinserción social apoyada por la educación que se les brinde en los Centros Carcelarios a los penados en forma intramural o domiciliaria con el fin de humanizar la pena como lo señala el artículo 1° de la C.N[13].

Del mismo modo la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que el Juez de Ejecución de Penas debe tener en cuenta la participación del condenado en las diferentes actividades de readaptación y/o resocialización dentro de los Centros Carcelarios y buscar la reinserción del que ha cometido un error y lo está subsanando.

En reciente exposición, en sede de tutela de parte del mismo órgano de cierre, hace un recuento sobre la *"amplitud de posibilidades hermenéuticas con respecto a la valoración de la conducta punible"* y el guiarse por los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad *"como bien lo es el principio pro homine – también denominado cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos"*, centrándola en lo más favorable al hombre y sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

En dicha providencia advierte que[14]:

> ***"…i)*** *No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.*
>
> *En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;*
>
> ***ii)*** *La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;*
>
> ***iii)*** *Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.*
>
> *Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.*
>
> *Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.*
>
> ***iv)*** *El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado…"*

Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

[13] **ARTICULO 1o.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

[14] C.S.J Rad T-107644 (19-11-19) M.P. Patricia Salazar Cuéllar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

Éste precedente ha sido reiterado en sentencias con radicados 111560 (28-07-20), 113578 (01-12-20); 115313 (23-03-21); 119257 (28-09-21) y 119389 (30-09-21) y en la providencia con radicado 59888 (15-09-21).

Así lo señaló en el Rad 119389:

> *"Tal postura fue ratificada recientemente en proveído CSJ AP4142-2021, 15 sep. 2021, rad. 59888, en los siguientes términos:*
>
> *[…] Tal como lo ha indicado esta Corporación[15], **la concesión de la libertad condicional depende del cumplimiento de todos los requisitos enlistados en el precepto transcrito, pues en su examen, el juez no puede prescindir de ninguna de las condiciones fijadas por el legislador, incluida, la valoración de la conducta, cuyo análisis es preliminar.***
>
> *(…)*
>
> *En línea con dicha interpretación, esta Corporación ha sostenido que:*
>
> *«La mencionada expresión –valoración de la conducta- prevista en el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, va más allá del análisis de la gravedad, extendiéndose a aspectos relacionados con la misma, sin que el juez ejecutor de la pena tenga facultad para soslayar su evaluación, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 del 15 de octubre de 2014»[16].*
> *[…]*
> *Así, es claro que para la concesión de la libertad condicional, resulta imperioso que el juez valore la conducta por la cual se emitió la condena, no obstante, se insiste, **tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad y los antecedentes de orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social**, por lo que en la apreciación de estos factores debe conjugarse el «impacto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes»[17]."[18]*

Ahora complementando lo anterior, en recientes pronunciamientos sobre este punto la H. Corte Suprema de Justicia concretó lo siguiente:

"6.6.2.3 Por último, obligado resulta traer a colación el auto de segunda instancia CSJ AP2977–2022, 12 jul. 2022, rad. 61471, no solo por su cercano proferimiento, sino por identificarse con la temática bajo examen, razón por la cual su trascendente alcance irradia al asunto que concita la presente decisión. En el mencionado proveído, así se discurrió:

> *[e]l análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el*
> *ordenamiento penal, dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991; y al mismo tiempo desvirtuaría toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.*
>
> *La anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C–757 de 2014 (declaró exequible la expresión: «previa valoración de la conducta» del artículo 64 del Códig[o P]enal), en el sentido que al analizar la procedencia de la libertad condicional el [j]uez de [e]jecución de [p]enas deberá:*

---

[15] CSJ AP8301-2016, Rad. 49278, CSJ AP5297-2019, entre otros
[16] CSJ AP3558-2015, Rad. 46119
[17] CSJ AHP5065-2021
[18] C.S.J. T-119389

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

> *«establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.»*
>
> *Es así como el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado, pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad, que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor tal como lo estipulan los artículos 6° numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10° numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del [b]loque de [c]onstitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Nacional).*
>
> *30.3 Corolario de ello, un juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad, debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno, sobre aspectos como la escueta gravedad de la conducta (analizada en forma individual); pues si así no fuera, la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva, que en nada contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulan la dignidad del ser humano. (…)*
>
> *30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca, no solamente los aspectos draconianos de las sanciones penales; entre ellos, que el conglomerado se comporte normativamente (prevención general); y que, tras recibir la retribución justa, el condenado no vuelva a delinquir (prevención especial); aunado a tales aspectos, las penas, en especial las restrictivas de la libertad, también se deben encaminar a que el condenado se prepare para la reinserción social, fin este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario y el comportamiento del condenado durante este, sea valorado, analizado, estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.*
>
> *Lo anterior, justamente con el fin de incentivar en el infractor, esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción, asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario, así como para brindar herramientas útiles al penado que le permitan prepararse para retornar a la vida en sociedad cuando recobre la libertad.*
>
> *30.5 Entenderlo de otra manera, sería tanto como establecer una prohibición generalizada que no ha sido prevista por el legislador para todos aquellos eventos en los que la conducta se evidencie objetivamente grave. (…)*
>
> *30.6 En ese orden de ideas, entender que la gravedad objetiva de la conducta es sinónimo de negación de la libertad condicional, equivaldría a extender los efectos de una prohibición normativa específica, sobre todos los casos que se estimen de notoria gravedad, sin haber sido así previsto en la ley; y tal expansión no es compatible con los derechos fundamentales de los condenados; pues los dejaría sin la expectativa de que su arrepentimiento e interés de cambio sean factores a valorar durante el tratamiento penitenciario, erradicando los incentivos y con ello, el interés en la resocialización, pues lo único que quedaría, es el cumplimiento total de la pena al interior de un establecimiento carcelario* [negrilla original del texto].

6.6.2.4 A las anteriores consideraciones, que en su integridad se ratifican, sólo es dable agregar lo siguiente:

Toda conducta punible es considerada un acto grave contra la sociedad, al punto que el legislador reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas, ella afecta los valores que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas, además del daño privado, el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal, necesarias para la convivencia pacífica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

La condición de grave o leve de una infracción delictiva da lugar a intensos e inacabados debates. Nadie ha de negar que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza –o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva–, implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social, verbigracia, los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida, la integridad personal, la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos, lo que de contera genera unánime rechazo social. Sin embargo, ello no soluciona la problemática a la hora de calificar el injusto.

La praxis judicial enseña que en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad –todas válidas si se quiere–, una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla, pero en el fondo sólo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida las razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que determinado proceder debía ser objeto de represión por el Estado.

La previa valoración del injusto típico introduce a la discusión argumentos de índole subjetivo que en nada contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal. (…)

Importa acotar que la Sala, por obvias razones, no se refiere a aquellas conductas que el propio legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, excluyó del subrogado de la libertad condicional, asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional en sentencia CC C–073–2010, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, «[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones». (…)

Por ello, precisó que «[e]l legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional». (…)

Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible, solo es posible frente a casos en los cuales el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por dicho motivo, como sucede con los previstos en los artículos 26 de la Ley 1121 y 199 de la Ley 1098 de 2006, pues, como se dijo en la decisión CSJ STP15806–2019, 19 nov. 2019, rad. 107644, atrás citada, «no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos»(…)

La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias. (…)

<u>En suma, no es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado de la libertad condicional</u>. Ello sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla de un sentido de retaliación social que, en contravía del respeto por la dignidad humana, cosifica al individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales."[19].(subrayado nuestro)

[19] CSJ RAD 61616 (27-07-22) M.P. Dr Fabio Ospitia Garzón

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

Vemos que no solo en sede de tutela se presenta un criterio unificado sobre el tema, por lo que este juzgado estimará para los futuros análisis sobre la valoración de la conducta y se tendrá en cuenta no solo el pronunciamiento por parte del juez de conocimiento cuando se refiera a los mecanismos sustitutivos de la misma, sino en el instante en que motiva la dosificación de la misma, o si existe preacuerdo en el análisis de los delitos, del mismo modo en el transcurrir del proceso su comportamiento en el Establecimiento Penitenciario y establecer la necesidad de si el condenado debe continuar con el tratamiento penitenciario ponderándolo con la valoración de la conducta.

Lo anterior, nos lleva a que el juez de ejecución de penas está en la obligación no solo de lo señalado en la parte motiva para la dosificación de la pena impuesta al condenado, sino dilucidar las circunstancias que encierra esa conducta punible junto con la personalidad del infractor- hasta ese momento como sociales, personales, laborales, familiares y su adecuado comportamiento en el Centro Carcelario, su conducta, cursos alcanzados, - puntos que nos lleva a concluir si existe la necesidad de otorgar o no el subrogado invocado o por el contrario requiere de mayor tratamiento penitenciario.

El presente Caso:

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Villeta Cundinamarca con función de conocimiento, no hizo un despliegue con relación a la gravedad de la conducta endilgada al condenado, sino que simplemente se limitó a la dosificación punitiva que por ley le correspondió conforme al allanamiento a cargos, sin embargo, indico, que la conducta desplegada por los enjuiciados se realizó con dolo, ya que conocían que su comportamiento se encontraba sancionado por la Ley Penal y aun así voluntariamente tomaron la determinación de infringir el ordenamiento punitivo, afectando el bien jurídico protegido por el legislador del patrimonio económico, sin justificación alguna.

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia relacionada entrará este juzgado a analizar como primera medida el no poder tener como razón para la negatoria de la libertad condicional la sola insinuación de la conducta punible frente a los bienes señalados en el C.P., ya que esto es concurrente con prohibiciones señaladas por el legislador en ciertas leyes.

Del mismo modo dicha valoración no se puede hacer con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales.

El juez que vigila debe valorar de igual manera dentro de la punibilidad lo tenido en cuenta por el fallador, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes. En efecto se debe ajustar con el comportamiento del procesado en el Centro Carcelario con elementos útiles que permitan analizar si el condenado debe continuar cumpliendo la pena intramural o domiciliariamente y su participación en las diferentes actividades que tiene instituidas el INPEC como punto fundamental para su resocialización. Entonces no se debe tener en cuenta únicamente el bien jurídico afectado como única motivación para negar el subrogado invocado, se debe hacer un análisis completo, una carga motivacional que garantiza *la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.*

4.5. Sobre la resocialización de los condenados

Se tiene bien conocido que el Estado tiene unos deberes constitucionales y que le corresponde a través de los distintos poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional) diseñar la Política Criminal, esto en especial al Legislativo (Congreso de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

República) que según lo señala el artículo 150 de la Constitución Nacional *"le corresponde hacer las leyes".*

La Política Criminal, se entiende como ***"el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener el orden social y hacerles frente a las conductas que atenten de forma grave contra el mismo y, así, proteger los derechos de los residentes en el territorio nacional y, puntualmente, a las víctimas de los delitos"***. En efecto, esta Política Criminal está enfocada a satisfacer, entre otros asuntos, el restablecimiento de las víctimas logrando la resocialización del autor o partícipe de la conducta penal.

Lo anterior significa que la política criminal del Estado es el de proteger, blindar, asegurar, resguardar a la sociedad optando que las medidas, decisiones y disposiciones guarden armonía con los principios en que se funda, sobre todo en las garantías que reconoce para sus conciudadanos.

El artículo 4° de la Ley 599 de 2000 indica que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Del mismo modo resalta que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión, ello significa que éstos buscan la resocialización del condenado.

El artículo 1º de la misma obra y de la Constitución Nacional señala que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. En efecto, para un Estado Social y Democrático se da la necesidad de prevenir el delito con el fin de asegurar la protección de sus habitantes, defenderlos de aquellos que infrinjan las normas contenidas en las leyes; sin embargo ello no obsta que ese derecho penal se debe encausar en respetar la dignidad del infractor como el de no imponer penas – pena de muerte o cadena perpetua – dándole la oportunidad a cada individuo de tener la capacidad para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse y volver a contribuir a la sociedad.

Ahora aquellas personas que por el andar de la vida cometen un error que los lleve a pagar una pena principal de prisión, el Estado prevé un tratamiento penitenciario cuya finalidad es la reforma y la readaptación del penado a la sociedad, el de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante un examen de personalidad que se logra a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario[20].

El principal objetivo es el preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad y debe realizarse conforme a la dignidad humana, anteriormente mencionada, y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto verificándola a través de los sistemas educativos y culturales de los Establecimientos Penitenciarios.

Se concluye que el tratamiento penitenciario es el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad[21].

Sobre este punto dentro de los innumerables pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, se concluyó:

> *"…(i) durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la*

[20] *Ley 65 de 1993, art 10*
[21] *INPEC art 4º Resolución 7302 (23-11-05)*

definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado…"

Y en la Sentencia C-294-21 conceptuó:

"La resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o técnicas de tratamiento social o clínico que pretenden «cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno».

En sentencia C-718-15, sobre la finalidad de la pena, indicó:

"…Así, en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la pena, no solo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también en el momento de su ejecución.

*Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[22] que, ella tiene en nuestro sistema jurídico **un fin preventivo**, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; **un fin retributivo**, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, **y un fin resocializador** que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que "sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital". [23]*

En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.

*El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén "orientados hacia **la efectiva resocialización** de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad".[24](Se resalta)…"*

---

[22] Sentencia C-430 de 1996
[23] Sentencia C-144 de 1997
[24] Sentencia C-1404 de 2000

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

Se suma, lo indicado en los artículos 94, 96 y 97 (Ley 65 de 1993) que estipulan sobre la educación como la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa evaluación de los estudios realizados hay lugar a que sea certificada por la autoridad designada para el efecto, disponiendo que será concedida por el Juez Vigilante, abonando 1 día de reclusión por 2 días de estudio.

Sobre la readaptación de los penados, la Sentencia T-061 de 2009, expresó que "*Las personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito, encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir la pena que les fue impuesta. Dentro de sus funciones, las cárceles se encargan de resocializar al individuo, con el fin de obtener la paz; es decir, permitiendo que el preso pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente productiva, impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles".*

Sobre ese tema esa Corte en Sentencia T-213 de 2011 reiteró lo afirmado en la providencia T-718 de 1999, según la cual: *"la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente".*

Y en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente:

> *"7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional peticionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación…*[25]

Visto lo anterior, y en lo referente a lo decantando en la jurisprudencia mencionada[26] se tiene que a la fecha el infractor ha cumplido con una pena impuesta de (30 meses y 11 días) **19 meses y 25 días**, superiores al porcentaje exigido por la norma con un 65.5% y vemos en su cartilla biográfica que desde el momento de su ingreso a centro carcelario su comportamiento intramuralmente y la calificación de conducta del interno ha sido en el grado de BUENA del 27/12/2022 hasta el 31/01/2024 y conducta BUENA en el certificado No. 9538544 del 01/02/2024 al 29/02/2024, de ahí en adelante su rol ha sido óptimo para el sentido de su resocialización.

Del mismo modo vemos que su actuar ha sido destacado en el transcurso de dicho proceso, entonces, al purgar un total de pena física de **15 meses y 13 días**, cuenta con redenciones de pena reconocidas de **4 meses y 12 días**, por lo que nos arroja un total de **19 meses y 25 días** de la pena impuesta cumpliendo con ello elevar a más de un 65.5%, pues detallase que el condenado **desde el 29 de noviembre de 2022** siempre ha cumplido su reclusión de manera intramural.

Aunado a ello el comportamiento del infractor ha sido buena y sobre este aspecto a pesar de que nunca lo tacharon por su disciplina, se trae un pronunciamiento sobre este aspecto - CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA - de la Corte Suprema de Justicia:

"…Las anteriores reflexiones sirven para deducir que la valoración de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso, ni

[25] C.S.J. Rad 1376 del 14-07-2020 M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
[26] RAD 107644

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

de una sola calificación, sino que debe realizarse, en cada caso concreto, de manera ponderada (principio rector, artículo 27, Ley 906 de 2004) y en forma integral, con análisis de la evolución del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusión, con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocialización y, por tanto, si merece ser motivado o incentivado el beneficio.

Al no existir norma específica que determine que una sola calificación de conducta inferior a buena, no conduce indefectiblemente a la negación de los beneficios, se debe aplicar por analogía el inciso final del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, que establece la consecuencia para quien observare mala conducta durante uno de los permisos, esto es, la suspensión de los mismos, pero no su cancelación, ésta se hace efectiva únicamente en caso de reincidencia.

Lo anterior significa que el legislador otorga un margen razonable de tolerancia frente a posibles errores de comportamiento en que puedan incurrir las personas beneficiadas y no impone la extinción del derecho por una sola falla. Si ello se aplica a quienes ya disfrutan del permiso, con mayor razón debe tenerse en cuenta como criterio de ponderación…"[27], fíjese que así hayan tenido en alguna oportunidad alguna calificación regular, no es óbice para la negatoria de alguno de los beneficios, aunque para el presente caso vemos que el infractor ha tenido un comportamiento y conducta buena.

Entonces vemos que **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** cumple, pues como lo decanta la jurisprudencia mencionada, no solamente es hacer alusión al bien jurídico afectado sino tener en cuenta *"**las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras,"*** el tener presente la armonía ***"con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.***

Sobre la resocialización, señalo en reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Bogotá lo siguiente:

"Así las cosas, se parte de la base de entender consolidada una enmienda o resocialización de la persona que ha cumplido parte de la pena dentro de un establecimiento carcelario y ha observado durante ese tiempo buena conducta, sin que pueda presumirse en su contra o concluirse que no ha sido posible su resocialización o readaptación, pues, contrariamente, según la filosofía que encarnan las medidas de privación de la libertad, se presume que el tiempo de reclusión ha contribuido a la reflexión sobre la conducta por la cual fue condenado y a permitir su readaptación y resocialización hacía el futuro.

En consecuencia, afirmar lo contrario conllevaría a evidenciar argumentativamente la necesidad del absoluto cumplimiento de la pena, bajo el régimen penitenciario, como única vía para satisfacer los fines propósitos de la punibilidad en la legislación colombiana"[28].

4.6. Sobre las Fases del Tratamiento Penitenciario:

Dentro de las fases para el tratamiento penitenciario (art 144 Ley 65 de 1993) que nos señala la norma se tiene que ha cumplido con la clasificación que se establece pasando como primera medida por la fase de alta seguridad (periodo cerrado) en la que el interno accede al sistema de oportunidades en programas educativos y laborales, en periodo cerrado, permitiendo el plan de tratamiento orientándose a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades.

[27] C.S.J. T-Rad No. 89.755 del 24-01-2017, M.P. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
[28] Tribunal Superior de Bogotá, T-RAD 11001220400020200121100 (21-05-20) M.P. Dr Luis Enrique Bustos Bustos

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

La fase de mediana seguridad en la que se accede de parte del interno a los programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, con medidas de seguridad menos restrictivas. Además, los programas educativos y laborales ofrecidos en esta fase se basan en la intervención individual y grupal, permitiendo la competencia psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal, no formal e informal, vinculándolos en actividades industriales, artesanales, agrícolas etc. Luego sigue la fase mínima en la que el interno se le orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral. Y por último la fase de confianza en la que tiene el tiempo requerido para la libertad condicional.

Según lo anotado por las directivas en la cartilla biográfica, no le figura sanciones disciplinarias, ni intentos de fuga en el tiempo que lleva recluido en la Cárcel tiene una calificación de conducta buena y ejemplar y con base a ese estudio las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta, le expidieron la respectiva resolución favorable para la libertad condicional[29].

Para este funcionario el tratamiento progresivo que ha recibido **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** durante la permanencia en el Centro Carcelario permite vislumbrar que su readaptación ha tenido frutos demostrando que su buena conducta, así como en las redenciones reconocidas por estudio, trabajo y/o enseñanza, y, como se señaló el disfrute y su buen desempeño de su primer contacto con su grupo familiar por lo que se deduce que ha tenido un excelente desempeño permitiendo inferir en este funcionario que ha logrado su resocialización.

4.7. Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

En lo atinente al cumplimiento del factor objetivo, determinado por la Ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **TREINTA (30) MESES Y ONCE (11) DIAS DE PRISIÓN**, corresponde a **18 meses y 6.6 días de prisión**. Teniendo en cuenta que el solicitante ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el 29 de noviembre de 2022**[30] hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **15 meses y 13 días** de la pena impuesta.

El sentenciado cuenta con redención de pena de **4 meses y 12 días** reconocidas por este Juzgado así:

- Auto interlocutorio No. 0064 del 27 de febrero de 2024, reconoce 3 meses y 21 días
- En el presente auto interlocutorio No. 0082 de la fecha, reconoce 21 días

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA	29 de noviembre de 2022
TIEMPO FÍSICO:	15 meses y 13 días
TIEMPO REDIMIDO:	4 meses y 12 días
TOTAL DESCONTADO:	19 meses y 25 días
PENA PRINCIPAL:	30 meses y 11 días
3/5 PARTES DE LA PENA	18 meses y 6.6 días

Así las cosas, al sumar ambos guarismos, el tiempo cumplido efectivo de la pena y el tiempo redimido, tenemos que **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA**, ha cumplido de la pena impuesta un total de **19 meses y 25 días de prisión**; tiempo superior a las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **30 meses y 11 días de prisión** que como se dijo equivalen a **18 meses**

[29] Resolución No. 031 del 29 de febrero de 2024
[30] Acta de audiencias concentradas – archivo 003 / Boleta de Detención Intramuros No. 001 – archivo 005 – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

y 6.6 días, razón por la cual el condenado solicitante **cumple** ampliamente con el requisito objetivo que demanda la normatividad.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad)*[15]

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[31]

4.8. Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión.

Sea este el momento para resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado beneficio de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de este funcionario judicial, y que se encuentran dispuestos por el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, y por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que imponen la existencia de ciertos documentos emanados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde se certifica el cumplimiento de ciertos requisitos.

En el presente asunto, se emite por parte del director de la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Villeta Cundinamarca -, la Resolución No. 031 del 29 de febrero de 2024 en la cual se emite **CONCEPTO FAVORABLE** sobre las pretensiones del interno en lograr su libertad condicional, motivo por el cual el condenado **CUMPLE** con este requisito contemplado en el citado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal.

[31] T.S. Bogotá Rad 11001-60-00-013-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

Analizada la cartilla biográfica vemos que efectivamente el infractor ha tenido un comportamiento "bueno" dando a entender que ha influido en su personalidad el sentido de la resocialización.

4.9. Del arraigo familiar

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

En el presente caso, verificando como corresponde el mencionado presupuesto *–arraigo familiar y social-* se observa en los documentos aportados por el condenado **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** que cuenta con un domicilio ubicado en la **Calle 24 No. 20-36 Corregimiento de Doradal, Barrio La Bloquera municipio de Puerto Triunfo departamento de Antioquia**, conforme se indica en el acta de DECLARACIÓN EXTRAPROCESAL No. 583 rendida ante la Notaría Única de Puerto Triunfo Antioquia, el día 13 de diciembre de 2023, por la señora Ana Milena Roa Prado (progenitora del condenado), quien manifestó que de concederse la libertad condicional al interno, se hará cargo de todas sus necesidades y gastos, indica que el condenado se ha destacado por ser buen hijo, amigo, colaborador, cumplidor de sus obligaciones, trabajador, respetuoso, responsable y se encuentra listo para compartir con la sociedad. Adjunta recibos de servicios públicos

Por lo anterior, el condenado **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** cumple con el citado requisito.

4.10. De la reparación a las víctimas

Respecto a la reparación de las víctimas, se tiene que el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Villeta Cundinamarca con función de conocimiento en el fallo condenatorio indicó en la parte motiva: *"No obstante, se advierte que no se probó el incremento patrimonial, pues el elemento hurtado fue devuelto. Además, pese a la inconformidad con la suma consignada en título judicial, consta en el plenario la manifestación verbal de la víctima en la que manifiesta que no tiene interés en solicitar indemnización adicional por los perjuicios ocasionados. Razón suficiente para determinar que se ha cumplido con los efectos de reparación de daños ocasionados".*

Por lo tanto, el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Villeta Cundinamarca con función de conocimiento en sentencia condenatoria *"RESUELVE… "SEXTO. - Se ORDENA la entrega*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

y pago a favor de YURY CATHERINE VILLAMIL DURÁN, quien figura reconocida como víctima, de los dineros consignados a su favor para el presente proceso ($1.400.000.oo) (…)".

5. CONCLUSIÓN

Así las cosas, verificados y cumplidos como están los requisitos de carácter tanto objetivo como subjetivo que establece en su contenido original el artículo 64 del Estatuto Penal, se le reconocerá y otorgará el pluricitado subrogado penal de Libertad Condicional al sentenciado de marras. Previo al disfrute del beneficio, el condenado deberá suscribir la diligencia de compromiso con las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal, para la cual se le señalará el correspondiente periodo de prueba de acuerdo a lo ordenado en el artículo 64 del Código Penal que al respecto expresa:

"El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario."

De conformidad con lo anterior, como en el caso que nos ocupa el término faltante para cumplir la totalidad de la pena es de **11 meses y 16 días**, a fin de que el proceso de resocialización que le fue impuesto al solicitante cumpla los fines para los cuales se determinó, en aras de que el sentenciado enfoque positivamente su conducta absteniéndose de incurrir en cualquier tipo de delitos. Es de destacar que es un infractor primario, sin embargo, ésta será la oportunidad para que tome entera conciencia de que perciba que la pena responde a la finalidad de la resocialización como garantía de la dignidad humana. De este modo se tiene que los jueces de ejecución de penas velan por la reeducación y la reinserción social de los penados *"como una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, que permite humanizar la pena "*conforme está consignado en el artículo 1º de la Constitución Nacional y 5º de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ley dispone que para garantizar las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal (Ley 599 de 2000), debe constituirse la caución prendaria, en atención a las condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal sobre **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA**, se fijara caución en el equivalente a **UN (1) SMLMV**.

La libertad se hará efectiva, ante las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, una vez cancele la caución o constituya la póliza y suscriba la respectiva diligencia de compromiso, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

Finalmente, como el precitado se encuentra purgando pena en CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se **COMISIONA** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA.**

Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del condenado **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** identificado con C.C. No. 1.007.524.005, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (1 SMLMV), **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Se ordena por la secretaría del Juzgado, **NOTIFICAR** el contenido del presente auto al Dr. Juan Carlos Sánchez Gómez, apoderado judicial del condenado, a través del correo electrónico gosacaju@hotmail.com

Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a ENCASILLAR el expediente en el respectivo anaquel, para la vigilancia de **11 meses y 16 días** del periodo de prueba impuesto.

6.- OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[32], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones*

[32] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[33]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[34]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7. DECISIÓN

[33] CSJ T **102248**
[34] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**.

RESUELVE:

PRIMERO - RECONOCER al condenado **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** identificado con C.C. No. 1.007.524.005, redención de pena por trabajo de **VEINTIÚN (21) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de enero al 29 de febrero de 2024, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. - RECONOCER que el interno **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** identificado con C.C. No. 1.007.524.005, acumula un total de **19 meses y 25 días** por concepto de tiempo físico más redenciones reconocidas de la pena impuesta.

TERCERO - CONCEDER al condenado **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** identificado con C.C. No. 1.007.524.005, el beneficio de la **LIBERTAD CONDICIONAL** por las razones expuestas en este proveído, bajo un periodo de prueba de **11 meses y 16 días**, por lo cual deberá cancelar la caución impuesta, equivalente a UN (1) SMLMV, o constituir póliza judicial y suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones señaladas en el artículo 65 del C.P.

CUARTO. - Como el precitado se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena **COMISIONAR** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA**

QUINTO. - Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del **MIGUEL ANGEL VEIRA ROA** identificado con C.C. No. 1.007.524.005, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (1 SMLMV), **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

SEXTO – Se ordena por la secretaría del Juzgado, **NOTIFICAR** el contenido del presente auto al Dr. Juan Carlos Sánchez Gómez, apoderado judicial del condenado, a través del correo electrónico gosacaju@hotmail.com

SEPTIMO. - REMITIR copia de esta providencia a la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

OCTAVO. – Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a ENCASILLAR el expediente en el respectivo anaquel, para la vigilancia de **11 meses y 16 días** del periodo de prueba impuesto.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 07 de 2024. Al despacho el proceso contra **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** identificado con C.C No. 1.073.245.127, informando que una vez verificado el estado actual del proceso se procede a emitir pronunciamiento acerca de la posible pena cumplida a favor del condenado.

Este Juzgado mediante auto interlocutorio No. 0438 del 18 de agosto de 2022 concedió la libertad condicional con un periodo de prueba de **18 meses y 16 días** previo pago de caución prendaria por valor de DOS (2) SMLMV y suscripción de diligencia de compromiso, el cual auto se notificó al condenado el día 26 de agosto de 2022 a las 14:47 horas, a través del correo electrónico codi-09@hotmail.com / conny09122009@hotmail.com y a la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO juridica.ecmodelo@inpec.gov.co / libertades.ecmodelo@inpec.gov.co

El condenado no dio cumplimiento a lo dispuesto en la decisión interlocutoria, por lo tanto, NO se materializó la libertad condicional, como tampoco el centro carcelario se pronunció al respecto o sobre la posible libertad por pena cumplida del interno. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo siete (07) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0083

CUI:	**25875600069820190008 2**
Sentenciado:	**WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR**
Identificación:	**C.C. No. 1.073.245.127**
Delito:	**TENTATIVA DE HOMICIDIO**
Sitio de Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA - CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD BOGOTA – LA MODELO –**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA DECRETA REHABILITACION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS**

1.- OBJETO A DECIDIR

Vista la constancia secretarial procede el despacho de oficio a pronunciarse sobre la posible libertad por pena cumplida a favor del condenado **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** identificado con C.C No. 1.073.245.127, quien se encuentra en prisión domiciliaria en la Carrera 18 A No. 9 D – 01, Torre 19, Apartamento 576, Conjunto

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Residencial Sendero de Siete Trojes en Mosquera Cundinamarca, vigilado por la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá – La Modelo -.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 24 de marzo de 2019 y preacuerdo aprobado, el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de octubre de 2019, CONDENÓ a **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** a la pena principal de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, como cómplice responsable del delito de **TENTATIVA DE HOMICIDIO (art. 103 y 27 del C.P.)** NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero concedió la prisión domiciliaria art. 38 y 38B del C.P. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 2 de octubre de 2019.

WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el 24 de marzo de 2019**[1]

El condenado en cumplimiento a lo ordenado en sentencia condenatoria, prestó caución por el equivalente a UN (1) SMLMV mediante póliza judicial No. CBC-100005821[2] del 5 de octubre de 2019 y suscribió diligencia de compromiso el 18 de septiembre de 2019[3], fijó el domicilio en la Carrera 18 A No. 9D-01 Torre 19, Apartamento 576, Conjunto Residencial Senderos Siete Trojes en Mosquera Cundinamarca, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -.

Este Juzgado avocó conocimiento del asunto por auto de sustanciación No. 1882 del 21 de octubre de 2019 y dispuso incorporar al expediente la copia de la diligencia de compromiso y el oficio No. 780 dirigido a la EC La Modelo de Bogotá, por el cual se dejó a disposición de dicho penal al interno para la vigilancia de la pena impuesta en prisión domiciliaria.

A través de auto interlocutorio No. 0326 del 13 de junio de 2022, esta agencia judicial resolvió **DENEGAR** la concesión del beneficio penal de la Libertad Condicional, impetrado por el condenado por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 471 del C.P.P., documentos solicitados con oficio No. 1342 ante el señor Director y/o Asesor Jurídico de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, igualmente en dicha providencia se dispuso requerir al condenado para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, aportara la documentación e información precisa, a fin de resolver la autorización de permiso de trabajo y estudio invocada, so pena de rechazo.

Este Juzgado mediante auto interlocutorio No. 0438 del 18 de agosto de 2022 concedió la libertad condicional con un periodo de prueba de **18 meses y 16 días** previo pago de caución prendaria por valor de DOS (2) SMLMV y suscripción de diligencia de compromiso,

[1] Boleta de Detención No. 008 Detención Intramuros – folio 7 archivo 001 – expediente digitalizado
[2] Folio 14 – archivo 002 – expediente digitalizado.
[3] Folio 7 – archivo 003 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

también por sustracción de materia se abstuvo de emitir pronunciamiento con respecto a la solicitud de autorización de permiso de trabajo y estudio invocada por el condenado, como quiera que no allegó la información y documentación requerida dentro del término concedido.

El mencionado auto se notificó al condenado el día 26 de agosto de 2022 a las 14:47 horas, a través del correo electrónico codi-09@hotmail.com / conny09122009@hotmail.com y a la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO juridica.ecmodelo@inpec.gov.co / libertades.ecmodelo@inpec.gov.co

El condenado no dio cumplimiento a lo dispuesto en la decisión interlocutoria, por lo tanto, NO se materializó la libertad condicional, como tampoco el centro carcelario se pronunció al respecto o sobre la posible libertad por pena cumplida del interno.

En la presente oportunidad ingresan las diligencias al despacho, para emitir pronunciamiento acerca de la posible libertad por pena cumplida del infractor.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[4] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

[4] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[5].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1 Competencia

Este juzgado es competente para resolver sobre la solicitud de libertad condicional del condenado, conforme lo señalan los numerales 1º, 3º y 4º, del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en prisión domiciliaria en la Calle Carrera 18 A No. 9D-01 Torre 19, Apartamento 576, Conjunto Residencial Senderos Siete Trojes en Mosquera Cundinamarca y vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -,conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[6].

Conforme a los hechos ocurridos el 24 de marzo de 2019, **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR**, fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (reformada por la Ley 1142 de 2007, 1453, 1474 de 2011) y 906 de 2004, con las modificaciones de la Ley 1709 de 2014.

---

[5] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[6] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)*[6].

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

4.2 Sobre la Prisión Domiciliaria

Desde el día que al condenado **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de octubre de 2019, le concedió la prisión domiciliaria art. 38 y 38B del C.P., no hay por parte de las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, reporte alguno o novedad por denuncias de fugas o trasgresiones cometidas por el interno.

Sin embargo, sea el caso mencionar que con los documentos allegados el día 26 de julio de 2022 para el estudio de la libertad condicional, obra el oficio No. 114-ECBOG-OJ-DOM-5689 de fecha 18 de julio de 2022, suscrito por el DGTE. YAMID RAMOS CASAS – Área Detenciones Domiciliarias – Establecimiento Carcelario de Bogotá, por el cual indica: *"(…) se consultan las bases de datos, respecto de los reportes de visitas de control, así como la cartilla biográfica, encontrando que esta persona no presenta informes negativos ni transgresiones a la medida de Prisión Domiciliaria. Así mismo se revisan los registros de los reportes aportados por el Centro de Reclusión Virtual del INPEC CERVI, sin encontrar reportes de transgresiones y/o evasiones de su lugar de domicilio, registrados por monitoreo de mecanismo de vigilancia electrónica.*

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que el ***FORERO CORREDOR WALTHER RICARDO*** *al no presentar reportes negativos, si ha cumplido con la medida de prisión impuesta (…)".*

Por lo tanto, este Juzgado mediante auto interlocutorio No. 0438 del 18 de agosto de 2022 concedió la libertad condicional con un periodo de prueba de **18 meses y 16 días** previo pago de caución prendaria por valor de DOS (2) SMLMV y suscripción de diligencia de compromiso, el cual auto se notificó al condenado el día 26 de agosto de 2022 a las 14:47 horas, a través del correo electrónico codi-09@hotmail.com / conny09122009@hotmail.com y a la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO juridica.ecmodelo@inpec.gov.co / libertades.ecmodelo@inpec.gov.co

El condenado no dio cumplimiento a lo dispuesto en la decisión interlocutoria, por lo tanto, NO se materializó la libertad condicional, como tampoco el centro carcelario se pronunció al respecto o sobre la posible libertad por pena cumplida del interno.

De igual manera, no hay reportes mediante los cuales se evidencie que el infractor se encuentre vinculado a otras investigaciones o a disposición de otra autoridad judicial.

Sin embargo, este Juzgado nota con preocupación la situación que se está presentando con los domiciliarios, no solo en los municipios a los que se les vigila la pena (Circuito de Funza, Villeta y Facatativá) sino a nivel nacional, en la que no existe un control de vigilancia de parte de los funcionarios del INPEC, debido a diferentes situaciones, como el personal, la ubicación, la congestión vehicular, el presupuesto, ahora el COVID 19 etc., que han generado una vigilancia deficiente. A pesar del escaso personal con que contamos (asistente social, asistente administrativo, secretaria y sustanciador) no se pudo ordenar la visita debido a las normas de salubridad impuestas por la OMS, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura. Complementa lo anterior que de parte del INPEC están cerrando las cárceles a nivel departamental creando una congestión sobre la vigilancia de los implicados que se encuentren con este mecanismo sustitutivo como se presentó recientemente con la Cárcel de Zipaquirá y Funza cuya responsabilidad recae en las de Bogotá, o actualmente en la de Villeta ya que son un volumen alto de personas que se encuentran con este mecanismo sustitutivo.

Al respecto se trae a colación reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que señaló:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

*"…**2.4.** Las premisas normativas antes mencionadas, así como los antecedentes particulares del caso sometido a consideración de la Corte, permiten deducir las siguientes reglas:*

i) El estatus jurídico de detenido lo adquiere el procesado en virtud de la respectiva orden judicial, una vez la misma se materialice, lo que se aviene a lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución Política sobre la reserva judicial para la afectación de la libertad. Esa condición no varía por el hecho de que la privación de la libertad se materialice en su domicilio o en un centro carcelario. La condición de detenido o privado de la libertad se mantiene hasta que la autoridad competente disponga lo contrario, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley.

ii) Por tanto, si a una persona privada de la libertad en su domicilio se le atribuye el incumplimiento de las obligaciones que debe cumplir para mantener ese beneficio, se abre la posibilidad del cambio de sitio de reclusión, sin que ello implique que su situación jurídica – de detenido – varíe automáticamente, pues ello solo puede ocurrir por dos razones: (a) que un juez disponga su libertad, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley; o (b) que se demuestre que el detenido domiciliariamente se sustrajo al régimen de privación de la libertad.

iii) Además, la condición de detenido y la privación de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria no están supeditadas a la realización de las correspondientes visitas de control a cargo del INPEC, porque aquellas son labores de «apoyo» encaminadas a garantizar el cumplimiento de la condena en el domicilio[7]. (…)

Más adelante complemento:

"…Además, como se dijo en páginas precedentes, las trasgresiones al régimen de la prisión domiciliaria imponen la inminente privación de la libertad en centro carcelario, pero de no disponerse ésta, habrá de entenderse que el condenado continúa purgando la condena en el domicilio fijado, siempre que no se acredite su evasión del mismo…"[8](subrayado nuestro).

Por consiguiente, esto conlleva a este juzgado a pronunciarse sobre la libertad por pena cumplida del sentenciado

4.3 Sobre la Libertad por pena cumplida

WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR ha descontado pena dentro del presente asunto desde el **24 de marzo de 2019**[9], por lo que a la fecha cumple la pena de 60 meses de prisión impuesta el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de octubre de 2019, motivo por el cual se concederá la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.

Acorde con lo anterior y de conformidad con lo normado en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) la Secretaría del Despacho oficiará a las entidades a las que se les comunicó la sentencia y se cancelarán las órdenes de captura que en su contra pudiesen existir por cuenta del presente asunto, rindiendo los informes de ley.

7 CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 38C. CONTROL DE LA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad **con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario** (Inpec).
El Inpec deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le **informará al Despacho Judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena**.
8 CSJ T Radicación N° 106432 (03-09-19) M.P. Dra Patricia Salazar Cuellar
9 Boleta de Detención No. 008 Detención Intramuros – folio 7 archivo 001 – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad)*[15]

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[10]

Ahora en lo que respecta a la privación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** identificado con C.C No. 1.073.245.127. En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.

En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del despacho REMITIR las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales de Villeta Cundinamarca, para su archivo definitivo.

La libertad se hará efectiva para ante las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, **a partir de la fecha, SIEMPRE Y CUANDO NO**

[10] T.S. Bogotá Rad 11001-60-00-013-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.

4.4. Sobre la Notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Carrera 18 A No. 9 D – 01, Torre 19, Apartamento 576, Conjunto Residencial Sendero de Siete Trojes en Mosquera Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** al sentenciado el contenido del presente auto a través del correo electrónico codi-09@hotmail.com / conny09122009@hotmail.com

En vista del problema de salubridad que se está desatando en el mundo sobre el COVID 19, y según las directrices del Gobierno Nacional, Autoridades Departamentales y municipales, así como las del Consejo Superior de la Judicatura, por la Secretaría del Juzgado y según la comunicación remitida por las Directivas del INPEC, PROCÉDASE a librar la **BOLETA DE LIBERTAD** a favor de **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** identificado con C.C No. 1.073.245.127, **a partir de la fecha** y ante las directivas de la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. LA MODELO -, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[11], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[12]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[13]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

---

[11] Ibídem.
[12] CSJ T **102248**
[13] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.3 Sobre el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria o intramural

Teniendo en cuenta que se procedió a estudiar la posible libertad por pena cumplida encuentra éste funcionario adecuado hacer mención del artículo 70 de la Ley 65 de 1993, que al respecto indica:

> ***"ARTÍCULO 70. LIBERTAD.*** *Artículo modificado por el artículo 50 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente: La libertad del interno solo procede por orden de autoridad judicial competente. No obstante, si transcurren los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal y no se ha legalizado la privación de la libertad, y si el interno no estuviere requerido por otra autoridad judicial, el Director del establecimiento de reclusión tiene la obligación de ordenar la excarcelación inmediata bajo la responsabilidad del funcionario que debió impartirla.*
>
> ***La Dirección de cada establecimiento penitenciario deberá informar en un término no inferior a treinta (30) días de anterioridad a la autoridad judicial competente sobre la proximidad del cumplimiento de la condena, con el fin de que manifiesten por escrito si existe la necesidad de suspender el acceso a la libertad de la persona privada de la libertad y los fundamentos jurídicos para ello.***
>
> *El incumplimiento del precepto contenido en el presente artículo acarreará sanciones de índole penal y disciplinaria para el funcionario responsable de la omisión.*
>
> ***Cuando el Director del establecimiento verifique que se ha cumplido físicamente la sentencia ejecutoriada solicitará la excarcelación previa comprobación de no estar requerido por otra autoridad judicial. Cuando se presente el evento de que trata este inciso, el director del establecimiento pondrá los hechos en conocimiento del juez de ejecución de penas con una antelación no menor de treinta días con el objeto de que exprese su conformidad".*** **(Resalta fuera del texto)**

Además, se agrega lo señalado en el inciso 2 del artículo 38 C del CP que *destaca "El Inpec deberá realizar las visitas periódicas a la residencia del condenado y le informará al despacho judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena".*

Por tanto, de manera respetuosa se solicita a las autoridades penitenciarias prestar especial atención a casos en los cuales exista mediana duda respecto del cumplimiento total de la pena de prisión informando a los jueces que vigilan las posibles penas cumplidas con una antelación de treinta (30) días con el fin de evitar futuras acciones constitucionales y disciplinarias.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca.

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que el sentenciado **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** identificado con C.C No. 1.073.245.127, a la fecha cumple con el total de la pena principal de **60 MESES DE PRISION** impuesta por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de octubre de 2019.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SEGUNDO. CONCEDER al interno **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA**, **a partir de la fecha**, conforme a lo consignado en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva a partir de la fecha.

CUARTO. Ahora en lo que respecta a la privación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** identificado con C.C No. 1.073.245.127, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

QUINTO. Teniendo en cuenta que **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Carrera 18 A No. 9 D – 01, Torre 19, Apartamento 576, Conjunto Residencial Sendero de Siete Trojes en Mosquera Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** al sentenciado el contenido del presente auto a través del correo electrónico codi-09@hotmail.com / conny09122009@hotmail.com

SEXTO. ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR** en razón de este proceso.

SEPTIMO. EXHORTAR a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, en el sentido de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 65 de 1993 (modificado artículo 50 de la Ley 1709 de 2014).

OCTAVO. REMITIR copia de la presente providencia a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, para que repose en la hoja de vida del interno y se tome atenta nota de ello.

NOVENO. En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del despacho REMITIR las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales de Villeta Cundinamarca, para su archivo definitivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y de Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

ll

l.e.s.r

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA - CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 7 de marzo de 2024
Oficio No. 0504

Señor:
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA MODELO
Bogotá D.C.
juridica.ecmodelo@inpec.gov.co
libertades.ecmodelo@inpec.gov.co

CUI:	**25875600069820190008 2**
Sentenciado:	**WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR**
Identificación:	**C.C. No. 1.073.245.127**
Delito:	**TENTATIVA DE HOMICIDIO**
Sitio de Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA - CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD BOGOTA – LA MODELO –**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA DECRETA REHABILITACION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS**

Cordial saludo,

De conformidad a lo ordenado en auto de la fecha que decretó la libertad por pena cumplida al sentenciado en referencia comedidamente me permito **ADVERTIR que conforme lo señala el artículo 70 de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014, debe informar en un término no inferior a 30 días de anterioridad a la autoridad judicial, en el presente caso a este juzgado, sobre la proximidad del cumplimiento de la condena de los sentenciados, con el fin de evitar acciones constitucionales y posteriores sanciones disciplinarias para los funcionarios responsables.**

Además, se agrega lo señalado en el inciso 2 del artículo 38 C del C.P., que *destaca "El Inpec deberá realizar las visitas periódicas a la residencia del condenado y le informará al despacho judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena".*

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

BOLETA DE LIBERTAD No. 0022

FECHA	**SIETE (7) DE MARZO DE 2024**

Señor Director: **CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. – LA MODELO -.**

Sírvase poner en libertad a: **WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR.-**

Cédula de Ciudadanía: **1.073.245.127 EXPEDIDA EN MOSQUERA CUNDINAMARCA.**

Lugar de nacimiento: **MOSQUERA CUNDINAMARCA.-**

Fecha de Nacimiento: **9 DE DICIEMBRE DE 1995.-**

Delitos: **TENTATIVA DE HOMICIDIO.-**

Estado Civil: **SOLTERO.-**

Profesión u oficio: **AUXILIAR DE LOGISTICA.-**

Nombres de los padres: **RICARDO FORERO ALARCON Y CONCEPCION CORREDOR VARGAS.-**

Nombre del cónyuge: **N/A.-**

Motivo de libertad: **LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DE LA FECHA-.**

CUI**: 25875600069820190008 2-.**

Número Interno: **2019-0659.-**

Autoridades que conocieron: **CUI: 258756000698201900082 – FISCALIA URI VILLETA CUNDINAMARCA, JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE NIMAIMA TURNO – CSJ VILLETA CUNDINAMARCA, JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE VILLETA CUNDINAMARCA Y ESTE ESTRADO JUDICIAL 2019-0659.-**

OBSERVACIONES: ESTA LIBERTAD SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTENCIADO WALTHER RICARDO FORERO CORREDOR, NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN. -

NELSON MOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 07 de 2024: Al despacho el proceso contra **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131, informando que se recibe el día 24 de enero de 2024, la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo siete (07) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0084

RADICADO CUI JUZGADO FALLADOR	**25754600000202000078**
RADICADO CUI JEPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA	**25754600673202000003**
Número Interno:	**2023-0119**
Condenado:	**MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS**
Identificación:	**C.C. No. 1.023.013.131**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL (comisión otros delitos)** **RECONOCE REDENCION DE PENA TRABAJO**

1. MOTIVO DE LA PROVIDENCIA

Procede el despacho a pronunciarse nuevamente, respecto a la documentación emitida por las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLERA CONDINAMARCA, para resolver sobre la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena del interno Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131, quien descuenta pena en el mencionado centro carcelario.

2. CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos **desde el mes de enero a septiembre de 2020** y preacuerdo aprobado el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de diciembre de 2021, **CONDENÓ** a **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** (y otro[1]) a la pena principal de **CINCUENTA Y SIETE (57) MESES DE PRISION Y MULTA DE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1.354) SMLMV**, como autor del delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO** en calidad de coautor, **EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO** en calidad de coautor **EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES** en calidad de coautor; y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal de prisión impuesta. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 3 de diciembre de 2021

MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS descuenta pena dentro del presente asunto **desde el día 8 de septiembre de 2020** (el Juzgado 1º Penal Municipal con función de control de garantías de Soacha Cundinamarca, en audiencia del 9 de septiembre de 2020, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario).

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias mediante auto de sustanciación No. 0364 del 23 de marzo de 2023.

A través del auto interlocutorio No. 0167 del 23 de marzo de 2023, este despacho judicial negó al condenado, la acumulación jurídica de penas (radicados CUI 25754610800220158193 3 y 257546000000202000014)

Mediante auto interlocutorio No. 0168 del 23 de marzo de 2023, este Juzgado negó al infractor la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P.,

Por auto interlocutorio No. 0261 del 24 de mayo de 2023, este despacho resolvió DECRETAR LA CORRECCIÓN DE ACTOS IRREGULARES, conforme a lo estipulado en el artículo 15 inciso 2º de la Ley 600 de 2000 del auto interlocutorio No. 0168 por el cual este Juzgado negó al condenado la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P., por expresa prohibición legal, quedando anotado erróneamente en dicha providencia la fecha de emisión: “Marzo veintiuno (21) de dos mil veintitrés (2023)” “siendo correcto: “Marzo veintitrés (23) de dos mil veintitrés (2023)”.

Este despacho judicial por auto interlocutorio No. 0286 del 5 de junio de 2023, no repuso el auto interlocutorio No. 0168 del 23 de marzo de 2023 por el cual se negó la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P., al condenado y CONCEDIÓ el recurso de apelación ante el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.

[1] Maira Katherine Rincón Semanati – condena 51 meses de prision – multa 1.353 smlmv

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

El Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, mediante providencia del 31 de julio de 2023, CONFIRMÓ el auto del 23 de marzo de 2023 emitido por este Juzgado por el cual se negó la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P., al condenado.

Mediante auto de sustanciación No. 0845 del 1 de septiembre de 2023, se dispuso obedecer y cumplir, con lo dispuesto por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y se reasumió la competencia para continuar con la ejecución de la pena de este proceso.

Esta agencia judicial mediante auto interlocutorio No. 0457 del 20 de septiembre de 2023, reconoció al interno 1 mes y 20.5 días de redención de pena.

En la presente oportunidad ingresan las diligencias al despacho, con la documentación procedente de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de libertad condicional del condenado conforme lo señalan los numerales 3 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

De acuerdo a los hechos ocurridos desde el mes de enero a septiembre de 2020, el infractor **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 890 de 2004 y 1453 y 1474 de 2011) pero por favorabilidad se estudiará con lo señalado en la Ley 1709 de 2014.

4.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, el certificado de cómputo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974681	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	488	Sobresaliente	Buena
19066849	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	480	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**968**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **968** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS** de redención, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3. De la Libertad Condicional

Con relación al beneficio de Libertad Condicional, expresa el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, que para su concesión deben cumplirse la totalidad de los requisitos a saber:

> *"**ARTÍCULO 64. Libertad condicional**. El juez, PREVIA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
> 2. *Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
> 3. *Que demuestre arraigo familiar y social.*
>
> *Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.*
>
> *En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.*
>
> *El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario"*[5] (Subrayado y negrilla fuera de texto).

La norma en cita está directamente ligada y supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

[5] Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

> ***Art. 471.-*** *"El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.*
>
> *Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional."* (Subrayado fuera del texto original) [6]

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** delimitó su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma**,** sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP),** NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario, a pesar que los delitos endosados se encuentran como excluidos en la mencionada norma, no los tendrá en cuenta – **CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO**, **EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES**, para el mecanismo sustitutivo a estudiar.

4.4. Valoración de la conducta punible.

Dentro de unos hechos constitutivos que infrinjan los derechos de la comunidad, el Estado representado por el ente investigador, en su etapa previa y por los jueces en su juzgamiento, nos llevan a una punibilidad dentro de un proceso penal que finaliza con una absolución o condena de un individuo. Si es ésta última, se impone o suspende una pena privativa de la libertad.

En este ciclo privativo el condenado puede hacer uso de subrogados o mecanismos sustitutivos, como la libertad condicional contemplado en el artículo 64 del C.P. Ésta

[6] Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

configura la oportunidad de que la persona que está condenada y se encuentra privada de la libertad - intramural o domiciliariamente - puede cesar dicho estado impuesto en sentencia condenatoria. Para su concesión, el juez, a quien le corresponde por competencia, estudiará los requisitos que exige la norma entre los que se encuentra previamente, la valoración de la conducta, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2014.

Esta valoración inicio en la adición concebida por el legislador como "gravedad de la conducta" en la Ley 890 de 2004 y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad en la sentencia C-194 de 2005, en el que señaló que el juez de Ejecución no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de la evaluación de la procedencia del subrogado penal. Allí dejó claro que el juez no quedaba autorizado para valorar dicha *"gravedad"* ya que lo que la norma señalaba era que se debería tener en cuenta de parte del funcionario era *"la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal".*

Con la modificación incorporada por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 el legislador condicionó la concesión del beneficio de libertad condicional a la ***"previa valoración de la conducta punible"*** suprimiendo la palabra *"gravedad"* de la disposición anterior, de lo que se ha derivado una diversidad de interpretaciones por parte de los jueces vigilantes, sin embargo, este Despacho se sostiene en el criterio aplicado con antelación en el sentido de hacer tal valoración siempre y cuando sobre el punto se haya pronunciado el juez fallador.

Lo anterior con base en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia **C-757 de 2014** en donde determina una vez más que en las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas para decidir sobre el beneficio de libertad condicional deben tenerse en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez fallador en la sentencia, ya fueran favorables o desfavorables.

Ello significa que el Juez de Ejecución de Penas podrá valorar la conducta de conformidad con el artículo 64 del Código Penal, en la medida en que sobre tal aspecto se haya pronunciado el juzgado fallador o en su defecto la segunda instancia. Del mismo modo indica lo anterior que la redacción del mencionado artículo 64 del C.P., *"no establece qué elementos de conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni establece los parámetros a seguir para asumir las valoraciones que de ella hicieron previamente los jueces penales"*[7]

En efecto, el juez ejecutor se somete a las consideraciones expuestas por el juez que resolvió la situación jurídica del procesado a través de su fallo condenatorio.

Así lo manifestó la H. Corte Suprema de Justicia:

"Respecto a la valoración de la conducta punible, la Corte Constitucional, en sentencia CC C-757-2014, teniendo como referencia la Sentencia CC C-194-2005, determinó, en primer lugar, cuál es la función del juez de ejecución de penas y, de acuerdo a ésta, cuál es la valoración de la conducta punible que debía realizar.

«[E]l juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –

[7] CSJ T 107644 (19-11-19)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. […]

[L]os jueces de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario, el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal»[8]*.*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y analizando los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional se tiene que cuando se va a analizar la conducta por parte de los Jueces de Ejecución de Penas, en cualquiera de sus dos interpretaciones, la de la Ley 890 de 2004 "gravedad" y en la modificación de la Ley 1709 de 2014 "conducta", declaradas exequibles en las sentencias arriba relacionadas, C-195-04 y C-757-14, la conclusión dada por el máximo Tribunal Constitucional fue la siguiente:

> *"En los mismos términos,* ***cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal****"*[9]:
> (Resaltado fuera del texto original)

Efectivamente conforme a lo expuesto y dado el análisis e interpretación dada sobre dicho pronunciamiento, no se puede someter nuevamente al condenado con el estudio hecho por el juez fallador en el momento en que dosificó las conductas penales, esto es ni por la censura ni con la "misma óptica en que se produjo la condena". Tampoco puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de dicha evaluación, pero no queda autorizado para valorar la gravedad de la conducta, lo que se debe tener en cuenta por parte del funcionario es la gravedad del comportamiento punible, *calificado y valorado previamente en la sentencia por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal*.

Ello significa que el juez vigilante debe someterse no a la valoración que hizo el de conocimiento en el momento de la dosificación de la pena, que es su motivación para "dosificar" la conducta, o conductas endilgadas al imputado, sino al pronunciamiento en los mecanismos sustitutivos de la pena cuando se pasa a la audiencia del artículo 447 del C.P.P.

Y debe de ser así porque si el funcionario que vigila la pena se sometiera a lo consignado por el juez de conocimiento al momento en que dosifica las conductas, estaríamos frente a una eventual negativa de las solicitudes de los mecanismos sustitutivos solicitados, sobre todo el de la libertad condicional.

Se entiende que en el instante de evaluar la posible libertad del implicado debe hacerse desde la óptica de lo expuesto por el fallador al momento en que se pronuncia, que es obligatorio, en la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria (art 63 y 38 C.P.), audiencia esta indispensable para que se logre a través de los condenados acceder a cualquiera de estos postulados y si el fallador ve que de acuerdo a la situación fáctica se

[8] CSJ T-119389 (30-09-21)
[9] Corte Constitucional, sentencia C-194 de 2005

tenga que pronunciar sobre la "gravedad" de conducta, así lo hará, momento éste en que el juez de Ejecución de basa para estudiar la posibilidad de conceder o negar el mecanismo sustitutivo solicitado.

Como se señaló, han existido varias interpretaciones al respecto no solo de parte de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia que enmarcan un criterio y lineamiento para analizar, estudiar y decidir sobre este tópico.

En una decisión del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria[10], se analizó la gravedad de la conducta y la conducta punible basado en el pronunciamiento que se hizo por parte del fallador en el momento procesal de cuantificación de las penas, en el que se hizo un reproche sobre la conducta del implicado, no ocurriendo lo mismo en el momento en que se pronunció ante los mecanismos sustitutivos de la pena.

> *"…: **VIII. DE LAS PENAS:***
>
> *VIII.4. Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada superó de modo importante su tope básico, necesaria para configurar el delito, en tanto significó cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos al margen de la ley, con menoscabo de los valores que nutren un Estado democrático; el daño fue significativo, porque se fundió en unas mismas personas las condiciones de agentes de grupos ilegales y del Estado; la seguridad pública sufrió grave deterioro amén su legitimidad; la intensidad del dolo se verificó mayor, dado que inició con la coalición político-paramilitar que condujo a sus elecciones en el Congreso de la República y se extendió durante el ejercicio alternado del cargo cada uno por un año; aunada la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución.*
>
> *VIII.5. Se tiene en cuenta que aunque la concertación con pretensiones políticas del señor (…), con un grupo armado al margen de la ley tuvo las connotaciones antes referenciadas, que motivan el incremento de las penas, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa en su corto tiempo de ejercicio él haya propiciado acciones concretas que redundaran selectivamente en beneficio de esos colectivos criminales, lo que de algún modo informa un retraimiento en el componente lesivo del delito, tanto que el testimonio del propio (…) por momentos asumió el carácter de reclamo, lo que en perspectiva, aunada la carencia de antecedentes penales, desaconseja penas superiores a las determinadas; por eso no se le impone el máximo permitido en la ley.*
>
> ***IX. DE LA LIBERTAD:***
>
> *No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria, por impedirlo un requisito objetivo; en el primer caso porque la ley sólo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y, en el segundo, porque sólo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de la condena sea de 5 años o menos, acorde con lo establecido en los artículos 63-1 y 38 del Código Penal, presupuesto que no se satisface…" [11]*

Posterior, en los fallos de la Corte Constitucional C-233-16, T-640-17 y C-265-17 determinó que se debe tener en cuenta, para los jueces de ejecución de penas, que la finalidad constitucional de la pena no está en el castigo del condenado sino en su resocialización

[10] C.S.J Rad 44195 (03-09-14)
[11] Rad 44195 y 33713

como la garantía que nos brinda el artículo 5° de la Ley 65 de 1993, - dignidad humana -[12]. Esto nos lleva a velar por la reinserción social apoyada por la educación que se les brinde en los Centros Carcelarios a los penados en forma intramural o domiciliaria con el fin de humanizar la pena como lo señala el artículo 1° de la C.N[13].

Del mismo modo la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que el Juez de Ejecución de Penas debe tener en cuenta la participación del condenado en las diferentes actividades de readaptación y/o resocialización dentro de los Centros Carcelarios y buscar la reinserción del que ha cometido un error y lo está subsanando.

En reciente exposición, en sede de tutela de parte del mismo órgano de cierre, hace un recuento sobre la *"amplitud de posibilidades hermenéuticas con respecto a la valoración de la conducta punible"* y el guiarse por los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad *"como bien lo es el principio pro homine – también denominado cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos"*, centrándola en lo más favorable al hombre y sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

En dicha providencia advierte que[14]:

> ***"…i)*** *No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.*
>
> *En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;*
>
> ***ii)*** *La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;*
>
> ***iii)*** *Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.*
>
> *Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.*

---

[12] **ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.** <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.
Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

[13] **ARTICULO 1o.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

[14] C.S.J Rad T-107644 (19-11-19) M.P. Patricia Salazar Cuéllar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.*
>
> ***iv)** El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado…"*

Éste precedente ha sido reiterado en sentencias con radicados 111560 (28-07-20), 113578 (01-12-20); 115313 (23-03-21); 119257 (28-09-21) y 119389 (30-09-21) y en la providencia con radicado 59888 (15-09-21).

Así lo señaló en el Rad 119389:

> *"Tal postura fue ratificada recientemente en proveído CSJ AP4142-2021, 15 sep. 2021, rad. 59888, en los siguientes términos:*
>
> *[…] Tal como lo ha indicado esta Corporación[15], **la concesión de la libertad condicional depende del cumplimiento de todos los requisitos enlistados en el precepto transcrito, pues en su examen, el juez no puede prescindir de ninguna de las condiciones fijadas por el legislador, incluida, la valoración de la conducta, cuyo análisis es preliminar.***

(…)

> *En línea con dicha interpretación, esta Corporación ha sostenido que:*
>
> *«La mencionada expresión –valoración de la conducta- prevista en el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, va más allá del análisis de la gravedad, extendiéndose a aspectos relacionados con la misma, sin que el juez ejecutor de la pena tenga facultad para soslayar su evaluación, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 del 15 de octubre de 2014»[16].*
> *[…]*
> *Así, es claro que para la concesión de la libertad condicional, resulta imperioso que el juez valore la conducta por la cual se emitió la condena, no obstante, se insiste, **tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad y los antecedentes de orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social**, por lo que en la apreciación de estos factores debe conjugarse el «impacto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes»[17]."[18]*

Ahora complementando lo anterior, en recientes pronunciamientos sobre este punto la H. Corte Suprema de Justicia concretó lo siguiente:

"6.6.2.3 Por último, obligado resulta traer a colación el auto de segunda instancia CSJ AP2977–2022, 12 jul. 2022, rad. 61471, no solo por su cercano proferimiento, sino por identificarse con la temática bajo examen, razón por la cual su trascendente alcance irradia al asunto que concita la presente decisión. En el mencionado proveído, así se discurrió:

---

[15] CSJ AP8301-2016, Rad. 49278, CSJ AP5297-2019, entre otros
[16] CSJ AP3558-2015, Rad. 46119
[17] CSJ AHP5065-2021
[18] C.S.J. T-119389

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

[e]l análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el
ordenamiento penal, dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991; y al mismo tiempo desvirtuaría toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.

La anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C–757 de 2014 (declaró exequible la expresión: «previa valoración de la conducta» del artículo 64 del Códig[o P]enal), en el sentido que al analizar la procedencia de la libertad condicional el [j]uez de [e]jecución de [p]enas deberá:

> *«establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.»*

Es así como el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado, pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad, que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor tal como lo estipulan los artículos 6° numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10° numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del [b]loque de [c]onstitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Nacional).

30.3 Corolario de ello, un juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad, debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno, sobre aspectos como la escueta gravedad de la conducta (analizada en forma individual); pues si así no fuera, la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva, que en nada contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulan la dignidad del ser humano. (…)

30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca, no solamente los aspectos draconianos de las sanciones penales; entre ellos, que el conglomerado se comporte normativamente (prevención general); y que, tras recibir la retribución justa, el condenado no vuelva a delinquir (prevención especial); aunado a tales aspectos, las penas, en especial las restrictivas de la libertad, también se deben encaminar a que el condenado se prepare para la reinserción social, fin este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario y el comportamiento del condenado durante este, sea valorado, analizado, estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.

Lo anterior, justamente con el fin de incentivar en el infractor, esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción, asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario, así como para brindar herramientas útiles al penado que le permitan prepararse para retornar a la vida en sociedad cuando recobre la libertad.

30.5 Entenderlo de otra manera, sería tanto como establecer una prohibición generalizada que no ha sido prevista por el legislador para todos aquellos eventos en los que la conducta se evidencie objetivamente grave. (…)

30.6 En ese orden de ideas, entender que la gravedad objetiva de la conducta es sinónimo de negación de la libertad condicional, equivaldría a extender los efectos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *una prohibición normativa específica, sobre todos los casos que se estimen de notoria gravedad, sin haber sido así previsto en la ley; y tal expansión no es compatible con los derechos fundamentales de los condenados; pues los dejaría sin la expectativa de que su arrepentimiento e interés de cambio sean factores a valorar durante el tratamiento penitenciario, erradicando los incentivos y con ello, el interés en la resocialización, pues lo único que quedaría, es el cumplimiento total de la pena al interior de un establecimiento carcelario* [negrilla original del texto].

6.6.2.4 A las anteriores consideraciones, que en su integridad se ratifican, sólo es dable agregar lo siguiente:

Toda conducta punible es considerada un acto grave contra la sociedad, al punto que el legislador reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas, ella afecta los valores que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas, además del daño privado, el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal, necesarias para la convivencia pacífica.

La condición de grave o leve de una infracción delictiva da lugar a intensos e inacabados debates. Nadie ha de negar que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza –o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva–, implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social, verbigracia, los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida, la integridad personal, la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos, lo que de contera genera unánime rechazo social. Sin embargo, ello no soluciona la problemática a la hora de calificar el injusto.

La praxis judicial enseña que en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad –todas válidas si se quiere–, una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla, pero en el fondo sólo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida las razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que determinado proceder debía ser objeto de represión por el Estado.

La previa valoración del injusto típico introduce a la discusión argumentos de índole subjetivo que en nada contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal. (…)

Importa acotar que la Sala, por obvias razones, no se refiere a aquellas conductas que el propio legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, excluyó del subrogado de la libertad condicional, asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional en sentencia CC C–073–2010, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, «[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones». (…)

Por ello, precisó que «[e]l legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional». (…)

Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible, solo es posible frente a casos en los cuales el

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por dicho motivo, como sucede con los previstos en los artículos 26 de la Ley 1121 y 199 de la Ley 1098 de 2006, pues, como se dijo en la decisión CSJ STP15806–2019, 19 nov. 2019, rad. 107644, atrás citada, «no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos»(…)

La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias. (…)

En suma, no es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado de la libertad condicional. Ello sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla de un sentido de retaliación social que, en contravía del respeto por la dignidad humana, cosifica al individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales."[19]*.(subrayado nuestro)*

Vemos que no solo en sede de tutela se presenta un criterio unificado sobre el tema, por lo que este juzgado estimará para los futuros análisis sobre la valoración de la conducta y se tendrá en cuenta no solo el pronunciamiento por parte del juez de conocimiento cuando se refiera a los mecanismos sustitutivos de la misma, sino en el instante en que motiva la dosificación de la misma, o si existe preacuerdo en el análisis de los delitos, del mismo modo en el transcurrir del proceso su comportamiento en el Establecimiento Penitenciario y establecer la necesidad de si el condenado debe continuar con el tratamiento penitenciario ponderándolo con la valoración de la conducta.

Lo anterior, nos lleva a que el juez de ejecución de penas está en la obligación no solo de lo señalado en la parte motiva para la dosificación de la pena impuesta al condenado, sino dilucidar las circunstancias que encierra esa conducta punible junto con la personalidad del infractor- hasta ese momento como sociales, personales, laborales, familiares y su adecuado comportamiento en el Centro Carcelario, su conducta, cursos alcanzados, - puntos que nos lleva a concluir si existe la necesidad de otorgar o no el subrogado invocado o por el contrario requiere de mayor tratamiento penitenciario.

El presente Caso:

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, no hizo un despliegue con relación a la conducta endilgada al condenado, sino que simplemente se limitó en la dosificación punitiva correspondiente conforme al preacuerdo aprobado que varió la modalidad de participación de coautor a cómplice, sin embargo, indicó, que la conducta realizada por el acusado fue dolosa, ya que Maira Katherine Rincón Semanati y Miller Alfonso Mahecha Bolaños, voluntaria e intencionalmente se concertaron junto con otros, en una empresa criminal con vocación y permanencia en el tiempo, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, y de manera conjunta desplegaron la conducta de hurto en contra de los ciudadanos el 21 de abril de 2020, y finalmente **Mahecha Bolaños**, al tener dentro de sus pertenencias, en su lugar de habitación el arma de fuego y las municiones descritas, permiten determinar que aquel conocía y dirigió su voluntad a tenerlo consigo, pues desplegó esa actividad y era consciente del acto que realizaba y de las consecuencia jurídicas que esto

[19] CSJ RAD 61616 (27-07-22) M.P. Dr Fabio Ospitia Garzón

conllevaría, por lo tanto, lesionaron injustamente los bienes jurídicamente tutelados a la seguridad y salubridad pública.

De lo expuesto se colige la intención del fallador en rechazar los hechos desplegados por el sentenciado y conforme a la jurisprudencia relacionada entrará este juzgado a analizar como primera medida el no poder tener como razón para la negatoria de la libertad condicional la sola insinuación de la conducta punible frente a los bienes señalados en el C.P., ya que esto es concurrente con prohibiciones señaladas por el legislador en ciertas leyes.

Del mismo modo dicha valoración no se puede hacer con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales.

El juez que vigila debe valorar de igual manera dentro de la punibilidad lo tenido en cuenta por el fallador, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes. En efecto se debe ajustar con el comportamiento del procesado en el Centro Carcelario con elementos útiles que permitan analizar si el condenado debe continuar cumpliendo la pena intramural o domiciliariamente y su participación en las diferentes actividades que tiene instituidas el INPEC como punto fundamental para su resocialización. Entonces no se debe tener en cuenta únicamente el bien jurídico afectado como única motivación para negar el subrogado invocado, se debe hacer un análisis completo, una carga motivacional que garantiza *la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.*

4.5. Sobre la resocialización de los condenados

Se tiene bien conocido que el Estado tiene unos deberes constitucionales y que le corresponde a través de los distintos poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional) diseñar la Política Criminal, esto en especial al Legislativo (Congreso de la República) que según lo señala el artículo 150 de la Constitución Nacional *"le corresponde hacer las leyes".*

La Política Criminal, se entiende como *"**el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener el orden social y hacerle frente a las conductas que atenten de forma grave contra el mismo y, así, proteger los derechos de los residentes en el territorio nacional y, puntualmente, a las víctimas de los delitos"**.* En efecto, esta Política Criminal está enfocada a satisfacer, entre otros asuntos, el restablecimiento de las víctimas logrando la resocialización del autor o partícipe de la conducta penal.

Lo anterior significa que la política criminal del Estado es el de proteger, blindar, asegurar, resguardar a la sociedad optando que las medidas, decisiones y disposiciones guarden armonía con los principios en que se funda, sobre todo en las garantías que reconoce para sus conciudadanos.

El artículo 4° de la Ley 599 de 2000 indica que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Del mismo modo resalta que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión, ello significa que éstos buscan la resocialización del condenado.

El artículo 1º de la misma obra y de la Constitución Nacional señala que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. En efecto, para un Estado Social

y Democrático se da la necesidad de prevenir el delito con el fin de asegurar la protección de sus habitantes, defenderlos de aquellos que infrinjan las normas contenidas en las leyes; sin embargo ello no obsta que ese derecho penal se debe encausar en respetar la dignidad del infractor como el de no imponer penas – pena de muerte o cadena perpetua – dándole la oportunidad a cada individuo de tener la capacidad para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse y volver a contribuir a la sociedad.

Ahora aquellas personas que por el andar de la vida cometen un error que los lleve a pagar una pena principal de prisión, el Estado prevé un tratamiento penitenciario cuya finalidad es la reforma y la readaptación del penado a la sociedad, el de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante un examen de personalidad que se logra a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario[20].

El principal objetivo es el preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad y debe realizarse conforme a la dignidad humana, anteriormente mencionada, y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto verificándola a través de los sistemas educativos y culturales de los Establecimientos Penitenciarios.

Se concluye que el tratamiento penitenciario es el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad[21].

Sobre este punto dentro de los innumerables pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, se concluyó:

> *"…(i) durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado…"*

Y en la Sentencia C-294-21 conceptuó:

> *"La resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o técnicas de tratamiento social o clínico que pretenden «cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno».*

En sentencia C-718-15, sobre la finalidad de la pena, indicó:

> *"…Así, en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la pena, no solo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su*

[20] *Ley 65 de 1993, art 10*
[21] *INPEC art 4º Resolución 7302 (23-11-05)*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también en el momento de su ejecución.

*Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[22] que, ella tiene en nuestro sistema jurídico **un fin preventivo**, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; **un fin retributivo**, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, **y un fin resocializador** que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que "sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital". [23]*

En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.

*El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén "orientados hacia **la efectiva resocialización** de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad".[24] (Se resalta)…"*

Se suma, lo indicado en los artículos 94, 96 y 97 (Ley 65 de 1993) que estipulan sobre la educación como la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa evaluación de los estudios realizados hay lugar a que sea certificada por la autoridad designada para el efecto, disponiendo que será concedida por el Juez Vigilante, abonando 1 día de reclusión por 2 días de estudio.

Sobre la readaptación de los penados, la Sentencia T-061 de 2009, expresó que "*Las personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito, encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir la pena que les fue impuesta. Dentro de sus funciones, las cárceles se encargan de resocializar al individuo, con el fin de obtener la paz; es decir, permitiendo que el preso pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente productiva, impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles".*

Sobre ese tema esa Corte en Sentencia T-213 de 2011 reiteró lo afirmado en la providencia T-718 de 1999, según la cual: *"la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo*

[22] Sentencia C-430 de 1996
[23] Sentencia C-144 de 1997
[24] Sentencia C-1404 de 2000

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente".

Y en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente:

> *"7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional peticionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación…*[25]

Visto lo anterior, y en lo referente a lo decantando en la jurisprudencia mencionada[26] se tiene que a la fecha el infractor ha cumplido con una pena impuesta de (57 meses) **46 meses y 7 días**, superiores al porcentaje exigido por la norma con un 81.1% y vemos en su cartilla biográfica que desde el momento de su ingreso a centro carcelario su comportamiento intramuralmente y la calificación de conducta del interno ha sido en el grado de BUENA del 20-12-2022 hasta el 31-10-2023 y conducta BUENA en el certificado No. 9487259 del 01-11-2023 al 24-01-2024, de ahí en adelante su rol ha sido óptimo para el sentido de su resocialización.

Del mismo modo vemos que su actuar ha sido destacado en el transcurso de dicho proceso, entonces, al purgar un total de pena física de **42 meses y 16 días**, cuenta con redenciones de pena reconocidas de **3 meses y 21 días**, por lo que nos arroja un total de **46 meses y 7 días** de la pena impuesta cumpliendo con ello elevar a más de un 81.1%, pues detallase que el condenado **desde el 8 de septiembre de 2020** siempre ha cumplido su reclusión de manera intramural.

Aunado a ello el comportamiento del infractor ha sido buena y sobre este aspecto a pesar de que nunca lo tacharon por su disciplina, se trae un pronunciamiento sobre este aspecto - CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA - de la Corte Suprema de Justicia:

"…Las anteriores reflexiones sirven para deducir que la valoración de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso, ni de una sola calificación, sino que debe realizarse, en cada caso concreto, de manera ponderada (principio rector, artículo 27, Ley 906 de 2004) y en forma integral, con análisis de la evolución del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusión, con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocialización y, por tanto, si merece ser motivado o incentivado el beneficio.

Al no existir norma específica que determine que una sola calificación de conducta inferior a buena, no conduce indefectiblemente a la negación de los beneficios, se debe aplicar por analogía el inciso final del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, que establece la consecuencia para quien observare mala conducta durante uno de los permisos, esto es, la suspensión de los mismos, pero no su cancelación, ésta se hace efectiva únicamente en caso de reincidencia.

Lo anterior significa que el legislador otorga un margen razonable de tolerancia frente a posibles errores de comportamiento en que puedan incurrir las personas beneficiadas y no impone la extinción del derecho por una sola falla. Si ello se aplica a quienes ya disfrutan

[25] C.S.J. Rad 1376 del 14-07-2020 M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
[26] RAD 107644

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

del permiso, con mayor razón debe tenerse en cuenta como criterio de ponderación…"[27], fíjese que así hayan tenido en alguna oportunidad alguna calificación regular, no es óbice para la negatoria de alguno de los beneficios, aunque para el presente caso vemos que el infractor ha tenido un comportamiento y conducta buena.

Entonces vemos que **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** cumple, pues como lo decanta la jurisprudencia mencionada, no solamente es hacer alusión al bien jurídico afectado sino tener en cuenta ***"las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras,"*** el tener presente la armonía ***"con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.***

Sobre la resocialización, señalo en reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Bogotá lo siguiente:

"Así las cosas, se parte de la base de entender consolidada una enmienda o resocialización de la persona que ha cumplido parte de la pena dentro de un establecimiento carcelario y ha observado durante ese tiempo buena conducta, sin que pueda presumirse en su contra o concluirse que no ha sido posible su resocialización o readaptación, pues, contrariamente, según la filosofía que encarnan las medidas de privación de la libertad, se presume que el tiempo de reclusión ha contribuido a la reflexión sobre la conducta por la cual fue condenado y a permitir su readaptación y resocialización hacía el futuro.

En consecuencia, afirmar lo contrario conllevaría a evidenciar argumentativamente la necesidad del absoluto cumplimiento de la pena, bajo el régimen penitenciario, como única vía para satisfacer los fines propósitos de la punibilidad en la legislación colombiana"[28].

Sin embargo, se observa en la cartilla biográfica emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, y conforme los registros de expedientes que cursan en este Juzgado, que el condenado antes de cometer el delito por el cual se encuentra descontando pena, pesaban contra **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS**, dos (2) sentencias condenatorias por las cuales se encontraba purgando pena en prisión domiciliaria, con los siguientes antecedentes procesales:

- **Sentencia radicado CUI 257546108002201581933**, emitida por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca el 18 de octubre de 2017, **condena 60 meses de prisión**, por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HOMICIDO EN GRADO DE TENTATIVA y pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al igual que el porte o tenencia de armas de fuego por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero concedió la prisión domiciliaria, prevista en el art. 38B del C.P., sustituto penal el cual cumplía **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** desde el 8 de marzo de 2017 en su lugar de residencia ubicado en la Calle 31 B Sur No. 13 B – 18 Casa 42 barrio Quintas de Santa Ana de Soacha Cundinamarca.

[27] C.S.J. T-Rad No. 89.755 del 24-01-2017, M.P. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
[28] Tribunal Superior de Bogotá, T-RAD 11001220400020200121100 (21-05-20) M.P. Dr Luis Enrique Bustos Bustos

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Este Juzgado avocó conocimiento el 23 de marzo de 2023, y una vez analizada la situación jurídica del condenado, esta agencia judicial por auto del 5 de marzo de 2024 REVOCÓ el sustituto penal concedido, en razón a la comisión del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, **siendo capturado el 10 de octubre de 2019** radicado CUI 25754600000202000014 (ruptura 25754600000201900067), quedándole pendiente por cumplir 28 meses y 14 días de manera intramural.

- **Sentencia radicado CUI 25754600000202000014 (ruptura 25754600000201900067)**, emitida por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el 26 de febrero de 2020, **condena 48 meses de prisión**, por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR y pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad impuesta. Concedió al condenado la prisión domiciliaria – art. 38B del C.P. -, sustituto penal que cumplía el condenado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** desde el 10 de octubre de 2019 en su lugar de residencia ubicado en la Calle 31 B No. 13B-18 Casa 13 barrio Quintas de Santa Ana en Soacha Cundinamarca.

  Este despacho avocó conocimiento el 23 de marzo de 2023, y una vez analizada la situación jurídica del condenado, esta agencia judicial por auto del 5 de marzo de 2024 REVOCÓ el sustituto penal concedido, en razón a la comisión del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES, **siendo capturado el 8 de septiembre de 2020** radicado CUI JUZGADO FALLADOR 257546000000202000078 RADICADO CUI JEPMS FUSAGASUGA SEDE SOACHA 257546000673202000003 (por el cual descuenta pena actualmente en CPMS VILLETA), quedándole pendiente por cumplir 36 meses y 26 días de manera intramural.

4.6. Sobre las Fases del Tratamiento Penitenciario:

Dentro de las fases para el tratamiento penitenciario (art 144 Ley 65 de 1993) que nos señala la norma se tiene que ha cumplido con la clasificación que se establece pasando como primera medida por la fase de alta seguridad (periodo cerrado) en la que el interno accede al sistema de oportunidades en programas educativos y laborales, en periodo cerrado, permitiendo el plan de tratamiento orientándose a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades.

La fase de mediana seguridad en la que se accede de parte del interno a los programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, con medidas de seguridad menos restrictivas. Además, los programas educativos y laborales ofrecidos en esta fase se basan en la intervención individual y grupal, permitiendo la competencia psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal, no formal e informal, vinculándolos en actividades industriales, artesanales, agrícolas etc. Luego sigue la fase mínima en la que el interno se le orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral. Y por último la fase de confianza en la que tiene el tiempo requerido para la libertad condicional.

Según lo anotado por las directivas en la cartilla biográfica, no le figura sanciones disciplinarias, ni intentos de fuga en el tiempo que ha estado recluido en centro carcelario,

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

y se observa que tiene una calificación de conducta BUENA, con base a ese estudio las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, le expidieron la respectiva resolución favorable para la libertad condicional[29].

Para este funcionario el tratamiento progresivo que ha recibido **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** durante la permanencia en el Centro Carcelario permite vislumbrar que su readaptación ha tenido frutos demostrando que su buena conducta, así como en las redenciones reconocidas por estudio, trabajo y/o enseñanza, y, como se señaló el disfrute y su buen desempeño recluido intramuralmente se deduce que ha tenido un excelente desempeño permitiendo inferir en este funcionario que ha logrado su resocialización.

4.7. Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

En lo atinente al cumplimiento del factor objetivo, determinado por la Ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **CINCUENTA Y SIETE (57) MESES DE PRISIÓN**, corresponde a **34 meses y 6 días**. Teniendo en cuenta que el solicitante ha descontado pena **desde el 8 de septiembre de 2020** hasta la presente fecha, ha cumplido físicamente **42 meses y 16 días** de la pena impuesta.

El condenado cuenta con redenciones de pena de **3 meses y 21 días** reconocidas por este Juzgado (A.I. 0457 del 20-09-2023 – 1 mes y 20.5 días y en el presente A.I. 0084 de la fecha – 2 meses y 0.5 días).

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA	8 de septiembre de 2020
TIEMPO FÍSICO:	42 meses y 16 días
TIEMPO REDIMIDO:	3 meses y 21 días
TOTAL DESCONTADO:	46 meses y 7 días
PENA PRINCIPAL:	57 meses
3/5 PARTES DE LA PENA	34 meses y 6 días

Así las cosas, al sumar ambos guarismos, el tiempo cumplido efectivo de la pena y el tiempo redimido, tenemos que **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** ha cumplido de la pena impuesta un total de **46 meses y 7 días de prisión** purgados de la pena impuesta; tiempo superior a las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **57 meses de prisión** que como se dijo equivalen a **34 meses y 6 días**, razón por la cual el condenado solicitante **cumple** ampliamente con el requisito objetivo que demanda la normatividad.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **por homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

[29] Resolución No. 127-011-2024 del 24 de enero de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[30]

4.8. Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión.

Sea este el momento para resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado beneficio de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de este funcionario judicial, y que se encuentran dispuestos por el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, y por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que imponen la existencia de ciertos documentos emanados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde se certifica el cumplimiento de ciertos requisitos.

En el presente asunto, si bien obra la Resolución No. 127 011-2024 de fecha 24 de enero de 2024, emitida por las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, en la cual se emite **CONCEPTO FAVORABLE** sobre las pretensiones del interno en lograr su libertad condicional, y si bien es cierto en la cartilla biográfica se observa que la calificación de conducta ha sido "buena", éste incumplió los deberes impuestos en los fallos condenatorios del 18 de octubre de 2017 - Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca y del 26 de febrero de 2020 - Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca al haberle concedido la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38B del C.P., como quiera que el condenado TRANSGREDIÓ estando en prisión domiciliaria, lo que dio lugar a que este Juzgado REVOCARA el sustituto penal por autos del 5 de marzo de 2024

En consecuencia, se itera, este despacho judicial REVOCÓ el sustituto penal otorgado por el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Soacha Cundinamarca mediante sentencia del **18 de octubre de 2017** pues no se puede dejar de lado la decisión asumida, ya que, debe darse cumplimiento a lo dispuesto en auto del 5 de marzo de 2024 y a la orden de captura emitida en atención a la revocatoria, radicado CUI

[30] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046) (23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

257546108002201581933, <u>quedándole por cumplir 28 meses y 14 días de manera intramural.</u>

De igual manera, este Juzgado REVOCÓ la prisión domiciliaria otorgada por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca en sentencia del **26 de febrero de 2020**, en la cual debe darse cumplimiento a dispuesto en auto del 5 de marzo de 2024 y a la orden de captura emitida en razón a la revocatoria, radicado CUI **257546000000202000014 (ruptura 257546000000201900067), <u>quedándole por cumplir 36 meses y 26 días de manera intramural.</u>**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se analiza que el condenado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** ha asumido una **<u>ACTITUD COMPORTAMENTAL QUE NO ES COMPATIBLE CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN DIAGNÓSTICO POSITIVO ACERCA DE LA CONDUCTA DEL SENTENCIADO AL ESTAR CUMPLIENDO SU RECLUSIÓN DE MANERA INTRAMURAL Y MENOS CON LA NECESIDAD DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA</u>**.

Por lo tanto, **<u>cabe resaltar que el condenado al cometer otros delitos, su conducta redunda en un test desfavorable que incide en la negativa de la libertad invocada, ya que era su obligación pernoctar en su lugar de domicilio (prisión) y cumplir con lo impuesto en los aludidos fallos condenatorios, por tal razón, su proceso de resocialización es negativo al desatender sin ninguna excusa al cumplimiento de los deberes impuestos y a los que se comprometió cuando fue merecedor en las mencionadas sentencias, del sustituto penal otorgado y con ello reveló su desconocimiento a los compromisos propios del tratamiento penitenciario, que tiene como finalidad la función de resocialización de la pena</u>**.

Al respecto en un pronunciamiento sobre este asunto la H. Corte Suprema de Justicia en Rad 18506 (16-08-01) señaló:

> *"…Frente a esta realidad, la buena conducta observada por el procesado al interior del centro carcelario y la conformación de su núcleo familiar, no logran infundir a la Sala la tranquilidad necesaria de que se abstendrá de cometer nuevos hechos punibles al regresar al seno de la comunidad, así sea al restringido ambiente de su hogar, y que al tiempo no evadirá el cumplimiento de la pena…"*[31]

Sin embargo y volviendo al caso, para efectos de la libertad condicional no puede ser indiferente aquella actitud asumida por quien, <u>estando obligado a permanecer en su domicilio,</u> voluntariamente evada el cumplimiento de la pena y de contera el control de las autoridades judiciales y carcelarias encargadas de evaluar su comportamiento en reclusión.

Es necesario insistir en que independientemente de que el quantum punitivo se cumpla, éste no opera de manera automática para que la libertad condicional resulte procedente, sino que debe estar acreditado el cumplimiento de los demás presupuestos para su concesión establecidos en el ordenamiento jurídico en armonía con los fines y funciones de la pena, sin que pueda dejarse de valorar la actitud asumida por sentenciado, <u>pues quien rehúsa a estar en prisión</u>, cuando así lo ha dispuesto la autoridad judicial, no puede sacar ventaja de su propia actuación.

Además, es claro que la persona que esté cumpliendo pena en prisión domiciliaria está cobijada bajo las mismas normas y reglamentos de la prisión intramural y al estar ausente

[31] M.P. Dr Fernando Arboleda Ripoll

en los otros procesos, el señor **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** del sitio donde debía estar purgando pena se evadió, y es como si hubiese hecho lo mismo en la intramural.

Sobre el concepto favorable señalo en un pronunciamiento la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia lo siguiente[32]:

> *"…6. Quienes piensan en contrario aducen como argumento medular que si las autoridades carcelarias expiden un concepto favorable en cuanto a la conducta y a la viabilidad de la libertad condicional, los fundamentos de lo conceptuado por el INPEC no pueden ser revisados ni refutados por el Juez, porque como la calificación sobre la conducta se emite en un acto administrativo, amparado con presunción de legalidad, cualquier decisión en contrario corresponde decidirla a la misma administración o a la jurisdicción contencioso administrativa, con agotamiento de la vía gubernativa si fuese necesario.*
>
> *En criterio de la Sala de Casación Penal, tal postura parte de dos supuestos equivocados. De una parte, porque prácticamente quedaría en manos de las autoridades carcelarias el otorgamiento o no de la libertad condicional, y de otra, porque el "concepto favorable" del INPEC, a que se refiere el artículo 480 del estatuto procesal penal, no puede -desde ningún punto de vista- desplazar la facultad judicial que en materia de libertad se radica en cabeza de los Jueces hacia las autoridades administrativas carcelarias, máxime cuando se trata de una norma de estirpe instrumental, sin virtud para modificar las instituciones consagradas en la Parte General del Código Penal, y que básicamente está destinada a ilustrar a los condenados sobre los documentos que debe acompañar a su solicitud para que el juez pueda "deducir" la necesidad o no de continuar con la ejecución de la pena.*
>
> *7. Sin duda, la fase de ejecución de la pena es eminentemente judicial y, por tanto, las decisiones que durante ella deban tomarse sobre la libertad de los condenados, o las modificaciones sobre las condiciones de cumplimiento de la pena, o reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad deben ser adoptadas exclusiva y excluyentemente por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, o por el Juez que lo reemplace…".*

En otro pronunciamiento la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló:

> *"…Este comportamiento revela una personalidad carente de escrúpulos frente al delito, cuando debía ser paradigma de rectitud y ejemplo para los demás, lo que permite colegir que la prevención especial y la reinserción social, solo se harán posibles mediante la detención intramural.*
>
> *Y son precisamente la gravedad, naturaleza y modalidades del reato imputado, los que llevan a pronosticar que si pasó por encima de la ley, cuando tenía el deber especial de acatarla, menos la respetará cuando no se desempeñe como juez penal o simple particular y que, por ende, pondrá en peligro a la comunidad, al no estar detenida intramuralmente.*
>
> *De otra parte, desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular gravedad, como el presente, merecen ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al ordenamiento jurídico y satisfacer su*

[32] Corte Suprema de Justicia, Segunda Instancia Rad 22365 del 2 de junio de 2004

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

> *conciencia jurídica, sino porque un tratamiento benigno llevaría, como lo ha dicho la Sala[33], un mensaje de desequilibrio en la aplicación del Derecho, una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia…"(subrayado nuestro).*

Entonces, se itera, pese al concepto favorable del INPEC – Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca – para el otorgamiento de la libertad condicional invocada por el condenado, se evalúa el factor subjetivo, esto es, el comportamiento y desempeño del penado cuando estuvo cumpliendo pena domiciliariamente en los anteriores procesos (oportunidad que otorga el Estado de estar en su núcleo familiar, rodeado de aquellos seres allegados) y en lugar de cumplir con ello, volvió a delinquir, se apartó del cumplimiento que debe tener a los compromisos que le eran obligatorios, motivo por el cual el subrogado está restringido, sobre todo para aquellos internos - como en el presente caso – quienes no han guardado la suficiente disciplina, originando con ello que el Estado no confíe en ellos. **Esto quiere decir que no cumplió, se apartó de las obligaciones impuestas en la ley, dado al franco desacato a la justicia y persistencia y obstinación por la transgresión y comportamiento rebelde proclive al delito**.

Corolario de lo anterior, **se NIEGA** al sentenciado el subrogado de la libertad condicional, y en consecuencia seguirá descontando la sanción, no pudiendo sustraerse a su cumplimiento bajo la creencia de tener derecho a la sustitución de la pena privativa de la libertad por haber cumplido las 3/5 partes de la pena impuesta, porque este derecho no opera de manera unilateral y automática, sino que, debe ser reconocido judicialmente previo cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto.

Ahora bien, al existir un impedimento respecto al factor subjetivo, y aunque el centro carcelario califique la conducta del interno en grado BUENA, el hecho de que el interno **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** cometiera otros delitos anteriores a este proceso y dentro de los cuales se encontraba cumpliendo pena en prisión domiciliaria, demuestra el desinterés de acatar las penas impuestas, por lo tanto, al verificarse el comportamiento del prenombrado durante su reclusión, no se debe tener en cuenta solamente la calificación efectuada por la CPMS VILLETA CUNDINAMARCA, ya que al transgredir su reclusión domiciliaria en otros asuntos, debe continuar con el tratamiento penitenciario y ejecutar la pena intramuralmente, entonces, se itera, que el condenado desconoció voluntariamente las restricciones a las que se había sometido al estar bajo el sustituto penal, por lo que demostró un mal comportamiento durante el tratamiento carcelario.

4.9. Del arraigo familiar

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

[33] Ver auto de 23 de octubre/00, Seg. instancia. Rad. 16997. M. P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Para el caso concreto y verificando como corresponde el mencionado presupuesto –*arraigo familiar y social*- se observa que **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** cuenta con un domicilio ubicado en la **Carrera 12 B No. 30-66 Sur Quintas de Santa Ana, barrio Compartir en Soacha Cundinamarca,** conforme se indica en el Acta Declaración Juramentada No. 0289 del 16 de enero de 2024, rendida ante la Notaría 2ª del Círculo de Soacha Cundinamarca por el señor Rodríguez Bolaños Jefferson Stiven identificado con C.C. No. 1001195915, (primo del condenado), quien manifiesta que el interno llegaría a convivir bajo el mismo techo en el mencionado inmueble con él y su progenitora Sara Liliana Bolaños Pérez (tía del condenado), también indica, que se compromete a responder económicamente y totalmente por el bienestar del sentenciado, brindándole cariño y apoyo, y se hará cargo de él y de su permanencia en el lugar, por lo tanto, el infractor cumple con el citado requisito.

4.10. De la reparación a las víctimas

En lo que a la reparación de las víctimas respecta, se tiene que no aparece dentro de la actuación, diligencia alguna sobre el incidente de reparación integral.

5. CONCLUSIÓN

Consecuente con lo anterior, se tiene que **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS, NO reúne POR AHORA uno** los presupuestos objetivos decantados en la norma, esto es, el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión, **conforme el pronunciamiento emitido por este Juzgado que le REVOCÓ la prisión domiciliaria de los procesos radicado CUI 25754610800220158193 3 y radicado CUI 257546000000202000014 (ruptura 257546000000201900067)**

Finalmente, como el precitado se encuentra purgando pena en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, se **COMISIONA** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS.**

6. OTROS ASUNTOS.

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[34], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[35]

---

[34] Ibídem.
[35] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[36]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7. DECISIÓN

Por lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**,

RESUELVE:

PRIMERO. – RECONOCER al condenado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131, redención de pena por trabajo en equivalencia de **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. - RECONOCER que el interno **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131, tiene descontado por pena física, más las redenciones de pena reconocidas un total de **46 MESES Y 7 DIAS**

[36] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

TERCERO. - NEGAR al sentenciado **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS** identificado con C.C. No. 1.023.013.131, el beneficio de la **LIBERTAD CONDICIONAL** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

CUARTO. – Como el precitado se encuentra purgando pena en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, se **COMISIONA** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **MILLER ALFONSO MAHECHA BOLAÑOS.**

QUINTO. - REMITIR copia de esta providencia a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

6 de marzo de 2024. Al despacho el proceso informando que una vez verificado el estado actual de las diligencias esta agencia judicial procede a emitir pronunciamiento sobre la extinción de la sanción penal.

Es de anotar, que debido al alistamiento y remisión de los expedientes al Centro de Digitalización en la ciudad de Bogotá D.C, y que al ser pioneros desde el año 2021 se llevaron los expedientes en físico, y como quiera que éstos no han sido retornados de su digitalización por parte del Centro de Digitalización en la ciudad de Bogotá, a hoy no se tiene aún el total de los expedientes ni físicos ni digitales, razón por la cual **NO se había tenido acceso al expediente, lo que imposibilitó verificar la situación jurídica del condenado**. Aunado los actos vandálicos que ocasionaron la quema del Centro Judicial del municipio en los meses de abril, mayo y junio de 2021.

DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 085

Número Interno:	**2013-3887**
CUI:	**25269661080042013800 88**
Sentenciado:	**DEIMER RAMIREZ SANCHEZ**
Delito:	**Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego**
Decisión:	**EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS Y PARA EL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS.**

1. OBJETO A DECIDIR

Procede el despacho a pronunciarse respecto de la solicitud de extinción de la sanción penal por prescripción, a favor del señor DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ identificado con la C.C. No 1.007.258.750 de Cali-Valle quien se encuentra con orden de captura vigente.

2. CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia púbica las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley-1709 de 2014- concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

3. RESEÑA PROCESAL

Por hechos del 26 de febrero de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá (Cundinamarca) en sentencia del 3 de octubre de 2013 resolvió condenar a **DEIMER RAMIREZ SÁNCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 1.007.258.750, a la pena principal de NUEVEV (9) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por igual término al de la pena principal al encontrarlo autor del punible de **FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO**. Al sentenciado le fueron negadas tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como la prisión domiciliaria y ordenó librar la captura correspondiente No 082 del 18 de noviembre de 2013.

La sentencia quedó ejecutoriada el 28 de octubre de 2013.

Este juzgado avocó el asunto el 27 de noviembre de 2013 y reiteró las órdenes con Nos 7260-7261 y 7261 del 6 de noviembre de 2014. Luego conoció el homólogo en descongestión despacho que una vez no se prorrogó volvieron las diligencias a este Estrado que reiteró las órdenes de captura en oficios No 4810 y 4811 del 25 de octubre de 2019, y Nos 1392 al 1395 del 24 de junio de 2022.

Posteriormente, frente a nueva petición de extinción por prescripción, mediante auto de sustanciación previo extinción se solicitó nuevamente la actualización de antecedentes del procesado. Dicha actualización fue remitida apenas el 31 de enero de 2024 mediante oficio No. 20240035460/ SUBIN- GRAIC -1.9.

Verificado el aplicativo AZURE no se encontró, pero se tuvo la disponibilidad en físico del expediente. Pasa al despacho para el pronunciamiento sobre la extinción de la sanción penal.

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1 COMPETENCIA

Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la extinción de la sanción penal, según lo señala el numeral 8 del artículo 38 de la ley 906 de 2004, que indica:

> ***"ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.*** *Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: (…)*
>
> *8.* ***De la extinción de la sanción penal****…"*

4.2 DE LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN

La Pretensión punitiva del Estado admite para las penas diversas causas de extinción que se encuentran catalogadas en la ley como i) la extinción de la acción penal y ii) extinción de la pena. Sin embargo, estos fenómenos están sometidos a un tratamiento diverso cuyas causas el legislador estipuló y se encuentran consagradas en el Estatuto Penal.

De conformidad con los artículos 88 y 89 del Código penal de la Ley 599 de 2000 se tiene que la extinción de la sanción penal goda de diferentes causas que la originan y en el momento de presentarse produce dicha extinción.

Reza el artículo 88:

> ***"Art. 88.- EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL****. Son causas de extinción de la sanción penal:*
>
> *1.- La muerte del condenado.*
> *2.- El indulto.*
> *3.- La amnistía impropia.*
> ***4.- La prescripción.***
> *5.- La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias.*
> *6.- La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley*
> *7.- Las demás que señale la ley"*[3] (Resaltado fuera del texto original)

Sin necesidad de mayor análisis, se concluye de la norma citada que la prescripción de la sanción penal conlleva a la extinción de la misma, así las cosas, resulta pertinente entonces verificar bajo qué circunstancias puede entenderse como prescrita la sanción penal.

A su turno el artículo 89 del mismo estatuto estipula que la pena privativa de la libertad prescribe en el término fijado en la sentencia o también en el que falte por ejecutar con un mínimo de 5 años y para los demás casos prescribe en 5 años.

> ***"Art. 89.- TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL.*** *La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico,* ***prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia.***
>
> *La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (05) años."*[4] (Resaltado fuera del texto original)

3 Artículo 88 Código Penal, Ley 599 de 2000.
4 Artículo 89 Código Penal, Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 99 de la Ley 1709 de 2014.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Conforme se ha señalado en diferentes pronunciamientos por parte de los Altos Tribunales la prescripción de la pena se consolida, no solamente por el transcurso del tiempo, sino en el mismo tiempo el abandono por parte del titular del derecho que deja de ejercerlo, motivo que lleva a la extinción.

Sin embargo, dentro del ordenamiento se consagra la posibilidad de interrumpir el término prescriptivo si se desarrolla el acto que reivindique el mismo.

En un pronunciamiento la H. Corte Constitucional señaló lo siguiente:

> *"La prescripción es la cesación de la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el periodo de tiempo fijado por la ley, opera tanto para la acción como para la pena. En la prescripción de la pena el Estado renuncia a su potestad represiva por el transcurso del tiempo, anulando de esta manera el interés de hacer efectiva una condena o sanción legalmente impuesta".*[5]

Según lo expuesto en lo que tiene que ver con la prescripción de la pena se manejan bajo la esencia de que el condenado se encuentre gozando de la libertad, pero existen varias posibilidades por las cuales puede interrumpir dicho goce, entre ellas las consagradas en el artículo 65 del C.P.

Efectivamente, estas situaciones extraordinarias en las que el plazo de prescripción comienza a correr en otro momento, se dan como por ejemplo en la revocatoria de la ejecución condicional, de la libertad condicional, cuando infringe la ley en dicho periodo o no cancela los perjuicios o simplemente no cancela la caución impuesta para el disfrute del beneficio.

Estos otros momentos en que se interrumpe la pena son los que llevan a que se haga una nueva evaluación con respecto a la regla inicial y que forman parte de la prescripción de la sanción penal.

Existen varios eventos en que se pueden dar esas prescripciones y que son interrumpidas durante el periodo otorgado.

1. Si al condenado se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mismo en forma renuente no cancela la caución impuesta ni firma la diligencia de compromiso, significa que no está de acuerdo con la oportunidad que le está brindando el Estado con el fin de disfrutar de esa "libertad". Si ello ocurre y el infractor -90 días después de ejecutoria de la sentencia- no comparece, dará pie a que se le revoque el subrogado y a partir de allí, de la ejecutoria de la sentencia, empieza el término de prescripción de la sanción privativa fijado en el fallo sin ser menor de cinco años.

2. Si al condenado se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mismo acepta dicha prebenda cancelando la caución impuesta y firmando el acta de compromiso, significa que está obligado a cumplir con lo señalado en el artículo 65 del C.P.; sin embargo para el presente caso, como su nombre lo indica, se "suspende" la ejecución de la pena y en consecuencia, el término prescriptivo de la misma, empezará una vez se termine el periodo de prueba impuesto.

3. Si el beneficiado cumple, dentro del periodo de prueba, con las obligaciones impuestas en el artículo 65 del C.P., el Estado procederá a extinguir la pena conforme lo señala la ley.

4. Si el condenado está purgando pena impuesta y se le concede libertad condicional, una vez cancelada la caución y firmada el acta de compromiso, empezará el término

[5] Sentencia C-997 de octubre 12 de 2004. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO

prescriptivo-del tiempo que falte por ejecutar sin ser menor de cinco años-finalizado el periodo de prueba.

5. Si el condenado no cumple alguno de los requisitos consagrados en el artículo 65 del C.P., sobre todo el de conducta o la reparación de los daños, el Estado se verá en la obligación de revocar el subrogado otorgado en pos de proteger los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

6. Y por último si el fallador una vez dictado el fallo no le concede mecanismo sustitutivo alguno y ordena se libren las capturas en su contra y con el transcurrir del tiempo no se logra por parte de las autoridades su retención o el infractor no se somete.

Sumado a lo anterior, el artículo 90 consagra que el término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma:

> ***"ARTICULO 90. INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.*** *El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma."*

Para el presente caso**,** el Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá (Cundinamarca) en sentencia del 3 de octubre de 2013 profirió sentencia, contra el señor **DEIMER RAMIREZ SANCHEZ.**

Ahora bien, atendiendo lo señalado en la norma, esto es, que *la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años* y en el presente caso la sentencia condenatoria cobro ejecutoria el **28 de octubre de 2013,** por lo que observamos que al día de hoy ha transcurrido un lapso superior a los 9 años y 6 meses.

Sobre la prescripción señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"Igualmente, se tiene que el término prescriptivo de la sanción penal, respecto de los sustitutos penales, se cuenta desde el momento en que se incumplió alguna de las obligaciones impuestas para la concesión del mismo, siempre que hubiese sido determinado por la autoridad judicial, o en su defecto, ante la imposibilidad de precisar la fecha del hecho incumplido, debe tomarse como parámetro de contabilización el día de finalización del periodo de prueba.[6]"

Por lo tanto, este Juzgado encuentra que la sanción penal existente en contra del mencionado, actualmente se encuentra prescrita.

Así las cosas, para este Despacho no existe duda alguna de que la pena impuesta al sentenciado está vencida y bajo estas condiciones es procedente **declarar la extinción de la sanción penal** por la causal de **prescripción**, porque de conformidad con el artículo 89 del Código Penal la misma no puede proseguirse, pues la prescripción es una causal para su fenecimiento.

---

[6] CSJ T RAD 109339 (25-02-20) M.P. Dr **JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

Por la Secretaría del Juzgado **PROCÉDASE a cancelar las órdenes de captura** impartidas contra **DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 1.007.258.750 de Cali Valle en razón de este proceso.

Del mismo modo se ORDENA por la Secretaría del Juzgado **una vez** ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 y 482 de la Ley 906 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado.

4.3 REHABILITACIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS

Este juzgado es competente para decidir de oficio sobre la rehabilitación de las penas accesorias conforme lo señalan los numerales de los artículos 92 (Ley 599 de 2000) 38-8 y 480 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al corresponder los juzgados de los Circuitos penitenciarios de Facatativá – Cundinamarca conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[7].

Atendiendo los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último, dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *"la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas"*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *"el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía".*

Agrega que *"Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.".*

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

---

[7] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[7].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

*"**ARTICULO 92. LA REHABILITACION.** La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:*

*1. **Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho.** Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.*

2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.

En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.

Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política." ***(Resalta fuera de texto)***

Aterrizando al caso objeto de estudio, como se dijo en líneas anteriores el Despacho debe pronunciarse sobre la rehabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas, que se le impuso al señor **DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ** en el fallo reseñado, encontramos que desde el 28 de octubre de 2013, fecha en la que quedó debidamente ejecutoriada la decisión condenatoria, comenzó a correr el término respecto a la inhabilitación de las penas accesorias, dicho término continuó durante el lapso impuesto **(**9 años y 6 meses)**,** hasta el pasado 28 de abril de 2023**,** fecha en la cual habría transcurrido el término previsto en la sentencia y en aplicación del numeral 1º de la norma en cita, la recuperación de estos derechos, tendrán que ser restablecidos.

Por lo tanto, este funcionario **RESTABLECERÁ** de inmediato todos los derechos jurídicos que en su momento fueron inhibidos por ello, conforme lo expresado en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

Por último, dado que la ley exige que cuando se haga pronunciamiento sobre la extinción de la sanción penal se debe hacer referencia a la caución prendaria, en el presente caso en particular, el señor condenado no debió prestar caución prendaria alguna.

En firme esta decisión y cumplido lo ordenado, remítase el expediente al Centro de Servicios de Juzgados Penales de Facatativá, Cundinamarca, para su archivo definitivo.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la extinción por prescripción.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[8], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la

[8] Ibídem.

tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[9]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[10]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado. En la actualidad nos ubicaron nuevamente en la Sede Judicial.

[9] CSJ T **102248**
[10] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá - Cundinamarca,

RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÒN PENAL POR PRESCRIPCIÒN a favor **DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 1.007.258.750 de Cali Valle conforme lo consignado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECRETAR la REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS y el derecho al porte y tenencia de armas impuesta en el fallo reseñado, a favor del sentenciado **DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.007.258.750 de Cali Valle**, conforme lo consignado en la parte motiva de este proveído, en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

TERCERO. ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 y 482 de la Ley 906 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado.

CUARTO. Se ORDENA por la Secretaría del Juzgado PROCEDA a CANCELAR las órdenes de captura a nombre de **DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.007.258.750 de Cali Valle**.

QUINTO. En firme esta decisión, remítase el expediente al Centro de Servicios de Juzgados Penales de FACATATIVÁ, Cundinamarca, para su archivo definitivo.

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Facatativá, 6 de marzo de 2024
Oficio No. 511

Doctor:
DILMER PAUL SIERRA GUIZA
Calle 9 # 10-31 barrio El Altico
Neiva – Huila
Email: eldoctorabogados2@outlook.com
Telefono: 3138309758

Número Interno:	**2013-3887**
CUI:	**252696610800420138008 8**
Sentenciado:	**DEIMER RAMIREZ SANCHEZ**
Delito:	**Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego**
Decisión:	**EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS Y PARA EL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS.**

Cordial saludo.

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le comunico que este Despacho Judicial se pronunció favorablemente respecto a solicitud de EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS, **Y PARA EL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS** dentro de las diligencias de la referencia donde usted actúa como defensor de confianza del condenado.

En consecuencia, mediante esta comunicación se realiza la notificación del auto interlocutorio, proferido en la fecha.

Cordialmente,

DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

NNP

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 6 de marzo de 2024
Oficio No. 512

CANCELACIÓN ORDEN DE CAPTURA

Señores Jefe Grupo de Capturas
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - SIJIN
Avenida El Dorado No. 75 - 25
Bogotá D.C.

Número Interno:	**2013-3887**
CUI:	**25269661080042013800 88**
Sentenciado:	**DEIMER RAMIREZ SANCHEZ**
Delito:	**Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego**
Decisión:	**EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS Y PARA EL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS.**

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le solicito se sirva disponer lo pertinente y **CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA Nos 082 del 18 de noviembre de 2013, Nos 7260-7261-7262 del 6 de noviembre de 2014, Nos 4810-4811 del 25 de octubre de 2019 y Nos 1392, 1393-1394-1395 del 24 de junio de 2022** ordenada por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Facatativá en sentencia del 3 de octubre de 2013 y por este Estrado. dentro de la causa **25269661080042013800 88** adelantada contra condenado **DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ con C.C. No 1.007.258.750 de Cali Valle.**

Del proceso en cuestión conocieron las siguientes autoridades bajo el RADICADO No. **25269661080042013800 88: FISCALIA LOCAL, JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTÍAS, JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO, JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS EN DDESCONGESTIÓN Y ESTE ESTRADO 2013-3887.**

Se adjunta lo enunciado.

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

NNP

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 6 de marzo de 2024
Oficio No. 513

CANCELACIÓN ORDEN DE CAPTURA

Señor:
IT JORGE ALEXANDER MONTERO DUQUE
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - SIJIN
Carrera 58 No. 9 – 43 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Número Interno:	**2013-3887**
CUI:	**25269661080042013800 88**
Sentenciado:	**DEIMER RAMIREZ SANCHEZ**
Delito:	**Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego**
Decisión:	**EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS Y PARA EL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS.**

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le solicito se sirva disponer lo pertinente y CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA Nos 082 del 18 de noviembre de 2013, Nos 7260-7261-7262 del 6 de noviembre de 2014, Nos 4810-4811 del 25 de octubre de 2019 y Nos 1392, 1393-1394-1395 del 24 de junio de 2022 ordenada por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Facatativá en sentencia del 3 de octubre de 2013 y por este Estrado, dentro de la causa **25269661080042013800 88 adelantada contra condenado DEIMER RAMÍREZ SÁNCHEZ con C.C. No 1.007.258.750 de Cali Valle**.

Del proceso en cuestión conocieron las siguientes autoridades bajo el RADICADO No. 25269661080042013800 88: FISCALIA LOCAL, JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTÍAS, JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO, JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS EN DDESCONGESTIÓN Y ESTE ESTRADO 2013-3887.

Se adjunta lo enunciado.

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

NNP

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo siete (07) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0086

CUI	**73001600045020130291 8**
Interno:	**2023-0270**
Sentenciado:	**LUIS EDUARDO SOTO PINTO**
Delito:	**ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 5 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **LUIS EDUARDO SOTO PINTO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

---

cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2 .DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014, a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

A su vez el numeral 4 del artículo 79 (Ley 600 de 2000) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82, Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	**Periodo Certificado**	**Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario**	**Horas de trabajo a reconocer**	**Calificación de la Labor**	**Calificación de Conducta**
19057925	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO-Regional Ejercito	617	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**617**		

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **617** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **38.56 días**, es decir, **UN (1) MES Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y SEIS (8.56) DIAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **LUIS EDUARDO SOTO PINTO**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER a **LUIS EDUARDO SOTO PINTO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.531.928, redención de pena por trabajo de **UN (1) MES Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y SEIS (8.56) DIAS**, por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo siete (07) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0087

CUI	**11001600002320188024 7**
Interno:	**2023-0247**
Sentenciado:	**FABIAN SALAZAR HERRERA**
Delito:	**ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el 5 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **FABIAN SALAZAR HERRRERA** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014, a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 79 (Ley 600 de 2000) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19057888	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO-Regional Ejercito	547	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**547**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **547** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **34.18 días**, es decir, **UN (1) MES Y CUATRO PUNTO DIECIOCHO (4.18) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **FABIAN SALAZAR HERRERA**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER a **FABIAN SALAZAR HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.993.837, redención de pena por trabajo de **UN (1) MES Y CUATRO PUNTO DIECIOCHO (4.18) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 8 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, informando que se recibe a través del correo institucional el día 28 de febrero de 2024 la documentación emitida por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P.

Luego en fecha 1 de marzo de 2023, la Dirección de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, la comunica a través del correo electrónico*: "por medio de la presente me permito adjuntar la corrección de los cómputos de los PPL WILMER SANTANA GONZALEZ Y CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA, ya que por error salieron computados de manera errónea y no concuerdan con los radicados anteriormente agradezco su valiosa colaboración en tener en cuenta las correcciones realizadas para poder tramite a la solicitud elevada por los privados de la libertad ".* Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo ocho (08) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0088

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600660202200321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**WILMER SANTANA GONZALEZ**
Identificación:	**C.C. No. 1.076.624.249**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249 quien se encuentra purgando pena en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA con la documentación emitida por el mencionado penal para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2. ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA**

peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Radicado CUI 25430600000202200010 / NI 2024-0002

Por hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2023, **CONDENÓ** a **WILMER SANTANA GONZALEZ** (y otros[1]) a la pena principal de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE DOS (2) SMLMV**, como autor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO** (art. 376 inciso 2 del C.P.), y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de pena principal de prisión. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P., ordenando librar la respectiva orden de detención ante el INPEC, para que se prosiga en privación efectiva de la libertad en cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 26 de septiembre de 2023.

WILMER SANTANA GONZALEZ descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 31 de mayo de 2022** (el Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca, en audiencias concentradas del 1 de junio de 2022, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario – art. 307, literal A, numeral 1º del C.P.P. y libró la boleta de detención en establecimiento carcelario No. 34)[2]

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias mediante auto de sustanciación No. 0006 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

Radicado CUI 25430600660202200321 / NI 2024-0003

Por hechos ocurridos el **30 de marzo de 2022** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, **CONDENÓ** a **WILMER SANTANA GONZALEZ** (y otros[3]) a la pena principal de **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISION** como coautor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** (art. 376 inciso 2 del C.P.) y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo término de la pena principal. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P. ordenando librar orden de detención ante el INPEC para que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra en privación efectiva de la libertad, se deje a disposición para el cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 23 de noviembre de 2023

Cabe mencionar que el Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca en audiencia de garantías del 31 de marzo de 2022, otorgó la libertad inmediata al infractor **WILMER**

[1] Carlos Alberto González Ardila y Emelina Ardila González
[2] Carpeta 01 – carpeta 001 – carpeta 002 – archivo 006 y 011 – expediente digitalizado.
[3] Carlos Alberto González Ardila y Emelina Ardila González

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SANTANA GONZALEZ en vista que la FGN retiró la solicitud de medida de aseguramiento y libró la Boleta de libertad No. 39[4]

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0007 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

A través del auto interlocutorio No. 0002 del 9 de enero de 2024, reconoció al interno redención de pena de 4 meses y 23.5 días, resolvió **acumular jurídicamente las penas impuestas dentro del proceso con CUI 25430600660202200321 (NI 2024-0003)** acumulado a la pena impuesta en la sentencia dentro del proceso con **CUI 25430600000202200010 (NI 2024-0002)** al interno por los delitos de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, asignando la pena principal de **CINCUENTA Y DOS (52) MESES DE PRISIÓN** y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública por el mismo término de la pena principal acumulada, fijó como pena de multa el equivalente a TRES (3) SMLMV, en cuanto a los mecanismos sustitutivos y del subrogado, éstos no se modifican, y con los procesos que dieron lugar a la acumulación jurídica de penas se formó uno solo prevaleciendo el radicado **CUI 25430600000202200010 (NI 2024-0002)**, por ser el del proceso con la pena más alta al que se acumuló la condena menor.

En la presente oportunidad ingresan al despacho las diligencias con la documentación emitida por la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[5] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

[4] Carpeta 01 – archivo 010 y 013 – expediente digitalizado

[5] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[6]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

[6] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, 4 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en el CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[7].

Según los hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021 y 30 de marzo de 2022**, el infractor fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (reformada por la Ley 1142 de 2007, 1453, 1474 de 2011) y 906 de 2004, con las modificaciones de la Ley 1709 de 2014.

4.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[7] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[7].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas, **conforme a los documentos corregidos los cuales fueron allegados por la Dirección de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca el día 1 de marzo de 2024.**

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
Sin número	Enero – Febrero de 2024	Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca	400	Satisfactorio	Buena
TOTAL			**400**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **400 horas** por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **VEINTICINCO (25) DÍAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

5. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049, quien emite la constancia por el cual indica que recibirá en el referenciado domicilio al condenado **WILMER SANTANA GONZALEZ** y se hará cargo económicamente, social y jurídicamente y quien estará atento a los llamados de las diferentes entidades que hayan durante su proceso.

Adjunta: Resolución No. 000004 del 27 de febrero de 2024 emitida por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca por la cual expiden el concepto favorable al interno, acta de compromiso suscrita por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, entrevista realizada por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca al señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, Certificado de Residencia emitido por la JAC Urbanización Pradera I, por el cual certifican al propietario del inmueble señor Roque González Ardila, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, constancias suscritas por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez y Josué David Garzón Chávez.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

6. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TIEMPO - CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA

WILMER SANTANA GONZALEZ ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 31 de mayo de 2022** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **21 meses y 17 días**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 18.5 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0002 del 9 de enero de 2024, reconoce 4 meses y 23.5 días
- en el presente auto interlocutorio No. 0088 de la fecha, reconoce 25 días

De la suma de las anteriores cifras, da como resultado que el interno ha purgado un total de **27 meses y 5.5 días** de la pena de principal impuesta.

Al analizar la norma sobre el primer requisito, factor objetivo, se tiene que el condenado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta. En efecto al señor **WILMER SANTANA GONZALEZ** le fue acumulada a la pena principal de prisión de **52 meses** por lo que la mitad sería **26 meses**.

Por consiguiente, el condenado a hoy por el tiempo físico, más las redenciones reconocidas lleva purgando **27 meses y 5.5 días, por lo cual cumple con el factor objetivo exigido en la norma.**

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[8]

7. DEL ARRAIGO FAMILIAR

Por lo anterior y previo a resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, se tiene que la dirección aportada es la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049, pues manifiesta que de ser concedido el mecanismo sustitutivo será el lugar donde cumpliría la condena.

En consecuencia, resulta necesario verificar que la dirección suministrada como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, motivo por el cual se ordena al Asistente Social de este Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

8. OTROS ASUNTOS.

8.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

[8] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046) (23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[9], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[10]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento*

---

[9] Ibídem.
[10] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[11]

8.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

9. DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, redención de pena por trabajo en equivalencia a **VEINTICINCO (25) DIAS**, por las actividades realizadas durante los meses de enero – febrero de 2024, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO: Previo al resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38 G del C.P., invocada por el sentenciado **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada como arraigo familiar - Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049-, cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordena al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

[11] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

TERCERO: Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

CUARTO. - COMUNICAR la presente decisión al condenado y al señor director y asesor jurídico de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca y **REMÍTIR** al mencionado penal copia del presente auto, a fin de que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 8 de marzo de 2024
Oficio No. 0514

Señor
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL MUNICIPAL
Funza Cundinamarca
carcelmunicipal@funza-cundinamarca.gov.co

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600660202200321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**WILMER SANTANA GONZALEZ**
Identificación:	**C.C. No. 1.076.624.249**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 8 de marzo de 2024
Oficio No. 0515

Señor:
WILMER SANTANA GONZALEZ
Interno - Cárcel Municipal
Funza Cundinamarca
carcelmunicipal@funza-cundinamarca.gov.co

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600660202200321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**WILMER SANTANA GONZALEZ**
Identificación:	**C.C. No. 1.076.624.249**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 8 de marzo de 2024
Oficio No. 0516

Doctor:
NÉSTOR ELIÉCER MORENO RANGEL
ASISTENTE SOCIAL
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
Facatativá Cundinamarca
nmorenora@cendoj.ramajudicial.gov.co

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600660202200321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**WILMER SANTANA GONZALEZ**
Identificación:	**C.C. No. 1.076.624.249**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

En la fecha este juzgado una vez radicada la solicitud de prisión domiciliaria invocada por el sentenciado **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249 y previo a su estudio se tiene que la dirección aportada es la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049-, conforme a la documentación allegada por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca.

Por lo anterior, en auto de la fecha se ordenó por su intermedio y por el medio más expedito DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en dicha dirección, ya que es necesario verificar el lugar como arraigo familiar y que éste cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena.

Habida cuenta de la imposibilidad de realizar visitas domiciliarias, notificaciones u otras diligencias de carácter presencial, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y teniendo en cuenta que fue aportado el abonado telefónico se solicita establecer comunicación con el grupo familiar del señor condenado, con el fin del cumplimiento del informe ordenado.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 8 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, informando que se recibe a través del correo institucional el día 28 de febrero de 2024 la documentación emitida por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P.

Luego en fecha 1 de marzo de 2023, la Dirección de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, la comunica a través del correo electrónico*: "por medio de la presente me permito adjuntar la corrección de los cómputos de los PPL WILMER SANTANA GONZALEZ Y CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA, ya que por error salieron computados de manera errónea y no concuerdan con los radicados anteriormente agradezco su valiosa colaboración en tener en cuenta las correcciones realizadas para poder tramite a la solicitud elevada por los privados de la libertad ".* Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo ocho (08) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0089

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600066020220321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**
Identificación:	**C.C. No. 80.409.485**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, quien se encuentra purgando pena en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA con la documentación emitida por el mencionado penal para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2. ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Radicado CUI 25430600000202200010 / NI 2024-0002

Por hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2023, **CONDENÓ** a **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** (y otros[1]) a la pena principal de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE DOS (2) SMLMV**, como autor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO** (art. 376 inciso 2 del C.P.) y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de pena principal de prisión. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P., ordenando librar la respectiva orden de detención ante el INPEC, para que se prosiga en privación efectiva de la libertad en cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 26 de septiembre de 2023.

CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 22 de mayo de 2022** (el Juzgado Penal Municipal de Funza Cundinamarca a través de audiencias concentradas del 23 de mayo de 2022, impuso medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario y libró boleta de encarcelamiento No. 018)[2]

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias mediante auto de sustanciación No. 0006 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

Radicado CUI 25430600066020220032 1 / NI 2024-0003

Por hechos ocurridos el **30 de marzo de 2022** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, **CONDENÓ** a **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** (y otros[3]) a la pena principal de **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISION** como autor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** (art. 376 inciso 2 del C.P.) y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo término de la pena principal. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P. ordenando librar orden de detención ante el INPEC para que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra en privación efectiva de la libertad, se deje a disposición para el cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 23 de noviembre de 2023

Cabe mencionar que el Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca en audiencia de garantías del 31 de marzo de 2022, otorgó la libertad inmediata al infractor **CARLOS**

[1] Wilmer Santana González y Emelina Ardila González
[2] Carpeta 01 – carpeta 001 – carpeta 001 – carpeta 002 – archivo 004 y 009 – expediente digitalizado.
[3] Wilmer Santana González y Emelina Ardila González

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

ALBERTO GONZALEZ ARDILA en vista que la FGN retiró la solicitud de medida de aseguramiento y libró la Boleta de libertad No. 38[4]

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0007 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

A través del auto interlocutorio No. 0003 del 9 de enero de 2024, reconoció al interno redención de pena de 4 meses y 23.5 días, resolvió **acumular jurídicamente las penas impuestas dentro del proceso con CUI 25430600066020220321 (NI 2024-0003)** acumulado a la pena impuesta en la sentencia dentro del proceso con **CUI 25430600000202200010 (NI 2024-0002)** al interno por los delitos de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, asignando la pena principal de **CINCUENTA Y DOS (52) MESES DE PRISIÓN** y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública por el mismo término de la pena principal acumulada, fijó como pena de multa el equivalente a TRES (3) SMLMV, en cuanto a los mecanismos sustitutivos y del subrogado, éstos no se modifican, y con los procesos que dieron lugar a la acumulación jurídica de penas se formó uno solo prevaleciendo el radicado **CUI 25430600000202200010 (NI 2024-0002)**, por ser el del proceso con la pena más alta al que se acumuló la condena menor.

En la presente oportunidad ingresan al despacho las diligencias con la documentación emitida por la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[5] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

[4] Carpeta 01 – archivo 010 y 012 – expediente digitalizado

[5] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[6].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

[6] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, 4 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en el CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[7].

Según los hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021 y 30 de marzo de 2022**, el infractor fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (reformada por la Ley 1142 de 2007, 1453, 1474 de 2011) y 906 de 2004, con las modificaciones de la Ley 1709 de 2014.

4.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…) **ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN**. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.** El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[7] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[7].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas, **conforme a los documentos corregidos los cuales fueron allegados por la Dirección de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca el día 1 de marzo de 2024.**

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
Sin número	Enero – Febrero de 2024	Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca	400	Satisfactorio	Buena
TOTAL			**400**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **400 horas** por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **VEINTICINCO (25) DÍAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

5. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049, quien emite la constancia por el cual indica que recibirá en el referenciado domicilio al condenado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** y se hará cargo económicamente, social y jurídicamente y quien estará atento a los llamados de las diferentes entidades que hayan durante su proceso.

Adjunta: Resolución No. 000005 del 27 de febrero de 2024 emitida por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca por la cual expiden el concepto favorable al interno, acta de compromiso suscrita por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, entrevista realizada por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca al señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, certificado de Residencia emitido por la JAC Urbanización Pradera I, por el cual certifican al propietario del inmueble señor Roque González Ardila, constancias suscritas por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez y Edison David Salazar Zea.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

6. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TIEMPO - CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA

CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 31 de mayo de 2022** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **21 meses y 17 días**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 18.5 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0002 del 9 de enero de 2024, reconoce 4 meses y 23.5 días
- en el presente auto interlocutorio No. 0089 de la fecha, reconoce 25 días

De la suma de las anteriores cifras, da como resultado que el interno ha purgado un total de **27 meses y 5.5 días** de la pena de principal impuesta.

Al analizar la norma sobre el primer requisito, factor objetivo, se tiene que el condenado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta. En efecto al señor **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** le fue acumulada a la pena principal de prisión de **52 meses** por lo que la mitad sería **26 meses**.

Por consiguiente, el condenado a hoy por el tiempo físico, más las redenciones reconocidas lleva purgando **27 meses y 5.5 días, por lo cual cumple con el factor objetivo exigido en la norma.**

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[8]

7. DEL ARRAIGO FAMILIAR

Por lo anterior y previo a resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, se tiene que la dirección aportada es la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049, pues manifiesta que de ser concedido el mecanismo sustitutivo será el lugar donde cumpliría la condena.

En consecuencia, resulta necesario verificar que la dirección suministrada como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, motivo por el cual se ordena al Asistente Social de este Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

8. OTROS ASUNTOS.

8.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con

[8] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046) (23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[9], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[10]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las*

---

[9] Ibídem.
[10] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[11]

8.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

9. DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, redención de pena por trabajo en equivalencia a **VEINTICINCO (25) DIAS**, por las actividades realizadas durante los meses de enero – febrero de 2024, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO: Previo al resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38 G del C.P., invocada por el sentenciado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada como arraigo familiar - Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049-, cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordena al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

[11] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

TERCERO: Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

CUARTO. - COMUNICAR la presente decisión al condenado y al señor director y asesor jurídico de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca y **REMÍTIR** al mencionado penal copia del presente auto, a fin de que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 8 de marzo de 2024
Oficio No. 0517

Señor
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL MUNICIPAL
Funza Cundinamarca
carcelmunicipal@funza-cundinamarca.gov.co

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600660202200321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**
Identificación:	**C.C. No. 80.409.485**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 8 de marzo de 2024
Oficio No. 0518

Señor:
CARLOS ALBERTO GONZALEZ
Interno - Cárcel Municipal
Funza Cundinamarca
carcelmunicipal@funza-cundinamarca.gov.co

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600066020220321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**
Identificación:	**C.C. No. 80.409.485**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 8 de marzo de 2024
Oficio No. 0519

Doctor:
NÉSTOR ELIÉCER MORENO RANGEL
ASISTENTE SOCIAL
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
Facatativá Cundinamarca
nmorenora@cendoj.ramajudicial.gov.co

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 25430600066020220321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**
Identificación:	**C.C. No. 80.409.485**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

En la fecha este juzgado una vez radicada la solicitud de prisión domiciliaria invocada por el sentenciado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485 y previo a su estudio se tiene que la dirección aportada es la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049-, conforme a la documentación allegada por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca.

Por lo anterior, en auto de la fecha se ordenó por su intermedio y por el medio más expedito DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en dicha dirección, ya que es necesario verificar el lugar como arraigo familiar y que éste cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena.

Habida cuenta de la imposibilidad de realizar visitas domiciliarias, notificaciones u otras diligencias de carácter presencial, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y teniendo en cuenta que fue aportado el abonado telefónico se solicita establecer comunicación con el grupo familiar del señor condenado, con el fin del cumplimiento del informe ordenado.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo ocho (08) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0090

CUI	**73168600045120088020 5**
Interno:	**2023-0292**
Sentenciado:	**LEONARDO HERRERA NAVARRETE**
Delito:	**SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO Y EN CONCURSO HETEROGENEO CON SECUESTRO SIMPLE AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y LESIONES PERSONALES DOLOSAS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el 5 de marzo de 2024 y la orden de asignación en programas de TEE – recuperador ambiental, áreas comunes internas allegado el 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **LEONARDO HERRERA NAVARRETE** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

---

cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2 .DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014, a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 79 (Ley 600 de 2000) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO. *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19057844	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO – REGIONAL EJERCITO	601	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**601**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **601** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden **37.56 días**, es decir, **UN (1) MES Y SIETE PUNTO CINCUENTA Y SEIS (7.56) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **LEONARDO HERRERA NAVARRETE**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y

salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella

---

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER a **LEONARDO HERRERA NAVARRETE** identificado con C.C. No. 3.086.306, redención de pena por trabajo de **UN (1) MES Y SIETE PUNTO CINCUENTA Y SEIS (7.56) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SEGUNDO. – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo ocho (08) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0091

CUI:	**18001600129920160001O**
Número Interno:	**2019-0106**
Sentenciado:	**SEBASTIAN ALBERTO PRIETO MÉNDEZ**
Delito:	**ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO EN CONCURSO CON PORNOGRAFÍA CON MENORES DE 18 AÑOS AGRAVADO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el día 5 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor de **SEBASTIAN ALBERTO PRIETO MÉNDEZ** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2 .DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en*

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

> *los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, el certificado TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19057882	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO – Regional Ejercito	605	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**605**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **605** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **37.81 días** es decir **UN (1) MES Y SIETE PUNTO OCHENTA Y UN (7.81) DIAS,** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **SEBASTIÁN ALBERTO PRIETO MÉNDEZ**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en

estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

R E S U E L V E

PRIMERO - RECONOCER a **SEBASTIÁN ALBERTO PRIETO MÉNDEZ** identificado con C.C. No. 1.026.254.996, redención de pena por trabajo en equivalencia a **UN (1) MES Y SIETE PUNTO OCHENTA Y UN (7.81) DIAS**, por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo ocho (08) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0092

CUI	**11001600001520160041O**
Interno:	**2023-0276**
Sentenciado:	**JOSE RICARDO OBREGÓN CAMARGO**
Delito:	**ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 5 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **JOSE RICARDO OBREGON CAMARGO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2 .DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014, a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 79 (Ley 600 de 2000) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19057857	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO-Regional Ejercito	600	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**600**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **600** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **37.5 días**, es decir, **UN (1) MES Y SIETE PUNTO CINCO (7.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **JOSE RICARDO OBREGON CAMARGO**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER a **JOSE RICARDO OBREGON CAMARGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 74.375.017, redención de pena por trabajo de **UN (1) MES Y SIETE PUNTO CINCO (7.5) DIAS**, por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 11 de 2024: Al despacho el proceso contra **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586, informando que respecto a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0717 del 28 de julio de 2022 (despacho comisorio No. 0037 del 28 de septiembre de 2022), se recibe procedente del consultorio jurídico del EPC PICOTA BOGOTA D.C., la notificación del condenado - **notificado el día 30 de septiembre de 2022**, y conforme a lo establecido en el art. 477 del C.P.P., **el término de traslado venció el día 5 de octubre de 2022**

Vencido el término de traslado el interno en mención, **NO PRESENTO ESCRITO DE DESCARGOS**.

Aunado a lo anterior, se recibió procedente del CSA – homólogo 25 de Bogotá D.C., el oficio No. 5233 del 12 de octubre de 2022, por el cual se allegó la copia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, el 18 de noviembre de 2020, radicado 110016000000202002088, y también informa que el infractor se encuentra actualmente privado de la libertad en el COMEB Bogotá D.C. La Picota, cumpliendo la pena de 61 meses 1 día de prisión impuesta por dicho radicado, al ser hallado responsable de los delitos Uso de Menores de edad para la comisión de Delitos en concurso heterogéneo con Concierto para Delinquir Agravado y Trafico, Fabricación o porte de estupefacientes, **privado de la libertad por esas diligencias desde el 26 de febrero de 2020.**

Realizada la consulta en el contenedor AZURE no se halló el expediente, motivo por el cual se solicitó a través de auto del 6 de marzo de 2024 al Coordinador Grupo Archivo Central DESAJ – Bogotá D.C., la digitalización del expediente radicado CUI 25430600066020180131 5, sin que a la fecha se haya recibido respuesta.

Sin embargo, la oficial mayor de este Juzgado el día 6 de marzo de 2024 siendo las 11:20 horas, estableció comunicación con la Profesional Universitario del Centro de Servicios Judiciales de Facatativá y solicitó se allegara el expediente radicado CUI 25430600066020180131 5 que reposa en ese despacho, recibiéndose ese mismo día el link de acceso al proceso que se conforma de 7 archivos pdf., cuyo contenido se insertó en el OneDrive del correo institucional para la respectiva consulta.

Ahora bien, ***en aras de definir la situación jurídica del prenombrado, SE RECONSTRUYE EL EXPEDIENTE*** con base en las actuaciones y los archivos que reposan en la base de datos y el correo institucional, y se procede a emitir pronunciamiento acerca de la posible revocatoria de la prisión domiciliaria. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo once (11) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0093

CUI	**25430600066020180131 5**
NI	**2019-0694**
Sentenciado:	**MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ**
Identificación:	**C.C. No. 1.070.954.586**
Delito:	**FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES**
Decisión:	**REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA (comisión otro delito)**

1.- MOTIVO DE LA PROVIDENCIA

Procede el despacho a pronunciarse sobre la posible revocatoria de la Prisión Domiciliaria, otorgada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca en sentencia del 16 de octubre de 2019 al condenado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C No. 1.070.954.586 quien se encontraba por las presentes diligencias en prisión domiciliaria en la Calle 3ª No. 2 – 15 Sur, barrio 7 de agosto en Cartagenita de Facatativá Cundinamarca, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, ***pero actualmente se encuentra recluido en COMEB LA PICOTA DE BOGOTA D.C., descontando pena por el proceso radicado CUI 110016000000202002088, delito USO DE MENORES DE EDAD PARA LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONCURSO HETEROGENEO CON LOS DELITOS DE CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, Y TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, privado de la libertad desde el 26 de febrero 2020, condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca mediante sentencia del 18 de noviembre de 2020 a la pena de 61 meses y 1 día de prisión.***

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2018 y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca con función de conocimiento, mediante sentencia del 16 de octubre de 2019, condeno a **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** a la pena principal de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISION** como cómplice

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal. No concedió la suspensión condicional de la pena, pero CONCEDIÓ la prisión domiciliaria – art. 38 y 38B del C.P. -. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 16 de octubre de 2019.

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ fue capturado el **día 7 de octubre de 2018**, el Juzgado 2º Penal Municipal de Facatativá Cundinamarca con función de control de garantías en audiencias concentradas de fecha **8 de octubre de 2018** dispuso la libertad inmediata del infractor en razón a que la FGN retiró la solicitud de medida de aseguramiento y libró la Boleta de Libertad.

El condenado suscribió la diligencia de compromiso el 28 de octubre de 2019 y fijó el domicilio en la Calle 3ª No. 2-15 Sur Barrio 7 de agosto de Cartagenita de Facatativá Cundinamarca. NO SE IMPUSO PAGO DE CAUCIÓN.

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ dentro del presente asunto purgó pena en prisión domiciliaria el día **30 de octubre de 2019** vigilado por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -.

Este Juzgado avocó el conocimiento del proceso a través de auto de sustanciación No. 2087 del 5 de noviembre de 2019, se solicitó al señor director y asesor jurídico del Establecimiento Carcelario de Bogotá D.C. – La Modelo -, copia de la cartilla biográfica del interno y la actualización del sistema sisipec en cuanto a la situación jurídica del condenado, toda vez que el aplicativo PPL-INPEC, registra estado de ingreso detención domiciliaria sindicado.

Verificada la aplicación PPL-INPEC, el condenado se encuentra recluido en el COMEB BOGOTA D.C. LA PICOTA, y realizada la consulta en la página web de la Rama Judicial se halló que el homólogo 25 de Bogotá ejerce vigilancia del proceso radicado CUI 110016000000202002088, delito concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el 18 de noviembre de 2020, a la pena de 5 años 1 mes y 1 día de prisión, capturado el 26 de febrero de 2020.

A través de auto de sustanciación No. 0717 del 28 de julio de 2022, esta agencia judicial dispuso correr el traslado del art. 477 del C.P.P., al condenado para que presentara las explicaciones y pruebas que justifiquen los motivos por los cuales salió sin autorización de su residencia y cometió otro delito, por lo que se comisionó a las directivas de COMEB BOGOTA D.C. LA PICOTA (despacho comisorio No. 0037 del 28 de septiembre de 2022), para la notificación del auto al condenado privado de la libertad en ese penal, aunado a ello, se solicitó al homólogo 25 de Bogotá D.C., la copia de la sentencia radicado CUI 110016000000202002088, para el estudio de la posible revocatoria de la prisión domiciliaria.

En efecto, se recibe procedente del consultorio jurídico del EPC PICOTA BOGOTA D.C., la notificación del condenado - **notificado el día 30 de septiembre de 2022**, y conforme a lo establecido en el art. 477 del C.P.P., **el término de traslado venció el día 5 de octubre de 2022**

Vencido el término de traslado el interno en mención, **NO PRESENTO ESCRITO DE DESCARGOS**.

También, se recibió procedente del CSA – homólogo 25 de Bogotá D.C., el oficio No. 5233 del 12 de octubre de 2022, por el cual se allegó la copia de la sentencia condenatoria

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, el 18 de noviembre de 2020, radicado 11001600000202002088, y también informa que el infractor se encuentra actualmente privado de la libertad en el COMEB Bogotá D.C. La Picota, cumpliendo la pena de 61 meses 1 día de prisión impuesta por dicho radicado, al ser hallado responsable de los delitos Uso de Menores de edad para la comisión de Delitos en concurso heterogéneo con Concierto para Delinquir Agravado y Trafico, Fabricación o porte de estupefacientes, **privado de la libertad por esas diligencias desde el 26 de febrero de 2020.**

Es decir, que el sentenciado purgó pena dentro del presente asunto en dos oportunidades: i) **del 7 al 8 de octubre de 2018** y; ii) **desde el 30 de octubre de 2019 hasta el 26 de febrero de 2020.**

Realizada la consulta en el contenedor AZURE no se halló el expediente, motivo por el cual se solicitó a través de auto del 6 de marzo de 2024 al Coordinador Grupo Archivo Central DESAJ – Bogotá D.C., la digitalización del expediente radicado CUI 25430600066020180131 5, sin que a la fecha se haya recibido respuesta.

Sin embargo, la oficial mayor de este Juzgado el día 6 de marzo de 2024 siendo las 11:20 horas, estableció comunicación con la Profesional Universitario del Centro de Servicios Judiciales de Facatativá y solicitó se allegara el expediente radicado CUI 25430600066020180131 5 que reposa en ese despacho, recibiéndose ese mismo día el link de acceso al proceso que se conforma de 7 archivos pdf., cuyo contenido se insertó en el OneDrive del correo institucional para la respectiva consulta.

En consecuencia y ***en aras de definir la situación jurídica del prenombrado, SE RECONSTRUYE EL EXPEDIENTE*** con base en las actuaciones y los archivos que reposan en la base de datos y el correo institucional, y se procede a emitir pronunciamiento acerca de la posible revocatoria de la prisión domiciliaria.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1. Competencia

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Este juzgado es competente para decidir sobre la revocatoria de la prisión domiciliaria del condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al haber fijado su domicilio para purgar pena en prisión domiciliaria en la Calle 3ª No. 2 – 15 Sur, barrio 7 de agosto en Cartagenita de Facatativá Cundinamarca, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

De acuerdo a los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2018, **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2. De la revocatoria

El mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria es un beneficio que consiste como detalla su nombre en que el infractor en lugar de purgar la pena en forma intramural pueda de la misma manera cumplir a lo que ha sido condenado domiciliariamente rodeado del núcleo familiar y sustrayéndolo del ambiente carcelario "condicionado" al cumplimiento de unas obligaciones, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su resocialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible pero condicionada a que el beneficiario cumpla con ciertas exigencias de las cuales depende su cumplimiento.

Visto lo anterior y observando en principio que **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** **NO** emitió pronunciamiento alguno, ni dentro del término legal concedido, es decir, **NO** dio las explicaciones necesarias, conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0717 del 28 de julio de 2022, el cual fue notificado al condenado el día 30 de septiembre de 2022, según constancia de notificación allegada por el consultorio Jurídico del COMEB BOGOTA D.C. LA PICOTA, por lo tanto, procede el juzgado a examinar.

Al sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ**, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de octubre de 2019, le concedió la prisión domiciliaria conforme a lo previsto en el artículo 38B del C.P.

> *"(..)* ***ARTÍCULO 38. LA PRISIÓN DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN****. <Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine.*
>
> *El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia.*
>
> ***PARÁGRAFO****. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos*

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión.

Sobre los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B señala:

> ***ARTÍCULO 38B. REQUISITOS PARA CONCEDER LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
> *(…)*
> *3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.*
> *En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.*
> *4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:*
> *a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;*
> *b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad."*

En efecto al reunir los presupuestos señalados en la norma concedió el infractor este mecanismo sustitutivo, el cual, no es para que goce de la libertad y esté programando citas, visitas, salidas o estar infringiendo la ley, sino que la prisión domiciliaria como mecanismo alternativo se debe regir bajo las mismas normas y políticas de los Reglamentos internos del INPEC para la intramural.

De conformidad con lo anterior, el Código de Procedimiento Penal –*Ley 906 de 2004*- establece que tal revocatoria debe tener lugar previo traslado al sentenciado en donde en aras de garantizar su derecho al debido proceso, le son solicitadas las explicaciones correspondientes.

Al respecto expresa la norma:

> *"**ARTÍCULO 477. NEGACIÓN O REVOCATORIA DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.** De existir motivos para negar o revocar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad los pondrá en conocimiento del condenado para dentro del término de tres (3) días presente las explicaciones pertinentes.*
>
> *La decisión se adoptará por auto motivado en los diez (10) días siguientes."*

La Corte Constitucional se refirió sobre el tópico mediante la Sentencia C – 006 de 2003, Magistrado ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en los siguientes términos:

> *"En ejercicio de la potestad de configuración y de diseño de la política criminal, el legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una persona responsable de haber cometido una conducta punible. Para ello, puede definir cuáles conductas son socialmente reprochables y cuáles han dejado de serlo, puede determinar cuándo procede la privación de la libertad y cuándo es necesario*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *imponer sanciones menos gravosas, o también establecer beneficios o subrogados penales cuando a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio dan lugar a la pérdida temporal de la libertad personal, existen circunstancias que señalan que es innecesaria la reclusión en un establecimiento carcelario. Es en ejercicio de dicha potestad que el legislador estableció la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esta figura constituye un beneficio que otorga la ley penal a quienes habiendo sido condenados a una pena de prisión no superior a los tres años, cumplan con las condiciones establecidas en ella. Este beneficio no opera de manera automática, pues el juez debe evaluar los antecedentes del condenado y la gravedad de la conducta para determinar si es o no necesaria la ejecución de la condena de privación de la libertad".*

Y añadió:

> *"La revocatoria no constituye una sanción que comporte el desconocimiento del principio de non bis in ídem, pues al condenado no se le impone una sanción adicional por el mismo hecho que originó la condena, ni se agrava el quantum de su condena. La revocatoria de la suspensión de la ejecución condicional de la pena es la consecuencia jurídica prevista por el legislador para el evento de incumplimiento y no tiene por fin sancionar al condenado, sino garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder gozar de dicho beneficio".*

Atendiendo a las disposiciones de las normas citadas, se tiene que **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** **fue capturado el día 26 de febrero de 2020**, fecha desde la cual se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota, por el proceso radicado **CUI 11001600000202002088**, dentro del cual el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca mediante sentencia del 18 de noviembre de 2020, **CONDENÓ** a la pena principal de **SESENTA Y UN (61) MESES Y UN (1) DÍA DE PRISIÓN Y MULTA DE 1.351 SMLMV**, como coautor responsable del delito de **USO DE MENORES DE EDAD PARA LA COMISIÓN DE DELITOS, EN CONCURSO HETEROGENEO CON LOS DELITOS DE CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual a la pena principal. NO CONCEDIÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria, ni la prisión domiciliaria por padre cabeza de familia debiendo cumplir su pena en establecimiento carcelario.

Aterrizando de inmediato al estudio concreto del asunto, y analizadas las diligencias, el sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de octubre de 2019.

El condenado aceptó las condiciones que le fueron impuestas con la suscripción de la diligencia de compromiso el día 28 de octubre de 2019 ante el Centro de Servicios Judiciales de Facatativá Cundinamarca, ratificando así su consentimiento a cumplir, y se expuso en dicho documento:

*"(…) En Facatativá, Cundinamarca, hoy veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019), compareció al Centro de Servicios Judiciales de esta localidad el señor **Miguel Angel Castañeda González** identificado con la C.C. No. 1.070.954.586 de Facatativá, con el fin de suscribir diligencia de compromiso conforme lo ordenado por la señora JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO, quien en sentencia del 16 de octubre de 2019, concedió la PRISIÓN DOMICILIARIA, conforme al art. 38B del C.P.*

1.- Permanecer en el lugar o lugares indicados como lugar de residencia.
2.- A no cambiar la residencia sin previas autorización del Juez de Ejecución de Penas
4.- Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena
5.- Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión (INPEC)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

6.- Y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia por el Funcionario Judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentación del INPEC.

Se le hace saber al sentenciado que el incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas ocasionará la revocatoria de dicho beneficio y será recluido en Establecimiento Carcelario (…)".

Como ya se mencionó este Despacho a través de auto de sustanciación No. 0717 del 28 de julio de 2022, ordenó correr al sentenciado el traslado del artículo 477 del C.P.P., para que se pronunciara acerca de los motivos por los cuales incumplió con las obligaciones impuestas al estar en prisión domiciliaria, **dado a la comisión del delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos, en concurso heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, radicado CUI 110016000000202002088, siendo capturado el pasado 26 de febrero de 2020 y condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca mediante sentencia del 18 de noviembre de 2020, a la pena de 61 meses y 1 días de prisión y multa de 1.351 smlmv.**

Por lo tanto, se evidencia que, dentro del término legal concedido, el condenado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ**, **NO** allegó los respectivos descargos del nuevo delito cometido, de lo cual consta en los documentos de notificación que el prenombrado fue **notificado el día 30 de septiembre de 2022**, y de conformidad a lo establecido en el art. 477 del C.P.P., **el término de traslado venció el día 5 de octubre de 2022.**

En este proceso no solo se está tratando de la transgresión ocasionada por el condenado al no haber demostrado su buena conducta, dado a la comisión de un nuevo delito, sino de la omisión demostrada al requerimiento que le ha hecho este Juzgado, incumpliendo de esta forma las obligaciones estipuladas en el artículo 38B del C.P., y a lo dispuesto en sentencia condenatoria del 16 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca.

Lo anterior significa que **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** no acató los reglamentos del INPEC ni tampoco lo consagrado en el artículo 38B y ss de la Ley 599 de 2000 y artículo 29 A de la Ley 65 de 1993, sobre todo en lo que tiene que ver con las salidas de su residencia sin autorización judicial.

Sobre este punto ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:

> *"…Este comportamiento revela una personalidad carente de escrúpulos frente al delito, cuando debía ser paradigma de rectitud y ejemplo para los demás, lo que permite colegir que la prevención especial y la reinserción social, solo se harán posibles mediante la detención intramural.*
>
> *Y son precisamente la gravedad, naturaleza y modalidades del reato imputado, los que llevan a pronosticar que si pasó por encima de la ley, cuando tenía el deber especial de acatarla, menos la respetará cuando no se desempeñe como juez penal o simple particular y que, por ende, pondrá en peligro a la comunidad, al no estar detenida intramuralmente.*
>
> *De otra parte, desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular gravedad, como el presente, merecen ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un tratamiento benigno llevaría, como lo ha dicho la Sala[4], un mensaje de desequilibrio en la aplicación del Derecho, una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser*

[4] *Ver auto de 23 de octubre/00, Seg. instancia. Rad. 16997. M. P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia…"(subrayado nuestro).

Lo anteriormente expuesto indica que el sentenciado **INCUMPLIÓ** las obligaciones que impone la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria, por tanto, se estudia la posibilidad de revocar la medida concedida.

Al no estar justificado el incumplimiento de las obligaciones impuestas, y dada esta actitud de franco desacato a la justicia, de persistencia y obstinación por la transgresión y comportamiento rebelde, pese al generoso tratamiento y a las facilidades que se le han reconocido, deja ver que no está dispuesto a sujetarse a las condiciones que le imprimen su calidad de condenado y por lo mismo le impiden aspirar a que se conserve la vigencia del sustituto conferido, pues se demuestra que el proceso resocializador no está surtiendo el efecto positivo esperado, en torno de la sujeción a los compromisos adquiridos, que son requisito fundamental de las benéficas condiciones reconocidas por la autoridad Judicial, por lo cual se evidencia la necesidad de aplicar tratamiento intramural, y como consecuencia directa, ha de revocarse el sustituto de la prisión domiciliaria concedido.

Así, este Despacho considera que el encartado necesita tratamiento penitenciario para que reflexione sobre su proceder y cumpla tanto con las normas de comportamiento legalmente establecidas, como las disposiciones penales que transgredió.

Por último, como la sanción penal impuesta no ha prescrito, y como quiera que, cometió un nuevo delito (radicado CUI 110016000000202002088, siendo capturado el 26 de febrero de 2020), encontrándose en prisión domiciliaria, que era su sitio de reclusión, y ni siquiera atendió al requerimiento de auto de sustanciación No. 0717 del 28 de julio de 2022 proferido por este despacho, encuentra este servidor que la sanción penal está vigente, razón por la cual es pertinente exigir el cumplimiento de las obligaciones a que se sometió el sentenciado.

En consecuencia, sin ahondar en más consideraciones, este Despacho por encontrar que el sentenciado violó por acción sus obligaciones, se **REVOCARÁ** el sustituto penal concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca en sentencia condenatoria del 16 de octubre de 2019.

4.3. Sobre el Tiempo del Cumplimiento de la Pena:

Analizadas las diligencias se tiene que **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** ha descontado pena dentro del presente asunto en dos oportunidades: i) **del 7 al 8 de octubre de 2018** (el Juzgado 2º Penal Municipal de Facatativá Cundinamarca con función de control de garantías en audiencias concentradas del 8 de octubre de 2018 dispuso la libertad inmediata del infractor en razón a que la FGN retiró la solicitud de medida de aseguramiento y libró la Boleta de Libertad) y; ii) **desde el 30 de octubre de 2019** (ingreso en prisión domiciliaria CPMS BOGOTA LA MODELO, certificación reseña y dactiloscopia) **hasta el 26 de febrero de 2020** (capturado por el delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos, en concurso heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, radicado CUI 110016000000202002088) **por lo que cumplió físicamente 120 días, que equivalen a 4 meses.**

El condenado NO cuenta con redenciones de pena reconocidas.

Por lo tanto, ha cumplido un tiempo de **CUATRO (4) MESES DE PRISION**

Como fue condenado a la pena principal de prisión de **54 meses**, vemos que le **QUEDA POR CUMPLIR CINCUENTA (50) MESES de manera intramural.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Sobre el traslado inmediato del condenado de prisión domiciliaria a intramural en sede de Tutela señaló la Corte Suprema de Justicia:

> *"Por tanto, a pesar de que el auto interlocutorio proferido el del 21 de mayo del año en curso por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta no señala el efecto en que proceden los recursos de reposición y apelación, se entiende que el segundo es en el efecto devolutivo, por lo que disponer el traslado inmediato de la aquí accionante al establecimiento penitenciario no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten…"*[5].

En otra decisión afirmó:

> *"Luego de la revocatoria de la prisión domiciliaria por el incumplimiento de las obligaciones, el art. 29F ibídem de la misma codificación contempla:*
>
> *ARTÍCULO 29F. REVOCATORIA DE LA DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA.* ***El incumplimiento*** *de las obligaciones impuestas* ***dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada*** *del juez competente.*
>
> ***El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida*** *o el funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia,* ***detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez*** *que profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.*
>
> *En consonancia con las disposiciones en cita, en fallo CSJ STP10238 – 2019, advirtió esta misma Sala de Decisión que «disponer el* ***traslado inmediato*** *de la aquí accionante* ***al establecimiento penitenciario*** *no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten».*
>
> *En otras palabras, queda claro que, es deber del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, disponer el traslado perentorio del condenado que incumple las obligaciones adquiridas con el otorgamiento de la prisión domiciliaria, al centro carcelario…"*[6]

Por lo anteriormente expuesto y en vista que el sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** se encuentra actualmente recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, a disposición de otra autoridad judicial (proceso radicado CUI 11001600000020200288, delito uso de menores de edad para la comisión de delitos, en concurso heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes), se ordena por la secretaría del Juzgado, **OFICIAR** al señor director y asesor jurídico de dicho penal, con el fin de solicitar que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra allí purgando pena, se deje a disposición dentro del presente asunto, con el fin de materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **50 meses de manera intramural**.

En consecuencia, se ordena LIBRAR la **ORDEN DE CAPTURA** en contra del sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586, y por la secretaría del Juzgado elaborar los oficios dirigidos ante las autoridades correspondientes.

4.5. Sobre la exigibilidad de la Caución

---

[5] CSJ T RAD 105612 del 30 de julio de 2019, M.P. Dr **LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA**
[6] CSJ T RAD 106432 del 3 de septiembre de 2019 M.P . Dra **PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De otra parte, como quiera que el sentenciado violó las obligaciones a que se encontraba sometida en virtud de la prisión domiciliaria, NO se aplicará lo previsto en el artículo 372 del C. P. P., por cuanto el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca mediante sentencia del 16 de octubre de 2019, por la cual concedió la prisión domiciliaria art. 38 y 38B del C.P., NO IMPUSO PAGO DE CAUCION PRENDARIA.

4.6. Sobre la notificación del condenado

Teniendo en cuenta que **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, (por otro proceso), se ordena por la secretaría de este Juzgado **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[7], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[8]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[9]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y

---

[7] Ibídem.
[8] CSJ T **102248**
[9] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ-CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER que el sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586, tiene descontado por pena física un total de **4 meses** de la pena principal de prisión de **54 meses**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

SEGUNDO. - REVOCAR a **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586, el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria art. 38 y 38B del C.P., concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca mediante sentencia condenatoria del 16 de octubre de 2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, en consecuencia, el condenado deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **50 meses de manera intramural.**

TERCERO. En vista que el sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** se encuentra actualmente recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, a disposición de otra autoridad judicial (proceso radicado CUI 11001600000020200288, delito uso de menores de edad para la comisión de delitos, en concurso heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes), se ordena por la secretaría del Juzgado, **OFICIAR** al señor director y asesor jurídico de dicho penal, con el fin de solicitar que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra allí purgando pena, se deje a disposición dentro del presente asunto, con el fin de materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **50 meses de manera intramural.**

CUARTO. - Se ordena LIBRAR la **ORDEN DE CAPTURA** en contra del sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586, y por la secretaría del Juzgado elaborar los oficios dirigidos ante las autoridades correspondientes.

QUINTO. - Teniendo en cuenta que **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, (por otro proceso), se ordena por la secretaría de este Juzgado **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SEXTO. - Por la Secretaria del Juzgado **PROCÉDASE** a remitir copia de la presente providencia al Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, para que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0524
(este oficio NO sustituye boleta de detención o encarcelación)

Señor
DIRECTOR
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO
LA PICOTA
Bogotá D.C.
juridica.epcpicota@inpec.gov.co
direccion.epcpicota@inpec.gov.co
consultoriojuridico.epcpicota@inpec.gov.co

URGENTE - SOLICITUD DEJAR A DISPOSICION UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE ENCUENTRA RECLUIDO EN EL COMEB LA PICOTA BOGOTA

CUI	**25430600066020180131 5**
NI	**2019-0694**
Sentenciado:	**MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ**
Identificación:	**C.C. No. 1.070.954.586**
Delito:	**FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES**
Decisión:	**REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA (comisión otro delito)**

Cordial saludo:

De conformidad con lo ordenado en auto de la fecha emitido por el suscrito y como quiera que el sentenciado **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586 se encuentra actualmente recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota -, a disposición de otra autoridad judicial (proceso radicado CUI 11001600000020200288, delito uso de menores de edad para la comisión de delitos, en concurso heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes), se solicita que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra allí purgando pena, se deje a disposición dentro del presente asunto, con el fin de materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **50 meses de manera intramural.**

Lo anterior, toda vez que mediante auto interlocutorio No. 0093 del 11 de marzo de 2024, este Juzgado resolvió **REVOCAR** la prisión domiciliaria al infractor, que le había sido otorgada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca en sentencia condenatoria del 16 de octubre de 2019

Se adjunta copia de auto interlocutorio No. 0093 y orden captura oficio No. 0525 y 0526

Atentamente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0525

Señores Jefe Grupo de Capturas
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - SIJIN
Avenida El Dorado No. 75 - 25
Bogotá D.C.

ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **LIBRAR ORDEN DE CAPTURA**, en contra de **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586, a quien este Juzgado **REVOCÓ** el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca en sentencia del 16 de octubre de 2019, **quien deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, 50 MESES DE PRISIÓN de manera intramural.**

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ fue condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca mediante sentencia del 16 de octubre de 2019, a la pena principal de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal. No concedió la suspensión condicional de la pena, pero concedió la prisión domiciliaria – art. 38 y 38B del C.P.-. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 16 de octubre de 2019.

El proceso se identifica con el radicado CUI 25430600066020180131 5 y este despacho asignó el Número Interno 2019-0694 por lo tanto, una vez sea capturado, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	**MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ**
Identificación No.	C.C. No. 1.070.954.586 expedida en Facatativá Cundinamarca
Fecha de Nacimiento	4 de julio de 1989
Lugar de Nacimiento	Facatativá Cundinamarca
Escolaridad	4º primaria
Ocupación	Agricultor
Nombre Padres	Rosa Castañeda
Estado Civil	Unión Marital de Hecho
Dirección	N/A
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género masculino; estatura 1.63 mts; grupo sanguíneo factor RH A+, contextura delgado, piel trigueña, cabello mediano color negro, frente mediana, ojos medianos iris color café, cejas arqueadas pobladas, orejas medianas lóbulos separados, nariz dorso recto y base media, boca mediana, labios medianos, mentón redondo, cuello medio
Señales particulares	Tatuaje en antebrazo de corazón con letras “A y M”.

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0526

Señor
IT JORGE ALEXANDER MONTERO DUQUE
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - SIJIN
Carrera 58 No. 9 – 43 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **LIBRAR ORDEN DE CAPTURA**, en contra de **MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.070.954.586, a quien este Juzgado **REVOCÓ** el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, concedido por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca en sentencia del 16 de octubre de 2019, **quien deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, 50 MESES DE PRISIÓN de manera intramural.**

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ fue condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Facatativá Cundinamarca mediante sentencia del 16 de octubre de 2019, a la pena principal de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal. No concedió la suspensión condicional de la pena, pero concedió la prisión domiciliaria – art. 38 y 38B del C.P.-. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 16 de octubre de 2019.

El proceso se identifica con el radicado CUI 25430600066020180131 5 y este despacho asignó el Número Interno 2019-0694 por lo tanto, una vez sea capturado, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	**MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZALEZ**
Identificación No.	C.C. No. 1.070.954.586 expedida en Facatativá Cundinamarca
Fecha de Nacimiento	4 de julio de 1989
Lugar de Nacimiento	Facatativá Cundinamarca
Escolaridad	4º primaria
Ocupación	Agricultor
Nombre Padres	Rosa Castañeda
Estado Civil	Unión Marital de Hecho
Dirección	N/A
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género masculino; estatura 1.63 mts; grupo sanguíneo factor RH A+, contextura delgado, piel trigueña, cabello mediano color negro, frente mediana, ojos medianos iris color café, cejas arqueadas pobladas, orejas medianas lóbulos separados, nariz dorso recto y base media, boca mediana, labios medianos, mentón redondo, cuello medio
Señales particulares	Tatuaje en antebrazo de corazón con letras “A y M”.

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 11 de 2024: Al despacho el proceso contra **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** identificado con C.C. No. 4.418.643, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0065 del 27 de febrero de 2024, se emite por parte del Asistente Social el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 7 de marzo de 2024, para resolver la solicitud de Prisión Domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., invocada por el condenado. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo once (11) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No.0094

CUI	**25019600037120220006 9**
Número Interno:	**2023-0112**
Sentenciado:	**PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA**
Identificación:	**C.C. No. 4.418.643**
Delito:	**FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES**
Reclusión	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**NIEGA PRISION DOMICILIARIA ART. 38G del C.P. (no acredita arraigo)**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a decidir sobre la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria dispuesta en el artículo 38G del C.P., invocada por el condenado **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** identificado con C.C. No. 4.418.643, quien actualmente se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 29 de marzo de 2022 y preacuerdo aprobado, el Juzgado 1º Penal del circuito con función de conocimiento de Facatativá Cundinamarca, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2022, **CONDENÓ** a **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** a la pena principal de **CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION** como autor responsable del delito de **FABRICACION, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES art. 365 del C.P.**, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo tiempo de la pena principal impuesta. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria, la libertad condicional y la sustitución de la detención preventiva. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 19 de diciembre de 2022.

PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el día 29 de marzo de 2022**[1], recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0354 del 17 de marzo de 2023.

A través de auto interlocutorio No. 0543 del 4 de diciembre de 2023, esta agencia judicial reconoció al interno redención de pena de 5 meses y 23.5 días. Decretó la corrección de actos irregulares – art 15 inciso 2º Ley 600 de 2000 -, del auto de sustanciación No. 0354 del 17 de marzo de 2023 por el cual se avocó por competencia el conocimiento del presente asunto, quedando anotado en la constancia secretarial el nombre del condenado **PEDRO ANTONIO BAÑOL MOLINA**; ***siendo correcto: "PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA".***

A través de auto interlocutorio No. 0065 del 27 de febrero de 2024, este Juzgado reconoció redención de pena de 1 mes y 4 días y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38 G del C.P., invocada por el sentenciado y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada como arraigo familiar - Calle 72 Sur No. 13 A 12 Este en la ciudad de Bogotá D.C., en donde reside la señora Claudia Teresa Lesmes Peña, amiga del condenado, identificada con C.C. No. 46.677.099 Celular 3118584570 -, cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordenó al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la documentación y solicitud allegada por el condenado, para el estudio de la prisión art. 38G del C.P., y el Informe de Visita Social de fecha 7 de marzo de 2024 emitido por el Asistente Social de este Juzgado.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

[1] Acta audiencia de garantías y Boleta de Detención – archivo 003 folio 17 y archivo 004 - expediente digitalizado.

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1. Competencia

En razón a la fecha de los hechos que dieron origen al proceso que se estudia – **29 de marzo de 2022**- se tiene que la actuación se surtió de conformidad con el Código Penal –*Ley 599 de 2000* - y el Código de Procedimiento Penal –*Ley 906 de 2004*-, luego la competencia funcional de este juzgado está determinada por los numerales 1º y 5º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004.

Toda vez que condenado se encuentra privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA es competente este juzgado en conocer, vigilar la pena impuesta así como el de decidir sobre las peticiones radicadas por el interno conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

4.2. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Calle 72 Sur No. 13 A 12 Este en la ciudad de Bogotá D.C., en donde reside la señora Claudia Teresa Lesmes Peña, amiga del condenado, identificada con C.C. No. 46.677.099 Celular 3118584570, quien rindió ante la Notaría 17 del Círculo de Bogotá D.C., el día 11 de enero de 2024, la DECLARACIÓN EXTRAJUICIO No. 166, y declaró que de ser otorgada la prisión domiciliaria a su amigo **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** sería allí donde cumpliría su condena, indicó que el condenado siempre se ha caracterizado por ser una persona responsable, y cumplidora de sus deberes, no considera que sea un peligro para la sociedad y se hará cargo de sus gastos de alimentación, manutención y vivienda mientras cumple su condena.

Previo a resolver de fondo la solicitud de prisión domiciliaria invocada por el infractor, este Juzgado por auto interlocutorio No. 0065 del 27 de febrero de 2024, ordenó al asistente social del Juzgado para que realizara por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en el referido inmueble.

Por consiguiente, se emite el Informe de Valoración de Asistencia Social en fecha 7 de marzo de 2024.

4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.3.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

---

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [5].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **FABRICACION, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES art. 365 del C.P** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*

[5] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***PARÁGRAFO****. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> *"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.* ***No se concederán****; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión;* ***ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo****, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*
>
> ***Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos*** *contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; …"*

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** como **FABRICACION, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES art. 365 del C.P.**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[6]

4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

> ***"****(…)* ***Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*
>
> *Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

> *"(…)* ***Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor****:* ***Artículo 38G.*** *La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de*

[6] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(…)"

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

> ***Artículo 38G**, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.*
>
> ***Parágrafo**. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

> ***"(…) Artículo 23.** Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:*
> ***Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.** Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
>
> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)" **(Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena acumulada impuesta al condenado, esto es, **54 meses de prisión**, según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponde a **VEINTISIETE (27) MESES**

PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA ha estado privado de la libertad **desde el 29 de marzo de 2022**[7] hasta la fecha, lo que implica el interno ha cumplido físicamente **23 meses y 22 días**

Adicional a la pena física cumplida, el sentenciado cuenta con redenciones de pena de **6 meses y 27.5 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0543 del 4 de diciembre de 2023, reconoce 5 meses y 23.5 días
- auto interlocutorio No. 0065 del 27 de febrero de 2024, reconoce 1 mes y 4 días

De la suma de las anteriores cifras, da como resultado que el interno ha purgado un total de **TREINTA (30) MESES Y DIECINUEVE PUNTO CINCO (19.5) DÍAS** de la pena de principal impuesta.

Al analizar la norma sobre el primer requisito, factor objetivo, se tiene que el condenado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta de **54 meses** por lo que la mitad sería **27 meses**, por lo tanto, el condenado **CUMPLE con el factor objetivo**.

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes

[7] Acta audiencia de garantías y Boleta de Detención – archivo 003 folio 17 y archivo 004 - expediente digitalizado.

etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Se observa en el Acta de DECLARACIÓN EXTRAJUICIO No. 166 rendida ante la Notaría 17 del Círculo de Bogotá D.C., el día 11 de enero de 2024 por la señora Claudia Teresa Lesmes Peña identificada con C.C. No. 46.677.099 (amiga del condenado), quien manifestó que de ser otorgada la prisión domiciliaria a su amigo **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** sería allí donde cumpliría su condena, indicó que el sentenciado siempre se ha caracterizado por ser una persona responsable, y cumplidora de sus deberes, no considera que sea un peligro para la sociedad y se hará cargo de sus gastos de alimentación, manutención y vivienda mientras cumple su condena.

Previo a resolver de fondo la solicitud de prisión domiciliaria invocada, este Juzgado por auto interlocutorio No. 0065 del 27 de febrero de 2024, ordenó al asistente social del Juzgado para que realizara por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en el referido inmueble.

Por lo tanto, se emite el Informe de Valoración de Asistencia Social en fecha 7 de marzo de 2024 en el cual se expone:

"(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

"(…) Los días 28 y 29 de febrero y entre el primero y siete de marzo de 2024, se estableció diálogo dirigido a llevar a cabo la diligencia de visita domiciliaria -vía remota, número 3118584570, también hubo comunicaciones con el número WhatsApp 3172801191. Se trata del número celular de la señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA.

CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA, se identifica con cédula de ciudadanía No. 46.677.099, tiene 50 años, oriunda de Chiquinquirá (Boyacá), soltera, sin hijos, quien labora en oficios varios por días (limpieza y aseo en tres apartamentos) y reside en Bogotá hace +- 7 años, sin familiares en Bogotá, de acuerdo a la información suministrada.

Desde los contactos iniciales se observó falta de interés y pobre colaboración con el procedimiento, debiéndosele insistir para la remisión de documentos que permitieran realizar la verificación del lugar en donde, eventualmente, PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA continuaría purgando pena a través de Prisión Domiciliaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Hubo necesidad de solicitar apoyo desde la Oficina Jurídica del CPMS Villeta, para que el señor condenado entrara en contacto con la señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA, para que prestara colaboración con el procedimiento.

Posteriormente, pese a haberse reiterado la necesidad de profundizar en las condiciones habitacionales concretas del lugar de habitación, la señora entrevistada de manera reiterada envío documentos ilegibles, cortados o incompletos.

De igual modo, aun cuando fue pactada la fecha y hora de la entrevista con antelación, la entrevistada desvió las llamadas en varias oportunidades, así como cortaba la comunicación.

Pese a ello, con dificultades fue realizando la entrevista para por fin identificar que CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA, NO conoce al señor condenado, nunca lo ha visitado en el CPMS Villeta, desconoce aspectos relacionados con dicho señor, mencionó que al parecer familiares del condenado viven en Bogotá, pero no sabe por qué razones aquella no está en posibilidad o no se interesa por recibirlo.

La señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA reconoció que con el condenado apenas en un par de oportunidades ha establecido breve comunicación telefónica.

Planteó la entrevistada que una prima suya, señora DORA ISABEL LESMES, le pidió el favor que recibiera a PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA, por ser amigo de su esposo, señor FABIO ROJAS, con quien compartieron estancia en el presidio de Acacias, donde ambos estaban recluidos años atrás.

A la señora entrevistada le fue aclarado que no se encontraba en obligación de recibir a dicha persona en su domicilio, explicándosele que la familia de acogida adquiría el compromiso de garantizar condiciones de vida y bienestar para el condenado, pues llegaba a ese lugar en situación de dependencia y sin contar con medios de vida y sin redes de apoyo familiar alguno, al parecer.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda en la cual el señor condenado pretende continuar purgando pena, eventualmente, en caso le sea concedida la Prisión Domiciliara está ubicada en la ***Calle 72 sur No. 13 A – 12 Este, Barrio Juan Rey****, localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C., residencia perteneciente al estrato UNO.*

Se trata de una vivienda de dos pisos, propiedad de la señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA, perteneciente al estrato UNO, adquirida por herencia familiar. La vivienda pertenecía a los señores padres de la entrevistada.

La casa cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y alcantarillado y gas.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como aceptables, el lugar cuenta con condiciones internas y externas aceptables. La construcción tiene alrededor de 10 años, en material terminado.

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de alto riesgo, puesto que se trata de un sector urbano marginal periférico al suroriente de Bogotá, caracterizado por la presencia de acentuadas problemáticas sociales. La entrevistada refirió que le hurtaron los contadores de servicios públicos y que de noche hay mucho habitante de calle deambulando y bandas de atracadores.

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Recabando en la situación socio-económica de la señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA, informó que trabajaba por días, tres veces por semana, donde realiza labores de aseo y limpieza, ganando 450 mil pesos mensuales.

Respecto a los gastos mensuales la entrevistada reportó que actualmente paga 150 mil pesos mensuales en servicios públicos, que está pagando por cuotas los contadores de energía y gas, porque le fueron hurtados de la casa de habitación del Barrio Juan Rey donde vive.

Aseveró la entrevista que cocina muy poco porque en las casas donde trabaja le dan el almuerzo, que gasta 60 mil pesos en alimentación mensual, aseguro, y 40 mil en transportes.

Al interrogarse por otros ingresos o medios de vida, la señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA dijo no contar con ninguno.

La señora entrevistada comentó que pensaba arrendar dos cuartos en su casa, pero por ahora están desocupados, por ello, a la señora le fue explicado que debían comunicarse los datos básicos (nombre, edad y ocupación) de todos quienes moraran en dicho lugar, porque se trata de aspectos tenidos en cuenta para la valoración de seguridad del entorno habitacional.

CONCEPTO

Fue encontrado que, la persona que manifestó recibiría al condenado PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA, señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA, no cuenta con ningún nexo familiar, social u otro con aquel, sino que, en lo manifestado, se trata de un favor que le está haciendo al esposo de una prima, quien estuvo privado de la libertad en Acacias años atrás, pero aseveró desconocer aspectos relacionados con dicho señor condenado, nunca se han visto y apenas se ha establecido breve comunicación telefónica con aquel.

De igual modo, la señora es soltera sin hijos, no cuenta con familiar alguno en la ciudad de Bogotá y sus condiciones de vida son de pobreza, contando con medios económicos apenas suficientes para pervivir, por lo que se concluye que no cuenta con medios para recibir al condenado señor PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA.

Por lo tanto, por ahora el señor PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA NO cuenta con un grupo familiar que pueda recibirlo y garantice condiciones de vida y bienestar, frente a una eventual prisión domiciliaria (…)".

Por consiguiente y a pesar de que el condenado aportó la documentación tendiente a probar su arraigo social y familiar, este despacho, no encontró la acreditación del mismo y conforme a lo expuesto en el Informe de Valoración Asistencia Social elaborado por el Asistente Social de este Juzgado, no se emitió un concepto por el cual se determine esencialmente y por el que no se probó que realmente el condenado **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** cuente con un núcleo familiar, ni un lugar de domicilio permanente y en el que pueda ser recibido para continuar purgando la pena de prisión impuesta en un domicilio, conforme a lo expuesto en el cual se concluyó:

> *"(…) Fue encontrado que, la persona que manifestó recibiría al condenado PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA, señora CLAUDIA TERESA LESMES PEÑA, no cuenta con ningún nexo familiar, social u otro con aquel, sino que, en lo manifestado, se trata de un favor que le está haciendo al esposo de una prima, quien estuvo privado de la libertad en Acacias años atrás, pero aseveró desconocer aspectos relacionados con dicho señor condenado, nunca se han visto y apenas se ha establecido breve comunicación telefónica con aquel*

> *De igual modo, la señora es soltera sin hijos, no cuenta con familiar alguno en la ciudad de Bogotá y sus condiciones de vida son de pobreza, contando con medios económicos apenas suficientes para pervivir, por lo que se concluye que no cuenta con medios para recibir al condenado señor PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA.*
>
> *Por lo tanto, por ahora el señor PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA **NO** cuenta con un grupo familiar que pueda recibirlo y garantice condiciones de vida y bienestar, frente a una eventual prisión domiciliaria. (…)".*

En consecuencia, NO se observan los suficientes medios de convicción que permitan dar un sustento y por lo cuales se pruebe que el condenado si cuenta con un arraigo familiar y social.

Ahora bien, la H. Corte Suprema de Justicia ha dicho que se debe entender por tal concepto:

> "Ahora, la Sala[8] ha definido el arraigo como «el establecimiento de una persona de manera permanente en un lugar, con ocasión de sus vínculos sociales, determinados, por ejemplo, por la pertenencia a una familia, a un grupo, a una comunidad, a un trabajo o actividad, así como por la posesión de bienes[9]…».

En otro aparte jurisprudencial dijo:

> "la expresión arraigo, proveniente del latín ad radicare (echar raíces), supone la existencia de un vínculo del procesado con el lugar donde reside, lo cual se acredita con distintos elementos de juicio, entre otros, tener una residencia fija y estable, vivir en ella junto con la familia y estar presto a atender el requerimiento de las autoridades".

Por lo tanto, el condenado **NO cumple con este requisito.**

4.6. CONCLUSIÓN

En ese orden de ideas y en vista de que no se satisfacen los presupuestos previstos en el artículo 38G del C.P., respecto a que no se acreditó el arraigo familiar del condenado, el Despacho negará la sustitución de la pena de prisión formal por la domiciliaria al interno **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA**

En vista de que **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** se encuentra privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por la secretaria del Juzgado **COMISIONAR** a las directivas de dicho penal con el fin de **NOTIFICAR** personalmente al sentenciado el contenido de la presente decisión.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y

[8] CSJ. SP, 3 feb. 2016, rad 46647

[9] Sala de Casación Penal, M.P. Fernando León Bolaños Palacios, SP18912-2017, Radicación N° 46930, 15 de noviembre 2017.

salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[10], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales,

---

[10] Ibídem.

en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[11]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[12]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6.- DECISIÓN

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA,**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER que el interno **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** identificado con C.C. No. 4.418.643 acumula por tiempo físico descontado y redenciones de pena reconocidas en un total de **30 meses y 19.5 días**

SEGUNDO. – NEGAR al condenado **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** identificado con C.C. No. 4.418.643, la concesión de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión contemplada en el artículo 38G del C.P., por las razones expuestas en este proveído.

[11] CSJ T **102248**
[12] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

TERCERO. - En vista de que **PABLO ANTONIO BAÑOL MOLINA** se encuentra privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por la secretaria del Juzgado **COMISIONAR** a las directivas de dicho penal con el fin de **NOTIFICAR** personalmente al sentenciado el contenido de la presente decisión.

CUARTO. - REMITIR copia del presente auto al director de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, para que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 11 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **DIEGO DURAN MONTOYA** identificado con C.C. No. 80.870.690, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0154 del 28 de febrero de 2024 se emitió el Informe Valoración Asistencia Social de fecha 4 de marzo de 2024, para el estudio de la prisión domiciliaria art. 38G del C.P.

Se recibe a través del correo institucional el 7 de marzo de 2024, la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena del sentenciado. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo once (11) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0095

CUI:	**11001600002322018074 43**
Número Interno	**2022-0315**
Condenado	**DIEGO DURAN MONTOYA**
Identificación:	**C.C. No. 80.870.690**
Delito:	**HURTO CALIFICADO CONSUMADO**
Sitio de Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G DEL C.P.** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **DIEGO DURAN MONTOYA** identificado con C.C. No. 80.870.690 quien se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA con la documentación para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., y el reconocimiento de redención de pena.

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 29 de agosto de 2018, el Juzgado 37 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 27 de septiembre de 2019, **CONDENO a DIEGO DURAN MONTOYA** como autor responsable del delito de **HURTO CALIFICADO CONSUMADO**, a la pena de **CINCUENTA (50) MESES DE PRISIÓN** y a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la privativa de libertad. El juzgado fallador **NO CONCEDIÓ** el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 4 de octubre de 2019 y libró orden de captura 2020-2014 del 26 de octubre de 2020.

El homólogo 16 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso el 18 de noviembre de 2020 y dispuso oficiar a los organismos de seguridad del Estado, a fin de que informaran las labores desarrolladas tendientes a materializar la orden de captura proferida en contra del condenado, ordenó oficiar al Juzgado 37 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., a fin de que informara si contra el sentenciado se inició el trámite incidental de reparación integral.

El día 29 de enero de 2021 el mencionado Juzgado respondió: *"(…) me permito dar respuesta a su oficio allegado a este Sede Judicial dentro del proceso de la referencia, en el que solicita informe sobre el trámite de la audiencia de incidente de reparación integral adelantado en el despacho de conocimiento.*

Al respecto me permito informar que a la fecha no se registra solicitud alguna presentada en dicho sentido (…)".

El homólogo 16 de Bogotá D.C., mediante proveído del 21 de julio de 2022 dispuso la remisión del expediente a los homólogos de Guaduas Cundinamarca, en vista que el condenado presenta anotación de estado ingreso "ALTA" en el Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca

Conforme a las pruebas y documentos allegados con el expediente y la fecha de captura que se registra en la cartilla biográfica expedida por la CPMS VILLETA, el interno **DIEGO DURAN MONTOYA** descuenta pena dentro del presente asunto **desde el día 27 de mayo de 2022**

El homólogo 3º de Guaduas Cundinamarca, por auto del 12 de septiembre de 2022, dispuso remitir el expediente por competencia a este estrado judicial.

El condenado interpuso acción de tutela contra este Juzgado el día 6 de septiembre de 2022 y el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Penal, mediante fallo del 19 de septiembre de 2022 resolvió declarar improcedente la acción de tutela en procura del derecho fundamental de debido proceso y acceso a la administración de justicia, dada la carencia actual del objeto por hecho superado.

Este despacho AVOCO conocimiento de las diligencias el 23 de noviembre de 2022 a través de auto de sustanciación No. 1098

El sentenciado interpuso acción de tutela en contra de este Juzgado la cual fue recibida el 25 de noviembre de 2022, y de la cual se dio respuesta con oficio No. 2841 del 28 de noviembre de 2022 a la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, corporación que a través del fallo emitido el 6 de diciembre de 2022, negó el amparo respecto de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia solicitado por el condenado en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Cundinamarca, el homólogo 16 de Bogota, el CSA de los homólogos de Bogotá, Guaduas y Facatativá.

Conforme la solicitud de prisión domiciliaria Ley 750 de 2022, presentada por el condenado a través de apoderada judicial, este despacho mediante auto de interlocutorio No. 0653 del 28 de noviembre de 2022, ordenó al asistente social del Juzgado, para que por medios virtuales realizara la visita socio familiar (Calle 164 B Bis No. 8 A - 72 piso 2º barrio San Cristóbal Norte de la ciudad de Bogotá D.C.) y no emita que concepto a la mayor brevedad posible respecto a las condiciones familiares y habitacionales del condenado y especialmente de la veracidad de su condición de padre cabeza de familia.

Una vez emitido el Informe de Valoración de Asistencia Social, esta agencia judicial a través de auto interlocutorio No. 0017 del 11 de enero de 2023, negó al condenado la prisión domiciliaria contemplada en el artículo 314-5 del C.P.P. y el artículo 1º de la Ley 750 de 2002, por no acreditar su condición de padre cabeza de familia.

En vista a la solicitud de prisión domiciliaria art. 38 y 38B del C.P. invocada por el condenado a través de su abogada, este Juzgado a través de auto interlocutorio No. 0183 del 20 de abril de 2023, negó la sustitución de la pena de prisión invocada.

Por auto interlocutorio No. 0450 del 19 de septiembre de 2023, reconoció redención de pena de 3 meses y 19 días.

A través de auto de sustanciación No. 0154 del 28 de febrero de 2024, previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – art. 38G del C.P. -, invocada y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada - CALLE 164 B BIS No. 8 A 72 PISO 2 BARRIO SAN CRISTOBAL NORTE DE BOGOTA D.C., en donde convivirá con su progenitora señora María Gracilda Montoya de Durán identificada con C.C. No. – Celular 3125645111 -, como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordenó al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado y el informe de valoración de asistencia social del 4 de marzo de 2024 y la documentación para el reconocimiento de redención de pena.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el **29 de agosto de 2018**, el sentenciado **DIEGO DURAN MONTOYA** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974590	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	488	Sobresaliente	Buena
19066177	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	480	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**968**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **968** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA – ART. 38G DEL C.P.

Se recibe a través del correo institucional el día 4 de diciembre de 2023, la documentación de solicitud de prisión domiciliaria art. 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la CALLE 164 B BIS No. 8 A 72 PISO 2 BARRIO SAN CRISTOBAL NORTE DE BOGOTA D.C., en donde reside la progenitora del condenado señora María Gracilda Montoya de Durán – Celular 3125645111, lugar donde cumpliría su condena.

Se adjunta: documento en el cual firman las personas que conocen a Diego Durán Montoya como persona honrada, trabajadora y cumplidor de sus deberes, declaración extrajuicio rendida ante notaría por la señora María Gracilda Montoya de Durán, certificación expedida por Parroquia San Wenceslao, certificación suscrita por el contador público Juan B. González Segura, documento afiliación Salud Total EPS S.A., registro civil de nacimiento Diego Durán Montoya, fotocopia cédula ciudadanía María Gracilda Montoya de Durán, certificación suscrita por Laura María Moreno Otavo, Salvador Casas, Omar Moreno, fotocopia recibo servicio público.

4.4. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.4.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [3].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **HURTO CALIFICADO CONSUMADO** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*

[3] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> ***PARÁGRAFO****. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> *"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.* ***No se concederán****; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión;* ***ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo****, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*
>
> *<INCISO 2> Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar;* ***hurto calificado****; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. …"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **DIEGO DURAN MONTOYA** como **HURTO CALIFICADO CONSUMADO**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[4]

4.5. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

> ***"****(…)* ***Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*
>
> *Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

> *"(…)* ***Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor****:* ***Artículo 38G.*** *La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en*

[4] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(…)"

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

***Artículo 38G**, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.*

***Parágrafo**. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

***"(…) Artículo 23.** Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor: **Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.** Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)" **(Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.6. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena impuesta al condenado, esto es, **50 meses de prisión,** según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **25 meses.**

DIEGO DURAN MONTOYA ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 27 de mayo de 2022** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **654 días**, es decir, **21 meses y 24 días.**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 19.5 días** reconocidas por este Juzgado así:

- Auto interlocutorio No. 0450 del 19 de septiembre de 2023, reconoce 3 meses y 19 días
- En el presente auto interlocutorio No. 0095 de la fecha, reconoce 2 meses y 0.5 días.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En efecto, el interno **DIEGO DURAN MONTOYA** acumula un total de **VEINTISIETE (27) MESES Y TRECE PUNTO CINCO (13.5) DÍAS** de la pena principal impuesta, por lo tanto, **cumple con el factor objetivo.**

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.6.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que el infractor en el escrito de solicitud manifiesta que el inmueble para continuar con el cumplimiento de la pena se localiza en la **CALLE 164 B BIS No. 8 A 72 PISO 2 BARRIO SAN CRISTOBAL NORTE DE BOGOTA D.C., en donde reside la progenitora del condenado señora María Gracilda Montoya de Durán – Celular 3125645111**

Para certificar el arraigo familiar y social, adjunta DECLARACIÓN JURAMENTADA rendida ante la Notaría 33 del Circulo de Bogotá D.C., por la señora **María Gracilda Montoya de Durán** (progenitora del condenado), quien indicó indica que de ser concedido el mecanismo sustitutivo será el lugar donde cumpliría la condena en la Calle 164 B Bis No. 8 A 72 Bogotá D.C.

Ahora bien, al tenerse en cuenta el estudio del arraigo realizado por el Asistente Social de este Juzgado, mediante el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 4 de marzo de 2024, se observa lo siguiente:

"(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

El señor condenado DIEGO DURÁN MONTOYA tiene 38 años, es oriundo y residente en la ciudad de Bogotá durante toda su vida y se encuentra privado de la libertad desde el mes de mayo de 2022.

El señor condenado es soltero, no tiene hijos y residía con su señora madre en vivienda de su propiedad de la señora MARÍA GRACILDA, ubicada en la ***Calle 164B Bis No 8 A – 72, Barrio San Cristóbal Norte, localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá.***

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Se trata de una casa de habitación de tres plantas, encontrándose el primer piso en arriendo. En el tercer piso reside una tía del señor condenado y su familia, señora ROSA MONTOYA.

En el segundo piso, vive la señora MARÍA GRACILDA MONTOYA DE DURAN, madre del señor condenado, adulta mayor de 64 años. Dicha señora es viuda hace más de 35 años.

La residencia de propiedad familiar pertenece al estrato 3 y en ella moran hace más 30 años.

Actualmente, la señora madre del condenado pervive gracias al arrendamiento del primer piso ($800.000) y dado que su hermana, quien reside en el tercer piso paga los servicios públicos del domicilio.

Comenta la señora MARÍA GRACILDA MONTOYA DE DURAN que también labora por días en oficios domésticos que realiza en varias casas de familia en Cedritos, Unicentro y 170. La señora entrevistada no cuenta con pensión alguna, tampoco recibe subsidios por programas sociales.

Además de su señora madre, el condenado cuenta con un grupo familiar extensivo, residentes en Boyacá y otros en la ciudad de Bogotá e inclusive una hermana del señor condenado reside en la misma vivienda de la señora MARÍA GRACILDA.

La familia únicamente cuenta con recursos por arrendamiento de un apartamento. Se conoció que el señor condenado no tiene profesión u oficio estable, trabajaba en oficios varios y era empleado por días.

Al interrogarse por la situación laboral de su hijo, la señora entrevista reportó que DIEGO DURÁN MONTOYA no estudio, no culminó el bachillerato ni tiene formación para el empleo alguna.

Así mismo, la madre reporta que su hijo tiene problemas por uso abusivo de SPA. Señala que es condición que ha mejorado porque al parecer en la Cárcel de Villeta no ha usado SPA. De igual modo, la señora madre del condenado refiere que en la vivienda compartida DIEGO nunca ha tenido autorización para el consumo de SPA, como tampoco la visita de personas usuarias de drogas.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda propia en la cual reside el grupo familiar del señor condenado está ubicada en ***Calle 164B Bis No 8 A – 72 de Bogotá.***

Se trata de una residencia perteneciente al estrato tres, encontrándose en el Barrio San Cristóbal Norte.

La casa de habitación tiene tres plantas, en cada piso encontramos un apartamento y la familia del condenado está en el segundo piso.

El apartamento del grupo familiar del señor condenado cuenta con dos habitaciones, sala-comedor, cocina, baño y patio de ropas (terraza).

La casa cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, gas residencial.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como BUENAS, el lugar cuenta con condiciones satisfactorias a niveles interno y externo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de BAJO riesgo, puesto que se trata de un sector de residencial que se caracteriza por ser tranquilo, sin problemáticas de seguridad importantes.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Como fue señalado de manera precedente, respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los ingresos los obtiene está familia principalmente a través del arrendamiento de un apartamento ($800.000).

La señora MARÍA GRACILDA MONTOYA, labora por días en casas de familia, obteniendo un ingreso promedio mensual de UN SMMLV.

Respecto a los gastos se encontró que mensualmente dicha familia gasta un millón en gastos de alimentación, principalmente.

La situación económica que fue observada en el ámbito familiar es de clase media baja, contando con recursos económicos suficientes para el cubrimiento de necesidades del grupo familiar.

Así mismo reiterando, información precedente, respecto a la actividad ocupacional del señor condenado, se reportó que antes de ser privado de la libertad NO contaba con trabajo ni ingresos estables. Dicho señor con cuenta con formación para el empleo, laboraba en construcción por días y en ocasiones trabajaba, también por días, en la instalación de cocinas integrales.

La señora madre del condenado ha encarado las responsabilidades económicas de su grupo familiar durante toda la vida.

CONCEPTO

El señor condenado DIEGO DURAN MONTOYA, tiene 38 años, soltero sin hijos. El grupo familiar del señor condenado está conformado por su señora madre y se evidenció la existencia de un grupo familiar extensivo constituido por varios familiares adultos quienes residen en el entorno cercano de la casa de habitación.

El grupo familiar del señor condenado cuenta con casa propia y condiciones de vida y bienestar. La señora madre del condenado actualmente trabaja por días en casas de familia.

El señor condenado cuenta con apoyo económico y solidaridad de toda su familia, personas quienes manifestaron estar dispuestas a recibirlo y garantizar su bienestar.

Las condiciones de habitabilidad observadas son aceptables. La familia cuenta con una casa de su propiedad. Aspectos de seguridad del lugar de habitación fueron calificadas como de BAJO riesgo, puesto que se trata de un sector de residencial que se caracteriza por ser tranquilo, sin problemáticas de seguridad importantes.

Como factores de riesgo encontramos el uso problemático de SPA, la nula formación para el empleo y la ausencia de proyectos laborales concretos, aunado a la dependencia económica de su familia, sostenida por el señor condenado a lo largo de su vida (…)".

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercen un control material del cumplimiento de la condena,

pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

> ***ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:*
>
> *1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.*
> *2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.*
> *3. Testimonio de vecinos y allegados.*
> *4. Labores de inteligencia.*
>
> *Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.*
>
> *En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.*

4.6.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **HURTO CALIFICADO CONSUMADO**

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

> *"**Artículo 38G**, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito;*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

***Parágrafo**. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

4.6.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada, se tiene que el Juzgado 37 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 27 de septiembre de 2019, indicó: *RESUELVE: … CUARTO: INFORMESE a la víctima, a través del Centro de Servicios Judiciales, que cuenta con el término de treinta (30) días hábiles, para inicial el correspondiente incidente de reparación integral, a partir de la emisión de éste fallo o que puede optar por agotar la acción civil correspondiente".*

En consecuencia, el homólogo 16 de Bogotá D.C., ordenó oficiar al Juzgado 37 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., a fin de que informara si contra el sentenciado se inició el trámite incidental de reparación integral.

El día 29 de enero de 2021 el mencionado Juzgado respondió: *"(…) me permito dar respuesta a su oficio allegado a este Sede Judicial dentro del proceso de la referencia, en el que solicita informe sobre el trámite de la audiencia de incidente de reparación integral adelantado en el despacho de conocimiento.*

Al respecto me permito informar que a la fecha no se registra solicitud alguna presentada en dicho sentido (…)".

Por lo anterior, cumple con este requisito.

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **CALLE 164 B BIS No. 8 A 72 PISO 2 BARRIO SAN CRISTOBAL NORTE DE BOGOTA D.C. Celular 3125645111**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **DIEGO DURAN MONTOYA** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa

para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conlleva. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluido proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Se ordena por la secretaría del Juzgado, **NOTIFICAR** el contenido del presente auto a la apoderada judicial del condenado **Dra. LAURA LILIANA OLAYA CUERVO** a través del correo electrónico lauraolayacuervo@gmail.com

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **CALLE 164 B BIS No. 8 A 72 PISO 2 BARRIO SAN CRISTOBAL NORTE DE BOGOTA D.C. Celular 3125645111, a favor de DIEGO DURAN MONTOYA**

5.1. Sobre la Competencia

Debido a que el condenado va a seguir purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en la ciudad de Bogotá D.C., por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el auto **PROCEDA** a remitir las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C., para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a

raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[5], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[6]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las*

[5] Ibídem.
[6] CSJ T **102248**

cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[7]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER al condenado **DIEGO DURAN MONTOYA** identificado con C.C. No. 80.870.690, redención de pena por trabajo de **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. - RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **DIEGO DURAN MONTOYA** identificado con C.C. No. 80.870.690, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **27 MESES y 13.5 DÍAS.**

TERCERO. - CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **DIEGO DURAN MONTOYA** identificado con C.C. No. 80.870.690, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

CUARTO. COMISIONAR al Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **DIEGO DURAN MONTOYA** quien se encuentra recluido en dicho penal.

QUINTO. - Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el

[7] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **CALLE 164 B BIS No. 8 A 72 PISO 2 BARRIO SAN CRISTOBAL NORTE DE BOGOTA D.C. Celular 3125645111, a favor de DIEGO DURAN MONTOYA**

SEXTO. - DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **CALLE 164 B BIS No. 8 A 72 PISO 2 BARRIO SAN CRISTOBAL NORTE DE BOGOTA D.C. Celular 3125645111, a favor de DIEGO DURAN MONTOYA** bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEPTIMO. – Se ordena por la secretaría del Juzgado, **NOTIFICAR** el contenido del presente auto a la apoderada judicial del condenado **Dra. LAURA LILIANA OLAYA CUERVO** a través del correo electrónico lauraolayacuervo@gmail.com

OCTAVO. - Una vez ejecutoriado el presente auto, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C., para continuar con la vigilancia de lo que resta del cumplimiento de la pena impuesta al infractor.

NOVENO. - Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, para que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)

Marzo 11 de 2024. Al despacho el proceso contra **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** identificado con C.C No. 1.070.962.584, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0159 del 29 de febrero de 2024 se recibe a través del correo institucional procedente del Grupo de Libertades CPMS Bogotá La Modelo, el 4 de marzo de 2024, la **NOTIFICACION A PPL DE REQUERIMIENTO POR AUTORIDAD JUDICIAL** en donde se evidencia que el mencionado condenado **FUE NOTIFICADO EL DÍA 1 DE MARZO DE 2024** y conforme a lo establecido en el art. 477 del C.P.P., **el término de traslado venció el día 6 de marzo de 2024**

Vencido el término de traslado el interno en mención, **NO PRESENTO ESCRITO DE DESCARGOS**.

Ahora bien, con el fin de confirmar la materialización de la conducción del condenado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** al domicilio (prisión) ubicado en la **Calle 14 Este No. 1 A – 47, barrio Manablanca de Facatativá Cundinamarca**, ordenado en auto de sustanciación No. 0159 del 29 de febrero de 2024, la oficial mayor de este Juzgado se comunicó el día 11 de marzo de 2024 a las 12:10 horas, con el área jurídica de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, llamada atendida por el DG. EDWIN CRUZ, quien informó que a la fecha el condenado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** se encuentra recluido en celdas primarias en ese establecimiento carcelario en espera al traslado de domicilio. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo once (11) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0096

CUI:	**25430600066020160130 9**
Condenado:	**WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS**
Identificación:	**C.C No. 1.070.962.584**
Delitos:	**HOMICIDIO SIMPLE**
Reclusión:	**PRISION DOMICILIARIA (VIGILANCIA ELECTRÓNICA) – CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. – LA MODELO –**
Decisión:	**REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA (comisión otro delito)** **ORDENA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL CSA BOGOTÁ D.C. – reparto -**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a pronunciarse en las diligencias seguidas contra **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** identificado con C.C No. 1.070.962.584, con el fin de estudiar la viabilidad de revocar el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria concedido por el homólogo 14 de Bogotá D.C., en auto del 17 de febrero de 2022, quien se encontraba en prisión domiciliaria en la **Calle 14 Este No. 1 A – 47, barrio Manablanca de Facatativá Cundinamarca**, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, pero que actualmente se encuentra recluido en ese establecimiento carcelario – *celdas primarias* -, en espera de ser trasladado al mencionado domicilio

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

2. ASUNTO.

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el día 14 de octubre de 2016 y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Facatativá Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de marzo de 2017, condenó a **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** como cómplice responsable del punible de **HOMICIDIO SIMPLE**, a la pena principal de **CIENTO CUATRO (104) MESES DE PRISIÓN**; y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al dela pena principal. NO CONCEDIÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. La sentencia condenatoria cobró ejecutoria el 2 de marzo de 2017.

WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto desde el **14 de octubre de 2016**[1]

El homólogo 14 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del asunto mediante auto del 12 de junio de 2017 y durante el curso del proceso reconoció redención de pena así: auto del 25 de junio de 2018 – 19 días; auto del 14 de agosto de 2018 – 30 días; auto del 28 de septiembre de 2018 – 30.5 días; auto del 7 de marzo de 2019 – 30 días; auto del 12 de junio de 2019 – 18 días; auto del 16 de septiembre de 2020 – 40 días.

A través de auto del 26 de noviembre de 2020, negó al infractor la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., y por decisión del 25 de noviembre de 2021 reconoció al condenado redención de pena de 34 días y negó la libertad condicional.

A través de auto proferido el 17 de febrero de 2022, el homólogo 14 de Bogotá D.C., concedió al sentenciado la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., acompañado del mecanismo de vigilancia electrónica, quien en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución por el equivalente tres (3) smlmv, a través de póliza judicial NB100343716[2] el 23 de febrero de 2022 y fue trasladado al domicilio ubicado en la **Calle 14 Este No. 1 A – 47, barrio Manablanca de Facatativá Cundinamarca** (Boleta de traslado por prisión domiciliaria No. 03)[3].

Este Juzgado AVOCO conocimiento del proceso el 18 de mayo de 2022 mediante auto de sustanciación No. 0495 y solicitó ante el Centro de Servicios Administrativos de Bogotá – homólogo 14 -, remitir de manera inmediata a este despacho, la copia de la diligencia de compromiso suscrita por el condenado, toda vez que no se allegó con el expediente.

Por auto interlocutorio No. 0273 del 18 de mayo de 2022, este despacho resolvió abstenerse de reconocer redención de pena y negó la libertad condicional, también se solicitó la documentación prevista en el art. 471 del C.P., actualizada, a fin de resolver el subrogado invocado.

[1] Acta de derechos del capturado folio 5 y Boleta Detención Intramural folio 9 - archivo 0018 - expediente digitalizado
[2] Archivo 0013 – expediente digitalizado
[3] Archivo 0014-expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Conforme a lo requerido se recibió el oficio No. 114-CPMSBOG-OJ-9163, por el cual la CPMS BOGOTA LA MODELO, comunica sobre la visita realizada al privado de la libertad, quien NO HA CUMPLIDO CON LA MEDIDA O MECANISMO SUSTITUTIVO DE LA PENA, presentando transgresiones y/o evasiones de su lugar de domicilio, según el reporte de visitas oficio 114-ECBOG-OJ-DOM-5484.

También se recibió el oficio No. 114-CPMSBOG-OJ-9714 suscrito por el señor director de la CPMS BOGOTA La Modelo, adjuntando la documentación para el reconocimiento de redención de pena, el reporte de visitas negativas del privado de la libertad, y manifestó que el establecimiento carcelario se abstiene de emitir CONCEPTO FAVORABLE debido a que el peticionario en mención NO CUMPLE CON LA MEDIDA O MECANISMO SUSTITUTIVO DE LA PENA presentando transgresiones y/o evasiones de su lugar de domicilio y por lo tanto esa oficina se priva de tramitar favorablemente la solicitud

En consecuencia, se realizó la consulta en el aplicativo PPL INPEC, y el condenado se halló ACTIVO SINDICADO recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, motivo por el cual la oficial mayor de este Juzgado estableció comunicación con el área Jurídica de la CPMS Villeta el día 12 de septiembre de 2022 siendo las 16:00 horas, en donde le informaron que el interno WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS identificado con C.C No. 1.070.962.584, fue capturado el día 3 de junio de 2022 por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, radicado CUI 252696099368202200225, y se encuentra a disposición del Juzgado 1º Penal Municipal de Facatativá Cundinamarca, recluido en la CPMS Bogotá La Modelo.

En efecto, este Juzgado a través de auto interlocutorio No. 0503 del 16 de septiembre de 2022, reconoció al sentenciado 9.5 días de redención de pena y ordenó correr el traslado del artículo 477 del C.P.P., para que justificara los motivos por los cuales incumplió con las obligaciones impuestas, dado a la comisión del delito de hurto calificado y agravado, radicado CUI 252696099368202200225, siendo capturado el pasado 3 de junio de 2022.

También se le solicitó al condenado que explicara porque no se encontró en su lugar de domicilio ubicado en la Calle 14 Este No. 1 A – 47, barrio Manablanca de Facatativá Cundinamarca, el día 10 de marzo de 2022, conforme lo informado por la CPMS BOGOTA LA MODELO en oficios 114 ECBOG-OJ-DOM-5484 del 29 de junio de 2022 y 114-ECBOG-OJ-DOM-5550 del 14 de junio de 2022: "*teniendo en cuenta el informe emitido por el dragoneante Jiménez Méndez diego, el día 10 de marzo de 2022 manifiesta que al llegar al domicilio golpea en repetidas ocasiones sin que nadie atienda al llamado, se procede a llamar al número abonado donde contesta una mujer quien informa no conocer al privado de la libertad, por lo cual no pudo ubicar al privado de la libertad".*

De igual manera, se ordenó oficiar al Centro de Servicios Judiciales de Facatativá – Juzgado 1º Penal Municipal, con el fin de que informe sobre el estado actual del proceso radicado CUI 252696099368202200225, delito hurto calificado y agravado, por el cual el infractor quien fue capturado el pasado 3 de junio de 2022 y se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, por consiguiente, y se solicitó, que una vez se emita la decisión que corresponda, se allegue copia de la misma a este Juzgado y se comisionó al señor director de la CPMS BOGOTA LA MODELO (despacho comisorio No. 0033), para que NOTIFIQUE personalmente el contenido del presente asunto al condenado.

Se recibe procedente del Centro de Servicios Judiciales el oficio No. 838 del 19 de septiembre de 2022, por el cual informó:

1. *El día 03 de junio de la presente anualidad, se recibió solicitud de audiencias preliminares dentro de la noticia criminal 254306000660-201601309, la cual se*

asignó por reparto al Juzgado 2 Penal Municipal de Facatativá con función de control de garantías. (Ver 1. Acta Reparto Garantías)

2. *En la misma fecha el mencionado despacho dispuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mediante la expedición de la boleta de detención intramural No. 23 (Ver. 2 Boleta de detención intramural)*
3. *En la mencionada diligencia la Fiscalía General de la Nación, presentó el traslado del escrito de acusación del proceso, razón por la cual una vez este Centro de Servicios recibió la carpeta digital del mismo, procedió a remitir la carpeta al Juzgado 1 Penal Municipal el 8 de junio de la presente anualidad. (Ver 3. Acta reparto Conocimiento)*

Se adjunta: relación de diligencias en garantías, el acta individual de reparto y la Boleta de Detención Intramural No. 023, en la cual se observa: fecha captura 3 de junio de 2022 – radicado CUI 252696099368202200225 medida de aseguramiento privativa de la libertad art. 307 literal A numeral 1º del C.P.P. – detención preventiva en establecimiento carcelario ordenada por el Juzgado 2º Penal municipal de Facatativá Cundinamarca con función de control de garantías.

A través de auto de sustanciación No. 0289 del 27 de marzo de 2023, se ordenó oficiar nuevamente al Juzgado 1º Penal Municipal de Facatativá, reiterando la solicitud de las copias de la sentencia y se comisionó por segunda vez al señor director de la CPMS BOGOTA LA MODELO, para que notifique personalmente al condenado del auto interlocutorio No. 0503 del 16 de septiembre de 2022 (despacho comisorio No. 0013), solicitándose que en el término de 3 días contados a partir de la notificación allegue la certificación de la notificación de la mencionada providencia y se ofició al homólogo 22 de Bogotá dando respuesta acerca de la solicitud del estado actual del proceso.

Se recibe el día 28 de marzo de 2023 procedente del Juzgado 1º Penal Municipal de Facatativá Cundinamarca, copia de la sentencia condenatoria radicado CUI 25 269 60 00691 2022 00225, proferida por el 26 de agosto de 2022 en contra de **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS**, por el delito de hurto calificado y agravado.

Se recibe a través del correo institucional el 29 de febrero de 2024, el oficio 114-CPMSBOG-AJ-LIB-1559 suscrito por el Dr. Nelson Alberto Cárdenas Espitia – Asesor Jurídico Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá, por el cual deja a disposición al prenombrado infractor a quien el día 29 de febrero de 2024, el homólogo 22 de Bogotá D.C., allegó Boleta de Libertad No. 026 de fecha 27 de febrero de 2024, concediendo LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA en favor del mismo, dentro del expediente con radicación No. 252696099368202200225 por el delito de hurto calificado agravado, indicando, que dentro del trámite de cumplimiento a la orden de libertad, se advierte REQUERIMIENTO JUDICIAL en el proceso 25430600066020160130 9 a cargo de este despacho, por lo tanto, de ser requerido solicita emitir la correspondiente Boleta de Encarcelación o en su defecto, aclarar la situación jurídica del mismo.

En efecto, este despacho mediante auto de sustanciación No. 0159 del 29 de febrero de 2024, dispuso legalizar la disposición del infractor **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** identificado con C.C No. 1.070.962.584 y solicitó al asesor jurídico de la CPMS BOGOTA LA MODELO, la conducción de manera inmediata del infractor a su lugar de domicilio ubicado en la **Calle 14 Este No. 1 A – 47, barrio Manablanca de Facatativá Cundinamarca,** lugar donde deberá continuar purgando pena en prisión domiciliaria dada su situación de privado de la libertad dentro del presente asunto y se requirió que informe sobre el trámite de traslado solicitado.

También se ordenó correr el traslado del art. 477 del C.P.P., al condenado para que presente las explicaciones pertinentes que justifiquen los motivos por los cuales incumplió con las obligaciones impuestas, al estar en prisión domiciliaria, dado a la comisión del delito de hurto calificado y agravado, radicado CUI 252696099368202200225, siendo capturado

el pasado 3 de junio de 2022, de igual forma se solicitó al condenado que explique porque no se encontró en su lugar de domicilio el día 10 de marzo de 2022, conforme lo informado por la CPMS BOGOTA LA MODELO en oficios 114 ECBOG-OJ-DOM-5484 del 29 de junio de 2022 y 114-ECBOG-OJ-DOM-5550 del 14 de junio de 2022: "*teniendo en cuenta el informe emitido por el dragoneante Jiménez Méndez diego, el día 10 de marzo de 2022 manifiesta que al llegar al domicilio golpea en repetidas ocasiones sin que nadie atienda al llamado, se procede a llamar al número abonado donde contesta una mujer quien informa no conocer al privado de la libertad, por lo cual no pudo ubicar al privado de la libertad".*

Se dispuso comisionar al señor director de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO (despacho comisorio No. 010), para que notifique personalmente el contenido del mencionado auto y se entregue el oficio No. 0366 al condenado.

Por consiguiente, se recibe a través del correo institucional procedente del Grupo de Libertades CPMS Bogotá La Modelo, el 4 de marzo de 2024, la **NOTIFICACION A PPL DE REQUERIMIENTO POR AUTORIDAD JUDICIAL** en donde se evidencia que el mencionado condenado **FUE NOTIFICADO EL DÍA 1 DE MARZO DE 2024** y conforme a lo establecido en el art. 477 del C.P.P., **el término de traslado venció el día 6 de marzo de 2024**

Vencido el término de traslado el interno en mención, **NO PRESENTO ESCRITO DE DESCARGOS**.

Ahora bien, con el fin de confirmar la materialización de la conducción del condenado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** al domicilio (prisión) ubicado en la **Calle 14 Este No. 1 A – 47, barrio Manablanca de Facatativá Cundinamarca**, ordenado en auto de sustanciación No. 0159 del 29 de febrero de 2024, la oficial mayor de este Juzgado se comunicó el día 11 de marzo de 2014 a las 12:10 horas, con el área jurídica de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, llamada atendida por el DG. EDWIN CRUZ, quien informó que a la fecha el condenado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** se encuentra recluido en celdas primarias en ese establecimiento carcelario en espera al traslado de domicilio.

En este orden de ideas, ingresan las presentes diligencias al despacho para el estudio de la posible revocatoria de la prisión domiciliaria.

3.5 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[4] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total,*

[4] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[5].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

[5] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

4.1 Competencia

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el 14 de octubre de 2016, el señor **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS,** fue investigado y judicializado bajo el imperio de la ley 599 de 2000 y 906 de 2004. Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la domiciliaria, según lo señala el artículo 38 y ss de la ley 906 de 2004.

De igual manera es competente por el factor territorial, como quiera que el condenado para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, fijo el domicilio en la **Calle 14 Este No. 1 A – 47, barrio Manablanca de Facatativá Cundinamarca,** vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo - correspondiente al Circuito Penitenciario y Carcelario de este juzgado determinado por el Consejo Superior de la Judicatura.

4.2. De la revocatoria

El mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria es un beneficio que consiste como detalla su nombre en que el infractor en lugar de purgar la pena en forma intramural pueda de la misma manera cumplir a lo que ha sido condenado domiciliariamente rodeado del núcleo familiar y sustrayéndolo del ambiente carcelario “condicionado” al cumplimiento de unas obligaciones, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su resocialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible pero condicionada a que el beneficiario cumpla con ciertas exigencias de las cuales depende su cumplimiento.

Visto lo anterior y observando en principio que **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS NO** emitió pronunciamiento alguno, ni dentro del término legal concedido, es decir, **NO** dio las explicaciones necesarias, conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0159 del 29 de febrero de 2024, el cual fue notificado al condenado el día 1 de marzo de 2014, según constancia de notificación allegada por el área de libertades de la CPMS BOGOTA D.C. LA MODELO, por lo tanto, procede el juzgado a examinar.

Al sentenciado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS**, el homólogo 14 de Bogotá D.C., mediante auto del 17 de febrero de 2022, le concedió la prisión domiciliaria señalada en el artículo 38G del Código Penal y en dicha providencia expuso:

Ahora, bien se profirió la Ley 1709 de 2014 que adicionó el artículo 38 G al C.P. en los siguientes términos.

> "Artículo 28. Adiciónese un artículo 38G o lo Ley 599 de 2000, del siguiente tenor: Artículo 38G. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los cosos en que el condenado pertenezco al grupo familiar de lo víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzado; secuestro extorsivo; torturo; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicos con fines terroristas, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizado; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizado; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o

> explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente Código".

La anterior norma, expresamente nos remitía al ar1ículo 388 del Código Penal que fuera adicionada por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, el cual consagra en los apartes pertinentes:

> "Artículo 23. Adiciónese un artículo 38B a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor: Artículo 388. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:
>
> *3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.*
> *En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.*
> *4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:*
> *a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;*
> *b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad."*

En efecto al reunir los presupuestos señalados en la norma concedió el infractor este mecanismo sustitutivo, el cual, no es para que goce de la libertad y esté programando citas, visitas, salidas o estar infringiendo la ley, sino que la prisión domiciliaria como mecanismo alternativo se debe regir bajo las mismas normas y políticas de los Reglamentos internos del INPEC para la intramural.

De conformidad con lo anterior, el Código de Procedimiento Penal –*Ley 906 de 2004*- establece que tal revocatoria debe tener lugar previo traslado al sentenciado en donde en aras de garantizar su derecho al debido proceso, le son solicitadas las explicaciones correspondientes.

Al respecto expresa la norma:

> *"**ARTÍCULO 477. NEGACIÓN O REVOCATORIA DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.** De existir motivos para negar o revocar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad los pondrá en conocimiento del condenado para dentro del término de tres (3) días presente las explicaciones pertinentes.*
>
> *La decisión se adoptará por auto motivado en los diez (10) días siguientes."*

La Corte Constitucional se refirió sobre el tópico mediante la Sentencia C – 006 de 2003, Magistrado ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en los siguientes términos:

> *"En ejercicio de la potestad de configuración y de diseño de la política criminal, el legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una persona responsable de haber cometido una conducta punible. Para ello, puede definir cuáles conductas son socialmente reprochables y cuáles han dejado de serlo,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *puede determinar cuándo procede la privación de la libertad y cuándo es necesario imponer sanciones menos gravosas, o también establecer beneficios o subrogados penales cuando a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio dan lugar a la pérdida temporal de la libertad personal, existen circunstancias que señalan que es innecesaria la reclusión en un establecimiento carcelario. Es en ejercicio de dicha potestad que el legislador estableció la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esta figura constituye un beneficio que otorga la ley penal a quienes habiendo sido condenados a una pena de prisión no superior a los tres años, cumplan con las condiciones establecidas en ella. Este beneficio no opera de manera automática, pues el juez debe evaluar los antecedentes del condenado y la gravedad de la conducta para determinar si es o no necesaria la ejecución de la condena de privación de la libertad".*

Y añadió:

> *"La revocatoria no constituye una sanción que comporte el desconocimiento del principio de non bis in ídem, pues al condenado no se le impone una sanción adicional por el mismo hecho que originó la condena, ni se agrava el quantum de su condena. La revocatoria de la suspensión de la ejecución condicional de la pena es la consecuencia jurídica prevista por el legislador para el evento de incumplimiento y no tiene por fin sancionar al condenado, sino garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder gozar de dicho beneficio".*

Atendiendo a las disposiciones de las normas citadas, este despacho ordenó correr al sentenciado el traslado del artículo 477 del C.P.P., por auto de sustanciación No. 0159 del 29 de febrero de 2024, para que se pronunciara respecto de los motivos por los cuales transgredió, y según consta en el documento de **NOTIFICACION A PPL DE REQUERIMIENTO POR AUTORIDAD JUDICIAL**, el condenado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS, FUE NOTIFICADO EL DÍA 1 DE MARZO DE 2024** venciendo el término de traslado **el día 6 de marzo de 2024**, **y el prenombrado NO PRESENTO ESCRITO DE DESCARGOS**.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, y analizadas las diligencias, el sentenciado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, concedido por el homólogo 14 de Bogotá D.C., mediante auto del 17 de febrero de 2022

El condenado aceptó las condiciones que le fueron impuestas con la suscripción de la diligencia de compromiso, ratificando así su consentimiento a cumplir, cabalmente las obligaciones que impone el artículo 38B del Código Penal.

Una vez se le concedió la prisión domiciliaria en lugar de someterse a las obligaciones impuestas en el acta de compromiso y en las normas y políticas que rigen los reglamentos internos de la Cárceles del INPEC, el señor **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** ha hecho caso omiso infringiendo la ley.

En este proceso no solo se está tratando de la transgresión ocasionada por el condenado al haberse evadido de su domicilio, al tener mala conducta, **sino porque fue capturado el día 3 de junio de 2022, hechos del CUI 252696099368202200225, delito HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, condenado a la pena principal de 21 meses y 18 días por el Juzgado 1º Penal Municipal con función de conocimiento de Facatativá Cundinamarca, a sabiendas que se encontraba purgando pena bajo prisión domiciliaria, y quedando por cumplir la pena en prisión domiciliaria**, quebrantando de esta forma las obligaciones que están estipuladas en el artículo 38 B del C.P.

Lo anterior significa que **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** no acató los reglamentos del INPEC ni tampoco lo consagrado en el artículo 38B y ss de la Ley 599 de 2000 y artículo 29 A de la Ley 65 de 1993, sobre todo en lo que tiene que ver con las salidas de su residencia sin autorización judicial.

Sobre este punto ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

> *"…Este comportamiento revela una personalidad carente de escrúpulos frente al delito, cuando debía ser paradigma de rectitud y ejemplo para los demás, lo que permite colegir que la prevención especial y la reinserción social, solo se harán posibles mediante la detención intramural.*
>
> *Y son precisamente la gravedad, naturaleza y modalidades del reato imputado, los que llevan a pronosticar que si pasó por encima de la ley, cuando tenía el deber especial de acatarla, menos la respetará cuando no se desempeñe como juez penal o simple particular y que, por ende, pondrá en peligro a la comunidad, al no estar detenida intramuralmente.*
>
> *De otra parte, desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular gravedad, como el presente, merecen ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un tratamiento benigno llevaría, como lo ha dicho la Sala[6], un mensaje de desequilibrio en la aplicación del Derecho, una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia…"(subrayado nuestro).*

Lo anteriormente expuesto indica que el sentenciado **INCUMPLIÓ** las obligaciones que impone la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria, por tanto, se estudia la posibilidad de revocar la medida concedida.

Al no estar justificado el incumplimiento de las obligaciones impuestas, y dada esta actitud de franco desacato a la justicia, de persistencia y obstinación por la transgresión y comportamiento rebelde, pese al generoso tratamiento y a las facilidades que se le han reconocido, deja ver que no está dispuesto a sujetarse a las condiciones que le imprimen su calidad de condenado y por lo mismo le impiden aspirar a que se conserve la vigencia del sustituto conferido, pues se demuestra que el proceso resocializador no está surtiendo el efecto positivo esperado, en torno de la sujeción a los compromisos adquiridos, que son requisito fundamental de las benéficas condiciones reconocidas por la autoridad Judicial, por lo cual se evidencia la necesidad de aplicar tratamiento intramural, y como consecuencia directa, ha de revocarse el sustituto de la prisión domiciliaria concedido.

Así, este Despacho considera que el encartado necesita tratamiento penitenciario para que reflexione sobre su proceder y cumpla tanto con las normas de comportamiento legalmente establecidas, como las disposiciones penales que transgredió.

Por último, como la sanción penal impuesta no ha prescrito, y como quiera que, cometió un nuevo delito (radicado CUI 252696099368202200225, siendo capturado el 26 de febrero de 2020), encontrándose en prisión domiciliaria, que era su sitio de reclusión, y ni siquiera atendió al requerimiento de auto de sustanciación No. 0159 del 29 de febrero de 2024 proferido por este despacho, encuentra este servidor que la sanción penal está vigente, razón por la cual es pertinente exigir el cumplimiento de las obligaciones a que se sometió el sentenciado.

En consecuencia, sin ahondar en más consideraciones, este Despacho por encontrar que el sentenciado violó por acción sus obligaciones, se **REVOCARÁ** el sustituto penal concedido por el homólogo 14 de Bogotá D.C., en auto del 17 de febrero de 2022.

4.4 Sobre el Tiempo del Cumplimiento de la Pena.

[6] *Ver auto de 23 de octubre/00, Seg. instancia. Rad. 16997. M. P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Analizadas las diligencias se tiene que el sentenciado ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el día 14 de octubre de 2016**[7] **hasta el 3 de junio de 2022** (fecha en que fue capturado por el radicado CUI 252696099368202200225, delito hurto calificado y agravado), por lo que ha cumplido **físicamente 2058 días, que equivalen a 68 meses y 18 días.**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **7 meses y 1 día** reconocidas así:

- JEPMS 14 Bogotá D.C., auto del 25 de junio de 2018 reconoce 19 días
- JEPSM 14 Bogotá D.C., auto del 14 de agosto de 2018 reconoce 30 días
- JEPMS 14 Bogotá D.C., auto del 28 de septiembre de 2018 reconoce 30.5 días
- JEPMS 14 Bogotá D.C., auto del 7 de marzo de 2019 reconoce 30 días
- JEPMS 14 Bogotá D.C., auto del 12 de junio de 2019 reconoce 18 días
- JEPMS 14 Bogotá D.C., auto del 16 de septiembre de 2020 reconoce 40 días.
- JEPMS 14 Bogotá D.C., auto del 25 de noviembre de 2021 reconoce 34 días
- Facatativá Cundinamarca, auto del 16 de septiembre de 2022 reconoce 9.5 días

Por lo tanto, ha cumplido un tiempo de **SETENTA Y CINCO (75) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS.**

Como fue condenado a la pena principal de prisión de **104 meses**, vemos que le **QUEDA POR CUMPLIR VEINTIOCHO (28) MESES Y ONCE (11) DÍAS de manera intramural.**

Sobre el traslado inmediato del condenado de prisión domiciliaria a intramural en sede de Tutela señaló la Corte Suprema de Justicia:

> *"Por tanto, a pesar de que el auto interlocutorio proferido el del 21 de mayo del año en curso por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta no señala el efecto en que proceden los recursos de reposición y apelación, se entiende que el segundo es en el efecto devolutivo, por lo que disponer el traslado inmediato de la aquí accionante al establecimiento penitenciario no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten…"*[8]*.*

En otra decisión afirmó:

> *"Luego de la revocatoria de la prisión domiciliaria por el incumplimiento de las obligaciones, el art. 29F ibídem de la misma codificación contempla:*
>
> *ARTÍCULO 29F. REVOCATORIA DE LA DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA.* ***El incumplimiento*** *de las obligaciones impuestas* ***dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada*** *del juez competente.*
>
> ***El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida*** *o el funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia,* ***detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez*** *que profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.*
>
> *En consonancia con las disposiciones en cita, en fallo CSJ STP10238 – 2019, advirtió esta misma Sala de Decisión que «disponer el* ***traslado inmediato*** *de*

[7] Acta de derechos del capturado – folio 5 y Boleta Detención Intramural folio 9 – archivo 018 – expediente digitalizado.
[8] CSJ T RAD 105612 del 30 de julio de 2019, M.P. Dr **LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA**

> *la aquí accionante **al establecimiento penitenciario** no trasgrede los derechos al debido proceso y defensa que le asisten».*
>
> *En otras palabras, queda claro que, es deber del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, disponer el traslado perentorio del condenado que incumple las obligaciones adquiridas con el otorgamiento de la prisión domiciliaria, al centro carcelario…"*[9]

Por lo anteriormente expuesto y en vista que el sentenciado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** se encuentra actualmente recluido en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo - (celdas primarias por las presentes diligencias), se ordena por la secretaría del Juzgado, **OFICIAR** al señor director y asesor jurídico de dicho penal, con el fin de comunicarle que el condenado deberá materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **28 meses y 11 días** de manera intramural.

Una vez ejecutoriada la presente decisión **PROCÉDASE** a **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. – reparto -, por competencia.

4.5. Sobre la exigibilidad de la Caución

De otra parte, como quiera que el sentenciado violó las obligaciones a que se encontraba sometido en virtud de la prisión domiciliaria, se dispone de conformidad con lo previsto en el artículo 372 del C. P. P., hacer exigible la caución constituida para disfrutar de la prisión domiciliaria, en consecuencia, una vez en firme esta decisión, se informara al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo.

4.6. Sobre la Comisión y Notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo – (celdas primarias por las presentes diligencias), se ordena por la secretaría de este Despacho **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al prenombrado el contenido del presente auto.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).
En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.** Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de*

[9] CSJ T RAD 106432 del 3 de septiembre de 2019 M.P . Dra **PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR**

los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.
Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[10], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad…"[11]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así,*

---

[10] Ibídem.
[11] CSJ T **102248**

de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[12]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ-CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que el sentenciado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** identificado con C.C No. 1.070.962.584 tiene descontado por pena física más las redenciones de pena reconocidas un total de **75 MESES y 19 DÍAS** de la pena principal de prisión de **104 meses**

SEGUNDO. - REVOCAR al interno **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** identificado con C.C No. 1.070.962.584 el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria concedido por el homólogo 14 de Bogotá D.C., en auto del 17 de febrero de 2022, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente auto, en consecuencia, el condenado deberá purgar el resto de la pena que le queda, esto es, **28 meses y 11 días de manera intramural**

TERCERO. - En vista que el sentenciado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** se encuentra actualmente recluido en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo - (celdas primarias por las presentes diligencias), se ordena por la secretaría del Juzgado, **OFICIAR** al señor director y asesor jurídico de dicho penal, con el fin de comunicarle que el condenado deberá materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **28 meses y 11 días de manera intramural.**

CUARTO. - Teniendo en cuenta que **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo – (celdas primarias por las presentes diligencias), se ordena por la secretaría de este

[12] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Despacho **COMISIONAR** a las directivas del mencionado penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al prenombrado el contenido del presente auto.

QUINTO. - Por la Secretaria del Juzgado **PROCÉDASE** a remitir copia de la presente providencia a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, para que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

SEXTO. - Una vez ejecutoriada la presente decisión **PROCÉDASE** a **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. – reparto -, por competencia.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0555
(<u>este oficio NO sustituye boleta de detención o encarcelación</u>)

Señores
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
LA MODELO
Bogota D.C.
direccion.ecmodelo@inpec.gov.co
juridica.ecmodelo@inpec.gov.co

<u>URGENTE - MATERIALIZAR EL TIEMPO QUE LE RESTA POR CUMPLIR DE LA PENA</u>

CUI:	**25430600066020160130 9**
Condenado:	**WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS**
Identificación:	**C.C No. 1.070.962.584**
Delitos:	**HOMICIDIO SIMPLE**
Reclusión:	**PRISION DOMICILIARIA (VIGILANCIA ELECTRÓNICA) – CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. – LA MODELO –**
Decisión:	**REVOCA PRISIÓN DOMICILIARIA (comisión otro delito)** **ORDENA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL CSA BOGOTÁ D.C. – reparto -**

Cordial saludo:

De conformidad con lo ordenado en auto de la fecha emitido por el suscrito, le informo que el condenado **WILMER HARLEY ROBLES CUBILLOS** identificado con C.C No. 1.070.962.584 quien se encuentra en recluido por el presente asunto en celdas primarias, deberá materializar el tiempo que le resta por purgar de la condena impuesta, es decir, **28 meses y 11 días** de manera intramural.

Lo anterior, toda vez que mediante auto interlocutorio No. 0096 del 11 de marzo de 2024, este Juzgado resolvió **REVOCAR** la prisión domiciliaria que le había sido otorgada por el homólogo 14 de Bogotá D.C., por auto del 17 de febrero de 2022.

Se adjunta copia de auto interlocutorio No. 0096

Atentamente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo doce (12) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0097

CUI	**18001600055320220013l**
Interno:	**2023-0238**
Sentenciado:	**SERGIO ANDRES OLAVE GAMBOA**
Delito:	**FABRICACIÓN, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS, MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el 5 de marzo de 2024 y la orden de asignación en programas de TEE – manipulación de alimentos (A/S) allegado el 8 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **SERGIO ANDRES OLAVE GAMBOA** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2 .DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014, a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 79 (Ley 600 de 2000) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 de la Ley 63 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19057863	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO-Regional Ejercito	622	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**622**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **622** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **38.87 días**, es decir, **UN (1) MES Y OCHO PUNTO OCHENTA Y SIETE (8.87) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **SERGIO ANDRES OLAVE GAMBOA**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **SERGIO ANDRES OLAVE GAMBOA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.542.647, redención de pena por trabajo de **UN (1) MES Y OCHO PUNTO OCHENTA Y SIETE (8.87) DÍAS,** por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECC / FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON MOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo doce (12) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0098

CUI:	**86568600052720200110O**
Número Interno:	**2022-0292**
Sentenciado:	**JAIME ALZATE ALZATE**
Delito:	**ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el día 5 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor de **JAIME ALZATE ALZATE** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2 .DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, el certificado TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19057748	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO – Regional Ejercito	613	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**613**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **613** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **38.31 días**, es decir **UN (1) MES Y OCHO PUNTO TREINTA Y ÚN (8.31) DÍAS,** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **JAIME ALZATE ALZATE**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los

Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

R E S U E L V E

PRIMERO - RECONOCER a **JAIME ALZATE ALZATE** identificado con C.C. No. 4.661.164, redención de pena por trabajo en equivalencia a **UN (1) MES Y OCHO PUNTO TREINTA Y ÚN (8.31) DÍAS** por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo doce (12) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0099

CUI	**11001600000202202536**
Interno:	**2023-0254**
Sentenciado:	**MILTON DE JESUS AVILA ORTIZ**
Delito:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON EL DE TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ARMAS O MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO Y ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **MILTON DE JESUS AVILA ORTIZ** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2 .DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014, a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 79 (Ley 600 de 2000) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*
>
> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*
>
> *Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19057816	Del 1 de octubre al 28 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO-Regional Ejercito	---	344	Sobresaliente	Ejemplar
19057816	Del 29 al 31 de diciembre de 2023	CPAMSEJECO-Regional Ejercito	12	---	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**12**	**344**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que:

Las **12** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **0.75 días** y las **344** horas por concepto de **estudio** corresponden a **28.66 días.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **VEINTINUEVE PUNTO CUARENTA Y ÚN (29.41) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **MILTON DE JESUS AVILA ORTIZ**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

y equidad»[4]*, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER a **MILTON DE JESUS AVILA ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 14.326.965, redención de pena por trabajo de **0.75 días** y redención de pena por estudio de **28.66 días**, es decir, que **el tiempo total reconocido en el presente proveído es de VEINTINUEVE PUNTO CUARENTA Y ÚN (29.41) DIAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado**.

SEGUNDO. – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo doce (12) de 2024. Al despacho el proceso contra **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA** identificada con la C.C. No 1.019.005.478, para pronunciamiento de fondo sobre solicitud de extinción de la sanción penal y devolución de caución prendaria.

Informo que **al haber ubicado el proceso en el AZURE el cual está conformado por 14 condenados y 26 cuadernos que torna complicada el estudio del proceso. Además dicho proceso fue escaneado y es difícil en algunas carpetas su comprensión.**

Posteriormente a exhaustivo análisis obra la caución prendaria consignada por la condenada en el Banco Agrario, a favor del Juzgado Fallador.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Quince (15) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0100

C.U.I.	**11001600070620l8-00397**
No. Interno:	**2022-0248**
Sentenciada:	**CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA**
Identificación:	**1.019.005.478**
Delitos:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR Y UTILIZACIÓN ILÍCITA DE REDES DE COMUNICACIÓN**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la Rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho, a decidir lo que en derecho corresponda acerca de la extinción de la sanción penal y rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a favor de **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.005.478, una vez recibidos los medios de prueba requeridos para tal efecto.

2.- CUESTION PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos durante 2018, **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA y otros**[1] fueron llevados a juicio y mediante fallo del 12 de diciembre de 2019 el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión con función de conocimiento de Funza (Cundinamarca) resolvió condenarlos a la pena principal de VEINTISIESTE (27) MESES DE PRISIÓN, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso igual al de la pena principal al ser hallados penalmente responsable del delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON USO ILÍCITO DE REDES DE COMUNICACIÓN**.

A los sentenciados les fue concedida la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa firma de diligencia de compromiso, previo pago de caución prendaria por UN (1) SMLMV. Fue fijado un período de prueba de VEINTICUATRO (24) MESES[2]. La condenada canceló la caución impuesta por la suma de $828.116 a favor del Juzgado fallador el 12 de diciembre de 2019[3]. De igual modo, la sentenciada firmó la correspondiente diligencia de compromiso en esa misma fecha[4].

La sentencia quedó ejecutoriada el primero de 12 DE DICIEMBRE DE 2019[5].

Este despacho recibió el expediente el 29 de diciembre de 2020 y avocó conocimiento de la causa, sin privado de la libertad, el 25 de abril de 2022.

La señora sentenciada solicitó la extinción de la sanción penal y mediante auto de sustanciación 112 de 2023, se ofició al Departamento de Policía Cundinamarca-SIJIN, para solicitar los antecedentes penales del señor **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA,** previo a analizar la viabilidad de extinguir la sanción penal por ella solicitada.

Se reciben los antecedentes penales del Sentenciada, emitidos por la Consultora base de datos Sistema de Información de OCN INTERPOL.

Consultada la disponibilidad del expediente digital en el aplicativo AZURE, fue encontrado el día de hoy.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[6] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que:

---

[1] Edwar Javier Patino Puerta, Marlene Luz Casallas Escobar, Jeison Javier Hilarión Romero, Nelson Enrique Ferrer Pérez, Mallerlin Cortes Arteaga, Juan Pablo Benavides Hurtado, Deisy Johana Pacheco Herrera, María Angelica Mondragón Vargas, Sandra Milena Peñaranda Buitrago, Sindy Yulieth Roncancio Virviescas, Leidy Carolina Arias Sánchez, Tiffany Geraldine Barona Hilarión y Erik Jaiber Benavidez Peñaranda.

[2] Folios 2 a 16 cuaderno digital 1 parte 22 / cuaderno digital 1 parte 23 / folio 1 a 6 cuaderno digital 1 parte 24

[3] Folio 10 cuaderno digital 1 parte 21

[4] Folio 11 cuaderno digital 1 parte 21

[5] Folio 8 cuaderno digital 1 parte 25.

[6] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[7].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

[7] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

4.- CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 COMPETENCIA

Conforme a la fecha de los hechos, que datan de los años 2018 y 2019, la señora **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA,** fue investigada y judicializada bajo el imperio de la ley 599 de 2000 (Código Penal) y ley 906 de 2004.

Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la extinción de la sanción penal, según lo señala el numeral 8 del artículo 38 de la ley 906 de 2004, que indica:

> ***"ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.*** *Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: (…)*
>
> *8.* ***De la extinción de la sanción penal****…"*

4.2 DE LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL

Atendiendo al estado actual del proceso, y observando que el periodo de prueba impuesto al condenado ha vencido, el Despacho entra a estudiar la extinción de la sanción penal a favor de **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA.**

La suspensión condicional de la ejecución de la pena es un subrogado que consiste, como su nombre lo indica, en suspender la pena a quien acredite los requisitos previamente establecidos en la ley, y su disfrute esta "condicionado" al cumplimiento de unas obligaciones dentro de un periodo de prueba establecido, en busca de prevenir la criminalidad y sustraer del ambiente carcelario a aquellos autores de delitos de penas mínimas, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su resocialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible y es condicional pues el beneficiario está obligado a cumplir con ciertas exigencias de las cuales depende la extinción de la condena y las penas impuestas o la ejecución de la sentencia respectiva.

De conformidad con el artículo 67 del Código Penal, la extinción y liberación de la pena se presenta cuando transcurrido el período de prueba lo cumpla, sin que el condenado haya incurrido en ninguna de los eventos en que puede originar su revocación, siempre y cuando el funcionario judicial mediante auto, así lo hubiera decretado.

Reza el artículo 67 del Código Penal:

> *"Artículo 67. Extinción y Liberación. Transcurrido el período de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena queda extinguida, y la liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine".*

Y es así debido a que el período de prueba es el lapso en el cual el condenado está obligado a cumplir las obligaciones impuesta y consignadas en un acta, término en el cual la autoridad judicial debe velar que el condenado cumpla con las reglas de convivencia social.

Aterrizando al caso objeto de estudio, según se dijo en líneas anteriores, a la señora **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA** le fue concedido el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Por otro lado, dentro de las diligencias no aparece noticia criminal alguna que dé cuenta que el condenado haya incurrido en la comisión de otro delito y tal afirmación tiene como base el oficio GS- 20230043891 / SUBIN – GRAIC 1.9 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL – SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DECUN.

Al respecto señaló la H. Corte Suprema de Justicia:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *"…Y es que una vez concedido cualesquiera de los beneficios, esto es, libertad condicional, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria o la vigilancia electrónica, el condenado está obligado a suscribir una diligencia de compromiso, oportunidad en la que se impone unas obligaciones a cumplir en un término concreto, el cual recibe la denominación de período de prueba…"*[8]

Una vez **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA** cumplió con la obligación de pago de caución prendaria y firmó diligencia de compromiso el **12 de diciembre de 2019** y en vista del cumplimiento del periodo de prueba de **DOS (2) AÑOS,** se confirma que se han reunido los requisitos y a la fecha se ha extinguido la pena, pues dentro de las diligencias no aparece noticia criminal alguna que dé cuenta que la condenada haya incurrido en el incumplimiento de las conductas descritas en el lapso que comprendía del del **12 DE DICIEMBRE DE 2019** al **12 DE DICIEMBRE DE 2021** y que originaran una posible revocación, y tal afirmación tiene como base el oficio del 28 de junio de 2023, GS-20230043891 / SUBIN – GRAIC 1.9 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL – SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DECUN.

Por lo anterior, la única opción jurídica, es **declarar la extinción y liberación de la pena**, porque de conformidad con el precitado artículo 67, la misma no puede proseguirse, operando de esta manera su expiración.

4.3. REHABILITACIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS

Este juzgado es competente para decidir de oficio sobre la rehabilitación de las penas accesorias conforme lo señalan los numerales de los artículos 92 (Ley 599 de 2000) 38-8 y 480 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al corresponder los juzgados de los Circuitos penitenciarios de Facatativá – Cundinamarca conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[9].

Atendiendo los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último, dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *"la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas"*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *"el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía".*

Agrega que *"Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.".*

---

[8] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, RAD. 45746 (15-04-15), M.P. Dr Fernando Alberto Castro Caballero

[9] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[9].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

> *"**ARTICULO 92. LA REHABILITACION.** La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:*
>
> *1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.*
>
> *2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.*
>
> *En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse Siete (7) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de Siete (7) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.*
>
> *Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse Siete (7) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política."*

Ahora bien, en lo que respecta a la interdicción de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA.** En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.

Se trae pronunciamiento de la H. Corte Constitucional que refiere sobre este punto:

"La suspensión de derechos políticos como pena accesoria y su rehabilitación

36. Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), una de las penas restrictivas de otros derechos distintos a la pena privativa de la libertad, es la suspensión de derechos políticos.

37. Paralelamente, el inciso 3º del artículo 52 de la misma normativa, dispone que en todos los casos, la pena de prisión "conlleva a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a la que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51".[10]

38. En relación con el cumplimiento de las penas accesorias, el artículo 53 del Código Penal establece que las penas privativas de otros derechos que sean concurrentes con la pena

[10] Código Penal, artículo 51: La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º. del artículo 52. Inciso 2º: Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política.

privativa de la libertad, ***se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta****, y el juez oficiosamente, dará la información respectiva de su cumplimiento a la autoridad correspondiente.*

39. Respecto de la rehabilitación de los derechos políticos, el artículo 98 de la Constitución Política dispone que "la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación".

40. El artículo 92 del Código Penal establece que la rehabilitación de derechos políticos cuya suspensión se haya impuesto como una pena accesoria, opera de derecho, una vez haya transcurrido el término impuesto en la sentencia, y basta con que el interesado formule la solicitud correspondiente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad competente.

En el mismo sentido, el artículo 71 del Código Electoral señala que la rehabilitación de los derechos políticos opera ipso iure, cuando se cumple el término por el cual se impuso su pérdida como pena, para ello es necesario que el interesado formule la solicitud pertinente al registrador municipal de su domicilio, acompañada de los documentos correspondientes. De acuerdo con lo señalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el documento que se debe adjuntar corresponde al oficio o sentencia donde se manifieste la ***extinción de la pena****,* ***el cumplimiento de la misma*** *o el texto aclaratorio donde se explique que el solicitante no ha cometido el delito investigado o que en efecto, le han sido restablecidos sus derechos políticos, expedido por el despacho de conocimiento*[11]*. (Negrilla fuera del texto original).*

41. En relación con la rehabilitación de los derechos políticos, la Corte en la ***sentencia C-328 de 2003***[12] *señaló que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Código Penal, la pena accesoria siempre se ase debe aplicar y ejecutar de forma simultánea con la pena principal de prisión. En conclusión, la suspensión de derechos políticos desaparece una vez cumplida la pena principal y en consecuencia, se obtendría la rehabilitación de los derechos políticos.*

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, en particular en las sentencias ***T-218 de 1994***[13] *y* ***C-581 de 2001***[14] *y reiteradas en la* ***C-591 de 2012***[15]*, la interpretación según la cual la pena accesoria desaparece solo cuando se extingue la principal, exceptuando los casos de prescripción de la pena, tiene su origen en el artículo 92 del Código Penal anterior (Decreto Ley 100 de 1980), que establecía lo siguiente: "si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos dos años a partir del día en que se haya cumplido la pena". Esta norma se encuentra reproducida en el artículo 92 de la Ley 599 del 2000.*

En el mismo sentido, en la ***sentencia T- 585 de 2013***[16]*, al analizar el caso de una persona a la que le fue negada la apertura de una cuenta de ahorros por tener el reporte de la suspensión de sus derechos políticos en la CIFIN S.A., este Tribunal indicó que en ese caso ya se había extinguido la pena accesoria de suspensión de derechos políticos, toda vez que el Juez de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad ya había declarado la extinción de la pena principal y ordenó al banco ponerse en contacto con la accionante para verificar si todavía estaba interesada en abrir la cuenta de ahorros y le advirtió al Juez de Penas y Medidas de Seguridad que enviara a la Registraduría Nacional del Estado Civil una copia del auto interlocutorio que había decretado la extinción de la pena principal, con el fin de que se actualizara el estado de vigencia del documento de identidad de la accionante.*

---

[11] Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, folio 44, cuaderno principal.
[12] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[14] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[15] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[16] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

42. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal y en la jurisprudencia de este Tribunal[17], la Sala concluye que: (i) siempre que haya una pena privativa de la libertad, se deberá interponer la pena de suspensión de derechos políticos; (ii) las penas privativas de otros derechos impuestas como accesorias de la pena privativa de la libertad, tales como la suspensión de derechos políticos, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con la pena principal y (iii) la pena de suspensión de derechos desaparece cuando se ha declarado la extinción de la pena principal o cuando ha prescrito." (…)

"64. En consideración a las normas penales y las reglas jurisprudenciales anteriormente referidas, la Sala observa que la rehabilitación de derechos políticos que han sido suspendidos como parte de una condena accesoria a la pena privativa de la libertad, opera cuando el condenado ha cumplido la pena principal o cuando la accesoria ha prescrito[18]."

Por lo tanto, en este momento, este funcionario **RESTABLECERÁ** los derechos jurídicos inhibidos, conforme lo expresado en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

Por último, dado que la ley exige que cuando se haga pronunciamiento sobre la extinción de la sanción penal se debe hacer referencia a la caución prendaria, en el presente caso se oficiará al Juzgado Penal del Circuito de Funza o quien haga sus veces, para que se proceda la devolución de la caución en efectivo pagada por valor $828.116 mil pesos a favor de la aquí condenada.

En firme esta decisión y cumplido lo ordenado, se remitirán las diligencias para su archivo definitivo ante el juzgado de conocimiento, Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca).

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.900 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

---

[17] Ver sentencias: T-218 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-581 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería; C-328 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-591 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T- 585 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

[18] Ley 599 de 2000, Código Penal, Artículo 89 La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia. La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la extinción de la sanción penal.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[19], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[20]
De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[21]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de

[19] Ibídem.
[20] CSJ T **102248**
[21] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado. A partir del mes de noviembre nuevamente nos ubicaron en la Sede Judicial.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ,

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL impuesta dentro de las presentes diligencias a favor de **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA,** identificado con C.C. No. 1.019.005.478, conforme lo consignado en la parte motiva de este proveído**.**

SEGUNDO. - DECRETAR la **REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS** a favor del Sentenciada **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA,** identificado con C.C. No. 1.019.005.478.

TERCERO.:- OFICIAR al juzgado penal del circuito de Funza (descongestión) o quien haga sus veces, a efectos se realice la devolución de la caución prendaria por valor de $828.116, a favor de la aquí condenada.

CUARTO: - Una vez ejecutoriado el auto por la Secretaría del Juzgado, **LIBRAR** las comunicaciones previstas en el artículo 476 de la Ley 906 de 2004, a fin de informar a las autoridades correspondientes, sobre el cumplimiento de la sanción penal.

QUINTO. - NOTIFICAR vía electrónica la presente decisión al Sentenciada **CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA.**

SEXTO. - En firme esta decisión, se remitirán las diligencias para su archivo definitivo ante el Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Funza (Cundinamarca).

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Facatativá, marzo 12 de 2024

Oficio No. 0333

Señora
CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA
alexx3084@gmail.com

C.U.I.	**11001600070620l8-00397**
No. Interno:	**2022-0248**
Sentenciada:	**CINDY ALEXANDRA PACHECO HERRERA**
Identificación:	**1.019.005.478**
Delitos:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR Y UTILIZACIÓN ILÍCITA DE REDES DE COMUNICACIÓN**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la Rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas**

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le comunico que este Despacho Judicial DECLARÓ LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL y DECRETÓ LA REHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS de la referencia.

Así mismo, una vez ejecutoriada la presente decisión se oficiará al Juzgado Penal del Circuito de Funza (Descongestión) o quien haga sus veces, a efectos se realice la devolución de la caución prendaria cancelada por Ud. en efectivo y a favor de ese despacho judicial.

En consecuencia, mediante esta comunicación se realiza la notificación del auto interlocutorio, proferido en la fecha de hoy.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 12 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, informando que se recibe a través del correo institucional el día 27 de febrero de 2024 la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P., y se recibe el día de hoy 12 de marzo de 2024, la orden de asignación en programas de TEE – recuperado ambiental paso inicial. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo doce (12) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0101

CUI:	**11001600002320210311 7**
Numero Interno	**2023-0052**
CONDENADO	**NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**
IDENTIFICACION	**C.C. No. 80.205.768**
DELITO	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, quien actualmente se encuentra recluido en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con la documentación emitida por el mencionado penal para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2. ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 25 de julio de 2021, el Juzgado 27 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 19 de abril de 2022, **CONDENO a NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** como autor responsable del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, a la pena de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal impuesta. NEGÓ el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que ordenó librar la orden de captura No. 2022-1495 del 12 de julio de 2022.

Mediante auto del 2 de mayo de 2022, el Juzgado 27 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica Dr. Juan Carlos Quintero Franco, por haberse presentado de manera extemporánea. La misma decisión el 9 de mayo de 2022 ante el recurso de queja presentado.

NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS fue capturado el 28 de julio de 2022[1]

El homólogo 18 de Bogotá D.C., mediante auto del 29 de julio de 2022 avocó conocimiento del proceso y legalizó la captura del condenado, por lo que expidió boleta de Encarcelación No. 068 y por auto del 24 de octubre de 2022 dispuso la remisión del expediente a estas dependencias.

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias a través de auto de sustanciación No. 0126 del 30 de enero de 2022 y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C.P.P., ordenó al Asistente Social de este Juzgado, se realice la visita socio-familiar en la **Carrera 3B Este No. 47-33 en Bogotá D.C.** (lugar donde reside su padre el señor Gerardo Guerrero Mendoza), número celular **3227439697** que corresponde a su progenitor y nos emita su concepto a la mayor brevedad posible pertinente a las condiciones familiares y habitacionales del condenado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** y especialmente de la veracidad de su condición de padre cabeza de familia.

A través de auto interlocutorio No. 0095 del 10 de febrero de 2023, este despacho negó al condenado la prisión domiciliaria prevista en el art. 314-5 del C.P.P., y el art. 1º de la Ley 750 de 2002.

Esta agencia judicial a través de auto interlocutorio No. 0250 del 23 de mayo de 2023 reconoció redención de pena de 2 meses y 2 días, por auto interlocutorio No. 0546 del 4 de diciembre de 2023, reconoció 1 mes y 29.5 días.

En la presente oportunidad ingresan al despacho las diligencias con la documentación emitida por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que

[1] Acta de derechos de capturado – folio 2 – archivo 06 – CARPETA C02 – CARPETA 02- expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria*

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia[3]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2021, el condenado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**, fue investigado y judicializado bajo el imperio de la ley 599 de 2000 (modificada por las Leyes 890 de 2004, 1453 y 1474 de 2011 y 1709 de 2014) y ley 906 de 2004).

De igual forma es competente este funcionario para conocer de la actuación en razón al factor territorial, toda vez que **NILSON FERNANDO GUERRERO CASALLAS** se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, mismo que hace parte del circuito a cargo de este Juzgado de conformidad con el mapa judicial fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme los Acuerdos expedidos en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

4.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al

---

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19066683	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	540	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**540**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **540 horas** por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **33.75 días**, es decir, **UN (1) MES Y TRES PUNTO SETENTA Y CINCO (3.75) DÍAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

5. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Camila Cárdenas Lozano (compañera permanente del condenado) identificada con C.C. No. 1010051788 Celular 3115305153, quien mediante declaración extrajuicio No. 97 de fecha 9 de febrero de 2024 rendida ante la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá D.C., manifiesta que ha sostenido una relación sentimental con el condenado desde hace 4 años compartiendo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

techo, lecho y mesa, y dice que es una persona responsable, trabajadora, cumplidora con su deberes y obligaciones, es quien le colabora en el hogar y no representa un peligro para la sociedad, indica que se hará responsable y está en disposición de apoyarlo en el goce y beneficio en caso de que se le conceda detención domiciliaria mientras cumple su condena.

Aunado a lo anterior, el condenado en el escrito de solicitud pide que a la hora de dar respuesta a la solicitud de prisión domiciliaria, se autorice el permiso para trabajar por lo que adjunta: constancia a contrato de trabajo suscrita por la señora María Gisell Sánchez Medina, recibo de servicio público, licencia de conducción, licencia de tránsito, fotocopia cédula de ciudadanía de la señora María Gisell Sánchez, declaración extrajuicio No. 97, contrato individual de trabajo a término indefinido, cartilla biográfica.

6. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TIEMPO - CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA

NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 28 de julio de 2022**[5] hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **19 meses y 23 días**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 5.25 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0250 del 23 de mayo de 2023, reconoce 2 meses y 2 días
- auto interlocutorio No. 0546 del 4 de diciembre de 2023, reconoce 1 mes y 29.5 días
- en el presente auto interlocutorio No. 101 de la presente, reconoce 1 mes y 3.75 días.

De la suma de las anteriores cifras, da como resultado que el interno ha purgado un total de **24 meses y 28.25 días** de la pena de principal impuesta.

Al analizar la norma sobre el primer requisito, factor objetivo, se tiene que el condenado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta. En efecto al señor **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** le fue impuesta la pena principal de prisión de **48 meses** por lo que la mitad sería **24 meses**.

Por consiguiente, el condenado a hoy por el tiempo físico, más las redenciones reconocidas lleva purgando **24 meses y 28.25 días, por lo cual cumple con el factor objetivo exigido en la norma.**

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

[5] Acta de derechos de capturado – folio 2 – archivo 06 – CARPETA C02 – CARPETA 02- expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[6]

7. DEL ARRAIGO FAMILIAR

Por lo anterior y previo a resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, se tiene que la dirección aportada es la Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Camila Cárdenas Lozano (compañera permanente del condenado) identificada con C.C. No. 1010051788 Celular 3115305153, pues manifiesta que de ser concedido el mecanismo sustitutivo será el lugar donde cumpliría la condena.

En consecuencia, resulta necesario verificar que la dirección suministrada como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, motivo por el cual se ordena al Asistente Social de este Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

8. OTROS ASUNTOS.

8.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

[6] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046) (23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[7], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[8]

---

[7] Ibídem.
[8] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[9]

8.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

9. DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, redención de pena por trabajo de **UN (1) MES Y TRES PUNTO SETENTA Y CINCO (3.75) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO: Previo al resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38 G del C.P., invocada por el sentenciado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada como arraigo familiar - Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Camila Cárdenas Lozano (compañera permanente del condenado) identificada con C.C. No. 1010051788 Celular 3115305153 -, cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordena al Asistente Social del Juzgado

[9] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

TERCERO: Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

CUARTO. – Se ordena por la secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** el contenido del presente auto a la apoderada judicial del condenado **Dra. LEONOR LUCIA MATTOS RODRIGUEZ** a través del correo electrónico maluderechoshumanos@gmail.com

QUINTO. - COMUNICAR la presente decisión al condenado y al señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca y **REMÍTIR** al mencionado penal copia del presente auto, a fin de que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

CÚMPLASE

NELSON HOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0560

Señor:
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
Villeta Cundinamarca
juridica.epcvilleta@inpec.gov.co

CUI:	**11001600002320210311 7**
Numero Interno	**2023-0052**
CONDENADO	**NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**
IDENTIFICACION	**C.C. No. 80.205.768**
DELITO	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,



DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0561

Señor:
NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS
Interno - Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad
Villeta Cundinamarca
juridica.epcvilleta@inpec.gov.co

CUI:	**11001600002320210311 7**
Numero Interno	**2023-0052**
CONDENADO	**NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**
IDENTIFICACION	**C.C. No. 80.205.768**
DELITO	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,



DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0562

Doctora:
LEONOR LUCIA MATTOS RODRIGUEZ
Avenida Jiménez No. 10-58 Oficina 315
Bogotá D.C.
maluderechoshumanos@gmail.com

CUI:	**11001600002320210311 7**
Numero Interno	**2023-0052**
CONDENADO	**NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**
IDENTIFICACION	**C.C. No. 80.205.768**
DELITO	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,



DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 11 de marzo de 2024
Oficio No. 0573

Doctor:
NÉSTOR ELIÉCER MORENO RANGEL
ASISTENTE SOCIAL
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
Facatativá Cundinamarca
nmorenora@cendoj.ramajudicial.gov.co

CUI:	**11001600002320210311 7**
Numero Interno	**2023-0052**
CONDENADO	**NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**
IDENTIFICACION	**C.C. No. 80.205.768**
DELITO	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

En la fecha este juzgado una vez radicada la solicitud de prisión domiciliaria invocada por el sentenciado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768 y previo a su estudio se tiene que la dirección aportada es la Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Camila Cárdenas Lozano (compañera permanente del condenado) identificada con C.C. No. 1010051788 Celular 3115305153-, conforme a la documentación allegada por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca.

Por lo anterior, en auto de la fecha se ordenó por su intermedio y por el medio más expedito DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en dicha dirección, ya que es necesario verificar el lugar como arraigo familiar y que éste cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena.

Habida cuenta de la imposibilidad de realizar visitas domiciliarias, notificaciones u otras diligencias de carácter presencial, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y teniendo en cuenta que fue aportado el abonado telefónico se solicita establecer comunicación con el grupo familiar del señor condenado, con el fin del cumplimiento del informe ordenado.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,



DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo doce (12) de 2024. Al despacho el proceso contra **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ** identificada con la C.C. No 1.003.565.387, para pronunciamiento de fondo sobre solicitud de extinción de la sanción penal y devolución de caución prendaria.

Han sido múltiples los requerimientos de los agentes del estado, con solicitudes de libertad condicional, interposición de recursos, acumulación jurídica de penas, redención de pena, aclaración de tiempo de privación de la libertad, prisión domiciliaria, beneficios administrativos, acciones de tutela y hábeas corpus lo que ha generado múltiples entradas y salidas del expediente de Secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (artículo 118 y ss del Código General del Proceso).

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo doce (12) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0102

C.U.I.	**25175610000020 20-00003**
No. Interno:	**2022-0023**
Sentenciada:	**ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ**
Identificación:	**1.003.565.387**
Delitos:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la Rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho, a decidir lo que en derecho corresponda acerca de la extinción de la sanción penal y rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a favor de **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.003.565.387, una vez recibidos los medios de prueba requeridos para tal efecto.

2.- CUESTION PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos durante 2020, **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ (y otros[1])** fueron llevados a juicio y mediante fallo del 23 de julio de 2021 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca) resolvió condenarlos a la pena principal de TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISIÓN, multa de UN SMMLV y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso igual al de la pena principal al ser hallados penalmente responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**.

A la señalada sentenciada le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena, otorgándose la sustitución de la pena intramural por domiciliaria, previo pago de caución prendaria por UN (1) SMLMV y firma de diligencia de compromiso.

El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 3 de septiembre de 2021[2].

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso mediante auto de sustanciación No. 147, del 8 de febrero de 2022 y ordenó requerirla para que allegara a este Juzgado el pago de la caución prendaria impuesta en sentencia condenatoria.

En cumplimiento a lo requerido dicha señora allegó a través del correo institucional el día 17 de marzo de 2022 el pago de la caución impuesta de un (1) smlmv, realizada a través de póliza judicial No. NB100342660 del 24 de noviembre de 2021 y adjuntó el escrito por el cual consta que el pago de la caución fue dirigido ante el Juzgado 2º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca.

Posteriormente, el 20 de febrero de 2023, este mismo despacho resolvió conceder libertad condicional a la señora **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ,** fijando período de prueba por CUATRO (4) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS, previo pago de caución y firma de diligencia de compromiso[3].

Es así como el 7 de marzo de 2023, la señora sentenciada firmó la diligencia de compromiso correspondiente, previo pago de caución prendaria a través de póliza judicial[4] y se libró la boleta de libertad el 8 de marzo siguiente.

Posteriormente, **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ** solicitó la extinción de la sanción penal y mediante auto de sustanciación 0894 de 2023, se ofició al Departamento de Policía Cundinamarca-SIJIN, para solicitar los antecedentes penales del señor**,** previo a analizar la viabilidad de extinguir la sanción penal por ella solicitada.

Se reciben los antecedentes penales del Sentenciada, emitidos por la Consultora base de datos Sistema de Información de OCN INTERPOL.

Consultada la disponibilidad del expediente digital en el aplicativo AZURE, fue encontrado el día de hoy.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532,

[1] Norma Elena Hernández Barrios, Cristian Giovanny Martínez Rosales, Luis Fernando Aranzalez Herrera, Juan Gabriel Vélez Tapia,
[2] Cuaderno digital No. 11 juzgado fallador.
[3] Cuaderno digital No. 12
[4] Cuadernos digitales No. 13 y No. 14

11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[5] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia[6].*

---

[5] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

[6] CSJ RAD 794 (01-07-20)

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 COMPETENCIA

Conforme a la fecha de los hechos, que datan del año 2020, la señora **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ,** fue investigada y judicializada bajo el imperio de la ley 599 de 2000 (Código Penal) y ley 906 de 2004.

Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la extinción de la sanción penal, según lo señala el numeral 8 del artículo 38 de la ley 906 de 2004, que indica:

> ***"ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.*** *Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: (…)*
>
> *8.* ***De la extinción de la sanción penal****…"*

4.2 DE LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL

Atendiendo al estado actual del proceso, y observando que el periodo de prueba impuesto al condenado ha vencido, el Despacho entra a estudiar la extinción de la sanción penal a favor de **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ.**

La libertad condicional es un beneficio que consiste como lo detalla su nombre en otorgar la libertad a quien acredite los requisitos previamente establecidos en la ley, y su disfrute esta "condicionada" al cumplimiento de unas obligaciones dentro de un periodo de prueba establecido, en busca de prevenir la criminalidad y sustraer del ambiente carcelario a aquellos autores de delitos de penas mínimas, de tal forma que su rehabilitación no se vea afectada en sitios que pudieran influir en su socialización.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible y es condicional pues el beneficiario está obligado a cumplir con ciertas exigencias de las cuales depende la extinción de la condena y las penas impuestas o la ejecución de la sentencia respectiva.

De conformidad con el artículo 67 del Código Penal, la extinción y liberación de la pena se presenta cuando transcurrido el período de prueba lo cumpla, sin que el condenado haya incurrido en ninguna de los eventos en que puede originar su revocación, siempre y cuando el funcionario judicial mediante auto, así lo hubiera decretado.

Reza el artículo 67 del Código Penal:

> *"Artículo 67. Extinción y Liberación. Transcurrido el período de prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la*

condena queda extinguida, y la liberación se tendrá como definitiva, previa resolución judicial que así lo determine".

Y es así debido a que el período de prueba es el lapso en el cual el condenado está obligado a cumplir las obligaciones impuesta y consignadas en un acta, término en el cual la autoridad judicial debe velar que el condenado cumpla con las reglas de convivencia social.

Atendiendo al estado actual del proceso, y observando que el periodo de prueba impuesto al condenado ha vencido, el Despacho entra a estudiar la extinción de la sanción penal a favor de ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ.

Se habla de una condena porque previamente debe existir un pronunciamiento de este tipo en la que el juez concreta la transgresión a la ley penal realizada por el encartado, así como la sanción imponible y es condicional pues el beneficiario está obligado a cumplir con ciertas exigencias de las cuales depende la extinción de la condena y las penas impuestas o la ejecución de la sentencia respectiva.

De conformidad con el artículo 83 del Código Penal, la extinción por prescripción de la pena se presenta cuando ha sido superado el término de la pena impuesta.

Reza el artículo 83 del Código Penal:

"Artículo 83. Prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años ni superior a veinte años (…) ".

Aterrizando al caso objeto de estudio, según se dijo en líneas anteriores, ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ, este despacho le concedió la libertad condicional el 20 de febrero de 2023, habiendo firmado la diligencia de compromiso correspondiente el 7 de marzo de 2023 y en vista del cumplimiento del periodo de prueba de CUATRO (4) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS, se confirma que se han reunido los requisitos y a la fecha se ha extinguido la pena, pues dentro de las diligencias no aparece noticia criminal alguna que dé cuenta que el condenado haya incurrido en el incumplimiento de las conductas descritas en el lapso que comprendía del 7 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE JULIO DE 2023 y que originaran una posible revocación, y tal afirmación tiene como base el oficio del 3 de octubre de 2023, No. 20230457285 SUBIN GRAIC 1.9 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL – SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DECUN.

Al respecto señaló la H. Corte Suprema de Justicia:

"…Y es que una vez concedido cualesquiera de los beneficios, esto es, libertad condicional, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria o la vigilancia electrónica, el condenado está obligado a suscribir una diligencia de compromiso, oportunidad en la que se impone unas obligaciones a cumplir en un término concreto, el cual recibe la denominación de período de prueba…"

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez constituido que, dentro de las diligencias, ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ obedeció los presupuestos señalados en el artículo 65 del Código Penal, encuentra este funcionario que el sentenciado cumplió las obligaciones referidas.

Por lo anterior, la única opción jurídica, es declarar la extinción y liberación de la pena, porque de conformidad con el precitado artículo 67, la misma no puede proseguirse, operando de esta manera su expiración.

4.3. REHABILITACIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS

Este juzgado es competente para decidir de oficio sobre la rehabilitación de las penas accesorias conforme lo señalan los numerales de los artículos 92 (Ley 599 de 2000) 38-8 y 480 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al corresponder los juzgados de los Circuitos penitenciarios de Facatativá – Cundinamarca conforme los

Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[7].

Atendiendo los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último, dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *"la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas"*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *"el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía".*

Agrega que *"Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.".*

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

> *"**ARTICULO 92. LA REHABILITACION.** La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:*
>
> *1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.*
>
> *2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.*
>
> *En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse Siete (7) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de Siete (7) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.*

---

[7] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[7].*

Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse Siete (7) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política."

Ahora bien, en lo que respecta a la interdicción de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ.** En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.

Se trae pronunciamiento de la H. Corte Constitucional que refiere sobre este punto:

"La suspensión de derechos políticos como pena accesoria y su rehabilitación

36. Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), una de las penas restrictivas de otros derechos distintos a la pena privativa de la libertad, es la suspensión de derechos políticos.

37. Paralelamente, el inciso 3º del artículo 52 de la misma normativa, dispone que en todos los casos, la pena de prisión "conlleva a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a la que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51".[8]

38. En relación con el cumplimiento de las penas accesorias, el artículo 53 del Código Penal establece que las penas privativas de otros derechos que sean concurrentes con la pena privativa de la libertad, ***se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta****, y el juez oficiosamente, dará la información respectiva de su cumplimiento a la autoridad correspondiente.*

39. Respecto de la rehabilitación de los derechos políticos, el artículo 98 de la Constitución Política dispone que "la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación".

40. El artículo 92 del Código Penal establece que la rehabilitación de derechos políticos cuya suspensión se haya impuesto como una pena accesoria, opera de derecho, una vez haya transcurrido el término impuesto en la sentencia, y basta con que el interesado formule la solicitud correspondiente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad competente.

En el mismo sentido, el artículo 71 del Código Electoral señala que la rehabilitación de los derechos políticos opera ipso iure, cuando se cumple el término por el cual se impuso su pérdida como pena, para ello es necesario que el interesado formule la solicitud pertinente al registrador municipal de su domicilio, acompañada de los documentos correspondientes. De acuerdo con lo señalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el documento que se debe adjuntar corresponde al oficio o sentencia donde se manifieste la ***extinción de la pena****,* ***el cumplimiento de la misma*** *o el texto aclaratorio donde se explique que el solicitante no ha cometido el delito investigado o que en efecto, le han sido restablecidos*

[8] Código Penal, artículo 51: La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º. del artículo 52. Inciso 2º: Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política.

sus derechos políticos, expedido por el despacho de conocimiento[9]. (Negrilla fuera del texto original).

41. En relación con la rehabilitación de los derechos políticos, la Corte en la ***sentencia C-328 de 2003****[10] señaló que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Código Penal, la pena accesoria siempre se ase debe aplicar y ejecutar de forma simultánea con la pena principal de prisión. En conclusión, la suspensión de derechos políticos desaparece una vez cumplida la pena principal y en consecuencia, se obtendría la rehabilitación de los derechos políticos.*

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, en particular en las sentencias ***T-218 de 1994****[11] y* ***C-581 de 2001****[12] y reiteradas en la* ***C-591 de 2012****[13], la interpretación según la cual la pena accesoria desaparece solo cuando se extingue la principal, exceptuando los casos de prescripción de la pena, tiene su origen en el artículo 92 del Código Penal anterior (Decreto Ley 100 de 1980), que establecía lo siguiente: "si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos dos años a partir del día en que se haya cumplido la pena". Esta norma se encuentra reproducida en el artículo 92 de la Ley 599 del 2000.*

En el mismo sentido, en la ***sentencia T- 585 de 2013****[14], al analizar el caso de una persona a la que le fue negada la apertura de una cuenta de ahorros por tener el reporte de la suspensión de sus derechos políticos en la CIFIN S.A., este Tribunal indicó que en ese caso ya se había extinguido la pena accesoria de suspensión de derechos políticos, toda vez que el Juez de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad ya había declarado la extinción de la pena principal y ordenó al banco ponerse en contacto con la accionante para verificar si todavía estaba interesada en abrir la cuenta de ahorros y le advirtió al Juez de Penas y Medidas de Seguridad que enviara a la Registraduría Nacional del Estado Civil una copia del auto interlocutorio que había decretado la extinción de la pena principal, con el fin de que se actualizara el estado de vigencia del documento de identidad de la accionante.*

42. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal y en la jurisprudencia de este Tribunal[15], la Sala concluye que: (i) siempre que haya una pena privativa de la libertad, se deberá interponer la pena de suspensión de derechos políticos; (ii) las penas privativas de otros derechos impuestas como accesorias de la pena privativa de la libertad, tales como la suspensión de derechos políticos, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con la pena principal y (iii) la pena de suspensión de derechos desaparece cuando se ha declarado la extinción de la pena principal o cuando ha prescrito." (…)

"64. En consideración a las normas penales y las reglas jurisprudenciales anteriormente referidas, la Sala observa que la rehabilitación de derechos políticos que han sido suspendidos como parte de una condena accesoria a la pena privativa de la libertad, opera cuando el condenado ha cumplido la pena principal o cuando la accesoria ha prescrito[16]."

Por lo tanto, en este momento, este funcionario **RESTABLECERÁ** los derechos jurídicos inhibidos, conforme lo expresado en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

---

[9] Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, folio 44, cuaderno principal.
[10] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[12] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[13] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[14] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[15] Ver sentencias: T-218 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-581 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería; C-328 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-591 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T- 585 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[16]Ley 599 de 2000, Código Penal, Artículo 89 La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia. La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

Por último, dado que la ley exige que cuando se haga pronunciamiento sobre la extinción de la sanción penal se debe hacer referencia a la caución prendaria, en el presente caso la señora tanto al momento de la sustitución de la pena intramural por domiciliaria, como al momento de salir en Libertad Condicional, canceló con pólizas las cauciones prendarias impuestas.

En firme esta decisión y cumplido lo ordenado, se remitirán las diligencias para su archivo definitivo ante el juzgado de conocimiento, Segundo Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca).

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.900 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la extinción de la sanción penal.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[17], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

[17] Ibídem.

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[18]
De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[19]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado. A partir del mes de noviembre nuevamente nos ubicaron en la Sede Judicial.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ,

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL impuesta dentro de las presentes diligencias a favor de **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ,** identificado con C.C. No. 1.003.565.387, conforme lo consignado en la parte motiva de este proveído**.**

[18] CSJ T **102248**
[19] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SEGUNDO. - DECRETAR la **REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS** a favor de la Sentenciada **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ,** identificado con C.C. No. 1.003.565.387.

TERCERO:- Una vez ejecutoriado el auto por la Secretaría del Juzgado, **LIBRAR** las comunicaciones previstas en el artículo 476 de la Ley 906 de 2004, a fin de informar a las autoridades correspondientes, sobre el cumplimiento de la sanción penal.

CUARTO. - NOTIFICAR vía electrónica la presente decisión al Sentenciada **ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ.**

QUINTO. - En firme esta decisión, se remitirán las diligencias para su archivo definitivo ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca).

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Facatativá, marzo 12 de 2024

Oficio No. 0334

Señora
ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ
melanny0726@gmail.com

C.U.I.	**25175610000002020-00003**
No. Interno:	**2022-0023**
Sentenciada:	**ANGIE LIZETH TIBAMBRE SÁNCHEZ**
Identificación:	**1.003.565.387**
Delitos:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la Rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas**

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le comunico que este Despacho Judicial DECLARÓ LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL y DECRETÓ LA REHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS de la referencia.

En consecuencia, mediante esta comunicación se realiza la notificación del auto interlocutorio, proferido en la fecha de hoy.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 12 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683, informando que se recibe a través del correo institucional el día 29 de febrero de 2024 la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo doce (12) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0103

CUI	**11001600002320200436 7**
Número Interno:	**2023-0043**
Sentenciado:	**SEBASTIAN VEGA MACIAS**
Identificación:	**C.C. No. 80.205.768**
Delito:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683, quien actualmente se encuentra recluido en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con la documentación emitida por el mencionado penal para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2. ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 19 de octubre de 2020 y allanamiento a cargos, el Juzgado 17 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 8 de abril de 2022, **CONDENO a SEBASTIAN VEGA MACIAS** (y otro[1]) como coautor responsable del delito de **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**, a la pena de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISIÓN** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal impuesta. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria, por lo que ordenó por el CSJ del SPA de Bogotá, librar la orden de captura 2022-1001. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 22 de abril de 2022

SEBASTIAN VEGA MACIAS fue capturado el 19 de mayo de 2022[2]

El homólogo 3º e Bogotá D.C., mediante auto del 19 de mayo de 2022 avocó conocimiento del proceso y legalizó la captura del condenado, por lo que expidió boleta de Encarcelación No. 41 y por auto del 3 de octubre de 2022 dispuso la remisión del expediente a estas dependencias.

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias a través de auto de sustanciación No. 0101 del 25 de enero de 2023, por auto interlocutorio No. 0086 del 6 de febrero de 2023 reconoció redención de pena de 1 mes y 19.5 días, por auto interlocutorio No. 0440 del 18 de septiembre de 2023 reconoció redención de pena de 2 meses y 1 día.

En la presente oportunidad ingresan al despacho las diligencias con la documentación emitida por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, para el reconocimiento de redención de pena y el estudio de la prisión domiciliaria del art. 38G del C.P.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[3] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

---

[1] Cristhian Geovanny Romero Vitama

[2] Acta de derechos de capturado – folio 21 – archivo 01 – CARPETA C02 – CARPETA 02 – expediente digitalizado.

[3] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[4].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

[4] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2020, el condenado **SEBASTIAN VEGA MACIAS**, fue investigado y judicializado bajo el imperio de la ley 599 de 2000 (modificada por las Leyes 890 de 2004, 1453 y 1474 de 2011 y 1709 de 2014) y ley 906 de 2004).

De igual forma es competente este funcionario para conocer de la actuación en razón al factor territorial, toda vez que el condenado, se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, mismo que hace parte del circuito a cargo de este Juzgado de conformidad con el mapa judicial fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme los Acuerdos expedidos en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[5].

4.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*

---

[5] 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[5].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18975055	Del 1 julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067789	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
19137353	Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024	CPMS VILLETA – Regional Central	252	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**978**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **978 horas** por concepto de **estudio** al hacer la conversión corresponden a **81.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y VEINTIUNO PUNTO CINCO (21.5) DÍAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

5. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Calle 167 B # 2 B – 21 Piso 2, barrio Soratama, Localidad de Usaquén en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Elena Macías Camargo (progenitora del condenado) identificada con C.C. No. 51605137 Celular 3212896587 – 3202077519 - 3142699805, quien mediante acta No. 679 declaración juramentada de fecha 27 de febrero de 2024, rendida ante la Notaría 6 del Círculo de Bogotá D.C., declaró que será la persona será la persona que velará por el buen comportamiento de su hijo y estará pendiente del cumplimiento de cada una de las normas que le sean impuestas.

6. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TIEMPO - CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA

SEBASTIAN VEGA MACIAS ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 19 de mayo de 2022**[6] hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **22 meses y 3 días**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **6 meses y 12 días** reconocidas por este Juzgado así:

[6] Acta de derechos de capturado – folio 21 – archivo 01 – CARPETA C02 – CARPETA 02 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

- auto interlocutorio No. 0086 del 6 de febrero de 2023, reconoce 1 mes y 19.5 días
- auto interlocutorio No. 0440 del 18 de septiembre de 2023, reconoce 2 meses y 1 días
- en el presente auto interlocutorio No. 0103 de la fecha, reconoce 2 meses y 21.5 días.

De la suma de las anteriores cifras, da como resultado que el interno ha purgado un total de **28 meses y 15 días** de la pena de principal impuesta.

Al analizar la norma sobre el primer requisito, factor objetivo, se tiene que el condenado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta. En efecto al señor **SEBASTIAN VEGA MACIAS** le fue impuesta la pena principal de prisión de **54 meses** por lo que la mitad sería **27 meses**.

Por consiguiente, el condenado a hoy por el tiempo físico, más las redenciones reconocidas lleva purgando **28 meses y 15 días, por lo cual cumple con el factor objetivo exigido en la norma.**

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[7]

7. DEL ARRAIGO FAMILIAR

[7] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046) (23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Por lo anterior y previo a resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683, se tiene que la dirección aportada es la Calle 167 B # 2 B – 21 Piso 2, barrio Soratama, Localidad de Usaquén en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Elena Macías Camargo (progenitora del condenado) identificada con C.C. No. 51605137 Celular 3212896587 – 3202077519 - 3142699805, pues manifiesta que de ser concedido el mecanismo sustitutivo será el lugar donde cumpliría la condena.

En consecuencia, resulta necesario verificar que la dirección suministrada como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, motivo por el cual se ordena al Asistente Social de este Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

8. OTROS ASUNTOS.

8.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[8], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[9]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[10]

8.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y

---

[8] Ibídem.
[9] CSJ T **102248**
[10] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

9. DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683, redención de pena por estudio de **DOS (2) MESES Y VEINTIUNO PUNTO CINCO (21.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 julio al 30 de septiembre de 2023, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero al 29 de febrero de 2024, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO: Previo al resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38 G del C.P., invocada por el sentenciado **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683, y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada como arraigo familiar - Calle 167 B # 2 B – 21 Piso 2, barrio Soratama, Localidad de Usaquén en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Elena Macías Camargo (progenitora del condenado) identificada con C.C. No. 51605137 Celular 3212896587 – 3202077519 - 3142699805 -, cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordena al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe se incorporará al expediente como constancia de ello y pasarán las diligencias al despacho para el correspondiente estudio de la prisión domiciliaria.

TERCERO: Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

CUARTO. – COMUNICAR la presente decisión al condenado y al señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca y **REMÍTIR** al mencionado penal copia del presente auto, a fin de que obre en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 12 de marzo de 2024
Oficio No. 0576

Señor:
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
Villeta Cundinamarca
juridica.epcvilleta@inpec.gov.co

CUI	**11001600002320200436 7**
Número Interno:	**2023-0043**
Sentenciado:	**SEBASTIAN VEGA MACIAS**
Identificación:	**C.C. No. 80.205.768**
Delito:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 12 de marzo de 2024
Oficio No. 0577

Señor:
SEBASTIAN VEGA MACIAS
Interno - Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad
Villeta Cundinamarca
juridica.epcvilleta@inpec.gov.co

CUI	**11001600002320200436 7**
Número Interno:	**2023-0043**
Sentenciado:	**SEBASTIAN VEGA MACIAS**
Identificación:	**C.C. No. 80.205.768**
Delito:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., a favor del condenado **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683, le informo que este despacho ordenó al asistente social del Juzgado para que realice por el medio más expedito y determine entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en la dirección señalada.

Por lo anterior, se aclara la importancia de establecer con que personas conviviría el interno, la dirección y el entorno social.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 12 de marzo de 2024
Oficio No. 0578

Doctor:
NÉSTOR ELIÉCER MORENO RANGEL
ASISTENTE SOCIAL
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
Facatativá Cundinamarca
nmorenora@cendoj.ramajudicial.gov.co

CUI	**11001600002320200436 7**
Número Interno:	**2023-0043**
Sentenciado:	**SEBASTIAN VEGA MACIAS**
Identificación:	**C.C. No. 80.205.768**
Delito:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**PREVIO ESTUDIO PRISIÓN DOMICILIARIA – art. 38G del C.P. - ORDENA AL ASISTENTE SOCIAL INFORME VISITA SOCIOFAMILIAR DEL CONDENADO** **RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

En la fecha este juzgado una vez radicada la solicitud de prisión domiciliaria invocada por el sentenciado **SEBASTIAN VEGA MACIAS** identificado con C.C. No. 1.020.841.683 y previo a su estudio se tiene que la dirección aportada es la Calle 167 B # 2 B – 21 Piso 2, barrio Soratama, Localidad de Usaquén en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Elena Macías Camargo (progenitora del condenado) identificada con C.C. No. 51605137 Celular 3212896587 – 3202077519 - 3142699805, conforme a la documentación allegada por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca.

Por lo anterior, en auto de la fecha se ordenó por su intermedio y por el medio más expedito DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado en dicha dirección, ya que es necesario verificar el lugar como arraigo familiar y que éste cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena.

Habida cuenta de la imposibilidad de realizar visitas domiciliarias, notificaciones u otras diligencias de carácter presencial, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y teniendo en cuenta que fue aportado el abonado telefónico se solicita establecer comunicación con el grupo familiar del señor condenado, con el fin del cumplimiento del informe ordenado.

Una vez elaborado el informe las presente diligencias **REINGRESARÁN** al despacho para el estudio respectivo de la prisión domiciliaria art 38G del C.P, y éste se incorporará en el proceso para que forme parte de las diligencias.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo trece (13) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0104

CUI	**25875600000202200003**
Interno:	**2023-0036**
Sentenciado:	**HELMUTH ENRIQUE ANDRADE DIAZ**
Delito:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCION TRABAJO Y ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **HELMUTH ENRIQUE ANDRADE DIAZ** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO**. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	**Periodo Certificado**	**Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario**	**Horas de trabajo a reconocer**	**Horas de estudio a reconocer**	**Calificación de la Labor**	**Calificación de Conducta**
18794745	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	378	Sobresaliente	Ejemplar
18893649	Del 1 de abril al 30 de junio de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	632	---	Sobresaliente	Ejemplar
18974531	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	640	---	Sobresaliente	Ejemplar
19064658	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	572	---	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**1844**	**378**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **1844** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **115.25 días** y las **378** horas por concepto de **estudio** corresponden a **31.5 días.**

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **CUATRO (4) MESES Y VEINTISEIS PUNTO SETENTA Y CINCO (26.75) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Teniendo en cuenta que el condenado **HELMUTH ENRIQUE ANDRADE DIAZ**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

---

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **HELMUTH ENRIQUE ANDRADE DIAZ** identificado con C.C. No. 71.481.981, redención de pena por trabajo de **115.25 días** y redención de pena por estudio de **31.5 días**, es decir, que **el tiempo total reconocido en el presente proveído es de CUATRO (4) MESES Y VEINTISEIS PUNTO SETENTA Y CINCO (26.75) DIAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado**.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo trece (13) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0105

CUI	**11001600000202301464 RUPTURA DEL 11001600000202300186**
Interno:	**2024-0051**
Sentenciado:	**JAIME NIETO**
Delito:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y AUTORES A TÍTULO DE DOLO DEL DELITO DE TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Decisión:	**RECONOCE REDENCION ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **JAIME NIETO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*
>
> *Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18794863	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	378	Sobresaliente	Buena
18896061	Del 1 de abril al 30 de junio de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	354	Sobresaliente	Buena
18974723	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067139	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**1458**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **1458** horas por concepto de **estudio** corresponden a **121.5 días**, es decir, **CUATRO (4) MESES Y UNO PUNTO CINCO (1.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **JAIME NIETO**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **JAIME NIETO** identificado con C.C. No. 3.253.298, redención de pena por estudio de **CUATRO (4) MESES Y UNO PUNTO CINCO (1.5) DIAS**, por las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, del 1 de abril al 30 de junio de 2023, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 13 de 2024. Al despacho el proceso **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486, informando que, conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0069 del 26 de enero de 2024, se emite el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 1 de febrero de 2024, para resolver la petición de autorización de cambio de domicilio invocada por el condenado. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo trece (13) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0106

CUI:	**11001600000201700563**
Radicación:	**2021-0046**
Sentenciado:	**JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO**
Identificación:	**C.C. No. 11.366.486**
Delito:	**HURTO POR MEDIO INFORMÁTICO Y SEMEJANTES AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO**
Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA – CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. - LA MODELO –**
Decisión:	**AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO SOLICITA POR 2ª VEZ DOCUMENTOS ART. 471 CPP**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud de autorización de cambio de domicilio a favor de **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486, quien se encontraba en prisión domiciliaria en la Calle 13 No. 3 – 61 en Madrid Cundinamarca, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos sucedidos el 13 de enero de 2012 y allanamiento a cargos, el Juzgado 38 Penal Municipal con función de conocimiento, en sentencia de 7 de marzo de 2019, resolvió

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

condenar a **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO (y otros[1])** a la pena principal de **CINCUENTA Y SEIS (56) DE PRISIÓN** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena privativa de la libertad, como coautor responsable por el delito de **HURTO POR MEDIO INFORMÁTICO Y SEMEJANTES AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO.** El Juzgado fallador NEGO al condenado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero concedió la prisión domiciliaria – artículo 38B del C.P. -. La sentencia condenatoria cobró ejecutoria el 7 de marzo de 2019.

Ahora bien, conforme a lo expuesto en sentencia condenatoria, se tiene que el Juzgado 82 Penal Municipal con función de garantías de Bogotá D.C., **el 10 de marzo de 2017 legalizó la captura del condenado, y el mencionado Juzgado en audiencia del 11 de marzo de 2017, como quiera que la delegada Fiscal retiro la solicitud de medida de aseguramiento en contra de JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO y otros[2], declaró la libertad inmediata y dispuso Librar la boleta de libertad No. J82-14**

El homólogo 4 de Bogotá D.C., mediante auto del 4 de septiembre de 2019 avocó conocimiento del proceso y libro ORDEN DE CAPTURA No. 427.

Como quiera que el condenado prestó caución mediante póliza judicial No. 17-41-1010061144 el 03 de diciembre de 2020 y suscribió diligencia de compromiso el 16 de diciembre de 2020, fijó el domicilio en la Calle 13 No. 3 – 61 en Madrid Cundinamarca, el homólogo 4º de Bogotá D.C., mediante auto del 16 de diciembre de 2020 dispuso que por el lugar establecido como domicilio ese Juzgado perdió la competencia para vigilar y controlar la pena impuesta y en consecuencia solicitó a estas dependencias, librar la boleta de encarcelación y traslado al domicilio a fin de ser reseñado y continuar con la vigilancia de la pena, por consiguiente, ordenó la remisión de las copias del expediente a este despacho.

Este despacho AVOCÓ el conocimiento de las diligencias mediante auto de sustanciación No. 0132 del 8 de febrero de 2021 y ordenó requerir al condenado, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto se acercara a las instalaciones de alguna de las Estaciones de Policía más cercana al domicilio, toda vez que al encontrarse vigente la Orden de Captura No. 427, se debe emitir por parte de los policiales la respectiva acta de derechos del capturado, a fin de que este Juzgado legalizara la captura, cancelar la orden de captura, emitir la Boleta de Encarcelación, efectuarse la reseña ante el INPEC competente y el traslado al domicilio indicado, para que se iniciara el respectivo descuento de la pena de prisión impuesta.

En vista que el condenado **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** fue capturado el **11 de febrero de 2021[3]**, esta agencia judicial mediante auto de sustanciación No. 0181 del 11 de febrero de 2021, legalizó la captura del condenado y libró Boleta de Encarcelación No. 007 ante el señor director de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -.

Previo a resolver la solicitud de autorización de permiso para trabajar interpuesta por el infractor, este Juzgado dispuso por auto de sustanciación No. 0131 del 23 de marzo de 2022, requerir al condenado con el fin de que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, aportara los documentos y datos precisos como: I) Certificación laboral, Oferta o Contrato de Trabajo (vigente) en el que se evidencie el cargo

[1] Andrea Johana Gómez Ariza, Andrea López Romero, Cristian Adrián Triana Vargas, David Andrés Velosa Almario, Franklin Velásquez Pinto, Pedro Nel Valcárcel Gómez, Reikiavik Cardona, Sandra Viviana Carpeta Jiménez, Santiago Arturo Suarez Santos, Saúl Martínez Velásquez, Yimy Válcarcel Gómez, Cesar Alfonso Pinzón Rincón.
[2] Franklin Velásquez Pinto, Saúl Martínez Velásquez, Andrea Johana Gómez Ariza, Yimy Valcárcel Gómez, Cesar Alfonso Pinzón Rincón, Reikiavik Cardona, Santiago Arturo Suárez Santos y Viviana Carpeta Jiménez.
[3] Acta de derechos del capturado – folio 1 – archivo 002 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

o labor a desempeñar, valor del salario a devengar y el horario laboral; II) hora exacta de salida de su domicilio y hora de llegada al mismo; III) ruta clara y especifica de movilidad hacia el lugar al que habrá de desplazarse de acuerdo a la oferta laboral presentada; IV) tiempo de desplazamiento entre el lugar de trabajo y su domicilio; V) a su vez se requiere que manifieste al despacho si la intención con la que requiere el permiso para trabajar es netamente económico o busca redimir pena que permitan a este Despacho resolver de fondo la solicitud, so pena de rechazo.

A través de auto interlocutorio No. 0176 del 13 de mayo de 2022, este despacho resolvió extender al infractor, los efectos de la prisión domiciliaria como Distribuidor de Productos de Postobón – Conductor Auxiliar en saliendo del CEDI de Madrid Cundinamarca con recorrido hasta el Puente del rio Bogotá – Autopista e ingreso a los barrios. El Diamante, El Lucero y Martínez Roco; los días Martes y viernes tendrá un recorrido Madrid, Funza, La punta, Tenjo y Peaje de Siberia; Los días Miércoles y sábado su recorrido será vía Bogotá – Mosquera, Vía Charquito, Cocli, 7 Siete Trojes, Mosquera y los Puentes, conjunto Nova Terra.

Por auto interlocutorio No. 0443 del 18 de septiembre de 2023, este despacho reconoció al sentenciado por cumplimiento de la pena física un total de 31 meses y 20 días, y NEGÓ el subrogado de la libertad condicional por no cumplir con el factor objetivo de las 3/5 partes que exige la normatividad.

Esta agencia judicial por auto de sustanciación No. 0069 del 26 de enero de 2024, dispuso requerir a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, la documentación del art. 471 del C.P.P., a fin de resolver la solicitud de libertad condicional invocada por el condenado quien se encuentra en prisión domiciliaria en la calle 14ª # 6 – 26 barrio Los Molinos Madrid Cundinamarca (domicilio NO AUTORIZADO). DE IGUAL MANERA ESTE Juzgado se abstuvo de autorizar el cambio de residencia al penado y ordenó al Asistente Social del despacho realizar la visita socio-familiar (vía remota) en el domicilio referenciado, con el fin de determinar el arraigo social y familiar y las condiciones de seguridad del mismo.

En la presente oportunidad ingresa al Despacho, con la solicitud de autorización de cambio de domicilio invocada por el condenado y el Informe de Valoración de Asistencia Social emitido el 1 de febrero de 2024.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[4] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que:

[4] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[5].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

[5] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de libertad condicional impetrada por la condenada conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgado pena bajo el sustituto de prisión domiciliaria en la Calle 13 No. 3 – 61 en Madrid Cundinamarca vigilado por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo - , conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[6].

Conforme a los hechos ocurridos el 13 de enero de 2012, **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2. DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO

Procede el despacho a pronunciarse sobre la solicitud de AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO interpuesta por el condenado **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486, recibida a través del correo institucional el 18 de octubre de 2023, por la cual se indica: *"(…) A través del presente deseo informarles que el día 10 de septiembre del presente año me cambie de domicilio a la calle 14ª # 6 – 26 Barrio los molinos Madrid Cundinamarca por el motivo de arreglo en el apartamento donde vivía (…)".*

Adjunta: Contrato de arrendamiento de vivienda urbana.

En vista, que el condenado, no presenta una justificación concreta sobre el motivo del cambio de residencia, este despacho, **se abstuvo de autorizar** el cambio de residencia al condenado y mediante auto de sustanciación No. 0069 del 26 de enero de 2024, ordenó al Asistente Social del despacho realizar la visita socio-familiar (vía remota) en el domicilio ubicado en la calle 14ª # 6 – 26 Barrio los molinos Madrid Cundinamarca, con el fin de determinar el arraigo social y familiar y las condiciones de seguridad del mismo.

Por lo tanto, se emite el Informe de Valoración de Asistencia Social de fecha 1 de febrero de 2024 mediante el cual se indica:

"(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

Los días 26 y 29 de enero y primero de febrero de 2024, fueron realizadas entrevistas telefónicas de más sesenta minutos de duración al abonado celular, número 3114938080. Se trata del número celular del señor condenado.

El señor JUAN CARLOS GÓMEZ NAVARRO, tiene 40 años, es oriundo y ha residido toda su vida en el municipio de Madrid (Cundinamarca), estado civil UL y ocupación conductor de camión de Postobón.

[6] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[6].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Ha estado privado de la libertad hace 37 meses, siempre en Prisión domiciliaria, concedida por el juzgado fallador para el municipio de Madrid, pero ha presentado cambios en su domicilio.

De acuerdo al señor entrevistado, para octubre del año pasado y durante el mes de enero de este año, él y su grupo familiar residían en el Barrio Molinos de Madrid, señalándose al momento de realizarse la visita domiciliaria, que requerían trasladarse a otro domicilio, puesto que donde se encontraba tenía varios problemas como humedad y que los propietarios del lugar necesitaban hacer arreglos y ellos por su parte también deseaban salir de allí.

Por tales razones expuestas, el señor condenado JUAN CARLOS GÓMEZ NAVARRO y su grupo familiar empezaron a residir desde el treinta y uno de enero de este año en la ***calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid (Cundinamarca).***

Fue remitida la información relativa al predio en arrendamiento, casa propiedad de la señora MARÍA ISABEL CALDAS, residiendo en dicho lugar hace más de 17 años. La señora propietaria vive en el primer piso, el señor condenado en la segunda planta, existiendo otro apartamento en el tercer piso el cual actualmente está desocupado.

El grupo familiar del señor condenado está integrado por su compañera permanente, señora LINA VANESSA GARAY SEGURA, con 28 años de edad, conviviendo en UL +- 5 años y contando con un hijo en común de tres años de edad llamado LIAN GÓMEZ GARAY. La niña LUNA TAEL CASTELLANOS GARAY, menor de 10 años, hija de la compañera permanente del señor condenado, también hace parte de este grupo familiar.

El señor condenado es padre de cinco hijos, el último el prenombrado LÍAN GÓMEZ GARAY de 3 años. Los otros hijos del JUAN CARLOS GÓMEZ NAVARRO, son:

- *DYLAN SANTIAGO GÓMEZ BOLIVAR (21), reside en Madrid, trabajador independiente, estado civil unión libre.*
- *KAREN MARIANA GÓMEZ (19), Estudiante universitaria Ingeniería U. de Cundinamarca, reside en Facatativá con la progenitora.*
- *GERÓNIMO GÓMEZ MORALES (10)*
- *SALOMÉ GÓMEZ MORALES (8)*
  Ambos residentes en La Mesa con su mamá, estudiantes de cuarto y tercer grado, respectivamente, en el colegio Julián Ayala La Mesa. Se reporta cuota de alimentos de 300 mil pesos mensuales.

El señor condenado refiere ser un padre responsable y afectuoso, presente en la vida de sus hijos y quien siempre ha apoyado la crianza y manutención, manifiesta que no da más por no alcanzarle pero que siempre trata de estar pendiente y aportar lo que más pueda.

El señor condenado y su familia son oriundos y han residido toda su vida en Madrid (Cundinamarca) y en ese municipio, además de sui familia nuclear se encuentran varios miembros de su familia de origen, como su padre, hermanos, tías y abuelos.

Respecto al delito cometido, el señor condenado y su familia refieren que se debió a actos de ingenuidad y que fue engañado para prestar su cédula y cuenta para recibir algunos dineros ilegalmente obtenidos. JUAN CARLOS plantea que fue una estafa masiva y que mucha gente como él fue utilizada por un hacker para efectuar un delito de hurto pero que él en tal delito no tuvo nada que ver, sino que fue utilizado, recibiendo prácticamente nada de beneficio.

Dado que el señor condenado JUAN CARLOS GÓMEZ NAVARRO ha purgado pena únicamente en prisión domiciliaria, sin contar con proyecto autorizado para descuento, ha cumplido físicamente +- 37 meses, de acuerdo a lo por él manifestado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda donde reside actualmente el señor condenado y su grupo familiar está ubicada en la ***calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid (Cundinamarca).***

Cabe señalar que, si bien es cierto, ha habido cambios de vivienda, como se señalaba de manera precedente, existe estabilidad habitacional pues se trata de una familia oriunda y residente toda su vida en el municipio de Madrid (Cundinamarca).

El lugar donde recientemente está ubicada la familia pertenece al estrato 2, siendo un apartamento en el segundo piso de una vivienda de tres plantas.

En el primer piso del inmueble reside la propietaria del lugar, señora MARÍA ISABEL CALDAS, costurera de ocupación. En el tercer piso no tienen inquilinos al momento de realizar la visita domiciliaria.

El señor condenado reside en el segundo piso, lugar que cuenta con 2 habitaciones, cocina, sala-comedor, baños y patio de ropas.

La residencia cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto y alcantarillado y gas instalado.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron descritas como aceptables, contando el lugar con aceptables condiciones externas e internas.

Respecto al entorno social propio de la vivienda se reportó que se trata de un barrio netamente residencial, ubicado en un sector cerca al centro en el municipio de Madrid (Cundinamarca).

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los gastos son cubiertos a través del salario que recibe el señor condenado JUAN CARLOS GÓMEZ BOLIVAR, quien labora como conductor de POSTOBON

El señor condenado devenga 1.5 SMMLV, debiendo realizar el transporte de bebidas a las bodegas, de donde se realiza la distribución posterior.

Sobre los gastos se encontró que mensualmente la familia del señor condenado paga 700 mil pesos de arriendo y en servicios públicos 150 mil pesos. Otros 500 mil pesos en todo lo relativo a la economía familiar, principalmente alimentación.

La situación económica mostró que la familia cuenta con recursos económicos apenas suficientes para el cubrimiento de necesidades básicas del grupo.

El señor condenado tiene una carga económica alta pues además de todo ello debe cancelar la cuota de alimentos de sus hijos de 10 y 8 años en La Mesa y ayuda eventualmente a su hija universitaria.

CONCEPTO

El señor condenado JUAN CARLOS GÓMEZ NAVARRO cuenta con un grupo familiar conformado a nivel nuclear por compañera permanente, cinco hijos, 4 de ellos menores de edad y la hija de su compañera, también menor de diez años. Extensivamente se evidencia la existencia de otros familiares como su padre, hermanos, abuelos, tíos, residentes casi todos en el municipio de Madrid (Cundinamarca).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Existen sentimientos de solidaridad y afecto hacia el condenado, su familia lo ha apoyado tanto ahora estando privado de la libertad como toda su vida.

El señor condenado labora como conductor en POSTOBON, donde ha estado vinculado hace más de 10 años.

Respecto al lugar donde reside el grupo familiar, si bien ha habido cambios de vivienda, es una familia oriunda y residente toda su vida en el municipio de Madrid (Cundinamarca) y en este momento residen en una vivienda en arrendamiento que cuenta con condiciones de habitabilidad adecuadas.

Por parte de la familia de aquel, se expresa solidaridad económica y existencial hacia JUAN CARLOS GÓMEZ NAVARRO, situación que implica contar con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y culminación del proceso de resocialización en que se encuentra (…)".

Por lo tanto, en relación a lo expuesto por el condenado y al concepto emitido en el Informe de Valoración de Asistencia Social por el Asistente Social de este Juzgado, este Despacho no encuentra alguna razón para denegar la solicitud, por lo tanto, se accede a dicha petición, en el sentido de que se **AUTORIZA cambio de domicilio** al interno **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO, en la Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca.**

El artículo 29 A de la Ley 65 de 1993, señala que una vez dispuesta la sustitución intramural por la domiciliaria se debe enviar copia al Director del INPEC quien deberá señalar en su jurisdicción el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y la adopción de las medidas para garantizar el cumplimiento de la pena, entre otras, como las visitas de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia.

En consecuencia, se oficiará al señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, con el fin de que se realicen los respectivos trámites y gestiones de registro y actualización ante el INPEC competente, para que se prosiga el sistema de custodia y vigilancia en prisión domiciliaria del interno **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486 en la dirección autorizada **Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca,** y una vez efectúe el trámite respectivo, se le solicita se comunique a este despacho.

4.3. De la solicitud de documentos previstos en el art. 471 del C.P.P.

Este Juzgado mediante auto de sustanciación No. 0069 del 26 de enero de 2024, dispuso requerir con carácter urgente en el término de la distancia a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, la documentación del artículo 471 del C.P.P., a fin de resolver la solicitud de libertad condicional invocada por el sentenciado y a la fecha no se ha recibido los documentos requeridos.

Una vez verificado el correo institucional, a la fecha no se ha recibido la mencionada documentación, por lo que se ordena **REQUERIR POR SEGUNDA VEZ** a las directivas del mencionado penal para que remitan a este estrado judicial los documentos del artículo 471 del C.P.P.

4.4. Sobre la comisión y notificación del condenado

Teniendo en cuenta que **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** se encuentra en prisión domiciliaria en la **Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca**, se ordena por la secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** el contenido de la

presente decisión al condenado a través del correo electrónico gomeznavarrojuancarlos62@gmail.com

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[7], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean

---

[7] Ibídem.

proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[8]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[9]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

RESUELVE

PRIMERO. - AUTORIZAR el cambio de domicilio deprecado por **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486, **hacia la Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca**

SEGUNDO. OFICIAR al señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, con el fin de que se realicen los respectivos trámites y gestiones de registro y actualización ante el INPEC competente, para que se prosiga el sistema de custodia y vigilancia en prisión domiciliaria del interno **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486 en la dirección autorizada **Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca** y una vez efectúe el trámite respectivo, se le solicita se comunique a este despacho.

[8] CSJ T **102248**
[9] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

TERCERO. – Por la Secretaría del Juzgado REQUERIR POR SEGUNDA VEZ con carácter URGENTE Y EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, la documentación necesaria – art 471 C.P.P. –, a fin de resolver la petición de Libertad Condicional impetrada por el condenado **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486

Una vez obtenida la documentación requerida, **REINGRESAR** las presentes diligencias al despacho, a fin de resolver la solicitud de libertad condicional invocada por el condenado

CUARTO. - REMITIR copia del presente auto a las directivas de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, con el fin de que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 13 de marzo de 2024
Oficio No. 0589

Señor
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD
LA MODELO
Bogotá D.C.
juridica.ecmodelo@inpec.gov.co

URGENTE – SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ART. 471 C.P.P. – LIBERTAD CONDICIONAL – POR SEGUNDA VEZ

AUTORIZA CAMBIO DOMICILIO

CUI:	**11001600000201700563**
Radicación:	**2021-0046**
Sentenciado:	**JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO**
Identificación:	**C.C. No. 11.366.486**
Delito:	**HURTO POR MEDIO INFORMÁTICO Y SEMEJANTES AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO**
Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA – CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. - LA MODELO –**
Decisión:	**AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO SOLICITA POR 2ª VEZ DOCUMENTOS ART. 471 CPP**

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de la fecha, le comunico que este Despacho dispuso **AUTORIZAR** el cambio de domicilio deprecado por **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486, **hacia la Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca**

Por lo anterior, este Juzgado ordenó oficiar a esas dependencias con el fin de que se realicen los respectivos trámites y gestiones de registro y actualización ante el INPEC competente, para que se prosiga el sistema de custodia y vigilancia en prisión domiciliaria del interno **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486 en la dirección autorizada **Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca** y una vez efectúe el trámite respectivo, se le solicita se comunique a este despacho..

Aunado a lo anterior, le SOLICITO POR SEGUNDA VEZ CON CARÁCTER URGENTE Y EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA, remitir la documentación prevista en el artículo 471 del C.P.P., con el fin de resolver la Libertad Condicional invocada por el condenado.

Lo anterior, en aras de salvaguardar los derechos constitucionales del prenombrado.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 13 de marzo de 2024
Oficio No. 0590

Señor
JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO
Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez
Madrid Cundinamarca
Celular 3114938080
gomeznavarrojuancarlos62@gmail.com

CUI:	**11001600000201700563**
Radicación:	**2021-0046**
Sentenciado:	**JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO**
Identificación:	**C.C. No. 11.366.486**
Delito:	**HURTO POR MEDIO INFORMÁTICO Y SEMEJANTES AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO**
Reclusión:	**PRISIÓN DOMICILIARIA – CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. - LA MODELO –**
Decisión:	**AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO SOLICITA POR 2ª VEZ DOCUMENTOS ART. 471 CPP**

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de la fecha, le comunico que este Despacho dispuso **AUTORIZAR** el cambio de domicilio deprecado por **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486, **hacia la Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca**

Por lo anterior, este Juzgado ordenó oficiar al señor director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, con el fin de que se realicen los respectivos trámites y gestiones de registro y actualización ante el INPEC competente, para que se prosiga el sistema de custodia y vigilancia en prisión domiciliaria del interno **JUAN CARLOS GOMEZ NAVARRO** identificado con C.C. No. 11.366.486 en la dirección autorizada **Calle 15 No. 6 – 122 Interior 3 Barrio Miguel Velásquez de Madrid Cundinamarca** y una vez efectúe el trámite respectivo, se le solicita se comunique a este despacho.

Aunado a lo anterior, SOLICITÓ POR SEGUNDA VEZ ante la dirección de la CPMS BOGOTA LA MODELO, CON CARÁCTER URGENTE Y EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA, remitir la documentación prevista en el artículo 471 del C.P.P., con el fin de resolver la Libertad Condicional invocada por el condenado.

Lo anterior para los fines legales pertinentes.

Cordialmente,

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 13 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA** identificado con C.C. No. 1.007.158.115, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0067 del 27 de febrero de 2024 se emitió el Informe Valoración Asistencia Social de fecha 4 de marzo de 2024, para el estudio de la prisión domiciliaria art. 38G del C.P. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo trece (13) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0108

CUI:	**11001600000202201350**
Número Interno	**2023-0016**
Condenado	**JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA**
Identificación:	**C.C. No. 1.007.158.115**
Delito:	**CONCURSO HETEROGENEO DE HURTO CALIFICADO AGRAVADO TENTADO, FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES Y LESIONES PERSONALES DOLOSAS AGRAVADAS**
Sitio de Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G DEL C.P.**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA** identificado con C.C. No. 1.007.158.115, quien se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA con la documentación para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 22 de octubre de 2021 y preacuerdo aprobado, el Juzgado 51 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 20 de mayo de 2022,

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

CONDENÓ a **JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA** (y otro[1]), a la pena principal de **SESENTA Y SEIS (66) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **concurso heterogéneo, de HURTO CALIFICADO AGRAVADO TENTADO, FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES y LESIONES PERSONALES DOLOSAS AGRAVADAS** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo lapso de la prisión y a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante seis (6) meses. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 20 de mayo de 2022

El Juzgado 51 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., mediante providencia del 5 de septiembre de 2022, resolvió aclarar la sentencia proferida por ese despacho el 20 de mayo de 2022, en el sentido de indicar que el número de cédula de ciudadanía del sentenciado JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA es **1.007.158.115**, y no "*1.007.157.115"*

A través del informe secretarial del 30 de junio de 2022 emitido por el secretario del Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C., se indicó:

"(…) Se recibe vía correo electrónico de la fiscalía 271 seccional el radicado derivado CUI 11001 60 00 000 2022 01350 de acuerdo a lo dispuesto por el Juzgado 51 Penal del Circuito en audiencia del 03 de mayo de 2022 que ordenó la Ruptura de la Unidad Procesal. En atención a lo anterior, se procede a verificar las diligencias y el SPOA dejando las siguientes precisiones:

*PROCESO ORIGINAL **11001 60 00 013 2021 05333 NI 406148** queda para DIEGO ANDRES ALTURO VARGAS por los delitos de Fabricación, Trafico y Porte de Armas de Fuego, Hurto Calificado y Agravado y Lesiones Personales Agravadas. Con Escrito de Acusación inicialmente en conocimiento del Juzgado 51 Penal del Circuito, despacho se declara impedido para seguir conociendo del asunto y dispone que el proceso se someta a reparto aleatorio entre los Juzgados de Conocimiento. Carpeta que se envía al grupo de Reparto de Conocimiento, para asignar juez en razón a la ruptura decretada y al impedimento manifestado.*

*CUI DERIVADO **11001 60 00 000 2022 01350 NI 420749**, queda para CRISTIAN DAVID AGUIRRE ALBA con C.C. 1.000.730.184 y JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA con C.C. 1.007.158.115 por los delitos de Hurto Calificado Agravado Tentado, Fabricación, Trafico y Porte de Armas de Fuego y Lesiones Personales Dolosas Agravadas, con sentencia condenatoria emitida el 20 de mayo de 2022 por Preacuerdo suscrito por los penalmente responsables y la Fiscalía General de la Nación, ante el Juzgado 51 Penal del Circuito. Carpeta virtual que se direcciona al grupo de envíos a Ejecución de Penas, para lo de su cargo (…)".*

JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el día 22 de octubre de 2021**[2], recluido en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0024 del 10 de enero de 2023

Por auto interlocutorio No. 0257 del 23 de mayo de 2023, esta agencia judicial reconoció al interno redención de pena de 2 meses y 21.5 días, a través de auto interlocutorio No. 0554 del 4 de diciembre de 2023 reconoció redención de pena de 2 meses.

[1] Cristian David Aguirre Alba
[2] Acta No. 501 – CARPETA 001 Documentos – CARPETA 01 Actuaciones Garantías – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

A través de auto interlocutorio No. 0067 del 27 de febrero de 2024, reconoció redención de pena al infractor de 1 mes y 3.5 días, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – art. 38G del C.P. -, invocada y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada - Carrera 22 este No. 49-24 barrio Villa Mercedes de Soacha Cundinamarca, en donde reside la señora Diana Paola Quintero, prima del condenado, identificada con C.C. No. 53.082.160 Celular 3216966886 – 3228640989 -, como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordenó al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado y el informe de valoración de asistencia social del 4 de marzo de 2024.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[3] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

[3] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[4].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el **22 de octubre de 2021**, el sentenciado **JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA – ART. 38G DEL C.P.

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de

[4] CSJ RAD 794 (01-07-20)

contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Carrera 22 este No. 49-24 barrio Villa Mercedes de Soacha Cundinamarca, en donde reside la señora Diana Paola Quintero, prima del condenado, identificada con C.C. No. 53.082.160 Celular 3216966886 - 3228640989, quien rindió ante la Notaría Primera de Soacha Cundinamarca, el día 29 de enero de 2024, la DECLARACIÓN JURAMENTADA No. 00757, y manifestó que se hará responsable de todo lo referente a los cuidados y manutención de **JHOJAN ANDRES QUINTERO** hasta que termine de cumplir su condena.

4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.3.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [5].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **concurso heterogéneo, de HURTO CALIFICADO AGRAVADO TENTADO, FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES y LESIONES PERSONALES DOLOSAS AGRAVADAS** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

[5] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*
>
> ***PARÁGRAFO****. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> *"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. **No se concederán**; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; **ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo**, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*
>
> *<INCISO 2> Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales*

con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. …"

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA** como **concurso heterogéneo, de HURTO CALIFICADO AGRAVADO TENTADO, FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES y LESIONES PERSONALES DOLOSAS AGRAVADAS**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[6]

4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

[6] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***"****(…)* ***Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*
>
> *Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

> *"(…)* ***Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor****:* ***Artículo 38G.*** *La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(…)"*

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

> ***Artículo 38G****, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***Parágrafo****. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

> ***"(…) Artículo 23.*** *Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:* ***Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.*** *Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
>
> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)****" (Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De la pena impuesta al condenado, esto es, **66 meses de prisión,** según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **33 meses.**

JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 22 de octubre de 2021**[7] hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **873 días**, es decir, **29 meses y 3 días.**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 25 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0257 del 23 de mayo de 2023, reconoce 2 meses y 21.5 días
- auto interlocutorio No. 0554 del 4 de diciembre de 2023, reconoce 2 meses
- auto interlocutorio No. 0067 del 27 de febrero de 2023, reconoce 1 mes y 3.5 días

En efecto, el interno **JHOJAN ANDRES QUINTERO CHICA** acumula un total de **TREINTA Y CUATRO (34) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS** de la pena principal impuesta, por lo tanto, **cumple con el factor objetivo.**

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que el infractor en el escrito de solicitud manifiesta que el inmueble para continuar con el cumplimiento de la pena se localiza en la **Carrera 22 este No. 49-24 barrio Villa Mercedes de Soacha Cundinamarca, en donde reside la señora Diana Paola Quintero, prima del condenado, identificada con C.C. No. 53.082.160 Celular 3216966886 – 3228640989**

Para certificar el arraigo familiar y social, adjunta DECLARACIÓN JURAMENTADA No. 00757 rendida ante la Notaría 1ª de Soacha Cundinamarca, por la señora **Diana Paola Quintero** (prima del condenado), quien indicó manifestó que se hará responsable de todo

[7] Acta No. 501 – CARPETA 001 Documentos – CARPETA 01 Actuaciones Garantías – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

lo referente a los cuidados y manutención del infractor hasta que termine de cumplir su condena.

Ahora bien, al tenerse en cuenta el estudio del arraigo realizado por el Asistente Social de este Juzgado, mediante el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 4 de marzo de 2024, se observa lo siguiente:

"(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

Para adelantar la visita domiciliaria a la residencia a la cual el señor condenado JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA, se trasladaría para continuar purgando pena, eventualmente, en prisión domiciliaria, en la ***Cra 22 Este No. 49-24 Barrio VIlla Mercedes, Soacha (Cundinamarca),*** *fueron realizadas entrevistas al abonado de celular 3228640989 y 3216966886, tratándose de números celular y WhatsApp de una prima del condenado, persona con quien aquel residía antes de ser privado de la libertad.*

Durante los días 28 y 29 de febrero y durante el primero de marzo del año en curso, fueron realizadas entrevistas telefónicas con duración de más de una hora y treinta minutos de duración.

Atendió la entrevista DIANA PAOLA QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.082.160, de 39 años de edad y ocupación ama de casa.

La señora entrevistada es oriunda de Cunday (Tolima) y reside en el municipio de Soacha hace 18 años. Dicha señora convive hace más de 15 años con el señor JUAN CARLOS CARDONA, de ocupación transportador camionero para la Ferretería Márquez de Bogotá hace aproximadamente cinco años.

La señora DIANA PAOLA QUINTERO y su compañero permanente tienen dos hijos: HAROLD JOHAN CARDONA QUINTERO (18) bachiller y actualmente desempleado y KEVIN SANTIAGO CARDONA QUINTERO (16) estudiante 8º grado Colegio Gabriel García Márquez.

La señora entrevistada informó que JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA residía hace +-9 años con ella y su familia porque "la mamá por él casi no veía", "mantenía en la calle", por lo que ella "se condolió del muchacho" y lo llevó a vivir con ella y su familia.

Respecto a los padres del condenado se conoció que el progenitor nunca asumió sus responsabilidades afectiva y económica. En cuanto a la señora madre del condenado es la señora SANDRA MILENA QUINTERO, persona en situación de pobreza madre de siete hijos, residiendo hace +-16 años con GIOVANNY HERNÁNDEZ, ocupación ayudante de construcción.

Los hermanos del señor condenado son:

1. *DIEGO ALEXANDER VARGAS QUINTERO (23), ocupación construcción.*
2. *JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA (21). El aquí condenado.*
3. *KAREN VALENTINA MACETO QUINTERO (20). Madre soltera, ocupación hogar.*
4. *ZHARICK YERIDZA HERNÁNDEZ QUINTERO (17). Estudiante 9º Col. Gabriel García Márquez.*
5. *STEFANNY YULIETH HENÁNDEZ QUINTERO (16). Estudiante 11º Col. Gabriel García Márquez.*
6. *YERSON GEOVANNY HERNÁNDEZ QUINTERO (14). Estudiante 8º Col. Gabriel García Márquez.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

7. *WILLIAM CASTELLANOS RINCÓN (8). Estudiante tercero de primaria Colegio Marruecos.*

La familia de origen del señor condenado reside en el mismo Barrio Villa Mercedes, a pocas cuadras de donde reside la señora DIANA PAOLA QUINTERO y su familia, grupo familiar de acogida del señor condenado.

Fue manifestado que tanto la familia de origen, como la de acogida se solidarizan y expresaron apoyo afectivo y solidaridad económica frente al joven condenado para que pueda retornar con su familia y reasumir su vida una vez fuera de prisión.

En torno al condenado señor JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA, quien cuenta con 21 años, fue reportado que es soltero, no tiene hijos y se dedicaba a trabajar como ayudante en los transportes nocturnos que hacen viajes después de las 10 PM entre la autopista sur hasta Altos de Cazucá y otros sectores periféricos de Soacha.

Frente a la conducta delictiva la señora entrevistada manifiesta que son una familia humilde y trabajadora, quienes nunca dieron ejemplo de mal comportamiento y que por supuesto consideran inadecuado tal actuar. Considera la familia que el joven se dejó influenciar negativamente de sus pares en dichos sectores, llevándolo a aunarse con otros jóvenes para armarse y cometer hurtos.

Aseveró la señora DIANA PAOLA QUINTERO que la familia desconocía lo que estaba ocurriendo, situación que solo se dio a conocer cuando el joven condenado fuera aprehendido.

La señora entrevistada manifestó que JHOJAN ANDRÉS jamás había cometido delitos, que es un joven tranquilo, que no es agresivo, fue negado el consumo de OH u otras SPA y que por lo sucedido se encuentra arrepentido, habiendo sido conminado por su familia para alejarse de jóvenes en marginalidad, drogas y criminalidad.

Se espera que una vez el joven retorne con su grupo familiar lo ayuden a conseguir trabajo y se realice una tecnología en el SENA en labores que le brinden oportunidades laborales.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda en la cual el señor condenado pretende continuar purgando pena, eventualmente, en caso le sea concedida la Prisión Domiciliara está ubicada en la ***Cra 22 Este No. 49-24 Barrio Villa Mercedes, Soacha (Cundinamarca)****, residencia perteneciente al estrato UNO.*

Se trata de una vivienda de tres pisos, propiedad de la señora DIANA PAOLA QUINTERO, perteneciente al estrato UNO y propiedad familiar hace más de 10 años. La vivienda pertenecía a una cuñada, quien le cedió un lote donde se edificó. Se trataba de un sector de invasión que se legalizó hace varios años.

La casa cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica. El agua y alcantarillado son suministrados por la alcaldía mediante un sistema de aguas propio, cancelando apenas 7 mil pesos mensuales por el servicio, tras acuerdo de la comunidad y la Alcaldía de Soacha.

En cuanto al gas, la familia compra pipeta mensualmente.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como aceptables, el lugar cuenta con condiciones internas y externas aceptables. La construcción tiene alrededor de 10 años, en material terminado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de alto riesgo, puesto que se trata de un sector urbano marginal periférico al oriente de Soacha, caracterizado por la presencia de problemáticas sociales por recepción de grupos en situación de desplazamiento, marginalidad y criminalidad, pobreza y abandono estatal.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que el señor condenado JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA, recibirá el apoyo económico de toda su familia nuclear (prima, madre y hermanos).

Los ingresos del hogar receptor, son aportados por el señor JUAN CARLOS CARDONA, camionero que devenga un promedio mensual de DOS SMMLV.

La familia manifiesta que en medio de sus condiciones difíciles cuenta con los medios necesarios para recibir y apoyar a JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA, en caso le sea concedida la prisión domiciliaria.

CONCEPTO

El señor condenado JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA, tiene 21 años, soltero sin hijos. El grupo familiar del señor condenado está conformado por su prima y su hogar nuclear, su señora madre y hermanos.

El joven cursó el bachillerato y trabajaba de manera informal como ayudante del transporte nocturno entre la autopista sur y los altos de cazuca.

El señor condenado cuenta con apoyo económico y solidaridad de toda su familia, personas quienes manifestaron estar dispuestas a recibirlo y garantizar su bienestar, en medio de sus condiciones económicas empobrecidas.

Las condiciones de habitabilidad observadas son aceptables. La familia cuenta con una casa de su propiedad. Aspectos de seguridad del lugar de habitación fueron calificadas como de alto riesgo, puesto que se trata de un sector urbano marginal periférico al oriente de Soacha, caracterizado por la presencia de problemáticas sociales por recepción de grupos en situación de desplazamiento, marginalidad y criminalidad, pobreza y abandono estatal.

Por parte de la familia de aquel, se expresa solidaridad económica y existencial hacia JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA, situación que implica contar con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y culminación del proceso de resocialización en que se encuentra (…)".

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercen un control material del cumplimiento de la condena, pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

> ***ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.
2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.
3. Testimonio de vecinos y allegados.
4. Labores de inteligencia.

Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.

En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.

4.5.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **concurso heterogéneo, de HURTO CALIFICADO AGRAVADO TENTADO, FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES y LESIONES PERSONALES DOLOSAS AGRAVADAS**

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

"ARTÍCULO 38G. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2o del artículo 376 del presente código."

4.5.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada, no aparece que haya sido condenado en perjuicios o se iniciara el incidente de reparación integral, como quiera que el Juzgado 51 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 20 de mayo de 2022 anotó en la parte

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

motiva: *"ya que los aquí procesados indemnizaron prontamente a la víctima",* por lo que cumple con este requisito.

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **Carrera 22 este No. 49-24 barrio Villa Mercedes de Soacha Cundinamarca. Celular 3216966886 – 3228640989**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conlleva. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluido proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Carrera 22 este No. 49-24 barrio Villa Mercedes de Soacha Cundinamarca. Celular 3216966886 – 3228640989, a favor de JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA**

5.1. Sobre la Competencia

Debido a que el condenado va a seguir purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en Soacha Cundinamarca, por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el auto **PROCEDA** a remitir las diligencias al homólogo de Fusagasugá con Sede en Soacha Cundinamarca, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y

salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[8], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales,

---

[8] Ibídem.

en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[9]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[10]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA** identificado con C.C. No. 1.007.158.115, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **34 MESES y 28 DÍAS.**

SEGUNDO. - CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **JHOJAN**

[9] CSJ T **102248**
[10] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

ANDRÉS QUINTERO CHICA identificado con C.C. No. 1.007.158.115, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

TERCERO. - COMISIONAR al Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA** quien se encuentra recluido en dicho penal.

CUARTO. - Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Carrera 22 este No. 49-24 barrio Villa Mercedes de Soacha Cundinamarca. Celular 3216966886 – 3228640989, a favor de JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA**

QUINTO. - DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **Carrera 22 este No. 49-24 barrio Villa Mercedes de Soacha Cundinamarca. Celular 3216966886 – 3228640989, a favor de JHOJAN ANDRÉS QUINTERO CHICA**, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEXTO. – Una vez ejecutoriado el presente auto, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las diligencias al homólogo de Fusagasugá con Sede en Soacha Cundinamarca, para continuar con la vigilancia de lo que resta del cumplimiento de la pena impuesta al infractor.

SEPTIMO. - Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, para que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 13 de 2024: Al despacho del señor Juez el proceso contra **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** identificada con C.C. No. 1.073.166.223, informando que se recibe a través del correo institucional el 21 de febrero de 2024, la solicitud invocada por la condenada a través de apoderado judicial, mediante la cual solicita que se conceda la rehabilitación de derechos civiles y políticos ya que cumplió la pena impuesta por el juzgado fallador. Adjunta poder sin firma del abogado apoderado, registro de página web rama judicial actuaciones homólogo 29 de Bogotá en dos folios.

Se deja constancia que no se aportan documentos de identificación del apoderado judicial de la condenada. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo trece (13) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0109

CUI	**25430600041620180085 5**
NI	**2023-0161**
Condenada	**JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ**
Identificación	**1.073.166.223**
Delito	**SECUESTRO SIMPLE CON CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Reclusión	**ORDEN DE CAPTURA**
Decisión	**NIEGA REHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Vista la constancia secretarial que antecede, este Despacho procede a decidir lo que en derecho corresponda sobre la rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** identificada con C.C. No. 1.073.166.223, quien se encuentra con **ORDEN DE CAPTURA**

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. - ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 15 de octubre de 2018 y preacuerdo aprobado **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** (y otros[1]), fue condenada a la pena de **CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION** por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de marzo de 2020, como cómplice responsable del delito de **SECUESTRO SIMPLE CON CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACION PUNITIVA, EN CONCURSO HETEROGENEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal de prisión impuesta. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, mediante decisión del 14 de enero de 2021, confirmó el fallo condenatorio que cobró ejecutoria el 29 de enero de 2021.

La condenada **fue capturada por las presentes diligencias el 17 de octubre de 2018** y el homólogo 29 de Bogotá D.C., mediante auto del 1 de septiembre de 2021, concedió la libertad condicional a **Johana Geraldine Ayure Gutiérrez** bajo un periodo de prueba de **36 meses y 22 días**, quien en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución de un (1) smlmv mediante póliza judicial 17-53-101010799 del 14 de octubre de 2021 y suscribió diligencia de compromiso el 19 de octubre de 2021, se libró boleta de libertad condicional No. 117 y el 30 de noviembre de 2021 reconoció redención de pena de 20 días y **redujo el periodo de prueba de 36 meses y 02 días.**

En vista que el mencionado auto que concedió la libertad condicional a la prenombrada, fue objeto de recurso de apelación interpuesto por el delegado del Ministerio Público, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, mediante providencia del 27 de enero de 2023, revocó el auto de fecha 1 de septiembre de 2021, que concedió la libertad condicional a la sentenciada y en su lugar DENEGO el subrogado penal, disponiendo que una vez en firme la providencia se libre orden de captura en contra de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ (orden de captura oficio 111)**

Ahora bien, se ha de tener en cuenta que el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, en el auto de fecha 27 de enero de 2023 que revocó el subrogado penal indicó, **que al momento de la emisión del auto del 1 de septiembre de 2021 que concedió la libertad condicional, la procesada JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ había purgado un total de 34 meses y 14 días de la pena total de 54 meses de prisión**

Aunado a lo anterior, se itera, **el homólogo 29 de Bogotá D.C., mediante auto del 30 de noviembre de 2021, reconoció redención de pena a la sentenciada de 20 días.**

Así las cosas, se infiere que **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** dentro del presente asunto descontó un total de **35 meses y 4 días** de la pena de **54 meses de prisión**, impuesta en sentencia condenatoria, quedándole pendiente por cumplir **18 meses y 26 días de manera intramural**

[1] Nicolás Santiago Murcia Lancheros y Paula Gisseth Barreto Rivera

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Este despacho avocó por competencia el conocimiento del proceso a través de auto de sustanciación No. 0502 del 28 de abril de 2023 y dispuso reiterar ante las autoridades correspondientes la orden de captura oficio No. 111 del 21 de febrero de 2023 en contra de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ**, expedida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca.

En la presente oportunidad ingresan las diligencias al despacho con el fin de emitir pronunciamiento acerca la rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuestas a la sentenciada en el fallo condenatorio.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1.- COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud invocada por la condenada conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso, al tratarse de un asunto sin preso con orden de captura vigente, siendo el fallador el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, que por competencia corresponde a este circuito, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

De acuerdo a los hechos ocurridos el **15 de octubre de 2018**, la infractora **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** fue investigada y condenada bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2.- DE LA REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS.

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Atendiendo a la solicitud invocada por la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** se observa que mediante sentencia de fecha 16 de marzo de 2020 emitida por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, fue condenada a la pena principal de **CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal de prisión impuesta. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, mediante decisión del 14 de enero de 2021, confirmó el fallo condenatorio que **cobró ejecutoria el 29 de enero de 2021**.

En atención a los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *"la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas"*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *"el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía".*

Agrega que *"Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.".*

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

> *"**ARTICULO 92. LA REHABILITACION.** La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:*
>
> *1. **Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho.** Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.*
>
> *2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.*

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> ***3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.***
>
> *Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política."* ***(Resalta fuera de texto)***

Aterrizando al caso objeto de estudio, como se dijo en líneas anteriores el Despacho debe pronunciarse sobre la rehabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas en contra de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** como quiera que con base en la norma aplicable, encontramos que desde el **29 de enero de 2021** fecha en que el fallo condenatorio quedó debidamente ejecutoriado, comenzó a correr el término fijado por la autoridad de conocimiento, respecto de la inhabilitación de derechos y funciones públicas independientemente que la pena impuesta se haya materializado parcialmente, dicho término continua durante el lapso impuesto **(4 años y 6 meses) hasta el 29 de julio de 2025**, fecha en la cual habría pasado el término previsto en la sentencia y en aplicación del numeral primero de la norma en cita, la recuperación de estos derechos, tendrán que ser restablecidos.

Por tanto, éste funcionario, se **ABSTENDRÁ DE RESTABLECER** los derechos jurídicos que en su momento fueron inhibidos en el fallo condenatorio, por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca en sentencia del 16 de marzo de 2020, confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, mediante decisión del 14 de enero de 2021.

En firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella ENCASÍLLENSE en los anaqueles del juzgado las diligencias para la vigilancia de la pena accesoria (art. 92 del C.P.).

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).
En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los*

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.
Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[5], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad…"[6]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así,*

---

[5] Ibídem.
[6] CSJ T **102248**

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[7]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá,

RESUELVE:

PRIMERO. - ABSTENERSE de decretar la REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS a favor de la sentenciada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ identificada con C.C. No. 1.073.166.223,** conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

SEGUNDO. - Se ordena por la secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** a la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** el contenido del presente auto a través del correo electrónico yohannalahermosa15@hotmail.com

TERCERO- En firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, este Despacho dispone ENCASILLAR en los anaqueles del juzgado las diligencias para la vigilancia de la pena accesoria (art. 92 del C.P.).

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

[7] C.S.J. RAD 97792

l.e.s.r.

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)

Marzo 13 de 2024. Al despacho el proceso contra **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** identificada con C.C. No. 1.073.166.223, informando que se recibe a través del correo institucional el 12 de febrero de 2024, procedente del Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C., el memorial suscrito por la condenada, quien solicita el paz y salvo por pena cumplida, como quiera que el homólogo 29 de Bogotá D.C., le concedió la libertad por pena condicional el día 23 de octubre de 2021, indica que cumple con la totalidad de la condena, por lo que solicita que se declare la extinción de la condena y así mismo se oficie a las entidades a quienes se les comunicó la sentencia. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo trece (13) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0110

CUI	**25430600041620180085 5**
NI	**2023-0161**
Condenada	**JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ**
Identificación	**1.073.166.223**
Delito	**SECUESTRO SIMPLE CON CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Reclusión	**ORDEN DE CAPTURA**
Decisión	**NIEGA EXTINCIÓN DE LA SANCION PENAL REITERA POR SEGUNDA VEZ ORDEN DE CAPTURA**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Vista la constancia secretarial que antecede, este Despacho procede a decidir lo que en derecho corresponda sobre la rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** identificada con C.C. No. 1.073.166.223, quien se encuentra con **ORDEN DE CAPTURA**

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01)

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 15 de octubre de 2018 y preacuerdo aprobado **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** (y otros[1]), fue condenada a la pena de **CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION** por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de marzo de 2020, como cómplice responsable del delito de **SECUESTRO SIMPLE CON CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACION PUNITIVA, EN CONCURSO HETEROGENEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal de prisión impuesta. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, mediante decisión del 14 de enero de 2021, confirmó el fallo condenatorio que cobró ejecutoria el 29 de enero de 2021.

La condenada **fue capturada por las presentes diligencias el 17 de octubre de 2018** y el homólogo 29 de Bogotá D.C., mediante auto del 1 de septiembre de 2021, concedió la libertad condicional a **Johana Geraldine Ayure Gutiérrez** bajo un periodo de prueba de **36 meses y 22 días**, quien en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución de un (1) smlmv mediante póliza judicial 17-53-101010799 del 14 de octubre de 2021 y suscribió diligencia de compromiso el 19 de octubre de 2021, se libró boleta de libertad condicional No. 117 y el 30 de noviembre de 2021 reconoció redención de pena de 20 días y **redujo el periodo de prueba de 36 meses y 02 días.**

En vista que el mencionado auto que concedió la libertad condicional a la prenombrada, fue objeto de recurso de apelación interpuesto por el delegado del Ministerio Público, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, mediante providencia del 27 de enero de 2023, revocó el auto de fecha 1 de septiembre de 2021, que concedió la libertad condicional a la sentenciada y en su lugar DENEGO el subrogado penal, disponiendo que una vez en firme la providencia se libre orden de captura en contra de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ (orden de captura oficio 111)**

Ahora bien, se ha de tener en cuenta que el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, en el auto de fecha 27 de enero de 2023 que revocó el subrogado penal indicó, **que al momento de la emisión del auto del 1 de septiembre de 2021 que concedió la libertad condicional, la procesada JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ había purgado un total de 34 meses y 14 días de la pena total de 54 meses de prisión**

Aunado a lo anterior, se itera, **el homólogo 29 de Bogotá D.C., mediante auto del 30 de noviembre de 2021, reconoció redención de pena a la sentenciada de 20 días.**

Así las cosas, se infiere que **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** dentro del presente asunto descontó un total de **35 meses y 4 días** de la pena de **54 meses de prisión**, impuesta en sentencia condenatoria, quedándole pendiente por cumplir **18 meses y 26 días de manera intramural**

Este despacho avocó por competencia el conocimiento del proceso a través de auto de sustanciación No. 0502 del 28 de abril de 2023 y dispuso reiterar ante las autoridades correspondientes la orden de captura oficio No. 111 del 21 de febrero de 2023 en contra de

[1] Nicolás Santiago Murcia Lancheros y Paula Gisseth Barreto Rivera

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ, expedida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca.

En la presente oportunidad ingresan las diligencias al despacho con el fin de emitir pronunciamiento acerca la rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuestas a la sentenciada en el fallo condenatorio.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud invocada por la condenada conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso, al tratarse de un asunto sin preso con orden de captura vigente, siendo el fallador el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, que por competencia corresponde a este circuito, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

De acuerdo a los hechos ocurridos el **15 de octubre de 2018**, la infractora **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** fue investigada y condenada bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2 De la Ejecutoria de una sentencia

El artículo 169 de la Ley 600 de 2000 clasifica las providencias que se dicten en una actuación en resoluciones, autos y sentencias. A su vez señala que se denominan sentencias si deciden sobre el objeto del proceso, bien sea en primera o segunda instancia, en virtud de la casación o de la acción de revisión.

---

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[4].*

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

El artículo 187 de la Ley 600 de 2000, norma que regulaba lo concerniente a la ejecutoria de las providencias en materia penal cuando se inició, tramitó y definió el proceso adelantado contra el condenado, disponía que Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. Continúa la norma diciendo que la que decide los términos de apelación o de queja, contra las providencias interlocutorias, la consulta, ***La que decide el recurso de casación,*** salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, y las que deciden la acción de revisión, ***quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.***

4.3 DE LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN

La pretensión punitiva del Estado, admite para las penas, diversas causas de extinción que se encuentran catalogadas en la ley como i) la extinción de la acción penal y ii) extinción de la pena. Sin embargo, estos fenómenos están sometidos a un tratamiento diverso, cuyas causas el legislador estipuló y se encuentran consagradas en el estatuto penal.

De conformidad con los artículos 88 y 89 del Código Penal de la Ley 599 de 2000 se tiene que la extinción de la acción penal goza de diferentes causas que la originan y en el momento de presentarse produce dicha extinción.

Reza el artículo 88 del C.P:

> ***"ARTICULO 88. EXTINCION DE LA SANCION PENAL.*** *Son causas de extinción de la sanción penal:*
>
> *1. La muerte del condenado.*
> *2. El indulto.*
> *3. La amnistía impropia.*
> *4.* ***La prescripción****.*
> *5. La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias.*
> *6. La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley.*
> *7. Las demás que señale la ley."* **(Resalta fuera de texto)**

A su turno el artículo 89 del mismo estatuto estipula que la pena privativa de la libertad prescribe en el término fijado en la sentencia o también en el que falte por ejecutar con un mínimo de 5 años y para los demás casos prescribe en 5 años.

> ***"ARTÍCULO 89. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 2098 de 2021.*** *El nuevo texto es el siguiente:> La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia.*
>
> *La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años."*

Aunado a la norma en cita, expresa el artículo 90 del Código Penal:

> ***"ARTÍCULO 90. INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.*** *El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma."*

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Conforme se ha señalado en diferentes pronunciamientos por parte de los Altos Tribunales la prescripción de la pena se consolida, no solamente por el transcurso del tiempo, sino en el mismo tiempo el abandono por parte del titular del derecho que deja de ejercerlo, motivo que lleva a la extinción.

Sin embargo, dentro del ordenamiento se consagra la posibilidad de interrumpir el término prescriptivo si se desarrolla el acto que reivindique el mismo.

En un pronunciamiento la H. Corte Constitucional señaló lo siguiente:

> *"La prescripción es la cesación de la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el periodo de tiempo fijado por la ley, opera tanto para la acción como para la pena. En la prescripción de la pena el Estado renuncia a su potestad represiva por el transcurso del tiempo, anulando de esta manera el interés de hacer efectiva una condena o sanción legalmente impuesta".*[5]

Según lo expuesto en lo que tiene que ver con la prescripción de la pena se manejan bajo la esencia de que el condenado se encuentre gozando de la libertad, pero existen varias posibilidades por las cuales puede interrumpir dicho goce, entre ellas las consagradas en el artículo 65 del C.P.

Efectivamente, estas situaciones extraordinarias en las que el plazo de prescripción comienza a correr en otro momento, se dan como por ejemplo en la revocatoria de la ejecución condicional, de la libertad condicional, cuando infringe la ley en dicho periodo o no cancela los perjuicios o simplemente no cancela la caución impuesta para el disfrute del beneficio.

Estos otros momentos en que se interrumpe la pena son los que llevan a que se haga una nueva evaluación con respecto a la regla inicial y que forman parte de la prescripción de la sanción penal.

Existen varios eventos en que se pueden dar esas prescripciones y que son interrumpidas durante el periodo otorgado.

1. Si al condenado se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mismo en forma renuente no cancela la caución impuesta ni firma la diligencia de compromiso, significa que no está de acuerdo con la oportunidad que le está brindando el Estado con el fin de disfrutar de esa "libertad". Si ello ocurre y el infractor -90 días después de ejecutoria de la sentencia- no comparece, dará pie a que se le revoque el subrogado y a partir de allí, de la ejecutoria de la sentencia, empieza el término de prescripción de la sanción privativa fijado en el fallo sin ser menor de cinco años.
2. Si al condenado se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mismo acepta dicha prebenda cancelando la caución impuesta y firmando el acta de compromiso, significa que está obligado a cumplir con lo señalado en el artículo 65 del C.P.; sin embargo, para el presente caso, como su nombre lo indica, se "suspende" la ejecución de la pena y en consecuencia, el término prescriptivo de la misma, empezará una vez se termine el periodo de prueba impuesto.
3. Si el beneficiado cumple, dentro del periodo de prueba, con las obligaciones impuestas en el artículo 65 del C.P., el Estado procederá a extinguir la pena conforme lo señala la ley.

[5] Sentencia C-997 de octubre 12 de 2004. M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

4. Si el condenado está purgando pena impuesta y se le concede libertad condicional, una vez cancelada la caución y firmada el acta de compromiso, empezará el término prescriptivo-del tiempo que falte por ejecutar sin ser menor de cinco años-finalizado el periodo de prueba.

5. Si el condenado se le concede la libertad condicional y al ser apelada la segunda instancia la revoca, tendrá que cumplir el termino del periodo de prueba impuesto.

6. Si el condenado no cumple alguno de los requisitos consagrados en el artículo 65 del C.P., sobre todo el de conducta o la reparación de los daños, el Estado se verá en la obligación de revocar el subrogado otorgado en pos de proteger los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

7. Y por último si el fallador una vez dictado el fallo no le concede mecanismo sustitutivo alguno y ordena se libren las capturas en su contra y con el transcurrir del tiempo no se logra por parte de las autoridades su retención o el infractor no se somete.

Ahora bien, dando aplicación a los preceptos normativos citados, dentro del caso en particular se tiene que la pena impuesta a **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** en sentencia condenatoria del 16 de marzo de 2020 por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, mediante decisión del 14 de enero de 2021, **NO** ha prescrito.

Lo anterior, como quiera que a la infractora **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ**, le fue impuesta una pena privativa de la libertad de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISIÓN**, de lo que se deriva que, al ser una pena inferior a cinco años, el término de prescripción corresponde al mínimo determinado por la ley, es decir, cinco (5) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del C.P., la pena privativa de la libertad prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o el que falte por ejecutar, pero en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años *contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia.*

Por un lado, el término de prescripción debe contarse desde el momento en que cobre ejecutoria la sentencia condenatoria, es decir, que si la sentencia condenatoria quedó **ejecutoriada el 29 de enero 2021** de lo que se deriva que la sanción penal prescribiría el **29 de enero de 2026**.

Y por el otro, se tiene que la prescripción de la sanción penal se da por el tiempo de pena impuesto que falte por ejecutar – en el presente caso 18 meses y 26 días – pero, como lo indica el artículo - **en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años** *contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia.*

En el caso concreto, se tiene que **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ fue capturada por las presentes diligencias el 17 de octubre de 2018** y el homólogo 29 de Bogotá D.C., mediante auto del 1 de septiembre de 2021, concedió la libertad condicional a **Johana Geraldine Ayure Gutiérrez** bajo un periodo de prueba de **36 meses y 22 días**, quien en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución de un (1) smlmv mediante póliza judicial 17-53-101010799 del 14 de octubre de 2021 y suscribió diligencia de compromiso el 19 de octubre de 2021, se libró boleta de libertad condicional No. 117 y el 30 de noviembre de 2021 reconoció redención de pena de 20 días, y **redujo el periodo de prueba en 36 meses y 02 días.**

En vista que el mencionado auto que concedió la libertad condicional a la prenombrada, fue objeto de recurso de apelación interpuesto por el delegado del Ministerio Público, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, mediante providencia del 27 de enero de 2023, LO REVOCÓ, disponiendo que una vez en firme la providencia se libre

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

orden de captura en contra de JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ (orden de captura oficio 111). Ello significa que desde el momento en que le concedieron la libertad condicional – 1 de septiembre de 2021 - y la materializó – 19 de octubre de 2021 – no ha transcurrido el tiempo que decanta la norma, esto es, los cinco (5) años –

Entonces, debido a que el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca revocó el subrogado de la libertad condicional a la infractora, mediante auto del **27 de enero de 2023** y una vez quedó en firme dicha decisión, la autoridad falladora libró la orden de captura oficio No. 111 del **21 de febrero de 2023** y conforme a las previsiones del artículo 90 del C.P., dicho término se interrumpió en razón a la orden de revocatoria.

Conforme lo señala la ley y la jurisprudencia, a partir del vencimiento del período de prueba, el Estado (a través de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad) tiene plazo de cinco (5) años para extinguir la pena impuesta.

En este sentido, es claro para este servidor que en la causa seguida en contra de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** no opera el término de la prescripción, como quiera que no se cumple el presupuesto de carácter objetivo, puesto que la prenombrada no ha cumplido con el total de la pena de prisión impuesta, y debido a que se encuentra a órdenes del Estado, NO se ha perdido la potestad de hacer efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta en el fallo proferido en contra de la solicitante, de lo que se deduce que una vez expedida la orden de captura, la condenada debe materializar el tiempo que le queda por cumplir de manera intramural, debido a que le fue revocado el subrogado penal concedido.

Además, ha sido pacífica la jurisprudencia en señalar que la prescripción se consolida no solo en el transcurso del tiempo pues además si bien ya ha transcurrido el tiempo de pena que se le impuso (4 años y 6 meses), NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO FIJADO POR LA LEY PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL (CINCO AÑOS) y por lo tanto no se ha decaído el interés punitivo.

Señaló la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

3.1. *"…En lo que refiere a la prescripción de la sanción penal, el ordenamiento penal sustancial – Ley 599 de 2000 – contiene la regulación normativa sobre la materia y para ello consagró en su artículo 88 que la extinción de la pena puede devenir de la prescripción, entre otras causales, cuyo término de configuración, en tratándose de penas privativas de la libertad, se sujeta al lapso fijado en la sentencia o en el que falte por ejecutar,* ***pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años*** *contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia – canon 89 -.*

Por su parte, el precepto 90 ibídem prevé la posibilidad de interrupción del término prescriptivo, el cual tiene lugar cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.

En ese marco, tratándose de la potestad punitiva del Estado, la prescripción extintiva es un mandato de prohibición a sus autoridades para que se abstengan de hacer efectiva la sanción impuesta, si dejaron transcurrir el término fijado en la ley para lograr el sometimiento del responsable penalmente, debido al decaimiento del interés punitivo, el cual se ve reflejado en la incapacidad para aplicar la pena y su consecuente fenecimiento de la pretensión estatal para conseguir su cumplimiento. Sobre el tema la Corte Constitucional ha precisado:

"La prescripción es la cesación de la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el periodo de tiempo (sic) fijado por la ley, opera tanto para la acción

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

como para la pena. En la prescripción de la pena el Estado renuncia a su potestad represiva por el transcurso del tiempo, anulando de esta manera el interés de hacer efectiva una condena o sanción legalmente impuesta" (CC C-240 de 1994).

De acuerdo con lo expuesto, las disposiciones sobre la prescripción de la pena –artículos 89 y 90 del Código Penal-, ***operan en el supuesto de que el condenado se encuentre gozando de la libertad****, no obstante que en su contra exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, en cuyo evento comenzaría a transcurrir el término de prescripción, sin que el Estado hubiera ejercido la materialización del fallo.*

Ahora bien, en lo atinente a la interrupción del término de la prescripción a raíz de la concesión de subrogados penales, esta corporación judicial en sentencia de tutela del 27 de agosto de 2013, Rad. 66429, indicó que:

5. Interrupción del término de prescripción por aplicación del subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad.

Debe tomarse en cuenta que a diferencia del fenómeno de la prescripción debido a la insubordinación, manifestada por medio de la evasión a la acción de la autoridad, con los subrogados penales se otorga una libertad concedida legítimamente. El condenado, al aceptar la suscripción del acta de compromiso y mientras esté acatando las obligaciones impuestas, está dando cumplimiento a la sentencia y permanece sujeto a la vigilancia del juez de ejecución; por tanto, en ese lapso el término de prescripción de la pena permanece suspendido. Dada la función de vigilancia de la pena y a su eventual revocatoria, las autoridades no han perdido el dominio de la situación.

Al respecto, es oportuno apoyar esa tesis con los argumentos esbozados por el Dr. Mauro Solarte Portilla:

[…]Planteado de otro modo, siempre que el condenado acepte la voluntad estatal y se someta a sus determinaciones y condicionamientos, no corre el lapso prescriptivo. Tal ocurre si está en prisión (domiciliaria o intramural) o si está en libertad por la vía de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de la libertad condicional o de la libertad vigilada mediante mecanismos electrónicos. Si en cambio se declara en rebeldía y se fuga o elude la captura, siempre que, obviamente, el propósito no resulte fallido, comienza a correr el lapso prescriptivo, simultáneamente con la obligación estatal de someter al contumaz."[6]

La posición contraria, defendida por el apoderado judicial de la actora y el Ministerio Público, según la cual el término de prescripción, en este caso, comenzó a correr con la ejecutoria de la sentencia, no es razonable por cuanto desconoce el efecto que produce el sometimiento de la condenada a la prueba impuesta para gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y su consecuencia extintiva. (Lo subrayado es nuestro). (…)

Al tenor de los anteriores lineamientos jurídicos, resulta dable concluir que en el evento de haberse concedido el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, y el condenado previo a vencerse el término prescriptivo se presenta y firma el compromiso, es decir se empieza a efectivizar la sentencia, e incluso se somete a un período de prueba, resulta de sana lógica

[6] Solarte Portilla, Mauro. Algunos temas problemáticos en ejecución de penas. Bogotá: Escuela Judicial *"Rodrigo Lara Bonilla".* 2013 P. 130

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *señalar que en tales situaciones el Estado no desatendió su obligación punitiva y en tal medida no puede abstenerse de cumplir la sanción, toda vez que el término transcurrió con solución de continuidad, resultando así inoponible la prescripción de la pena, pues el condenado no se abstiene de materializar la sanción impuesta.*
>
> *Entonces, si la figura de la prescripción de la sanción penal, es incompatible con el de la ejecución, en esa medida no puede restringirse la interrupción del fenómeno a las hipótesis del artículo 90 del Código Penal, ya que resultaría discriminatorio, e incongruente con el instituto de los subrogados penales, en los supuestos en que la persona es captura o dejada a disposición y razón del mismo proceso se concede alguno de tales mecanismos y después de estar sujeto a unas obligaciones, al omitirlas, nuevamente debe ser capturado para que cumpla la pena intramural.*
>
> *Igualmente, se tiene que el término prescriptivo de la sanción penal, respecto de los sustitutos penales, se cuenta desde el momento en que se incumplió alguna de las obligaciones impuestas para la concesión del mismo, siempre que hubiese sido determinado por la autoridad judicial, o en su defecto, ante la imposibilidad de precisar la fecha del hecho incumplido, debe tomarse como parámetro de contabilización el día de finalización del periodo de prueba…"*[7]*.*

Así las cosas, encuentra este juzgado que no es posible extinguir la sanción penal por la poderosa razón de fallar uno de los presupuestos de la prescripción, como quiera que la falta de aplicación de la pena de prisión impuesta **no deriva de la incuria del Estado** sino de que materialmente la misma no se ha ejecutado debido a que **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** no ha saldado sus cuentas en razón de este proceso, por encontrarse con ORDEN DE CAPTURA vigente.

Por todo lo anterior, se ordena **REITERAR por segunda vez** ante las autoridades correspondientes la ORDEN DE CAPTURA oficio No. 111 del 21 de febrero de 2023 expedida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, en contra de la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** y se ordena por secretaría emitir los respectivos oficios.

Se ordena por la secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** a la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** el contenido del presente auto a través del correo electrónico yohannalahermosa-15@hotmail.com

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).
En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de*

[7] CSJ **Radicación n.° 109339 del 25-02-20 M.P. Dr José Francisco Acuña Vizcaya**

conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.
Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[8], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad…"[9]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las*

[8] Ibídem.
[9] CSJ T **102248**

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[10]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá,

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR LA DECLARATORIA DE EXTINCIÓN DE LA SANCIÒN PENAL POR PRESCRIPCIÓN a favor de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** identificada con C.C. No. 1.073.166.223 conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. REITERAR por segunda vez ante las autoridades correspondientes la ORDEN DE CAPTURA oficio No. 111 del 21 de febrero de 2023 expedida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, en contra de la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** y se ordena por secretaría emitir los respectivos oficios.

TERCERO.- Se ordena por la secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** a la condenada **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** el contenido del presente auto a través del correo electrónico yohannalahermosa-15@hotmail.com

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

[10] C.S.J. RAD 97792

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 13 de marzo de 2024
Oficio No. 0604

Señores Jefe Grupo de Capturas
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - SIJIN
Avenida El Dorado No. 75 - 25
Bogotá D.C.

REITERACIÓN 2ª VEZ - ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **REITERAR POR 2ª VEZ la orden de captura oficio 111 de del 21 de febrero de 2023**, expedida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca contra de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ identificada con C.C. No. 1.073.166.223**, autoridad judicial que mediante providencia del 27 de enero de 2023, revocó el auto emitido por el homólogo 29 de Bogotá D.C., el 6 de octubre de 2021 por el cual concedió la libertad condicional a la condenada bajo un periodo de prueba de **36 meses y 22 días**.

Es de anotar, que el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, mediante sentencia del 16 de marzo de 2020, condenó a **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** a la pena de **CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **SECUESTRO SIMPLE CON CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal mediante a través de decisión del 14 de enero de 2021, confirmó el fallo condenatorio.

Este despacho conoce del expediente con radicado CUI 25430600041620180085 5 y asignó el Número Interno 2023-0161 por lo tanto, una vez sea capturada, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	**JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ**
Identificación No.	C.C. No. 1.073.166.223 expedida en Madrid Cundinamarca
Fecha de Nacimiento	2 de febrero de 1994
Lugar de Nacimiento	Bogotá D.C.
Escolaridad	N/A
Ocupación	N/A
Nombre Padres	Zenaida y Omar
Estado Civil	Unión Marital de Hecho
Dirección	Calle 51 sur No. 34-67 barrio Fátima Bogotá D.C.
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género femenino; estatura 1.56 mts; contextura obesa; piel trigueña; cabello abundante, largo, castaño; frente mediana; ojos medianos, color castaños; cejas arqueadas, escasas; orejas medianas, lóbulos adheridos; nariz dorso recto, bese media; boca mediana, labios medianos; mentón redondo; bigote o barba imberbe; cuello corto.
Señales particulares	Tatuaje “Alejandro” en el tercio medio antebrazo derecho

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez

l.e.s.r.

REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 13 de marzo de 2024
Oficio No. 0605

Señor:
IT JORGE ALEXANDER MONTERO DUQUE
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - SIJIN
Carrera 58 No. 9 – 43 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

REITERACIÓN 2ª VEZ - ORDEN DE CAPTURA

Comedidamente y en atención a lo dispuesto en auto de la fecha, me permito **REITERAR POR 2ª VEZ la orden de captura oficio 111 de del 21 de febrero de 2023**, expedida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Funza Cundinamarca contra de **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ identificada con C.C. No. 1.073.166.223**, autoridad judicial que mediante providencia del 27 de enero de 2023, revocó el auto emitido por el homólogo 29 de Bogotá D.C., el 6 de octubre de 2021 por el cual concedió la libertad condicional a la condenada bajo un periodo de prueba de **36 meses y 22 días**.

Es de anotar, que el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, mediante sentencia del 16 de marzo de 2020, condenó a **JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ** a la pena de **CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION** como cómplice responsable del delito de **SECUESTRO SIMPLE CON CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA EN CONCURSO HETEROGENEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal mediante a través de decisión del 14 de enero de 2021, confirmó el fallo condenatorio.

Este despacho conoce del expediente con radicado CUI 25430600041620180085 5 y asignó el Número Interno 2023-0161 por lo tanto, una vez sea capturada, déjese a disposición de este Juzgado.

Nombre	**JOHANA GERALDINE AYURE GUTIERREZ**
Identificación No.	C.C. No. 1.073.166.223 expedida en Madrid Cundinamarca
Fecha de Nacimiento	2 de febrero de 1994
Lugar de Nacimiento	Bogotá D.C.
Escolaridad	N/A
Ocupación	N/A
Nombre Padres	Zenaida y Omar
Estado Civil	Unión Marital de Hecho
Dirección	Calle 51 sur No. 34-67 barrio Fátima Bogotá D.C.
Rasgos morfológicos	Se trata de una persona de género femenino; estatura 1.56 mts; contextura obesa; piel trigueña; cabello abundante, largo, castaño; frente mediana; ojos medianos, color castaños; cejas arqueadas, escasas; orejas medianas, lóbulos adheridos; nariz dorso recto, bese media; boca mediana, labios medianos; mentón redondo; bigote o barba imberbe; cuello corto.
Señales particulares	Tatuaje "Alejandra" en el tercio medio antebrazo derecho

Cordialmente,

NELSON NOGUERA PINILLOS
Juez

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo quince (15) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0112

CUI	**25718610135320128002 2**
Número Interno:	**2023-0322**
Sentenciado:	**JOAQUIN GALAN ACEVEDO**
Delito:	**ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO Y ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024 y el certificado de calificación de conducta del 13-11-2023 al 12-12-2023 allegado el 13 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **JOAQUIN GALAN ACEVEDO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*
>
> *Los procesados también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	**Periodo Certificado**	**Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario**	**Horas de trabajo a reconocer**	**Horas de estudio a reconocer**	**Calificación de la Labor**	**Calificación de Conducta**
18631881	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022	CPMS VILLETA – Regional Central	---	378	Sobresaliente	Buena
18747422	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022	CPMS VILLETA – Regional Central	---	366	Sobresaliente	Buena
18794793	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	---	378	Sobresaliente	Buena
18893883	Del 1 de abril al 30 de junio de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	---	354	Sobresaliente	Buena
18974604	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	---	366	Sobresaliente	Buena
19066187	Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	---	246	Sobresaliente	Buena
19066187	Del 1 al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	152	---	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**152**	**2088**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que:

Las **152** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **9.5 días** y las **2088** horas por concepto de estudio corresponden a **174 días.**

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **SEIS (6) MESES Y TRES PUNTO CINCO (3.5) DÍAS,** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Finalmente, y teniendo en cuenta que el condenado **JOAQUIN GALAN ACEVEDO**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

---

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **JOAQUIN GALAN ACEVEDO** identificado con C.C. No. 86.002.272, redención de pena por trabajo de **9.5 días** y redención de pena por estudio de **174 días**, es decir, que el tiempo total reconocido en el presente proveído es de **SEIS (6) MESES Y TRES PUNTO CINCO (3.5) DIAS,** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMAR

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo quince (15) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0113

CUI	**25394610330220228002 7**
Interno:	**2023-0124**
Sentenciado:	**JORGE IVAN SANCHEZ BUITRAGO**
Delito:	**HOMICIDIO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON EL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES**
Decisión:	**RECONOCE REDENCION DE PENA ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **JORGE IVAN SANCHEZ BUITRAGO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18800235	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	378	Sobresaliente	Buena
18896280	Del 1 de abril al 30 de junio de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	354	Sobresaliente	Buena
18975005	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067562	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**1458**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **1458** horas por concepto de **estudio** corresponden a **121.5 días**, es decir, **CUATRO (4) MESES Y UNO PUNTO CINCO (1.5) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **JORGE IVAN SANCHEZ BUITRAGO**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece*

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **JORGE IVAN SANCHEZ BUITRAGO** identificado con C.C. No. 3.254.696, redención de pena por estudio **CUATRO (4) MESES Y UNO PUNTO CINCO (1.5) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo quince (15) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0114

CUI:	**25875600069820230007 6**
Número Interno:	**2024-0054**
Condenado:	**ELVER HERNANDO VALBUENA MELO**
Identificación:	**3.237.096**
Delito:	**TRÁFICO DE SUSTANCIAS PARA EL PROCESAMIENTO DE NARCOTICOS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCION ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **ELVER HERNANDO VALBUENA MELO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -*1709 de 2014*- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18896341	Del 2 de mayo al 30 de junio de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	246	Sobresaliente	Buena
18975051	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067754	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**972**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **972** horas por concepto de **estudio** corresponden a **81 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **ELVER HERNANDO VALBUENA MELO**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento*

---

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **ELVER HERNANDO VALBUENA MELO** identificado con C.C. No. 3.237.096, redención de pena por estudio de **DOS (2) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS**, por las actividades realizadas del 2 de mayo al 30 de junio de 2023, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0118

CUI:	**11001610153820160144 5**
Número Interno:	**2024-0056**
Condenado:	**YESID ALEJANDRO PEREZ RODRIGUEZ**
Identificación:	**80.833.188**
Delito:	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **YESID ALEJANDRO PEREZ RODRIGUEZ** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que:

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974741	Del 4 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067305	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**726**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **726** horas por concepto de **estudio** corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **YESID ALEJANDRO PEREZ RODRIGUEZ**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece*

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **YESID ALEJANDRO PEREZ RODRIGUEZ** identificado con C.C. No. 80.833.188, redención de pena por estudio de **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 4 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0119

RADICADO CUI	**11001600000202200930**
RUPTURA	**11001600000202102598**
Cui matriz Aud Preliminares	**11006090149202000260**
Número Interno:	**2023-0125**
Condenado:	**CARLOS SOSA**
Delito:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES y TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor de **CARLOS SOSA** quien se encuentra en privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA CUNDINAMARCA

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA CUNDINAMARCA

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA CUNDINAMARCA

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*
>
> *Los procesados también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18975012	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067581	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**726**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **726** horas por concepto de estudio corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **CARLOS SOSA**, se encuentra recluido en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA CUNDINAMARCA

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA CUNDINAMARCA

menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA CUNDINAMARCA

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **CARLOS SOSA** identificado con C.C. No. 80.138.295, redención de pena por estudio **DOS (2) MESES y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0120

CUI:	**11001600001720141677O**
Número Interno	**2022-0295**
Condenado	**FERNANDO SALGUERO**
Delito:	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **FERNANDO SALGUERO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en*

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18975001	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	488	Sobresaliente	Buena
19067548	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	480	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**968**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **968 horas** por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Finalmente, y teniendo en cuenta que el condenado **FERNANDO SALGUERO** se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece*

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **FERNANDO SALGUERO** identificado con C.C. No. 3.063.085, redención de pena por trabajo en equivalencia a **DOS (2) MESES y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS** por las actividades del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0121

CUI	**25320600069520150003 6**
NI	**2023-0285**
CONDENADO	**JAHIR ANTONIO TOVAR ANGARITA**
Identificación	**C.C. No. 80.850.270**
Delito	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCION TRABAJO Y ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **JAHIR ANTONIO TOVAR ANGARITA** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO**. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18975039	Del 4 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	366	Sobresaliente	Buena
19067739	Del 1 al 2 de octubre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	6	Sobresaliente	Buena
19067739	Del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	472	---	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**472**	**372**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **472** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **29.5 días** y las **372** horas por concepto de **estudio** corresponden a **31 días.**

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **JAHIR ANTONIO TOVAR ANGARITA**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

---

[4] Ibídem.

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **JAHIR ANTONIO TOVAR ANGARITA** identificado con C.C. No. 80.850.270, redención de pena por trabajo de **29.5 días** y redención de pena por estudio de **31 días**, es decir, que **el tiempo total reconocido en el presente proveído es de DOS**

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

(2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DIAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0122

CUI	**11001600000202300231**
Número Interno:	**2023-0199**
Sentenciado:	**HELMER STIVEN HOYOS**
Delito:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor de **HELMER STIVEN HOYOS** quien se encuentra en privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -*1709 de 2014*- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974646	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19066702	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	357	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**723**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **723** horas por concepto de estudio corresponden a **60.25 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **HELMER STIVEN HOYOS**, se encuentra recluido en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las*

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **HELMER STIVEN HOYOS** identificado con C.C. No. 1.003.777.057, redención de pena por estudio **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0123

CUI ACUMULADO:	**11001600019201313290** **25875610801320148016 4**
NI:	**2022-0203**
Sentenciado:	**JUAN CARLOS GARZON CUELLAR**
C.C.	**1.077.969.710**
Delito:	**HURTO CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACION**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **JUAN CARLOS GARZON CUELLAR** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974609	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	468	Sobresaliente	Ejemplar
19066190	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	480	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**948**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **948 horas** por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **59.25 días**, es decir, **UN (1) MES VEINTINUEVE PUNTO VEINTICINCO (29.25) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Finalmente, y teniendo en cuenta que el condenado **JUAN CARLOS GARZON CUELLAR** se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece*

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **JUAN CARLOS GARZÓN CUELLAR** identificado con C.C No. 1.077.969.710, redención de pena por trabajo en equivalencia a **UN (1) MES VEINTINUEVE PUNTO VEINTICINCO (29.25) DÍAS** por las actividades del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0124

CUI	**11001600000202300173**
Número Interno:	**2023-0200**
Sentenciado:	**MIGUEL ANGEL VIRGUEZ MAHECHA**
Delito:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor de **MIGUEL ANGEL VIRGUEZ MAHECHA** quien se encuentra en privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18975069	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067808	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**726**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **726** horas por concepto de estudio corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **MIGUEL ANGEL VIRGUEZ MAHECHA**, se encuentra recluido en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las*

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **MIGUEL ANGEL VIRGUEZ MAHECHA** identificado con C.C. No. 1.022.997.984, redención de pena por estudio **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PIMILLOS
JUEZ

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0125

CUI:	**25875600069820220019 7**
Numero Interno:	**2023-0190**
Sentenciado:	**KEVIN JULIAN MORALES HUESO**
Identificación:	**1.005.714.930**
Delito:	**HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **KEVIN JULIAN MORALES HUESO** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que:

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974714	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	488	Sobresaliente	Buena
19067092	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	480	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**968**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **968 horas** por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Finalmente, y teniendo en cuenta que el condenado **KEVIN JULIAN MORALES HUESO** se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece*

[4] Ibídem.
[5] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER al interno **KEVIN JULIAN MORALES HUESO** identificado con C.C. No. 1.005.714.930, redención de pena por trabajo en equivalencia a **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS** por las actividades del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0126

CUI:	**11001600005020130797O**
Número Interno:	**2024-0057**
Condenado:	**FIYERALH RICARDO GOMEZ SALAMANCA**
Identificación:	**80.798.926**
Delito:	**INASISTENCIA ALIMENTARIA**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN TRABAJO Y ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **FIYERALH RICARDO GOMEZ SALAMANCA** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO**. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974619	Del 4 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	366	Sobresaliente	Buena
19066641	Del 1 al 31 de octubre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	126	Sobresaliente	Buena
19066641	Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	312	---	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**312**	**492**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **312** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **19.5 días** y las **492** horas por concepto de **estudio** corresponden a **41 días.**

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **FIYERALH RICARDO GOMEZ SALAMANCA**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014,

---

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

PRIMERO - RECONOCER a e **FIYERALH RICARDO GOMEZ SALAMANCA** identificado con C.C. No. 80.798.926, redención de pena por trabajo de **19.5 días** y redención de pena por estudio de **41 días**, es decir, que **el tiempo total reconocido en el presente proveído es de DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DIAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado**.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0127

ACUMULADO CUI:	**25430600066020210145O** **25430600066020220023G**
NUMERO INTERNO:	**2023-0244**
Sentenciado:	**HEIDER STEVEN PANQUEBA TIBAQUIRA**
Identificación:	**C.C. No. 1.073.520.496**
Delito:	**HURTO CALIFICADO EN CIRCUNTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA – HURTO CALIFICADO (ACUMULADO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor de **HEIDER STEVEN PANQUEBA TIBAQUIRA** quien se encuentra en privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 4º y 6º del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 97 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO**. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974736	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	366	Sobresaliente	Buena
19067260	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA – Regional Central	360	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**726**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **726** horas por concepto de estudio corresponden a **60.5 días**, es decir, **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **HEIDER STEVEN PANQUEBA TIBAQUIRA**, se encuentra recluido en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella

---

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **HEIDER STEVEN PANQUEBA TIBAQUIRA** identificado con C.C. No. 1.073.520.496, redención de pena por estudio **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0128

CUI	**25269609936820210050**
NI	**2023-0324**
CONDENADO	**FREDY ALONSO CRUZ MUÑOZ**
Identificación	**C.C. No. 11.439.896**
Delito	**RECEPTACIÓN DE HIDROCARBUROS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCION TRABAJO Y ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **FREDY ALONSO CRUZ MUÑOZ** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO**. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	**Periodo Certificado**	**Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario**	**Horas de trabajo a reconocer**	**Horas de estudio a reconocer**	**Calificación de la Labor**	**Calificación de Conducta**
18974585	Del 4 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	366	Sobresaliente	Buena
19066152	Del 1 al 2 de octubre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	6	Sobresaliente	Buena
19066152	Del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	472	---	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**472**	**372**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **472** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **29.5 días** y las **372** horas por concepto de **estudio** corresponden a **31 días.**

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Teniendo en cuenta que el condenado **FREDY ALONSO CRUZ MUÑOZ** se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

---

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **FREDY ALONSO CRUZ MUÑOZ** identificado con C.C. No. 11.439.896, redención de pena por trabajo de **29.5 días** y redención de pena por estudio

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

de **31 días**, es decir, que **el tiempo total reconocido en el presente proveído es de DOS (2) MESES Y CERO PUNTO CINCO (0.5) DIAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado**.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0129

CUI	**25269600038920118003O**
Interno:	**2022-0026**
Sentenciado:	**EDISON FANCHISCO BELTRAN**
Delito:	**ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS**
Decisión:	**RECONOCE REDENCIÓN DE PENA TRABAJO Y ESTUDIO** **NO RECONOCE REDENCION**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **EDISON FANCHISCO BELTRAN** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"

"(…) ***ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Horas de estudio a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18974548	Del 1 de julio al 1 de agosto de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	120	Sobresaliente	Buena
18974548	Del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	416	---	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**416**	**120**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **416** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **26 días** y las **120** horas por concepto de **estudio** corresponden a **10 días.**

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

Respecto al **certificado TEE No. 18710873 – 366 horas trabajo, este despacho NO RECONOCE dicho lapso de tiempo, por cuanto el mismo fue reconocido a través de auto interlocutorio No. 0067 del 2 de febrero de 2023.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Teniendo en cuenta que el condenado **EDISON FANCHISCO BELTRAN**, se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

---

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **EDISON FANCHISCO BELTRAN** identificado con C.C. No. 11.439.533, redención de pena por trabajo de **26 días** y redención de pena por estudio de **10 días**, es decir, que **el tiempo total reconocido en el presente proveído es de UN (1) MESES Y SEIS (6) DIAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado**.

SEGUNDO – Respecto al **certificado TEE No. 18710873 – 366 horas trabajo, este despacho NO RECONOCE dicho lapso de tiempo, por cuanto el mismo fue reconocido a través de auto interlocutorio No. 0067 del 2 de febrero de 2023.**

TERCERO. - Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON TOQUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0130

CUI	**11001600000202300177**
NI	**2024-0044**
CONDENADO	**CAMILO ANDRES MARTINEZ REAL**
Identificación	**C.C. No. 80.382.413**
Delito	**CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ESTE ÚLTIMO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO**
Decisión:	**RECONOCE REDENCION TRABAJO Y ESTUDIO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Resolver la solicitud allegada a través del correo institucional de este Juzgado el día 7 de marzo de 2024, para el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **CAMILO ANDRES MARTINEZ REAL** quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley *-1709 de 2014-* concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

2.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

3.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[3].

3.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 82 y 97 ibídem (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

---

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[3].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*
>
> ***"(…) ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO****. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*
>
> *Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.*
>
> *Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con las Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, los certificados TEE con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo y estudio certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	**Periodo Certificado**	**Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario**	**Horas de trabajo a reconocer**	**Horas de estudio a reconocer**	**Calificación de la Labor**	**Calificación de Conducta**
18974685	Del 13 de septiembre al 30 de septiembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	78	Sobresaliente	Buena
19066866	Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	---	240	Sobresaliente	Buena
19066866	1 al 31 de diciembre de 2023	CPMS VILLETA-Regional Central	152	---	Sobresaliente	Buena
TOTAL			**152**	**318**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que, las **152** horas por concepto de **trabajo** al hacer la conversión corresponden a **9.5 días** y las **318** horas por concepto de **estudio** corresponden a **26.5 días.**

Por lo tanto, el tiempo total reconocido en el presente auto es de **UN (1) MES Y SEIS (6) DÍAS,** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

Teniendo en cuenta que el condenado **CAMILO ANDRES MARTINEZ REAL** se encuentra recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA se ordena por secretaría **COMISIONAR** a la dirección del penal, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al encartado.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[4], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

[4] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[5]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[6]

4.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

5.- DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

[5] CSJ T **102248**
[6] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

RESUELVE

PRIMERO - RECONOCER a **CAMILO ANDRES MARTINEZ REAL** identificado con C.C. No. 80.382.413, redención de pena por trabajo de **9.5 días** y redención de pena por estudio de **26.5 días**, es decir, que **el tiempo total reconocido en el presente proveído es de UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado**.

SEGUNDO – Por secretaría **COMISIONAR** a la Dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, con el fin de notificar personalmente de la presente decisión al sentenciado.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 18 de 2024: Al despacho el proceso contra **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538, informando que una vez verificada la situación jurídica del condenado, este Juzgado procede a emitir pronunciamiento acerca de la posible libertad por pena cumplida.

Aunado a lo anterior informo, que respecto a lo requerido por este Juzgado en auto de sustanciación No. 00091 del 5 de febrero de 2024, se recibe a través del correo institucional el 7 de febrero de 2024 la certificación de conducta del interno, expedida por el señor Comandante de la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, para el estudio de la libertad condicional. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0132

CUI:	**25269609936820230038 1**
Sentenciado:	**JORGE LUIS BELLO ALMANZA**
Identificación:	**C.C. No. 1.043.672.538**
Reclusión:	**ESTACIÓN DE POLICIA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 25 DE MARZO DE 2024** **DECRETA REHABILITACION DE PENAS ACCESORIAS** **CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL**

1.- OBJETO A DECIDIR

Procede el despacho a pronunciarse sobre la posible libertad condicional y el cumplimiento de la pena impuesta a **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538 quien se encuentra recluido en la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2023 y allanamiento a cargos, el Juzgado 1º Penal Municipal con función de conocimiento de Facatativá Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de diciembre de 2023, CONDENÓ a **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** como autor responsable de delito de **HURTO CALIFICADO** imponiendo la pena principal de **SEIS (6) MESES DE PRISIÓN** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el término de la pena principal. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 5 de enero de 2024.

JORGE LUIS BELLO ALMANZA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 27 de septiembre de 2023** y actualmente se encuentra recluido en la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca.

Este Juzgado avocó conocimiento a través del auto de sustanciación No. 00091 del 5 de febrero de 2024 y solicitó al señor comandante de la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, la documentación respectiva del comportamiento del PPL a fin de estudiar de oficio la posible libertad condicional, documentación que fue recibida a través del correo institucional el 7 de febrero de 2024.

En la presente oportunidad procede el juzgado a pronunciarse sobre la posible libertad por pena cumplida y la libertad condicional del infractor.

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[1] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

[1] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[2].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la posible pena cumplida del condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgado pena en la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 20073.

---

[2] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[3] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)*[3].

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Conforme a los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2023, **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2.- Sobre la Libertad por pena cumplida

JORGE LUIS BELLO ALMANZA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el día 27 de septiembre de 2023** hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **173 días** que equivalen a **5 meses y 23 días de la pena impuesta**

El sentenciado NO cuenta con redenciones de pena reconocidas.

Así las cosas, encuentra este Despacho que el interno hasta la fecha acumula un total de **5 meses y 23 días,** lo que significa que cumple la pena impuesta de **SEIS (6) MESES DE PRISIÓN** el próximo **25 DE MARZO DE 2024**

En efecto, se tiene que, del cumplimiento físico de la pena principal de **6 meses de prisión**, impuesta por el Juzgado 1º Penal Municipal con función de conocimiento de Facatativá Cundinamarca, en sentencia del 22 de diciembre de 2023, **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** cumple la pena de prisión impuesta a partir del día **25 DE MARZO DE 2024**, fecha desde la cual se concederá la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.

Acorde con lo anterior y de conformidad con lo normado en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) la Secretaría del Despacho oficiará a las entidades a las que se les comunicó la sentencia y se cancelarán las órdenes de captura que en su contra pudiesen existir por cuenta del presente asunto, rindiendo los informes de ley.

Sobre el tiempo en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado (…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte

del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[4]

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva **pero sólo a partir del 25 de marzo de 2024**.

Ahora bien, en lo que respecta a la interdicción de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538. En efecto, el artículo 52 ibídem priva al penado de otros derechos, que pueden imponerse como principales, y serán accesorias y las impone el juez cuanto tienen relación directa con la realización de la conducta punible y conforme lo prevé el artículo 53 serán concurrentes con la pena privativa de la libertad y se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con ésta.

En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado REMITIR las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales de Facatativá Cundinamarca, para su archivo definitivo.

La libertad se hará efectiva para ante el señor Comandante de la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, **pero sólo a partir del 25 DE MARZO DE 2024, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERA SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

Ahora bien, **respecto a la documentación - certificación del comportamiento del PPL, expedida por el señor Comandante de la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, este Juzgado procede a examinar**

4.3. De la Libertad Condicional

Con relación al beneficio de Libertad Condicional, expresa el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, que para su concesión deben cumplirse la totalidad de los requisitos a saber:

> *"**ARTÍCULO 64. Libertad condicional**. El juez, PREVIA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
> 2. *Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
> 3. *Que demuestre arraigo familiar y social.*
>
> *Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.*
>
> *En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.*

[4] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario"*[5] *(*Subrayado y negrilla fuera de texto).

La norma en cita está directamente ligada y supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

> ***Art. 471.-*** *"El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.*
>
> *Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional."* (Subrayado fuera del texto original) [6]

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** delimitó su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma**,** sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP),** NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario, a pesar que los delitos endosados se encuentran como excluidos en la mencionada norma, no los tendrá en cuenta – **HURTO CALIFICADO -**, para el mecanismo sustitutivo a estudiar.

4.4. Valoración de la conducta punible.

Dentro de unos hechos constitutivos que infrinjan los derechos de la comunidad, el Estado representado por el ente investigador, en su etapa previa y por los jueces en su juzgamiento, nos llevan a una punibilidad dentro de un proceso penal que finaliza con una absolución o condena de un individuo. Si es ésta última, se impone o suspende una pena privativa de la libertad.

En este ciclo privativo el condenado puede hacer uso de subrogados o mecanismos sustitutivos, como la libertad condicional contemplado en el artículo 64 del C.P. Ésta configura la oportunidad de que la persona que está condenada y se encuentra privada de

[5] Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014
[6] Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

la libertad - intramural o domiciliariamente - puede cesar dicho estado impuesto en sentencia condenatoria. Para su concesión, el juez, a quien le corresponde por competencia, estudiará los requisitos que exige la norma entre los que se encuentra previamente, la valoración de la conducta, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2014.

Esta valoración inicio en la adición concebida por el legislador como "gravedad de la conducta" en la Ley 890 de 2004 y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad en la sentencia C-194 de 2005, en el que señaló que el juez de Ejecución no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de la evaluación de la procedencia del subrogado penal. Allí dejó claro que el juez no quedaba autorizado para valorar dicha *"gravedad"* ya que lo que la norma señalaba era que se debería tener en cuenta de parte del funcionario era *"la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal".*

Con la modificación incorporada por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 el legislador condicionó la concesión del beneficio de libertad condicional a la ***"previa valoración de la conducta punible"*** suprimiendo la palabra *"gravedad"* de la disposición anterior, de lo que se ha derivado una diversidad de interpretaciones por parte de los jueces vigilantes, sin embargo, este Despacho se sostiene en el criterio aplicado con antelación en el sentido de hacer tal valoración siempre y cuando sobre el punto se haya pronunciado el juez fallador.

Lo anterior con base en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia **C-757 de 2014** en donde determina una vez más que en las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas para decidir sobre el beneficio de libertad condicional deben tenerse en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez fallador en la sentencia, ya fueran favorables o desfavorables.

Ello significa que el Juez de Ejecución de Penas podrá valorar la conducta de conformidad con el artículo 64 del Código Penal, en la medida en que sobre tal aspecto se haya pronunciado el juzgado fallador o en su defecto la segunda instancia. Del mismo modo indica lo anterior que la redacción del mencionado artículo 64 del C.P., *"no establece qué elementos de conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni establece los parámetros a seguir para asumir las valoraciones que de ella hicieron previamente los jueces penales"*[7]

En efecto, el juez ejecutor se somete a las consideraciones expuestas por el juez que resolvió la situación jurídica del procesado a través de su fallo condenatorio.

Así lo manifestó la H. Corte Suprema de Justicia:

"Respecto a la valoración de la conducta punible, la Corte Constitucional, en sentencia CC C-757-2014, teniendo como referencia la Sentencia CC C-194-2005, determinó, en primer lugar, cuál es la función del juez de ejecución de penas y, de acuerdo a ésta, cuál es la valoración de la conducta punible que debía realizar.

«[E]l juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. […]

[7] CSJ T 107644 (19-11-19)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

[L]os jueces de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario, el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal»[8]*.*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y analizando los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional se tiene que cuando se va a analizar la conducta por parte de los Jueces de Ejecución de Penas, en cualquiera de sus dos interpretaciones, la de la Ley 890 de 2004 "gravedad" y en la modificación de la Ley 1709 de 2014 "conducta", declaradas exequibles en las sentencias arriba relacionadas, C-195-04 y C-757-14, la conclusión dada por el máximo Tribunal Constitucional fue la siguiente:

> *"En los mismos términos,* ***cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal****"*[9]:
> (Resaltado fuera del texto original)

Efectivamente conforme a lo expuesto y dado el análisis e interpretación dada sobre dicho pronunciamiento, no se puede someter nuevamente al condenado con el estudio hecho por el juez fallador en el momento en que dosificó las conductas penales, esto es ni por la censura ni con la "misma óptica en que se produjo la condena". Tampoco puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de dicha evaluación, pero no queda autorizado para valorar la gravedad de la conducta, lo que se debe tener en cuenta por parte del funcionario es la gravedad del comportamiento punible, *calificado y valorado previamente en la sentencia por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal*.

Ello significa que el juez vigilante debe someterse no a la valoración que hizo el de conocimiento en el momento de la dosificación de la pena, que es su motivación para "dosificar" la conducta, o conductas endilgadas al imputado, sino al pronunciamiento en los mecanismos sustitutivos de la pena cuando se pasa a la audiencia del artículo 447 del C.P.P.

Y debe de ser así porque si el funcionario que vigila la pena se sometiera a lo consignado por el juez de conocimiento al momento en que dosifica las conductas, estaríamos frente a una eventual negativa de las solicitudes de los mecanismos sustitutivos solicitados, sobre todo el de la libertad condicional.

Se entiende que en el instante de evaluar la posible libertad del implicado debe hacerse desde la óptica de lo expuesto por el fallador al momento en que se pronuncia, que es obligatorio, en la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria (art 63 y 38 C.P.), audiencia esta indispensable para que se logre a través de los condenados acceder a cualquiera de estos postulados y si el fallador ve que de acuerdo a la situación fáctica se tenga que pronunciar sobre la "gravedad" de conducta, así lo hará, momento éste en que el juez de Ejecución de basa para estudiar la posibilidad de conceder o negar el mecanismo sustitutivo solicitado.

Como se señaló, han existido varias interpretaciones al respecto no solo de parte de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia que enmarcan un criterio y lineamiento para analizar, estudiar y decidir sobre este tópico.

---

[8] CSJ T-119389 (30-09-21)
[9] Corte Constitucional, sentencia C-194 de 2005

En una decisión del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria[10], se analizó la gravedad de la conducta y la conducta punible basado en el pronunciamiento que se hizo por parte del fallador en el momento procesal de cuantificación de las penas, en el que se hizo un reproche sobre la conducta del implicado, no ocurriendo lo mismo en el momento en que se pronunció ante los mecanismos sustitutivos de la pena.

> *"…: **VIII. DE LAS PENAS:***
>
> *VIII.4. Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada superó de modo importante su tope básico, necesaria para configurar el delito, en tanto significó cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos al margen de la ley, con menoscabo de los valores que nutren un Estado democrático; el daño fue significativo, porque se fundió en unas mismas personas las condiciones de agentes de grupos ilegales y del Estado; la seguridad pública sufrió grave deterioro amén su legitimidad; la intensidad del dolo se verificó mayor, dado que inició con la coalición político-paramilitar que condujo a sus elecciones en el Congreso de la República y se extendió durante el ejercicio alternado del cargo cada uno por un año; aunada la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución.*
>
> *VIII.5. Se tiene en cuenta que aunque la concertación con pretensiones políticas del señor (…), con un grupo armado al margen de la ley tuvo las connotaciones antes referenciadas, que motivan el incremento de las penas, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa en su corto tiempo de ejercicio él haya propiciado acciones concretas que redundaran selectivamente en beneficio de esos colectivos criminales, lo que de algún modo informa un retraimiento en el componente lesivo del delito, tanto que el testimonio del propio (…) por momentos asumió el carácter de reclamo, lo que en perspectiva, aunada la carencia de antecedentes penales, desaconseja penas superiores a las determinadas; por eso no se le impone el máximo permitido en la ley.*
>
> ***IX. DE LA LIBERTAD:***
>
> *No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria, por impedirlo un requisito objetivo; en el primer caso porque la ley sólo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y, en el segundo, porque sólo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de la condena sea de 5 años o menos, acorde con lo establecido en los artículos 63-1 y 38 del Código Penal, presupuesto que no se satisface…" [11]*

Posterior, en los fallos de la Corte Constitucional C-233-16, T-640-17 y C-265-17 determinó que se debe tener en cuenta, para los jueces de ejecución de penas, que la finalidad constitucional de la pena no está en el castigo del condenado sino en su resocialización como la garantía que nos brinda el artículo 5° de la Ley 65 de 1993, - dignidad humana -[12]. Esto nos lleva a velar por la reinserción social apoyada por la educación que se les brinde en los Centros Carcelarios a los penados en forma intramural o domiciliaria con el fin de humanizar la pena como lo señala el artículo 1° de la C.N[13].

---

[10] C.S.J Rad 44195 (03-09-14)
[11] Rad 44195 y 33713
[12] **ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.** <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.
Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
[13] **ARTICULO 1o.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Del mismo modo la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que el Juez de Ejecución de Penas debe tener en cuenta la participación del condenado en las diferentes actividades de readaptación y/o resocialización dentro de los Centros Carcelarios y buscar la reinserción del que ha cometido un error y lo está subsanando.

En reciente exposición, en sede de tutela de parte del mismo órgano de cierre, hace un recuento sobre la *"amplitud de posibilidades hermenéuticas con respecto a la valoración de la conducta punible"* y el guiarse por los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad *"como bien lo es el principio pro homine – también denominado cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos"*, centrándola en lo más favorable al hombre y sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

En dicha providencia advierte que[14]:

> ***"…i)*** *No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.*
>
> *En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;*
>
> ***ii)*** *La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;*
>
> ***iii)*** *Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.*
>
> *Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.*
>
> *Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.*
>
> ***iv)*** *El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado…"*

Éste precedente ha sido reiterado en sentencias con radicados 111560 (28-07-20), 113578 (01-12-20); 115313 (23-03-21); 119257 (28-09-21) y 119389 (30-09-21) y en la providencia con radicado 59888 (15-09-21).

Así lo señaló en el Rad 119389:

> *"Tal postura fue ratificada recientemente en proveído CSJ AP4142-2021, 15 sep. 2021, rad. 59888, en los siguientes términos:*

[14] C.S.J Rad T-107644 (19-11-19) M.P. Patricia Salazar Cuéllar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *[…] Tal como lo ha indicado esta Corporación[15], **la concesión de la libertad condicional depende del cumplimiento de todos los requisitos enlistados en el precepto transcrito, pues en su examen, el juez no puede prescindir de ninguna de las condiciones fijadas por el legislador, incluida, la valoración de la conducta, cuyo análisis es preliminar.***
>
> *(…)*
>
> *En línea con dicha interpretación, esta Corporación ha sostenido que:*
>
> *«La mencionada expresión –valoración de la conducta- prevista en el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, va más allá del análisis de la gravedad, extendiéndose a aspectos relacionados con la misma, sin que el juez ejecutor de la pena tenga facultad para soslayar su evaluación, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 del 15 de octubre de 2014»[16].*
> *[…]*
> *Así, es claro que para la concesión de la libertad condicional, resulta imperioso que el juez valore la conducta por la cual se emitió la condena, no obstante, se insiste, **tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad y los antecedentes de orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social**, por lo que en la apreciación de estos factores debe conjugarse el «impacto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes»[17].”[18]*

Ahora complementando lo anterior, en recientes pronunciamientos sobre este punto la H. Corte Suprema de Justicia concretó lo siguiente:

“6.6.2.3 Por último, obligado resulta traer a colación el auto de segunda instancia CSJ AP2977–2022, 12 jul. 2022, rad. 61471, no solo por su cercano proferimiento, sino por identificarse con la temática bajo examen, razón por la cual su trascendente alcance irradia al asunto que concita la presente decisión. En el mencionado proveído, así se discurrió:

> *[e]l análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el*
> *ordenamiento penal, dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991; y al mismo tiempo desvirtuaría toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.*
>
> *La anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C–757 de 2014 (declaró exequible la expresión: «previa valoración de la conducta» del artículo 64 del Códig[o P]enal), en el sentido que al analizar la procedencia de la libertad condicional el [j]uez de [e]jecución de [p]enas deberá:*
>
> > *«establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.»*
>
> *Es así como el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado, pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad, que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor tal como lo estipulan los artículos 6° numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10° numeral*

[15] CSJ AP8301-2016, Rad. 49278, CSJ AP5297-2019, entre otros
[16] CSJ AP3558-2015, Rad. 46119
[17] CSJ AHP5065-2021
[18] C.S.J. T-119389

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del [b]loque de [c]onstitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Nacional).*
>
> *30.3 Corolario de ello, un juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad, debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno, sobre aspectos como la escueta gravedad de la conducta (analizada en forma individual); pues si así no fuera, la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva, que en nada contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulan la dignidad del ser humano. (…)*
>
> *30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca, no solamente los aspectos draconianos de las sanciones penales; entre ellos, que el conglomerado se comporte normativamente (prevención general); y que, tras recibir la retribución justa, el condenado no vuelva a delinquir (prevención especial); aunado a tales aspectos, las penas, en especial las restrictivas de la libertad, también se deben encaminar a que el condenado se prepare para la reinserción social, fin este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario y el comportamiento del condenado durante este, sea valorado, analizado, estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.*
>
> *Lo anterior, justamente con el fin de incentivar en el infractor, esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción, asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario, así como para brindar herramientas útiles al penado que le permitan prepararse para retornar a la vida en sociedad cuando recobre la libertad.*
>
> *30.5 Entenderlo de otra manera, sería tanto como establecer una prohibición generalizada que no ha sido prevista por el legislador para todos aquellos eventos en los que la conducta se evidencie objetivamente grave. (…)*
>
> *30.6 En ese orden de ideas, entender que la gravedad objetiva de la conducta es sinónimo de negación de la libertad condicional, equivaldría a extender los efectos de una prohibición normativa específica, sobre todos los casos que se estimen de notoria gravedad, sin haber sido así previsto en la ley; y tal expansión no es compatible con los derechos fundamentales de los condenados; pues los dejaría sin la expectativa de que su arrepentimiento e interés de cambio sean factores a valorar durante el tratamiento penitenciario, erradicando los incentivos y con ello, el interés en la resocialización, pues lo único que quedaría, es el cumplimiento total de la pena al interior de un establecimiento carcelario* [negrilla original del texto].

6.6.2.4 A las anteriores consideraciones, que en su integridad se ratifican, sólo es dable agregar lo siguiente:

Toda conducta punible es considerada un acto grave contra la sociedad, al punto que el legislador reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas, ella afecta los valores que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas, además del daño privado, el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal, necesarias para la convivencia pacífica.

La condición de grave o leve de una infracción delictiva da lugar a intensos e inacabados debates. Nadie ha de negar que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza –o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva–, implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social, verbigracia, los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida, la integridad personal, la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos, lo que de contera genera

unánime rechazo social. Sin embargo, ello no soluciona la problemática a la hora de calificar el injusto.

La praxis judicial enseña que en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad –todas válidas si se quiere–, una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla, pero en el fondo sólo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida las razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que determinado proceder debía ser objeto de represión por el Estado.

La previa valoración del injusto típico introduce a la discusión argumentos de índole subjetivo que en nada contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal. (…)

Importa acotar que la Sala, por obvias razones, no se refiere a aquellas conductas que el propio legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, excluyó del subrogado de la libertad condicional, asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional en sentencia CC C–073–2010, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, «[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones». (…)

Por ello, precisó que «[e]l legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional». (…)

Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible, solo es posible frente a casos en los cuales el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por dicho motivo, como sucede con los previstos en los artículos 26 de la Ley 1121 y 199 de la Ley 1098 de 2006, pues, como se dijo en la decisión CSJ STP15806–2019, 19 nov. 2019, rad. 107644, atrás citada, «no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos»(…)

La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias. (…)

<u>En suma, no es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado de la libertad condicional</u>. Ello sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla de un sentido de retaliación social que, en contravía del respeto por la dignidad humana, cosifica al individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales."[19]*.(subrayado nuestro)*

Vemos que no solo en sede de tutela se presenta un criterio unificado sobre el tema, por lo que este juzgado estimará para los futuros análisis sobre la valoración de la conducta y se tendrá en cuenta no solo el pronunciamiento por parte del juez de conocimiento cuando se refiera a los mecanismos sustitutivos de la misma, sino en el instante en que motiva la dosificación de la misma, o si existe preacuerdo en el análisis de los delitos, del mismo modo en el transcurrir del proceso su comportamiento en el Establecimiento Penitenciario

[19] CSJ RAD 61616 (27-07-22) M.P. Dr Fabio Ospitia Garzón

y establecer la necesidad de si el condenado debe continuar con el tratamiento penitenciario ponderándolo con la valoración de la conducta.

Lo anterior, nos lleva a que el juez de ejecución de penas está en la obligación no solo de lo señalado en la parte motiva para la dosificación de la pena impuesta al condenado, sino dilucidar las circunstancias que encierra esa conducta punible junto con la personalidad del infractor- hasta ese momento como sociales, personales, laborales, familiares y su adecuado comportamiento en el Centro Carcelario, su conducta, cursos alcanzados, - puntos que nos lleva a concluir si existe la necesidad de otorgar o no el subrogado invocado o por el contrario requiere de mayor tratamiento penitenciario.

El presente Caso:

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Juzgado 1º Penal Municipal con función de conocimiento, no hizo un despliegue con relación a la conducta endilgada al condenado, sino que simplemente se limitó en la dosificación punitiva correspondiente, conforme al allanamiento a cargos del acusado, sin embargo, indicó, que el comportamiento del procesado amerita juicio de reproche, pues actuó con conciencia, no obstante podía obrar en forma distinta y teniendo la capacidad de comprender su actuar ilícito, ejecutó la conducta contraria a lo exigido.

De lo expuesto se colige la intención del fallador en rechazar los hechos desplegados por el sentenciado y conforme a la jurisprudencia relacionada entrará este juzgado a analizar como primera medida el no poder tener como razón para la negatoria de la libertad condicional la sola insinuación de la conducta punible frente a los bienes señalados en el C.P., ya que esto es concurrente con prohibiciones señaladas por el legislador en ciertas leyes.

Del mismo modo dicha valoración no se puede hacer con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales.

El juez que vigila debe valorar de igual manera dentro de la punibilidad lo tenido en cuenta por el fallador, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes. En efecto se debe ajustar con el comportamiento del procesado en el Centro Carcelario con elementos útiles que permitan analizar si el condenado debe continuar cumpliendo la pena intramural o domiciliariamente y su participación en las diferentes actividades que tiene instituidas el INPEC como punto fundamental para su resocialización. Entonces no se debe tener en cuenta únicamente el bien jurídico afectado como única motivación para negar el subrogado invocado, se debe hacer un análisis completo, una carga motivacional que garantiza *la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.*

4.5. Sobre la Resocialización de los condenados

Se tiene bien conocido que el Estado tiene unos deberes constitucionales y que le corresponde a través de los distintos poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional) diseñar la Política Criminal, esto en especial al Legislativo (Congreso de la República) que según lo señala el artículo 150 de la Constitución Nacional *"le corresponde hacer las leyes".*

La Política Criminal, se entiende como *"**el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener el orden social y hacerle frente a las conductas que atenten de forma grave contra el mismo y, así, proteger los derechos de los residentes en el territorio nacional y, puntualmente, a las víctimas de los delitos"**.* En efecto, esta

Política Criminal está enfocada a satisfacer, entre otros asuntos, el restablecimiento de las víctimas logrando la resocialización del autor o partícipe de la conducta penal.

Lo anterior significa que la política criminal del Estado es el de proteger, blindar, asegurar, resguardar a la sociedad optando que las medidas, decisiones y disposiciones guarden armonía con los principios en que se funda, sobre todo en las garantías que reconoce para sus conciudadanos.

El artículo 4° de la Ley 599 de 2000 indica que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Del mismo modo resalta que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión, ello significa que éstos buscan la resocialización del condenado.

El artículo 1º de la misma obra y de la Constitución Nacional señala que el derecho penal tendrá como fundamento el respecto a la dignidad humana. En efecto, para un Estado Social y Democrático se da la necesidad de prevenir el delito con el fin de asegurar la protección de sus habitantes, defenderlos de aquellos que infrinjan las normas contenidas en las leyes; sin embargo ello no obsta que ese derecho penal se debe encausar en respetar la dignidad del infractor como el de no imponer penas – pena de muerte o cadena perpetua – dándole la oportunidad a cada individuo de tener la capacidad para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse y volver a contribuir a la sociedad.

Ahora aquellas personas que por el andar de la vida cometen un error que los lleve a pagar una pena principal de prisión, el Estado prevé un tratamiento penitenciario cuya finalidad es la reforma y la readaptación del penado a la sociedad, el de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante un examen de personalidad que se logra a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario[20].

El principal objetivo es el preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad y debe realizarse conforme a la dignidad humana, anteriormente mencionada, y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto verificándola a través de los sistemas educativos y culturales de los Establecimientos Penitenciarios.

Se concluye que *el tratamiento penitenciario es el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad*[21].

Sobre este punto dentro de los innumerables pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, se concluyó:

> *"…(i) durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado…"*

Y en la Sentencia C-294-21 conceptuó:

[20] Ley 65 de 1993, art 10
[21] INPEC art 4º Resolución 7302 (23-11-05)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ**

> *"La resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o técnicas de tratamiento social o clínico que pretenden «cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno».*

En sentencia C-718-15, sobre la finalidad de la pena, indicó:

> *"…Así, en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la pena, no solo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también en el momento de su ejecución.*
>
> *Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[22] que, ella tiene en nuestro sistema jurídico* ***un fin preventivo****, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones;* ***un fin retributivo****, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena,* ***y un fin resocializador*** *que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que "sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital". [23]*
>
> ***En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.***
>
> *El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén "orientados hacia* ***la efectiva resocialización*** *de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad".[24](Se resalta)…"*

Se suma, lo indicado en los artículos 94, 96 y 97 (Ley 65 de 1993) que estipulan sobre la educación como la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa evaluación de los estudios realizados hay lugar a que sea certificada por la autoridad designada para el efecto, disponiendo que será concedida por el Juez Vigilante, abonando 1 día de reclusión por 2 días de estudio.

Sobre la readaptación de los penados, la Sentencia T-061 de 2009, expresó que "*Las personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito, encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir la pena que les fue impuesta.*

[22] *Sentencia C-430 de 1996*
[23] *Sentencia C-144 de 1997*
[24] *Sentencia C-1404 de 2000*

Dentro de sus funciones, las cárceles se encargan de resocializar al individuo, con el fin de obtener la paz; es decir, permitiendo que el preso pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente productiva, impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles".

Sobre ese tema esa Corte en Sentencia T-213 de 2011 reiteró lo afirmado en la providencia T-718 de 1999, según la cual: *"la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente".*

Y en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente:

> *"7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional peticionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación…*[25]

Visto lo anterior, y en lo referente a lo decantando en la jurisprudencia mencionada[26] se tiene que a la fecha el infractor conforme a lo conceptuado por el Comandante de la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, ha demostrado un cambio favorable ante las conductas por las cuales fue condenado para el sentido de su resocialización.

Del mismo modo vemos que su actuar ha sido destacado en el transcurso de dicho proceso, entonces, al purgar un total de pena física de **5 meses y 23 días** de la pena impuesta (6 meses) cumpliendo con ello elevar a más de un 96%, pues detallase que el condenado desde el momento de su captura – **27 de septiembre de 2023** - siempre ha cumplido su reclusión de manera intramural.

Aunado a ello el interno ha demostrado un buen comportamiento teniendo un cambio favorable y sobre este aspecto, se trae un pronunciamiento - CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA - de la Corte Suprema de Justicia:

"…Las anteriores reflexiones sirven para deducir que la valoración de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso, ni de una sola calificación, sino que debe realizarse, en cada caso concreto, de manera ponderada (principio rector, artículo 27, Ley 906 de 2004) y en forma integral, con análisis de la evolución del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusión, con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocialización y, por tanto, si merece ser motivado o incentivado el beneficio.

Al no existir norma específica que determine que una sola calificación de conducta inferior a buena, no conduce indefectiblemente a la negación de los beneficios, se debe aplicar por analogía el inciso final del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, que establece la consecuencia para quien observare mala conducta durante uno de los permisos, esto es, la suspensión de los mismos, pero no su cancelación, ésta se hace efectiva únicamente en caso de reincidencia.

Lo anterior significa que el legislador otorga un margen razonable de tolerancia frente a posibles errores de comportamiento en que puedan incurrir las personas beneficiadas y no

[25] C.S.J. Rad 1376 del 14-07-2020 M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
[26] RAD 107644

impone la extinción del derecho por una sola falla. Si ello se aplica a quienes ya disfrutan del permiso, con mayor razón debe tenerse en cuenta como criterio de ponderación…"[27], fíjese que así hayan tenido en alguna oportunidad alguna calificación regular, no es óbice para la negatoria de alguno de los beneficios, aunque para el presente caso vemos que el infractor ha tenido un comportamiento y conducta el cual ha demostrado favorable.

Entonces vemos que **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** cumple, pues como lo decanta la jurisprudencia mencionada, no solamente es hacer alusión al bien jurídico afectado sino tener en cuenta *"**las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras,"*** el tener presente la armonía ***"con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.***

Sobre la resocialización, señalo en reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Bogotá lo siguiente:

"Así las cosas, se parte de la base de entender consolidada una enmienda o resocialización de la persona que ha cumplido parte de la pena dentro de un establecimiento carcelario y ha observado durante ese tiempo buena conducta, sin que pueda presumirse en su contra o concluirse que no ha sido posible su resocialización o readaptación, pues, contrariamente, según la filosofía que encarnan las medidas de privación de la libertad, se presume que el tiempo de reclusión ha contribuido a la reflexión sobre la conducta por la cual fue condenado y a permitir su readaptación y resocialización hacía el futuro.

En consecuencia, afirmar lo contrario conllevaría a evidenciar argumentativamente la necesidad del absoluto cumplimiento de la pena, bajo el régimen penitenciario, como única vía para satisfacer los fines propósitos de la punibilidad en la legislación colombiana"[28].

4.6. Sobre las Fases del Tratamiento Penitenciario:

Dentro de las fases para el tratamiento penitenciario (art 144 Ley 65 de 1993) que nos señala la norma se tiene que ha cumplido con la clasificación que se establece pasando como primera medida por la fase de alta seguridad (periodo cerrado) en la que el interno accede al sistema de oportunidades en programas educativos y laborales, en periodo cerrado, permitiendo el plan de tratamiento orientándose a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades.

La fase de mediana seguridad en la que se accede de parte del interno a los programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, con medidas de seguridad menos restrictivas. Además, los programas educativos y laborales ofrecidos en esta fase se basan en la intervención individual y grupal, permitiendo la competencia psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal, no formal e informal, vinculándolos en actividades industriales, artesanales, agrícolas etc. Luego sigue la fase mínima en la que el interno se le orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral. Y por último la fase de confianza en la que tiene el tiempo requerido para la libertad condicional.

Conforme a lo expuesto por el señor Comandante Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, el interno desde el momento de su reclusión y hasta la fecha en dicha

[27] C.S.J. T-Rad No. 89.755 del 24-01-2017, M.P. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
[28] Tribunal Superior de Bogotá, T-RAD 11001220400020200121100 (21-05-20) M.P. Dr Luis Enrique Bustos Bustos.

estación policial ha demostrado un cambio favorable, por lo que le expidieron la certificación favorable para la libertad condicional[29].

Para este funcionario el tratamiento progresivo que ha recibido **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**, durante la permanencia en la Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, permite vislumbrar que su readaptación ha tenido frutos demostrando que su buena conducta, pues a la fecha no ha disfrutado de su primer contacto con su grupo familiar fuera de la prisión como el de 72 horas, ni tampoco el del Decreto 546 de 2020, ni el de prisión domiciliaria del artículo 38G del C.P., ni el de la Ley 750 de 2002, sin embargo y a pesar de ello ha tenido buen desempeño permitiendo inferir en este funcionario que ha logrado su resocialización.

4.7. Cumplimiento de las 3/5 partes de la condena.

En lo atinente al cumplimiento del factor objetivo, determinado por la Ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **SEIS (6) MESES DE PRISIÓN**, corresponde a **TRES (3) MESES y DIECIOCHO (18) DÍAS DE PRISION**. Teniendo en cuenta que el solicitante ha descontado pena dentro del presente asunto **desde el 27 de septiembre de 2023** hasta la presente fecha, ha cumplido físicamente **5 meses y 23 días** de la pena impuesta

El sentenciado NO cuenta con redenciones de pena reconocidas.

En este orden de ideas, se observa que **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** hasta la presente fecha, ha cumplido **CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS DE PRISIÓN.**

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA:	27 de septiembre de 2023
TIEMPO FÍSICO:	5 meses y 23 días
TIEMPO REDIMIDO:	-0-
TOTAL DESCONTADO:	5 meses y 23 días
PENA PRINCIPAL:	6 meses
3/5 PARTES DE LA PENA	3 meses y 18 días

Así las cosas, al sumar ambos guarismos, tenemos que **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**, ha cumplido de la pena impuesta un total de **5 meses y 23 días de prisión** purgados de la pena impuesta; tiempo superior a las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **6 meses de prisión** que como se dijo equivalen a **3 meses y 18 días**, razón por la cual el condenado solicitante **cumple** ampliamente con el requisito objetivo que demanda la normatividad.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"…Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **pro homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad)[15]*

[29] Certificación suscrita por el Comandante Estación de Policía Facatativá Cundinamarca (E) – Teniente Jonathan Estiven Rodríguez Guevara, allegada el 7 de febrero de 2024.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[30]

4.8. Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión y en la prisión domiciliaria.

Sea este el momento para resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado beneficio de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de este funcionario judicial, y que se encuentran dispuestos por el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, y por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que imponen la existencia de ciertos documentos emanados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde se certifica el cumplimiento de ciertos requisitos.

En el presente asunto, se emite la CERTIFICACIÓN DE CONDUCTA allegada a través del correo institucional el día 7 de febrero de 2024, suscrita por el Comandante Estación de Policía de Facatativá Cundinamarca, mediante la cual indica:

"(…) *Por medio de la presente me permito informar que el señor JORGE LUIS BELLO ALMANZA identificado con cedula de ciudadanía 1.043.672.538, quien se encontraba privado de la libertad del 27 septiembre del 2023, en las instalaciones de la policía de Facatativá, presento buen comportamiento en las instalaciones policiales* (…)"

Por lo anterior, el condenado **CUMPLE** con este requisito contemplado en el citado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal.

4.9. Del arraigo familiar

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial

[30] T.S. Bogotá Rad 11001-60-00-013-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

En el presente caso, el condenado cuenta con un domicilio ubicado en la **Cra 8 C Nro. 8C-45 El Bosque Barranquilla Atlántico**, conforme se observa en la boleta de Detención Intramural Numero 045 y el acta de derechos de capturado.

4.10. De la reparación a las víctimas

En lo que a la reparación de las víctimas respecta, se tiene que, en el fallo condenatorio el Juzgado 1º Penal Municipal con función de conocimiento de Facatativá Cundinamarca, anotó en la parte motiva: "*este Despacho avizora que, se realizó indemnización a la víctima, por el valor de sesenta mil pesos ($60.000), el fenómeno de indemnización se produjo el 19 de diciembre de 2023",* motivo por el cual, el condenado cumple con este requisito.

5. CONCLUSIÓN

Así las cosas, verificados y cumplidos como están los requisitos de carácter tanto objetivo como subjetivo, se le reconocerá y otorgará el pluricitado subrogado penal **de la libertad condicional**, al condenado **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** pero; previo al disfrute del beneficio, el condenado deberá cancelar caución prendaria y suscribir la diligencia de compromiso con las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal, para la cual se le señalará el correspondiente periodo de prueba de acuerdo a lo ordenado en el artículo 64 del Código Penal que al respecto expresa:*"(…) El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario"* [31]

De conformidad con lo anterior, como en el caso que nos ocupa el término faltante para cumplir la totalidad de la pena es de **7 días** a fin de que el proceso de resocialización que le fue impuesto al solicitante cumpla los fines para los cuales se determinó, en aras de que el sentenciado enfoque positivamente su conducta absteniéndose de incurrir en cualquier tipo de delitos. Es de destacar que es un infractor primario, sin embargo, ésta será la oportunidad para que tome entera conciencia de que perciba que la pena responde a la finalidad de la resocialización como garantía de la dignidad humana. De este modo se tiene que los jueces de ejecución de penas velan por la reeducación y la reinserción social de los penados *"como una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, que permite humanizar la pena "*conforme está consignado en el artículo 1º de la Constitución Nacional y 5º de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ley dispone que para garantizar las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal (Ley 599 de 2000), debe constituirse la caución prendaria, en atención a las condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal sobre **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**, se fijara caución en el equivalente a **CERO PUNTO CINCO (0.5) SMLMV**.

[31] Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

La libertad se hará efectiva, ante el señor COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, una vez cancele la caución o constituya la póliza y suscriba la respectiva diligencia de compromiso, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

5.1. Sobre la Comisión y la notificación al condenado

Teniendo en cuenta que **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**, se encuentra recluido en la ESTACIÓN DE POLICIA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena **COMISIONAR** al señor Comandante de Policía de dicha estación, con el fin de que se sirva **NOTIFICAR** al condenado el contenido del presente auto.

Por la Secretaría del Juzgado, PROCÉDASE a librar la **BOLETA DE LIBERTAD** a favor de **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538 de San Estanislao Bolívar, **pero solo a partir del 25 de marzo de 2024** y ante el señor **COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

En vista del problema de salubridad que se está desatando en el mundo sobre el COVID 19, y según las directrices del Gobierno Nacional, Autoridades Departamentales y municipales, así como las del Consejo Superior de la Judicatura, por la Secretaría del Juzgado y según la comunicación remitida por las Directivas del INPEC, PROCÉDASE a LIBRAR – previo diligenciamiento del acta de compromiso y cancelación de la caución (0.5 SMLMV) - la **BOLETA DE LIBERTAD** a **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538 de San Estanislao Bolívar, ante el señor COMANDANTE DE POLICIA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

Por último, ejecutoriado el auto por la Secretaría del Juzgado, **PROCÉDASE** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia del periodo de prueba de **7 días** impuesto.

Se advierte que una vez materializada la presente libertad condicional, este Juzgado procederá a dejar sin efecto la Boleta de Libertad No. 0025 expedida ante el señor COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA, por la cual se otorgó la libertad por pena cumplida al infractor a partir del 25 DE MARZO DE 2024 y en su lugar se emitirá BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL ante el señor Comandante de dicha estación policial.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los*

casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[32], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[33]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[34]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

---

[32] Ibídem.
[33] CSJ T **102248**
[34] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER a que el sentenciado **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538 de San Estanislao Bolívar, acumula un total de **5 meses y 23 días** por concepto de tiempo físico, por lo cual cumple a partir del **25 DE MARZO DE 2024** con el total de la pena de **6 meses de prisión** impuesta por el Juzgado 1º Penal Municipal con función de conocimiento de Facatativá Cundinamarca, en sentencia del 22 de diciembre de 2023.

SEGUNDO. - CONCEDER a JORGE LUIS BELLO ALMANZA, LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, **pero solo a partir del 25 DE MARZO DE 2024**, conforme a lo consignado en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

CUARTO. – En lo que respecta a la interdicción de derechos y funciones públicas, este Juzgado **DECRETA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS** impuestas en el fallo reseñado y a favor de **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538 de San Estanislao Bolívar, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

QUINTO. – ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**, en razón de este proceso.

SEXTO.- CONCEDER al condenado **JORGE LUIS BELLO ALMANZA** identificado con C.C. No. 1.043.672.538 de San Estanislao Bolívar, el subrogado de la **LIBERTAD CONDICIONAL** por las razones expuestas en este proveído**, bajo un periodo de prueba**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

de 7 días, por lo cual deberá cancelar la caución impuesta, equivalente a CERO PUNTO CINCO (0.5) SMLMV, o constituir póliza judicial y suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones señaladas en el artículo 65 del C.P., diligencias que se encasillarán en el respectivo anaquel para la vigilancia del periodo de prueba impuesto.

SEPTIMO. - Se advierte que una vez materializada la presente libertad condicional, este Juzgado procederá a dejar sin efecto la Boleta de Libertad No. 0025 expedida ante el señor COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA, por la cual se otorgó la libertad por pena cumplida al infractor a partir del 25 DE MARZO DE 2024 y en su lugar se emitirá BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL ante el señor Comandante de dicha estación policial.

OCTAVO -. Como quiera que el precitado se encuentra purgando pena en la ESTACION DE POLICIA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA se **COMISIONA** al señor director del mencionado penal, para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **JORGE LUIS BELLO ALMANZA**

NOVENO –. En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado REMITIR las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales de Facatativá Cundinamarca, para su archivo definitivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y de Apelación.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

BOLETA DE LIBERTAD No. 0025

FECHA	**DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2024**

Señor Comandante: **ESTACIÓN DE POLICIA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA.-**
Sírvase poner en libertad a: **JORGE LUIS BELLO ALMANZA.-**
Cédula de Ciudadanía No. **1.043.672.538 EXPEDIDA EN SAN ESTANISLAO BOLIVAR.-**
Lugar de nacimiento: **BARRANQUILLA ATLÁNTICO.**
Fecha de Nacimiento: **4 DE ABRIL DE 1986.-**
Delitos: **HURTO CALIFICADO .-**
Estado Civil: **N/A.-**
Profesión u oficio: **DESEMPLEADO. -**
Nombres de los padres: **MARIA LUISA ALMANZA Y ALBERTO BELLO.-**
Nombre del conyugue: **N/A.-**
Motivo de libertad: **LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 25 DE MARZO DE 2024.-**
CUI: **25269609936820230038 1.-**
Número Interno: **2024-0024.-**
Autoridades que conocieron: **CUI 25269609936820230038 1: FISCALIA URI FACATATIVA CUNDINAMARCA, JUZGADO 2º PENAL MUNICIPAL DE FACATATIVA CUNDINAMARCA CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS, JUZGADO 1º PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA Y ESTE ESTRADO JUDICIAL 2024-0024.-**
OBSERVACIONES: **ESTA LIBERTAD SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DEL 25 DE MARZO DE 2024, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTENCIADO JORGE LUIS BELLO ALMANZA, NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN. –**

NELSON NOGUERA PINILLOS
J U E Z

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 19 de 2024: Al despacho el proceso contra **HEINNER PEDROZO DIAZ** identificado con C.C. No. 13.870.023, informando que se recibe el 23 de febrero de 2024 a través del correo institucional procedente de la Oficina Jurídica CPMMSF Facatativá – PONAL, la solicitud de insolvencia económica y el día 5 de marzo de 2024 la documentación para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena del infractor. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo diecinueve (19) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0134

Número único:	**11001600001720060714O**
NI:	**2014-0590**
Sentenciado:	**HEINNER PEDROZO DIAZ**
Identificación:	**C.C. No. 13.870.023**
Delito:	**SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO**
Reclusión:	**CPMMSFFA PONAL FACATATIVA**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL** **RECONOCE REDENCION DE PENA TRABAJO** **NIEGA INSOLVENCIA ECONÓMICA Y DECLARA LA EXIBILIDAD DE PAGO DE PERJUICIOS MORALES**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Ingresan al despacho las presentes diligencias, para resolver sobre la libertad condicional, el reconocimiento de redención de pena y la solicitud de insolvencia económica a favor del condenado **HEINNER PEDROZO DIAZ** identificado con C.C. No. 13.870.023, quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos el **9 de noviembre de 2006** el Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., mediante sentencia del 19 de julio de 2007, **CONDENÓ** a **HEINNER PEDROZO DIAZ** (y otro[1]) a la pena principal de **CUARENTA (40) AÑOS DE PRISION Y MULTA DE 10.000 SMLMV**, como coautor responsable del delito de **SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO** y a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un período de 20 años y adicionalmente a la pérdida del empleo que ejercía en la Policía Nacional. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. Condenó al pago solidario de perjuicios morales de 20 SMLMV y se abstuvo de condenarlo por perjuicios materiales.

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Penal, mediante decisión del 29 de octubre de 2008, CONFIRMÓ en su integridad el fallo condenatorio.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante providencia del 21 de mayo de 2009, resolvió NO CASAR la sentencia recurrida.

El homólogo 18 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso el 27 de julio de 2009 y por auto del 26 de agosto de 2009, reconoció 8 meses, 22 días.

Conoció del proceso el homólogo 2º de Barranquilla Atlántico, por auto del 10 de octubre de 2011, reconoció redención de pena de 9 meses, 19.2 días.

Este Juzgado avocó el conocimiento del proceso por auto de sustanciación No. 2123 del 13 de agosto de 2014 y durante el curso del proceso ha reconocido redención de pena así: auto interlocutorio No. 801 del 31 de julio de 2015 - 564 días; auto interlocutorio No. 0608 del 20 de octubre de 2016 - 4 meses, 1.1 día; auto interlocutorio No. 1197 del 29 de diciembre de 2017 - 5 meses, 2.4 días, auto interlocutorio No. 0275 del 2 de abril de 2019 - 5 meses y 7.5 días - auto interlocutorio No. 0635 del 14 de diciembre de 2021 -13 meses y 15.9 días; auto interlocutorio No. 0119 del 23 de febrero de 2022 - 1 mes y 4.62 días y auto interlocutorio No. 0166 del 23 de marzo de 2023 - 4 meses, 28.62 días.

HEINNER PEDROZO DIAZ descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 9 de noviembre de 2006**, actualmente recluido en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL.

En esta oportunidad ingresa al despacho con documentación procedente de la CPMMSFFA PONAL, para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena.

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528,

[1] Piterzon Rodríguez Rivera

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria*

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia[3]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar el penado privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

Conforme a los hechos ocurridos desde el **9 de noviembre de 2006**, el sentenciado fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 890 de 2004, 1142 de 2006, 1121 de 2006[5]) y 906 de 2004.

4.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

---

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)*[4]*.*

[5] Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, el certificado de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
18794852	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023	CPMMSF FACATATIVA Regional Central	568	Sobresaliente	Ejemplar
18889656	Del 1 de abril al 30 de junio de 2023	CPMMSF FACATATIVA Regional Central	572	Sobresaliente	Ejemplar
18968631	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023	CPMMSF FACATATIVA Regional Central	600	Sobresaliente	Ejemplar
19086486	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023	CPMMSF FACATATIVA Regional Central	600	Sobresaliente	Ejemplar
19138470	Del 1 de enero al 3 de marzo de 2024	CPMMSF FACATATIVA Regional Central	408	Sobresaliente	Ejemplar
TOTAL			**2748**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **2748** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **171.75 días**, es decir, **CINCO (5) MESES**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Y VEINTIUNO PUNTO SETENTA Y CINCO (21.75) DÍAS, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3. SOBRE LOS SUBROGADOS

Se tiene que los subrogados penales son medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto, que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas penas una vez hayan cumplido los requisitos propios establecidos dentro de la ley.

De acuerdo con lo anterior tenemos que la suspensión condicional de la ejecución de la pena (art 63 del C.P.) y la libertad condicional (art 64 ibídem) son un derecho para el condenado siempre y cuando **"***se verifiquen los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador ha establecido. Si aquellos no se cumplen, es evidente que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no puede conceder tales beneficios, pues su competencia está limitada por lo dispuesto en la ley.*[6]

4.4. DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Con relación al beneficio de Libertad Condicional, expresa el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, que para su concesión deben cumplirse la totalidad de los requisitos a saber:

> *"**ARTÍCULO 64. Libertad condicional**. El juez, PREVIA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
> 2. *Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
> 3. *Que demuestre arraigo familiar y social.*
>
> *Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.*
>
> *En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.*
>
> *El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario"*[7] *(*Subrayado y negrilla fuera de texto).

La norma en cita está directamente ligada y supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

> ***Art. 471.-** "El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.*

[6] Corte Constitucional Sentencia C-679/98
[7] Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional."* (Subrayado fuera del texto original) [8]

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** delimitó su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma**,** sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP),** NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario, a pesar que lo delitos se encuentran como excluidos en la mencionada norma, no los tendrá en cuenta – **SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO** -, para el subrogado a estudiar.

4.5. Del principio de favorabilidad

Resulta oportuno verificar la aplicación del principio de favorabilidad con base en el tránsito legislativo, -desde la ocurrencia de los hechos- teniendo en cuenta que dicho principio no diferencia, dentro de su aplicación, entre normas de carácter sustantivo y normas procesales.

Sobre éste apasionante tópico, la sentencia C-592 de 2002 de la Corte Constitucional, en un caso de demanda por inconstitucionalidad contra las expresiones *"Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia"* contenida en el inciso final del artículo 6º, *"La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo"* contenida en el numeral 6º del artículo 114 y contra los artículos 127, 291 y 287 de la Ley 906 de 2004 *"por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal";* realiza un despliegue importante respecto de la aplicación del principio de favorabilidad al concurrir en el tiempo normas aplicables a casos particulares.

Así, bajo la ponencia del **Dr, ALVARO TAFUR GALVIS,** la Corte analizó lo siguiente:

> ***…***
> ***"****4.1.5.2.1.2.* ***El principio de favorabilidad, como elemento integrante del debido proceso en materia penal, se encuentra establecido como es sabido en el artículo 29 del Estatuto Superior, en los siguientes términos:***

[8] Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***"En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable."***

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ley 74 de 1968, enuncia este principio así:

> *"Artículo 15-1 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional**. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello**."(Subrayas fuera de texto)*

La Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16/72, lo plasma igualmente en el artículo 9°, así:

> *"Artículo 9° Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. **Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello**."*

De acuerdo con estas normas, que como ya se ha visto integran todo el bloque de constitucionalidad, en materia penal, el principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. El carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto.

Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley.

La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.

***Sobre este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales**.*

*Al respecto cabe recordar que esta Corporación, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en diferentes ocasiones en las que se ha referido a la concordancia del **artículo 40 de la Ley 153 de 1887 -que prevé la regla general de aplicación inmediata de la ley procesal- con el artículo 29 constitucional, ha concluido que independientemente del efecto general inmediato de las normas procesales, el principio de favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre normas sustantivas y normas procesales que resulten más benéficas al procesado**.*

El entendimiento del artículo 29 constitucional que ha hecho esta Corporación es en efecto el de que al momento de los hechos que configuran la conducta punible, debe existir un tribunal competente y un procedimiento para juzgar a la persona que ha

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

cometido un delito, pero ello no significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la competencia del juzgamiento quede definida de manera inmodificable.

La Corte en las sentencias C-619 de 2001 y C-200 de 2002 concluyó que en materia de regulación de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución impone claramente como límite la aplicación del principio de favorabilidad penal.

Al respecto la Corte expresó concretamente lo siguiente al analizar el alcance del artículo 40 de la Ley 153 de 1887:

> *"Del análisis efectuado en la Sentencia C-619 de 2001 citada, cuyos considerandos reitera la Corte, es posible concluir que el efecto general inmediato de la ley procesal que consagra el artículo 40 de la ley 153 de 1887 no desconoce la Constitución, pues por aplicarse a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos.*

En lo que se refiere a los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara en establecer que estas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Ahora bien, en la medida en que ha quedado establecido que el respeto del principio de favorabilidad es un presupuesto necesario para la aplicación de la norma y que se ha solicitado precisamente a esta Corporación condicionar su constitucionalidad en este sentido, la Corte estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones:

Como ya se explicó, el principio de favorabilidad rige toda aplicación de la normatividad penal sin que pueda hacerse ninguna diferencia entre normas sustantivas y normas procesales que beneficien al procesado" (Resalta fuera de texto)

Como vemos, al no haber distinción entre normas sustantivas de las procesales para aplicar por favorabilidad esta o aquella norma, en el presente caso resulta propicio valerse de lo impuesto por el artículo 64 sin las alteraciones que introdujo la ley 890 de 2004, 1453 de 2011 y en la presente oportunidad, con lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014.

4.6. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES

4.6.1 Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 26 de la Ley 1121 de 2006 y el art. 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las

soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [9].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO**, el legislador en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 26 de la Ley 1121 de 2006– así como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, Ley 1142 de 2007, 1453 y 1474 de 2011 ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Al efecto se trae a colación el mencionado artículo:

> ***"ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS****. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo,* ***secuestro extorsivo****, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión,* ***ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo****, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz"*[10] .(Resaltado fuera del texto original)

El legislador considera dentro de ese marco de política criminal imperante que no es justo, equitativo, o adecuado otorgar cualquier tipo de beneficio administrativo legal y judicial, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena al condenado, que incurra en esta clase de conductas.

Así lo afirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C-073 de 2010[11]:

> *"…En ese orden de ideas, la disposición legal acusada, mediante la cual se excluye la concesión de beneficios y subrogados penales para los autores y partícipes de tan gran graves conductas, no resulta ser un cuerpo extraño en el texto de la Ley 1121 de 2006. Todo lo contrario. Su contenido se ajusta perfectamente a los fines perseguidos por el legislador, en la medida en que pretende disuadir a todos aquellos que deseen perpetrar tales crímenes.*
>
> *Así las cosas, el cargo de inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 26 de la Ley 1126 de 2006 por violación al principio de unidad de materia, no está llamado a prosperar…" (Subrayado mío).*

Es claro que en el presente caso se deberá estudiar por favorabilidad el subrogado de la libertad condicional, sin que con ello se vulnere derechos fundamentales del petente, ya que la exclusión de tal beneficio deviene de la correcta aplicación de la ley vigente.

En un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que trató particularmente lo relacionado al artículo 26 de la **Ley 1121 de 2006**, afirmó lo siguiente:

---

[9] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro
[10] Artículo 26, Ley 1121 de 2006, "*Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones"*
[11] Humberto Antonio Sierra Porto, 10 de febrero de 2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *"…En todo caso, para la Sala es nítido que por razones de política criminal bien era posible que el legislador restringiera ciertas garantías procesales generales de un grupo de la población delincuencial específico, siempre que no limitara el núcleo esencial de los derechos fundamentales ciudadanos.*
>
> *Una consideración contraria a la afirmada implicaría el desconocimiento del principio de libertad de configuración legislativa.*
>
> *En éste punto, pertinente resulta recordar que, restricciones legislativas como la que nos ocupa, han sido adoptadas en otras oportunidades por el legislador, acudiendo a razones de política criminal…" (…).*
>
> *"…En ese orden, es claro que cuando las sentencias de primer y segundo grado aplicaron la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 para negar al procesado la rebaja prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena establecido en el artículo 63 de la Ley 599 de 2000 no incurrieron en violación directa de la ley sustancial, ya que la exclusión de tales beneficios deviene de la correcta aplicación de la ley vigente…"[12]. (Subrayado nuestro).*

Sin embargo para este caso en particular vemos que conforme a los hechos acaecidos según lo consignado en la sentencia condenatoria - 9 de noviembre de 2006 - , fecha ésta en la cual aun NO había sido creada la mencionada Ley 1121 de 2006 (Diciembre 29 de 2006 Diario Oficial No 46.497 de 30 de diciembre de 2006) y la Ley 733 de 2002 conforme a los pronunciamientos jurisprudenciales había sido derogada el 1° de enero de 2005 cuando se implementó la Ley 906 de 2004 y se modificó la Ley 599 de 2000 con la Ley 890 de 2004.

Significa lo anterior, que para aquella época el **artículo 11 de la Ley 733 de 2002**, negaba, entre otros, cualquier mecanismo sustitutivo. Pero a raíz de la expedición de las Leyes 890 y 906 de 2004, reformatorias del Código Penal y abrogatoria del Código de Procedimiento Penal - que empezaron a regir a partir del 1 de enero de 2005 — introdujeron cambios en las normas de exclusión o suprimió algunas instituciones y adopto otras de la reseñadas como la ley 733 de 2002.

Al respecto hubo un primer pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia referirse al beneficio de Libertad Condicional y Redención de Pena por trabajo o estudio que fueron plasmadas en las tutelas con los radicados 23322 y 24136 al señalar que una vez entraron a regir las leyes 890 y 906 de 2004 las prohibiciones contenidas en el 11 de la Ley 733 de 2002 fueron tácitamente derogados.

Así lo expreso:

*",..Quinto: Como se acaba de destacar, **el artículo 5 de la ley 890 de 2004 derogó tácitamente el 64 de la ley 599 de 2000, modificado por la ley 733 de 2002**, en lo que tiene que ver con los presupuestos relacionados con la libertad condicional (otras prohibiciones como la de acceder a la sentencia anticipada deben examinarse en concreto y respetando el instituto especifico de que se trata), de manera que por virtud del principio de favorabilidad es aplicable el artículo 5 de la primera ley, en tanto genera mayores posibilidades de acceder a la libertad condicional, las cuales no se pueden rehusar con argumentos de competencia, que en nada inciden tratándose de una reforma eminentemente sustancial.*

[12] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Rad 29788, del 29 de julio de 2008, M.P. Augusto Ibañez Guzmán

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Considera la Corte, por tanto que, al no aplicar la disposición mas benéfica, el Juzgado y el Tribunal incurrieron en una vía de hecho judicial por infracción al principio de favorabilidad, lo cual a su vez implica, como ya se dijo, ejecutar la pena arbitrariamente e incurrir en una vía de hecho por defecto sustantivo..."[13] (Resaltado fuera del texto original).

En concordancia con lo anterior, en sentencia reciente proferida por el Alto Tribunal, señaló lo siguiente:

"...En síntesis, las prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 733 del 2002 no son aplicables a los delitos de secuestro, extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo y conexos cometidos a partir del 1° de enero del 2005 en los distritos en los que rige a plenitud la Ley 906 del 2004..." [14](Subrayado nuestro)

Lo anterior significa que a partir de la expedición de la Ley 890 de 2004, se reitera, cuya vigencia empezó a surtir a partir del **1° de enero de 2005**, los requisitos para aquellos condenados que estaban inmersos en la Ley 733 de 2002, esto es, excluidos de la posibilidad de acceder, para este caso, a la prisión domiciliaria por la naturaleza del delito, pueden acceder a ella siempre que dé cumplimiento a las exigencias previstas en la norma, esto es, el artículo 38, 68 del Código Penal.

En Sede de Tutela señaló[15]:

"... Lo que ocurre es que estas prohibiciones fueron reincorporadas al ordenamiento legal por el artículo 26 de la Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006, tomando para el efecto el mismo texto del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, con la diferencia que en la nueva disposición se excluyó el delito de secuestro simple y se incluyó el de financiación del terrorismo. Dice la norma: … "(Subrayado nuestro)

(...) Eso significa que los hechos ocurridos a partir de su vigencia se hallan cobijados por la prohibición y que en relación con ellos quedo por tanto proscrito el otorgamiento de cualquier beneficio o subrogado de carácter legal, judicial o administrativo, por delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsi6n o conexos, diferentes de los consagrados en el Código para eventos de colaboración eficaz..."

En reciente pronunciamiento sobre el principio de favorabilidad y la aplicación de la Ley 733 de 2002 y la 1121 de 2006 la Corte Suprema de Justicia en sede de Tutela señaló:

"…Aplicación de la Ley 890 de 2004*.*

El artículo 29 de la Constitución Política contempla la garantía fundamental al debido proceso, cuya estructura se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria. Su contenido implica prerrogativas tales como el principio de legalidad, el principio del juez natural, la plenitud de las formas propias del juicio, el derecho a la favorabilidad penal, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso sin dilaciones, el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, el derecho a la impugnación, la garantía de la cosa juzgada, entre otros.

El principio de legalidad, que encuentra su desarrollo en el artículo 6 del Código Penal y de Procedimiento Penal, en términos generales, contempla que una conducta no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley preexistente al acto que se imputa que así lo señale. Este principio opera tanto en el momento de la definición

13 Sentencia Rad. 23322 de fecha diciembre 7 de 2005
14 Corte Suprema de Justicia rad 30800, 1º de julio de 2009, MP. José Leonidas Bustos
15 C.S.J.T-RAD 55073 del 21 de julio de 2011

de lo que es punible, de la aplicación de la ley, como de la ejecución de la pena. Esto significa, que las leyes de ejecución penal deben recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente.

A su turno, el principio de favorabilidad entendido como norma rectora del sistema procesal penal colombiano, que opera como una excepción a la irretroactividad de la ley, surge cuando una nueva ley sustancial o procesal de efectos sustanciales regula de manera más benigna la intervención penal y, por tanto, debe aplicarse en consecuencia la que favorable e íntegramente regula el tema.

Para lo que interesa al asunto estudiado, se encuentra que la jurisprudencia de esta Corporación en decisiones CSJ SP, 14 Mar. 2006, Rad. 24052, CSJ SP, 4 Feb. 2009, Rad. 26569, reiterada en CS STP, 13 Dic. 2016, Rad. 89511, estableció los parámetros de la aplicación de las cláusulas de las exclusiones de beneficios y subrogados penales a el procesado por delitos de secuestro, terrorismo, extorsión y conexos, con ocasión de la expedición de las Leyes 890 y 906 de 2004.

De esta manera, bajo una hermenéutica permisiva y favorable concluyó que aquellas restricciones fueron derogadas tácitamente por el legislador de 2004, hasta la expedición de la Ley 1121 de 2006, que retomó la prohibición a la concesión de beneficios para los condenados, entre otros, por delitos de secuestro extorsivo.

Así, las citadas jurisprudencias aclararon que el artículo 5 de la ley 890 de 2004 derogó tácitamente el 64 de la ley 599 de 2000, modificado por la ley 733 de 2002, en lo que tiene que ver con los presupuestos relacionados con la libertad condicional. ***Así las cosas, entre el 1º de enero de 2005 y el 30 de noviembre de 2006 - fecha en la que entró en vigencia la Ley 1121 de 2006- se eliminó la prohibición de concesión del beneficio para los condenados por delitos de secuestro extorsivo, entre otros****.*

Ese entendimiento se mantuvo hasta la expedición de la ***Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006****, que retomó la prohibición contenida en el texto del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, con las diferencias de que en la nueva normativa se excluyó el delito de secuestro simple y se incluyó el de financiación del terrorismo.*

Así las cosas, en proveído CS STP, 13 Dic. 2016, Rad. 89511 la Sala indicó:

«Ahora, la Sala de Casación Penal reconoció que el artículo 11 de la Ley 733 de 2003, dejó de ser aplicable a partir de la entrada en vigencia de las Leyes 890 y 906 de 2004 por operar una derogatoria tácita, hermenéutica que se sostuvo hasta cuando la Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006, reprodujo el texto del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, con las diferencias de que en la nueva normativa se excluyó el delito de secuestro simple y se incluyó el de financiación del terrorismo.
(…)

Así entonces, como se acaba de destacar, el artículo 5 de la ley 890 de 2004 derogó tácitamente el 64 de la ley 599 de 2000, modificado por la ley 733 de 2002, en lo que tiene que ver con los presupuestos relacionados con la libertad condicional entre el 1º de enero de 2005 y el 30 de noviembre de 2006, fecha en la que entró en vigencia el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, que reprodujo la prohibición a la concesión de dicho beneficio para los condenados por entre otros delitos de extorsión.

En ese orden, la interpretación utilizada por los funcionarios accionados para negar el beneficio de la libertad condicional resulta desacertada, al aplicar una ley que para el momento de la comisión de la conducta estaba derogada, pues como incluso lo reconocen en las providencias censuradas, éstos tuvieron ocurrencia en el mes de marzo del año

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

2005. Sobre el particular señaló el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.»

Corolario de lo expuesto, resulta claro que entre el entre el 1º de enero de 2005 y el 29 de diciembre de 2006, la Ley 890 de 2004 derogó la prohibición de concesión de la libertad condicional establecida para algunos delitos, entre ellos, el de secuestro extorsivo. Disposición legal que, en virtud del principio de favorabilidad, debe ser aplicada en el estudio del subrogado, en los eventos en que resulte procedente*…"*[16]*(negrillas nuestra)*

Y en lo que respecta a las exclusiones consagradas en el artículo 68 A creado por artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, comenzó a regir a partir del 28 de julio de 2007/- Diario Oficial No 46.673 — fecha ésta posterior a la fecha de los hechos motivo por el cual no se le puede aplicar el consabido artículo.

4.7. Valoración de la Conducta

Dentro de unos hechos constitutivos que infrinjan los derechos de la comunidad, el Estado representado por el ente investigador, en su etapa previa y por los jueces en su juzgamiento, nos llevan a una punibilidad dentro de un proceso penal que finaliza con una absolución o condena de un individuo. Si es ésta última, se impone o suspende una pena privativa de la libertad.

En este ciclo privativo el condenado puede hacer uso de subrogados o mecanismos sustitutivos, como la libertad condicional contemplado en el artículo 64 del C.P. Ésta configura la oportunidad de que la persona que está condenada y se encuentra privada de la libertad - intramural o domiciliariamente - puede cesar dicho estado impuesto en sentencia condenatoria. Para su concesión, el juez, a quien le corresponde por competencia, estudiará los requisitos que exige la norma entre los que se encuentra previamente, la valoración de la conducta, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2014.

Esta valoración inicio en la adición concebida por el legislador como "gravedad de la conducta" en la Ley 890 de 2004 y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad en la sentencia C-194 de 2005, en el que señaló que el juez de Ejecución no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de la evaluación de la procedencia del subrogado penal. Allí dejó claro que el juez no quedaba autorizado para valorar dicha *"gravedad"* ya que lo que la norma señalaba era que se debería tener en cuenta de parte del funcionario era *"la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal".*

Con la modificación incorporada por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 el legislador condicionó la concesión del beneficio de libertad condicional a la ***"previa valoración de la conducta punible"*** suprimiendo la palabra *"gravedad"* de la disposición anterior, de lo que se ha derivado una diversidad de interpretaciones por parte de los jueces vigilantes, sin embargo, este Despacho se sostiene en el criterio aplicado con antelación en el sentido de hacer tal valoración siempre y cuando sobre el punto se haya pronunciado el juez fallador.

Lo anterior con base en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia **C-757 de 2014** en donde determina una vez más que en las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas para decidir sobre el beneficio de libertad condicional deben tenerse en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez fallador en la sentencia, ya fueran favorables o desfavorables.

[16] CSJ RAD 131549 (6-07-23) M.P. Dr Diego Eugenio Corredor Beltran

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Ello significa que el Juez de Ejecución de Penas podrá valorar la conducta de conformidad con el artículo 64 del Código Penal, en la medida en que sobre tal aspecto se haya pronunciado el juzgado fallador o en su defecto la segunda instancia. Del mismo modo indica lo anterior que la redacción del mencionado artículo 64 del C.P., *"no establece qué elementos de conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni establece los parámetros a seguir para asumir las valoraciones que de ella hicieron previamente los jueces penales"*[17]

En efecto, el juez ejecutor se somete a las consideraciones expuestas por el juez que resolvió la situación jurídica del procesado a través de su fallo condenatorio.

Así lo manifestó la H. Corte Suprema de Justicia:

"Respecto a la valoración de la conducta punible, la Corte Constitucional, en sentencia CC C-757-2014, teniendo como referencia la Sentencia CC C-194-2005, determinó, en primer lugar, cuál es la función del juez de ejecución de penas y, de acuerdo a ésta, cuál es la valoración de la conducta punible que debía realizar.

«[E]l juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. […]

[L]os jueces de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario, el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal»[18]*.*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y analizando los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional se tiene que cuando se va a analizar la conducta por parte de los Jueces de Ejecución de Penas, en cualquiera de sus dos interpretaciones, la de la Ley 890 de 2004 "gravedad" y en la modificación de la Ley 1709 de 2014 "conducta", declaradas exequibles en las sentencias arriba relacionadas, C-195-04 y C-757-14, la conclusión dada por el máximo Tribunal Constitucional fue la siguiente:

> *"En los mismos términos,* ***cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal****"*[19]*:*
> (Resaltado fuera del texto original)

Efectivamente conforme a lo expuesto y dado el análisis e interpretación dada sobre dicho pronunciamiento, no se puede someter nuevamente al condenado con el estudio hecho por el juez fallador en el momento en que dosificó las conductas penales, esto es ni por la censura ni con la "misma óptica en que se produjo la condena". Tampoco puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de dicha evaluación, pero no queda

[17] CSJ T 107644 (19-11-19)
[18] CSJ T-119389 (30-09-21)
[19] Corte Constitucional, sentencia C-194 de 2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

autorizado para valorar la gravedad de la conducta, lo que se debe tener en cuenta por parte del funcionario es la gravedad del comportamiento punible, *calificado y valorado previamente en la sentencia por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal*.

Ello significa que el juez vigilante debe someterse no a la valoración que hizo el de conocimiento en el momento de la dosificación de la pena, que es su motivación para "dosificar" la conducta, o conductas endilgadas al imputado, sino al pronunciamiento en los mecanismos sustitutivos de la pena cuando se pasa a la audiencia del artículo 447 del C.P.P.

Y debe de ser así porque si el funcionario que vigila la pena se sometiera a lo consignado por el juez de conocimiento al momento en que dosifica las conductas, estaríamos frente a una eventual negativa de las solicitudes de los mecanismos sustitutivos solicitados, sobre todo el de la libertad condicional.

Se entiende que en el instante de evaluar la posible libertad del implicado debe hacerse desde la óptica de lo expuesto por el fallador al momento en que se pronuncia, que es obligatorio, en la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria (art 63 y 38 C.P.), audiencia esta indispensable para que se logre a través de los condenados acceder a cualquiera de estos postulados y si el fallador ve que de acuerdo a la situación fáctica se tenga que pronunciar sobre la "gravedad" de conducta, así lo hará, momento éste en que el juez de Ejecución de basa para estudiar la posibilidad de conceder o negar el mecanismo sustitutivo solicitado.

Como se señaló, han existido varias interpretaciones al respecto no solo de parte de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia que enmarcan un criterio y lineamiento para analizar, estudiar y decidir sobre este tópico.

En una decisión del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria[20], se analizó la gravedad de la conducta y la conducta punible basado en el pronunciamiento que se hizo por parte del fallador en el momento procesal de cuantificación de las penas, en el que se hizo un reproche sobre la conducta del implicado, no ocurriendo lo mismo en el momento en que se pronunció ante los mecanismos sustitutivos de la pena.

> *"…:* ***VIII. DE LAS PENAS:***
>
> *VIII.4. Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada superó de modo importante su tope básico, necesaria para configurar el delito, en tanto significó cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos al margen de la ley, con menoscabo de los valores que nutren un Estado democrático; el daño fue significativo, porque se fundió en unas mismas personas las condiciones de agentes de grupos ilegales y del Estado; la seguridad pública sufrió grave deterioro amén su legitimidad; la intensidad del dolo se verificó mayor, dado que inició con la coalición político-paramilitar que condujo a sus elecciones en el Congreso de la República y se extendió durante el ejercicio alternado del cargo cada uno por un año; aunada la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución.*
>
> *VIII.5. Se tiene en cuenta que aunque la concertación con pretensiones políticas del señor (…), con un grupo armado al margen de la ley tuvo las connotaciones antes referenciadas, que motivan el incremento de las penas, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa en su corto tiempo de ejercicio él haya propiciado acciones concretas que redundaran selectivamente en beneficio de esos colectivos criminales, lo que de algún modo informa un*

[20] C.S.J Rad 44195 (03-09-14)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

retraimiento en el componente lesivo del delito, tanto que el testimonio del propio (…) por momentos asumió el carácter de reclamo, lo que en perspectiva, aunada la carencia de antecedentes penales, desaconseja penas superiores a las determinadas; por eso no se le impone el máximo permitido en la ley.

IX. DE LA LIBERTAD:

No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria, por impedirlo un requisito objetivo; en el primer caso porque la ley sólo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y, en el segundo, porque sólo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de la condena sea de 5 años o menos, acorde con lo establecido en los artículos 63-1 y 38 del Código Penal, presupuesto que no se satisface…" [21]

Posterior, en los fallos de la Corte Constitucional C-233-16, T-640-17 y C-265-17 determinó que se debe tener en cuenta, para los jueces de ejecución de penas, que la finalidad constitucional de la pena no está en el castigo del condenado sino en su resocialización como la garantía que nos brinda el artículo 5° de la Ley 65 de 1993, - dignidad humana -[22]. Esto nos lleva a velar por la reinserción social apoyada por la educación que se les brinde en los Centros Carcelarios a los penados en forma intramural o domiciliaria con el fin de humanizar la pena como lo señala el artículo 1° de la C.N[23].

Del mismo modo la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que el Juez de Ejecución de Penas debe tener en cuenta la participación del condenado en las diferentes actividades de readaptación y/o resocialización dentro de los Centros Carcelarios y buscar la reinserción del que ha cometido un error y lo está subsanando.

En reciente exposición, en sede de tutela de parte del mismo órgano de cierre, hace un recuento sobre la *"amplitud de posibilidades hermenéuticas con respecto a la valoración de la conducta punible"* y el guiarse por los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad *"como bien lo es el principio pro homine – también denominado cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos"*, centrándola en lo más favorable al hombre y sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

En dicha providencia advierte que[24]:

"…i) *No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.*

En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;

---

[21] Rad 44195 y 33713
[22] **ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.** <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.
Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
[23] **ARTICULO 1o.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
[24] C.S.J Rad T-107644 (19-11-19) M.P. Patricia Salazar Cuéllar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***ii)*** *La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;*
>
> ***iii)*** *Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.*
>
> *Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.*
>
> *Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.*
>
> ***iv)*** *El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado…"*

Éste precedente ha sido reiterado en sentencias con radicados 111560 (28-07-20), 113578 (01-12-20); 115313 (23-03-21); 119257 (28-09-21) y 119389 (30-09-21) y en la providencia con radicado 59888 (15-09-21) y 61616 (27-07-22).

Así lo señaló en el Rad 119389:

> *"Tal postura fue ratificada recientemente en proveído CSJ AP4142-2021, 15 sep. 2021, rad. 59888, en los siguientes términos:*
>
> *[…] Tal como lo ha indicado esta Corporación[25], **la concesión de la libertad condicional depende del cumplimiento de todos los requisitos enlistados en el precepto transcrito, pues en su examen, el juez no puede prescindir de ninguna de las condiciones fijadas por el legislador, incluida, la valoración de la conducta, cuyo análisis es preliminar.***

(…)

> *En línea con dicha interpretación, esta Corporación ha sostenido que:*
>
> *«La mencionada expresión –valoración de la conducta- prevista en el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, va más allá del análisis de la gravedad, extendiéndose a aspectos relacionados con la misma, sin que el juez ejecutor de la pena tenga facultad para soslayar su evaluación, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 del 15 de octubre de 2014»[26].*
> *[…]*
> *Así, es claro que para la concesión de la libertad condicional, resulta imperioso que el juez valore la conducta por la cual se emitió la condena, no obstante, se insiste, **tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad y los antecedentes de orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social**, por lo que en la apreciación de estos factores debe conjugarse el «impacto*

[25] CSJ AP8301-2016, Rad. 49278, CSJ AP5297-2019, entre otros
[26] CSJ AP3558-2015, Rad. 46119

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes»[27].”[28]*

Ahora complementando lo anterior, en recientes pronunciamientos sobre este punto la H. Corte Suprema de Justicia concretó lo siguiente:

“6.6.2.3 Por último, obligado resulta traer a colación el auto de segunda instancia CSJ AP2977–2022, 12 jul. 2022, rad. 61471, no solo por su cercano proferimiento, sino por identificarse con la temática bajo examen, razón por la cual su trascendente alcance irradia al asunto que concita la presente decisión. En el mencionado proveído, así se discurrió:

> *[e]l análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el*
> *ordenamiento penal, dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991; y al mismo tiempo desvirtuaría toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.*
>
> *La anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C–757 de 2014 (declaró exequible la expresión: «previa valoración de la conducta» del artículo 64 del Códig[o P]enal), en el sentido que al analizar la procedencia de la libertad condicional el [j]uez de [e]jecución de [p]enas deberá:*
>
> > *«establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.»*
>
> *Es así como el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado, pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad, que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor tal como lo estipulan los artículos 6° numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10° numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del [b]loque de [c]onstitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Nacional).*
>
> *30.3 Corolario de ello, un juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad, debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno, sobre aspectos como la escueta gravedad de la conducta (analizada en forma individual); pues si así no fuera, la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva, que en nada contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulan la dignidad del ser humano. (…)*
>
> *30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca, no solamente los aspectos draconianos de las sanciones penales; entre ellos, que el conglomerado se comporte normativamente (prevención general); y que, tras recibir la retribución justa, el condenado no vuelva a delinquir (prevención especial); aunado a tales aspectos, las penas, en especial las restrictivas de la libertad, también se deben encaminar a que el condenado se prepare para la reinserción social, fin este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario y el comportamiento del condenado durante este, sea valorado, analizado, estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.*

[27] CSJ AHP5065-2021
[28] C.S.J. T-119389

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *Lo anterior, justamente con el fin de incentivar en el infractor, esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción, asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario, así como para brindar herramientas útiles al penado que le permitan prepararse para retornar a la vida en sociedad cuando recobre la libertad.*
>
> *30.5 Entenderlo de otra manera, sería tanto como establecer una prohibición generalizada que no ha sido prevista por el legislador para todos aquellos eventos en los que la conducta se evidencie objetivamente grave. (…)*
>
> *30.6 En ese orden de ideas, entender que la gravedad objetiva de la conducta es sinónimo de negación de la libertad condicional, equivaldría a extender los efectos de una prohibición normativa específica, sobre todos los casos que se estimen de notoria gravedad, sin haber sido así previsto en la ley; y tal expansión no es compatible con los derechos fundamentales de los condenados; pues los dejaría sin la expectativa de que su arrepentimiento e interés de cambio sean factores a valorar durante el tratamiento penitenciario, erradicando los incentivos y con ello, el interés en la resocialización, pues lo único que quedaría, es el cumplimiento total de la pena al interior de un establecimiento carcelario* [negrilla original del texto].

6.6.2.4 A las anteriores consideraciones, que en su integridad se ratifican, sólo es dable agregar lo siguiente:

Toda conducta punible es considerada un acto grave contra la sociedad, al punto que el legislador reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas, ella afecta los valores que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas, además del daño privado, el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal, necesarias para la convivencia pacífica.

La condición de grave o leve de una infracción delictiva da lugar a intensos e inacabados debates. Nadie ha de negar que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza –o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva–, implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social, verbigracia, los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida, la integridad personal, la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos, lo que de contera genera unánime rechazo social. Sin embargo, ello no soluciona la problemática a la hora de calificar el injusto.

La praxis judicial enseña que en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad –todas válidas si se quiere–, una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla, pero en el fondo sólo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida las razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que determinado proceder debía ser objeto de represión por el Estado.

La previa valoración del injusto típico introduce a la discusión argumentos de índole subjetivo que en nada contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal. (…)

Importa acotar que la Sala, por obvias razones, no se refiere a aquellas conductas que el propio legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, excluyó del subrogado de la libertad condicional, asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional en sentencia CC C–073–2010, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Ley 1121 de 2006, «[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones». (…)

Por ello, precisó que «[e]l legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional». (…)

Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible, solo es posible frente a casos en los cuales el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por dicho motivo, como sucede con los previstos en los artículos 26 de la Ley 1121 y 199 de la Ley 1098 de 2006, pues, como se dijo en la decisión CSJ STP15806–2019, 19 nov. 2019, rad. 107644, atrás citada, «no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos» (…)

La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias. (…)

<u>En suma, no es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado de la libertad condicional</u>. Ello sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla de un sentido de retaliación social que, en contravía del respeto por la dignidad humana, cosifica al individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales.”[29]*.(subrayado nuestro)*

Vemos que no solo en sede de tutela se presenta un criterio unificado sobre el tema, por lo que este juzgado estimará para los futuros análisis sobre la valoración de la conducta y se tendrá en cuenta no solo el pronunciamiento por parte del juez de conocimiento cuando se refiera a los mecanismos sustitutivos de la misma, sino en el instante en que motiva la dosificación de la misma, o si existe preacuerdo en el análisis de los delitos, del mismo modo en el transcurrir del proceso su comportamiento en el Establecimiento Penitenciario y <u>establecer la necesidad de si el condenado debe continuar con el tratamiento penitenciario ponderándolo con la valoración de la conducta</u>.

Lo anterior, nos lleva a que el juez de ejecución de penas está en la obligación no solo de lo señalado en la parte motiva para la dosificación de la pena impuesta al condenado, sino dilucidar las circunstancias que encierra esa conducta punible junto con la personalidad del infractor- hasta ese momento como sociales, personales, laborales, familiares y su adecuado comportamiento en el Centro Carcelario, su conducta, cursos alcanzados, -puntos que nos lleva a concluir si existe la necesidad de otorgar o no el subrogado invocado o por el contrario requiere de mayor tratamiento penitenciario.

El presente Caso:

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., en el fallo condenatorio con relación a la <u>gravedad de la conducta endilgada</u> al condenado, indicó:

[29] CSJ RAD 61616 (27-07-22) M.P. Dr Fabio Ospitia Garzón

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

"(…) en este caso la gravedad y modalidad del delito resulta relevante, dado que el secuestro se ha convertido en uno de los flagelos que con mayor rigor está azotando a la sociedad colombiana actual por su cotidianidad y funestas secuelas de orden psicológico que genera en las victimas, como lo demostraron las recientes marchas y manifestaciones públicas que hicieron los colombianos: circunstancia que por sí sola demanda un mayor rigor en la sanciones para evitar que dicho delito siga campeando; máxime en casos como el presente en que funcionarios policiales, que son llamados a preservar el orden y garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad, utilicen el nombre de una institución tan respetable como es la Policía Nacional y usen sus uniformes, investidura y elementos de dotación para delinquir (…)".

En efecto, conforme a la jurisprudencia relacionada entrará este juzgado a analizar como primera medida el no poder tener como razón para la negatoria de la libertad condicional la sola insinuación de la conducta punible frente a los bienes señalados en el C.P., ya que esto es concurrente con prohibiciones señaladas por el legislador en ciertas leyes.

Del mismo modo dicha valoración no se puede hacer *con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales.*

El juez que vigila debe valorar de igual manera dentro de la punibilidad lo tenido en cuenta por el fallador, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes. En efecto se debe ajustar con el comportamiento del procesado en el Centro Carcelario con elementos útiles que permitan analizar si el condenado debe continuar cumpliendo la pena intramural o domiciliariamente y su participación en las diferentes actividades que tiene instituidas el INPEC como punto fundamental para su resocialización. Entonces no se debe tener en cuenta únicamente el bien jurídico afectado como única motivación para negar el subrogado invocado, se debe hacer un análisis completo, una carga motivacional que garantiza *la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.*

4.8. Sobre la Resocialización de los condenados

Se tiene bien conocido que el Estado tiene unos deberes constitucionales y que le corresponde a través de los distintos poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional) diseñar la Política Criminal, esto en especial al Legislativo (Congreso de la República) que según lo señala el artículo 150 de la Constitución Nacional *"le corresponde hacer las leyes".*

La Política Criminal, se entiende como *"**el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener el orden social y hacerles frente a las conductas que atenten de forma grave contra el mismo y, así, proteger los derechos de los residentes en el territorio nacional y, puntualmente, a las víctimas de los delitos"**.* En efecto, esta Política Criminal está enfocada a satisfacer, entre otros asuntos, el restablecimiento de las víctimas logrando la resocialización del autor o partícipe de la conducta penal.

Lo anterior significa que la política criminal del Estado es el de proteger, blindar, asegurar, resguardar a la sociedad optando que las medidas, decisiones y disposiciones guarden armonía con los principios en que se funda, sobre todo en las garantías que reconoce para sus conciudadanos.

El artículo 4° de la Ley 599 de 2000 indica que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al

condenado. Del mismo modo resalta que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión, ello significa que éstos buscan la resocialización del condenado.

El artículo 1º de la misma obra y de la Constitución Nacional señala que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. En efecto, para un Estado Social y Democrático se da la necesidad de prevenir el delito con el fin de asegurar la protección de sus habitantes, defenderlos de aquellos que infrinjan las normas contenidas en las leyes; sin embargo ello no obsta que ese derecho penal se debe encausar en respetar la dignidad del infractor como el de no imponer penas – pena de muerte o cadena perpetua – dándole la oportunidad a cada individuo de tener la capacidad para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse y volver a contribuir a la sociedad.

Ahora aquellas personas que por el andar de la vida cometen un error que los lleve a pagar una pena principal de prisión, el Estado prevé un tratamiento penitenciario cuya finalidad es la reforma y la readaptación del penado a la sociedad, el de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante un examen de personalidad que se logra a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario[30].

El principal objetivo es el preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad y debe realizarse conforme a la dignidad humana, anteriormente mencionada, y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto verificándola a través de los sistemas educativos y culturales de los Establecimientos Penitenciarios.

Se concluye que el tratamiento penitenciario es el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad[31].

Sobre la resocialización la H. Corte Constitucional, señaló:

> *"…(i) durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado…"*

Y en la Sentencia Sentencia C-294-21 conceptuó:

> *"La resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o técnicas de tratamiento social o clínico que pretenden «cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el*

[30] *Ley 65 de 1993, art 10*
[31] *INPEC art 4º Resolución 7302 (23-11-05)*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno».*

En sentencia C-718-15, sobre la finalidad de la pena, indicó:

> *"…Así, en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la pena, no solo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también en el momento de su ejecución.*
>
> *Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[32] que, ella tiene en nuestro sistema jurídico **un fin preventivo**, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; **un fin retributivo**, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, **y un fin resocializador** que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que "sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital". [33]*
>
> ***En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.***
>
> *El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén "orientados hacia **la efectiva resocialización** de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad".[34](Se resalta)…"*

Se suma, lo indicado en los artículos 94, 96 y 97 (Ley 65 de 1993) que estipulan sobre la educación como la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa evaluación de los estudios realizados hay lugar a que sea certificada por la autoridad designada para el efecto, disponiendo que será concedida por el Juez Vigilante, abonando 1 día de reclusión por 2 días de estudio.

En igual sentido lo señalado en los artículos 79 y ss. de la misma obra que indica sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y que los establecimientos de reclusión son un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización.

Sobre la readaptación de los penados, la Sentencia T-061 de 2009, expresó que "*Las personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito, encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir la pena que les fue impuesta.*

---

[32] *Sentencia C-430 de 1996*
[33] *Sentencia C-144 de 1997*
[34] *Sentencia C-1404 de 2000*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Dentro de sus funciones, las cárceles se encargan de resocializar al individuo, con el fin de obtener la paz; es decir, permitiendo que el preso pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente productiva, impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles".

Sobre ese tema esa Corte en Sentencia T-213 de 2011 reiteró lo afirmado en la providencia T-718 de 1999, según la cual: *"la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente".*

Y en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente:

> *"7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional peticionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación…*[35]

Visto lo anterior, y en lo referente a lo decantando en la jurisprudencia mencionada[36] se tiene que a la fecha el infractor ha cumplido con una pena impuesta de (480 meses) **288 meses y 7.09 días** superiores al porcentaje exigido por la norma con un 60% que ha cumplido de la pena impuesta. Del mismo modo vemos en su cartilla biográfica que desde el momento de su aprehensión, su comportamiento intramuralmente y calificación ha sido buena desde el 21-11-2006 hasta el 13-09-2007; ejemplar desde el 14-09-2007 hasta el 31-12-2023 y conforme el certificado manual de conducta emitido por la CPMMSF se ha calificado buena desde el 01-01-2024 al 29-02-2024, de ahí en adelante su rol ha sido óptimo para el sentido de su resocialización.

Del mismo modo vemos que su actuar ha sido destacado en el transcurso de dicho proceso, entonces, al purgar un total de pena física de **211 meses y 10 días**, más las redenciones reconocidas de **76 meses y 27.09 días** nos arroja un total de **288 meses y 7.09 días** de la pena impuesta cumpliendo con ello elevar a más de un 60%, pues detallase que el condenado en el primer momento en que fue capturado, es decir, del **9 de noviembre de 2006** - ha estado privado de la libertad en centro penitenciario y carcelario y hasta la fecha, lo que indica que siempre ha cumplido su reclusión de manera intramural.

Aunado a ello el comportamiento del infractor ha sido EJEMPLAR y sobre este aspecto a pesar de que nunca lo tacharon por su disciplina, se trae un pronunciamiento sobre este aspecto - CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA - de la Corte Suprema de Justicia:

"…Las anteriores reflexiones sirven para deducir que la valoración de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso, ni de una sola calificación, sino que debe realizarse, en cada caso concreto, de manera ponderada (principio rector, artículo 27, Ley 906 de 2004) y en forma integral, con análisis de la evolución del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusión, con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocialización y, por tanto, si merece ser motivado o incentivado el beneficio.

[35] C.S.J. Rad 1376 del 14-07-2020 M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
[36] RAD 107644

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Al no existir norma específica que determine que una sola calificación de conducta inferior a buena, no conduce indefectiblemente a la negación de los beneficios, se debe aplicar por analogía el inciso final del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, que establece la consecuencia para quien observare mala conducta durante uno de los permisos, esto es, la suspensión de los mismos, pero no su cancelación, ésta se hace efectiva únicamente en caso de reincidencia.

Lo anterior significa que el legislador otorga un margen razonable de tolerancia frente a posibles errores de comportamiento en que puedan incurrir las personas beneficiadas y no impone la extinción del derecho por una sola falla. Si ello se aplica a quienes ya disfrutan del permiso, con mayor razón debe tenerse en cuenta como criterio de ponderación…"[37], fíjese que así hayan tenido en alguna oportunidad alguna calificación regular, no es óbice para la negatoria de alguno de los beneficios, aunque para el presente caso vemos que el infractor ha tenido un comportamiento y conducta ejemplar.

Entonces vemos que **HEINNER PEDROZO DIAZ** cumple, pues como lo decanta la jurisprudencia mencionada, no solamente es hacer alusión al bien jurídico afectado sino tener en cuenta *"**las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras,"*** el tener presente la armonía ***"con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.***

Sobre la resocialización, señalo en reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Bogotá lo siguiente:

"Así las cosas, se parte de la base de entender consolidada una enmienda o resocialización de la persona que ha cumplido parte de la pena dentro de un establecimiento carcelario y ha observado durante ese tiempo buena conducta, sin que pueda presumirse en su contra o concluirse que no ha sido posible su resocialización o readaptación, pues, contrariamente, según la filosofía que encarnan las medidas de privación de la libertad, se presume que el tiempo de reclusión ha contribuido a la reflexión sobre la conducta por la cual fue condenado y a permitir su readaptación y resocialización hacía el futuro.

En consecuencia, afirmar lo contrario conllevaría a evidenciar argumentativamente la necesidad del absoluto cumplimiento de la pena, bajo el régimen penitenciario, como única vía para satisfacer los fines propósitos de la punibilidad en la legislación colombiana"[38].

4.9. Sobre las Fases del Tratamiento Penitenciario:

Dentro de las fases para el tratamiento penitenciario (art 144 Ley 65 de 1993) que nos señala la norma se tiene que ha cumplido con la clasificación que se establece pasando como primera medida por la fase de alta seguridad (periodo cerrado) en la que el interno accede al sistema de oportunidades en programas educativos y laborales, en periodo cerrado, permitiendo el plan de tratamiento orientándose a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades.

La fase de mediana seguridad en la que se accede de parte del interno a los programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, con medidas de seguridad menos restrictivas. Además, los programas educativos y laborales ofrecidos en esta fase se basan

[37] C.S.J. T-Rad No. 89.755 del 24-01-2017, M.P. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
[38] Tribunal Superior de Bogotá, T-RAD 11001220400020200121100 (21-05-20) M.P. Dr Luis Enrique Bustos Bustos

en la intervención individual y grupal, permitiendo la competencia psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal, no formal e informal, vinculándolos en actividades industriales, artesanales, agrícolas etc. Luego sigue la fase mínima en la que el interno se le orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral. Y por último la fase de confianza en la que tiene el tiempo requerido para la libertad condicional.

según lo anotado por las directivas en la cartilla biográfica, no le figuran sanciones disciplinarias, ni intento de fuga en el tiempo en que lleva recluido en la Cárcel, tiene una calificación de conducta **EJEMPLAR**, tal y como se certifica en los documentos expedidos el 29 de febrero de 2024 y las directivas con base a ese estudio expidieron la resolución favorable para la libertad condicional[39].

Para este funcionario el tratamiento progresivo que ha recibido **HEINNER PEDROZO DIAZ** durante la permanencia en el Centro Carcelario permite vislumbrar que su readaptación ha tenido frutos demostrando que su buena conducta, así como en las redenciones reconocidas por estudio, trabajo y/o enseñanza, y, como se señaló el disfrute y su buen desempeño de su primer contacto con su grupo familiar por lo que se deduce que ha tenido un excelente desempeño permitiendo inferir en este funcionario que ha logrado su resocialización.

4.10. Sobre el escrito del Condenado

En su escrito de petición de libertad condicional el condenado **HEINNER PEDROZO DIAZ** manifiesta que, cumple con los requisitos para el reconocimiento de redención de pena y ha cumplido con el factor objetivo, indica que conserva un buen comportamiento y ha demostrado durante el proceso en cada uno de los estadios procesales del cumplimiento de la pena, razón por la cual las directivas de la CPMMSF FACATATIVA, han expedido Resolución Favorable, no ha tenido fugas, ni tentativas de fugas, ni faltas disciplinarias, ni investigaciones y un certificado de conducta integral.

Manifiesta que con el ánimo de comprobar el arraigo familiar y social, la Dirección del centro de reclusión, realizó visita domiciliaria por intermedio de la Psicóloga de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Psicóloga Jenny Paola Galvis Mateus, a su lugar de residencia y núcleo familiar ubicado en el barrio La Aurora en Bucaramanga Santander – Carrera 29 # 33- 53, apartamento 802, inmueble habitado por su señora madre Carmen Sofía Díaz Jaimes y arguye, que si es pertinente realizar nueva visita domiciliaria virtual, es posible coordinar cita con su hermano Leonardo Pedrozo Díaz al número celular 3165776309

Argumenta que fue obligado en la sentencia condenatoria a indemnizar de forma solidaria a CRISTIAN JAVIER VELASCO GAMA, con la suma de 20 SMLMV, sin embargo, la víctima nunca hizo presencia durante el proceso, pues indica que su identidad actual es incierta, así como su posible ubicación, por lo que elevó ante este Juzgado en fecha 22 de febrero de 2024, solicitud de declaratoria de Insolvencia Económica y aportó Certificado de Inscripción en la base predial catastral de Bogotá, certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, Reporte CIFIN S.A.S.

Por lo anterior, solicita se conceda a su favor el subrogado penal de la libertad condicional.

Anexa: cartilla biográfica, resolución favorable No. 001, orden de asignación en programas de TEE, acta asignación TEE, certificado TEE, certificados de calificación de conducta, Resolución favorable No. 008, certificado de no fugas, ni tentativas de fugas, certificado NO sanciones disciplinarias, Formato de Visita Domiciliaria, declaración extraprocesal

[39] Resolución No. 008 del 29 de febrero de 2024

rendida ante Notaría – señores Leonardo Pedrozo Díaz, Yolima Tose García, Luisa Alejandra Reinoso Tose, fotocopia cédula ciudadanía Luisa Alejandra Reinoso Tose, declaración juramentada de José Luis Vargas Herreño, Cristian Fernando Vera Vecino, Diploma Administrador de Empresas, Universidad Militar Nueva Granada, Título Certificación Especialista en Alta Gerencia Universidad Militar Nueva Granada, diploma SENA Técnico en Panificación, certificación laboral Pedrozo Días y Asociados, Certificado auditor Interno ISO/IEC27001:2022, diploma SENA Contabilidad Básica, diploma SENA Elaboración de Tortas y Batidos Esponjosos, diploma SENA Higiene y Manipulación de Alimentos, diploma SENA Tratamiento de Residuos Sólidos urbanos, diploma SENA Formulación de planes y Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos, certificado INPEC Crecimiento Personal.

Por último, conforme a lo consignado por el infractor en su escrito, dicho comportamiento sería lo que el Estado, la sociedad y la familia espera y aplaudiría su futuro actuar porque vendría a conformar uno de los tantos ejemplos que se puede mostrar a la sociedad y manifestar que la resocialización si hace frutos dentro de los privados de la libertad.

4.11. Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

En lo atinente al cumplimiento del factor objetivo, determinado por la Ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **CUATROCIENTOS OCHENTA (480) MESES DE PRISIÓN**, corresponde a **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) MESES DE PRISION.** Teniendo en cuenta que el solicitante ha estado privado de la libertad **desde el 9 de noviembre de 2006** hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **211 meses y 10 días** de la pena impuesta.

El sentenciado cuenta con redenciones de pena en un total de **76 meses y 27.09 días**, reconocidas así:

- JEPMS 18 Bogotá D.C., auto del 26 de agosto de 2009 reconoce 8 meses, 22 días
- JEPMS 2º Barranquilla Atlántico, auto del 10 de octubre de 2011 reconoce 9 meses, 19.2 días
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 801 del 31 de julio de 2015 reconoce 564 días
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0608 del 20 de octubre de 2016 reconoce 4 meses, 1.1 día
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 1197 del 29 de diciembre de 2017 reconoce 5 meses, 2.4 días
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0275 del 2 de abril de 2019 reconoce 5 meses y 7.5 días
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0635 del 14 de diciembre de 2021 reconoce 13 meses y 15.9 días
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0119 del 23 de febrero de 2022 reconoce 1 mes y 4.62 días.
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0166 del 23 de marzo de 2023 reconoce 4 meses, 28.62 días.
- JEPMS Facatativá en el presente auto interlocutorio No. 0134 de la fecha reconoce 5 meses y 21.75 días

Así las cosas, al sumar ambos guarismos, el tiempo cumplido efectivo de la pena y el tiempo redimido, tenemos que **HEINNER PEDROZO DIAZ**, ha cumplido de la pena impuesta un total de **288 meses y 7.09 días de prisión** purgados de la pena impuesta; tiempo superior a las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **480 meses de prisión**

que como se dijo equivalen a **288 meses**, razón por la cual el condenado solicitante **cumple** ampliamente con el requisito objetivo que demanda la normatividad.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"… Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado (…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **por homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad)*[15]

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[40]

4.12. Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión y en la prisión domiciliaria.

Sea este el momento para resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado beneficio de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de esta funcionario judicial, y que se encuentran dispuestos por el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, y por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que imponen la existencia de ciertos documentos emanados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde se certifica el cumplimiento de ciertos requisitos.

En el presente asunto, se anexa la calificación de la conducta del citado por parte la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, en Resolución No. 008 del 29 de febrero de 2024, en la cual emite **RESOLUCIÓN**

[40] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

FAVORABLE sobre las pretensiones del interno en lograr su libertad condicional, motivo por el cual el condenado **CUMPLE** con este requisito contemplado en el citado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal.

Analizada la cartilla biográfica vemos que efectivamente el infractor ha tenido un comportamiento "ejemplar" dando a entender que ha influido en su personalidad el sentido de la resocialización.

4.13. Del arraigo familiar

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

Para el caso concreto y verificando como corresponde el mencionado presupuesto –*arraigo familiar y social*- se observa en los documentos allegados el 5 de marzo de 2024 que **HEINNER PEDROZO DIAZ** cuenta con un domicilio ubicado en **Carrera 29 # 33-53, apartamento 802, barrio La Aurora en Bucaramanga Santander,** conforme la declaración extrajuicio rendida ante la Notaría 9ª de Bucaramanga, el día 1 de marzo de 2024, por el señor Leonardo Pedrozo Díaz con C.C. No. 13.719.843 (hermano del condenado), quien declara que en el mencionado inmueble, vivirá el condenado junto a su progenitora la señora Carmen Sofía Díaz Jaimes

Por lo anteriormente expuesto, **HEINNER PEDROZO DIAZ** cumple con el citado requisito.

4.14. De la reparación a las víctimas o pago de perjuicios, y la solicitud de insolvencia económica invocada por el condenado.

En lo que al pago de perjuicios respecta, se tiene que en el fallo condenatorio se indicó:

"(…) En cuanto a los perjuicios morales ocasionados con el punible de secuestro extorsivo agravado, resulta innegable su causación por las incuestionables secuelas de carácter psicológico que sufrido CRISTIAN JAVIER VELASCO GAMA debido al maltrato moral y físico a que fue sometido en su cautiverio, razón por la que, con fundamento en el artículo 97 del Código Penal, su cuantía se fija prudencialmente en el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes; suma que solidariamente deberán pagar los sentenciados PITERSON RODRIGUEZ RIVERA y HEINNER PEDROZO DIAZ al ofendido VELASCO GAMA. Que no había lugar a condenar a los acusados RODRIGUEZ RIVERA y PEDROZO DIAZ al pago de perjuicios materiales, por cuanto no se demostró su causación, ni se contaba con elementos de juicio para tasarlos; amen que el dinero pagado por el rescate fue recuperado y devuelto a la familia, pero, sin embargo, advirtió que dejaba en libertad al ofendido para que acudiera a la vía civil a demandar el reconocimiento y pago de aquellos que se le hubiesen podido causar (…)".

Se recibe a través del correo institucional el 23 de febrero de 2024, el memorial suscrito por el condenado quien indica que quien se constituyó como víctima en el presente proceso, se identificó como Edison Alberto Mera Martínez, siendo esta identidad falsa, sin embargo durante la evolución del proceso penal que se adelantó se pudo establecer que la verdadera identidad de la supuesta víctima era Cristian Javier Velasco, motivo por el cual nunca

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

compareció a juicio, ni a las audiencia preparatoria, de acusación e incluso no asistió a la audiencia de imputación y legalización de captura del aquí encartado.

Argumenta que ante la imposibilidad de realizar un acuerdo de pago con quien se estableció como víctima, por la dificultad de ubicarlo y aunado a ello, la elevada suma que para mi representa cancelar 20 SMLMV, después de haber pasado 17 años y 3 meses privado de la libertad de forma intramural y sin recibir algún tipo de erogación, se ve en la imperiosa necesidad de probar su insolvencia económica.

Adjunta:

- Certificado expedido ante Cámara de comercio Bogotá, no figura inscrito cuotas o partes de interés, de persona jurídica alguna,
- Reporte CIFIN (TransUnión), donde consta de dos productos financieros, cuenta de ahorros Nro. 009704 Banco Popular, fecha apertura 14 de agosto de 2003, estado INACTIVA y obligación extinguida con el Banco de Occidente Tarjeta de Crédito, fecha apertura 1 de marzo de 2003, fecha finalización 31 de diciembre de 2003, estado INACTIVA
- Certificado inscripción en la base predial catastral de Bogotá, en el que consta en el Sistema Integrado de Información Catastral S.I.I.C. vigente, no se encontraron predios inscritos con el documento de identidad.
- Respuesta Centro Información RUNT, ante el cual solicitó se certificara si existía a su nombre algún tipo de bien automotor, y respondieron que “dado que la Concesión RUNT S.A., no puede validar la identidad del solicitante a través de un escrito, de ser usted el titular de la información, le sugerimos generar la actualización de datos para que se registre por completo sus datos personales y poder entregar la información”.

Luego, en colaboración con oficina jurídica del CPMMSF-FACATATIVA.PONAL nuevamente requirió a dicha oficina para que se expidiera documento que certificara que NO existen automotores a su nombre, y aún se encuentra tramitando este documento, sin embargo, manifiesta que no cuenta con ningún bien automotor a su nombre.

Argumenta que para obtener un certificado digital de la DIAN en el que conste que no cuenta con RUT, debe realizar de forma personal el trámite por primera vez en las oficinas de alguna ciudad.

Por consiguiente, solicita que se declare su insolvencia económica.

Ahora bien, como quedó anotado en líneas anteriores, **HEINNER PEDROZO DIAZ** fue condenado a pagar a la víctima Cristian Javier Velasco Gama, el equivalente a veinte (20) smlmv, por concepto de perjuicios morales; suma que solidariamente deberán pagar los sentenciados Piterzon Rodríguez Rivera y HEINNER PEDROZO DIAZ al ofendido. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 21 de mayo de 2009, tal disposición se fundó en lo previsto en los artículos 94 y 96 del C.P. (ley 599 de 2000) que indican:

> *“**Artículo 94. Reparación del daño**. La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella”.*
>
> *“**Artículo 96. Obligados a indemnizar.** Los daños causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley sustancial, están obligados a responder”.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De acuerdo a los preceptos legales previamente transcritos, el sentenciado deberá reparar los daños causados siempre y cuando se encuentre en capacidad económica de hacerlo. Sin embargo, ésta no es una condición absoluta que supedite la concesión o el goce de los beneficios establecidos en la ley, pues la misma prevé que en caso de no contar con el peculio suficiente para cancelar el pasivo indemnizatorio, no podrá hacerse exigible su pago pues el reo *"no está obligado a lo imposible".* La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el asunto, pero este Despacho rescata las consideraciones de la Sentencia C – 006 de 2003, Magistrado Ponente Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en la que el Máximo Tribunal expuso:

> *"Ante todo, la Corte reitera el principio según el cual el incumplimiento de una deuda, por sí mismo, no justifica una sanción de privación de la libertad personal y, por lo tanto, el goce efectivo de la libertad personal no puede estar supeditado al pago de una suma de dinero. La cuestión a analizar es si las normas acusadas establecen como condición determinante e ineluctable el pago de una suma de dinero para poder gozar de la libertad personal. Una lectura cuidadosa indica que no, porque está condición no es un requisito sine qua non para acceder al beneficio.*
>
> *En primer lugar, porque aun cuando la posibilidad de gozar del beneficio de la condena de ejecución condicional está sujeta al cumplimiento de la obligación de reparar los perjuicios ocasionados, dicha condición no opera de manera absoluta. La ley exige que se tengan en cuenta las circunstancias de cada individuo. En efecto, el artículo 489 de la Ley 600 de 2000, prevé que si las circunstancias del condenado hacen imposible cumplir esta condición porque se ha demostrado que éste "se encuentra en imposibilidad económica de hacerlo, ello no impide que pueda gozar del beneficio, si el juez considera que se cumplen las demás condiciones para su otorgamiento.*
>
> *Igualmente, el artículo 488 de la Ley 600 de 2000, admite que una vez concedido el subrogado, se pueda prorrogar el plazo para el pago de los perjuicios, si al beneficiado le es imposible cumplir con las condiciones fijadas por el juez. De tal manera que la imposibilidad temporal de pagar, no genera como consecuencia la pérdida del beneficio sino la ampliación del plazo por una sola vez. Cuando la imposibilidad de pagar es absoluta, permanente, y ello ha sido demostrado, el artículo 489 del Código de Procedimiento Penal permite que se otorgue el beneficio si se reúnen los demás requisitos de ley. Además, el artículo 483 de la Ley 600 de 2000 establece que en el caso de que existan bienes secuestrados o embargados que garanticen íntegramente la indemnización de perjuicios, el juez otorgará el beneficio y no fijará término para la reparación de los daños.*
>
> *En segundo lugar, porque la condición de la reparación de daños no obliga a lo imposible al condenado, pues precisamente tiene en cuenta su capacidad económica para determinar si está en imposibilidad de cumplir, y acepta que existan causas que justifiquen no pagar la indemnización de perjuicios para acceder y gozar del beneficio.*
>
> *Por lo anterior, el pago de la indemnización de perjuicios, en tanto que se trata de un requisito no determinante para acceder al beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena y continuar disfrutando de él, no constituye una condición inconstitucional, que supedite ineluctablemente el goce efectivo de la libertad personal al pago de una suma de dinero".*
> (Subrayado fuera del texto original)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De contera, el régimen jurídico aplicable al caso, faculta al juez ejecutor de la pena para declarar la no exigibilidad de perjuicios por la vía penal cuando se acredite que el condenado carece del patrimonio suficiente para resarcir a sus víctimas, reiterase, siempre que quede plenamente demostrada su insolvencia económica.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, se tiene que el señor **HEINNER PEDROZO DIAZ** fue condenado a pagar a la víctima Cristian Javier Velasco Gama, el equivalente a veinte (20) smlmv, por concepto de perjuicios morales; suma que solidariamente deberán pagar los sentenciados Piterzon Rodríguez Rivera y HEINNER PEDROZO DIAZ al ofendido. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 21 de mayo de 2009, y se evidencia dentro del expediente que no ha abonado ningún valor para dar cumplimiento a la condena impuesta, también el condenado en su escrito de solicitud de declaratoria de insolvencia económica, indica que no posee ningún bien, ni propiedad.

Conforme a lo anterior, es necesario aclararle al infractor **HEINNER PEDROZO DIAZ**, que es deber fundamental de resarcir el daño ocasionado a la víctima con el injusto penal, que como es evidente merece siquiera en una medida atenuar las cargas que trajo consigo el actuar delictivo del infractor. Al respecto la Sala Penal de la H. Corte Constitucional en Sentencia C-823/05 expuso:

> "Cabe precisar que la reparación del daño ocasionado por el delito tiene como finalidad como lo ha señalado esta Corporación dejar a la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo. En ese orden de ideas en ejercicio de su potestad de configuración, el Legislador ha establecido mecanismos para la protección plena de los derechos de las víctimas y perjudicados por el delito, lo cual comprende, entre otros, la indemnización integral de los daños materiales y morales causados por el ilícito. Así la voluntad del Legislador ha sido la de reconocer el derecho de las víctimas a ser reparadas íntegramente, con el fin de restablecer las cosas a su estado inicial *(restitutio in integrum)*, y cuando ello no es posible, a ser compensadas por los daños sufridos. Esta reparación incluye tanto daños materiales como morales. Comprende tradicionalmente el *damnum emergens*, el *lucrum cessans* y el *pretium doloris*, incluye la posibilidad de exigir intereses y se calcula en el momento de la expedición de la sentencia judicial."

Si bien el procesado argumenta NO contar con los recursos económicos para resarcir el daño y conforme la documentación que aportó en su escrito de solicitud de declaratoria de insolvencia económica, el señor **HEINNER PEDROZO DIAZ** no posee ningún bien a su nombre, ni se encuentra inscrito como propietario de establecimiento comercial, ello NO es óbice para desconocer los derechos que le asisten a la víctima.

Cabe resaltar que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no cumple funciones de para adelantar juicios ejecutivos, pues su obligación es la de velar por el cumplimiento de las distintas obligaciones que compone el artículo 65 del Código Penal. No obstante, en caso de que la(s) víctima(s) busque la satisfacción total de la indemnización, se reitera, el asunto deberá ventilarse ante la jurisdicción civil pues en estricto sentido la sentencia condenatoria representa título que presta merito ejecutivo. Conforme lo señala el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil:

*"**ARTÍCULO 488. TÍTULOS EJECUTIVOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627>** Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia".

En consecuencia, se **ADVIERTE** al condenado que en caso de ser merecedor del subrogado invocado, es su deber dar cumplimiento a las obligaciones descritas en el artículo 65 del C.P., que establece: *"(…) El reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las siguientes obligaciones para el beneficiario: 1. Informar todo cambio de residencia. 2. Observar buena conducta.* ***3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo****. 4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello. 5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. Estas obligaciones se garantizarán mediante caución (…)".*

Por ende, el sentenciado **HEINNER PEDROZO DIAZ** estará supeditado a que cumpla con lo ordenado en el fallo condenatorio, se itera, respecto a que **repare los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo**, **lo cual deberá hacerlo ante el despacho ejecutor, que vigile del proceso durante el periodo de prueba impuesto.**

Por lo tanto, **se le indica al infractor que será de gran importancia que acate estos compromisos, ya que puede evitar eventuales infracciones que conlleven a una posible revocatoria de la libertad condicional concedida**.

Ahora bien, **sería el caso, notificar de esta decisión a la víctima "Cristian Javier Velasco Gama", de no ser porque verificado el expediente no se encontró dato alguno de contacto, ni dirección de residencia para comunicarle al respecto**, sin embargo, la víctima contará con la plena facultad de acudir ante la jurisdicción civil para el cobro de los perjuicios ocasionados con el delito.

En consecuencia, esté despacho **NIEGA la solicitud de insolvencia económica** invocada por el sentenciado **HEINNER PEDROZO DIAZ** y se **DECLARA la exigibilidad del pago de perjuicios morales por el equivalente a veinte (20) smlmv**, suma que solidariamente deberán pagar los sentenciados Piterzon Rodríguez Rivera y HEINNER PEDROZO DIAZ al ofendido Cristian Javier Velasco Gama.

5. CONCLUSION

Así las cosas, verificados y cumplidos como están los requisitos de carácter tanto objetivo como subjetivo que establece en su contenido original el artículo 64 del Estatuto Penal, se le reconocerá y otorgará el pluricitado subrogado penal de Libertad Condicional al sentenciado de marras. Previo al disfrute del beneficio, el condenado deberá suscribir la diligencia de compromiso con las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal, para la cual se le señalará el correspondiente periodo de prueba de acuerdo a lo ordenado en el artículo 64 del Código Penal que al respecto expresa:

"El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario."

De conformidad con lo anterior, como en el caso que nos ocupa el término faltante para cumplir la totalidad de la pena es de **191 meses y 22.91 días**, a fin de que el proceso de resocialización que le fue impuesto al solicitante cumpla los fines para los cuales se determinó, en aras de que el sentenciado enfoque positivamente su conducta absteniéndose de incurrir en cualquier tipo de delitos. Es de destacar que es un infractor primario, sin embargo, ésta será la oportunidad para que tome entera conciencia de que

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

perciba que la pena responde a la finalidad de la resocialización como garantía de la dignidad humana. De este modo se tiene que los jueces de ejecución de penas velan por la reeducación y la reinserción social de los penados *"como una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, que permite humanizar la pena "*conforme está consignado en el artículo 1º de la Constitución Nacional y 5º de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ley dispone que para garantizar las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal (Ley 599 de 2000), debe constituirse la caución prendaria, cuyo monto debe ser fijado no solo a la capacidad económica del condenado sino se debe atender la gravedad de la conducta punible que para el presente caso *el impacto social que han generado, el estado de zozobra que han provocado en la sociedad a través de esta clase de conductas*, **SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO** en atención a las condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal sobre **SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO**, por lo tanto se fijara caución en el equivalente a **CUATRO (4) SMLMV**.

La libertad se hará efectiva, ante las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, una vez cancele la caución o constituya la póliza y suscriba la respectiva diligencia de compromiso, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

Finalmente, como el precitado se encuentra purgando pena en CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL se **COMISIONA** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO**.

Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del condenado **HEINNER PEDROZO DIAZ** identificado con C.C. No. 13.870.023, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (4 SMLMV), **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. -reparto -, para la vigilancia del periodo de prueba de **191 meses y 22.91 días** impuestos al infractor.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y la libertad condicional.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[41], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[42]

---

[41] Ibídem.
[42] CSJ T **102248**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[43]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER a **HEINNER PEDROZO DIAZ** identificado con C.C. No. 13.870.023, redención de pena por trabajo en equivalencia **CINCO (5) MESES Y VEINTIUNO PUNTO SETENTA Y CINCO (21.75) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, del 1 de abril al 30 de junio de 2023, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero al 3 de marzo de 2024, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. - RECONOCER que el interno **HEINNER PEDROZO DIAZ** identificado con C.C. No. 13.870.023, acumula un total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) MESES Y SIETE PUNTO CERO NUEVE (7.09) DÍAS**, por concepto de tiempo físico más redenciones de la pena impuesta.

[43] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

TERCERO. - CONCEDER al condenado **HEINNER PEDROZO DIAZ** identificado con C.C. No. 13.870.023, el beneficio de la **LIBERTAD CONDICIONAL** por las razones expuestas en este proveído, bajo un periodo de prueba de **191 meses y 22.91 días**, por lo cual deberá cancelar la caución impuesta, equivalente a **CUATRO (4) SMLMV**, o constituir póliza judicial y suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones señaladas en el artículo 65 del C.P.

CUARTO. – NEGAR la solicitud de insolvencia económica invocada por el sentenciado **HEINNER PEDROZO DIAZ** y se **DECLARA la exigibilidad del pago de perjuicios morales por el equivalente a veinte (20) smlmv**, suma que solidariamente deberán pagar los sentenciados Piterzon Rodríguez Rivera y HEINNER PEDROZO DIAZ al ofendido Cristian Javier Velasco Gama, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

QUINTO. – Como el precitado se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, se COMISIONA al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **HEINNER PEDROZO DIAZ.**

SEXTO.- Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del condenado **HEINNER PEDROZO DIAZ** identificado con C.C. No. 13.870.023, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (4 SMLMV), **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

SEPTIMO - REMITIR copia de esta providencia a la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

OCTAVO. – Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. - reparto -, para la vigilancia del periodo de prueba de **191 meses y 22.91 días** impuestos al infractor.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Diecinueve (19) de marzo de 2024. Al despacho el proceso contra **MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO,** identificado con C.C. No. 1.073.235.742 informando que una vez verificado el estado actual del proceso esta agencia judicial procede a emitir pronunciamiento acerca de la posible extinción de la sanción penal solicitada por el sentenciado.

Han sido múltiples los requerimientos de los agentes del estado, con solicitudes de libertad condicional, interposición de recursos, acumulación jurídica de penas, redención de pena, aclaración de tiempo de privación de la libertad, prisión domiciliaria, beneficios administrativos, acciones de tutela y hábeas corpus lo que ha generado múltiples entradas y salidas del expediente de Secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (artículo 118 y ss del Código General del Proceso).

DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0135

C.U.I.	**25430600066020l8-01296**
No. Interno:	**2021-0150**
Sentenciado:	**MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO**
Identificación:	**1.073.235.742**
Delitos:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Decisión:	**Declara la Extinción de la Sanción Penal y decreta la Rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas**

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho, a decidir lo que en derecho corresponda acerca de la extinción de la sanción penal y rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a favor de **MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073.235.742, una vez recibidos los medios de prueba requeridos para tal efecto.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -*1709 de 2014*- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2018, **MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO y otros**[1] fueron condenados mediante sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Juzgado Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca) a la pena principal de **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISIÓN,** multa de UN SMMLV y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal, al ser hallado penalmente responsable del delito de **TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON COHECHO POR DAR U OFRECER**.

A los sentenciados no les fue concedida la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En el mismo fallo condenatorio a **MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO** le fue concedida la prisión domiciliaria contemplada en el Art. 38G C.P., previo pago da caución prendaria y firma de diligencia de compromiso[2].

La sentencia quedó ejecutoriada el 24 de noviembre de 2020[3].

MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO en cumplimiento de las obligaciones impuestas prestó caución en cuantía de dos (2) smlmv mediante póliza No. 21-53-101000509 del 1 de marzo de 20213 y suscribió diligencia de compromiso el 9 de marzo de 2021, fijó su domicilio en la Carrera 11 A No.8 B – 45 de Mosquera (Cundinamarca).

Este Juzgado AVOCÓ el conocimiento del proceso el 3 de junio de 2021 y dispuso solicitar al director y asesor jurídico de la Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad de Bogotá – La Modelo -, la documentación prevista en el artículo 471 del C.P.P., a fin de estudiar la posible libertad condicional a favor del sentenciado.

Posteriormente, en decisión del 4 de octubre de 2021, este juzgado resolvió conceder al señalado señor condenado, Libertad por pena cumplida, a partir del 11 de octubre de 2021. En esa misma fecha fue decretada la extinción de la sanción penal, ordenado continuar la vigilancia de las penas accesorias hasta el **24 de julio de 2023**[4].

Finalmente, el señor MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO, remitió escrito solicitando la rehabilitación de derechos y funciones públicas.

Pasa al despacho para el pronunciamiento respectivo.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[5] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

---

[1] MARISELA RIAÑO LEÓN, JOSÉ LUIS MORENO CASTRO, MABEL XIMENA CASTAÑEDA GALEANO.
[2] Folios 7 a 20 cuaderno digital 10.
[3] Folios 2 cuaderno digital 1.
[4] Cuaderno digital 2.
[5] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[6]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

[6] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

4.- CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

4.1 COMPETENCIA

Conforme a la fecha de los hechos, que datan del mes de mayo de 2014, el señor **MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO,** fue investigado y judicializado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y Ley 906 de 2004.

Es competente éste Juzgado para pronunciarse sobre la extinción de la sanción penal, según lo señala el numeral 8 del artículo 38 de la ley 906 de 2004, que indica:

> ***"ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.*** *Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: (…)*
>
> *8.* ***De la extinción de la sanción penal****…"*

4.2. REHABILITACIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS

Este juzgado es competente para decidir sobre la rehabilitación de las penas accesorias conforme lo señalan los numerales de los artículos 92 (Ley 599 de 2000) 38-8 y 480 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al corresponder los juzgados de los Circuitos penitenciarios de Facatativá – Cundinamarca conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[7].

Atendiendo los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último, dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *"la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas"*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *"el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía".*

Agrega que *"Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.".*

---

[7] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)[7].*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

> *"**ARTICULO 92. LA REHABILITACION.** La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:*
>
> *1. **Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho.** Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.*
>
> *2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.*
>
> *En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.*
>
> *Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.*
>
> *No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política." **(Resalta fuera de texto)***

Aterrizando al caso objeto de estudio, como se dijo en líneas anteriores el Despacho debe pronunciarse sobre la rehabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas, que se le impuso al señor JUAN SEBASTIAN BERNAL VALDEZ en el fallo reseñado, encontramos que desde el **24 de noviembre de 2020**, fecha en la que quedó debidamente ejecutoriada la decisión condenatoria, comenzó a correr el periodo de prueba mínimo establecido **(**TREINTA Y DOS MESES) hasta el pasado **24 de julio de 2023** del numeral 1º de la norma en cita, la recuperación de estos derechos, tendrán que ser restablecidos.

Por lo tanto, este funcionario **RESTABLECERÁ** de inmediato todos los derechos jurídicos que en su momento fueron inhibidos por ello, conforme lo expresado en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

En firme esta decisión y cumplido lo ordenado, remítase el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, para su archivo definitivo.

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más 4.300 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO, PONAL y de Cota, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, un Asistente Administrativo, un Secretario y una oficial mayor.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la presente petición.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[8], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*
>
> *… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

> *"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"*[9]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados de la Ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las*

---

[8] Ibídem.
[9] CSJ T **102248**

cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".[10]

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y ss autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Finalmente, desde el mes de noviembre de 2023, el juzgado se encuentra atendiendo en el palacio de justicia de Facatativá, una vez realizada su restauración y puesta en funcionamiento.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ,

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS impuestas en el fallo reseñado y a favor **de MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO**, identificado con C.C. No. 1.073.235.742, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

SEGUNDO.: ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo[11] tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004)[12] para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO en razón de este proceso.

[10] C.S.J. RAD 97792

[11] **ARTÍCULO 166. COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA.** Ejecutoriada la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.

[12] **ARTÍCULO 476. EXTINCIÓN DE LA CONDENA Y DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN.** Cuando se declare la extinción de la condena conforme al Código Penal, se devolverá la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

TERCERO- En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría este despacho REMITIR las presentes diligencias Juzgado Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca), para su archivo definitivo.

CUARTO. - NOTIFICAR vía electrónica la presente decisión al sentenciado **MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO.**

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Facatativá, diecinueve (19) de marzo de 2024

Oficio No. 0667

Señor
MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO
jenr2058@gmail.com

C.U.I.	**25269311040022007-00046**
No. Interno	**2021-0150**
Sentenciado:	**MAICOL YORDANI BARBOSA CASTRO**
Identificación:	**1.073.235.742**
Delitos:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**
Decisión:	**Decreta la Rehabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas**

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le comunico que este Despacho Judicial DECRETÓ LA REHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS dentro del proceso de la referencia.

En consecuencia, mediante esta comunicación se realiza la notificación del auto interlocutorio, proferido en la fecha.

Cordialmente,

DIEGO ANDRÉS TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 19 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0088 del 8 de marzo de 2024 se emitió el Informe Valoración Asistencia Social de fecha 14 de marzo de 2024, para el estudio de la prisión domiciliaria art. 38G del C.P. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo diecinueve (19) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0136

CUI ACUMULADO	**254306000000202200010 - 254306000660202200321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**WILMER SANTANA GONZALEZ**
Identificación:	**C.C. No. 1.076.624.249**
Delito:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES (ACUMULADO)**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G DEL C.P.**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, quien se encuentra purgando pena en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, con la documentación para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Radicado CUI 25430600000202200010 / NI 2024-0002

Por hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2023, **CONDENÓ** a **WILMER SANTANA GONZALEZ** (y otros[1]) a la pena principal de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE DOS (2) SMLMV**, como autor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO** (art. 376 inciso 2 del C.P.), y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de pena principal de prisión. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P., ordenando librar la respectiva orden de detención ante el INPEC, para que se prosiga en privación efectiva de la libertad en cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 26 de septiembre de 2023.

WILMER SANTANA GONZALEZ descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 31 de mayo de 2022** (el Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca, en audiencias concentradas del 1 de junio de 2022, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario – art. 307, literal A, numeral 1º del C.P.P. y libró la boleta de detención en establecimiento carcelario No. 34)[2]

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias mediante auto de sustanciación No. 0006 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

Radicado CUI 25430600000660202200321 / NI 2024-0003

Por hechos ocurridos el **30 de marzo de 2022** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, **CONDENÓ** a **WILMER SANTANA GONZALEZ** (y otros[3]) a la pena principal de **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISION** como coautor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** (art. 376 inciso 2 del C.P.) y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo término de la pena principal. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P. ordenando librar orden de detención ante el INPEC para que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra en privación efectiva de la libertad, se deje a disposición para el cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 23 de noviembre de 2023

Cabe mencionar que el Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca en audiencia de garantías del 31 de marzo de 2022, otorgó la libertad inmediata al infractor **WILMER SANTANA GONZALEZ** en vista que la FGN retiró la solicitud de medida de aseguramiento y libró la Boleta de libertad No. 39[4]

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0007 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar

[1] Carlos Alberto González Ardila y Emelina Ardila González
[2] Carpeta 01 – carpeta 001 – carpeta 002 – archivo 006 y 011 – expediente digitalizado.
[3] Carlos Alberto González Ardila y Emelina Ardila González
[4] Carpeta 01 – archivo 010 y 013 – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

A través del auto interlocutorio No. 0002 del 9 de enero de 2024, reconoció al interno redención de pena de 4 meses y 23.5 días, resolvió **acumular jurídicamente las penas impuestas dentro del proceso con CUI 25430600660202200321 (NI 2024-0003)** acumulado a la pena impuesta en la sentencia dentro del proceso con **CUI 25430600000202200010 (NI 2024-0002)** al interno por los delitos de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, asignando la pena principal de **CINCUENTA Y DOS (52) MESES DE PRISIÓN** y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública por el mismo término de la pena principal acumulada, fijó como pena de multa el equivalente a TRES (3) SMLMV, en cuanto a los mecanismos sustitutivos y del subrogado, éstos no se modifican, y con los procesos que dieron lugar a la acumulación jurídica de penas se formó uno solo prevaleciendo el radicado **CUI 25430600000202200010 (NI 2024-0002)**, por ser el del proceso con la pena más alta al que se acumuló la condena menor.

A través de auto interlocutorio No. 0088 del 8 de marzo de 2024, reconoció redención de pena al infractor de 25 días y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – art. 38G del C.P. -, invocada y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada - Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049-, como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordenó al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado y el informe de valoración de asistencia social del 14 de marzo de 2024.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[5] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que:

[5] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[6].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el

[6] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021 y 30 de marzo de 2022**, el sentenciado **WILMER SANTANA GONZALEZ** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA – ART. 38G DEL C.P.

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049, quien emite la constancia por el cual indica que recibirá en el referenciado domicilio al condenado **WILMER SANTANA GONZALEZ** y se hará cargo económicamente, social y jurídicamente y quien estará atento a los llamados de las diferentes entidades que hayan durante su proceso.

Adjunta: Resolución No. 000004 del 27 de febrero de 2024 emitida por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca por la cual expiden el concepto favorable al interno, acta de compromiso suscrita por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, entrevista realizada por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca al señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, Certificado de Residencia emitido por la JAC Urbanización Pradera I, por el cual certifican al propietario del inmueble señor Roque González Ardila, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, constancias suscritas por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez y Josué David Garzón Chávez.

4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.3.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [7].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*
>
> ***PARÁGRAFO****. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

[7] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> *"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.* ***No se concederán****; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión;* ***ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo****, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*
>
> *<INCISO 2> Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. …"*

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **WILMER SANTANA GONZALEZ** como **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[8]

4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

> ***"****(…)* ***Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*
>
> *Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

[8] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *"(…)* ***Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor****:* ***Artículo 38G.*** *La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(…)"*

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

> ***Artículo 38G****, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.*
>
> ***Parágrafo****. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> ***"(…) Artículo 23.*** *Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:* ***Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.*** *Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
>
> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)****" (Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena impuesta acumulada al condenado, esto es, **52 meses de prisión,** según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **26 meses.**

WILMER SANTANA GONZALEZ ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 31 de mayo de 2022** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **21 meses y 28 días.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 18.5 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0002 del 9 de enero de 2024, reconoce 4 meses y 23.5 días
- auto interlocutorio No. 0088 del 8 de marzo de 2024, reconoce 25 días

En efecto, el interno **WILMER SANTANA GONZALEZ** acumula un total de **VEINTISIETE (27) MESES Y DIECISEIS PUNTO CINCO (16.5) DÍAS** de la pena principal impuesta, por lo tanto, **cumple con el factor objetivo.**

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que el infractor en el escrito de solicitud manifiesta que el inmueble para continuar con el cumplimiento de la pena se localiza en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049**

Para certificar el arraigo familiar y social, adjunta constancia suscrita por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez quien indica que recibirá en el referenciado domicilio al condenado y se hará cargo económicamente, social y jurídicamente y quien estará atento a los llamados de las diferentes entidades que haya durante su proceso.

Ahora bien, al tenerse en cuenta el estudio del arraigo realizado por el Asistente Social de este Juzgado, mediante el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 14 de marzo de 2024, se observa lo siguiente:

"(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Para adelantar la visita domiciliaria a la residencia a la cual los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, se trasladarían para continuar purgando pena, eventualmente, en prisión domiciliaria, en la ***Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I, Mosquera (Cundinamarca)****, fueron realizadas entrevistas al abonado de celular 3016564049, tratándose del número celular del compañero permanente de una sobrina de CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA, también prima del condenado WILMER SANTANA.*

Durante los días 12, 13 y 14 de marzo del año en curso, fueron realizadas entrevistas telefónicas con duración de más de una hora y treinta minutos de duración.

Atendió la entrevista JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.078.030, compañero permanente de KAREN ANDREA GONZÁLEZ OSPINA, sobrina de CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ y prima de WILMER SANTANA GONZÁLEZ, parenteralmente hablando.

El señor entrevistado tiene 38 años y convive hace 6 años con KAREN ANDREA GONZÁLEZ OSPINA, siendo ambos padres de dos hijos menores de edad con cuatro y un año, JESUS SANTIAGO y SAMUEL CAMILO, respectivamente.

JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ labora recientemente como despachador de SERVIENTREGAS S.A., desde enero del presente año; anterior a ello estuvo trabajando por alrededor de ocho años en ALVICA, ensambladora de aluminios.

Por su parte, KAREN ANDREA GONZÁLEZ OSPINA, es auxiliar de producción en Cruz Verde en Cota (Cundinamarca), hace alrededor de 3 años.

Los menores JESUS SANTIAGO y SAMUEL CAMILO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, están vinculados al sistema escolar, el mayor en el Jardín Municipal El Paraíso (municipal) y el menor en el Jardín Privado Pequeñines.

Adicionalmente, en el domicilio de acogida, ubicado en la ***Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I, Mosquera (Cundinamarca)****, residen otras personas, así:*

1. *ROQUE GONZÁLEZ (64), pensionado y quien labora tiempo parcial en oficios de construcción, siendo el padre de KAREN ANDREA, hermano del condenado señor CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ y tío de WILMER SANTANA GONZÁLEZ.*
2. *LUZ HELENA GONZÁLEZ OSPINA (26). Madre soltara, ocupación secretaria en Teleperformance.*
3. *JUAN JOSÉ GONZÁLEZ OSPINA (11). Hijo de LUZ HELENA, cursa sexto grado en el Colegio Público Armonía (Mosquera).*

Respecto a la señora madre de KAREN y LUZ HELENA GONZÁLEZ OSPINA, la señora LUZ DELIA OSPINA, se conoció que falleció hace +-6 años cuando fue arrojada de un autobús en medio de un atraco y presentó complicaciones que la llevaron a la muerte días después.

De otro lado, muy recientemente, en diciembre de 2023, murió el joven JUAN DAVID GONZÁLEZ OSPINA (18), quien presentaba trastorno neurológico con convulsiones y migraña. El joven tuvo infarto posterior a una crisis convulsiva.

Se trata de una familia extensiva donde concurren varios familiares, residiendo de manera colaborativa el padre y dos hijas con sus respectivos núcleos familiares.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

La familia de acogida de los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, cuenta con lazos consanguíneos y afectivos con dichas personas, habiendo residido durante toda su vida en el municipio de Mosquera.

Frente a los hechos delictivos que motivaron la privación de la libertad hoy sufrida CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, la familia manifiesta que se están totalmente en desacuerdo con dicho comportamiento y no lo justifican.

JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ manifestó que la familia y vecinos venían temiendo lo peor en torno a las actividades ilícitas que se rumoraba eran realizadas por aquellos desde su domicilio e inclusive en una oportunidad KAREN ANDREA había dialogado con su tía EMELINA GONZÁLEZ, cuestionando tales conductas y advirtiendo las graves consecuencias que traería.

Con todo, al parecer los condenados estuvieron involucrados en tales actividades por alrededor de dos años.

El señor entrevistado, aseveró que la familia de acogida, además de reprochar tales actos, está dispuesta a recibir a los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, que cuentan con ingresos suficientes para vivir de manera digna y se comprometen con el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la prisión domiciliaria.

Fue reiterado que se trata de una familia humilde y trabajadora, que nunca habían tenido problemas legales, que cuentan con nexos no solamente familiares, sino afectivos y con relaciones positivas cercanas durante toda la vida.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda en la cual el señor condenado pretende continuar purgando pena, eventualmente, en caso les sea concedida la Prisión Domiciliaria, está ubicada en la ***Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I, Mosquera (Cundinamarca),*** *residencia perteneciente al estrato TRES.*

Se trata de una vivienda de tres pisos, propiedad del señor ROQUE GONZÁLEZ, propiedad familiar hace más de 25 años. Adquirida a través de crédito hipotecario, vivienda de interés social, crédito que ya fue saldado, pero aun no se realiza la legalización de escrituras por falta de recursos e incidentes familiares recientes como la muerte del joven JUAN DAVID GONZÁLEZ.

La casa cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, internet y tv cable, agua y alcantarillado.

El domicilio dispone de cuatro habitaciones, en uno de ello, en el segundo piso, instalarían a CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ. Además, la casa tiene patio de ropas, sala-comedor, cocina y baño

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como adecuada, el lugar cuenta con condiciones internas y externas aceptables. La construcción tiene alrededor de 15 años, en material terminado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de riesgo bajo, puesto que se trata de un sector urbano periférico en Mosquera, aledaño al municipio de Funza (Cundinamarca).

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, recibirán el apoyo económico de su familia extensiva.

La familia aseguró contar con un ingreso promedio mensual de seis SMMLV, que alcanza a partir de los salarios devengados por el señor entrevista, JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ, su compañera permanente KAREN ANDREA GONZÁLEZ, el señor ROQUE GONZALEZ y la señora LUZ HELENA GONZÁLEZ.

Los gastos de la economía de la familia de acogida incluyen servicios públicos (+-400 mil mensuales, 800 mil en alimentación, 300 mil otros gastos.

La familia manifiesta que cuenta con los medios necesarios para recibir y apoyar a CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, en caso leS sea concedida la prisión domiciliaria.

CONCEPTO

Los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, tío y sobrino, cuentan con un grupo familiar conformado por familia extensiva, constituido por un hermano de CARLOS ALBERTO Y EMELINA GONZÁLEZ, aquí condenados, familia donde también concurren dos sobrinas y sus respectivos núcleos familiares.

Las condiciones de habitabilidad observadas son adecuadas y positivas. La familia cuenta con una casa de propiedad familiar, donde moran hace más de 25 años, habiendo residido en Mosquera durante toda su vida, contando con relaciones vecinales cercanas.

Aspectos de seguridad del lugar de habitación fueron calificadas como de riesgo bajo, puesto que se trata de un sector urbano marginal periférico en el municipio de Mosquera, aledaño a Funza.

Los condenados cuentan con apoyo económico y solidaridad de toda su familia, personas quienes manifestaron estar dispuestas a recibirlo y garantizar su bienestar.

Respecto al delito cometido, existe reproche frente a dichos actos, los cuales no justifican en modo alguno, manifestando que sus familiares se encuentran totalmente arrepentidos, cursaron un proceso de resocialización exitoso y se han encaminado en proyectos de vida y laborales al margen de la ley.

La familia de acogida de los señores condenados ha sostenido un vínculo afectivo y solidario estrecho, no únicamente ahora, cuando se encuentran privados de la libertad, sino durante toda su vida. Se trata de una familia oriunda y residente en el municipio de Mosquera, contando con fuertes nexos sociales y comunitarios (…)".

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercen un control material del cumplimiento de la condena,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

> ***ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:*
>
> *1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.*
> *2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.*
> *3. Testimonio de vecinos y allegados.*
> *4. Labores de inteligencia.*
>
> *Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.*
>
> *En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.*

4.5.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

"ARTÍCULO 38G. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2o del artículo 376 del presente código."

4.5.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada, no aparece que haya sido condenado en perjuicios o se iniciara el incidente de reparación integral, por lo que cumple con este requisito.

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **WILMER SANTANA GONZALEZ** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conlleva. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluido proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049, a favor de WILMER SANTANA GONZALEZ**

5.1. Sobre la Competencia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Debido a que el condenado va a seguir purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en Mosquera Cundinamarca, por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el auto **PROCEDA** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[9], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

---

[9] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[10]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[11]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

[10] CSJ T **102248**
[11] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **27 MESES y 16.5 DÍAS.**

SEGUNDO. - CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **WILMER SANTANA GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.076.624.249, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

TERCERO. - COMISIONAR al Director de la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **WILMER SANTANA GONZALEZ** quien se encuentra recluido en dicho penal.

CUARTO. - Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049, a favor de WILMER SANTANA GONZALEZ**

QUINTO. - DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049, a favor de WILMER SANTANA GONZALEZ**, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEXTO. – Una vez ejecutoriado el presente auto, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

SEPTIMO. - Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL MUNCIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, para que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 19 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0089 del 8 de marzo de 2024 se emitió el Informe Valoración Asistencia Social de fecha 14 de marzo de 2024, para el estudio de la prisión domiciliaria art. 38G del C.P. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo diecinueve (19) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0137

CUI ACUMULADO	**25430600000202200010 - 254306000660202200321**
Número Interno:	**2024-0002**
Sentenciado:	**CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**
Identificación:	**C.C. No. 80.409.485**
Delito:	**TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES (ACUMULADO)**
Reclusión:	**CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G DEL C.P.**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, quien se encuentra purgando pena en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, con la documentación para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Radicado CUI 25430600000202200010 / NI 2024-0002

Por hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2023, **CONDENÓ** a **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** (y otros[1]) a la pena principal de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE DOS (2) SMLMV**, como autor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO** (art. 376 inciso 2 del C.P.) y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de pena principal de prisión. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P., ordenando librar la respectiva orden de detención ante el INPEC, para que se prosiga en privación efectiva de la libertad en cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 26 de septiembre de 2023.

CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA descuenta pena dentro del presente asunto **desde el 22 de mayo de 2022** (el Juzgado Penal Municipal de Funza Cundinamarca a través de audiencias concentradas del 23 de mayo de 2022, impuso medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario y libró boleta de encarcelamiento No. 018)[2]

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias mediante auto de sustanciación No. 0006 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

Radicado CUI 25430600000660202200321 / NI 2024-0003

Por hechos ocurridos el **30 de marzo de 2022** y preacuerdo aprobado, el Juzgado 2º Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, **CONDENÓ** a **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** (y otros[3]) a la pena principal de **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISION** como autor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** (art. 376 inciso 2 del C.P.) y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo término de la pena principal. Negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – art. 63 y 38 A y B del C.P. ordenando librar orden de detención ante el INPEC para que una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra en privación efectiva de la libertad, se deje a disposición para el cumplimiento de la pena impuesta. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 23 de noviembre de 2023

Cabe mencionar que el Juzgado Penal Municipal de Mosquera Cundinamarca en audiencia de garantías del 31 de marzo de 2022, otorgó la libertad inmediata al infractor **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** en vista que la FGN retiró la solicitud de medida de aseguramiento y libró la Boleta de libertad No. 38[4]

---

[1] Wilmer Santana González y Emelina Ardila González
[2] Carpeta 01 – carpeta 001 – carpeta 001 – carpeta 002 – archivo 004 y 009 – expediente digitalizado.
[3] Wilmer Santana González y Emelina Ardila González
[4] Carpeta 01 – archivo 010 y 012 – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del asunto mediante auto de sustanciación No. 0007 del 9 de enero de 2024 y dispuso reingresar las diligencias al despacho con el fin de dar trámite a la solicitud de acumulación jurídica de penas y reconocimiento de redención de pena radicada el 20 de diciembre de 2023.

A través del auto interlocutorio No. 0003 del 9 de enero de 2024, reconoció al interno redención de pena de 4 meses y 23.5 días, resolvió **acumular jurídicamente las penas impuestas dentro del proceso con CUI 25430600660202200321 (NI 2024-0003)** acumulado a la pena impuesta en la sentencia dentro del proceso con **CUI 254306000000202200010 (NI 2024-0002)** al interno por los delitos de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, asignando la pena principal de **CINCUENTA Y DOS (52) MESES DE PRISIÓN** y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública por el mismo término de la pena principal acumulada, fijó como pena de multa el equivalente a TRES (3) SMLMV, en cuanto a los mecanismos sustitutivos y del subrogado, éstos no se modifican, y con los procesos que dieron lugar a la acumulación jurídica de penas se formó uno solo prevaleciendo el radicado **CUI 254306000000202200010 (NI 2024-0002)**, por ser el del proceso con la pena más alta al que se acumuló la condena menor.

A través de auto interlocutorio No. 0089 del 8 de marzo de 2024, reconoció redención de pena al infractor de 25 días y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – art. 38G del C.P. -, invocada y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada - Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049-, como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordenó al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado y el informe de valoración de asistencia social del 14 de marzo de 2024.

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[5] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

[5] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[6]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que

[6] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el **22 de noviembre de 2021 y 30 de marzo de 2022**, el sentenciado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA – ART. 38G DEL C.P.

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049, quien emite la constancia por el cual indica que recibirá en el referenciado domicilio al condenado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** y se hará cargo económicamente, social y jurídicamente y quien estará atento a los llamados de las diferentes entidades que hayan durante su proceso.

Adjunta: Resolución No. 000005 del 27 de febrero de 2024 emitida por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca por la cual expiden el concepto favorable al interno, acta de compromiso suscrita por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, entrevista realizada por las directivas de la Cárcel Municipal de Funza Cundinamarca al señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, certificado de Residencia emitido por la JAC Urbanización Pradera I, por el cual certifican al propietario del inmueble señor Roque González Ardila, constancias suscritas por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez y Edison David Salazar Zea.

4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.3.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [7].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*
>
> ***PARÁGRAFO****. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

[7] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> *"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.* ***No se concederán****; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión;* ***ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo****, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*
>
> *<INCISO 2> Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. …"*

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** como **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[8]

4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

> ***"****(…)* ***Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*
>
> *Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

[8] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> *"(…)* ***Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor****:* ***Artículo 38G.*** *La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(…)"*

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

> ***Artículo 38G****, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.*
>
> ***Parágrafo****. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

> ***"(…) Artículo 23.*** *Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:* ***Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.*** *Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
>
> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)****" (Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena impuesta acumulada al condenado, esto es, **52 meses de prisión,** según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **26 meses.**

CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 31 de mayo de 2022** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **21 meses y 28 días.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 18.5 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0003 del 9 de enero de 2024, reconoce 4 meses y 23.5 días
- auto interlocutorio No. 0089 del 8 de marzo de 2024, reconoce 25 días

En efecto, el interno **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** acumula un total de **VEINTISIETE (27) MESES Y DIECISEIS PUNTO CINCO (16.5) DÍAS** de la pena principal impuesta, por lo tanto, **cumple con el factor objetivo.**

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que el infractor en el escrito de solicitud manifiesta que el inmueble para continuar con el cumplimiento de la pena se localiza en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca en donde reside el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez, primo del condenado, identificado con C.C. No. 1.069.078.030 Celular 3016564049**

Para certificar el arraigo familiar y social, adjunta constancia suscrita por el señor Juan de Jesús Jiménez Ramírez quien indica que recibirá en el referenciado domicilio al condenado y se hará cargo económicamente, social y jurídicamente y quien estará atento a los llamados de las diferentes entidades que haya durante su proceso.

Ahora bien, al tenerse en cuenta el estudio del arraigo realizado por el Asistente Social de este Juzgado, mediante el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 14 de marzo de 2024, se observa lo siguiente:

"(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Para adelantar la visita domiciliaria a la residencia a la cual los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, se trasladarían para continuar purgando pena, eventualmente, en prisión domiciliaria, en la ***Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I, Mosquera (Cundinamarca)****, fueron realizadas entrevistas al abonado de celular 3016564049, tratándose del número celular del compañero permanente de una sobrina de CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA, también prima del condenado WILMER SANTANA.*

Durante los días 12, 13 y 14 de marzo del año en curso, fueron realizadas entrevistas telefónicas con duración de más de una hora y treinta minutos de duración.

Atendió la entrevista JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.078.030, compañero permanente de KAREN ANDREA GONZÁLEZ OSPINA, sobrina de CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ y prima de WILMER SANTANA GONZÁLEZ, parenteralmente hablando.

El señor entrevistado tiene 38 años y convive hace 6 años con KAREN ANDREA GONZÁLEZ OSPINA, siendo ambos padres de dos hijos menores de edad con cuatro y un año, JESUS SANTIAGO y SAMUEL CAMILO, respectivamente.

JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ labora recientemente como despachador de SERVIENTREGAS S.A., desde enero del presente año; anterior a ello estuvo trabajando por alrededor de ocho años en ALVICA, ensambladora de aluminios.

Por su parte, KAREN ANDREA GONZÁLEZ OSPINA, es auxiliar de producción en Cruz Verde en Cota (Cundinamarca), hace alrededor de 3 años.

Los menores JESUS SANTIAGO y SAMUEL CAMILO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, están vinculados al sistema escolar, el mayor en el Jardín Municipal El Paraíso (municipal) y el menor en el Jardín Privado Pequeñines.

Adicionalmente, en el domicilio de acogida, ubicado en la ***Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I, Mosquera (Cundinamarca)****, residen otras personas, así:*

1. *ROQUE GONZÁLEZ (64), pensionado y quien labora tiempo parcial en oficios de construcción, siendo el padre de KAREN ANDREA, hermano del condenado señor CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ y tío de WILMER SANTANA GONZÁLEZ.*
2. *LUZ HELENA GONZÁLEZ OSPINA (26). Madre soltara, ocupación secretaria en Teleperformance.*
3. *JUAN JOSÉ GONZÁLEZ OSPINA (11). Hijo de LUZ HELENA, cursa sexto grado en el Colegio Público Armonía (Mosquera).*

Respecto a la señora madre de KAREN y LUZ HELENA GONZÁLEZ OSPINA, la señora LUZ DELIA OSPINA, se conoció que falleció hace +-6 años cuando fue arrojada de un autobús en medio de un atraco y presentó complicaciones que la llevaron a la muerte días después.

De otro lado, muy recientemente, en diciembre de 2023, murió el joven JUAN DAVID GONZÁLEZ OSPINA (18), quien presentaba trastorno neurológico con convulsiones y migraña. El joven tuvo infarto posterior a una crisis convulsiva.

Se trata de una familia extensiva donde concurren varios familiares, residiendo de manera colaborativa el padre y dos hijas con sus respectivos núcleos familiares.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

La familia de acogida de los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, cuenta con lazos consanguíneos y afectivos con dichas personas, habiendo residido durante toda su vida en el municipio de Mosquera.

Frente a los hechos delictivos que motivaron la privación de la libertad hoy sufrida CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, la familia manifiesta que se están totalmente en desacuerdo con dicho comportamiento y no lo justifican.

JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ manifestó que la familia y vecinos venían temiendo lo peor en torno a las actividades ilícitas que se rumoraba eran realizadas por aquellos desde su domicilio e inclusive en una oportunidad KAREN ANDREA había dialogado con su tía EMELINA GONZÁLEZ, cuestionando tales conductas y advirtiendo las graves consecuencias que traería.

Con todo, al parecer los condenados estuvieron involucrados en tales actividades por alrededor de dos años.

El señor entrevistado, aseveró que la familia de acogida, además de reprochar tales actos, está dispuesta a recibir a los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, que cuentan con ingresos suficientes para vivir de manera digna y se comprometen con el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la prisión domiciliaria.

Fue reiterado que se trata de una familia humilde y trabajadora, que nunca habían tenido problemas legales, que cuentan con nexos no solamente familiares, sino afectivos y con relaciones positivas cercanas durante toda la vida.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda en la cual el señor condenado pretende continuar purgando pena, eventualmente, en caso les sea concedida la Prisión Domiciliaria, está ubicada en la ***Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I, Mosquera (Cundinamarca),*** *residencia perteneciente al estrato TRES.*

Se trata de una vivienda de tres pisos, propiedad del señor ROQUE GONZÁLEZ, propiedad familiar hace más de 25 años. Adquirida a través de crédito hipotecario, vivienda de interés social, crédito que ya fue saldado, pero aun no se realiza la legalización de escrituras por falta de recursos e incidentes familiares recientes como la muerte del joven JUAN DAVID GONZÁLEZ.

La casa cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, internet y tv cable, agua y alcantarillado.

El domicilio dispone de cuatro habitaciones, en uno de ello, en el segundo piso, instalarían a CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ. Además, la casa tiene patio de ropas, sala-comedor, cocina y baño

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como adecuada, el lugar cuenta con condiciones internas y externas aceptables. La construcción tiene alrededor de 15 años, en material terminado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de riesgo bajo, puesto que se trata de un sector urbano periférico en Mosquera, aledaño al municipio de Funza (Cundinamarca).

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, recibirán el apoyo económico de su familia extensiva.

La familia aseguró contar con un ingreso promedio mensual de seis SMMLV, que alcanza a partir de los salarios devengados por el señor entrevista, JUAN DE JESÚS JIMÉNEZ, su compañera permanente KAREN ANDREA GONZÁLEZ, el señor ROQUE GONZALEZ y la señora LUZ HELENA GONZÁLEZ.

Los gastos de la economía de la familia de acogida incluyen servicios públicos (+-400 mil mensuales, 800 mil en alimentación, 300 mil otros gastos.

La familia manifiesta que cuenta con los medios necesarios para recibir y apoyar a CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, en caso leS sea concedida la prisión domiciliaria.

CONCEPTO

Los señores condenados CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ARDILA Y WILMER SANTANA GONZÁLEZ, tío y sobrino, cuentan con un grupo familiar conformado por familia extensiva, constituido por un hermano de CARLOS ALBERTO Y EMELINA GONZÁLEZ, aquí condenados, familia donde también concurren dos sobrinas y sus respectivos núcleos familiares.

Las condiciones de habitabilidad observadas son adecuadas y positivas. La familia cuenta con una casa de propiedad familiar, donde moran hace más de 25 años, habiendo residido en Mosquera durante toda su vida, contando con relaciones vecinales cercanas.

Aspectos de seguridad del lugar de habitación fueron calificadas como de riesgo bajo, puesto que se trata de un sector urbano marginal periférico en el municipio de Mosquera, aledaño a Funza.

Los condenados cuentan con apoyo económico y solidaridad de toda su familia, personas quienes manifestaron estar dispuestas a recibirlo y garantizar su bienestar.

Respecto al delito cometido, existe reproche frente a dichos actos, los cuales no justifican en modo alguno, manifestando que sus familiares se encuentran totalmente arrepentidos, cursaron un proceso de resocialización exitoso y se han encaminado en proyectos de vida y laborales al margen de la ley.

La familia de acogida de los señores condenados ha sostenido un vínculo afectivo y solidario estrecho, no únicamente ahora, cuando se encuentran privados de la libertad, sino durante toda su vida. Se trata de una familia oriunda y residente en el municipio de Mosquera, contando con fuertes nexos sociales y comunitarios (…)".

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercen un control material del cumplimiento de la condena,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

> ***ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:*
>
> *1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.*
> *2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.*
> *3. Testimonio de vecinos y allegados.*
> *4. Labores de inteligencia.*
>
> *Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.*
>
> *En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.*

4.5.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO – TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

"ARTÍCULO 38G. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2o del artículo 376 del presente código."

4.5.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada, no aparece que haya sido condenado en perjuicios o se iniciara el incidente de reparación integral, por lo que cumple con este requisito.

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conlleva. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluido proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049, a favor de CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**

5.1. Sobre la Competencia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Debido a que el condenado va a seguir purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en Mosquera Cundinamarca, por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el auto **PROCEDA** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[9], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

---

[9] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[10]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[11]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

[10] CSJ T **102248**
[11] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **27 MESES y 16.5 DÍAS.**

SEGUNDO. - CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** identificado con C.C. No. 80.409.485, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

TERCERO. - COMISIONAR al Director de la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA** quien se encuentra recluido en dicho penal.

CUARTO. - Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049, a favor de CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**

QUINTO. - DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **Calle 12 A No. 15 C – 16 barrio Pradera I en Mosquera Cundinamarca. Celular 3016564049, a favor de CARLOS ALBERTO GONZALEZ ARDILA**, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEXTO. – Una vez ejecutoriado el presente auto, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

SEPTIMO. - Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL MUNCIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, para que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON MOGUERA PINILLOS
JUEZ

l.e.s.r.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 19 de 2024: Al despacho el proceso contra **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** identificado con C.C. No. 80.072.371, informando que se recibe el 27 de febrero de 2024 a través del correo institucional procedente de la Oficina Jurídica CPMMSF Facatativá – PONAL, la documentación para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena del infractor. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo diecinueve (19) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0138

CUI:	**11001600000201800279**
Interno:	**2021-0248**
Sentenciado:	**DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA**
Identificación:	**80.072.371**
Reclusión:	**CPMMSFFA PONAL FACATATIVA**
Delito:	**CONCIERTO PARA DELINQUIR EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON SECUESTRO SIMPLE, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y COHECHO PROPIO**
Decisión:	**CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL RECONOCE REDENCION DE PENA TRABAJO**

1.- OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Ingresan al despacho las presentes diligencias, para resolver sobre la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena a favor del condenado **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** identificado con C.C. No. 80.072.371, quien se encuentra en privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos **el 7 de julio de 2016** y allanamiento a cargos, el Juzgado 7º Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 21 de noviembre de 2018, condenó a **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** a la pena principal de **CIENTO SESENTA Y DOS (162) MESES DE PRISION Y MULTA DE 489 SMLMV**, como coautor de los delitos de **CONCIERTO PARA DELINQUIR EN CONCURSO HETEROGENEO CON SECUESTRO SIMPLE, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y COHECHO PROPIO** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por periodo igual al de la pena principal. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria.

El Juzgado 7º Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., por auto del 12 de diciembre de 2018, informa que: *"acorde con el informe que antecede y revisada la actuación, y habiéndose dispuesto el pasado 3 de los cursantes mes y año por éste recinto judicial la DECLARATORIA DE DESIERTO DEL RECURSO DE APELACIÓN sin que el CONDENADO por su DEFENSOR hubieren presentado recurso de reposición al cuanto en comento".*

El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 12 de diciembre de 2018.

Es de anotar, que en el informe secretarial de fecha marzo 08 de 2018, emitido por secretaría del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, se indicó:

*"(…) NUEVO RADICADO **110016000000201800279** comunicado por la Fiscalía para las actuaciones seguidas en contra de **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** en calidad de presunto autor del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR en concurso heterogéneo, en calidad de presunto coautor del delito de HURTO CALIFICADO AGRAVADO, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo y en calidad de presunto coautor del delito de SECUESTRO SIMPLE ATENUADO en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo y en calidad de presento autor del delito de COHECHO PROPIO con aceptación de cargos (…)".*

Y en el informe secretarial de fecha 7 de septiembre de 2018, la secretaría del Centro de Servicios Judiciales del SPA de Bogotá, indicó:

*"(…) En vista que el procesado **SOTELO PEDRAZA** ya se encontraba vinculado dentro del CUI Derivado **11001 60 00 00 0 2018 00279** con escrito de acusación con allanamiento a cargos y con reparto aleatorio del Juzgado 7 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, esta oficina envió oficio AS-O-283 datado 13 de julio de la presenta anualidad al Fiscal 24 de Gaula, con el fin de que aclarara dicha situación que genera confusión al realizar el reparto del escrito de acusación recibido el 7 de junio de 2018, máxime si se presentaba la figura del NON BIS IN IDEM con respecto a **SOTELO PEDRAZA** sin que a la fecha haya respuesta por parte del ente investigador.*

*Consultado Justicia XXI bajo el radicado **11001 60 00 00 0 2018 00279** el 10 de julio de 2018 el fiscal 113 Seccional delegado ante el Gaula, radicó escrito de acusación con allanamiento a cargos en contra de **DIEGO CAMILO SOTELO PERAZA** el cual por reparto aleatorio le correspondió al Juzgado 7 Penal del Circuito con Función de Conocimiento (…)".*

El homólogo 12 de Bogotá D.C., mediante auto del 11 de junio de 2019 avocó conocimiento del proceso, por auto del 2 de junio de 2020 reconoció al infractor redención de pena de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

meses y 26.5 días, por auto del 8 de febrero de 2021 reconoce 3 meses y 1.5 días y por decisión del 21 de julio de 2021 reconoció 2 meses y 1 día.

A través de auto del 10 de septiembre de 2021, dispuso remitir el expediente a estas dependencias como quiera que el sentenciado fue trasladado a las instalaciones de la CPMMSF Facatativá – PONAL.

DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA descuenta pena dentro del presente asunto desde el **6 de febrero de 2018**[1]

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso el 25 de noviembre de 2021 y por auto interlocutorio No. 0600 del 9 de noviembre de 2022 reconoce 4 meses y 24.93 días.

A través de auto interlocutorio No. 0615 del 15 de diciembre de 2022, decretó la corrección de actos irregulares conforme a lo estipulado en el artículo 15 inciso 2º de la Ley 600 de 2000, del auto interlocutorio No. 0600 del 9 de noviembre de 2022 por el cual se reconoció redención de pena por trabajo y se abstuvo de reconocer redención al infractor, quedando anotado la parte motiva y resolutiva: ABSTENERSE de emitir pronunciamiento con respecto al certificado No. 18626835 comprendiendo el periodo entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 (204 horas – trabajo), siendo correcto: "ABSTENERSE de emitir pronunciamiento con respecto al certificado No. 18626835 comprendiendo el periodo entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022 (204 horas – trabajo)".

También en el auto interlocutorio No. 0615 del 15 de diciembre de 2022, se reconoció redención de pena de 12.75 días.

Esta agencia judicial mediante auto interlocutorio No. 0281 del 2 de junio de 2023 reconoció redención de pena de 1 mes y por auto interlocutorio No. 0349 del 19 de julio de 2023, reconoció redención de 3 meses y 22.37 días.

Por auto interlocutorio No. 0537 del 30 de noviembre de 2023, este despacho no reconoció redención de pena al interno respecto al certificado TEE No. 18205906 que comprende del 1 de abril al 30 de junio de 2021 (480 horas – trabajo), y del certificado TEE No. 18276225 del 1 de julio al 20 de agosto de 2021 (272 horas – trabajo), se abstuvo de reconocer redención de pena, por lo que solicitó ante el señor director, asesor jurídico y a la oficina de Atención y Tratamiento del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá D.C. – La Picota – que remita de manera INMEDIATA los certificados de calificación de conducta correspondientes del certificado TEE No. 18276225 del 01/07/2021 hasta el 20/08/2021 (272 horas – trabajo), para el reconocimiento del tiempo redimido por el condenado.

A través del auto interlocutorio No. 0058 del 23 de febrero de 2024, esta agencia judicial reconoció al condenado redención de pena de 2 meses y 14.43 días y reconoció por pena física más las redenciones 96 meses y 1.48 días.

En esta oportunidad ingresa al despacho con documentación procedente de la CPMMSFFA PONAL, para el estudio de la libertad condicional y reconocimiento de redención de pena.

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528,

[1] Folio 1 – archivo 07 – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria*

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia[3]*.*

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar el penado privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007[4].

Conforme a los hechos ocurridos desde el **7 de julio de 2016**, el sentenciado fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 890 de 2004, 1142 de 2006, 1121 de 2006[5]) y 906 de 2004.

4.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

> *"(…)* ***ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN****. <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)"*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

---

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

[4] *12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y* ***Guaduas*** *(a este último municipio le crearon circuito penitenciario)*[4]*.*

[5] Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

> *"(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)"*

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993 (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

> ***"(…) ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.*** *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*
>
> *A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.*
>
> *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)"*

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, el certificado de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta
19135391	Del 1 de enero al 25 de febrero de 2024	CPMMSF FACATATIVA Regional Central	344	Sobresaliente	Ejemplar y Excelente
TOTAL			**344**		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **344** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **VEINTIUNO PUNTO CINCO (21.5) DÍAS**, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

4.3. SOBRE LOS SUBROGADOS

Se tiene que los subrogados penales son medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto, que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas penas una vez hayan cumplido los requisitos propios establecidos dentro de la ley.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

De acuerdo con lo anterior tenemos que la suspensión condicional de la ejecución de la pena (art 63 del C.P.) y la libertad condicional (art 64 ibídem) son un derecho para el condenado siempre y cuando **"***se verifiquen los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador ha establecido. Si aquellos no se cumplen, es evidente que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no puede conceder tales beneficios, pues su competencia está limitada por lo dispuesto en la ley.*[6]

4.4. DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Con relación al beneficio de Libertad Condicional, expresa el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, que para su concesión deben cumplirse la totalidad de los requisitos a saber:

> *"**ARTÍCULO 64. Libertad condicional**. El juez, PREVIA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:*
>
> 1. *Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
> 2. *Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.*
> 3. *Que demuestre arraigo familiar y social.*
>
> *Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.*
>
> *En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.*
>
> *El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario"*[7] (Subrayado y negrilla fuera de texto).

La norma en cita está directamente ligada y supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

> ***Art. 471.-** "El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.*
>
> *Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional."* (Subrayado fuera del texto original) [8]

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"Parágrafo 1°.** En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro*

---

[6] Corte Constitucional Sentencia C-679/98

[7] Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014

[8] Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa"*
> (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** delimitó su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma**,** sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP),** NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario, a pesar que lo delitos se encuentran como excluidos en la mencionada norma, no los tendrá en cuenta – **CONCIERTO PARA DELINQUIR EN CONCURSO HETEROGENEO CON SECUESTRO SIMPLE, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y COHECHO PROPIO** -, para el subrogado a estudiar.

Ahora bien, de acuerdo a los hechos (**7 de julio de 2016**) el infractor **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA**, fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 890 de 2004, 1142 de 2006, 1121 de 2006[9]) y 906 de 2004.

Al efecto, en el presente caso se tiene que, como se anotó en líneas anteriores, los hechos motivo de la presente condena fueron para el año 2016, época ésta en la que estaba vigente, con respecto al artículo 64, la Ley 599 de 2000, y aunque había sido reformado con la Ley 733 de 2002 (art 11) el mismo fue tácitamente derogado al entrar en vigencia la Ley 890 de 2004, modificada por la ley 1121 de 2006, luego por la 1453 de 2011 y 1709 de 2014.

En aquella época el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 exigía tres requisitos que son el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena impuesta, su buena conducta en el Establecimiento Penitenciario, y señala que no podrá negarse por las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta en la dosificación de la pena.

Luego fue modificada por la **Ley 890 de 2004**, - que empezó a regir a partir del 1º de enero de 2005 – en la que hay que evaluar, como primera medida la gravedad de la conducta, ampliando el requisito a las 2/3 partes, el buen comportamiento y supeditada al pago de la multa y la reparación a la víctima. Así mismo con la modificación de la Ley 1453 de 2011 conservó los mismos requisitos, pero modificando el pago de la multa y los perjuicios mediante garantía personal, prendaria, bancaria o acuerdo de pago y relacionando la exclusión de ciertos delitos.

Por último, con la Ley 1709 de 2014 conservó la evaluación de la conducta, disminuyó nuevamente al cumplimiento de las 3/5 partes, señaló el comportamiento en el Centro penitenciario, adicionó la demostración del arraigo familiar y social y que debe estar supeditada a la reparación de la víctima o al aseguramiento de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago.

[9] Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Ahora, en cuanto a las leyes que han prohibido mecanismos sustitutivos o beneficios administrativos excluyendo algunos delitos, encontramos la 733 de 2002 - expedida el 31 de enero de ese mismo año – que en su artículo 11 excluía de beneficios y subrogados a quienes hubiesen cometido delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo**,** extorsión, y conexos, y no les procedía las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habría lugar a ningún otro **beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo**, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta fuese efectiva, delitos éstos – secuestro extorsivo - que están contemplados dentro de la sentencia proferida.

De otra parte el legislador al darse cuenta que no se estaba aplicando lo consagrada en la Ley 733 de 2002 sintió la necesidad de impedir que en adelante las personas condenadas por los delitos allí relacionados, entre ellos el secuestro extorsivo, "*pudieran ser favorecidas con cualquier tipo de descuento, rebaja o subrogado penal, dada la gravedad de las conductas punibles e independientemente del sistema procesal en el que fuera aplicada promulgando al efecto el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, vigente a partir del 29 de diciembre del mismo año".*

Posteriormente, el artículo 26 de la ley 1121 de 2006 modificó la norma arriba citada, quedando así:

> ***"ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS.*** *<Ver en Jurisprudencia Vigencia destacado de la C-073-10> Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos,* ***no procederán*** *las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se* ***concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional.*** *Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz****" (Resalta fuera e texto)***

Ley que a la fecha sigue vigente y cuyos tipos penales se encuentran excluidos entre ellos el secuestro extorsivo.

Lo anterior significa que de los delitos allí descritos son los que se les debe excluir cualquier solicitud que implique la aprobación de algún beneficio administrativo (art 146 Ley 65 de 1993) o mecanismos sustitutivos (Ley 599 de 2000), entre otros.

4.5. Valoración de la Conducta

Dentro de unos hechos constitutivos que infrinjan los derechos de la comunidad, el Estado representado por el ente investigador, en su etapa previa y por los jueces en su juzgamiento, nos llevan a una punibilidad dentro de un proceso penal que finaliza con una absolución o condena de un individuo. Si es ésta última, se impone o suspende una pena privativa de la libertad.

En este ciclo privativo el condenado puede hacer uso de subrogados o mecanismos sustitutivos, como la libertad condicional contemplado en el artículo 64 del C.P. Ésta configura la oportunidad de que la persona que está condenada y se encuentra privada de la libertad - intramural o domiciliariamente - puede cesar dicho estado impuesto en sentencia condenatoria. Para su concesión, el juez, a quien le corresponde por competencia, estudiará los requisitos que exige la norma entre los que se encuentra

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

previamente, la valoración de la conducta, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2014.

Esta valoración inicio en la adición concebida por el legislador como "gravedad de la conducta" en la Ley 890 de 2004 y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad en la sentencia C-194 de 2005, en el que señaló que el juez de Ejecución no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de la evaluación de la procedencia del subrogado penal. Allí dejó claro que el juez no quedaba autorizado para valorar dicha *"gravedad"* ya que lo que la norma señalaba era que se debería tener en cuenta de parte del funcionario era *"la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal".*

Con la modificación incorporada por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 el legislador condicionó la concesión del beneficio de libertad condicional a la ***"previa valoración de la conducta punible"*** suprimiendo la palabra *"gravedad"* de la disposición anterior, de lo que se ha derivado una diversidad de interpretaciones por parte de los jueces vigilantes, sin embargo, este Despacho se sostiene en el criterio aplicado con antelación en el sentido de hacer tal valoración siempre y cuando sobre el punto se haya pronunciado el juez fallador.

Lo anterior con base en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia **C-757 de 2014** en donde determina una vez más que en las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas para decidir sobre el beneficio de libertad condicional deben tenerse en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez fallador en la sentencia, ya fueran favorables o desfavorables.

Ello significa que el Juez de Ejecución de Penas podrá valorar la conducta de conformidad con el artículo 64 del Código Penal, en la medida en que sobre tal aspecto se haya pronunciado el juzgado fallador o en su defecto la segunda instancia. Del mismo modo indica lo anterior que la redacción del mencionado artículo 64 del C.P., *"no establece qué elementos de conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni establece los parámetros a seguir para asumir las valoraciones que de ella hicieron previamente los jueces penales"*[10]

En efecto, el juez ejecutor se somete a las consideraciones expuestas por el juez que resolvió la situación jurídica del procesado a través de su fallo condenatorio.

Así lo manifestó la H. Corte Suprema de Justicia:

"Respecto a la valoración de la conducta punible, la Corte Constitucional, en sentencia CC C-757-2014, teniendo como referencia la Sentencia CC C-194-2005, determinó, en primer lugar, cuál es la función del juez de ejecución de penas y, de acuerdo a ésta, cuál es la valoración de la conducta punible que debía realizar.

«[E]l juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. […]

[10] CSJ T 107644 (19-11-19)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

[L]os jueces de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario, el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal»[11].

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y analizando los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional se tiene que cuando se va a analizar la conducta por parte de los Jueces de Ejecución de Penas, en cualquiera de sus dos interpretaciones, la de la Ley 890 de 2004 "gravedad" y en la modificación de la Ley 1709 de 2014 "conducta", declaradas exequibles en las sentencias arriba relacionadas, C-195-04 y C-757-14, la conclusión dada por el máximo Tribunal Constitucional fue la siguiente:

> *"En los mismos términos,* ***cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal****"*[12]:
> (Resaltado fuera del texto original)

Efectivamente conforme a lo expuesto y dado el análisis e interpretación dada sobre dicho pronunciamiento, no se puede someter nuevamente al condenado con el estudio hecho por el juez fallador en el momento en que dosificó las conductas penales, esto es ni por la censura ni con la "misma óptica en que se produjo la condena". Tampoco puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de dicha evaluación, pero no queda autorizado para valorar la gravedad de la conducta, lo que se debe tener en cuenta por parte del funcionario es la gravedad del comportamiento punible, *calificado y valorado previamente en la sentencia por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal*.

Ello significa que el juez vigilante debe someterse no a la valoración que hizo el de conocimiento en el momento de la dosificación de la pena, que es su motivación para "dosificar" la conducta, o conductas endilgadas al imputado, sino al pronunciamiento en los mecanismos sustitutivos de la pena cuando se pasa a la audiencia del artículo 447 del C.P.P.

Y debe de ser así porque si el funcionario que vigila la pena se sometiera a lo consignado por el juez de conocimiento al momento en que dosifica las conductas, estaríamos frente a una eventual negativa de las solicitudes de los mecanismos sustitutivos solicitados, sobre todo el de la libertad condicional.

Se entiende que en el instante de evaluar la posible libertad del implicado debe hacerse desde la óptica de lo expuesto por el fallador al momento en que se pronuncia, que es obligatorio, en la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria (art 63 y 38 C.P.), audiencia esta indispensable para que se logre a través de los condenados acceder a cualquiera de estos postulados y si el fallador ve que de acuerdo a la situación fáctica se tenga que pronunciar sobre la "gravedad" de conducta, así lo hará, momento éste en que el juez de Ejecución de basa para estudiar la posibilidad de conceder o negar el mecanismo sustitutivo solicitado.

Como se señaló, han existido varias interpretaciones al respecto no solo de parte de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia que enmarcan un criterio y lineamiento para analizar, estudiar y decidir sobre este tópico.

---

[11] CSJ T-119389 (30-09-21)
[12] Corte Constitucional, sentencia C-194 de 2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En una decisión del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria[13], se analizó la gravedad de la conducta y la conducta punible basado en el pronunciamiento que se hizo por parte del fallador en el momento procesal de cuantificación de las penas, en el que se hizo un reproche sobre la conducta del implicado, no ocurriendo lo mismo en el momento en que se pronunció ante los mecanismos sustitutivos de la pena.

> *"…: **VIII. DE LAS PENAS:***
>
> *VIII.4. Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada superó de modo importante su tope básico, necesaria para configurar el delito, en tanto significó cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos al margen de la ley, con menoscabo de los valores que nutren un Estado democrático; el daño fue significativo, porque se fundió en unas mismas personas las condiciones de agentes de grupos ilegales y del Estado; la seguridad pública sufrió grave deterioro amén su legitimidad; la intensidad del dolo se verificó mayor, dado que inició con la coalición político-paramilitar que condujo a sus elecciones en el Congreso de la República y se extendió durante el ejercicio alternado del cargo cada uno por un año; aunada la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución.*
>
> *VIII.5. Se tiene en cuenta que aunque la concertación con pretensiones políticas del señor (…), con un grupo armado al margen de la ley tuvo las connotaciones antes referenciadas, que motivan el incremento de las penas, no se tiene conocimiento de que desde la función legislativa en su corto tiempo de ejercicio él haya propiciado acciones concretas que redundaran selectivamente en beneficio de esos colectivos criminales, lo que de algún modo informa un retraimiento en el componente lesivo del delito, tanto que el testimonio del propio (…) por momentos asumió el carácter de reclamo, lo que en perspectiva, aunada la carencia de antecedentes penales, desaconseja penas superiores a las determinadas; por eso no se le impone el máximo permitido en la ley.*
>
> ***IX. DE LA LIBERTAD:***
>
> *No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria, por impedirlo un requisito objetivo; en el primer caso porque la ley sólo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y, en el segundo, porque sólo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de la condena sea de 5 años o menos, acorde con lo establecido en los artículos 63-1 y 38 del Código Penal, presupuesto que no se satisface…" [14]*

Posterior, en los fallos de la Corte Constitucional C-233-16, T-640-17 y C-265-17 determinó que se debe tener en cuenta, para los jueces de ejecución de penas, que la finalidad constitucional de la pena no está en el castigo del condenado sino en su resocialización como la garantía que nos brinda el artículo 5° de la Ley 65 de 1993, - dignidad humana -[15]. Esto nos lleva a velar por la reinserción social apoyada por la educación que se les brinde en los Centros Carcelarios a los penados en forma intramural o domiciliaria con el fin de humanizar la pena como lo señala el artículo 1° de la C.N[16].

---

[13] C.S.J Rad 44195 (03-09-14)
[14] Rad 44195 y 33713
[15] **ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.** <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.
Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
[16] **ARTICULO 1o.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Del mismo modo la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que el Juez de Ejecución de Penas debe tener en cuenta la participación del condenado en las diferentes actividades de readaptación y/o resocialización dentro de los Centros Carcelarios y buscar la reinserción del que ha cometido un error y lo está subsanando.

En reciente exposición, en sede de tutela de parte del mismo órgano de cierre, hace un recuento sobre la *"amplitud de posibilidades hermenéuticas con respecto a la valoración de la conducta punible"* y el guiarse por los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad *"como bien lo es el principio pro homine – también denominado cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos"*, centrándola en lo más favorable al hombre y sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

En dicha providencia advierte que[17]:

> ***"…i)*** *No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.*
>
> *En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;*
>
> ***ii)*** *La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;*
>
> ***iii)*** *Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.*
>
> *Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.*
>
> *Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.*
>
> ***iv)*** *El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado…"*

Éste precedente ha sido reiterado en sentencias con radicados 111560 (28-07-20), 113578 (01-12-20); 115313 (23-03-21); 119257 (28-09-21) y 119389 (30-09-21) y en la providencia con radicado 59888 (15-09-21) y 61616 (27-07-22).

Así lo señaló en el Rad 119389:

[17] C.S.J Rad T-107644 (19-11-19) M.P. Patricia Salazar Cuéllar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *"Tal postura fue ratificada recientemente en proveído CSJ AP4142-2021, 15 sep. 2021, rad. 59888, en los siguientes términos:*
>
> *[…] Tal como lo ha indicado esta Corporación[18], **la concesión de la libertad condicional depende del cumplimiento de todos los requisitos enlistados en el precepto transcrito, pues en su examen, el juez no puede prescindir de ninguna de las condiciones fijadas por el legislador, incluida, la valoración de la conducta, cuyo análisis es preliminar.***
>
> *(…)*
>
> *En línea con dicha interpretación, esta Corporación ha sostenido que:*
>
> *«La mencionada expresión –valoración de la conducta- prevista en el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, va más allá del análisis de la gravedad, extendiéndose a aspectos relacionados con la misma, sin que el juez ejecutor de la pena tenga facultad para soslayar su evaluación, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 del 15 de octubre de 2014»[19].*
> *[…]*
> *Así, es claro que para la concesión de la libertad condicional, resulta imperioso que el juez valore la conducta por la cual se emitió la condena, no obstante, se insiste, **tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad y los antecedentes de orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social**, por lo que en la apreciación de estos factores debe conjugarse el «impacto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes»[20]."[21]*

Ahora complementando lo anterior, en recientes pronunciamientos sobre este punto la H. Corte Suprema de Justicia concretó lo siguiente:

"6.6.2.3 Por último, obligado resulta traer a colación el auto de segunda instancia CSJ AP2977–2022, 12 jul. 2022, rad. 61471, no solo por su cercano proferimiento, sino por identificarse con la temática bajo examen, razón por la cual su trascendente alcance irradia al asunto que concita la presente decisión. En el mencionado proveído, así se discurrió:

> *[e]l análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el*
> *ordenamiento penal, dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991; y al mismo tiempo desvirtuaría toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.*
>
> *La anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C–757 de 2014 (declaró exequible la expresión: «previa valoración de la conducta» del artículo 64 del Códig[o P]enal), en el sentido que al analizar la procedencia de la libertad condicional el [j]uez de [e]jecución de [p]enas deberá:*
>
> > *«establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.»*

[18] CSJ AP8301-2016, Rad. 49278, CSJ AP5297-2019, entre otros
[19] CSJ AP3558-2015, Rad. 46119
[20] CSJ AHP5065-2021
[21] C.S.J. T-119389

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *Es así como el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado, pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad, que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor tal como lo estipulan los artículos 6° numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10° numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del [b]loque de [c]onstitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Nacional).*
>
> *30.3 Corolario de ello, un juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad, debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno, sobre aspectos como la escueta gravedad de la conducta (analizada en forma individual); pues si así no fuera, la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva, que en nada contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulan la dignidad del ser humano. (…)*
>
> *30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca, no solamente los aspectos draconianos de las sanciones penales; entre ellos, que el conglomerado se comporte normativamente (prevención general); y que, tras recibir la retribución justa, el condenado no vuelva a delinquir (prevención especial); aunado a tales aspectos, las penas, en especial las restrictivas de la libertad, también se deben encaminar a que el condenado se prepare para la reinserción social, fin este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario y el comportamiento del condenado durante este, sea valorado, analizado, estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.*
>
> *Lo anterior, justamente con el fin de incentivar en el infractor, esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción, asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario, así como para brindar herramientas útiles al penado que le permitan prepararse para retornar a la vida en sociedad cuando recobre la libertad.*
>
> *30.5 Entenderlo de otra manera, sería tanto como establecer una prohibición generalizada que no ha sido prevista por el legislador para todos aquellos eventos en los que la conducta se evidencie objetivamente grave. (…)*
>
> *30.6 En ese orden de ideas, entender que la gravedad objetiva de la conducta es sinónimo de negación de la libertad condicional, equivaldría a extender los efectos de una prohibición normativa específica, sobre todos los casos que se estimen de notoria gravedad, sin haber sido así previsto en la ley; y tal expansión no es compatible con los derechos fundamentales de los condenados; pues los dejaría sin la expectativa de que su arrepentimiento e interés de cambio sean factores a valorar durante el tratamiento penitenciario, erradicando los incentivos y con ello, el interés en la resocialización, pues lo único que quedaría, es el cumplimiento total de la pena al interior de un establecimiento carcelario* [negrilla original del texto].

6.6.2.4 A las anteriores consideraciones, que en su integridad se ratifican, sólo es dable agregar lo siguiente:

Toda conducta punible es considerada un acto grave contra la sociedad, al punto que el legislador reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas, ella afecta los valores que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas, además del daño privado, el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal, necesarias para la convivencia pacífica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

La condición de grave o leve de una infracción delictiva da lugar a intensos e inacabados debates. Nadie ha de negar que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza –o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva–, implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social, verbigracia, los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida, la integridad personal, la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos, lo que de contera genera unánime rechazo social. Sin embargo, ello no soluciona la problemática a la hora de calificar el injusto.

La praxis judicial enseña que en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad –todas válidas si se quiere–, una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla, pero en el fondo sólo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida las razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que determinado proceder debía ser objeto de represión por el Estado.

La previa valoración del injusto típico introduce a la discusión argumentos de índole subjetivo que en nada contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal. (…)

Importa acotar que la Sala, por obvias razones, no se refiere a aquellas conductas que el propio legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, excluyó del subrogado de la libertad condicional, asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional en sentencia CC C–073–2010, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, «[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones». (…)

Por ello, precisó que «[e]l legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional». (…)

Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible, solo es posible frente a casos en los cuales el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por dicho motivo, como sucede con los previstos en los artículos 26 de la Ley 1121 y 199 de la Ley 1098 de 2006, pues, como se dijo en la decisión CSJ STP15806–2019, 19 nov. 2019, rad. 107644, atrás citada, «no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos» (…)

La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias. (…)

<u>En suma, no es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado de la libertad condicional</u>. Ello sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla de un sentido de retaliación social que, en contravía del respeto por la dignidad humana, cosifica al

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales."[22]*.(subrayado nuestro)*

Vemos que no solo en sede de tutela se presenta un criterio unificado sobre el tema, por lo que este juzgado estimará para los futuros análisis sobre la valoración de la conducta y se tendrá en cuenta no solo el pronunciamiento por parte del juez de conocimiento cuando se refiera a los mecanismos sustitutivos de la misma, sino en el instante en que motiva la dosificación de la misma, o si existe preacuerdo en el análisis de los delitos, del mismo modo en el transcurrir del proceso su comportamiento en el Establecimiento Penitenciario y establecer la necesidad de si el condenado debe continuar con el tratamiento penitenciario ponderándolo con la valoración de la conducta.

Lo anterior, nos lleva a que el juez de ejecución de penas está en la obligación no solo de lo señalado en la parte motiva para la dosificación de la pena impuesta al condenado, sino dilucidar las circunstancias que encierra esa conducta punible junto con la personalidad del infractor- hasta ese momento como sociales, personales, laborales, familiares y su adecuado comportamiento en el Centro Carcelario, su conducta, cursos alcanzados, -puntos que nos lleva a concluir si existe la necesidad de otorgar o no el subrogado invocado o por el contrario requiere de mayor tratamiento penitenciario.

El presente Caso:

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Juzgado 7º Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 21 de noviembre de 2018, con relación a la gravedad de la conducta endilgada al condenado, indicó:

"(…) Al respecto resulta evidente la gravedad de las conductas atendiendo los bienes jurídicos protegidos, las que hoy por hoy azotan de manera fuerte a la sociedad y que no por su permanente ocurrencia pueden ser miradas con benignidad en desmedro de la justicia y su majestad, cuando se retuvo ilegalmente y privó a las víctimas de su derecho legal y constitucional de locomoción, donde atado al modus operandi en forma violenta, amenazante e intimidatoria utilizando armas contra sus congéneres, impidiéndoles el derecho legítimo a la libertad individual, se apoderaban de sus bienes, extendiendo en el tiempo esa afectación, pues sólo si podían liberarse de las atadura en sus pies y manos es que daban aviso a la autoridad, luego se evidenció una muestra de absoluta falta de escrúpulos cuando además la autoridad fue puesta a la orden de la delincuencia, enmascarando así la corrupción, buscando provecho económico a costa de lo que fuera y dejando en entredicho el buen nombre de instituciones como la Policía Nacional, ocasionando un daño real que impone la necesidad de la pena, a efectos de un avenimiento a comportamientos sociales adecuados y dentro de los marcos legales (…)".

Además, la autoridad falladora argumentó que el acusado **DIEGO CAMILO SOLTELO PEDRAZA**, obró contrario a derecho, encaminando su voluntad conscientemente en procura del resultado dañino, del que era conocedor, ya que, por su clara, cierta y efectiva incursión en los delitos cometidos merece juicio de reproche al comprometer el proceder ilícito.

En efecto, conforme a la jurisprudencia relacionada entrará este juzgado a analizar como primera medida el no poder tener como razón para la negatoria de la libertad condicional la sola insinuación de la conducta punible frente a los bienes señalados en el C.P., ya que esto es concurrente con prohibiciones señaladas por el legislador en ciertas leyes.

Del mismo modo dicha valoración no se puede hacer *con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan*

[22] CSJ RAD 61616 (27-07-22) M.P. Dr Fabio Ospitia Garzón

las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales.

El juez que vigila debe valorar de igual manera dentro de la punibilidad lo tenido en cuenta por el fallador, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes. En efecto se debe ajustar con el comportamiento del procesado en el Centro Carcelario con elementos útiles que permitan analizar si el condenado debe continuar cumpliendo la pena intramural o domiciliariamente y su participación en las diferentes actividades que tiene instituidas el INPEC como punto fundamental para su resocialización. Entonces no se debe tener en cuenta únicamente el bien jurídico afectado como única motivación para negar el subrogado invocado, se debe hacer un análisis completo, una carga motivacional que garantiza *la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.*

4.6. Sobre la Resocialización de los condenados

Se tiene bien conocido que el Estado tiene unos deberes constitucionales y que le corresponde a través de los distintos poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional) diseñar la Política Criminal, esto en especial al Legislativo (Congreso de la República) que según lo señala el artículo 150 de la Constitución Nacional *"le corresponde hacer las leyes".*

La Política Criminal, se entiende como ***"el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener el orden social y hacerles frente a las conductas que atenten de forma grave contra el mismo y, así, proteger los derechos de los residentes en el territorio nacional y, puntualmente, a las víctimas de los delitos"***. En efecto, esta Política Criminal está enfocada a satisfacer, entre otros asuntos, el restablecimiento de las víctimas logrando la resocialización del autor o partícipe de la conducta penal.

Lo anterior significa que la política criminal del Estado es el de proteger, blindar, asegurar, resguardar a la sociedad optando que las medidas, decisiones y disposiciones guarden armonía con los principios en que se funda, sobre todo en las garantías que reconoce para sus conciudadanos.

El artículo 4° de la Ley 599 de 2000 indica que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Del mismo modo resalta que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión, ello significa que éstos buscan la resocialización del condenado.

El artículo 1º de la misma obra y de la Constitución Nacional señala que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. En efecto, para un Estado Social y Democrático se da la necesidad de prevenir el delito con el fin de asegurar la protección de sus habitantes, defenderlos de aquellos que infrinjan las normas contenidas en las leyes; sin embargo ello no obsta que ese derecho penal se debe encausar en respetar la dignidad del infractor como el de no imponer penas – pena de muerte o cadena perpetua – dándole la oportunidad a cada individuo de tener la capacidad para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse y volver a contribuir a la sociedad.

Ahora aquellas personas que por el andar de la vida cometen un error que los lleve a pagar una pena principal de prisión, el Estado prevé un tratamiento penitenciario cuya finalidad es la reforma y la readaptación del penado a la sociedad, el de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante un examen de personalidad que se logra a través de

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario[23].

El principal objetivo es el preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad y debe realizarse conforme a la dignidad humana, anteriormente mencionada, y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto verificándola a través de los sistemas educativos y culturales de los Establecimientos Penitenciarios.

Se concluye que el tratamiento penitenciario es el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad[24].

Sobre la resocialización la H. Corte Constitucional, señaló:

> *"…(i) durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado…"*

Y en la Sentencia Sentencia C-294-21 conceptuó:

> *"La resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o técnicas de tratamiento social o clínico que pretenden «cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno».*

En sentencia C-718-15, sobre la finalidad de la pena, indicó:

> *"…Así, en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la pena, no solo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también en el momento de su ejecución.*
>
> *Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[25] que, ella tiene en nuestro sistema jurídico **un fin preventivo**, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; **un fin retributivo**, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, **y un fin resocializador** que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha*

[23] *Ley 65 de 1993, art 10*
[24] *INPEC art 4º Resolución 7302 (23-11-05)*
[25] *Sentencia C-430 de 1996*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *considerado también que "sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital".* [26]
>
> ***En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.***
>
> *El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén "orientados hacia* ***la efectiva resocialización*** *de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad".*[27]*(Se resalta)…"*

Se suma, lo indicado en los artículos 94, 96 y 97 (Ley 65 de 1993) que estipulan sobre la educación como la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa evaluación de los estudios realizados hay lugar a que sea certificada por la autoridad designada para el efecto, disponiendo que será concedida por el Juez Vigilante, abonando 1 día de reclusión por 2 días de estudio.

En igual sentido lo señalado en los artículos 79 y ss. de la misma obra que indica sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y que los establecimientos de reclusión son un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización.

Sobre la readaptación de los penados, la Sentencia T-061 de 2009, expresó que "*Las personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito, encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir la pena que les fue impuesta. Dentro de sus funciones, las cárceles se encargan de resocializar al individuo, con el fin de obtener la paz; es decir, permitiendo que el preso pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente productiva, impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles".*

Sobre ese tema esa Corte en Sentencia T-213 de 2011 reiteró lo afirmado en la providencia T-718 de 1999, según la cual: *"la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente".*

Y en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente:

> *"7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional peticionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta*

[26] *Sentencia C-144 de 1997*
[27] *Sentencia C-1404 de 2000*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

> *ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación…*[28]

Visto lo anterior, y en lo referente a lo decantando en la jurisprudencia mencionada[29] se tiene que a la fecha el infractor ha cumplido con una pena impuesta de (162 meses) **97 meses y 17.98 días** superiores al porcentaje exigido por la norma con un 60.2% que ha cumplido de la pena impuesta. Del mismo modo vemos en su cartilla biográfica que desde el momento de su aprehensión, su comportamiento intramuralmente y calificación ha sido buena desde 13-03-2018 hasta el 12-12-2018; ejemplar desde el 13/12/2018 hasta el 12-06-2021; buena desde el 20-08-2021 hasta el 19/05/2022; ejemplar desde el 20-05-2022 hasta el 19-11-2023 y en certificado de conducta manual se calificó la conducta ejemplar desde el 20-11-2023 hasta el 19-02-2024 y conducta EXCELENTE desde el 20-02-2024 hasta el 25-02-2024, de ahí en adelante su rol ha sido óptimo para el sentido de su resocialización.

Del mismo modo vemos que su actuar ha sido destacado en el transcurso de dicho proceso, entonces, al purgar un total de pena física de **74 meses y 13 días**, más las redenciones reconocidas de **23 meses y 4.98 días** nos arroja un total de **97 meses y 17.98 días** de la pena impuesta cumpliendo con ello elevar a más de un 60.2%, pues detallase que el condenado en el primer momento en que fue capturado, es decir, del **6 de febrero de 2018** ha estado privado de la libertad en centro penitenciario y carcelario y hasta la fecha, lo que indica que siempre ha cumplido su reclusión de manera intramural.

Aunado a ello el comportamiento del infractor ha sido buena, ejemplar y excelente, y sobre este aspecto a pesar de que nunca lo tacharon por su disciplina, se trae un pronunciamiento sobre este aspecto - CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA - de la Corte Suprema de Justicia:

"…Las anteriores reflexiones sirven para deducir que la valoración de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso, ni de una sola calificación, sino que debe realizarse, en cada caso concreto, de manera ponderada (principio rector, artículo 27, Ley 906 de 2004) y en forma integral, con análisis de la evolución del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusión, con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocialización y, por tanto, si merece ser motivado o incentivado el beneficio.

Al no existir norma específica que determine que una sola calificación de conducta inferior a buena, no conduce indefectiblemente a la negación de los beneficios, se debe aplicar por analogía el inciso final del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario, que establece la consecuencia para quien observare mala conducta durante uno de los permisos, esto es, la suspensión de los mismos, pero no su cancelación, ésta se hace efectiva únicamente en caso de reincidencia.

Lo anterior significa que el legislador otorga un margen razonable de tolerancia frente a posibles errores de comportamiento en que puedan incurrir las personas beneficiadas y no impone la extinción del derecho por una sola falla. Si ello se aplica a quienes ya disfrutan del permiso, con mayor razón debe tenerse en cuenta como criterio de ponderación…"[30], fíjese que así hayan tenido en alguna oportunidad alguna calificación regular, no es óbice para la negatoria de alguno de los beneficios, aunque para el presente caso vemos que el infractor ha tenido un comportamiento y conducta buena, ejemplar y excelente.

[28] C.S.J. Rad 1376 del 14-07-2020 M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
[29] RAD 107644
[30] C.S.J. T-Rad No. 89.755 del 24-01-2017, M.P. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Entonces vemos que **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** cumple, pues como lo decanta la jurisprudencia mencionada, no solamente es hacer alusión al bien jurídico afectado sino tener en cuenta ***"las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras,"*** el tener presente la armonía ***"con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.***

Sobre la resocialización, señalo en reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Bogotá lo siguiente:

"Así las cosas, se parte de la base de entender consolidada una enmienda o resocialización de la persona que ha cumplido parte de la pena dentro de un establecimiento carcelario y ha observado durante ese tiempo buena conducta, sin que pueda presumirse en su contra o concluirse que no ha sido posible su resocialización o readaptación, pues, contrariamente, según la filosofía que encarnan las medidas de privación de la libertad, se presume que el tiempo de reclusión ha contribuido a la reflexión sobre la conducta por la cual fue condenado y a permitir su readaptación y resocialización hacía el futuro.

En consecuencia, afirmar lo contrario conllevaría a evidenciar argumentativamente la necesidad del absoluto cumplimiento de la pena, bajo el régimen penitenciario, como única vía para satisfacer los fines propósitos de la punibilidad en la legislación colombiana"[31].

4.7. Sobre las Fases del Tratamiento Penitenciario:

Dentro de las fases para el tratamiento penitenciario (art 144 Ley 65 de 1993) que nos señala la norma se tiene que ha cumplido con la clasificación que se establece pasando como primera medida por la fase de alta seguridad (periodo cerrado) en la que el interno accede al sistema de oportunidades en programas educativos y laborales, en periodo cerrado, permitiendo el plan de tratamiento orientándose a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades.

La fase de mediana seguridad en la que se accede de parte del interno a los programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, con medidas de seguridad menos restrictivas. Además, los programas educativos y laborales ofrecidos en esta fase se basan en la intervención individual y grupal, permitiendo la competencia psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal, no formal e informal, vinculándolos en actividades industriales, artesanales, agrícolas etc. Luego sigue la fase mínima en la que el interno se le orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral. Y por último la fase de confianza en la que tiene el tiempo requerido para la libertad condicional.

según lo anotado por las directivas en la cartilla biográfica, no le figuran sanciones disciplinarias, ni intento de fuga en el tiempo en que lleva recluido en la Cárcel, tiene una calificación de conducta **BUENA, EJEMPLAR Y EXCELENTE**, tal y como se certifica en los documentos expedidos el 25 de febrero de 2024 y las directivas con base a ese estudio expidieron la resolución favorable para la libertad condicional[32].

Para este funcionario el tratamiento progresivo que ha recibido **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** durante la permanencia en el Centro Carcelario permite vislumbrar que su

[31] Tribunal Superior de Bogotá, T-RAD 11001220400020200121100 (21-05-20) M.P. Dr Luis Enrique Bustos Bustos
[32] Resolución No. 011 del 25 de febrero de 2024

readaptación ha tenido frutos demostrando que su buena conducta, así como en las redenciones reconocidas por estudio, trabajo y/o enseñanza, y, como se señaló el disfrute y su buen desempeño de su primer contacto con su grupo familiar por lo que se deduce que ha tenido un excelente desempeño permitiendo inferir en este funcionario que ha logrado su resocialización.

4.8. Sobre el escrito del Condenado

En su escrito de petición de libertad condicional el condenado **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** solicita que se reconozca el tiempo de redención por trabajo y/o estudio, indica que ha cumplido con las 3/5 partes de la pena impuesta, y su adecuado desempeño y comportamiento es certificado por la dirección del centro de reclusión para miembros de la Policía Nacional.

Ruega que se tenga en cuenta la declaración extrajuicio suscrita por su señora madre Vitalia Pedraza Gaona, quien manifiesta que vivirá bajo su mismo techo en la Carrera 68 C No. 22-10 sur, apartamento 102 bloque 22 de Bogotá, argumenta, que no fue condenado a reparar víctimas y no se encuentra requerido por otra autoridad judicial no registra fugas, ni tentativas de fugas durante el desarrollo del proceso, indica que, ha trabajado y estudiado durante el tiempo de reclusión observando buena conducta.

Anexa: cartilla biográfica, resolución favorable No. 011, certificado de no fugas, ni tentativas de fugas, certificado NO sanciones disciplinarias, certificado TEE, certificado calificación de conducta, orden de asignación en programas de TEE recuperador ambiental, acta declaración juramentada No. 1329 del 26 de febrero de 2023, rendida ante la Notaría 57 del Círculo de Bogotá por la señora Vitalia Pedraza Gaona (progenitora del infractor), recibos de servicios públicos, nota interna INPEC,

Por último, conforme a lo consignado por el infractor en su escrito, dicho comportamiento sería lo que el Estado, la sociedad y la familia espera y aplaudiría su futuro actuar porque vendría a conformar uno de los tantos ejemplos que se puede mostrar a la sociedad y manifestar que la resocialización si hace frutos dentro de los privados de la libertad.

4.9. Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

En lo atinente al cumplimiento del factor objetivo, determinado por la Ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **CIENTO SESENTA Y DOS (162) MESES DE PRISIÓN**, corresponde a **97 meses y 6 días de prisión.** Teniendo en cuenta que el solicitante ha estado privado de la libertad **desde el 6 de febrero de 2018**[33] hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **74 meses y 13 días** de la pena impuesta.

Adicional a la pena física cumplida, el condenado, cuenta un total de redenciones de pena de **23 meses 4.98 días** reconocidas por así:

- JEPMS 12 Bogotá D.C., auto del 2 de junio de 2020, reconoce 4 meses y 26.5 días
- JEPMS 12 Bogotá D.C., auto del 8 de febrero de 2021, reconoce 3 meses y 1.5 días
- JEPMS 12 Bogotá D.C., auto del 21 de julio de 2021, reconoce 2 meses y 1 día
- JEPMS Facatativá Cundinamarca, auto interlocutorio No. 0600 del 9 de noviembre de 2022, reconoce 4 meses y 24.93 días
- JEPMS Facatativá Cundinamarca, auto interlocutorio No. 0615 del 15 de diciembre de 2022, reconoce 12.75 días

[33] Folio 1 – archivo 07 – expediente digitalizado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVA – CUNDINAMARCA

- JEPMS Facatativá Cundinamarca, auto interlocutorio No. 0281 del 2 de junio de 2023, reconoce 1 mes
- JEPMS Facatativá Cundinamarca, auto interlocutorio No. 0349 del 19 de julio de 2023, reconoce 3 meses y 22.37
- JEPMS Facatativá Cundinamarca, auto interlocutorio No. 0058 del 23 de febrero de 2024, reconoce 2 meses y 14.43 días
- En el presente auto interlocutorio No. 0138 de la fecha, reconoce 21.5 días

Así las cosas, al sumar ambos guarismos, el tiempo cumplido efectivo de la pena y el tiempo redimido, tenemos que **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA**, ha cumplido de la pena impuesta un total de **97 meses y 17.98 días de prisión** purgados de la pena impuesta; tiempo superior a las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **162 meses de prisión** que como se dijo equivalen a **97 meses y 6 días**, razón por la cual el condenado solicitante **cumple** ampliamente con el requisito objetivo que demanda la normatividad.

Sobre el tiempo (días) en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

"… Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado (…)

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **por homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad)*[15]

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad."[34]

4.10. Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión y en la prisión domiciliaria.

[34] T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Sea este el momento para resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado beneficio de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de esta funcionario judicial, y que se encuentran dispuestos por el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, y por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que imponen la existencia de ciertos documentos emanados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde se certifica el cumplimiento de ciertos requisitos.

En el presente asunto, se anexa la calificación de la conducta del citado por parte la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, en Resolución No. 011 del 25 de febrero de 2024, en la cual emite **RESOLUCIÓN FAVORABLE** sobre las pretensiones del interno en lograr su libertad condicional, motivo por el cual el condenado **CUMPLE** con este requisito contemplado en el citado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal.

Analizada la cartilla biográfica vemos que efectivamente el infractor ha tenido un comportamiento “bueno, ejemplar y excelente” dando a entender que ha influido en su personalidad el sentido de la resocialización.

4.11. Del arraigo familiar

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

Para el caso concreto y verificando como corresponde el mencionado presupuesto –*arraigo familiar y social*- se observa en los documentos allegados el 27 de febrero de 2024 que **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** cuenta con un domicilio ubicado en la **CARRERA 68 # 22-10 SUR AP 102 BL 22, CONJUNTO RESIDENCIAL MILENTA II, BARRIO KENNEDY EN BOGOTA D.C.**, conforme el acta de declaración juramentada No. 1329 rendida ante la Notaría 57 del Círculo de Bogotá D.C., el día 26 de febrero de 2024, por la señora Vitalia Pedraza Gaona identificada con C.C. No. 51670265 (progenitora del condenado), quien declara su hijo es un hombre responsable, honesto, trabajador, cumplidor de sus deberes y que no representa ningún peligro para la sociedad, y manifiesta que en caso que se le reconozca el beneficio de la libertad condicional vivirá en la dirección referenciada.

Por lo anteriormente expuesto, **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** cumple con el citado requisito.

4.12. De la reparación a las víctimas o pago de perjuicios

En lo que a la reparación de las víctimas respecta, dentro de la actuación allegada no aparece que haya sido condenado en perjuicios o se iniciara el incidente de reparación integral.

5. CONCLUSION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Así las cosas, verificados y cumplidos como están los requisitos de carácter tanto objetivo como subjetivo que establece en su contenido original el artículo 64 del Estatuto Penal, se le reconocerá y otorgará el pluricitado subrogado penal de Libertad Condicional al sentenciado de marras. Previo al disfrute del beneficio, el condenado deberá suscribir la diligencia de compromiso con las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal, para la cual se le señalará el correspondiente periodo de prueba de acuerdo a lo ordenado en el artículo 64 del Código Penal que al respecto expresa:

"El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario."

De conformidad con lo anterior, como en el caso que nos ocupa el término faltante para cumplir la totalidad de la pena es de **64 meses y 12.02 días**, a fin de que el proceso de resocialización que le fue impuesto al solicitante cumpla los fines para los cuales se determinó, en aras de que el sentenciado enfoque positivamente su conducta absteniéndose de incurrir en cualquier tipo de delitos. Es de destacar que es un infractor primario, sin embargo, ésta será la oportunidad para que tome entera conciencia de que perciba que la pena responde a la finalidad de la resocialización como garantía de la dignidad humana. De este modo se tiene que los jueces de ejecución de penas velan por la reeducación y la reinserción social de los penados *"como una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, que permite humanizar la pena "*conforme está consignado en el artículo 1º de la Constitución Nacional y 5º de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ley dispone que para garantizar las obligaciones de que trata el artículo 65 del Código Penal (Ley 599 de 2000), debe constituirse la caución prendaria, cuyo monto debe ser fijado no solo a la capacidad económica del condenado sino se debe atender la gravedad de la conducta punible que para el presente caso *el impacto social que han generado, el estado de zozobra que han provocado en la sociedad a través de esta clase de conductas*, **CONCIERTO PARA DELINQUIR EN CONCURSO HETEROGENEO CON SECUESTRO SIMPLE, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y COHECHO PROPIO,** en atención a las condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal sobre **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA**, por lo tanto se fijara caución en el equivalente a **CUATRO (4) SMLMV**.

La libertad se hará efectiva, ante las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, una vez cancele la caución o constituya la póliza y suscriba la respectiva diligencia de compromiso, **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERÁ SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN**.

Finalmente, como el precitado se encuentra purgando pena en CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL se **COMISIONA** al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA**.

Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del condenado **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** identificado con C.C. No. 80.072.371, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (4 SMLMV), **SIEMPRE Y**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.

Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. -reparto -, para la vigilancia del periodo de prueba de **64 meses y 12.02 días** impuestos al infractor.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y la libertad condicional.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

> *"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[35], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por*

[35] Ibídem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[36]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[37]

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

[36] CSJ T **102248**
[37] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER a **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** identificado con C.C. No. 80.072.371, redención de pena por trabajo en equivalencia a **VEINTIUNO PUNTO CINCO (21.5) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de enero al 25 de febrero de 2024, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO. - RECONOCER que el interno **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** identificado con C.C. No. 80.072.371, acumula un total de **NOVENTA Y SIETE (97) MESES Y DIECISIETE PUNTO NOVENTA Y OCHO (17.98) DÍAS**, por concepto de tiempo físico más redenciones de la pena impuesta.

TERCERO. - CONCEDER al condenado **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** identificado con C.C. No. 80.072.371, el subrogado de la **LIBERTAD CONDICIONAL** por las razones expuestas en este proveído, bajo un periodo de prueba de **64 meses y 12.02 días**, por lo cual deberá cancelar la caución impuesta, equivalente a **CUATRO (4) SMLMV**, o constituir póliza judicial y suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones señaladas en el artículo 65 del C.P.

CUARTO. – Como el precitado se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, se COMISIONA al director de dicho establecimiento para que por su intermedio proceda a notificar personalmente de la presente decisión a **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA**

QUINTO - Una vez cumplido lo anterior por secretaria **LÍBRESE** la respectiva **BOLETA DE LIBERTAD** a favor del condenado **DIEGO CAMILO SOTELO PEDRAZA** identificado con C.C. No. 80.072.371, advirtiendo que se hará efectiva para ante las directivas CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, una vez sea suscrita la respectiva acta compromisoria y cancelado la caución (4 SMLMV), **SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, MOTIVO EN EL CUAL DEBERÁ SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

SEXTO - REMITIR copia de esta providencia a la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA FACATATIVA – POLICIA NACIONAL / CPMMSFFA PONAL, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

SEPTIMO. – Por último, en firme esta decisión y cumplido lo ordenado en ella, **PROCÉDASE** a **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. - reparto - para la vigilancia del periodo de prueba de **64 meses y 12.02 días** impuestos al infractor.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)

Marzo 20 de 2024: Al despacho el proceso en contra de **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, informando que conforme a lo requerido por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0101 del 12 de marzo de 2024 se emitió el Informe Valoración Asistencia Social de fecha 15 de marzo de 2024, para el estudio de la prisión domiciliaria art. 38G del C.P. Sírvase proveer.

DIEGO ANDRES TORRES BUSTOS
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Marzo veinte (20) de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0140

CUI:	**11001600002320210317**
Numero Interno	**2023-0052**
CONDENADO	**NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**
IDENTIFICACION	**C.C. No. 80.205.768**
DELITO	**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**
Reclusión:	**CPMS VILLETA CUNDINAMARCA**
Decisión:	**CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G DEL C.P. SE ABSTIENE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOLICITUD PERMISO PARA TRABAJAR**

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Ingresa al Despacho en la presente oportunidad el proceso de la referencia seguido en contra de **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, quien se encuentra purgando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA con la documentación para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P.

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 25 de julio de 2021, el Juzgado 27 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 19 de abril de 2022, **CONDENO a NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** como autor responsable del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, a la pena de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN** y a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal impuesta. NEGÓ el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que ordenó librar la orden de captura No. 2022-1495 del 12 de julio de 2022.

Mediante auto del 2 de mayo de 2022, el Juzgado 27 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá D.C., declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica Dr. Juan Carlos Quintero Franco, por haberse presentado de manera extemporánea.

A través de proveído del 9 de mayo de 2022, la autoridad falladora declaró que no es procedente el recurso de queja, en vista que el recurso de alzada fue declarado extemporáneo.

NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS fue capturado el 28 de julio de 2022[1]

El homólogo 18 de Bogotá D.C., mediante auto del 29 de julio de 2022 avocó conocimiento del proceso y legalizó la captura del condenado, por lo que expidió boleta de Encarcelación No. 068 y por auto del 24 de octubre de 2022 dispuso la remisión del expediente a estas dependencias.

Este Juzgado avocó conocimiento de las diligencias a través de auto de sustanciación No. 0126 del 30 de enero de 2022 y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria Ley 750 de 2002 y el artículo 314-5 del C.P.P., ordenó al Asistente Social de este Juzgado, se realice la visita socio-familiar en la **Carrera 3B Este No. 47-33 en Bogotá D.C.** (lugar donde reside su padre el señor Gerardo Guerrero Mendoza), número celular **3227439697** que corresponde a su progenitor y nos emita su concepto a la mayor brevedad posible pertinente a las condiciones familiares y habitacionales del condenado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** y especialmente de la veracidad de su condición de padre cabeza de familia.

A través de auto interlocutorio No. 0095 del 10 de febrero de 2023, este despacho negó al condenado la prisión domiciliaria prevista en el art. 314-5 del C.P.P., y el art. 1º de la Ley 750 de 2002.

Esta agencia judicial a través de auto interlocutorio No. 0250 del 23 de mayo de 2023 reconoció redención de pena de 2 meses y 2 días, por auto interlocutorio No. 0546 del 4 de diciembre de 2023, reconoció 1 mes y 29.5 días.

A través de auto interlocutorio No. 0101 del 12 de marzo de 2024, reconoció redención de pena al infractor de 1 mes y 3.75 días, y previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – art. 38G del C.P. -, invocada y como quiera que resulta necesario verificar que la dirección aportada - Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Camila Cárdenas Lozano (compañera permanente del condenado) identificada con C.C. No. 1010051788 Celular 3115305153 -, como arraigo familiar cuente con la seguridad del entorno social y familiar para el cumplimiento de la pena impuesta, se ordenó al Asistente Social del Juzgado que realice por el medio más expedito y DETERMINE entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el sentenciado y el informe de valoración de asistencia social del 15 de marzo de 2024.

[1] Acta de derechos de capturado – folio 2 – archivo 06 – CARPETA C02 – CARPETA 02- expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

3.1. Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020[2] del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras

[2] *ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020*

enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*[3].

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el **25 de julio de 2021**, el sentenciado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2. DE LA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA – ART. 38G DEL C.P.

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., en la cual se relacionan los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Camila Cárdenas Lozano (compañera permanente del condenado) identificada con C.C. No. 1010051788 Celular 3115305153, quien mediante declaración extrajuicio No. 97 de fecha 9 de febrero de 2024 rendida ante la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá D.C., manifiesta que ha sostenido una relación sentimental con el condenado desde hace 4 años compartiendo techo, lecho y mesa, y dice que es una persona responsable, trabajadora, cumplidora con su deberes y obligaciones, es quien le colabora en el hogar y no representa un peligro para la sociedad, indica que se hará responsable y está en disposición de apoyarlo en el goce y beneficio en caso de que se le conceda detención domiciliaria mientras cumple su condena.

Aunado a lo anterior, el condenado en el escrito de solicitud pide que a la hora de dar respuesta a la solicitud de prisión domiciliaria, se autorice el permiso para trabajar por lo

[3] CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

que adjunta: constancia a contrato de trabajo suscrita por la señora María Gisell Sánchez Medina, recibo de servicio público, licencia de conducción, licencia de tránsito, fotocopia cédula de ciudadanía de la señora María Gisell Sánchez, declaración extrajuicio No. 97, contrato individual de trabajo a término indefinido, cartilla biográfica.

4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.3.1. Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, competiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer [4].

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del procedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

> *"Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción."*

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

> ***"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES****. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios*

[4] Curso de Criminología, 7° edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.

***PARÁGRAFO**. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (…)

"…Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos…"

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

*"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. **No se concederán**; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; **ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo**, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*

*<INCISO 2> Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; **violencia intrafamiliar**; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal. …"

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** como **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.,** motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

"…No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código." Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma…"[5]

4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *"Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones"*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

***"**(…) **Articulo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad**: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*

Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría

[5] CSJ RAD **Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

> *General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respetivos requisitos. (…) "* (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

> *"(…)* ***Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor****:* ***Artículo 38G.*** *La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(…)"*

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

> ***Artículo 38G****, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.*

> ***Parágrafo****. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno,*

soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

> ***"(…) Artículo 23.*** *Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:* ***Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.*** *Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*
>
> *1. (…)*
> *3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*
> *4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*
>
> *A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*
> *B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*
> *C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*
> *D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (…)****" (Resalta fuera de texto)***

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7° del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

> ***"(…) Parágrafo 1°.*** *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)"* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena impuesta al condenado, esto es, **48 meses de prisión,** según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **24 meses.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto **desde el 28 de julio de 2022**[6] hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva físicos **20 meses y 1 día.**

El condenado cuenta con redenciones de pena de **5 meses y 5.25 días** reconocidas por este Juzgado así:

- auto interlocutorio No. 0250 del 23 de mayo de 2023, reconoce 2 meses y 2 días
- auto interlocutorio No. 0546 del 4 de diciembre de 2023, reconoce 1 mes y 29.5 días
- auto interlocutorio No. 0101 del 12 de marzo de 2024, reconoce 1 mes y 3.75 días.

En efecto, el interno **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** acumula un total de **VEINTICINCO (25) MESES Y SEIS PUNTO VEINTICINCO (6.25) DÍAS** de la pena principal impuesta, por lo tanto, **cumple con el factor objetivo.**

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que el infractor en el escrito de solicitud manifiesta que el inmueble para continuar con el cumplimiento de la pena se localiza en la **Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., en donde reside la señora María Camila Cárdenas Lozano (compañera permanente del condenado) identificada con C.C. No. 1010051788 Celular 3115305153**

Para certificar el arraigo familiar y social, adjunta declaración extrajuicio No. 97 rendida ante la Notaría 2ª de Bogotá D.C., por la señora **María Camila Cárdenas Lozano** (compañera permanente del condenado), quien manifestó que ha sostenido una relación sentimental con el condenado desde hace 4 años compartiendo techo, lecho y mesa, y dice que es una persona responsable, trabajadora, cumplidora con su deberes y obligaciones, es quien le colabora en el hogar y no representa un peligro para la sociedad, indica que se

[6] Acta de derechos de capturado – folio 2 – archivo 06 – CARPETA C02 – CARPETA 02- expediente digitalizado.

hará responsable y está en disposición de apoyarlo en el goce y beneficio en caso de que se le conceda detención domiciliaria mientras cumple su condena.

Ahora bien, al tenerse en cuenta el estudio del arraigo realizado por el Asistente Social de este Juzgado, mediante el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 15 de marzo de 2024, se observa lo siguiente:

"(…) ***RESULTADOS***

SITUACIÓN ENCONTRADA

El día 14 de marzo de 2024, fue realizada entrevista telefónica de sesenta minutos de duración al abonado celular, número 3115305153. Se trata del número celular de la compañera permanente del señor condenado.

Atendió la entrevista telefónica MARÍA CAMILA CARDENAS LOZANO, compañera permanente de NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.051.788 de Bogotá.

Dicha señora tiene 23 años, es oriunda y residente en la ciudad de Bogotá, localidad de Usaquén, durante toda su vida.

MARÍA CAMILA CARDENAS LOZANO labora como manicurista a través de la APP EFY Belleza a domicilio hace alrededor de tres años.

Dicha señora se encuentra en sexto mes de embarazo y hacia finales de mayo nacerá LUCIANA GUERRERO CARDENAS, hija en común con el señor condenado.

La señora entrevistada reportó buen estado de salud, acude a controles regulares a través de la EPS CAPITAL SALUD (Régimen subsidiado) y su embarazo transcurre con normalidad.

Se conoció que la señora MARÍA CAMILA CARDENAS LOZANO realiza visita en medio carcelario cada quince días. De igual manera, fue reportada que el padre y hermanas de NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS, también lo visitan mensualmente, llevando en ocasiones a los menores hijos del señor condenado.

La señora entrevistada manifestó que ha sostenido relación de pareja con el señor condenado por +- 3 años. Explicó que estableció convivencia por un año con NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS, antes de ser privado de la libertad, pero que al momento de ser aprehendido retornó a la casa de sus padres.

Se realizó encuadre sobre los fines de la entrevista, la importancia de la información relativa al grupo familiar y sobre los roles y funciones familiares del señor NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS, privado de la libertad desde hace aproximadamente cinco meses.

El señor condenado y su grupo familiar residen en la ***Carrera 3B Este No. 47-33 Barrio Pardo Rubio, Bogotá*** *hace más de 15 años, pero se trata de una casa de habitación anexa a la propiedad de habitación de propiedad de la señora MARÍA ESPONSORIA MENDOZA DE GUERRERO, madre de GERARDO GUERRERO y abuela paterna del señor condenado.*

Se conoció que la señora MARÍA ESPONSORIA MENDOZA DE GUERRERO falleció hace aproximadamente dos meses, debido a su avanzada edad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

La casa de habitación familiar propiedad de la señora MARIA ESPONSORIA y sus hijos, está conformada por dos viviendas separada dentro de la misma casa-lote, contando con doble nomenclatura, pero con única propietaria.

En la casa principal residía la señora MARÍA ESPONSORIA MENDOZA DE CASALLAS, falleciendo hace dos meses; en ese mismo lugar de habitación continúan residiendo dos de sus hijos: MABEL GUERRERO MENDOZA (59) y JUAN DAVID GUERRERO MENDOZA (60), quienes perviven de a través de una tienda barrial que funciona en esa propiedad.

En la casa anexa, que es de cuatro pisos, viven en el primer piso el señor HUGO ANDRÉS GUERRERO (31), INGRID JIMÉNEZ DE 29 años (su compañera permanente y VALERY Y SOFIA GUERRERO JIMÉNEZ, menores de 11 y 8 años.

El segundo piso es donde residiría el señor condenado NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS, en caso le sea concedida la prisión domiciliaria. En este momento, vive allí la señora MARÍA CAMILA CARDENAS LOZANO.

En el tercer piso de esa misma parte de la casa reside YEIMI ASTRID GUERRERO (33) y su hija SHARON XIOMARA GUERRERO CASALLAS (14).

En el cuarto piso, durante el año anterior, fue construido un apartaestudio, donde reside GERARDO GUERRERO MENDOZA el padre del señor condenado.

Por su parte los hijos del señor condenado DAMIAN FELIPE (13) y JUAN ÁNGEL (6), residen en la misma localidad Usaquén, Barrio San Martín, con su progenitora, señora ALEXANDRA RODRÍGUEZ, quien labora en oficios domésticos por días. Dichos menores se encuentran vinculados al sistema escolar, matriculados en la Institución Educativa Manuela Beltrán en el grado quinto DAMIAN FELIPE y ÁNGEL en primer grado en el Colegio Mercedario Juan Pablo Nolasco.

El señor condenado viene remitiendo valores por 220 mil pesos mensuales a sus hijos, dinero que recibe a través del subsidio renta ciudadana, manifestando que por ahora es lo único con lo que puede contribuir, dado que no cuenta con otros ingresos y se encuentra privado de la libertad.

Por lo tanto, el grupo familiar del señor condenado es extensivo y está conformado, por sus dos hijos, su padre, tres hermanos y cuatro tíos, todos residiendo en el entorno cercano y funcionando como red de apoyo socio-familiar.

El grupo familiar apoya al señor condenado y se han solidarizado con él en todo lo que ha estado a su alcance.

Las condiciones sociales encontradas en el grupo familiar de acogida son de clase media.

Se trata de una familia de que solventa las necesidades económicas a través de aportes mancomunados de los miembros del grupo, contando con los medios apenas necesarios para sufragar la economía familiar.

CONDICIONES HABITACIONALES

La vivienda familiar de está ubicada en la ***Carrera 3B Este No. 47-33 Barrio Pardo Rubio, Bogotá (Cundinamarca).***

Se trata de una vivienda amplia donde encontramos dos casas, la principal que es donde moran dos tíos del señor condenado y una casa anexa que es habitada por el padre del señor condenado y los hermanos de NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Dicha casa familiar ha sido la residencia de este grupo durante casi toda su vida, perteneciente al estrato 3, ubicada en el barrio Pardo Rubio, localidad de Chapinero, zona residencia.

La residencia cuenta con servicios públicos domiciliarios: energía-codensa, gas natural, acueducto y alcantarillado. Todos los servicios son compartidos.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron descritas como buenas, contando el lugar con buenas condiciones externas e internas.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los gastos son cubiertos mediante aportes familiares.

Sobre los gastos se encontró que mensualmente la familia del señor condenado paga 350 mil pesos servicios públicos compartidos y gasta alrededor de quinientos mil pesos en todo lo relativo a la economía familiar, principalmente alimentación y gastos médicos.

La situación económica mostró que la familia cuenta con recursos económicos apenas suficientes para el cubrimiento de necesidades básicas del grupo, el señor Gerardo aseguró no recibir pensión ni tener otros ingresos adicionales.

El señor condenado laboraba como taxista, perteneciendo a una asociación de conductores que en ocasiones también se solidarizan con él y con su padre, apoyándolo para que viaje a Villeta a visitar al privado de la libertad.

CONCEPTO

El señor condenado NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS cuenta con un grupo familiar conformado por compañera permanente, quien se encuentra en sexto mes de embarazo, su padre, tíos y hermanos.

NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS es padre de dos hijos menores de edad quienes se encuentran bajo el cuidado de la progenitora en el entorno barrial cercano de la familia del señor condenado.

Se trata de un grupo familiar extensivo oriundo y residente en la residencia de su propiedad durante toda la vida.

Se observaron fuertes dinámicas de apoyo familiar que permiten asegurar el cuidado y protección de todos sus miembros.

Respecto al lugar donde el señor condenado eventualmente estaría en prisión domiciliaria, se trata de una casa de propiedad familiar, contando con condiciones adecuadas y un espacio de vivienda y seguridad.

Por parte de la familia de NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS, se expresa solidaridad económica y existencial hacia aquel, situación que implica contar con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y posterior culminación del proceso de resocialización al que fuera sometida (…)".

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercen un control material del cumplimiento de la condena,

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

> ***ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA.*** *<Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:*
>
> *1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.*
> *2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.*
> *3. Testimonio de vecinos y allegados.*
> *4. Labores de inteligencia.*
>
> *Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.*
>
> *En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.*

4.5.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

> *"**Artículo 38G**, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito;*

prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

***Parágrafo**. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

4.5.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada no aparece que se hubiese emitido condena en perjuicios o se iniciara incidente de reparación de parte de la víctima, motivo por el cual cumple con este requisito.

4.6. <u>De la solicitud de Permiso para Trabajar</u>.

Manifiesta el condenado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** en el escrito de solicitud que se autorice el permiso para trabajar por lo que adjunta: constancia a contrato de trabajo suscrita por la señora María Gisell Sánchez Medina, recibo de servicio público, licencia de conducción, licencia de tránsito, fotocopia cédula de ciudadanía de la señora María Gisell Sánchez, declaración extrajuicio No. 97, contrato individual de trabajo a término indefinido, cartilla biográfica.

Debido a que en el presente auto se concede al sentenciado el sustituto penal de la prisión domiciliaria - art. 38G del C.P.-, <u>en la Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C.,</u> este Juzgado **SE ABSTIENE** de emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de permiso para trabajar invocada, como quiera que el expediente se remitirá por competencia al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C., y serán a esas dependencias a quienes les corresponderá resolver al respecto.

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C. Celular 3115305153**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio

periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conlleva. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluido proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** a expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C. Celular 3115305153, a favor de NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**

5.1. Sobre la Competencia

Debido a que el condenado va a seguir purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en la ciudad de Bogotá D.C., por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el auto **PROCEDA** a remitir las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. – reparto -, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

> ***"ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.*** *Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social..."*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.700 procesos que tenemos en

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejercito EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la redención y el tiempo que lleva cumpliendo pena.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

"… los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»[7], a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

… las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley… (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

"…6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad,…"[8]

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *"desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional".*[9]

---

[7] Ibídem.
[8] CSJ T **102248**
[9] C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FACATATIVÁ

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 y se autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso la suspensión de términos debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año del 2021 nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

7.- DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **25 MESES y 6.25 DÍAS.**

SEGUNDO. - CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** identificado con C.C. No. 80.205.768, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

TERCERO. – Este despacho **SE ABSTIENE** de emitir pronunciamiento acerca de la solicitud de permiso para trabajar invocada por el condenado, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO. - COMISIONAR al Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS** quien se encuentra recluido en dicho penal.

QUINTO - Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C. Celular 3115305153, a favor de NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

SEXTO. - DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **Carrera 3 B Este No. 47-33, barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero en Bogotá D.C. Celular 3115305153, a favor de NILSON ARMANDO GUERRERO CASALLAS**, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEPTIMO. – Se ordena por la secretaría del Juzgado **NOTIFICAR** el contenido del presente auto a la apoderada judicial del condenado **Dra. LEONOR LUCIA MATTOS RODRIGUEZ** a través del correo electrónico maluderechoshumanos@gmail.com

OCTAVO. - Una vez ejecutoriado el presente auto, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. – reparto -, para continuar con la vigilancia de lo que resta del cumplimiento de la pena impuesta al infractor, **advirtiéndose que se encuentra pendiente por resolver solicitud de permiso para trabajar invocada por el condenado**.

NOVENO. - Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA, para que obre en la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ